

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO, SOCIAL Y ECONÓMICO

**RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS FUNCIONARIOS EN DERECHO ROMANO**

ELENA QUINTANA ORIVE

DIRECTORES:

PROF. DR. D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN

PROF. DR. D. JUAN MIGUEL ALBURQUERQUE

MADRID 2012

ÍNDICE DE MATERIAS

INTRODUCCIÓN.....	p. 11
-------------------	-------

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO I: Terminología y fuentes referidas a la responsabilidad de los funcionarios en Derecho Romano.....	p. 21
--	-------

A) Precedentes romanos del término <<funcionario>>.....	p. 23
1. Introducción.....	p. 23
2. Los términos <<officium>>, <<ministerium>>, <<dignitas>>, <<honor>>, <<munus>>, <<militia>>, <<gubernare>> y <<administrare>> en las fuentes romanas.....	p. 30
B) Etimología y evolución del término <<responsabilidad>>.....	p. 48
1. <<Respondere>> en el lenguaje jurídico romano.....	p. 48
2. La utilización del sustantivo-categoría <<responsabilidad>> relativo a los funcionarios en época moderna.....	p. 53
3. Los términos <<obnoxius>> y <<periculum>> referidos a la responsabilidad de magistrados y funcionarios en Derecho Romano.....	p. 56
a) Obnoxius.....	p. 57
b) Periculum.....	p. 59

C) Fuentes jurídicas y literarias utilizadas en materia de responsabilidad de funcionarios.....	p. 64
1. Fuentes jurídicas.....	p. 64
2. Fuentes literarias.....	p. 68
D) Conclusiones.....	p. 74

CAPÍTULO II: Organización administrativa y responsabilidad de los funcionarios en Derecho Romano postclásico y justiniano.....

p. 79

A) Una visión de conjunto sobre los caracteres de la burocracia en época imperial.....	p. 81
B) Diferentes ámbitos de la organización administrativa imperial	p. 98
1. Introducción.....	p. 98
2. Esquema de los principales órganos que integran la Administración central en época postclásica y justiniana. Especial referencia a cuestiones de responsabilidad de los funcionarios.....	p. 100
3. Administración provincial y municipal. Especial referencia a cuestiones de responsabilidad	p. 128
a) Introducción.....	p. 128
b) Los gobernadores provinciales. Particular alusión a su responsabilidad en materia de recaudación de impuestos y administración de justicia.....	p. 130

c) Los decuriones y su responsabilidad en la gestión pública de los municipios.....	p. 146
4. La Administración de las ciudades de Roma y Constantinopla.....	p. 163
a) El <i>praefectus urbi</i> de Roma y su <i>officium</i> : algunos supuestos de responsabilidad en materia de obras públicas y de financiación de la annona.....	p. 163
b) El <i>praefectus urbi</i> de Constantinopla.....	p. 171
C) Conclusiones.....	p. 173

PARTE SEGUNDA

CAPÍTULO III: La responsabilidad de los funcionarios en relación con el acceso a la función pública en la Antigüedad Tardía.....

p. 183

A) Introducción.....	p. 185
B) Requisitos físicos:.....	p. 187
1. Edad.....	p. 187
2. Sexo.....	p. 195
3. Salud física y mental.....	p. 199
C) Requisitos morales. La infamia como causa de exclusión de la función pública.....	p. 204
D) Requisitos económicos y sociales.....	p. 211

1. El requisito de suficiencia económica del candidato como garantía de su responsabilidad patrimonial por su gestión.....	p. 211
2. El origen social de los candidatos como condición para el ingreso en la Administración imperial.....	p. 214
a) CTh. 7.2: << <i>Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes</i> >>.....	p. 214
b) Situaciones personales que impiden o condicionan el acceso a la función pública y las sanciones aplicables a los infractores de la normativa referida a esta materia.....	p. 218
E) Requisitos técnicos: la cualificación profesional del candidato como garantía de su actuación.....	p. 262
F) Religión: limitaciones al ejercicio de un cargo público por motivos religiosos. Cuestiones de responsabilidad.....	p. 271
G) Conclusiones.....	p. 289

CAPÍTULO IV: Tráfico de influencias, venalidad y sucesión hereditaria en el acceso a la función pública en la Administración romana: límites y reglamentación legalp. 295

A) Introducción.....	p. 297
B) El <i>suffragium</i> . Limitaciones legales al tráfico de influencias.....	p. 299

C) Reglamentación de la adquisición de la <i>militia</i> por venta o disposición a título gratuito.....	p. 313
D) Sucesión hereditaria en la titularidad de la milicia por disposición de la legislación imperial.....	p. 323
E) Conclusiones.....	p. 326

CAPÍTULO V: Cuestiones de responsabilidad relativas al nombramiento de los funcionarios.....p. 331

A) <i>Codicilli y probatoriae</i> : requisitos y responsabilidad de los funcionarios encargados de la expedición de los documentos de nombramiento.....	p. 333
B) El juramento de entrada en el cargo como garantía moral de ``buen gobierno``.....	p. 343
C) La exigencia de fianza como garantía económica de la responsabilidad patrimonial del funcionario.....	p. 351
D) La ceremonia de investidura y la inscripción en la <i>matricula</i> del funcionario. Cuestiones de responsabilidad.....	p. 359
E) Los derechos de la Cancillería imperial en la expedición de los títulos de nombramiento de los funcionarios (<i>sportulae</i>): Reglamentación y sanciones legales.....	p. 372
F) Aspectos de responsabilidad relativos al nombramiento de los magistrados municipales. La <i>querimonia</i> o impugnación del nombramiento.....	p. 376

G) La <i>utilitas publica</i> como fundamento de la validez de la actuación administrativa del funcionario de hecho.....	p. 387
H) Conclusiones.....	p. 395

CAPÍTULO VI: Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios en el curso de su carrera administrativa.....p. 403

A) La organización jerárquica de la Administración imperial: el deber de obediencia y respeto de los funcionarios hacia sus superiores jerárquicos.....	p. 405
B) Promoción y ascenso de los funcionarios según criterios de antigüedad y méritos: reglamentación y sanciones.....	p. 413
C) Limitación del número de funcionarios adscritos a los <i>officia</i> : relación de fuentes.....	p. 421
D) Normativa sobre permanencia y repetición en el cargo: especial referencia a la responsabilidad de los funcionarios en caso de su incumplimiento.....	p. 427
E) Conclusiones.....	p. 436

CAPÍTULO VII: Cuestiones de responsabilidad de los funcionarios en relación con el cobro de sus retribuciones.....p. 439

A) El problema de la <i>adaeratio</i> y el control de las <i>sportulae</i>	p. 441
B) La obligación del <i>filiusfamilias</i> funcionario de colacionar el <i>peculium quasi castrense</i>	p. 461
C) Conclusiones.....	p. 471

CAPÍTULO VIII: Privilegios de los funcionarios en la Administración imperial romana: reglamentación y régimen disciplinario.....p. 475

A) Introducción.....	p. 477
B) La jurisdicción competente en materia de responsabilidad de los funcionarios. La << <i>praescriptio fori</i> >>.....	p. 482
C) Limitaciones y responsabilidad de los funcionarios en materia de Derecho procesal penal.....	p. 495
D) Abusos y responsabilidad de los funcionarios en materia de << <i>munus hospitalitatis</i> >>.....	p. 505
E) Responsabilidad de los funcionarios respecto de las insignias: una especial referencia a la <i>lex vestiaria</i>	p. 510
F) Conclusiones.....	p. 515

CAPÍTULO IX: Incompatibilidades y prohibiciones que afectan a los funcionarios durante el ejercicio de su función.....p. 521

A) Prohibición de acumular dos o más cargos incompatibles entre sí.....	p. 523
B) Aspectos de responsabilidad relacionados con el matrimonio de los funcionarios:.....	p. 529
1. Prohibición de contraer matrimonio entre un funcionario y mujer de la provincia en la que desempeña su cargo o domiciliada en ella.....	p. 529
2. Prohibición de contraer matrimonio con mujeres de “baja condición”	p. 546
C) Prohibición de desempeñar el cargo de funcionario en su provincia de origen y en aquella donde tenga su domicilio.....	p. 550
D) Prohibición de comprar bienes muebles e inmuebles o de recibir donaciones en el lugar en el que el funcionario desempeña su cargo. Especial referencia al <i>crimen repetundarum</i>	p. 554
E) Responsabilidad de los funcionarios en materia de préstamos de dinero.....	p. 574
F) Conclusiones.....	p. 578

CAPÍTULO X: Extinción de la relación funcional en época imperial	p. 585
---	--------

A) Causas de extinción de la relación funcional no imputables al funcionario	p. 587
B) Causas de extinción de la relación funcional imputables a la responsabilidad del funcionario: incompetencia, absentismo y falta de rendimiento	p. 603
C) Conclusiones.....	p. 610

CAPÍTULO XI: Responsabilidad de los funcionarios por la función desempeñada a la salida del cargo

p. 613

A) Obligación de rendición de cuentas. Especial referencia al <i>crimen peculatus</i> (malversación de fondos públicos) en esta materia.....	p. 615
B) Obligación de permanecer cincuenta días en la ciudad en la que el funcionario desempeñó su cargo con la finalidad de responder a las acusaciones que le fuesen formuladas por su gestión.....	p. 625
1. Normativa contenida en las fuentes romanas.....	p. 625
2. Recepción de los principios y reglas de Derecho Romano en esta materia en el Derecho histórico	

español: el <<juicio de residencia>> en las Partidas de Alfonso X El Sabio	p. 643
3. Cuestiones de responsabilidad relativas al traspaso de poderes a los sucesores en el cargo.....	p. 650
C) Referencia a la protección de los privilegios de los funcionarios a la salida del cargo: aspectos de responsabilidad.....	p. 653
D) Conclusiones.....	p. 657
APÉNDICE.....	p. 663
A) La recepción del Derecho Romano en la legislación de las Partidas sobre la responsabilidad de los oficios públicos medievales.....	p. 665
B) Conclusiones.....	p. 676
CONCLUSIONES FINALES.....	p. 679
ÍNDICE DE FUENTES.....	p. 699
BIBLIOGRAFÍA.....	p. 783

INTRODUCCIÓN

Los juristas romanos no elaboraron una ciencia del Derecho Administrativo que teorizase acerca de conceptos y categorías modernas, las cuales eran inexistentes en aquella época, ni expusieron de modo sistemático las leyes relativas a esta materia, lo cual estaba también en consonancia con el espíritu casuístico de la jurisprudencia romana poco dado a teorías y abstracciones¹. Sólo en época moderna, a partir del siglo XVIII, podemos constatar, en el plano doctrinal, la formación de tales conceptos y categorías abstractas, y en el plano legislativo, la articulación de sistemas jurídicos relativos a esta materia.

A tenor de ello, la doctrina moderna ha visto la necesidad de acometer la tarea de reconstruir el Derecho Administrativo romano la cual fue iniciada por Denis SERRIGNY (1800-1876), profesor de

¹FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Perspectivas de estudio en temática de Derecho Administrativo Romano, surgidas a tenor del pensamiento y la obra de Giambattista Impallomeni*, en INDEX, 26, Napoli, 1998, pp. 465 ss. (pp. 469-470); ID., *Instituciones, hechos y actividad de orden administrativo en la experiencia jurídica romana*, en AA. VV., *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján (Actas de las Jornadas sobre Derecho Administrativo Histórico), Santiago de Compostela, 2005, pp. 119 ss.; ID., *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, en AA.VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano* (coords. A. Fernández de Buján; G. Gerez Kraemer; B. Malavé Osuna), Madrid, 2011, p. 13.

Derecho Administrativo en la Universidad de Dijon durante cuarenta años y uno de los primeros especialistas en esta rama del Derecho en Francia, quien publicó en 1862, en dos volúmenes, su obra <<*Droit Public et administratif romain ou institutions politiques, administratives, économiques et sociales de l'empire romain du IVe au Ve siècle (de Constantin a Justinien)*>> en la que llevó a cabo una reconstrucción del Derecho Administrativo romano a partir de las fuentes jurídicas y literarias pero poniendo al mismo tiempo en contacto dogmáticamente sus investigaciones con la realidad política y administrativa de la Francia del siglo XIX².

Si bien es cierto que, con posterioridad a SERRIGNY, la doctrina romanística de los siglos XIX y XX ha venido aportando numerosas e importantes contribuciones relativas a diversos aspectos del Derecho Administrativo romano, entre las cuales podemos citar las valiosas aportaciones de autores como MOMMSEN, MARQUARDT, DE MARTINO o CHASTAGNOL, ha faltado la elaboración de una obra de conjunto que abarque los diferentes campos de la experiencia administrativa romana permitiendo, a la luz de las nuevas investigaciones, una verdadera reconstrucción y exposición de la realidad administrativa de aquella época³. En los últimos años, y bajo el

²NICOLET C., *Histoire, Nation, République*, Paris, 2000, pp. 285 ss. El índice de materias de la obra de Serrigny describe en su conjunto la vida política, administrativa y fiscal del Imperio Romano: la Administración central y local, el ejército, el Fisco, la policía, los trabajos públicos, las aduanas, las corporaciones profesionales, el régimen de la tierra (colonato).

³Carencia sobre la que han llamado la atención, entre otros, Schulz, Koschaker, Impallomeni, Riccobono Jr., Giannini o Lucrezi. Como ha destacado el profesor A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Derecho*

magisterio y dirección del Profesor Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN, se han publicado tanto en España como en otros países numerosas monografías y artículos, siguiendo una misma línea de investigación encaminada a la elaboración de un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano⁴, dentro de la cual se enmarca también la presente Tesis

público romano, Cizur Menor (Navarra), 14ª ed., 2011, p. 242, “cabría remontarnos a Ihering quien, en 1854, en su *Espíritu del Derecho Romano* señala ya la oportunidad de la reconstrucción del Derecho público romano y administrativo romano. Casi cien años después, en 1939, Schulz en sus *Principios de Derecho Romano* escribe que la inexistencia de un Tratado de Derecho administrativo romano constituye una laguna de nuestra ciencia. Dicha idea es reiterada por Riccobono en 1964, por Impallomeni, en 1983, al afirmar que el sistema de administración ciudadana y el sistema municipal del Imperio esperan todavía por ser estudiados, y más que por un mero interés histórico, para entender mejor los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y últimamente por Nocera en 1987. No se trata, a mi juicio, – continúa A. Fernández De Buján- de pretender reconstruir el Derecho administrativo romano como un apriorismo científico por su interés histórico, es que la conexión entre el Derecho Administrativo romano y el vigente existe, aunque no haya sido estudiada debidamente y así en los temas señalados por Impallomeni, y en otros conexos con los mismos, como responsabilidad administrativa, saneamiento financiero, organización de la burocracia estatal, privilegios de la Administración o garantías de los ciudadanos, se produce una continuidad histórica en el planteamiento de las cuestiones, cuya resolución se aborda en Derecho Romano mediante soluciones de sorprendente modernidad”. El Autor cita también a Koschaker que en su *Europa y el Derecho Romano*, escrita en 1947, advierte que <<falta por construir una historia de los conceptos y de los dogmas de Derecho público romano, realizada dogmáticamente y con un método histórico, es decir, con las modernas técnicas del Derecho>>. Esta percepción no es exclusiva de la doctrina romanística europea sino que -refiere el Autor (*op. cit.*, p. 243)- “cabe señalar que destacados administrativistas actuales, entre los que cabe citar en la doctrina española a García de Enterría, Villar Palasí, Gallego Anabitarte, Parada Vázquez, Parejo Alfonso, etc..., han destacado y valorado en instituciones concretas la influencia del Derecho Romano en el desarrollo y en la evolución del Derecho administrativo moderno, y en el Derecho público en general”.

⁴FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, *op. cit.*, pp. 13 ss.

Podemos citar a este respecto las contribuciones de J. M. Alburquerque Sacristán (interdictos destinados a la tutela del uso colectivo de los diferentes bienes o lugares de dominio público;

Doctoral que lleva por título: <<Régimen jurídico de la responsabilidad de los funcionarios en Derecho Romano>>.

La investigación que presento tiene por objeto el estudio de la responsabilidad de los funcionarios romanos, centrado básicamente en la época postclásica y justiniana, ya que es en aquel tiempo cuando la Administración pública romana alcanzó su grado más alto de complejidad y perfección.

En la primera parte de la Tesis, después de realizar un análisis de las raíces latinas de los términos <<funcionario>> y <<responsabilidad>>, se expone de modo sintético la estructura y funcionamiento de la organización administrativa romana de los siglos IV al VI d.C., en sus niveles central y provincial, así como en el ámbito municipal, como medio para presentar, al hilo de la exposición, numerosos supuestos de responsabilidad de los funcionarios en ámbitos tales como la Hacienda Pública, la administración de justicia, la

organización administrativa de la Bética romana); A. Agudo Ruiz (enseñanza pública; *advocatus fisci*; derecho fiscal romano); Juan M. Blanch Nogués (derecho fiscal romano); J. M^a. Blanch Nogués (beneficencia pública; derecho fiscal romano); M^a. C. Jiménez Salcedo (abuso del derecho; urbanismo); E. Pendón Meléndez (prestación de servicios públicos por entidades privadas o semipúblicas); F. Giménez Barriocanal (contabilidad y actividad económica); G. Gerez Kraemer (aguas públicas); S. Castán Pérez-Gómez (concesiones administrativas); V. Ponte Arrebola (vías públicas); C. Varela Gil (estatuto jurídico de los empleados públicos); M^a. L. López Huguet (régimen jurídico del domicilio); R. Escutia Romero (libertad de expresión); S. Ruíz Pino (protección de los recursos naturales); A. Fernández Rosaénz (policía y servicios secretos); M^a. J. Bravo Bosch (minas públicas; romanización de *Hispania*); J. L. Zamora Manzano (derecho fiscal y aduanero; derecho medioambiental); B. Malavé Osuna (derecho urbanístico); R. Rodríguez López (derecho urbanístico); A. Aparicio López (derecho fiscal); E. Quintana Orive (baños públicos; espectáculos públicos).

realización de obras públicas, la organización de espectáculos públicos, etc... .

En la segunda parte de la Tesis nos proponemos exponer diversos aspectos relacionados con la responsabilidad en que podían incurrir los funcionarios romanos por sus actos u omisiones a lo largo de su carrera.

Terminamos constatando el hecho de que a día de hoy sólo se ha publicado una monografía sobre la responsabilidad de los funcionarios en el ámbito de la Administración imperial romana publicada en 1981 por K. L. NOETHLICH *<<Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike>>* centrada fundamentalmente en el estudio del Código Teodosiano⁵ Por el contrario, señalamos que la responsabilidad de los magistrados en época republicana ha sido objeto de importantes estudios, principalmente por parte de la doctrina italiana.

⁵Entre la que podemos citar autores como GNOLI, VENTURINI, LICANDRO o TRISCIUOGGIO.

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO I

TERMINOLOGÍA Y FUENTES REFERIDAS A LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN DERECHO ROMANO

A) PRECEDENTES ROMANOS DEL TÉRMINO FUNCIONARIO.

1. INTRODUCCIÓN

Comenzamos nuestra exposición refiriendo las palabras del Profesor Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN⁶ en las que pone de manifiesto que “todos los ordenamientos jurídicos, incluso los más simples, tienen una estructura u organización administrativa, integrada por instituciones, hechos y actividad de orden administrativo, lo que en el caso de Roma se produce en un nivel de desarrollo semejante a la importancia histórica y al grado de desarrollo de la comunidad política, y si bien en el plano técnico no existe un cuerpo normativo autónomo, especial y distinto de otros cuerpos normativos, sí parece legítimo utilizar la moderna expresión verbal de Derecho Administrativo que no pertenece a la tradición jurídica romana, pero sí a la tradición romanística, para referirse al ámbito de la experiencia jurídica romana...”. Ahora bien, advierte más adelante el mismo Autor que “lo

⁶FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Perspectivas de estudio en temática de Derecho Administrativo Romano...*, op. cit., pp. 469-470.

que no existe en Roma, ni referida al Derecho Romano, es una ciencia del Derecho Administrativo, en cuanto que no fue objeto de especulación teórica general por parte de los juristas romanos, ni ha sido construída por los romanistas. Incluso hay que esperar al siglo XIX para que pueda hablarse de un Derecho Administrativo en sentido técnico, construído sobre la base de los principios constitucionales propios de la Revolución Francesa, y también hay que esperar al XIX para que pueda hablarse de una ciencia del Derecho Administrativo⁷.

En este sentido, añadimos nosotros, la falta de una elaboración sistemática y de una terminología abstracta y general, característica de la experiencia jurídica romana, al menos en el campo del Derecho Administrativo⁸, queda patente también en nuestro ámbito de estudio ya que no existe en el vocabulario latino un término que se corresponda con nuestro vocablo <<funcionario>> y que sea capaz de unificar a

⁷FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo Romano*, en Revista de Derecho de la UNED, 6, Madrid, 2010, p. 199, pone de relieve que “hay que reconstruir los conceptos y dogmas propios de la Administración Pública Romana, a fin de colmar la laguna que se produce en este sector del Ordenamiento jurídico, dada la inexistencia, en la literatura romanística, de una obra de esta naturaleza y en atención a lo que ello supone de conexión entre la investigación histórica y la dogmática moderna, tan necesaria para el progreso de la Ciencia del Derecho”; ID., *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, en AA.VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano* (coords. A. Fernández de Buján; G. Gerez Kraemer; B. Malavé Osuna), Madrid, 2011, p. 13. Véase también, LUCREZI F., *Per un diritto amministrativo romano*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno Internazionale in memoria di A. Chastagnol, Napoli, 2001, pp. 777 ss.

⁸MURGA J. L., *Conceptos romanos básicos para el moderno Derecho administrativo*, Romanitas, 9, Río de Janeiro, 1971, pp. 497 ss.

todos los titulares de los distintos oficios imperiales: en este sentido señala STELLA MARANCA que <<funcionario>> es un término *“ignoto alla tradizione letteraria latina, ma con il quale oggi si indicano coloro che nella vita costituzionale romana hanno svolto un’ attività pubblica, sulla base della semplice volontà imperiale”*; también CERAMI sostiene que *“il pensiero giuspubblicistico romano non ci ha lasciato alcuna elaborazione sistematica dell’ ufficio in generale, ma solo spunti relativi a singoli uffici o funzioni. L’ atomismo concettuale si riflette, peraltro, nel pluralismo terminologico...”*; en la misma línea BRASIELLO, en una recensión (Iura, 12, 1961, p. 399) al libro de ALDO DELL’ ORO <<I libri <de officio> nella giurisprudenza romana>>, Milano, 1960, afirma, refiriéndose a la época imperial, que *“manca la concezione del magistrato, mancano denominazioni nuove e comprensive (segno di deficienza concettuale), tanto vero che noi stessi non sappiamo trovare una parole che compendi tutti i titolari di cariche”*⁹.

No obstante, el más significativo ejemplo de unificación verbal y conceptual en este ámbito estaría representado por el término <<magistratus>> que deriva de <<magister>>, es decir, maestro, como nos refiere Paulo en D. 50.16.57 (59 ed.), señalando que *“a estos les incumbe el principal cuidado de algunas cosas y deben tener más diligencia y solicitud por aquellas cosas encomendadas que otras*

⁹STELLA MARANCA F., *Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle dottrine politiche*, Bari, 1928, p. 44; CERAMI P., *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo (AUPA), 31, 1969, p. 30.

personas¹⁰. También en el lenguaje jurídico del Imperio se emplea el vocablo <<*magistratus*>>, pero no tanto con el sentido de magistrado de la ciudad de Roma sino más bien haciendo referencia a los magistrados municipales; así, veremos a lo largo de nuestra exposición que el término <<*magistratus*>> se reserva en las fuentes a los funcionarios municipales por oposición a los funcionarios imperiales.

Asimismo, la palabra <<*magistratus*>> aparece como término unificador en una traducción al latín realizada en el s. XIX de una obra escrita en griego en el siglo VI d. C. por Juan Lido: <<*De magistratibus rei publicae romanae*>>¹¹ (<<Sobre los magistrados de la República

¹⁰El vocablo <<*magistratus*>> viene a reducir a unidad los diferentes tipos de magistraturas: Th. MOMMSEN llegó a considerar como <<*magistratus*>> a oficios públicos que pertenecen a estructuras constitucionales diversas como serían, por ejemplo, el *rex*, el *magister populi* o el *praefectus urbi* (*Disegno del diritto pubblico romano*, trad. P. Bonfante, Milano, 1973, p. 116: ‘...L’astratto *magistratus*, che ne deriva e necessariamente si richiama a questa radice, comprende tutti i titolari dell’imperium, anche quelli che come il dittatore, l’interre, il maestro dei cavalieri, il preffeto della città non dipendono dall’elezione popolare...’). Frente a esta opinión, vid.: SIBER H., *Römisches Verfassungsrecht in Geschichtlicher Entwicklung*, Lahr, 1952, p. 75; ORESTANO R., *I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, pp. 84 ss.; CERAMI P., *Strutture costituzionali...*, op. cit., pp. 31-33; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Instituciones, hechos y actividad de orden administrativo en la experiencia jurídica romana*, en AA. VV., *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján, Santiago de Compostela, 2005, p. 137; ID., *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, op. cit., p. 40.

¹¹El manuscrito de Juan Lido fue traducido por primera vez al latín por J. D. Fuss en 1812 (Joannis Laurentii Lydi Philadelpheni *de magistratibus reipublicae Romanae* libri tres, nunc primum in lucem editi, et versione, notis indicibusque aucti a J.D. Fuss. Praefatus est C.B. Hase, codd. graec. et lat. in Bibliotheca imperiali Parisiensi sub conservatore custos, Parisiis, 1812). Véase, CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel “De Magistratibus” di Giovanni Lido*, Milano, 1994, pp. 103-104.

romana>>) si bien –añadimos siguiendo a CAIMI¹² - que es posible que el término griego (<<arjé>>) tuviere en sí mismo un significado más amplio que el latino <<magistratus>> ya que el primero parece que se refiere, sin más, a todo titular de un poder público. A este respecto podemos citar la siguiente definición de Festo, L. 14, v. *arcere*: <<Trahitur autem hoc verbum a Graecorum magistratu, quem illi arjé vocant, in cuius potestate est vel cogere vel prohibere>>)¹³.

Por lo que hace al término <<funcionario>>, indicamos que dicha palabra, de origen francés, se refería inicialmente a todos aquellos titulares que desarrollaban una función pública en el ámbito de los oficios o competencias de la Administración¹⁴. Este vocablo deriva a su

¹²CAIMI J., *Burocrazia e diritto...*, op. cit., p. 298, pone de relieve que del examen del libro <<De Magistratus>> de Lido resulta que dicho término aparece recogido 159 veces a lo largo del mismo, de las cuales, 8 con el sentido genérico de <<poder>> y 13 con el de <<principio, origen>>, mientras que en 138 ocasiones aparece con el significado de <<magistratura>>; añadimos que dentro de estas últimas el término es empleado por Lido 80 veces para aludir al que dicho autor consideraba como magistrado por antonomasia, esto es, al prefecto del pretorio; mientras que en las 58 restantes citas <<arjé>> se emplea para las demás magistraturas y altos cargos de la Administración.

¹³Cfr. CERAMI P., *Strutture costituzionali...*, op. cit., p. 35, nt. 7.

¹⁴TERRANOVA S., v. “Funzionario” (diritto pubblico), E.D., vol. XVIII, Varese, 1969, pp. 280 ss.; BARRACHINA E., *La función pública. Su ordenamiento jurídico. Parte general*, vol. I, Barcelona, 1991, p. 221: “...a nivel etimológico, funcionario público sería toda persona que realiza o desempeña una función pública”.

El empleo del término <<funcionario>> en la legislación y en la doctrina española es relativamente reciente ya que aparece por primera vez en el art. 13 de la Constitución de 1869. Anteriormente, los vocablos más utilizados fueron los de <<oficial>> -que aparece de forma destacada en el siglo XIII y llega hasta el siglo XIX- y <<empleado público>> -que se impone a principios del s. XIX-. Posteriormente, a lo largo de ese siglo se va sustituyendo el término <<empleado público>>

vez de <<función>> que, referido a nuestro campo de estudio (‘‘función pública’’), indica el ejercicio de un empleo u oficio público con un contenido u objeto en general predeterminados y al servicio del cumplimiento de un fin público¹⁵.

El término <<función>>, que proviene del latino <<*functio*>>, no fue empleado en el lenguaje de la jurisprudencia romana clásica con el sentido arriba indicado, si bien sí se utilizó frecuentemente el verbo <<*fungor*>> (<<desempeñar, ejercer>>) acompañado de un ablativo aludiendo a un cargo o dignidad (*honore, magistratu...*) para referirse al desempeño de una magistratura o de un cargo público en general: D. 50.1.38.6 (Pap. Iust., 2 de const.): *Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt, non minus eos, qui compulsi magistratu funguntur, cavere debere, quam qui sponte officium adgnoverunt*¹⁶.

por el de <<funcionario>> o <<funcionario público>>. LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público en la historia española*, Madrid, 1970, pp. 17-18, 37. Por otro lado, JAVATO MARTÍN A. M^a., *El concepto de funcionario y autoridad a efectos penales*, en Revista jurídica de Castilla y León, 23, Valladolid, 2011, pp. 145 ss., nos dice que el Código Penal de 1848 es el primer código que ofrece un concepto de funcionario público a efectos penales, concretamente en el art. 322, Título VIII del Libro II, bajo la rúbrica: <<De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos>>.

¹⁵MODUGNO F., v. ‘‘*Funzione*’’, E.D., vol. XVIII, Varese, 1969, p. 303; CARNEVALE M. A., *Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica*, I, Padova, 1969, p. 9, señala que ‘‘*in particolare, per i Romani, la funzione è la attività dell’ ufficio volta alla cura di interessi alieni...*’’.

¹⁶Suet., *Caes.* 23; Cic., *pro Cael.* 9,21; Cic., *de offic.* 2,57; D. 50.2.3.1 (Ulp., 3 de off. proc.): ... *completo tempore nihilominus fungi honore vel officio possit ...*; D. 50.2.7.1 (Paul., 1 sent.): *Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur ...*

Por lo que hace a la época postclásica y justiniana nos encontramos con que el sustantivo <<*functio*>> aparece en numerosas ocasiones referido al ejercicio de las funciones públicas desempeñadas por los funcionarios, y así con este sentido se recoge en CTh. 11.22.3 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius): ...*professionem publicae functionis*...; CTh. 12.1.119 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius): ...*publicis includere functionibus*...; CTh. 11.24.6.8 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Praefecto Praetorio): ...*nomine publicis functionibus denegatis*...; C. J. 3.25.1 (Impp. Theodosius et Valentinianus): ...*pro functionibus publicis respondere*...

Para terminar este apartado mencionamos que la dificultad de encajar categorías y conceptos modernos a la realidad jurídica y administrativa romana nos lleva a considerar con SCARCELLA¹⁷ que el tipo de relación jurídica existente entre la Administración y el funcionario en época postclásica y justiniana se podría aproximar en general a la de un contrato de arrendamiento de servicios (*locatio conductio operarum*) aun cuando dicha afirmación tampoco se ve reflejada claramente en las fuentes jurídicas, ya que el contrato de arrendamiento de servicios quedaba reservado a los trabajos manuales o humildes.

En este sentido, LALINDE ABADÍA¹⁸ nos dice que <<la naturaleza contractual iusprivatista considera que la relación entre los medios

¹⁷SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, Milano, 1997, p. 360.

¹⁸ LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., p. 37.

personales de gestión del poder político y éste nace de un contrato privado que dentro de la tipología romanista ha de ser el de arrendamiento de servicios. Más o menos difusa la idea del arrendamiento de servicios está presente en la figura del “empleado público” y responde a los ideales liberales e individualistas de la Revolución. Como consecuencia de la idea de contrato, la remuneración aparece como un elemento sustancial>>.

2. LOS TÉRMINOS <<OFFICIUM>>, <<MINISTERIUM>>, <<DIGNITAS>>, <<HONOR>>, <<MUNUS>>, <<MILITIA>>, <<GUBERNARE>> y <<ADMINISTRARE>> EN LAS FUENTES ROMANAS.

Como hemos visto, la carencia de una terminología abstracta y general caracteriza este ámbito del Derecho Público Romano, si bien ello no es óbice para llevar a cabo un examen de términos y expresiones como son <<officium>>, <<ministerium>>, <<honor>>, <<munus>> o <<dignitas>>, empleados en el lenguaje de la Cancillería Imperial y que se corresponden en grandes líneas con nuestros vocablos <<cargo público>>, <<oficio>> o <<competencia>>.

En primer lugar, señalamos que el término <<officium>>¹⁹ es utilizado frecuentemente en las fuentes jurídicas y literarias romanas desde antiguo; el vocablo, que originariamente era sinónimo de “deber” u “obligación moral”²⁰, viene a indicar también a partir del Principado el “conjunto de atribuciones o deberes inherentes a un determinado cargo”²¹ tal y como recogen los siguientes textos jurisprudenciales: D.

¹⁹Sobre las distintas acepciones del término <<officium>>, véase a modo de ejemplo la siguiente bibliografía: BERNERT E., *De vi atque usu vocabuli officii*, Breslau, 1930; CANCELLI F., *Saggio sul concetto di “officium” in diritto romano*, RISG, 9, Milano, 1957-1958, pp. 351 ss.; DELL’ORO A., *I libri <<de officio>> nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960; FROSSINI V., v. “officio”, NNDI, XI, Torino, 1968, pp. 773 ss.; CERVENCA G., *Sull’uso del termine “officium” nella legislazione postclassico-giustiniana*, en Studi in onore di Giuseppe Grosso, vol. III, Torino, 1970, pp. 207 ss.; ERNOUT A.- MEILLET A., v. “officium”, en Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1967, p. 459; BOAK A.E.R., v. “officium”, en PW, vol. XVII, Stuttgart, 1937, col. 2045 ss.; HEUMANN H.- SECKEL E., v. “officium”, en Handlexicon zu den Quellen des röm. Rechts, Graz, 1958, pp. 388-389, en donde recoge los siguientes significados de <<officium>>: 1) Deber nacido de vínculos de amistad o parentela (*Menfchenpflicht, Freundespflicht*); 2) Deber de oficio (*Amstpflicht*): *officio iudicis; officio tutoris; officia civilia o publica*; 3) Conjunto de prestaciones de servicios (*Inbegriff von Dienstleistungen*): D. 38.1.22 pr (<<cum enim operarum editio nihil aliud sit, quam officii praestatio ...>>); 4) Trabajo, ocupación (*Leistung, Berrichtung*), aplicación (*Anwendung*): D. 50.17.1 (<<... simul cum in aliquo vitata est, perdit officium suum>>); 5) “Bureau” de un funcionario superior (*Bureau eines Oberbeamten*): C. J. 12.57.4 (<<officia rectorum provinciarum ...>>). Vid., MURGA J. L., *Un original concepto de officium en Séneca*, AHDE, 48, Madrid, 1978, pp. 91 ss.; CREMADES I., *El officium en el derecho privado romano. Notas para su estudio*, León, 1988.

²⁰Por el contrario el término <<inofficiosi>> se utilizaba para referirse a todo lo que se hace *contra officium*, es decir, contra el deber, tal y como vemos en las expresiones: <<Querella inofficiosi testamenti>>, <<inofficiosae donationes>>, <<inofficiosae dotes>>.

²¹GUIZZI F., *La letteratura “de officio”* (rec. a A. DELL’ORO), LABEO, 7, Napoli, 1961, p. 258. También CERVENCA G., *Sull’uso del termine “officium”...*, op. cit., p. 207 se refiere al *officium* como “...sfera di competenza nella quale si esplica la funzione di un magistrato o di un funzionario”.

1.18.12 (Proc., 4 epist.): <<Sed licet is qui provinciae praeest, omnium Romae magistratum vice et officio fungi debeat ...>>; D. 1.22.1 (Paul., de off. ads.): <<Omne officii adessoriis ... in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis>>; D. 1.16.4.2 (Ulp., 1 de off. proc.): <<Proficisci autem proconsulem ... cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur>>; D. 1.11.1 pr. (Arc. Char., de off. praef. praet.): <<Breviter commemorare necesse est, unde constituendi praefectorum praetorio officii origo manaverit ...; 1. (...) Credidit enim princeps eos, qui ob singularem industriam explorata eorum fide et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur...>>.

En las fuentes jurídicas del Principado y del Bajo Imperio se generaliza también el uso del término <<officium>>, con el significado de “conjunto de empleados que forma parte del <<staff>>, <<ufficio>>, <<bureau>>, <<personal>> de un funcionario o magistrado superior”²²,

Para mencionar los deberes de los funcionarios en particular es frecuente en el lenguaje de la Cancillería Imperial utilizar expresiones como: <<debebis>> (CTh. 1.12.1); <<oportet>> (CTh. 1.16.4); <<iubemus>> (CTh. 1.16.4). Cfr. CERVENCA G., *Sull' uso del termine "officium"...*, op. cit., p. 207 nt. 16.

²²HIRSCHFELD O., *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin, 1905, pp. 457 ss.; DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*, vol. III, Milano, 1943, pp. 135 ss.; SINNINGEN W. G., *The "officium" of the urban Prefecture during the later Roman Empire*, Roma, 1957; CROOK J. A., *Consilium principis*, Cambridge, 1955, p. 135; STEIN E., *Untersuchungen über das officium der prätorianerpräfector seit Diokletian*, Amsterdam, 1962; CERVENCA G., *Sull' uso del termine "officium"...*, op. cit., pp. 207 ss.; PALME B., *Die officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, en *Antiquité Tardive* (Ant. Tard.), vol. 7, Paris, 2000, pp. 85 ss.

y el de <<officiales>> comprendiendo a los funcionarios o empleados que componen el “*bureau*” del superior. De este modo vemos que con este sentido se recoge el término <<officium>> en numerosas constituciones del Código Teodosiano²³, así como en las Novelas posteodosianas²⁴ y en el Código de Justiniano²⁵, comentando en este

²³ CTh. 1.5.13: <<...decernimus, ut, si quis palatinus ex officio viri in illustris comitis sacrarum largitionum per provincias repertus fuerit ...>>; CTh. 1.6.9: <<... Si quis igitur iudicum fuerit repertus, qui supercilium suum principali aestimet iudicio praeferendum, quinque libras auri eius officium, nisi formam nostrae sanctionis suggesserit, decem ipse fisci viribus inferre cogatur>>; C. Th. 1.7.23: << Corrector ... provinciae Augustamnicae ob inlatam duci contumeliam, ut cum officio suo condemnaretur, meruit>>; CTh. 1.8.21: <<...Quadráginta vero praeposuras minori laterculo pro infra scripta instructione eius restitui praecipimus, ut de scrinio memoriae de cetero emittantur, observaturo sublimitatis tuae officio, ut nihil de memorato numero sibi usurpet, que pro parte habeat inconcussum quod contra rationem fuerat inmutatum>>; CTh. 1.10.8: <<...Quod si aut huiusmodi sollemnitate neglecta aut repetito actu ad provinciam missus fuerit palatinus, adiutorem officii et primicerium atque secundicerium triginta librarum auri poena percellat...>>; CTh. 1.11.1: <<...Meminerint autem officia ordinariorum iudicum non leve fortunis suis imminere dispendium ...>>; CTh. 1.12.4: <<Officio, quod tuis meritis obsecundat, non curialem quemquam nec plebeia stirpe progenitum volumus adgregari ... >>; CTh. 1.15.5: <<Officium vicariae per Africam praefecturae intra eum numerum colligatur, ut trecentos minime possit excedere ...>>.

²⁴Nov. Val. 22 pr.: <<...Officium sedis celsitudinis tuae, sine quo necessitates publicae nequeunt expediri, per infortunia multa iam saucium medicinam nostrae curationes exposcit, quae dudum potuisset adhiberi, si suggestio similis ante manasset>>...

²⁵C. J. 1.30.3 (Imp. Anastasius A. Eusebio magistro officiorum): <<...officio quoque rectoris provinciae... trium librarum auri dispendio feriendo...>>; C. J. 1.33.1(Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Honoratum consularem Byzacii): <<Si quid negotiorum fuerit actitatum, in quibus aliquid commodi fiscalis appareat, ad officium rei privatae tua gravitas acta transmittat ...>>; C. J. 1.40.6 (Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Cynegio pp.): <<Quod si cuiquam tale existat ingenium, ut praecepta nostra contemnat, quinquaginta ab eo argenti librae, centum ab eius officio, si aliter factum fuerit, fisci viribus inferantur>>; C. J. 1.46.2 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.): <<... interminationem autem quinquaginta librarum auri adversus

sentido CERVENCA²⁶ que: “<<officium>> è, inoltre, usato nel senso di complesso di oficiales o di apparitores in diversi testi d’età classica trasmessici attraverso la Compilazione giustiniana”. No obstante, constata también este Autor²⁷, el diferente uso que los compiladores del Código Teodosiano dieron al sustantivo <<officium>>, el cual es utilizado en las rúbricas del libro I con el significado de “conjunto de atribuciones y deberes del funcionario”, mientras que en las constituciones comprendidas entre los títulos V al XXII del mismo libro, <<officium>> adopta en la mayor parte de las veces el sentido de “bureau” (oficina); ello puede deberse -según CERVENCA- a la influencia que en la redacción de las rúbricas del Teodosiano tuvieron los libros de <<officio>> de la jurisprudencia clásica de los siglos II y III²⁸, como

comitium officium proponi decernimus, si quid contra haec aliquando temptaverit>> ...

²⁶CERVENCA G., *Sull’ uso del termine “officium”...*, op. cit., p. 209, nt. 6 *in fine*.

²⁷CERVENCA G., *Sull’ uso del termine “officium”...*, op. cit., pp. 213, 222-225, 241-242.

²⁸El Digesto nos revela la existencia de numerosas obras de este tipo debidas a juristas como Paulo, Macer, Arcadio Carisio, Venuleyo Saturnino o Ulpiano. Sobre este último, D’ ORS A., *Derecho privado romano*, 8 ed., Pamplona, 1991, p. 85, nt. 5 nos dice que “mucho éxito tuvo una monografía de Ulpiano sobre el gobierno de las provincias, una especie de “guía del buen gobernador” (*de officio consulis*). En una inscripción de Éfeso, de hacia el año 300 d. C. relativa a los privilegios de la ciudad se cita expresamente esta obra (Schönbauer, IURA 1965, p. 105)”. MANTOVANI D., *Il bonus praeses secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del ‘de officio proconsulis’ di Ulpiano*, BIDR, 96-97, Milano, 1993-1994, pp. 203 ss.

Los libros <<de officio>> han sido considerados por parte de la doctrina romanística como tratados de Derecho Constitucional o de Derecho Administrativo que recogen los deberes y competencias de los distintos funcionarios en época de los Severos. En este sentido, FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, op. cit., p. 254,

demuestra el hecho de que los títulos de estos libros encuentran una correspondencia, salvo excepciones, con los títulos equivalentes del Código Teodosiano.

Asimismo, en las fuentes romanas se utiliza el término <<*ministerium*>> con el sentido de función u oficio público como resulta de D. 48.11.1 pr. (Marcian., 14 *inst.*): <<...*vel quo alio officio, munere, ministeriove publico cepit...*>>, o de D. 11.4.1.6 (Ulp., 1 *ed.*): <<*in publicum deduci intelleguntur qui magistratibus municipalibus traditi sunt vel publicis ministeriis*>>, en la que se recoge la expresión <<*publicis ministeriis*>> que podríamos traducir como <<funcionarios públicos>>.

Ahora bien, al llegar a este punto, hemos de advertir que, a nuestro juicio, el vocabulario administrativo del Código Teodosiano requiere un análisis filológico y una reconstrucción sistemática que

destaca que ´es en el Principado cuando comienza la literatura sobre Derecho administrativo: *de re militari, de iure fisci, de officio consulis, de officio proconsulis*. Asimismo, tiene importancia al respecto el hecho de que prestigiosos juristas desarrollasen una carrera administrativa importante en la burocracia imperial, por lo que debieron familiarizarse con el Derecho constitucional y administrativo ´; ID., *Perspectivas de estudio en temática de Derecho administrativo romano...*, *op. cit.*, p. 476. Véase también, DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano* II, 1, Milano, 1944, pp. 444, 449; CASSARINO S., *Note critiche sul liber singularis de officio curatoris rei publicae di Ulpiano*, en *Annali Semin. Giurid. Univ. Catania*, I, 1947-1948, p. 309; SCHILLER A., *Bureaucracy and the Roman Law*, en *Seminar*, 7, 1949, pp. 44-45; WIEACKER F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 389; MAROTTA V., *Ulpiano e l'impero. II. Studi sui libri de officio e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004.

Además, autores como DELL' ORO A., *I libri <<de officio>>...*, *op. cit.*, pp. 278-280, hacen también hincapié en el carácter multidisciplinar de estas obras que refieren también instituciones de Derecho Civil, Penal, Tributario y Procesal, no limitadas al estricto ámbito burocrático.

supera los límites de esta investigación, viniendo motivada dicha dificultad, entre otras razones, por una falta de rigor conceptual por parte de la Cancillería Imperial en el empleo de términos como <<magistratus>>, <<munus>>, <<honor>>, <<dignitas>>, <<officium>> y <<functio>> dotados de múltiples significados.

En este sentido ha puesto de manifiesto CERAMI²⁹ que en el ámbito de la estructuras constitucionales tardo-republicanas las expresiones <<honor>>, <<dignitas>> y <<munus>> adoptan, entre otros, el significado de <<cargo público>>³⁰:

- <<Honor>> indica “cargo en sentido abstracto” y aparece recogido en diversas fuentes como sinónimo de magistrado: I.

J. 1.2.7: <<...Hoc etiam ius honorarium solemus appellare,

²⁹CERAMI P., *Strutture costituzionali romane...*, op. cit., pp. 36-37, nt. 8-10.

³⁰Sobre estas categorías administrativas, GRELLI F., <<Munus publicum>>. *Terminologia e sistematica*, Labeo, 7, Napoli, 1961, pp. 318 ss.; ID., *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, en AA. VV., *Società romana e impero tardoantico*, I. Istituzioni, ceti, economie (a cura di A. Giardina), Roma-Bari, 1986, pp. 37-56; BONINI R., *I <<libri de cognitionibus>> di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano, 1964, pp. 38 ss.; DREXLER H., *Dignitas*, en *Das Staatsdenken der Römer*, Darmstadt, 1966, pp. 231 ss.; LIBERATI G., <<Munera>> e <<honores>> in *Erennio Modestino*, en BIDR, 71, Milano, 1968, pp. 117 ss.; CERAMI P., *Strutture costituzionali...*, op. cit., pp. 36-37, nt. 8-10; NEESEN L., *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, en *Historia*, 30, Wiesbaden-Stuttgart, 1981, pp. 203 ss.; PEREIRA-MENAUT G., *Che cos'è un munus?*, en *Athenaeum*, 92, Pavia, 2004, pp. 169 ss.; FELICI M., *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, en *Gli Statuti Municipali* (a cura di L. Capogrossi Colognesi- E. Gabba), Pavia, 2006, pp. 153 ss.; CUENA BOY F., *Nuevos significados de origo en las fuentes legislativas postclásicas*, en *Revista General de Derecho Romano* (www. iustel. com), 10, Madrid, 2008, pp. 8-9.

quod, qui honores gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic iuri dederunt>>; D. 50.12.11 (Mod., 9 pand.): <<*Si quis ob honorem vel sacerdotium pecuniam promiserit, et antequam honorem vel magistratum ineat...*>>; etc.

- <<*Dignitas*>>, adopta también desde época republicana el significado político-jurídico de “cargo” u “oficio público”, y así se habla en las fuentes de <<*in dignitate esse*>> (Cic., *Philipp.*, 3.9.22) para referir que alguien está investido de un cargo público. En el Bajo Imperio se emplea el término <<*dignitates*>> para referirse a quienes desempeñan las más altas funciones públicas, existiendo entre ellas un *certus ordo* (C. J. 12.8: <<*Ut dignitatum ordo servetur*>>).
- <<*Munus*>> es un vocablo que, al igual que los anteriores, aparece cargado de múltiples sentidos como *donum*, *onus*, *officium*: D. 50.16.18 (Paul., 9 ed.): <<*Munus*>> *tribus modis dicitur. uno donum, et inde munera dici, dari mittive; altero onus, quod quum remittatur, vacationem militiae munerisque praestat, indetur, inde immunitatem appellari; tertio officium, unde munera militaria, et quosdam milites munificos vocari. Igitur municipes dici, quod munera civilia capiant*³¹.

³¹ “La palabra <<*munus*>> tiene tres acepciones: primeramente, la de regalo, y de ahí se dice que se dan o envían <<*munera*>>; en segundo lugar, la de carga, que, al ser remitida, proporciona una exención, y de ahí que se hable de inmunidad; en tercer lugar, la de deber, de donde que se hable de <<*munera*>> militares y que llamemos

La locución <<*munus publicum*>> adopta también el sentido genérico de “función pública” referida tanto a la actividad de los magistrados y funcionarios como al *officium privati hominis* del cual resulta una utilidad pública para todos los ciudadanos como se desprende en D. 50. 16. 239. 3 (Pomp., *enchir.*): <<*Munus publicum*>> est, *officium privati hominis*, ex quo commodum ad singulos universosque cives, remque eorum imperio magistratus extraordinarium pervenit³².

El problema de la naturaleza jurídica del <<*munus publicum*>> no es extraño a la jurisprudencia clásica y así Calístrato en D. 50. 4. 14 pr. (Call., 1 *de cognit.*) contrapone <<*honor*>> y <<*munus*>> adoptando como criterio diferenciador la <<*dignitas*>>: <<*Honor municipalis est administratio rei publicae cum dignitatis gradu sive cum sumptu sive sine erogatione contingens. 1. Munus aut publicum aut privatum est; publicum munus dicitur quod in administranda re publica cum sumptu sine titulo dignitatis subimus*>>³³.

<<muníficos>> a algunos militares; así, pues, se habla de <<munícipes>> porque participan en las cargas municipales”.

³²“Es <<cargo público>> el oficio de un hombre privado, del cual resulta utilidad extraordinaria por imperio del magistrado a todos y a cada uno de los ciudadanos, y a los bienes de estos”.

³³“Un cargo municipal es la administración de una ciudad con cierto grado de dignidad, bien sea con un gasto o sin necesidad de hacerlo. 1.- Las cargas municipales son públicas o privadas. Se llama carga pública la que soportamos en la administración de una ciudad con gasto y sin título de dignidad”.

Modestino distingue también entre <<*honor*>> y <<*munus*>> en D. 50.4.10 (Mod., 5 *diff.*): <<*Honorem sustinenti munus imponi non potest, munus sustinenti honor deferri potest*>>³⁴, e igualmente Hermogeniano en D. 50.1.23 pr. (Hermog., 1 *iur. epit.*): <<*Municeps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem, quantum ad munera; quantum vero ad honorem, retinere creditur originem...*>>³⁵. Vemos, por tanto, que la jurisprudencia clásica relega el vocablo <<*munus*>> principalmente al campo de las prestaciones onerosas (tutela dativa, *viarum munitiones, praediorum collationes...*), mientras que <<*honor*>> es reconducido al esquema de la *administratio rei publicae*³⁶.

Como conclusión, podemos ver que en la Administración del Bajo Imperio, <<*dignitas*>>, sinónimo de <<*honor*>>, designa en general el rango elevado de una persona y en sentido más restringido hace referencia a los oficios más elevados de la burocracia estatal³⁷. Por otro

³⁴ “No puede imponerse una carga distinta al que ya tiene un cargo, pero sí puede ofrecerse un cargo al que cumple con una carga”.

³⁵ “El que alcanza la dignidad senatorial deja de ser munícipe por lo que respecta a las cargas municipales, pero se considera que conserva su ciudadanía de origen respecto de los cargos (*honores*)”.

³⁶ Señalamos que ser *duumvir* o *decurio* era un *honor* municipal.

³⁷ El Código Teodosiano recoge de forma dispersa la categoría de <<*dignitas*>> en los libros VI, VII y VIII; mientras que el Código de Justiniano, mejorando la sistemática, dedica todo el libro XII a las <<*dignitates*>>.

lado, DELL' ORO³⁸ distingue entre <<officium>> como conjunto de atribuciones del titular de un determinado cargo y <<dignitas>> con el sentido de posición derivada de una atribución pública; también DE MARTINO³⁹ nos dice respecto de <<dignitas>> que *“in senso più proprio esso ha lo stesso valore sostanziale che aveva il termine magistratus nell' antica costituzione, vale a dire cariche pubbliche investite di potestas”*⁴⁰.

BARNI G., *Appunti sui concetti di <<dignitas>>, <<nobilitas>>, <<officium>> in Bartolo da Sassoferrato*, Archivio Giuridico Filippo Serafini (A. G.), vol. 155, Modena, 1958, pp. 130 ss.

³⁸ DELL'ORO A., *I libri <<de officio>>...*, op. cit., p. 284.

³⁹ DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1967, p. 328.

⁴⁰ <<Dignitates>> son los *praefecti, quaestores, comites, praepositi sacri cubiculi, archiatri sacri palatii*, oficios palatinos, los vicarios, los gobernadores de las provincias y los grados elevados del ejército.

El término <<dignitas>> es usado también en el Código Teodosiano y en el de Justiniano con el sentido de “cargo” o “cualidad de la persona”: CTh. 1.32.3 (Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus A. ad Eucherium comitem sacrarum largitionum): <<...Quod si tantulum aliquid repperietur etiam per eum, qui decedit, fuisse dilatatum, specie honoris exactus exauctoratusque omni pristina dignitate verberum supplicia digna et pro moribus tormenta sustineat...>>; CTh. 1.32.5 (Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eusignium praefectum praetorio): <<...ad implendum munus retrahantur ac nulli deinceps licentia laxetur prius indebitas expetere dignitates ...>>; CTh. 1.1.6 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum): <<...Maximinus vir inlustris insignibus quaestoriae dignitatis_ornatus...>>; CTh. 1.3.1 (Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Eusignium proconsulem): <<... nec ullius dignitate terreri, sive ille tribuni sive notarii sive comitis praeferat potestatem...>>; CTh. 1.12.2 (Imp. Constantinus A. ad Proculum): <<Et publicae disciplinae interest et proconsulari convenit dignitati, ut publicarum exactionum ceterarumque rerum curam et notitiam ad tuam redigas potestatem...>>; C. J. 1.15.1 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eusignium p.p.): <<Si quis adserat cum mandatis nostris se venisse secretis, omnes sciant nemini quicquam, nisi quod scriptis probaverit, esse credendum

Por otro lado, es interesante constatar que tanto en época postclásica como justiniana es usual el empleo de una terminología militar para designar a los empleados civiles los cuales aparecen indicados en numerosas ocasiones con nombres sacados de la antigua milicia legionaria como *milites*, *veterani*, *militia*...⁴¹.

nec ullius dignitate terreri, sive ille tribuni sive notarii sivi comitis praeferat dignitatem...>>.

⁴¹CTh. 8.5.46 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio Praefecto Praetorio): <<*Diversorum officiorum veterani mancipatum debitum cursui publico repraesentent, etiamsi post contra vim legis aliquam indepti sint dignitatem...>>; CTh. 16.5.61 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto Praefecto Praetorio): <<... *His enim sunt apparitionibus obligati, in quibus emensis militiae stipendiis veterani primipili munus sustinere coguntur*>>.*

Los empleos civiles en la Administración eran designados por los juristas clásicos con las palabras *ministeria*, *officia* o *apparitio*, mientras que en numerosas constituciones del Código Teodosiano se utiliza frecuentemente una terminología militar (*stipendia*, *emeriti*, *missio*, *sacramentum*) respecto a los funcionarios civiles, y Justiniano en sus constituciones no habla ya de *apparitori*, ni de *familiae Caesaris*, sino de *militiae*. También Símaco utiliza en sus epístolas el término *militia* para referirse al servicio civil de la Cancillería Imperial (2,63; 3,67; 3,72; 3,87; 5, 35-36; 5,76; 7,53; 7,123-124...). Sobre el tema, RODA S., *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981, p. 92; KUHN E., *Die städtische und bürgerliche Verfassung des Römischen Reichs bis auf die Zeiten Iustinians*, I, Leipzig, 1864, pp. 149-156; MARCHI A., *I testi delle pandette relativi alla vendita e al legato della militia (Note esegetiche)*, A.G., 76, Modena, 1906, pp. 291 ss.

CTh 6.35.11 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eutropio Praefectum praetorio): <<...*nec post emeritam misionem ad ministeria senes debiles seu vacantes oblitterata laboris exacti consideratione revocentur*>>; CTh. 6.35.14 (Impp. Honorius et Theodosius AA. ad Asclepiodotum praefectum praetorio): <<...*Liberos autem curialium vel cohortalium quandoque susceptos, sive ante prerogativam et tempora expressa praesumptae militiae, sive post decursa stipendia...>>; CTh. 6. 27.14 (Impp. Arcadius et Honorius AA. Anthemio magistro officiorum): <<*Nullus de schola agentum in rebus de cetero locum mortui conetur invadere, sed is, qui ordine stipendiorum et laborum merito ad gradum militiae sequebatur, statim atque illum fata subduxerint, in eius praemia percipienda succedat omni obreptione cessante*>>.*

El término <<*militia*>> tiene en época imperial el sentido de función pública o de oficio civil. DE MARTINO⁴² nos dice que <<*militia*>> indica en las fuentes postclásicas el servicio militar (*militia armata*) o civil (*militia civilis* o *urbana*) de carácter permanente⁴³, mientras que el vocablo <<*dignitas*>> hace referencia a los cargos de gobierno que son temporales y que no están sometidos a las rígidas normas de la carrera burocrática. Esta distinción entre <<*militia*>> y <<*dignitas*>> aparece claramente en la rúbrica de C. J. 12.33 (34): <<*Qui militare possunt vel non et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus et ut nemo duplici militia vel dignitate et militia simul utatur*>>⁴⁴. Y en la nueva terminología administrativa <<*miles*>> no designará solamente al soldado sino al titular de la función o milicia, es decir, al funcionario (San Ambrosio, *Serm. 7*: <<*Non tantum de iis militantibus scriptura loquitur qui armata militia detinentur, sed quisquis militiae cingulo utitur dignitatis suae miles adscribitur*>>).

⁴² DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana, op. cit.*, vol. V., pp. 328-329.

⁴³ Para distinguir el servicio militar del servicio civil se recurre a expresiones como: *armata militia* (CTh. 7.22.1; C. J. 12.34(35).4); *militaris militia* (CTh. 8.7.19); *castrensis militia* (CTh. 16.5.65.3). SERRIGNY D., *Droit public et administratif romain ou institutions politiques, administratives, économiques et sociales de l' Empire romain du IV au VI siècle (de Constantin a Justinien)*, I, Paris, 1862, p. 167, señala en este sentido que *''on disait militare in palatio pour exprimer l'exercice d'un emploi civil à la cour, et l'on appelait ces employés palatini, militia palatina, de même que l'on désignait les employés des gouverneurs sous le nom de ... militia cohortalis''*.

⁴⁴ También, por ejemplo, en C. J. 12.50 (51).5 se dice: <<*Si quis per publicum cursum iter faciens cuiuscumque dignitatis vel militiae ab itinere recto deverterit, poena in eum competens proferatur*>>.

Referimos también que la expresión <<*publicae personae*>> se encuentra en el lenguaje de la Cancillería de la segunda mitad del siglo V con el sentido genérico de ‘‘personal administrativo’’, si bien ya Paulo en D. 19.2.56 (Paul., *de off. praef. vig.*) utiliza <<*publicae personae*>> para aludir a los funcionarios públicos: <<...*a publicis personis quorum interest audiendi sunt...*>>⁴⁵. Dicha expresión se recoge en una constitución de León I, del año 472, contenida en C. J. 1.3.31 que se refiere a los *tabularii* (notarios) llamados a presenciar la entrega de los bienes de los huérfanos a los encargados de los asilos a título de custodia (<<... *ita videlicet ut praesentibus publicis personis, id est tabulariis...*>>); aparece también en un procedimiento de Anastasio, del año 476, mencionado en C. J. 10.19.9.7, donde se designa al personal encargado de la exacción de impuestos (<<...*contra officium praefectorum quam contra praesides provinciarum et eorum officia et contra ceteras publicas personas*>>); asimismo, entre los años 529 y 531, la citada expresión se encuentra en otras cinco constituciones: C. J. 2.55(56).4.1, a. 529; C. J. 7.7.1.2 y C. J. 8.56(57).4, del año 530; C. J. 6.33.3 y C. J. 7.6.1.2, del año 531. Y se contiene en I. J. 1.11.3, referida a los *tabularii* (<<... *id est ut caveat adrogator personae publicae, hoc est tabulario...*>>), y en I. J. 1.20.5, respecto de los magistrados

⁴⁵ FUSCO S.-A., *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale in onore di G. Crifò, II*, Roma, 2010, p. 1108, nos refiere la utilización del término <<*persona*>> ‘‘come strumento definitorio nel settore lato sensu amministrativo, quello per intenderci delle odierne <<*persone giuridiche pubbliche*>> dove manca è vero nell'Antichità il ricorso alla parola (che ‘‘termine’’ persona non è mai stata), ma sembra possibile ravvisare invece la cosa>>.

ciudadanos (<<...vel apud alias publicas personas, id est magistratus...>>)⁴⁶.

Aludimos también al término <<gubernare>> que se emplea en época postclásica y justiniana como expresión propia de la actividad de los funcionarios públicos⁴⁷. Como ha puesto de manifiesto MOSCHETTI⁴⁸ <<gubernare>> y sus derivados son utilizados desde Constantino referidos a la burocracia imperial (<<cursum publicum gubernare>>⁴⁹; <<administrationis gubernacula suscipere>>⁵⁰; <<res privatas vel publicas sincerissime gubernare>>⁵¹) con el sentido, similar

⁴⁶ GRELLI F., Adsignatio e publica persona *nella terminologia dei gromatici*, en Synteleia V. Arangio-Ruiz, 2, Napoli, 1964, pp. 1138-1141.

⁴⁷ Esta expresión concuerda con la moderna de <<Administración Pública>> que, en su sentido material, hace referencia a la actividad del Estado encaminada a la consecución de sus fines. ZANOBINI G., v. *Amministrazione pubblica*, E.D., vol. II, Varese, 1958, p. 240; TUCCI M., *L'amministrazione tra pubblico e privato e il principio di legalità dall'antichità ai giorni nostri. Aspetti ricostruttivi e prospettive di sviluppo*, Milano, 2008.

⁴⁸ MOSCHETTI C. M., *Gubernare navem. Gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano, 1966, pp. 232 ss.

⁴⁹ CTh. 6.29.2.1 (Imp. Constantinus A. et Iulianus Caes. ad Taurum): <<Nec vero multos esse per singulas provincias iussimus, quippe sufficit duos tantummodo curas gerere et cursum publicum gubernare, ut, licet in canalibus publicis... necessitas explicetur, numerus tamen amplior esse non debeat>>.

⁵⁰ C. J. 1.54.6.2 (Imp. Severus et Antoninus AA. Firmo): <<Ceteri vero spectabiles iudices et qui vice vestra administrationes gubernacula susceperunt ...>>.

⁵¹ Nov. Marc. 1 pr. (Imp. Valentiniani et Marciani AA. Edictum): <<Nam cum venalem iudicum ambitum radicitus amputasset et ad res privatas vel publicas sincerissime gubernandas homines spectandos atque consultos traxisset invitos ...>>.

al de <<*gubernare navem*>>, de dirigir convenientemente la actividad administrativa hacia un determinado fin, que sería la *utilitas communis*.

Terminamos constatando que si bien el Derecho Romano no conoció el concepto moderno de <<Administración Pública>> entendida, en sentido subjetivo, como el conjunto de órganos y autoridades que tienen como principal competencia el ejercicio de la función administrativa, destacamos que fue frecuente el empleo, en la legislación de Justiniano, del vocablo <<*administrator*>> para referirse a sus funcionarios, así como la utilización en la legislación postclásica y justiniana de la expresión <<*administratione*>>⁵² para indicar el “*ufficio di cui sono titolari*”⁵³. Ahora bien, como ha puesto de relieve FUSCO⁵⁴

⁵² MOSCHETTI C. M., *Gubernare navem...*, op. cit., p. 236. También DE MARTINO F., *Storia delle costituzione...*, op. cit., vol. V., p. 328, señala que: “*administrationes designa l' oggetto del potere con la propria organizzazione degli uffici*”.

Nov. 17 *praeef.* <<*Ut detur administratoribus nostris... scire earum sanctionem ut nihil ex his audeant praeterire, sed saluberrimas dispositiones nostras observantes in perpetuum, nostras provincias nostroque imperio subiectos gubernare festinent... Necessarium tamen... mandata principum ea vocantes, secundum quae oportet eos gubernare administrationes*>>. MOSCHETTI C. M., *Gubernare navem...*, op. cit., p. 236, pone de manifiesto como en esta fuente la expresión <<*gubernare*>> se refiere a los principios y normas que deben guiar al buen *administrator* en el desempeño de sus funciones, y es que “*alla fine, chi amministrat, secondo gli accenati principii, recte gubernat*” (op. cit., p. 245).

⁵³CTh. 6.26.2 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Valerianus praefectum urbi): <<*...ut prius e palatio cum huiusmodi dignitate dimissus priorem locum aliis post, etiam vera administratione, venientibus sortiatur...*>>; C. Th. 6.27.13 (Imppp. Arcadius et Honorius et Theodosius a Hadriano p.p): <<*...si post principatus officium nulla ulterius honoris fuerint administratione perfuncti...*>>.

⁵⁴ FUSCO S.-A., *Tra persona e officium...*, op. cit., p. 1129.

la palabra <<*administrare*>> aparece mencionada ya en tiempos de la República en relación al ejercicio de las funciones públicas: “en sentido propio y literalmente entendido *administrare* (y sus derivados) es en general considerado como equivalente de <<*ad manus venire*>>, más o menos, con el mismo significado del moderno “echar una mano a alguien” o “meter mano en los asuntos de alguien”. El empleo de este vocablo aparece en primer lugar en fuentes de finales de la República referido al ejército (<<*administrare exercitum*>>⁵⁵; <<*administrare rem bellicam*>>⁵⁶; <<*administrare imperia*>>⁵⁷). Aún -añade FUSCO-, en el siglo III Ulpiano afirma en D. 3.2.2.1 (Ulp. 6 ed.) que aquél que se encuentre al mando de un ejército que se le ha confiado <<*legiones administrat*>>.

Concluimos con este Autor señalando que a finales de la República la utilización del término <<*administrare*>> se empleaba en el ámbito militar y que, sin embargo, a partir de entonces aparece una evolución en el lenguaje político romano que se refleja en Livio 6.6.11 en virtud de la cual <<*administrare*>> comienza a aplicarse a la *res publica* en general con el sentido de gestionar, cuidar o guiar la cosa pública. Es significativo a este respecto el pasaje comprendido en Cic., *Verr.*, 2.1.34

⁵⁵ Cic., *De inv.*, 1.34.58.

⁵⁶ Cic., *De div.*, 2.36.76.

⁵⁷ Caes., *De bell. Gall.*, 2.22.

en el que se dice lo siguiente: <<*magistratuum gerendorum et rei publicae administrandae*>>⁵⁸.

⁵⁸ FUSCO S.-A., *Tra persona e officium...*, op. cit., p. 1131 nt. 89, señala que este fragmento evidencia la “chiara differenza tra l’esercizio, diremmo oggi, di una pubblica funzione (magistratum gerere, con valenza politico-giuridica) e il più semplice e generale aspetto operativo-gestionale della cosa pubblica (rem publicam administrare). È da questo costume linguistico sempre più consolidantesi che scaturisce la sensibilità per la distinzione tra il ricoprire una magistratura e l’esercitare invece un complesso di attività –con essa collegate oppure no, ma pur sempre attinenti all’interesse comune) rispecchiantesi più tardi nella sostantivazione di non meglio specificate administrationes, contrapposte per lo più nelle fonti a dignitates ed officia”.

B) ETIMOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO <<RESPONSABILIDAD>>.

1. <<RESPONDERE>> EN EL LENGUAJE JURÍDICO ROMANO.

Podemos comenzar este apartado constando el hecho de que el término <<*responsabilitas*>> no se encuentra recogido como tal en las fuentes romanas ni medievales, y sin embargo vemos que ya en las fuentes clásicas se utilizaba el vocablo <<*respondere*>> y otras formas derivadas del mismo (<<*responsum*>>, <<*responsor*>>, <<*responsare*>> o <<*responsio*>>); también en época postclásica aparecieron expresiones como <<*responsoria*>>, <<*responsalis*>>, <<*responsarius*>>, <<*responsivus*>>, <<*responsativus*>> o <<*responsorium*>>, y por último, en la Edad Media surgieron nuevos vocablos como <<*responsaticum*>>, <<*responderia*>>, <<*responderius*>> o <<*responsator*>>.

<<*Respondere*>>, del que derivan los otros términos mencionados, procede del verbo <<*spondere*>> y hace alusión al acto de comprometerse, de vincularse a la palabra dada a través de una

promesa; con este sentido y referido a la actividad de los magistrados y del príncipe se utilizaba en diversas fuentes jurídicas romanas (D. 1.16.6.2; Ulp., 1 de off. proc.: <<Legatos non oportet Principem consulere, sed Proconsulem suum; et is ad consultationes Legatorum debebit respondere>>⁵⁹.

<<Respondere>> pasó también a la lengua común latina con el sentido general de “responder a una pregunta” como se recoge en numerosos textos jurídicos y literarios⁶⁰, si bien se utilizó también

⁵⁹C. J. 6.38.5 (Imp. Antoninus A. Antipatrae): <<Suggestioni Illyricianae advocacionis respondentes ...>>; D. 5.1.79.1 (Ulp., 5 de off. proc.): <<ludicibus de iure dubitantibus Praesides respondere solent...>>.

Sobre la etimología y evolución de este término, véase: SCHIPANI S., *Lex Aquilia, Culpa, Responsabilità*, en *Illecito e pena privata in età repubblicana*, Atti del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 4-7 giugno 1990), Napoli, 1992, pp. 159 ss.; ID., *Schede sull'origine del termine 'responsabilità' (Contributo per una riflessione sui problemi dell'elaborazione del concetto sistematico generale designato da tale termine)*, en *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, pp. 885-918 [= Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, Torino, 2009, pp. 1-28]; DE ÁNGEL YÁGÜEZ R., *Sobre las palabras <<responder>>, <<responsable>> y <<responsabilidad>>*, en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, II, Madrid, 2002, pp. 1323 ss.

⁶⁰A modo de ejemplo, citamos: Liv., *Ab urbe condita*, 8.32.6: <<quin tu respondes vetuerimne te quicquam rei me absente agere?...>>; Gai., 4,16: <<Qui prior vindicaverat, ita alterum interrogabat... ille respondebat>>; C. J. 4.20.9 (Imp. Alexander A. Carpo): <<...et nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiat...>>; D. 45.1.1.1 (Ulp., 48 Sab.): <<Qui praesens interrogavit, si antequam responderetur...>>; D. 11.1.11.5 (Ulp., 22 ed.): <<Quod autem ait pretor “omnino non respondisse”... videatur qui ad interrogatum non repondit...>>; D. 22.5.3.1 (Call., 4 de cognit.): <<Quanta fides habenda sit testibus... an ad ea quae interrogaveras verisimilia responderint>>.

v. *Respondere*, en ERNOUT A.- MEILLET A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, op. cit., pp. 643 ss.; HEUMANN H.-

posteriormente para hacer referencia al acto de responder a una acusación o a una citación judicial indicándose de esta forma una actividad procesal⁶¹, y precisamente, con este sentido aparece en distintas fuentes referido a los funcionarios de la burocracia imperial⁶².

El uso del vocablo <<respondere>> se extendió en el ámbito del proceso también a otros campos con el sentido de “cumplir” o “satisfacer” para referirse al presupuesto (deber, carga o crimen) del que deriva la posibilidad de proceder judicialmente contra alguien (<<respondere creditoribus>>, <<respondere muneribus>>),

SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, op. cit., p. 514; CASTIGLIONI L.- MARIOTTI S., *Vocabolario della lingua latina*, Torino, 1996, pp. 1267-1268.

⁶¹Con este sentido se recoge en Cic., *Verr.* 1,1: <<*hanc opinionem populi Romani fuisse, C. Verrem altera actione responsurum non esse neque ad iudicium adfuturum*>>; Asc., *pro M. Scauro*, 20: <<*luvenibus processit in foro, deinde accepto respondendi loco dixit...*>>; C. J. 2.12(13).2 (Imp. Severus et Antoninus AA. Venustiano): <<*apellationi adversariae respondere*>>; D. 4.1.7 pr. (Marcell., 3 dig.): <<*itaque si citatus non respondit...*>>; Nov. 123.24.8: <<*Si vero nondum incohata est, apud gloriosissimum praefectum Orientis praetorium aut apud eos qui a nobis fuerint deputati iudices convenientibus eum respondere*>>.

⁶²CTh. 12.1.171.1: <<*Sane quoniam principalem locum et gubernacula urbium probatos administrare ipsa magnitudo deposcit, sine ordinis praeiudicio consensu curiae eligendos esse censemus, qui contemplatione actuum omnium possint respondere iudicio*>>; C. J. 3.13.7.1 (Imp. Severus et Antoninus AA. Severo et aliis): <<*...Quapropter iubemus huiusmodi hominibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli vel dignitatis praerogativam in hac parte suppetere, sed eos, qui statutis in quacumque militia connumerati sunt vel fuerint seu dignitatem aliquam praetendunt, sine quadam fori praescriptione his iudiciis tam in publicis quam in privatis causis oboedire compelli, ad quorum sollicitudinem professionis seu negotiationis, quam praeter militiam, ut dictum est, exercent, gubernatio videtur rescipere, ita tamen, ut ipsis nihilo minus iudiciis, sub quorum iurisdictione militia seu dignitas eorum constituta est, procul dubio respondeant...*>>; C. J. 3.21.2 (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et C. C. Aurelio Gerontio): <<*...unumquemque enim super huiusmodi causis, id est publicis, quas*

<<respondere oneribus>>⁶³⁾ tal como se recoge en *Lex Romana Wisigothorum* 5.4.18: <<... pro suo furto, pro crimine eius respondere vel satisfacere...>>.

dum militaret exercuit, super ratiociniis militaribus, per quae suos contubernales

adflixisse adseritur, in militari oportet iudicio respondere, in quo et instructio sufficiens et nota testimonia, et verissima possunt documenta praestari>>; C. J. 3.24.3 pr (Imp. Zeno A. Arcadio pp.): <<Quotiens viro forte patricio vel ex patricio vel ei, quem praetorianae vel urbicariae amplissimae sedis administratio illustravit, vel consulari viro, quem tam ordinaria processio quam sacra nostrae pietatis pariter sublimavit oratio, quive magisteriae potestatis sudoribus clarusfactus est, vel ei, qui magistri officiorum vel quaestoris officio functus aut sacri nostrae pietatis cubiculi praepositus post depositam administrationem senatorio ordini sociatus est, aut cui nostra serenitas domesticorum scholam regendam mandavit, cuive sacros nostri numinis thesauros aut res privatas nostrae pietatis vel serenissimae Augustae nostrae coniugis, gubernandas iniunxit, post depositam videlicet administrationem, crimen publicum privatumve, qui tamen non per procuratorem respondere liceat ...>>; C. J. 3.25.1 pr. (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp.): <<Omnes omnino domesticos et agentis in rebus et quaecumque alia praetenditur militia vel dignitas sub moderationibus provinciarum pro functionibus publicis respondere nulla fori praescriptione validitura sancimus, si hac qui exiguntur publica debita uti temptaverint>>; C. J. 12.52(53).3.2 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum pp.): <<Scriniariis autem exceptoribus ceterisque, qui in officio tui culminis merent, cum in legione prima adiutrice nostra militant, audientiam tantummodo in causis in quibus pulsantur tuae celsitudinis deputamus. In provinciis vero commorantes rectoribus earum eos respondere iubemus, nisi publicum officium aliquod eis iniunctum sit>>; C. J. 12.54 (55).5 (Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemium correctorem): <<Eos, qui in officiis vestris merentes statutorum tantummodo numero inserti sunt, fori praescriptione muniri, ceteros vero, qui supra huiusmodi numerum militare noscuntur, quasi nec militantes et apud illustrissimas praefecturas et apud clarissimos provinciarum rectores de quolibet pulsari et conveniri et sine cinguli praescriptione respondere negotio sancimus>>; C. J. 12.20.4 pr (Imppp. Arcadius Honorius et Theodosius A. Patricio magistro officiorum): <<Ex eo, quo primum ducenae vel centenariorum gradum in schola agentum in rebus militantes meruerint, desinant, in sacratissima videlicet civitate constitui alterius iudicis cuiuslibet auctoritate pulsari, vel in alio quolibet examine praeterquam viri magnifici magistri officiorum et cui forsitam ipse concesserit actionibus sui quisque adversarii respondere...>>; C. J. 12.20.4.1 (Idem): ... ut tamen post depositum officium memoratum, si non inter centenarios numerentur, communi iam lege respondere non ambigant; C. J. 12.23 (24).12 pr (Imp. Theodosius A. et Valentinianus C. Maximino comiti

El término adopta también en las fuentes tardías y medievales el significado de “asunción de una obligación de garantía”⁶⁴; así vemos que <<responsalis>> se usa para referir a aquella persona que presta una garantía (GMIL⁶⁵, 7, 150: *responsalis 1: constituerunt se et fecerunt ... dicto Conventui plegios et responsales de dicto contractu* [a. 1265]).

Por último, por lo que hace a nuestro objeto de estudio constatamos que el vocablo <<respondere>>, tal y como se emplea en las fuentes romanas y referido a los funcionarios de la Administración imperial, no sólo adopta el significado de contestar a una acusación sino que se utiliza también con un sentido no tanto procesal sino con el de “estar obligado a rendir cuentas por la gestión de un cargo público”

sacrarum largitionum): <<Viros devotos palatinos non oportere in hac regia urbe apud virum illustrem praefectum urbis litigare compelli, nisi de aedificatione domorum et servitutibus et annonis orta videatur causa: in aliis vero causis tam pecuniariis quam criminalibus apud viros illustres tantummodo comites suos respondere>>; C. J. 12.25(26).4.3 (Imp. Leo et Zeno AA. Hilariano comiti et magistro officiorum): <<Haec autem privilegia non in eorum tantummodo, sed in matrum quoque et uxorum personis valere et ad integrum permanere. filiis quoque et maritis easdem fideiussionis nomine, si necessitas interpellationis exegerit, tradi nec alios vades exigi: ipsosque, dum militant, et post emensam militiam cum his, qui ex tempore prioris praestitae sibi pragmaticae sanctionis eiusdem militiae stipendia impluisse noscuntur, omnibus privilegiis perfrui (cunctis nihilominus capitulis sacris adfatibus divae recordationis Marciani, quos se meruisse adserunt, valituris, excepto hoc, quod in diversis iudiciis tunc respondere praecepti sunt), hac sanctione decernimus>>.

⁶³ C. J. 9.12.2 (Imp. Antoninus A. Vero): <<(…) Nam successio oneribus portionis suae respondet...>>; C. J. 1.3.48(49).4 (Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.): <<(…) et debita exigere et creditoribus respondere ...>>; C. J. 4.39.1 (Imp. Severus et Antoninus AA. Geminio): <<(…) nec fiscum creditoribus hereditariis respondere ...>>; D. 50.1.17.9 (Pap., 1 resp.): (...) <<muneribus civilibus respondere>>.

⁶⁴SCHIPANI S., *Lex Aquilia, Culpa, Responsabilità*, op. cit., p. 167.

como se refleja en las siguientes fuentes: C. J. 3.21.2 (Impp. Honorius et Theodosius AA. Macedonio magistro militum): <<...*praestandi ratiocinii gratia eius numeri,..., in militare iudicio respondere*>>; C. J. 3.25.1 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp.): <<...*sub moderationibus provinciarum pro functionibus publicis respondere*...>>; Nov. 128.24.3: <<...*iubemus eum legitimo procuratore constituto conventiones pro damnis proponentibus respondere*>>; Nov. 128.23.17: <<...*post depositionem cinguli quinquaginta dies in provinciis commorari et conventionis aliquas contra se moventibus respondere*>>.

2. LA UTILIZACIÓN DEL SUSTANTIVO-CATEGORÍA <<RESPONSABILIDAD>> RELATIVO A LOS FUNCIONARIOS EN ÉPOCA MODERNA.

El término <<responsabilidad>> aparece por primera vez referido a la responsabilidad de los funcionarios en Inglaterra⁶⁶ en el curso del debate político parlamentario del siglo XVIII⁶⁷. En este marco es utilizado

⁶⁵DU CANGE CH. *et al.*, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, ed. 1883-1887.

⁶⁶Si bien, el primer testimonio escrito del sustantivo <<responsabilité>> aparece en un documento francés del siglo XV de forma aislada. PROSCHWITZ G., *Responsabilité: l' idée et le mot dans le débat politique du XVIIIe siècle*, en Actes du Xe Congrès intern. de linguistique et philologie romanes, Strasbourg, 1962, I, pp. 385 ss.

⁶⁷ << Mr. Pitt had chosen only a Side-Place [Privy Seal], without any responsibility annexed to it [...] But a Title, and a Side-Place with a

también el vocablo <<responsable>> junto a <<accountable>> y <<answerable>> para referirse a la rendición de cuentas de los ministros y adoptando el significado de “estar sujeto a rendir cuentas” o de “ser moralmente imputable”⁶⁸.

En la lengua inglesa, junto al mencionado vocablo <<responsibility>> (responsabilidad política) se encuentra el de <<liability>> que es utilizado en otro campo semántico: el de la responsabilidad civil extracontractual; esta dualidad terminológica refleja la influencia de las fuentes latinas en el derecho anglosajón que pudiendo emplear en este ámbito de la responsabilidad política otros términos como, por ejemplo, <<answer>> hace propio <<responnd>> tomándolo del latín⁶⁹.

large salary, but no bussiness or responsibility annexed to it, were baits which that gentleman had long been gaping after [...]>>, en The Gentleman`s Magazine, 7/1776, XXXVI, pp. 359-351, citado por PROSCHWITZ G., Responsabilité ..., op. cit., p. 389.

⁶⁸ <<If responsibility was once removed, where could a criminal be found? Not on the throne, for the King can do no wrong; not in Administration, for where they are not consulted, they cannot be responsible [...]>>, en el periódico “The Morning Herald and Daily Adviser”, 18/12/1783, citado por PROSCHWITZ G., Responsalitiè..., op. cit., p. 391.

⁶⁹Véase SCHIPANI S., *Lex Aquilia...*, op. cit., p. 172. DE ÁNGEL YAGÜEZ A., *Sobre las palabras <<responder>>...*, op. cit., p. 1346, nos dice que: “... en un diccionario inglés de 1755, de Samuel Johnson, no aparece la palabra *responsibility*, aunque sí la de *responsible*, con los significados de <<answerable>>, <<accountable>>, probablemente como consecuencia del fenómeno del lenguaje por cuya virtud los vocablos más complejos (si se quiere más largos) son posteriores a los más sencillos. Al igual que, en español *responsabilidad* aparece más tarde que *responsable*”.

Este principio político-jurídico relativo a la responsabilidad de los funcionarios así como el nuevo sustantivo-categoría <<responsabilidad>> serán exportados a la Francia revolucionaria del siglo XVIII viniendo a caracterizar el nuevo modelo de Administración plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 (art. 15: *“la Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration”*)⁷⁰.

Por otro lado, el vocablo <<responsable>> aparece en España definido en el Diccionario de Autoridades de 1737 de la siguiente forma: <<El que está obligado a responder o satisfacer por algún cargo. Es voz introducida modernamente. Lat. *Qui tenetur ad*>>. El término <<responsabilidad>> está ya presente en la Constitución de Cádiz de 1812 (art. 131.25: <<...Hacer efectiva la responsabilidad de los

⁷⁰En el artículo XXXI del Proyecto de la Declaración de Derechos de 20-21 de Julio de 1789 se establece que *“les Officiers publics dans tous les genres de pouvoir sont responsables de leurs prévarications et de leur conduite”*, y el Dictionnaire de l'Académie Française de 1798 consagra la palabra <<responsabilité>> definiéndola como: <<*obligation legal de répondre de ses actions, d'être garant de quelque chose [...] Il s'applique aux Ministres, aux hommes publics [...]*>>. GARCÍA DE ENTERRÍA E., *El principio de <<la responsabilidad de los poderes públicos>> según el art. 9.3 de la Constitución y la responsabilidad patrimonial del Estado legislador*, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, 67 (enero-abril), Madrid, 2003, pp. 15 ss. (p. 33) [=Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. 4, Madrid, 2002, pp. 6537 ss.]; HENRIOT J., *Note sur la date et le sens de l'apparition du mot “responsabilité”*, en *Archives de Philosophie du Droit*, 22, 1977.

Sobre el nacimiento y el desarrollo del concepto filosófico de <<responsabilidad>> en el siglo XIX, McKEON R., *The Development and the Significance of the Concept of Responsibility*, en *Revue Internationale de Philosophie*, 1957, pp. 3 ss..

Secretarios del Despacho y demás empleados públicos>>)⁷¹, así como en el Proyecto de Código Civil de 1821 (arts. 7, 8 y 9)⁷², en el de 1836 (art. 13) y en el Proyecto de García Goyena de 1851 (art. 12)⁷³, referido a la responsabilidad de los funcionarios y de los jueces.

3. LOS TÉRMINOS <<OBNOXIUS>> Y <<PERICULUM>> REFERIDOS A LA RESPONSABILIDAD DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS EN DERECHO ROMANO.

Junto a <<respondere>> se mencionan también en las fuentes dos términos, <<obnoxius>> y <<periculum>>, referidos a los funcionarios y empleados públicos con el sentido de “ser responsables”.

⁷¹De igual forma se recoge en los artículos 228, 269, 293, 294 y 372 de la misma.

⁷²Art. 7: <<En las demás ordenes o mandatos, si se duda de su autenticidad o legitimidad por defecto de alguna solemnidad extrínseca puede suspenderse la ejecución, representando a la autoridad de quien emanan, y bajo la responsabilidad del que debe ejecutar o cumplir, en caso de ser falso o caviloso el reparo>>; Art. 8: << La suspensión con responsabilidad de que habla el artículo anterior, tiene también lugar ...>>; Art. 9: <<La falta de puntualidad o de cumplimiento en la ejecución de las leyes y de los Decretos de las Cortes, de las órdenes y mandatos de las Autoridades respectivas, sujeta a los inferiores y a los subalternos a la responsabilidad y penas que establece el Código Penal>>.

⁷³Art.12: << El juez que rehuse fallar a pretesto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, incurrirá en responsabilidad_>>.

a) *Obnoxius*.

Etimológicamente, <<*obnoxius*>> procede de los vocablos *ob* y *noxa* o *noxia*⁷⁴ e identificándose en un primer momento en el lenguaje jurídico con culpa (<<*noxia culpa est*>>⁷⁵); más tarde, este significado se restringe y <<*noxa*>> se asimilará más bien a <<*delictum*>> como resulta de D. 50.16.238.3 (Gai., 6 *ad leg. XII Tab.*): “<<*Noxae*>> *apellatione omne delictum continetur*”⁷⁶. Añadimos que de esta palabra-raíz derivan a su vez los términos <<*noxius*>> con el sentido de “culpable o responsable en virtud de un *delictum*” e <<*innoxius*>> como “ausente de responsabilidad”. La locución <<*obnoxius*>> toma en las fuentes jurídicas y literarias romanas el sentido de “sujeto a pena”, “punible”, “culpable”, “obligado”, “responsable”⁷⁷. En este sentido, MURGA GENER nos refiere que la expresión <<*obnoxius*>> es clásica

⁷⁴ BIONDI B., *Noxa*, N.N.D.I., 11, Torino, 1965, p. 449

⁷⁵ Servio, *In Aen.*, I, 41.

⁷⁶ “La palabra <<*noxia*>> abarca todos los delitos”.

⁷⁷ <<*Obnoxius*>> es un vocablo utilizado frecuentemente en el lenguaje de la Cancillería Imperial: aparece citado 37 veces en el Código Teodosiano, 36 en el Código de Justiniano y en 8 ocasiones en el Digesto; no obstante el término <<*obnoxius*>> se encuentra ya en Tito Livio (*Ab urbe condita*, 8, 28, 8: <<*victum eo die ...ingens vinculum fidei: iussique consules ferre ad populum, ne quid, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset.*>>) referido a la abolición del *nexum* por la *Lex Poetelia Papiria*. Cfr. Cicerón, *de re publ.* 2.34.59; Varrón, *de lingua latina*, 7.105.

y que “implica una idea de sometimiento cuya primera acepción debió ser la derivada de una responsabilidad penal o criminal, *obnoxius poenae* (D. 29.5.8 pr., Paul., 46 *ad ed.*; C. J. 2.55(56).2, Caro, Carino y Numeriano, a. 283), *obnoxius lege Aquilia* (D. 11.3.14.7, Paul., 19 *ad ed.*; C. J. 3.35.3, Gordiano, a. 241). Más tarde esta idea originaria de culpabilidad se extendió también a otros supuestos de obligaciones de naturaleza pública⁷⁸. Y con este sentido se recoge en diversas fuentes referido a los funcionarios de la Administración imperial:

- CTh. 2.1.3: <<*Non solum in agentes in rebus, sed in alios etiam cuiuslibet homines condicionis competentes vigoris aculei exserantur, si modo fuerit declaratum delicto eos obnoxios detineri... Quae obnoxios claruerit invasisse, in duplum restituere compellantur*>> (= Brev. 2.1.3).
- C. J. 10.48(47).2 (Imppp. Constantinus A. ad Taurum p.p.): <<...*Si quis autem usurpatoria temeritate amplius aliquid fuerit conatus exigere, obnoxius quadrupli repetitione teneatur*>>.

BISCARDI A., *Noxae deditio sui*, en *Illecito e pena privata in età repubblicana*, Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 4-7, giugno 1990), Napoli, 1992, p. 100.

⁷⁸MURGA GENER J. L., *La “obnoxietas” una esclavitud legal*, en *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’antiquité* (Atti della 51^o Sessione della SIHDA, Crotone-Messina, 16-20 settembre 1997), Catanzaro, 1999, p. 444 nt. 13. Véase también el resumen de la comunicación presentada por A.J.B. SIRKS en el Congreso SIHDA de 1991 y recogida en RIDA (Bruxelles, 1992): <<“*Obnoxietas*”. *Responsability for public functions*>>, concretamente en p. 441 nos dice: “Le terme <<obnoxietas>> n’est pas attesté avant le milieu du cinquième siècle après J.C. Il indique la responsabilité du citoyen pour l’exécution des charges, devoirs et fonctions publiques (munera et honores) dans l’empire romain”.

- C. J. 9.28.1 (Imppp. Theodosius Arcadius et Honorius AAA. Rufino pp.): <<*Iudices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Iulia peculatus obnoxii sunt et capitali animadversioni eos subdi iubemus...*>>.
- C. J. 12.59(60).1 (Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Severum magistrum militum): <<*Si quando praefectus praetorio vel vicarius aut rector provinciae significaverit, eum, qui chartis ac ratiociniis publicis invenitur obnoxius...*>>.

b) *Periculum*.

Por lo que hace al término <<*periculum*>> vemos que el mismo ha sido estudiado por la doctrina romanística principalmente en el ámbito del incumplimiento de las obligaciones adoptando el significado de riesgo (*periculum emptoris, periculum tutoris...*) y referido a situaciones de responsabilidad objetiva. Sin embargo, VOCI⁷⁹ en un estudio realizado sobre la responsabilidad de los cotutores y de los administradores de las ciudades (magistrados y *curatores rei publicae*) consideró que el término <<*periculum*>> describe frecuentemente, en este ámbito, una situación de responsabilidad subjetiva: ‘‘Periculum

⁷⁹VOCI P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, IURA, 21, Napoli, 1970, p. 143 y nt. 221; ID., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini - Contributi allo studio della*

tutoris è usato di frequentemente per denotare ciò di cui un tutore risponde: la traduzione più adatta sembra, appunto, quella di responsabilità. Mutuum periculum è un modo di essere responsabile: la situazione in cui uno risponde per l'altro⁸⁰.

Así vemos que la palabra <<periculum>> aparece utilizada en numerosas ocasiones referida a la responsabilidad de los magistrados y de los *curatores rei publicae* frente a la *civitas*, como se recoge, entre otros fragmentos, en:

- CTh. 12.5.1: *li magistratus, qui sufficiendis duumviris in futurum anni officium nominationes impertiunt, periculi sui contemplatione provideant...*
- C. J. 11.36(35).2 (Imp. Gordianus A. Valenti): *Quotiens duobus non separatim, sed pro indiviso munus iniungitur, et ita, ut unusquisque eorum periculo soliditatis videatur obstrictus...*
- C. J. 11.36(35).3 (Impp. Carus Carinus et Numerianus AAA. Theodosio): *Si ita duumviri creati estis, ut mutuo periculo teneamini, in dubium non venit vicariis damnis vos esse obstrictos...*

mutua garanzia, en Studi in memoria di G. Donatuti, vol. III, Milano, 1973, pp. 1305 ss.

⁸⁰MAC CORMACK G., *Further on "periculum"*, B.I.D.R, 21, Milano, 1979, p. 25, señala también que el uso de <<periculum>> en el contexto de responsabilidad incurrida por magistrados y oficiales tiene afinidades con su uso en el contexto de la tutela.

- D. 27. 8.1.9 (Ulp., 36 ed.): *Si inter magistratus hoc convenerit, ut alterius tantum periculo tutores darentur, conventiones pupillo non praeiudicare divus Hadrianus rescripsit ...*
- D. 50.1.11 pr (Pap., 2 quaest.): *Imperator Titus Antoninus Lentulo Vero rescripsit magistratuum officium individuum ac periculum esse commune. Quod sic intellegi oportet, ut ita demum collegae periculum adscribatur...*
- D. 50.1.13 (Papir., 2 de const.): *...talis ordo dabitur, ut in primis qui rei publicae negotia gessit et qui pro eo caverunt in solidum conveniantur, mox peractis omnibus periculum adgnoscat qui non idoneum nominabit (...) Nec iuste qui nominabit universi periculum recusabit, cum scire deberet eum qui nominaretur individuum officium et commune periculum suscepturum.*
- D. 50.8.4(3) (Pap., 1 resp.): *Curatores communis officii divisa pecunia, quam omnibus in solidum publice dari placuit, periculo vice mutua non liberantur...*

Y también en las fuentes postclásicas aludiendo a la responsabilidad de los funcionarios en general:

- C. J. 12.22(23).1 (Imp. Constantius A. ad Lollianum pp.):
Curiosi et stationarii, vel quicumque funguntur hoc munere, crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit.
- C. J. 12.59(60).10 (Imp. Leo A. Erythrio pp.): ...*sed periculo primatum uniuscuiusque officii ipsas authenticas sacras...*

A este respecto podemos añadir que MAC CORMACK⁸¹ realizó un interesante estudio sobre la utilización en las fuentes jurídicas romanas del vocablo <<periculum>> referido a la responsabilidad de magistrados y funcionarios⁸². Para este Autor <<periculum>> hace alusión tanto a la responsabilidad por actos u omisiones del funcionario en el desempeño de su cargo⁸³ como a la responsabilidad del funcionario por los actos u omisiones realizados por un sustituto suyo -el

⁸¹MAC CORMACK G., *Further on "periculum"*, op. cit., p. 28: "Generally therefore it seems reasonable to conclude that magistrates and officials in many cases were made strictly liable and that such liability was described in terms of periculum".

⁸² Destaca también MAC CORMACK G., *Further on "periculum"*, op. cit., p. 27, que en estos textos no se emplea nunca el término *culpa*.

⁸³Véase como ejemplo: C. J. 1.9.17 (Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Iohanni comiti sacrarum largitionum): <<*Iudaeorum primates..., periculo suo anniversarium canonem de synagogis omnibus palatinis compellentibus exigant ad eam formam,...*>>; C. J. 4.46.2 pr. (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Atiniae Plotianae): <<*...quibus periculum exactionis tributorum imminet*>>; C. J. 5.48.1.1 (Imp. Philippus A. Dextro): <<*...aditus praeses provinciae periculi sui eos admoneri praecipiet*>>; C. J. 11.71(70).1 pr. (Imp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius ad. Florum pp.): <<*...ut periculo collocantium officiorumque tradantur*>>.

cual desempeña sus funciones *“periculo suarum facultatum”*⁸⁴, y también a la responsabilidad por los actos de subordinados⁸⁵, colegas⁸⁶ o de personas por él nombradas⁸⁷.

Ahora bien, añade MAC CORMACK⁸⁸, que “algunos de los textos acerca de la responsabilidad de magistrados y funcionarios utilizan *periculum* con el sentido de sujeto a pena: *periculum sententiae*, *periculo carceris*, *periculum criminis*, *periculo calumniae*, *periculo infamiae* y otras expresiones similares (CTh. 9.38.7; C. J. 7.55.2; C. J. 9.6.4.1; C. J. 9.1.15; C. J. 4.34.10)”.

⁸⁴C. J. 1.3.21 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Thomae pp.): <<...*per substitutos periculo suarum facultatum curiae muneribus satisfacere non vetentur*>>; C. J. 10.32(31).60.1 (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Thomae pp.): <<...*qui honorario titulo illustrem dignitatem consecuti sunt, per substitutos periculo suarum facultatum curiae muneribus satisfacere non vetentur*>>; C. J. 12.20.5.2 (21.1) (Imp. Leo A. Patricio magistro officiorum): <<...*electione sua suarumque periculo facultatum praefatum munus eos implere praecipimus*>>.

⁸⁵ C. J. 11.59(58).3; C. J. 10.1.9; C. J. 10.23.3.3 (Impp. Leo et Anthemius AA. Heliodoro comiti sacrarum largitionum): <<...*periculo rectorum provinciarum ...*>>; D. 50.8(9).11 pr. (Papir., 2 const.): <<...*eius vero, quae a redemptoribus operum exigi non potest, sortis dumtaxat periculum ad curatores pertinere*>>.

⁸⁶ C. J. 10.2.3 pr. (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Ianuario): <<...*qui exactores fuerant nominati, confusae exactionis mutuum periculum constitutum ...*>>; D. 50.1.11 pr. (Pap., 2 quaest.): <<...*magistratum officium individuum ac periculum esse commune ... collegae periculum adscribatur*>>.

⁸⁷ C. J. 1.32.1 pr. (Impp. Arcadius et Honorius AA. Limenio comiti sacrarum largitionum): <<...*Palatinis haec cura debet esse praecipua, ut, periculo proprio notariis destinatis, super negligentia iudicum, si ita res exegerit, conquerantur, en eorum sit impunia desidia*>>; C. J. 10.1.9.

⁸⁸MAC CORMACK G., *Further on periculum...*, op. cit., p. 29.

C) FUENTES JURÍDICAS Y LITERARIAS UTILIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS.

El conocimiento de la Administración imperial de época postclásica y justiniana así como las cuestiones relativas a la responsabilidad de sus funcionarios requiere el estudio de diversas fuentes como son las contenidas en documentos administrativos y legislativos de la época, así como las resultantes de fuentes literarias, epigráficas, papirológicas o numismáticas.

1. FUENTES JURÍDICAS.

Entre los documentos administrativos más relevantes se encuentra la <<*Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis*>> que constituye uno de los pocos fragmentos que ha llegado hasta nosotros sobre la organización administrativa del Bajo Imperio⁸⁹. Otros documentos administrativos son

⁸⁹La *Notitia* se abre con un *index* que recoge de manera jerárquica las dignidades civiles y militares de la época; siguen después los capítulos relativos a cada uno de los diferentes funcionarios apareciendo de manera iconográfica las insignias y atribuciones del

el *Gnomon* del *Idios Logos* que es el documento más importante de la Administración imperial romana en Egipto ⁹⁰; la Cronografía

cargo, y termina cada capítulo con la descripción del *officium* del respectivo funcionario. Sobre la fecha de redacción de este documento hay diferentes teorías, en particular, CLEMENTE G., *La Notitia dignitatum*, Cagliari, 1968, pp. 115, 359 ss., considera que la referente a la parte oriental del Imperio se situaría entre los años 401-408, y la relativa a la parte occidental pudo ser escrita entre los años 425-429. SALISBURY F. S., *On the date of the Notitia Dignitatum*, en JRS, 17, London, 1927, pp. 102 ss.

Se conservan diversos manuscritos de la *Notitia Dignitatum* que datan del s. XV y comienzos del XVI como son los de París, Munich, Oxford y Viena los cuales son copias provenientes del *Codex Spirensis* (no anterior al s. XIII) destruido en la segunda mitad del s. XVI.

Recogemos que A. D. DUARTE SÁNCHEZ ha realizado en 2007 una edición digital de esta obra con traducción al castellano: *Notitia Dignitatum. Relación de dignatarios* (http://notitia.dignitatum.lespana.es/Notitia_Dignitatum_espanol.pdf).

CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, pp. 4-6; BARNES T. D., *Claudian and the Notitia Dignitatum*, en Phoenix. Journal of the Classical Association of Canada, 32, Toronto, 1978, pp., 80-82; PURPURA G., *Sulle origine della Notitia Dignitatum*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale in onore di A. Biscardi, Napoli, 1995, pp. 347 ss. [= Annali Palermo 42, 1992, pp. 471 ss.]. Entre la bibliografía recogemos la reciente monografía de NEILA FALEIRO C., *La Notitia dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Madrid, 2006; ID., *Il Parisinus latinus 9661 y la Notitia Dignitatum: nuevas aportaciones*, en Latomus: revue d'études latines, vol. 63, n. 2, Bruxelles, 2004, pp. 425 ss. Véase también FAIRLEY W., *Notitia Dignitatum, or, Register of Dignataries*, Philadelphia, 1899; CLEMENTE G., *La Notitia Dignitatum, op. cit.*; WARD J. H., *The Notitia Dignitatum*, en Latomus 33, Bruxelles, 1974, pp. 397-434 DEMOUGEOT E., *La Notitia Dignitatum et l'histoire de l'Empire d'Occident au début du V siècle*, en Latomus 34, Bruxelles, 1975, pp. 1079 ss.

⁹⁰Contiene un código fiscal redactado en lengua griega a finales del s. II d. C. y está constituido por normas especiales emanadas del *Idios Logos*, uno de los más altos funcionarios del Egipto romano; concretamente en el artículo 70 del mismo se recogen las limitaciones y prohibiciones impuestas a los funcionarios imperiales durante el ejercicio de su cargo.

REINACH T., *Un code fiscal de l'Égypte romaine. Le Gnomon de l'Idiologue*, Paris, 1920-1921; CARCOPINO J., *Le Gnomon de*

(*Chronografo*) del año 354⁹¹; el *Laterculus Veronensis*⁹² y el *Laterculus provinciarum*⁹³ de *Polemius Silvius*⁹⁴, del año 449.

l'Idiologue et son importance historique, Revue des Études Anciennes (REA), 24, Bordeaux, 1922, pp. 101 ss.; UXKULL-GYLLENBAND W. G., *Der Gnomon des Idios Logos*, II, Der Kommentar, Berlin, 1934; RICCOBONO jr. S., *Il Gnomon del Idios Logos*, Palermo, 1950; LAURIA M., *Il Gnomon del Idios Logos*, en Atti Acc. Sc. Mor. Pol., Napoli, 75, 1964, pp. 58 ss.; AMELOTTI M., *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'idios logos*, en Annali del seminario giuridico Palermo (AUPA), vol. 52, 2007-2008, pp. 17 ss.

⁹¹En este documento administrativo se recoge: la lista de los prefectos de la ciudad de Roma desde el año 254 al año 353, la cual proviene probablemente de los mismos archivos de la prefectura urbana; los fastos consulares desde los comienzos de la República hasta el año 354; la lista más antigua conocida de los Papas; y un resumen de la historia de Roma hasta el año 354. El calendario de *Filocalus* constituye la primera edición de la Cronografía bajo la forma de un manuscrito ilustrado del siglo IV (a. 354) que fue realizado por un cristiano de nombre *Valentinus*. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 1-2. Véase también STERN H., *Le calendrier de 354, étude sur son texte et ses illustrations*, Paris, 1953; SALZMANN M. R., *On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity*, Berkeley, 1990; KOEMOTH P., *Autour du prêtre isaique figuré dans le calendrier romain de 354*, en Latomus, 67, n. 4, Bruxelles, 2008, pp. 1000 ss.

⁹²El documento conocido como *Laterculus Veronensis* o Lista de Verona, elaborado probablemente en el intervalo que va entre los años 303 a 314, nos permite conocer el estado de las provincias occidentales y orientales en época de los emperadores Diocleciano y Constantino. Dicho documento se conserva únicamente gracias a un manuscrito del siglo VII de la Biblioteca del Monasterio de Verona. CHASTAGNOL A., *Le préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 3-4; KEYES C. W., *The date of the Laterculus Veronensis*, en Classical Philology, Chicago, vol. 11, n. 2, Chicago, 1916, pp. 196 ss.; BURY J.B., *The provincial List of Verona*, en JRS, 13, London, 1923, pp. 21-29; JONES A.H.M., *The date and value of the Verona List*, en JRS, 44, London, 1954, pp. 21 ss.

⁹³El *Laterculus Polemii Silvii* es un documento administrativo que recoge un listado de las provincias a finales del s. IV d. C.: BURY J.B., *The Laterculus of Polemius Silvius*, JRS, 13, London, 1923, pp. 149-151; CHASTAGNOL A., *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, en Historia, 4, 1955 (Fest. W. Ensslin), Wiesbaden-Stuttgart, pp. 173 ss.; WESCH-KLEIN G., *Der Laterculus des Polemius Silvius –überlegungen zu Datierung, Zuverlässigkeit und Historischem Aussagewert einer Spätantiken Quelle*, en Historia, 51, n. 1, Wiesbaden-Stuttgart, 2002, pp. 57-88; PANIAGUA D., *La divulgación*

Las fuentes legislativas más utilizadas en esta materia son las constituciones contenidas en el Código Teodosiano (publicado oficialmente en el año 438 en la parte oriental por Teodosio II y un año más tarde para Occidente por Valentiniano III)⁹⁵, las Novelas post-teodosianas (sobre todo las de los emperadores Valentiniano III, Teodosio II y Mayoriano), y el Código de Justiniano, principalmente los últimos tres libros que se ocupan de los cargos administrativos del

de conocimientos en época tardoantigua: el caso de Polemio Silvio, en Evphrosyne: Revista de filología clásica, 37, Lisboa, 2009, pp. 337 ss.

⁹⁴*Polemius Silvius* era un funcionario de la Corte imperial de origen galo que escribe su obra en el primer tercio del s. V.

⁹⁵El Código Teodosiano es una valiosa fuente para el estudio de la política administrativa de los siglos IV y V d. C. en el libro I se recogen las fuentes del Derecho y las atribuciones de los altos funcionarios; el libro VIII (títulos 1 al 11) se refiere a los funcionarios inferiores (*officiales*); y los libros X, XI y XII recogen numerosas constituciones dirigidas a luchar contra los abusos de los funcionarios en materia fiscal, judicial y administrativa. En este sentido, destaca CENTOLA D., *In tema di responsabilità penale nella legislazione tardoimperiale*, en SDHI, 68, Roma, 2002, pp. 567 ss., que el primer libro del Código Teodosiano dedica varios títulos al ordenamiento de los funcionarios, sancionando los comportamientos comisivos y omisivos, incompatibles con el oficio desempeñado.

VOLTERRA E., *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, en BIDR 84, Milano, 1981, pp. 85 ss. [= Scritti Giuridici, VI, Napoli, 1993]; SARGENTI M., *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, en SDHI, 61, Roma, 1995, pp. 373 ss.; VINCENTI, *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, en INDEX, 24, Napoli, 1996, pp. 111 ss.; SIRKS A. J. B., *The Theodosian Code. A study*, Friedrichsdorf, 2007; ATZERI L., *Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008; AA. VV., *Droit, religion et société dans le Code Théodosien* (Troisièmes Journées d'Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007, dir. J.-J. Aubert et P. Blanchard), Genève, 2009; AA. VV., *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives* (Études réunies par Sylvie Grogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette), Roma, 2009.

Imperio, así como también de materias administrativas, fiscales y militares⁹⁶ y, por último, las Novelas del mismo emperador.

2. FUENTES LITERARIAS.

Por lo que hace a las fuentes literarias, mencionamos en primer término a Amiano Marcelino (*Ammianus Marcellinus*) que nos permite conocer gracias a su obra la historia administrativa del Imperio de la segunda mitad del siglo IV d. C. Este autor, nacido en Antioquía hacia el año 325-330 d. C., escribe su obra <<*Rerum gestarum libri*>>, que pretendía configurarse como una continuación de la Historia de Tácito, siguiendo, como este último, un orden cronológico que va desde el emperador Nerva hasta el año 378 d. C. Se han perdido los trece primeros libros de los treinta y uno de que constaba originariamente la

⁹⁶Recordamos que durante la Alta Edad Media fueron objeto de estudio y de exégesis solamente los nueve primeros libros del *Codex* de Justiniano; los tres últimos, que se ocupan principalmente de Derecho Administrativo, fueron olvidados, ya que como señala CALASSO F., *Medio Evo del diritto*, I.- *Le fonti*, Milano, 1954, p. 290: “*tutte cose cioè che non avevano più alcuna rispondenza di vita nell’Italia dell’alto medio evo ...*”; incluso, cuando en época del *ius commune* vuelvan a ser estudiados dichos libros, los glosadores continuarán reservando el nombre de *Codex* sólo para los nueve primeros libros del Código, mientras que para los tres últimos se empleará el apelativo de *Tres libri*. Véase, CONTE E., *Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio*, Frankfurt am Main, 1990.

obra, y sólo se han conservado los que abarcan desde el año 353 hasta el año 378 d. C.⁹⁷.

En segundo lugar, mencionamos a Libanio (*Libanius*) de Antioquía (314-394? d. C.), profesor de retórica en dicha ciudad, entre cuyos discípulos se encontraban San Juan Crisóstomo, San Basilio, obispo de Cesarea, y el mencionado historiador Amiano Marcelino. Sus obras más importantes son los <<Discursos>>⁹⁸ y las <<Cartas>>⁹⁹ dirigidas muchas de ellas a altos funcionarios del Imperio recomendando

⁹⁷SEECK O., *Die Stadtpräfektur bei Ammianus Marcellinus*, en *Hermes*, 18, Berlin, 1883, pp. 289 ss.; GIMAZANE J., *Ammien Marcellin, sa vie et son oeuvre*, Toulouse, 1889; THOMSON E. A., *The historical work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge, 1947; SELEM A., *Ammiano Marcellino ed i problemi sociali del suo tempo*, en *Annal. Sc. Norm. Sup. Pisa (ASNP)* 23, 1964, pp. 147 ss.; SABBAGH G., *Le méthode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae*, Paris, 1978; BLOCKLEY R. C., *Ammianus Marcellinus. A study of his Historiography and Political Thought*, Brüssel, 1975; MATTHEWS J., *The Roman Empire of Ammianus*, London, 1989; MARTÍNEZ PASTOR M., *Amiano Marcelino, escritor romano del s. IV: perfil literario*, en *Estudios clásicos*, 34, n. 102, Madrid, 1992, pp. 91 ss.; DE BONFILS G., *Ammiano Marcellino e l'imperatori*, Bari, 1997 (2 ed.); ID., *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle res gestae di Ammiano Marcellino*, a cura di M. NAVARRA (Materiali per una Palingenesia delle costituzioni tardo imperiali, dir. M. SARGENTI, Serie 1,5), Milano, 1994. SANTOS YAGUAS N., *La crisis del imperio romano en Ammiano Marcelino*, en *Memorias de Historia Antigua (MHA)*, 8, Oviedo, 1987, pp. 153 ss.; KELLY G., *Ammianus Marcellinus. The Allusive Historian*, Cambridge, 2008.

⁹⁸Sobre los 64 discursos que nos han llegado de *Libanius*: PETIT P., *Recherches sur la publication et la diffusion des discours de Libanius*, en *Historia*, 5, Wiesbaden-Stuttgart, 1956, pp. 479 ss.; MALOSSE P.-L., *Enquête sur la date du discours 59 de Libanios*, en *Antiquité tardive*, 9, Paris, 2001, pp. 297 ss.

⁹⁹Acerca de las 1544 cartas de Libanio que se han conservado: PETIT L., *Essai sur la vie et la correspondance du sophiste Libanius*, Paris, 1866; PACK R. A., *Curiales in the Correspondence of Libanius*, en *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 81, Princeton, 1951, pp. 176 ss.

a sus discípulos para el desempeño de altos cargos en la Administración¹⁰⁰.

A continuación referimos a Quinto Aurelio Símaco (*Symmachus*), escritor pagano de origen noble, que ocupó importantes cargos dentro de la Administración imperial bajo Valentiniano II, desempeñando la prefectura de Roma en el año 384 y el consulado en el 391¹⁰¹. De entre

¹⁰⁰PETIT P., *Les fonctionnaires dans l'oeuvre de Libanios. Analyse prosopographique*, Paris, 1994; ID., *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV siècle après J.C.*, Paris, 1955; ID., *Les étudiants de Libanius. Un professeur de Faculté et ses élèves au Bas-Empire*, Paris, 1957; ID., *Les sénateurs de Constantinople dans l'oeuvre de Libanius*, en *L'Antiquité Classique* 26, Louvain, 1957, pp. 347 ss.; PINTO M., *La scuola di Libanio nel quadro del IV secolo d. C.*, en *Rend. Ist. Lomb. (RIL)*, 108, Milano, 1974, pp. 146 ss.; DE SALVO L., *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale*, Napoli, 1996, pp. 485 ss.; ID., *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardo-antica. Libanio, la retorica, il diritto*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli, 2007, pp. 53 ss.; CRIBIORE R., *The school of Libanius in Late Antique Antioch*, Princeton-Oxford, 2007; MILLAR F., *Libanius and the near east*, en *Scripta classica israelica*, n. 26, Jerusalem, 2007, pp. 155-180.

¹⁰¹MATTHEWS J. F., *Symmachus and the magister militum Theodosius*, en *Historia* 20, Wiesbaden-Stuttgart, 1971, pp. 122 ss.; VERA D., *Commento storico alle "Relationes" di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981; RODA S., *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981; BARROW R.H., *Prefect and Emperor. The relations of Symmachus, A.D. 384*, Oxford, 1983; MARCONE A., *Commento storico al libro VI dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1983; BRUGGISSER Ph., *Symmaque ou le rituel épistolaire de l'amitié littéraire. Recherches sur le premier livre de la correspondance*, Fribourg, 1993; GIGLIO S., *La relatio 19 di Q. Aurelio Simmaco e CTh. 2.12.1: una rilettura*, en *RIDA*, 41, Bruxelles, 1994, pp. 207 ss.; ID., *Intorno alla "relatio" 23 di Q. Aurelio Simmaco*, en *SDHI* 62, Roma, 1996, pp. 309-329; BOTTIGLIERI A., *La "relatio" 21 di Simmaco: inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, en *Filia. Scritti Gennaro Franciosi*, vol. 1, 2007, pp. 307 ss.; LIZZI TESTA R., *Alla corte dell'imperatore: Quinto Aurelio Simmaco e i suoi quaestores*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli, 2007, pp.

sus obras destacamos las <<*Relationes*>> (informes oficiales), escritas mientras ocupaba dicha prefectura, y sus <<*Epistulae*>> (cartas)¹⁰², redactadas entre los años 364-402.

También, Juan Lido (*Joannes Laurentius Lydus*)¹⁰³, intelectual griego autor de diversos libros sobre la Administración Pública romana, en la que ingresó como funcionario en el año 511, en época del emperador Anastasio, y de la que se retiró en el 551 bajo Justiniano. Juan Lido escribió en Constantinopla, una vez jubilado (554-559), su obra más importante <<*De magistratibus reipublicae Romanae*>> en donde nos relata su propia carrera burocrática.

Por último, citamos a Casiodoro (*Cassiodorus*), aristócrata romano de origen sirio (490-583 d. C.), que fue un alto funcionario en

325 ss.; GUZMÁN ARMARIO F. J., *La fama de una época. Retrato del magistrado íntegro en la obra de Quinto Aurelio Símaco*, en AA. V., *La corrupción en el mundo antiguo* (G. Bravo-R. González Salinero, eds.), Madrid, 2008, pp. 107 ss.

¹⁰²Más de 900 cartas compiladas en diez libros.

¹⁰³Vid. *supra* pp. 26-27

CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel "De Magistratibus" di Giovanni Lido*, op. cit.; TSIRPLANIS C., *John Lydus on the imperial administration*, Byzantium, 44, 1974, pp. 478 ss.; MASS M., *John Lydus and the Roman Past*, London-New York, 1992; ID., *John Lydus and the eastern Praetorian prefecture in the sixth Century AD*, en *Byzantinische Zeitschrift*, vol. 98.2, München, 2005, pp. 431 ss.; WALLINGA T., *The date of Joannes Lydus' de magistratibus*, en *RIDA*, 39, Bruxelles, 1992, pp. 359 ss.; MAZZA M., *Giovanni Lido, De magistratibus: sull'interpretazione delle magistrature romana nella tardo antichità*, en *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (IV-VII sec. d. C.)*, Studi in onore di Rosario Soraci, vol. II, Catania, 2002, pp. 219 ss.

época de Teodorico y sus sucesores: durante cinco años ocupó el puesto de *quaestor sacri palatii* con Teodorico, y desempeñó posteriormente los cargos de *magister officiorum* y *praefectus praetorius*¹⁰⁴. Recoge en su obra <<*Variae*>>¹⁰⁵, concretamente en los libros VI y VII, las fórmulas de nombramiento de los altos funcionarios de su época pero que también, en palabras de CHASTAGNOL, eran “*textes stéréotypés, qui n’avaient guère changé depuis plusieurs siècles*”¹⁰⁶. Esta obra recopila 468 cartas y diferentes formularios oficiales en doce o trece libros.

Además de estos autores podemos citar a poetas de la Corte como Ausonio (*Ausonius*), que fue preceptor de Graciano¹⁰⁷, y Claudiano (*Claudianus*), protegido del emperador Honorio y de Estilicón, que escribió poesías de carácter político como <<La guerra de los

Una traducción al francés con comentarios de la obra de Juan Lido ha sido realizada en 2006 por M. Dunuisson: <<*Des magistratures de l’état romain*>>.

¹⁰⁴Sobre la carrera administrativa de este personaje, GIARDINA A., *Cassiodoro político*, Roma, 2006.

¹⁰⁵CASIODORO, *Variae*, ed. T. Mommsen, *MGH AA*, 1, 1894; VISCIDO L., *Studi sulle Variae di Cassiodoro*, Calabria, 1987; DOVERE E., *Tardoantico: categoria storiografica autonoma (Cassiodorus e Antiquité Tardive)*, en *SDHI*, 63, Roma, 1997, pp. 547 ss.; POLARA G., *Le “Variae” di Cassiodoro: problemi letterari e filologici*, en *Filologia mediolatina: rivista della fondazione Ezio Franceschini*, 11, Firenze, 2004, pp. 35-54; NERI V., *Il lessico sociologico delle tarda antichità: L’esempio delle “Variae” di Cassiodoro*, en *Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci*, 51, Roma, 2010, pp. 63 ss.

¹⁰⁶CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 16.

¹⁰⁷SIVAN H., *Ausonius of Bordeaux: Genesis of a Gallic Aristocracy*, London, 1993.

godos>>¹⁰⁸. También mencionamos escritores paganos como Macrobio (finales del s. IV), que escribió las *Saturnalia*¹⁰⁹, o autores cristianos como Lactancio¹¹⁰, San Agustín o Prudencio (*Opera*, II-III)¹¹¹, entre otros.

¹⁰⁸ *Opera omnia*, ed. T. Birt, MGH AA X, 1892.

CHASTAGNOL A., *Le poète Claudien et l'Histoire Auguste*, en *Historia*, 19, Wiesbaden-Stuttgart, 1970, pp. 444 ss.; BARNES T. D., *Claudian and the Notitia Dignitatum*, *op. cit.*, pp. 80-82.

¹⁰⁹ Macrobio: *Saturnales*. Introducción, traducción y notas de F. NAVARRO ANTOLÍN, Madrid, 2010.

¹¹⁰ Autor latino nacido en el Norte de África (245?-325?), discípulo del maestro de retórica Arnobio. De su obra destacamos: <<*Institutiones divinae*>> y <<*De mortibus persecutorum*>>. DAZA J., *Influencia de Lactancio en la legislación de Constantino*, en *Estudios jurídicos in memoriam* del profesor Alfredo Calonge, I, Salamanca, 2002, pp. 265 ss.

¹¹¹ MYAZINA O., *La imagen del gobernante ideal en las obras de Prudencio*, *Gerión. Revista de Historia Antigua*, vol. 25, n. 1, Madrid, 2007, pp. 471-476.

D) CONCLUSIONES

I.

No existe en el vocabulario latino un término que se corresponda con nuestro vocablo <<funcionario>> que sea capaz de unificar a todos los titulares de los distintos oficios imperiales. Este hecho constituye en sí un reflejo de la falta de una elaboración sistemática por parte de la jurisprudencia romana de los diferentes aspectos relativos al oficio público en general. No obstante, el mayor ejemplo de unificación conceptual en esta materia se dio respecto del vocablo <<*magistratus*>>, que deriva a su vez de <<*magister*>>, como titular de *imperium* o *potestas* en la República, mientras que en el lenguaje jurídico del Imperio dicho término se reservó principalmente a los funcionarios municipales.

II.

El término <<funcionario>> aparece en época moderna si bien podemos encontrar sus raíces latinas cuando en las fuentes se utiliza el verbo <<*fungor*>> (desempeñar, ejercer un cargo político) acompañado de un ablativo aludiendo a un cargo o dignidad (*honore, magistratu...*) para referirse al desempeño de una magistratura o de un cargo público

en general. En época postclásica y justiniana encontramos en frecuentes ocasiones el sustantivo <<*functio*>> referido al ejercicio de las funciones públicas desempeñadas por los funcionarios.

III.

La carencia de una terminología abstracta y general característica de este ámbito del Derecho Público Romano nos lleva a hacer referencia a diversos términos y expresiones empleados en el lenguaje de la Cancillería imperial y que se corresponden en grandes líneas con nuestros vocablos <<cargo público>>, <<oficio>> o <<competencia>>: en primer término, <<*officium*>> es utilizado frecuentemente en las fuentes jurídicas y literarias romanas como sinónimo de <<deber>> u <<obligación moral>> y viene a indicar a partir del Principado el conjunto de atribuciones o deberes inherentes a un determinado cargo. En las fuentes jurídicas del Principado e Imperio se generaliza también el uso de <<*officium*>> con el significado de conjunto de empleados que forman parte de la oficina al servicio de un funcionario o magistrado superior. Este doble sentido del término aparece reflejado en el Código Teodosiano y en el de Justiniano.

Otros vocablos recogidos en las fuentes son los de <<*ministerium*>> con el sentido de función u oficio público; <<*honor*>> que indica cargo en sentido abstracto; <<*dignitas*>>, que desde época republicana adopta también el significado político-jurídico de cargo u oficio público, pero que en el Bajo Imperio se distingue especialmente

de <<*officium*>> para referir a quienes desempeñan las más altas funciones públicas, de tal manera –DE MARTINO- que <<*dignitas*>> asume el significado que tenía el término <<*magistratus*>> en época republicana; por último, <<*munus publicum*>> que tiene el sentido genérico de función pública.

También destacamos que tanto en época postclásica como justiniana fue usual el empleo de una terminología militar para designar a los empleados civiles: así, el término <<*militia*>> aludía al servicio civil o militar de carácter estable o permanente, mientras que con el vocablo <<*dignitas*>> se hacía referencia a los altos cargos de gobierno que eran de naturaleza temporal y no estaban sometidos a las rígidas normas de la carrera burocrática.

Junto a lo anterior, resaltamos que la expresión <<*publicae personae*>> se encuentra también en las fuentes con el sentido genérico de personal administrativo especialmente en época postclásica y justiniana. Asimismo referimos el término <<*gubernare*>>, empleado con el sentido de “dirigir convenientemente la actividad administrativa hacia la *utilitas communis*”, y la evolución de la palabra <<*administrare*>>, procedente del ámbito militar, la cual -como queda reflejado en diversos pasajes de Tito Livio y de Cicerón- se empleó también con el sentido de gestionar, cuidar o guiar la cosa pública.

IV.

<<*Respondere*>> procede etimológicamente del verbo <<*spondere*>> y hace alusión al acto de obligarse, de vincularse a la palabra dada a través de una promesa, como resulta de numerosas fuentes jurídicas romanas referido a la actividad de los magistrados y del príncipe; asimismo el término adopta el sentido de “responder a una pregunta”, de “cumplir o satisfacer un deber o carga procesal”, y de “asunción de una obligación de garantía” en fuentes jurídicas tardías y medievales; finalmente, el vocablo <<*respondere*>> referido a los funcionarios de la Administración imperial se recoge también en las fuentes con el sentido de “estar obligado a rendir cuentas por la gestión de un cargo público”.

V.

El término <<responsabilidad>>, aunque de raíz latina, aparece por primera vez referido a la responsabilidad de los funcionarios en Inglaterra en el curso del debate político parlamentario del siglo XVIII (<<*responsibility*>>) adoptando el significado de “estar sujeto a rendir cuentas” o de “ser moralmente imputable”. Dicho término será exportado a la Francia revolucionaria del siglo XVIII para definir a uno de los elementos esenciales del nuevo modelo de Administración Pública.

VI.

Junto a <<*respondere*>> mencionamos los términos <<*obnoxius*>> y <<*periculum*>>. El primero se recoge en numerosas fuentes jurídicas y literarias romanas de época republicana y clásica con el sentido de “estar sujeto a pena”, “punible”, “culpable”, por la comisión de un delito o crimen, y que en fuentes postclásicas y justinianas se extendió al ámbito de la responsabilidad de los funcionarios. El segundo, <<*periculum*>>, aparece en fuentes jurídicas en relación con la responsabilidad de los magistrados municipales y de los *curatores rei publicae* frente a la *civitas*; asimismo, la doctrina ha apreciado en diversos textos que el término <<*periculum*>> alude no ya a la responsabilidad del propio funcionario por sus actos u omisiones sino a una suerte de “responsabilidad objetiva” del mismo por la gestión de un sustituto suyo o de sus subordinados, colegas o personas por él nombradas.

VII.

El estudio de la responsabilidad de los funcionarios requiere una investigación de las fuentes derivadas de documentos administrativos y legislativos de la época; de entre ellas podemos destacar el régimen jurídico contenido en el Código Teodosiano y en el Código de Justiniano así como las resultantes de fuentes literarias, epigráficas, papirológicas o numismáticas.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN DERECHO ROMANO POSTCLÁSICO Y JUSTINIANEO

A) UNA VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE LOS CARACTERES DE LA BUROCRACIA EN ÉPOCA IMPERIAL.

Podemos comenzar este capítulo poniendo de relieve con DE MARTINO que las fuentes jurídicas romanas no nos han dejado una elaboración sistemática acerca de la burocracia imperial y menos una noción de ésta ya que, como hemos visto, dicho concepto era desconocido para los juristas romanos¹¹². No obstante, el mismo Autor distingue como características de la que podríamos considerar como Administración tardo imperial: la desaparición de las instituciones republicanas supervivientes en la época del Principado y la formación de una burocracia fuertemente jerarquizada que se ramifica del poder central a todas las partes del Imperio¹¹³. Además, DE MARTINO pone de manifiesto que las bases fundamentales del ordenamiento

¹¹²DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. IV, parte I, Napoli, 1962, p. 566.

¹¹³En este sentido la subordinación jerárquica de los funcionarios imperiales fue definida por B. E. BÖCKING, *Notitia Dignitatum*, Bonn (ed. 1839-1853), como una *hierarchia iurisdictionis* ya que todos los oficios son ordenados jerárquicamente en escala de grados, DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1967, pp. 216 ss.

burocrático de la Administración Pública del Bajo Imperio¹¹⁴ fueron ya establecidas en época del Principado, fundamentalmente en tiempo de los emperadores Adriano y Septimio Severo, y añade que *“il centralismo e la creazione di una forte burocrazia furono una tendenza caratteristiche dell'impero a partire dall'imperatore Adriano. Tale tendenza corrispondeva alle caratteristiche del potere autoritario, dal quale è inseparabile la burocrazia”*¹¹⁵.

¹¹⁴El llamado Bajo Imperio Romano o Imperio cristiano o Antigüedad tardía (*Spätantike*), que comienza con el reinado de Constantino, supuso no sólo un nuevo régimen político sino también el desarrollo de nuevas estructuras económicas, sociales y religiosas, lo que significó un profundo cambio respecto del sistema político instaurado por Augusto y desarrollado por sus sucesores durante los dos primeros siglos de nuestra era. STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, vols. I-II (trad. J. R. Palanque), Paris, 1949; JONES A. H. M., *The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, vol. I-II², Oxford, 1973; AA.VV., *Il mondo bizantino I. L'Impero romano d'Oriente (330-641)*, a cura di C. Morisson (edizione italiana a cura di S. Ronchey e T. Braccini), Torino, 2004.

Véase también, DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, op. cit., vol. IV.I, p. 566; GARZETTI A., *Le basi amministrative del principato romano*, en AEVUM, 30, fasc. 2, Milano, 1956, pp. 97 ss.; PFLAUM H.G., *Principes de l'administration romaine impériale*, en Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg 37.3, Strasbourg, 1958, pp. 1 ss.; LO CASCIO E., *Le tecniche dell'amministrazione*, en Storia di Roma, II. L'Impero mediterraneo, 2. I principi e il mondo, Torino, 1991, pp. 119 ss.; AA. VV., *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit* (R. Haensch/J. Heinrichs, eds.), Köln, 2007; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, op. cit., pp. 197 ss.; VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público en Derecho Romano* (prólogo de Antonio Fernández de Buján), Madrid, 2007, pp. 161 ss.; VIÑAS A., *Instituciones políticas y sociales de la Roma antigua*, Madrid, 2010, pp. 259 ss.

¹¹⁵DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, op. cit., vol. IV.2, p. 657.

Por lo que hace a los funcionarios imperiales, GROSSO¹¹⁶ considera como caracteres que diferencian a estos de los magistrados republicanos: la duración en el cargo, la retribución y el fundamento de la competencia de dichos funcionarios que se entendía delegada y en representación del príncipe¹¹⁷. También, ARANGIO-RUIZ¹¹⁸ señala que las magistraturas republicanas eran de elección popular y gratuitas¹¹⁹

¹¹⁶GROSSO G., *Lezioni di storia del diritto romano* (5 ed.), Torino, 1965, p. 371.

¹¹⁷De esta manera, señala CHURRUCA J., *Introducción histórica al Derecho Romano*, Bilbao, 1989, 5ª ed., p. 131, que ´en contraposición a los magistrados republicanos, los nuevos funcionarios imperiales eran nombrados directamente por el emperador y no gozaban de un *imperium* o *potestas* propias, sino únicamente de facultades delegadas por el emperador...`; asimismo, FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano...*, op. cit., p. 176, hace referencia a ´la denominada Cancillería Imperial, formada por funcionarios o burócratas en sentido técnico-jurídico, que sustituyen progresivamente a los magistrados republicanos en sus funciones`.

¹¹⁸ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1968, p. 230.

¹¹⁹FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, op. cit., pp. 132-133; VIÑAS A., *Instituciones políticas y sociales de Roma: Monarquía y República*, Madrid, 2007, p. 137; BRAVO BOSCH Mª. J., *El ius honorum en la antigua Roma*, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 14, 2010, pp. 232-233.

A diferencia de las magistraturas romanas, en Atenas, desde finales del siglo V a. C. o comienzos del IV a. C., todos los *archàî* (funcionarios) recibían una remuneración (*misthòs*). Sobre este tema: HANSEN M. H., *Misthos for Magistrates in Classical Athens*, en Smb. Osloenses, 54, 1979, pp. 5 ss.; GABRIELSEN V., *Remuneration of state officials in fourth century B. C. Athens*, Odense, 1981; GALLO L., *La democrazia ateniese e la paga dei funzionari pubblici*, en Annali Scuola norm. Sup. di Pisa, III.14, Pisa, 1984, pp. 395-440; DAVERIO ROCCHI G., *L'autogoverno nel modello ateniese*, en La democrazia diretta. Un progetto politico per la società di giustizia (a cura di G. Schiavone), Bari,

mientras que el oficio de funcionario imperial es retribuido y ejercitado por delegación imperial ya que no es soberano en su competencia.

En este sentido, STELLA MARANCA¹²⁰ afirma que “la posible ilimitada permanencia en el cargo y la sistemática retribución pecuniaria¹²¹ permitieron la aparición de una verdadera organización burocrática al configurarse una estable jerarquía”.

Podemos citar también a FUSCO¹²² que contrapone los principios fundamentales de las magistraturas republicanas respecto del régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Pública en época imperial: así, nos refiere el Autor que las magistraturas a finales de la República se caracterizaron por: la electividad, la gratuidad, la organización colegial y de autonomía externa (ausencia de un verdadero

1997, p. 61, refiere que “la remunerazione degli incarichi pubblici aveva lo scopo di ridurre sul piano politico limitazioni prodotte dalla ineguale distribuzione della ricchezza. Secondo le parole che Tucidide fa dire a Pericle la democrazia doveva impedire che chi fosse in grado di compiere qualche cosa di utile per la città ne fosse ostacolato dall’oscurità della sua condizione sociale”.

¹²⁰ STELLA MARANCA F., *Il diritto pubblico romano nella storia delle Istituzioni e delle dottrine politiche*, Annali Bari, anno II, fasc. 1, 1928, p. 44.

¹²¹ D’ORS A., *Derecho Privado Romano*, 8 ed., op. cit., p. 55, el cual señala que “la gratuidad de los honores impide que los magistrados se conviertan en funcionarios, por eso mismo se excluye de la carrera política a las personas sin recursos económicos”.

¹²² FUSCO S., *Le strutture personali dell’amministrazione romana*, en *L’educazione giuridica IV- Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*. Tomo I- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981, pp. 49, 67.

principio jerárquico entre las distintas magistraturas), anualidad con expresa prohibición de continuación y de repetición en el cargo, así como la prohibición de acumular dos o más magistraturas en la misma persona^{123 124}. Respecto de la Administración Pública imperial, FUSCO habla de la separación total entre competencias civiles y militares, los principios de disciplina y jerarquía, la creación de un sistema estable de

¹²³FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano...*, op. cit., p. 132 señala como notas esenciales de las magistraturas republicanas: "carácter anual y electivo por las asambleas populares, colegialidad, gratuidad y responsabilidad política o penal en la que puedan incurrir los magistrados".

¹²⁴Mencionamos aquí la *lex Genucia de magistratibus*, plebiscito votado posiblemente en el año 342 a. C. a propuesta del tribuno de la plebe Lucio Genucio, que hacía incompatible el ejercicio simultáneo de dos magistraturas patricias anuales ordinarias; de igual forma prohibía la reelección para la misma magistratura hasta transcurridos diez años (Liv., 7.42.2: <<item aliis plebi scitis cautum ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet neu duos magistratus uno anno gereret utique liceret consules ambos plebeios creari>>). Referimos también la *lex Sempronia de abactis* (123 a. C.), propuesta por Cayo Graco, que prohibía que un magistrado que había sido depuesto por el pueblo pudiese ser elegido nuevamente.

COLI U., *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, en Studi in onore di V. Arangio-Ruiz IV, Napoli, 1953, pp. 400 ss.; JAHN J., *Zur Iteration der Magistraturen in der römischen Republik*, en Chiron, 2, München, 1972, pp. 171 ss.; BUSACCA C., *Sulla pretesa <<lex Sempronia de abactis>>*, en Studi in onore di Cesare Sanfilippo VII, Milano, 1987, pp. 85 ss.; ZAMORANI P., *Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet e il divieto di reficere consulem*, en Ann. Univ. Ferrara (Nuova serie), vol. 4, 1990, pp. 1 ss.; POMA G., *Il plebiscito ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet (Liv., VII, 42,2)*, en Rivista Storica dell' Antichità (RSA), 22-23, Bologna, 1992-1993, pp. 43 ss.; ID., *Il plebiscito ne quis duos magistratus uno anno gereret (Liv., VII, 42,2)*, en Riv. Stor. Ant. (RSA), 24, Bologna, 1994, pp. 49 ss.; FASCIONE L., *La legislazione di Genucio*, en Legge e società nella repubblica romana II (a cura di F. Serrao), Napoli, 2000, pp. 185 ss., 202 ss.

oficios con una propia organización racional interna así como la formación especializada del personal (*“tentativî”*) y, por último, un sistema de salarios minuciosamente definido para todo el aparato administrativo¹²⁵.

Podemos destacar también, junto con lo anterior, que uno de los aspectos esenciales de la Administración del Bajo Imperio fue la separación entre los funcionarios civiles (*militia civilis, militia officialis*) y el ejército (*militia armata*): hasta Diocleciano la mayor parte de los empleados civiles eran militares¹²⁶, si bien a partir de dicho emperador y de sus sucesores la generalidad de los puestos de la Administración, sobre todo los *officiales* de los *scrinia* (oficinas), no provenían del ejército sino que eran funcionarios civiles, aunque es verdad que a lo largo de toda esta época se mantuvo un cierto grado de “militarización” de dichos funcionarios como se pone de manifiesto, por ejemplo, al incorporar en su uniforme el *cingulum* o cinturón militar (CTh. 14.10.1), o al inscribir a los oficiales del prefecto del pretorio en una legión ficticia como era la I *Adjutrix* (C. J. 12.52(53).3.2: <<...*cum in legione prima*

¹²⁵Este aspecto es destacado por KARLOWA O., *Romische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1875, p. 874.

¹²⁶En este sentido podemos mencionar que durante los siglos II y III d. C. los funcionarios del *officium* del prefecto de la ciudad de Roma eran elegidos por el mismo entre los soldados de las cohortes urbanas (CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, *op. cit.*, p. 214).

*adiutrice nostra militant ...>>)*¹²⁷, así como por la utilización de una terminología militar referida a los funcionarios, como sucede respecto de los oficiales (*officiales*)¹²⁸ a los que se les designa con el término <<*milites*>>, o cuando se utiliza la expresión <<*militare in palatio*>> para referirse al ejercicio de un empleo civil en la Corte.

Por lo que hace al ámbito de la responsabilidad de los magistrados romanos, ha destacado recientemente VENTURINI¹²⁹ que “desde el tercero o segundo siglo a. C., las costumbres¹³⁰, los *senatus*

¹²⁷MILLER H. F., *Legio I Adjutrix*, en *Greece & Rome*, vol. 28, n. 1, Cambridge, 1981, pp. 73 ss.

¹²⁸Los que trabajaban en las oficinas (*officia, scrinia*) de la Administración imperial llevaban el nombre general de <<*officiales*>> aunque había también términos específicos para designar a los empleados pertenecientes a ciertos *officia* como es el caso de los *praefectiani* que eran los oficiales de los prefectos del pretorio; los *magisteriani*, los del *magister officiorum*; o los *caesariani* que estaban subordinados al *rationalis rerum privatarum*. Añadimos que los *officiales* empleados en la Corte o en los *officia* más elevados eran designados con el nombre de *palatini*. Además podemos señalar que los oficiales en general eran agrupados en diversos colegios (*scholae*) como la *schola* de los *notarii*, la *schola* de los *agentes in rebus*, la *schola* de los *domestici*, etc ...

¹²⁹VENTURINI, C., *La corrupción: replanteamiento actual de conductas delictivas antiguas*, en *Estudios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Madrid, 2010 (2011), pp. 535 ss. (p. 535); ID., *Studi sul “crimen repetundarum” nell’età repubblicana*, Pisa, 1979; ID., *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, en *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano, 1986, pp. 138 ss.; ID., *Per un riesame dell’esperienza giuridica romana in materia de illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, en *Damnatio iudicium*. Cinque studi di diritto criminale romano, Pisa, 2008, pp. 56 ss.

¹³⁰ Se puede apreciar todo un compendio de las reglas y usos de buen gobierno y de administración honesta de una provincia romana en

consulta y las leyes impusieron a los magistrados y promagistrados unas reglas de conducta: pero faltan pruebas de la existencia de una regulación de la corrupción en sentido moderno, es decir, como figura de ilícito relacionada, en todo caso, con la violación, o también con el ejercicio de los deberes de una función, consistente en la recepción, el ofrecimiento o la promesa por un particular de algún beneficio o provecho, presente o futuro, al funcionario o a tercera persona``. Podemos añadir que las *leges repetundarum* de finales de la República¹³¹ hicieron frente, en primer término, a supuestos de ganancias ilícitas obtenidas por los gobernadores provinciales romanos por actos de concusión cometidos por ellos contra los ciudadanos, ampliándose progresivamente su ámbito de aplicación para atender no sólo al interés de los particulares lesionados por la conducta de los gobernadores sino también para defender un bien más general: el interés de la Comunidad política romana de preservar la honestidad de sus magistrados y para garantizar el correcto desarrollo de las funciones públicas¹³².

los consejos que Cicerón, siendo cónsul de Roma en el año 59 a.C., le da a su hermano Quinto (Cic., *ad Quintum fratrem*, 1.1) que ostentaba entonces el gobierno de la provincia de Asia. Cicerón insiste en el hecho de que la actuación de su hermano en aquella provincia va a influir también a su propia carrera política y profesional.

¹³¹ Sobre las *leges repetundarum*, véase *infra* nt. 856.

¹³² SCHULZ F., *Principios de derecho romano*, trad. esp. M. Abellán, Madrid, 1990, p. 201, puso de relieve que la responsabilidad del magistrado romano estaba regulada con evidente atención a su

De esta forma, la legislación sobre el *crimen repetundarum* va a tipificar tanto casos de pura concusión como también otros más genéricos de corrupción de los magistrados en el cumplimiento de sus deberes¹³³. Esta ampliación del campo de actuación de la ley se

prestigio. El magistrado estaba obligado frente al Estado a entregar un resumen de cuentas financiero y era responsable frente al particular según las normas del Derecho privado y, por lo demás, estaba sometido al Derecho penal público. Pero salvo en el caso de que esta responsabilidad se hiciese valer en contra del magistrado en el cargo mediante el poder de la *par maiorve potestas*, prácticamente la mayoría de las veces se convertía en acción judicial sólo después de que el tiempo en el cargo se hubiese acabado, y la exclusión de la persecución criminal fue fijada en definitiva incluso por ley.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano, op. cit.*, p. 133, señala en este sentido que “la responsabilidad política o penal en la que pudiesen incurrir los magistrados les era exigible, con carácter general, una vez transcurrido el año de gobierno para el que habían sido elegidos (vid. *infra* nt. 954). En la exigencia de estas responsabilidades destacó la labor de los tribunos de la plebe que paulatinamente van asumiendo el papel de defensores de la legalidad constitucional”; ID., *Historia del Derecho Romano*, Madrid, 2010, p. 79. Sobre el papel de los tribunos de la plebe a lo largo de la República, VIÑAS A., *Función del tribunado de la plebe. ¿Reforma política o revolución social?*, Madrid, 1983.

¹³³Sobre la corrupción administrativa en época republicana, además de la bibliografía que recogemos en notas 129 y 866, referimos las siguientes contribuciones recientes sobre esta materia: CRISTOFORI A., *Il giudizio della società provinciale sugli amministratori romani in età repubblicana: considerazioni sulla documentazione*, en AA. VV., *Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World*, Louvain, 2000, pp. 55 ss.; ALEXANDER M. C., *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, Ann Arbor, 2002; ROSILLO C., *La corruption à la fin de la République romaine (II-I S. av. J.-C.). Aspects politiques et financiers*, Stuttgart, 2010.

evidencia en D. 48.11.1.pr. (Marc., 14 *inst.*)¹³⁴ donde, como pone de relieve VENTURINI¹³⁵, “se encuentra el resultado final de la elaboración jurisprudencial de la edad imperial, al que se llegó mediante la extensión de las previsiones de la ley *Iulia* del año 59 a. C.”.

En el Derecho Imperial tiene lugar una equiparación de las concusiones, los beneficios derivados de la corrupción, las donaciones y la aceptación de regalos, y por otro lado, se produce la extensión de la imputabilidad *de repetundis* a todos los titulares de cualquier función pública y a sus colaboradores, e incluso –VENTURINI- también a la mujeres de los gobernadores, en cuanto miembros de la *cohors*.

La investigación sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios fue definida por LAURIA¹³⁶ como “*basilare per spiegare il funzionamento della amministrazione imperiale romana*”. Según esta idea asistimos en época de Diocleciano y Constantino a la creación de un nuevo Derecho Penal disciplinario por el que cualquier acto cometido por el magistrado podía ser considerado delito y la responsabilidad de los funcionarios vino de esta forma a extenderse y a agravarse sin

¹³⁴*Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico.*

¹³⁵ VENTURINI, C., *La corrupción: replanteamiento actual...*, op. cit., p. 537.

límites. Asimismo cambió también el fundamento de dicha responsabilidad ya que los pocos delitos previstos en las leyes que podían imputarse a un magistrado en cuanto tal en la República tenían todos por supuesto un uso ilegal de su *imperium*, casi siempre utilizado en su propio interés personal: así sucedía en el más antiguo de los delitos imputables a un magistrado en el ejercicio de su funciones, el *crimen repetundarum*. También en el Principado se encuentran casos en los que el emperador castigaba a los funcionarios *extra ordinem* y sin que se justificase legalmente la pena infligida, ya que faltaban nuevas figuras de delitos tipificados imputables a magistrados y funcionarios¹³⁷.

Como iremos viendo a lo largo de nuestra exposición, la innumerable serie de delitos y de sanciones en época imperial prescinde de los antiguos presupuestos de época republicana: en numerosos casos¹³⁸, la imputabilidad y la sanción correspondiente estaban justificadas en época postclásica en la *negligentia* del funcionario, y así muchos delitos imputables a los funcionarios se basaron en meras omisiones; de esta manera, mientras que en las leyes republicanas se castigaba la omisión dolosa, vemos que, salvo alguna excepción, en la

¹³⁶ LAURIA, M., *Calumnia*, en Studi in memoria di U. Ratti, Milano, 1933, pp. 104-105 (= *Indirizzi e problemi romanistici*, en Studii e ricordi, Napoli, 1983, p. 339).

¹³⁷ BRUNT P., *Charges of provincial maladministration under the early principate*, Historia, 10, Wiesbaden-Stuttgart, 1961, pp. 189-227.

¹³⁸ LAURIA, M., *Calumnia*, op. cit., p. 105.

legislación imperial es punible la simple omisión aunque no sea dolosa. De esta forma, podemos referir –siguiendo a LAURIA- los siguientes criterios de imputación de responsabilidad de los funcionarios contenidos en el Código Teodosiano: (1-) *culpa* (falta no dolosa): CTh.1.5.1; CTh. 11.32.1; CTh. 12.1.150; CTh. 13.11.8; (2-) *negligentia*: CTh.1.5.9; CTh. 1.6.11; CTh. 1.10.7; CTh. 1.12.6; CTh. 1.16.3; CTh. 2.6.2; CTh. 2.30.17; CTh. 13.11.11; CTh. 16.5.12; (3-) *segnitia*: CTh.10.1.1; (4-) *desidia*: CTh. 1.5.9; CTh. 1.10.7; CTh. 1.11.1; CTh. 1.15.17; CTh. 2.6.2; (5-) responsabilidad objetiva: en la mayoría de los casos la imputabilidad objetiva resultaba evidente cuando se castigaba no sólo al funcionario, sino también a los componentes del *officium* al que pertenecía, únicamente por el hecho de haberse verificado el suceso que el legislador quería impedir; de acuerdo con ello se aplicaba la pena prescindiéndose de cualquier investigación sobre una eventual culpa o negligencia de los miembros del *officium* que se quiere castigar¹³⁹.

Hacemos referencia a continuación a la responsabilidad civil de los magistrados y funcionarios a lo largo de la experiencia administrativa romana: en un reciente artículo TRISCIUOGLIO¹⁴⁰ señala que el acto

¹³⁹ Véase *infra* p. 281.

¹⁴⁰ TRISCIUOGLIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa del magistrato nell'esperienza romana*, en AA. VV., *Responsabilità civile e*

ilícito dañoso realizado por un magistrado en el ejercicio de sus funciones, y perseguido con una acción privada ejercitada por el sujeto lesionado, generaba solamente una responsabilidad del administrador público que realizó el acto sin que concurriese la responsabilidad del “ente público”, ya fuese el *Populus Romanus* o el municipio, en nombre y por cuenta del cual aquel acto se llevó a cabo, y –señala el Autor citando a TALAMANCA¹⁴¹- parece coherente con ello el hecho de que la jurisprudencia no encontrase la más mínima huella de una discusión acerca de la responsabilidad de los “entes públicos” por los actos ilícitos cometidos por sus representantes o titulares. Además, los romanos ignoraron la teoría de la representación orgánica en el ámbito publicístico, según la cual el representante-órgano se identificaría con el ente representado, con la consecuencia de que resultase imposible imputar el daño causado por el funcionario que actuaba en nombre y por cuenta de la Administración Pública.

Añade TRISCIUOGLIO¹⁴² que tal perspectiva pone en evidencia que la responsabilidad civil del magistrado romano estuviese fuertemente caracterizada por un sentido “penalístico”, lo cual nos aleja notablemente de nuestro modo de pensar condicionado por una rígida

amministrazione. Uno studio comparato (a cura di F. Fracchia e C. Botassi), Napoli, 2011, pp. 306-307.

¹⁴¹ TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.

distinción entre ilícito civil e ilícito penal, puesto que el acto dañoso realizado por el administrador público era perseguido por una acción penal privada ejercitada por el ciudadano lesionado -o por toda la colectividad cuando se tratase de una acción popular-, dirigida a la obtención tanto del resarcimiento del daño causado como a la imposición de una pena pecuniaria. Dicha responsabilidad era exigible sólo al autor del ilícito y no a la colectividad representada por el mismo ya fuese el *Populus* o los *municipes*.

No obstante, debemos constatar que tanto en la jurisprudencia clásica como en las leyes imperiales se afirmó la regla en virtud de la cual los municipios eran civilmente responsables de la actuación ilícita de los magistrados municipales cuando estos realizaban negocios jurídicos con terceras personas en nombre y por cuenta de la *civitas*, siempre que la misma se hubiese enriquecido de alguna manera como consecuencia de dicha actuación ilícita (*in id quod ad eum pervenit, in quantum locupletior factus est*): D. 4.3.15.1 (Ulp., 11 ed.)¹⁴³; D. 4.2.9.3 (Ulp., 11 ed.); D. 43.16.4 (Ulp., 10 ed.).

¹⁴² TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa...*, op. cit., p. 307.

¹⁴³Vid. *infra* p. 158.

VON LÜBTOW U., *Bemerkungen zum Problem der juristischen Person*, en *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker*, II, Milano, 1954, pp. 469 ss.; BLANCH NOUGUÉS J. M^a., *Acerca de la responsabilidad penal de las civitates en Derecho Romano*,

Por otro lado, se pueden apreciar supuestos en los que los magistrados se hacían civilmente responsables –pero no la Administración como tal- por los perjuicios causados a un particular. Así sucedía en el campo de la expropiación forzosa de bienes de los particulares por causa de utilidad pública cuando un ciudadano consideraba insuficiente el justiprecio fijado por el órgano público que realizó la expropiación en cuyo caso el ciudadano podía elevar una reclamación. LOZANO CORBÍ¹⁴⁴ señala que el Derecho Romano estableció remedios concedidos al ciudadano que se creyese injustamente lesionado a causa del ejercicio, por parte del *Populus Romanus*, del derecho de expropiación forzosa.

En época republicana Tito Livio (40,29) nos da noticia de una petición presentada a los tribunos de la plebe contra un acto del magistrado competente encargado de llevar a cabo un procedimiento de expropiación forzosa¹⁴⁵. En esta misma época, Frontino (*de aquis urbis*

en Filía. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di F. D` Ippolito, I, Napoli, 2007, pp. 255 ss.

¹⁴⁴LOZANO CORBÍ E., *La expropiación forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el derecho romano*, Zaragoza, 1994, p. 151; ID., *Expropiación forzosa en el Derecho Romano*, en Derecho Administrativo Histórico, en AA. VV., *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján, Santiago de Compostela, 2005, pp. 205 ss..

¹⁴⁵RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *Las obligaciones indemnizatorias en el Derecho romano público*, Almería, 1996, p. 241: “En el Derecho Romano de la República y del Principado, el órgano público estaba exento de toda responsabilidad civil, directa o indirecta, pero el particular

Romae, c. 128) nos refiere que los ciudadanos podían obstaculizar la actuación de los magistrados que expropiaban pudiendo impugnar estas expropiaciones forzosas. En época imperial en CTh. 15.1.30, dirigida al *praefectus urbi*, se señala que los particulares, en caso de expropiación forzosa por utilidad pública, podían contraponer a la indemnización señalada por la Administración, una propuesta de petición de un precio mayor -*ubi amplior poscitur quantitas*- en compensación por la pérdida del objeto expropiado. Y en CTh. 15.1.50 se puede observar como los ciudadanos podían obligar al prefecto de la ciudad a paralizar la construcción de una obra pública, si no creyeran que la expropiación fuese conveniente para que éste pidiera consejo e instrucciones al emperador¹⁴⁶.

Añade LOZANO CORBÍ¹⁴⁷ que la responsabilidad del magistrado frente al ciudadano expropiado y hacia la Administración Pública no podía versar más que sobre el problema de la cantidad concreta de la retribución de la indemnización o de la compensación ofrecida dado que, por el carácter discrecional del poder de expropiación forzosa del

disfrutaba de otros remedios: la *intercessio* colegial y la tribunicia. El *auxilium* del tribuno de la plebe, invocado por una *apellatio* cumplía la función de las modernas garantías constitucionales y judiciales`.

¹⁴⁶RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *Las obligaciones indemnizatorias...*, *op. cit.*, pp. 114, 246.

¹⁴⁷LOZANO CORBÍ E., *La expropiación forzosa, por causa de utilidad...*, *op. cit.*, pp. 157-158.

magistrado, no se le podía pedir cuentas sobre lo realizado en relación a la necesidad de la expropiación forzosa y hacerlo responsable.

Respecto a la indemnización que se debería entregar al ciudadano expropiado, señala LOZANO CORBÍ que el magistrado era plenamente responsable ya fuera frente al mismo ciudadano expropiado o también frente a la Administración. El primer supuesto se verificaba cuando el magistrado atribuía al ciudadano expropiado una indemnización inferior al valor de la cosa expropiada. En el segundo supuesto cuando se asignaba al particular expropiado una indemnización muy superior al valor de la cosa o bien expropiado.

En el caso de que se concediera al ciudadano una indemnización irrisoria éste podía ejercitar una acción para obtener el pago de la cantidad debida análoga a la acción de la ley Aquilia (*damnum iniuria datum*), la cual se interpondría contra el magistrado una vez cesado en su cargo alegándose no la ilicitud del acto de desposesión sino la forma de llevarla a cabo. Aunque en las fuentes no se menciona esta acción, considera este Autor que la interposición de la misma siempre se admitió, en general, en Derecho Romano tratándose de sustracciones o deterioros de toda clase de bienes¹⁴⁸.

¹⁴⁸MOMMSEN Th., *Le Droit public romain*, II (trad. Girard), Paris, 1894, p. 384.

B) DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN ÉPOCA POSTCLÁSICA Y JUSTINIANEA.

1. INTRODUCCIÓN.

Afirmaba SERRIGNY, que *''ce qui caractérise le régime purement administratif de l' empire romain, c'est le principe de ce que nous appelons aujourd'hui la centralisation. Cette centralisation était nécessaire pour établir et maintenir l'unité dans un aussi vaste État''*¹⁴⁹.

A tenor de lo cual resultaba que a la cabeza de toda la organización administrativa se encontraba el poder soberano del emperador del cual dependían todos los funcionarios civiles y militares: *<<princeps est qui*

¹⁴⁹SERRIGNY D., *Droit public et administratif romain...*, op. cit., p. 12; NOCERA G., *Il centralismo amministrativo del tardo impero*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno Internazionale, Napoli, 1990, pp. 599 ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, op. cit., pp. 173 ss., 195 ss.; VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público...*, op. cit., pp. 139 ss.

civium suorum suffragio primus ad gradum quasi et fastigium electus, eminentem super alios fortunam sortitus est>>¹⁵⁰.

Ahora bien, dentro de esta idea de centralización administrativa que caracterizó al Imperio romano se pueden distinguir también distintos ámbitos a los que nos referimos a continuación haciendo uso en muchos casos de un lenguaje jurídico moderno: Administración central, civil y militar; Administración provincial; y Administración municipal. Junto a lo anterior señalamos también que las ciudades de Roma y Constantinopla estaban sujetas a un régimen administrativo especial¹⁵¹.

¹⁵⁰ Juan Lido, *de Magistrat.*, 1, 15.

DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V., *op. cit.*, pp. 216 ss.; SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, *op. cit.*, p. 37.

¹⁵¹ Para una visión general de la organización administrativa del Imperio: MOMMSEN Th., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1871-1888 (= *Le Droit Public Romain*, trad. Girard, Paris, 1889-1896); MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung*, vols. I-II, Leipzig, 1881-1884; RICCOBONO Jr., *Il problema della ricostruzione delle strutture amministrative romane*, en Synteleia V. Arangio-Ruiz, II, Napoli, 1964, pp. 663 ss.; SARGENTI M., *Le strutture amministrative dell'impero da Diocleziano a Costantino*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. II Convegno Internazionale, Perugia, 1976, pp. 199 ss.; VOGLER C., *Constance II et l'administration imperiale*, Strasbourg, 1979; HAASE R., *Untersuchungen zur Verwaltung des spätromischen Reiches unter Kaiser Justinian I (527-565)*, Wiesbaden, 1994; DELMAIRE R., *Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien. I. Les institutions civiles palatines*, Paris, 1995; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, *op. cit.*, pp. 241 ss.; VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público...*, *op. cit.*, pp. 161 ss.

2. ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. ESPECIAL REFERENCIA A CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD.

Podemos referir, siguiendo el esquema que nos proporciona SERRIGNY¹⁵², los siguientes órganos políticos y dignidades que integraban la estructura de lo que hoy en día entenderíamos como Administración central. Igualmente, al hilo de nuestra exposición iremos tratando diversos aspectos relativos a la responsabilidad en la que podían incurrir los funcionarios de dicha Administración:

a) *Sacrum consistorium*:

Se configura como un órgano asesor del emperador que tiene su origen en época de Augusto (Sueton., *Aug.* 35: <<*sibi Augustus instituit consilia sortiri semestria, cum quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret*>>) y subsiste aún en tiempos de Justiniano. Sus miembros eran designados bajo el nombre de condes del consistorio (*comites consistorii* o *comes*

consistorianī) entre las *dignitates* más elevadas de la Administración (*praefectus praetorium*, *quaestor sacri palatii*, *magister officiorum*, *comes sacrarum largitionum*, *comes rei privatae*). Las decisiones del emperador tomadas con su consistorio normalmente no eran leyes generales pero tenían fuerza de ley para las personas o asuntos sobre los que se pronunciaban (C. J. 1.14.2, Impp. Teodosio y Valentiniano)¹⁵³.

b) Senado:

En época postclásica, junto al Senado de Roma existió también el Senado de la ciudad de Constantinopla el cual subsiste en

¹⁵² SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, *op. cit.*, pp. 23 ss.

¹⁵³ Los miembros del *sacrum consistorium* gozaron de numerosos privilegios tales como la exención de las requisiciones de hombres y caballos para el ejército (CTh. 11.18.1), de las cargas de la pretura (CTh. 6.4.8), de los alojamientos civiles y militares (CTh. 7.8.3) y de todas las demás cargas sórdidas (CTh. 11.16.15 y 18).

AMARELLI F., *Consilia principum*, Napoli, 1983; ID., *Dai consilia principum al consistorium*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di A. Biscardi, Napoli, 1995, pp. 187 ss.; ID., *Consistorium: breve nota sulle sue origine e derivazione*, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 1, Madrid, 2004; FALCHI G. L., *Il consistorium imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale, 1995.

tiempos de Justiniano¹⁵⁴. Los proyectos de senadoconsultos eran preparados por comisiones elegidas tanto entre los altos dignatarios del palacio imperial como entre senadores a tenor de lo que resulta de D. 1.3.9 (<<*non ambiguitur senatum ius facere posse*>>) y de una constitución de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, del año 446, contenida en C. J. 1.14.8¹⁵⁵, y después de ser aprobados por el pleno del Senado eran sometidos a la sanción del emperador como leyes imperiales¹⁵⁶. Los senadores estaban sujetos a diversas cargas como la

¹⁵⁴LÉCRIVAIN C., *Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris, 1888; PETIT P., *Les sénateurs de Constantinople dans l'oeuvre de Libanius*, en *L'antiquité classique* (AC) 26, Louvain, 1957, pp. 347-382; KUHOFF W., *Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt am Main-Bern, 1983; GARBARINO P., *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano, 1988; GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990; ARCARIA F., *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992; CHASTAGNOL A., *Le Sénat romain à l'époque impériale*, Paris, 1992.

¹⁵⁵<<... sea esto discutido antes, así por todos los próceres de nuestro palacio, como por vuestra gloriosísima asamblea, y que si tanto a todos los jueces,..., se dicte entonces la ley, y de este modo sea examinado de nuevo hallándose todos reunidos, y que cuando todos estuvieren de acuerdo, entonces finalmente se lea en el sacro consistorio de nuestro númen, para que el consentimiento de todos sea confirmado con la autoridad de nuestra serenidad. Sabed, pues, padres conscriptos...>>.

¹⁵⁶Sobre el procedimiento de elaboración y aprobación de los senadoconsultos en época imperial, *vid.* Sím., *epist.*, 28.

pretura¹⁵⁷, el impuesto llamado *glebalis collatio* (*follis o gleba*) que recaía sobre sus propiedades fundiarias¹⁵⁸, y el llamado *aurum tironicum* que consistía en el pago de una cantidad de oro, a razón de veinticinco a treinta sólidos por hombre, como sustitutivo del deber que tenían de proporcionar soldados al ejército entre sus colonos¹⁵⁹.

c) Consulado:

¹⁵⁷Vid. *infra* pp. 107 ss.

¹⁵⁸ A estos efectos, los senadores estaban obligados a hacer una declaración de sus bienes. Este impuesto, establecido por Constantino, les obligaba a pagar una importante suma de oro según su fortuna disponiéndose además que aquellos que no tuviesen bienes y escapasen del mismo por esta causa quedarían sometidos a otra tasa llamada *septem solidorum*. Ahora bien, debemos advertir que estos impuestos especiales que gravaban a los senadores no figuran en el Código de Justiniano. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, II, *op. cit.*, pp. 215 ss.; BARNISH S.J.B., *A note on the collatio glebalis*, *Historia*, 38.2, Wiesbaden-Stuttgart, 1989, pp. 254 ss.; CARLÀ F., *Tassazione sociale ed aristocrazia senatoria: la gleba senatus*, en AA.VV., *Droit, religion et société dans le Code Théodosien* (dir. J-J. Aubert; P. Blanchard), Genève, 2009, pp. 179 ss.

¹⁵⁹ BLANCH NOUGUÉS J. Ma., *Una visión histórica y jurídica sobre el ejército romano*, en *Anuario jurídico y económico escorialense*, Madrid, 2011, p. 43, nt. 61.

Esta institución pierde casi toda su importancia política en época imperial¹⁶⁰, pero no obstante se mantiene como una magistratura honorífica, anual y epónima (CTh. 8.11.1)¹⁶¹ cuyos titulares eran elegidos por el emperador entre miembros de su familia o de su entorno social (Nov. 105.1: <<*qui, a nobis per annum eligitur consul*>>)¹⁶², llegando incluso el mismo emperador a asumir dicha

¹⁶⁰Sin embargo, al comienzo del reinado de Constantino, el consulado era aún el escalafón más alto dentro de la jerarquía de los honores (CTh. 6.6.1: <<*universa culmina dignitatum... decernimus*>>).

La dignidad del consulado desaparece en época de León VI “el Filósofo” (866-912): en la Constitución 94 de dicho emperador (<<*legis, quae de consulatu agit, abrogatio*>>) se dice: “... mas ahora, habiendo el curso del tiempo, que todo lo remueve, transformado también esta magnificencia consular de su primitiva gloria y amplitud en una especie abyecta...”.

¹⁶¹Señalamos a este respecto que en CTh. 1.1.1 (a. 322) el emperador Constantino estableció que desde ese momento si los edictos o constituciones son redactados sin indicación de la fecha y del cónsul correspondiente carecerán de autoridad.

¹⁶²SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, op. cit., pp. 60 ss.

Cuando los cónsules eran nombrados se comunicaba esta noticia en las provincias como si se tratase de un acontecimiento importante. Precisamente, en relación con este tema, podemos referir ciertos casos de corruptela que cometían aquellos funcionarios encargados de dar “buenas noticias” (*nuntii publicae laetitiae*) como podían ser la comunicación de una victoria militar o la entrada en el cargo de los nuevos cónsules. En estos casos dichos mensajeros solían obtener además de una moderada retribución – que estaba permitida - una propina adicional (*sportulae*). El emperador Valentiniano I y sus sucesores impusieron elevadas multas para estos funcionarios buscando con ello evitar que con ocasión de una *publica laetitia*, “*turpi colludio quaeratur ex miseris pretium gaudiorum*”, es decir, que “los anunciadores sean ávidos de dinero”. Esta problemática es tratada en CTh. 8.11 (1-5): concretamente en CTh. 8.11.4 (a. 364) = C. J.

magistratura. No obstante, les quedó a los cónsules algunas atribuciones en materia de jurisdicción voluntaria, como es el caso de las manumisiones¹⁶³, y algunos privilegios honoríficos como el de llevar una vestimenta particular llamada *trabea* con los borceguíes dorados (CTh. 8.11.4)¹⁶⁴.

12.63(64).1 se establece que los que anuncian prosperidades “como si cesan las guerras, si se obtienen victorias..., lo anuncien y comuniquen sin inmoderada retribución. Mandamos que el portador sea muy íntegro; prohibimos que los anunciadores sean ávidos de dinero; determinamos que los gobernadores sean solícitos, a fin de que por vergonzoso fraude no se exija a los pobres el precio de las alegrías”. Se añade en dicha constitución que si se viola esta disposición se castigará al que la hubiese recibido con la pérdida de su reputación y de su fortuna, y se aplica la misma pena al que hubiese pagado al funcionario, y además el *officium* <del funcionario> será castigado con treinta libras de oro; también en C. J. 12.63(64).2 (a. 530) -epítome de la constitución griega de Justiniano tomado de los Basílicos- se establece que “por cada provincia se paguen solamente seis sólidos por la notificación de sacras letras o de constituciones generales o de públicos conmonitorios o de erección de estatuas, y que restituya el cuádruplo el que hubiere recibido más; debiendo prohibir esto el gobernador provincial, el obispo, los principales de la ciudad y todo oficial civil y público”. En caso de que no lo hagan: “el obispo incurre en la indignación del príncipe, el gobernador será privado de la magistratura y relegado habiéndosele confiscado los bienes, y los oficiales también incurren en responsabilidad”.

MAZZARINO S., <<Annunci>> e <<publica laetitia>>: l'iscrizione di Fausto e altri testi, en *Antico tardoantico ed èra costantiniana*, vol. I, Bari, 1973, pp. 229 ss.; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden, 1981, p. 129.

¹⁶³ FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Jurisdicción voluntaria en Derecho Romano*, 1986, Madrid, pp. 59 ss.

d) Patricios:

El patriciado era en época imperial más un título honorífico de nobleza que una dignidad con funciones; el emperador Zenón nos dice que es una especie de consulado honorario (C. J. 12.3.3.1: <<*Honorarii consulatus insignibus decorantur*>>) otorgado a los senadores que habían desempeñado funciones como las de cónsul, prefecto del pretorio, *magister officiorum* o *magister militum*. En el rango de los honores se situaban después de los cónsules pero precedían a los prefectos del pretorio y gozaban de ciertos privilegios¹⁶⁵.

¹⁶⁴Calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajustaba por medio de cordones.

¹⁶⁵Por ejemplo, en época de Justiniano el desempeño de una *dignitas* liberaba de la patria potestad al *filiusfamilias* como resulta de C. J. 12.3.5 (a. 531-533) en donde se dispone que los que hubieren sido elevados por el emperador a la dignidad de patricios debían quedar liberados de la patria potestad. Esta constitución se vio refrendada posteriormente por Nov. 81 (a. 539) en la que se establecía que el nombramiento de cónsul, prefecto o *magister militum* determinaba también la extinción de la *patria potestas* de igual forma que les libraba de la curia. Dicha Novela fue recogida en el *Prochiron* de Basilio (26.3) y en la *Eisagoge* de Focio (31.7): <<si el que está bajo potestad se convierte en patricio, queda libre de la patria potestad en el mismo momento en que recibe el título de patricio>>. Justiniano compara la situación de estas dignidades con la del esclavo que sabiéndolo su dueño alcanza un puesto en la milicia o una dignidad (C. J. 12.33(34).6, a. 529; C. J. 12.33(34).7, a. 531), el cual obtiene la ingenuidad por el imperio de su cargo y no por un acto de manumisión. Así, nos dice Justiniano en Nov. 81 *praef.*, refiriéndose a estos altos funcionarios:

e) Pretores:

Eran nombrados en esta época por el Senado dentro de los miembros del orden senatorial¹⁶⁶ y se encargaban principalmente de la organización (*editio*) de los juegos públicos¹⁶⁷, si bien

<<¿cómo no sería justo que el que merece tan altas credenciales no se libre de la potestad paterna?>>; <<hemos juzgado indigno que el que es juez de tantas cosas y manda a tantos permanezca bajo la potestad de otros>> (Nov. 81.1). Igualmente en fuentes bizantinas como *Prochiron* (26.8), *Eisagoge* (31.8): <<La prefectura ordinaria, el cargo de estratego y el episcopado liberan de la potestad>>, y el *Hexabiblos* de Harmenopoulos (1.17.11).

No obstante lo anterior, vemos que en I. J. 1.12.4 se afirma que el hecho de haber desempeñado un cargo en la milicia o el haber sido nombrado senador o cónsul no conllevaba para los *filiifamilias* la extinción de la *patria potestas*: <<*militia enim vel consularis dignitas a potestate patris filium non liberat*>>; sin embargo, el texto recuerda que en una constitución del propio Justiniano (<<*ex constitutione nostra*>>) - seguramente, la contenida en C. J. 12.3.5 -, el hijo de familia que hubiese recibido la dignidad del patriciado quedaría liberado del vínculo paterno.

¹⁶⁶GIGLIO S., *Il tardo impero d' Occidente e il suo senato...*, op. cit., pp. 79-80; RUSSO RUGGERI C., *Nota minima sulla competenza del pretore in età giustiniana*, INDEX, 26, Napoli, 1998, pp. 99 ss.

¹⁶⁷Los dos pretores de Roma eran nombrados después de un examen minucioso de su fortuna tras la opinión de los *censuales*; una vez nombrados estaban obligados, si residían en provincias, a acudir a Roma para la celebración de los juegos que estaban a su cargo (CTh. 6.4.8). En el año precedente al ejercicio de su función, el pretor debía presentarse en Roma para remitir a los *censuales* un estado detallado de su fortuna y de su renta, ya que debía asegurar el desarrollo completo de la *editio* y no salir de la ciudad bajo ningún pretexto. En caso de que no acudiese a Roma en el momento de la *editio*, se le

todavía tenían cierta competencia en materia de jurisdicción civil como la de acordar *restitutiones in integrum*, nombrar tutores y curadores, autorizar la venta de bienes de menores en caso de

impondría por el prefecto urbano una multa *-multa frumentaria-* fijada en 50.000 *modii* de trigo que sería entregada a los graneros de la ciudad (CTh. 6.4.1 y 7). Los pretores que por razón de edad o de enfermedad no hubiesen podido acudir a Roma a la celebración de los juegos debían enviar a un procurador con el dinero necesario para saldar los gastos (CTh. 6.4.13.1). Si el pretor designado fallecía antes de la *editio*, la carga material de los juegos incumbía a los herederos del difunto, si bien las hijas participaban en los gastos solamente en proporción a su parte en la herencia (CTh. 6.4.2-3-6-7-17-18). Esta reglamentación promulgada por Constantino cambió en época de Valentiniano I, entre los años 370-372, ya que los pretores eran elegidos con diez años de antelación y el Senado nombraba suplentes para el caso de que los *designati* muriesen en este tiempo, además se estableció también que si el pretor, por causa de ausencia o de negligencia, no organizaba los juegos en las fechas fijadas, sería sancionado con una multa en oro igual a la mitad del gasto que hubiese intentado eludir (CTh. 6.4.6.13 y 20); Sím., *Rel.* 23,2; CTh. 6.4.21. Añade NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, p. 80, a tenor de CTh. 6.4.13.2, que los pretores que hubiesen sido nombrados diez años antes y que no hubiesen tomado posesión de su cargo deberían pagar al prefecto de la ciudad, para la realización de obras públicas, la mitad del dinero que ellos debían haber aportado. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, pp. 55-56; CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 130, 280-281; GIGLIO S., *Il tardo impero e il suo senato...*, *op. cit.*, pp. 78 ss. El *praefectus urbi* era el funcionario competente para investigar la ausencia de los pretores con ocasión de la organización de los juegos y el rechazo de los *editores munerum* de aportar a los *censuales* las sumas fijadas por la ley.

Además, si un senador nombrado para el cargo de pretor vendía sus bienes, la venta sería considerada como fraudulenta y anulada (CTh. 6.2.7) a no ser que la misma hubiese sido aprobada por el gobernador de la provincia. GIGLIO S., *Il "munus" della pretura a Roma e a Costantinopoli nel corso del tardo impero romano*, en *Antiquité Tardive. Revue internationale d'histoire et d'archéologie*, vol. 15, Paris, 2007, pp. 65 ss.

necesidad para pagar las deudas de sus padres o de ellos mismos, etc...¹⁶⁸.

f) Prefectos del pretorio:

El prefecto del pretorio era la más alta dignidad del Imperio, sus orígenes fueron militares y era designado por el emperador. Se configuró como el jefe de la Administración civil y militar adjunto al emperador¹⁶⁹. Entre sus competencias, SERRIGNY¹⁷⁰ destaca las

¹⁶⁸ Justiniano establece en Nov. 13 (a. 535) un nuevo régimen relativo a los *praetores populi* (<<*De praetoribus populi*>>).

Debemos advertir que SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, pp. 67-69, situó a dichos pretores antes que a los prefectos del pretorio porque se basó en el orden seguido por los Códigos Teodosiano y de Justiniano y no, obviamente, por la importancia de las funciones desempeñadas por los pretores en esa época. SCARCELLA A. S., *Cth. 12.1.74: riflessioni su pretura e tribunato della plebe nel tardo impero romano*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 14, Madrid, 2010.

¹⁶⁹ A partir de Constantino los prefectos del pretorio aparecen como los jefes de las prefecturas en las que se subdividía el Imperio, englobando cada una de ellas a las respectivas diócesis y provincias. El número de las prefecturas quedó fijado definitivamente en cuatro en época de Teodosio I (Italia, Galia, Iliria, Oriente).

Véase sobre la figura del *praefectus praetorio*: MIGL J., *Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie*, Frankfurt am Main, 1994; STEIN E., *Untersuchungen über das officium der prätorianerpräfektur seit*

siguientes: la publicación de las leyes imperiales en las provincias, el aprovisionamiento de víveres al ejército, la vigilancia de la elaboración del censo, el reclutamiento militar, la recaudación de impuestos¹⁷¹, la vigilancia en materia de

Diokletian, Amsterdam, 1962; NERI V., *Le prefetture del pretorio in Occidente nel periodo 346-350 d. C.*, en *Rivista storica dell'Antichità* (RSA), 4, Bologna 1974, pp. 89 ss.; GRELLI F., *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, en *INDEX*, 15, Napoli, 1987, pp. 63 ss.; DELMAIRE R., *Les préfets du prétoire d'Italie de 410 à 415*, Latomus, 47, Bruxelles, 1988, pp. 423 ss.; PORENA P., *Le origine della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003; SPADONI M. C., *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari, 2004; VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público...*, *op. cit.*, pp. 186 ss.

¹⁷⁰SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, *op. cit.*, I, pp. 73 ss.

¹⁷¹Los impuestos eran pagados cada cuatro meses, y los prefectos debían en este tiempo verificar los estados cuatrimensuales (*breves quadrimestru*) a fin de reconocer la situación de los cobros y prevenir los fraudes de los recaudadores (CTh. 11.25.1). Todos los años, en los meses de julio o agosto, el prefecto del pretorio determinaba, según las instrucciones recibidas del emperador, el contingente que cada provincia debía pagar, bien en dinero o en especie. Estas disposiciones eran enviadas al comienzo de cada *indictio* (año financiero, que comenzaba el 1 de septiembre) a los gobernadores provinciales que estaban encargados de publicarlas. Dichos gobernadores debían transmitir a las ciudades, en septiembre u octubre, los contingentes que debían recaudarse, estableciéndose en Nov. 128.1 (a. 545) que si los prefectos del pretorio no los hubiesen enviado dentro del tiempo fijado en estas disposiciones, serían castigados con la pena de 30 libras de oro, y los recaudadores de los tributos de cada provincia con 25 libras de oro; y además, si el gobernador provincial no hubiese publicado dichas disposiciones particulares sería condenado a la pena de 10 libras de oro y se le privaría del cargo; asimismo, sus oficiales serán sancionados con 5 libras de oro (*vid.* C. J. 10.16.13, a. 496).

Por último, en ningún caso los prefectos podían establecer impuestos ordinarios o extraordinarios sin la autorización del emperador (CTh. 11.6.1). *Vid.* C. J. 4.62.1, D. 39.4.10; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A.,

espectáculos, así como también de las minas, de los trabajos públicos, de las vías públicas, y de la navegación fluvial y marítima; asimismo conocían de las apelaciones presentadas frente a las sentencias dictadas por los gobernadores provinciales.

Los prefectos del pretorio tenían bajo su autoridad y control a los vicarios (*vicarii*), que gobernaban cada diócesis¹⁷², y a los gobernadores provinciales: eran los jueces encargados de conocer las infracciones y los delitos cometidos por los gobernadores y en general por el personal destinado en las oficinas de estos últimos; además tenían competencia para infligir multas no superiores a 50 libras de oro como se recoge en C. J. 1.54.4 (a. 380)¹⁷³.

lus fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano, en IURA, 58, Napoli, 2010, pp. 17-18, 27. Véase también, BLANCH NOUGUÉS Juan M., *Principios básicos de justicia tributaria en la fiscalidad romana*, en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 48, n. 247, Madrid, 1998, pp. 53 ss.

¹⁷² La diócesis se configuraba como una unidad administrativa que agrupaba a varias provincias; así en Occidente había un vicario en las diócesis de Italia, de Iliria Occidental, de África, de España, de la Galia, y de Bretaña. En Oriente existió un vicario en las diócesis respectivas de Asia, del Ponto, de Tracia, de Macedonia, de Dacia, y de Egipto. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, p. 126.

¹⁷³ Los prefectos del pretorio contaban con asesores que les ayudaban en sus funciones judiciales (*consilarii*): C. J. 1.51 (<<*De adsectoribus, et domesticis, et cancellariis iudicum*>>). Recordamos que los juristas Paulo y Ulpiano fueron asesores de Papiniano cuando

Los prefectos del pretorio elegían a los *advocati fisci* encargados de la defensa de los intereses del Fisco en el ámbito de la respectiva prefectura, así como también de las causas liberales en las que intervenía el Fisco y en los procedimientos de reclamación de *bona caduca*, *bona vacantia* o de bienes pertenecientes a la *res privata* del emperador¹⁷⁴.

g) *Praepositus sacri cubiculi*:

Funcionario de la Corte, con el rango de ilustre, era el responsable de todo lo referente al servicio de vestuario, cocina y residencia del emperador (C. J. 12.5 <<*De praepositus sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum*>>)¹⁷⁵. El

este último desempeñó la prefectura del pretorio. Sobre la carrera administrativa de Papiniano: MAGIONCALDA A., *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 30. 2, Genova, 2000, pp. 451 ss.

¹⁷⁴ La elección de los *advocati fisci* en las provincias correspondía a partir de Constantino a los vicarios y a los gobernadores provinciales. Sobre el nombramiento, número, duración en el cargo, competencias y remuneración del *advocatus fisci*, véase recientemente, AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci en Derecho Romano*, Madrid, 2010.

¹⁷⁵ Respecto a la organización administrativa en el palacio imperial (*magistri militum praesentales*; *praepositus sacri cubiculi*; *magister officiorum*; *quaestor sacri palatii*; *comes sacrarum largitionum*; *comes rerum privatarum*; *comites domesticorum*; *primicerius sacri cubiculi*; *castrensis sacri palatii*; *primicerius notariorum*; *magistri scriniorum*)

praepositus sacri cubiculi tenía bajo sus órdenes a los siguientes empleados: el *primicerius sacri cubiculi* (a la cabeza de los *cubicularii* que servían al emperador en sus aposentos), el *comes castrensis* (encargado de supervisar a los que trabajaban en las cocinas, preparaban los viajes del emperador y se encargaban de la iluminación del palacio), el *comes sacrae vestis* (encargado-jefe del guardarropa imperial: C Th. 11.18.1)¹⁷⁶, los *chartularii cubiculi* (secretarios particulares del emperador), los *silentiarii* (encargados de que no hubiese ruidos en Palacio), y el *comes domorum*, administrador de los palacios (*domus divinae*)¹⁷⁷ en los que se alojaban los emperadores (C Th. 1.34.1, C. J. 3.26.11,

señala NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, p. 43, que "existe en su conjunto una articulación horizontal de instancias colocadas una junto a la otra. Hay una subordinación jerárquica sólo en la sujeción de los *scrinia* <oficinas> al *magister officiorum* y en la relación *castrensis-praepositus sacri cubiculi* en la época de la redacción de la *Notitia dignitatum*".

¹⁷⁶ DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV au V siècle*, Paris, 1989, pp. 464 ss.

¹⁷⁷ Sobre los palacios imperiales (*domus divinae*) puede consultarse la siguiente bibliografía: KAPLAN M., *Les propriétés de la couronne et de l'Église dans l'empire byzantin (V-VI siècles)*, Paris, 1976; FORLIN PATRUCCO M., *Domus divina per Cappadociam*, en *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 100, Torino, 1972, pp. 328-333; MIGLIARDI ZINGALE L., *Osservazioni sulla domus divina di Theodora*, en *Annali Fac. giuris. di Genova* 20, 1984-1985, pp. 142-149; FEISSEL D., *Magnus, Mégas et les curateurs des <<maison divines>> de Justin II a Maurice*, en *Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance (TM)* 9, Paris, 1985, pp. 465 ss.; KAPLAN M., *Novelle de Tibère II sur les <<maisons divines>>*, en *Travaux et Mémoires* 9, *op. cit.*, 1985, pp. 237 ss.

Nov. 30.7). La mayor parte de estos funcionarios tenían la condición de eunucos¹⁷⁸.

¹⁷⁸SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, pp. 82-84; DUNLAP A., *The office of the Grand Chamberlain in the Later Roman and Byzantine Empires*, New York, 1924; EBERSOLT J., *Sur les fonctions et les dignités du vestiarius byzantin*, en *Mélanges Charles Diehl*, 1, Paris, 1930, pp. 81-89; GUILLAND R., *Les Eunukes dans l'Empire Byzantin: Étude de titulature et de prosopographie*, en *Revue études byzantines* (Et. Byz.), vol. 1, Paris, 1943, pp. 197-238; ID., *Fonctions et dignités des eunuques*, en *Revue études byzantines* (Et. Byz.), vol. 2, Paris, 1944, pp. 185 ss.; MONKS G. R., *The Administration of the Privy Purse. An Inquiry into Official Corruption and the Fall of the Roman Empire*, en *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, vol. 32, n. 4, Cambridge (MA), 1957, pp. 748 ss.; HOPKINS K., *Eunuchs in Politics in the Later Roman Empire*, en *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, 1963, pp. 62 ss.; COSTA E. A., *The office of the Castrensis sacri palatii in the fourth Century*, en *Byzantion. Revue internationale des études byzantines*, 42, Bruxelles, 1972, pp. 358-387; SANTOS YANGUAS N., *Los eunucos en la administración romana del Bajo Imperio, según Amiano Marcelino*, en *Revista internacional de sociología*, 24, Madrid, 1977, pp. 541 ss.; DE BONFILS G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981; VERA D., *Alcune note sul Quaestor Sacri Palatii*, en *Studi Tardoantichi* I, Messina, 1986, pp. 27 ss.; GREATREX G.- BARDILL J., *Antiochus the Praepositus. A Persian eunuch at the court of Theodosius II*, en *Dumbarton Oaks Papers*, 50, Washington, 1996, pp. 171 ss.; ACERBI S., *La figura del "silentarius" en la corte bizantina*, en *Ilustrada. Revista de ciencias de las religiones*, n. 19, Madrid, 2007, pp. 209 ss.; SCHOLTEN H., *Der Eunuch in kaisernähe: zur politischen und sozialen bedeutung des "praepositus sacri cubiculi" im 4 und 5. Jahrhundert n. Chr.*, Frankfurt am Main, 1995; TOUGHER S., *The Eunuch in Byzantine History and society*, London, 2008.

SCHOLTEN H., *Der Eunuch in kaisernähe...*, *op. cit.*, pp. 205, 211 ss., nos da la lista completa de los *praepositi sacri cubiculi* conocidos a lo largo de los siglos IV y V, así como también de los eunucos que prestaban sus servicios en el palacio imperial (pp. 207-208) y de los subalternos no eunucos adscritos al *sacrum cubiculum* (pp. 209-210).

h) *Quaestor sacri palatii*:

Funcionario ilustre que formaba parte del *sacrum consistorium* y estaba encargado de preparar los discursos del emperador, las *orationes* dirigidas al Senado, los rescriptos y las leyes (vid. D. 1.13.4, Ulp., *de off. quest.*)¹⁷⁹. Asimismo, quedaba bajo el control del *quaestor* la lista de los funcionarios de grado elevado, pero de categoría inferior al *dux (laterculum minus)*¹⁸⁰.

i) *Magister officiorum*:

Funcionario con importantes atribuciones dentro del palacio imperial¹⁸¹ el cual tenía como principal cometido la presentación

¹⁷⁹Como sabemos, Triboniano desempeñó el cargo de *quaestor sacri palatii* en época de Justiniano.

Véase sobre este funcionario, DE BONFILS G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981; VERA D., *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, en *Hestiasis. Studi Calderone* (Studi tardoantichi, 1), Messina, 1986, pp. 27-53; HARRIES J., *The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II*, en JRS, vol. 78, London, 1988, pp. 148 ss.

¹⁸⁰Vid. *infra* pp. 369-371.

¹⁸¹Sobre el *magister officiorum*: BOAK A. E. R., *The Master of the Offices in the Later Roman and Byzantine Empires*, New York, 1924;

de los senadores al emperador así como de las embajadas de países extranjeros; bajo su dirección y jurisdicción se encontraban casi todos los empleados del palacio (*palatini*)¹⁸² como eran, concretamente, las siete escuelas de los *milites palatini*, la escuela de los *agentes in rebus* (cuerpo de policía secreta)¹⁸³, los

PURPURA G., *Il magister officiorum e la <<schola agentum in rebus>>*, Labeo, 25, Napoli, 1979, pp. 202 ss.; CLAUSS M., *Der magister officiorum in der spätantike (4-6 Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche politik*, München, 1981; GIARDINA A., *Aspetti della burocrazia nel Basso Impero*, Roma, 1977; CECCONI G. A., *I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo)*, en FIRPO G., ZECCHINI G. (eds.), *Magister. Aspetti culturali e istituzionali*, en Atti del Convegno internazionale, Chieti, 1997 (Torino 1999), pp. 73 ss.; AIELLO V., *I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana: l'origine del magister officiorum*, en Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale, Napoli, 2001, pp. 137 ss.

¹⁸²Casiod. (Var., 6.69): <<ad eum nimirum palatii pertinet disciplina; ipse insolentium scholarum mores procellosos moderationis suae terminis prospere disserenat>>. Vid., C. J. 12.19.12 pr. (Imp. Anastasio).

¹⁸³Un pasaje de Aurelio Víctor (Caes., 39,44) permite pensar que fue Diocleciano quien tomó la iniciativa de organizar el cuerpo de los *agentes in rebus* ocupando estos el lugar de los suprimidos *frumentarii*. Los *agentes in rebus* cumplían muy diferentes funciones: se encargaban de algunos servicios administrativos en Palacio, eran portadores de despachos oficiales, realizaban misiones en las provincias, vigilaban la gestión pública de los gobernadores provinciales y de otros funcionarios e inspeccionaban el buen funcionamiento del *cursus publicus*. Los *agentes in rebus* eran también los "mensajeros" del emperador en las provincias y le traían los documentos públicos y las cartas de los funcionarios: en CTh. 11.16.6 (a. 395)= C. J. 12.22(23).4 se dispone que "los *agentes in rebus* enviados a provincias sólo se les debe encomendar el cuidado de inspeccionar las autorizaciones para correos (*inspiciendarum evectionum*), de forma que no tengan nada en común con los gobernadores ni con los provinciales. Y no deberán vejar las naves con ilícita concusión, ni recibir por vía de litigio libelos, o

atestados, o contestaciones, o meter a alguien en la cárcel, sino limitarse a cuidar solamente el *cursus*``.

Asimismo, de la escuela de los *agentes in rebus* salían los *curiosi* (*curagendarii*, *exploratores*, investigadores, espías) que eran agentes enviados a las provincias para vigilar a la propia policía y a los funcionarios: los *agentes in rebus* estaban especialmente sujetos al deber de información hacia sus superiores; en este sentido en CTh. 6.29.4 (a. 359) se fija que los *curiosi* debían comunicar al emperador todo lo que sucede y que nada deben ocultar ``*ut nihil vestri principis ex his, quae geri in re publica videritis, notitiae subtrahatis*``.

Son numerosas las fuentes que castigan los abusos de poder de los *agentes in rebus* sobre todo en materia de encarcelamientos arbitrarios sin tener en cuenta la competencia respectiva de los jueces: así en CTh. 6.29.1 (a. 355)= C. J. 12.22(23).1 se dice que ``los *curiosi* y los *stationarii*, y cualesquiera que desempeñan este cargo, tengan presente que deben denunciar los crímenes a los jueces, y que a ellos les incumbe la necesidad de la prueba, no sin responsabilidad personal, si constare que ellos urdieron calumnias a inocentes. Cese, por lo tanto, la mala costumbre por la cual metían a algunos en la cárcel`` (<<*cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos immittebant*>>).

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, pp. 89 ss.; ARIAS BONET J. A., Los <<*agentes in rebus*>>: contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio romano, en A.H.D.E., 27-28, Madrid, 1957-1958 p. 198; BLUM W., *Curiosi und Regendarii. Untersuchungen zur Geheimen Staatspolizei der Spätantike*, München, 1969, pp. 9-12; PASCHOUD F., *Fruentarii, agentes in rebus, magistriani, curiosi, veredarii: problèmes de terminologie*, en Bonner Historia-Augusta Colloquium (BHAC), 10, Bonn, 1979/81, pp. 215 ss.; FERNÁNDEZ ROSAENZ A., *Policía y orden interno en Roma* (tesis doctoral en prensa, director: Profesor A. Fernández de Buján), 2003; DI PAOLA L., *Per la storia degli 'occhi del re'. I servizi ispettivi nella Tarda Antichità*, Messina, 2005, p. 97; SHELDON R. M., *Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods, but Verify*, London, 2005; GONZÁLEZ SALINERO R., *Investigadores de la corrupción, corruptos: la degradación moral de los agentes in rebus*, en AA.VV., La corrupción en el mundo romano (Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos), n. 5, Madrid, 2008, pp. 191 ss.; VALLEJO GIRVÉS M., *Algunas particularidades acerca del mal uso del cursus publicus: insignis audacia-contumacia*, en AA.VV., La corrupción en el mundo romano..., op. cit., pp. 165 ss.; LIBERATI A. M.- SILVERIO E., *Servizi segreti in Roma antica. Informazioni e sicurezza dagli initia Urbis all'impero universale*, Roma, 2010.

mentores y los *lampadarii*¹⁸⁴, los *admissionales* (ujieres o introductores de Palacio) y los *invitatores* (encargados de enviar las invitaciones), y los cuatro *scrinia* u oficinas donde se llevaban los asuntos y correspondencia del emperador (*scrinium memoriae*, *scrinium epistolarum*, *scrinium libellorum*, *scrinium dispositionum*). Tenía también bajo su responsabilidad las fábricas de armas y a los trabajadores de las mismas (*fabricenses*)¹⁸⁵, así como la vigilancia del correo y transporte público (*cursus publicus*)¹⁸⁶.

¹⁸⁴Los primeros organizaban los viajes del emperador bajo la dirección del *primicerius mentorum*, y los *lampadarii* eran los encargados de la iluminación del palacio bajo la supervisión del *primicerius lampadariorum*.

¹⁸⁵Las personas empleadas en las fábricas de armas del Estado formaban una corporación (*corpus*) de la que no podían desvincularse ni ellos ni sus hijos. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., pp. 369-371.

¹⁸⁶El *cursus publicus*, como vimos, bajo la dirección del prefecto del pretorio, tenía una gran importancia ya que cumplía la función de asegurar el transporte terrestre y marítimo de funcionarios en servicio y de ciertas mercancías de propiedad estatal, y no podía ser utilizado más que para atender a las necesidades del Estado o del emperador. La organización del *cursus publicus* fue minuciosamente regulada en diversas leyes recogidas en el Código Teodosiano y en el Código de Justiniano.

Podemos señalar que las *stationes*, *mansiones* y *mutationes*, situadas a lo largo de las vías públicas romanas por donde transcurría el *cursus publicus*, podían ser utilizadas por todos los viajeros que debían pagar por sus servicios (manutención, alojamiento, cambio de caballos o de carros ...) salvo los funcionarios que, utilizando el *cursus publicus*, viajaban por razones oficiales así como aquellos otros (por ejemplo, legados extranjeros) que viajasen con algún encargo oficial (CORSI C.,

Stazioni stradali e cursus publicus. Note di tipologie dell' insediamento lungo la viabilità romana, en Orizzonti, 1, 2000, pp. 234 ss.). En relación con el *cursus publicus*, se producían frecuentes abusos por parte de funcionarios y altas personalidades que sin coste alguno viajaban por asuntos privados utilizando las ventajas de este servicio; por ello, no es de extrañar la preocupación de los emperadores de mejorar el funcionamiento del *cursus publicus* y de acabar con estos fraudes: en CTh. 8.5 (*De curso publico, angariis et parangariis*) se regula este tema y se hace referencia a diversos fraudes cometidos por los funcionarios que estaban encargados de emitir las *evectiones* – documentos (diplomas) oficiales en los que se mencionaba el nombre del viajero, la validez temporal del permiso, si tenía derecho a caballos, manutención, alojamiento y por cuántos días –; como a la venta ilegal de las *evectiones* (en CTh. 8.5.4 se alude a quienes vendan las *evectiones* que hubiesen obtenido del emperador para sí o para su familia. La infracción es calificada de crimen: comprador y vendedor serán relegados a una isla, y la misma pena recaerá sobre los individuos responsables de la inspección del servicio – *agentes in rebus* – “*pro dissimulatione vel negligentia*”); pero, sobre todo se insiste en dicha legislación acerca de la prohibición del uso para fines privados del *cursus publicus* por parte de los funcionarios: así, en CTh. 8.5.39 (a. 382) se prohíbe a aquellos que con anterioridad desempeñaron un alto cargo civil o militar que puedan seguir utilizando posteriormente las ventajas del *cursus publicus* (vid. CTh. 8.5.43; CTh. 8.5.44) y en CTh. 8.5.47 pr. (a. 385) se prohíbe, bajo *capitalis poena*, que se incluyan bienes privados cuando se estén transportando bienes públicos. Además, podemos constatar que el uso privado del *cursus publicus* a quien más perjudicaba era a los ciudadanos residentes cerca de los tramos de las vías en los que existía algún tipo de infraestructura vinculada al *cursus publicus* ya que, en definitiva, mantenían este servicio público como un *munus publicum*.

La facultad de conceder las *evectiones* correspondía al emperador, al prefecto del pretorio (CTh. 8.5.12, 38, 40 = C. J. 12.50.8-9) y al *magister officiorum* como jefe del servicio postal público (C. J. 12.50(51).9), además en C. J. 12.22(23).2.3 (a. 357) se establecía la obligación que tenían los usuarios del *cursus publicus* de mostrar a los gobernadores o a los *curiosi* la *evectio* aunque alegasen que se trasladaban por mandato del emperador a un servicio necesario, y se añade que no prevalezca la contumacia o la dignidad en estos casos. BIANCHINI M., *Otium agere ed evectiones: privilegi degli alti funzionari nel tardo Impero*, en Mélanges Fritz Sturm, Liège, 1999, pp. 41 ss.; VALLEJO GIRVÉS M., *Algunas particularidades acerca del mal uso del cursus publicus: insignis audacia-contumacia*, en AAVV., *La corrupción en el mundo romano...*, op. cit., pp. 166-175.

NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen....*, *op. cit.*, pp. 150 ss., resume las infracciones cometidas en este ámbito por los encargados de este servicio y refiere las leyes del Código Teodosiano dirigidas a castigarlas:

a) Empleo abusivo del servicio postal por personas no autorizadas: CTh. 8.5.8; CTh. 8.5.22; CTh. 8.5.39; CTh. 8.5.41; CTh. 8.5.44; CTh. 8.5.57; CTh. 8.5.63; etc...

b) Cobro en exceso del servicio: CTh. 8.5.2; CTh. 8.5.6; CTh. 8.5.8; CTh. 8.5.30; CTh. 8.5.38; CTh. 8.5.58; etc...

c) Exhibición ilegal de permisos (esta falta era la más frecuente en relación con abusos en el *cursus publicus*): CTh. 8.5.5; CTh. 8.5.9; CTh. 8.5.12; CTh. 8.5.19; CTh. 8.5.40; CTh. 8.5.52; CTh. 8.5.57 etc...

d) Incumplimiento del servicio por parte del personal del *cursus publicus*: CTh. 8.5.23; CTh. 8.5.35; CTh. 8.5.36; CTh. 8.5.60; etc...

e) Faltas de los funcionarios encargados de llevar un control sobre el correo (*curiosi*): CTh. 8.5.4, CTh. 6.29.3-4-5-6, etc...

Sobre el *cursus publicus*: HOLMBERG E., *Zur Geschichte des cursus publicus*, Uppsala, 1933; IMPALLOMENI G., *Una epigrafe concordiese in tema di cursus publicus: in probabile relazione con CTh. 8.5.12*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. V Convegno internazionale*, Perugia, 1983, pp. 329 ss.; PFLAUM H. G., *Essai sur le 'cursus publicus' sous le Haut- Empire Romain*, Paris, 1940; STOFFEL P., *Über die Staatspost, die Ochsenespanne und die requirierten Ochsenespanne. Eine Darstellung des römischen Postwesens auf Grund der Gesetze des Codex Teodosianus und Codex Iustinianus*, Bern, 1994; BLACK E. J., *Cursus publicus. The Infrastructure of the Government in Roman Britain*, BAR 241, Oxford, 1995, pp. 35 ss.; BIANCHINI M., *Otium agere ed evectiones: privilegi degli alti funzionari nel tardo Impero*, *op. cit.*; DI PAOLA L., *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina, 1999; FORMIGONI W., *Codex Theodosianus*, lib. VI, titulus XXIX, *De Curiosis: "Constantius curiosorum isolentiae, ambitioni, avaritiae modum ponit: officium eorum circa cursum publicum et curas agendas instruit"*, en *Ann. Univ. Ferrara*, 13, 1999, pp. 45-61; VALLEJO GIRVÉS M., *Algunas particularidades acerca del mal uso del cursus publicus: insignis audacia-contumacia*, en *AA. VV., La corrupción en el mundo romano...*, *op. cit.*, pp. 165 ss.;

j) *Comes sacrarum largitionum*:

Funcionario palatino, de rango ilustre y miembro del *sacrum consistorium*, el cual era el responsable del Tesoro Imperial¹⁸⁷.

Entre sus competencias destacaban la de organizar los impuestos destinados al Fisco¹⁸⁸, como era el caso de los impuestos

KOLB A., *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin, 2000.

¹⁸⁷DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 25 ss.; ID., *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IVe-Ve s.). Études prosopographiques*, Bruxelles, 1989, pp. 11 ss.

¹⁸⁸Ahora bien, el *comes sacrarum largitionum* no tenía competencia para recaudar efectivamente los impuestos sino que, como ya vimos, eran los prefectos del pretorio los encargados de ordenar a los gobernadores la percepción de los *tituli largitionales*, es decir, los impuestos destinados a hacer posibles las liberalidades del emperador realizadas con ocasión de eventos tales como aniversarios y celebraciones (vid. C. J. 10.23.4, a. 468). No obstante, los palatinos enviados a las provincias por el *comes sacrarum largitionum* tenían entre sus funciones la de controlar las recaudaciones de impuestos y presionar a los gobernadores negligentes en la exacción de los mismos sin que, sin embargo, estuviesen autorizados a su cobro directo (C. J. 1.40.10, a. 401).

Por otro lado, en CTh. 11.7.17 (a. 408) = C. J. 10.23.2, se prohíbe que los palatinos demanden a los propietarios de fincas el pago de deudas al Fisco de tal manera –se añade en dicha constitución– que si el gobernador de la provincia les hubiese permitido a los palatinos que se cuidaran de la pública exacción de aquéllas, deberán pagarle al Fisco –el propio gobernador y los miembros de su *officium* en su conjunto– veinte libras de oro. Sin embargo, esta prohibición hecha al palatino de entrometerse en la percepción de los impuestos no fue del

indirectos o *vectigalia*, el impuesto sobre los comerciantes (*collatio lustralis*)¹⁸⁹, el impuesto sobre las tierras de los senadores (*gleba*), las recaudaciones de oro y plata, los tesoros encontrados en tierras del Fisco, etc...; así como la de dirigir los talleres y corporaciones de obreros que trabajan para el Fisco (trabajadores de los talleres textiles y monetarios, de las minas y canteras ...).

El *comes sacrarum largitionum* tenía un importante plantel de subalternos (*palatini*) que trabajaban bajo sus órdenes tanto en

todo respetada y los mismos procedían a su exacción cometiendo numerosos abusos (Nov. Val. 7.1); esta práctica ilegal fue denunciada por Mayoriano (Nov. Maior. 2.2) recordando también este emperador que la obligación de percibir los impuestos correspondía sólo al gobernador provincial (Nov. Maior. 7.16).

En cualquier caso, los palatinos tuvieron mala reputación durante todo el Bajo Imperio: Valentiniano III habla de *collega furtorum palatinus* (Nov. Val. 1.3) y denuncia su *aviditas*, *cupiditas* y *avaritia* (Nov. Val. 7.2-3) así como la impunidad escandalosa con que ellos actuaban (Nov. Val. 7.1): *“palatinae exactionis... severitatis incurrerit”*; también Boecio (*Cons. phil.* 1.4.13) denunció la rapacidad de los *“palatinae canes”*. Entre los palatinos, los recaudadores, los *oficiales* de los gobernadores y de los prefectos, el contribuyente veía doblar el impuesto que estaba obligado a pagar (Nov. Maior. 2.2). El provincial estaba desarmado contra estos funcionarios corruptos salvo que recurriese a un pleito - si tenía paciencia y sobre todo medios económicos - como fue el caso de unos ciudadanos que Símaco nos refiere litigando después de más de veinte años acerca de las sumas que les reclamaba el *aerarium* (Sím., *rel.*, 30). Por ello Valentiniano III dictó las dos leyes referidas contra aquellos funcionarios corruptos (Nov. Val. 7.1-2). DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 244 ss.

¹⁸⁹BLANCH NOUGUÉS J. M., *Acerca del impuesto de la <<collatio lustralis>>*, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 16, 2011, pp. 1 ss.

las oficinas centrales de Roma¹⁹⁰ y Constantinopla como en las diócesis y en las provincias¹⁹¹.

¹⁹⁰La composición en época de Justiniano del *officium* del *comes sacrarum largitionum* podemos verla en C. J. 12.23(24).7, a cuya cabeza se encontraba el *primicerius totius officii*.

¹⁹¹*Comites largitionum, comites commerciorum, praefecti thesaurorum, comes metallorum, comes et rationalis summarum Aegypti, magistri vel linteae vestis, magistri privatae (domus), procuratores gynaeciorum, procuratores baphiorum, procuratores monetarum, praepositi bastagarum, procuratores linificiorum.*

Sobre el *comes sacrarum largitionum* y sus subordinados: KENT J. P. C., *The Office of the Comes Sacrarum Largitionum*, London, 1955; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 125 ss.; ID., *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IVe-Ve ...)*, *op. cit.*; GARCÍA MORENO L. A., *Una nota sobre la organización de las Sacrae Largitiones: comes/comites thesaurorum*, en Cuadernos de Filología Clásica, vol. 11, 1976, Madrid, pp. 469 ss.

En relación con la administración aduanera y el comercio exterior mencionamos a los *comites commerciorum*, que eran los funcionarios encargados de la vigilancia del comercio en las fronteras bajo las órdenes del *comes sacrarum largitionum* y cuya misión principal era la de controlar el tráfico comercial entre el Imperio y los países vecinos y la de vigilar las mercancías cuya exportación estaba prohibida (*merces illicitae*, como por ejemplo, hierro, bronce, vino, aceite: C. J. 12.44(45).1). En 408/409 se estableció que sólo podía comerciarse con los persas en las ciudades de Nisibin, Callinicum y Artaxata; en caso de violación de esta norma las mercancías y el dinero recibido como precio por la venta de las mismas serían confiscados para las *sacrae largitiones*, además los culpables serían castigados al exilio a perpetuidad y los gobernadores provinciales y su oficio multados con treinta libras de oro (C. J. 4.63.4). DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, p. 285; vid. recientemente, ZAMORA MANZANO J. L., *Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en el Derecho Romano: reglamentación jurídica del portorium, control de mercancías y comiso por fraude fiscal*, Madrid, 2009; ID., *Algunas reflexiones sobre el control de mercancías en el derecho fiscal romano*, en AA. VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, *op. cit.*, pp. 427 ss.

Los *praepositi thesaurorum* (encargados de los depósitos del Fisco que recogían el oro y otros productos preciosos -plata, tejidos,...- de los contribuyentes destinados a las sagradas liberalidades) estaban bajo las órdenes del *comes sacrarum largitionum* (C. J. 10.23.1, a. 383). Aquellos recibían el producto de los *tituli largitionalis* que les eran consignados por los *tabularii* y que debían transmitir al *comitatus*. Los tesoros podían consistir en sumas importantes y los responsables ser tentados a utilizarlos en su provecho durante el tiempo que los tenían en depósito, como ocurrió con *Ursicinus* que fue acusado de haber desviado los fondos de los tesoros de la Galia (Amiano, 15.5.36); además un *praepositus* que ocupaba este cargo durante varios años podía llegar a servirse de esos fondos públicos para operaciones financieras particulares (vid. *infra* nt. 938). Valentiniano I prohibió todo empleo de fondos públicos para fines privados bajo pena de tener que reembolsar el cuádruplo de los mismos (CTh. 10.24.1); esta pena se agravó en el año 381 (CTh. 10.24.2), estableciéndose que el que utilice a título de fianza con promesa de reembolso o para fines privados fondos de las *sacrae largitiones* (<<*privatis commodis ... aut cautionis aut sponsionis fide ut debitor redditurus*>>) será castigado con la deportación y la confiscación de sus bienes, asimismo el *praepositus thesaurorum* que hubiese entregado a un particular oro depositado será castigado con la pena capital. La versión justiniana del Código Teodosiano aporta correcciones a estas dos leyes: en la primera (CTh. 10.24.1= C. J. 10.6.1), si bien la prohibición sigue pesando sobre los *exactores*, *tabularii*, *arcarii* y sobre los *officia rationum*, la nueva redacción omite esta vez a los *praepositi thesaurorum*; en la segunda (CTh. 10.24.2=C. J. 10.6.2) la redacción de la ley fue también modificada ya que permite el uso del oro de las *sacrae largitiones* para fines privados pero siempre que haya una autorización imperial. En todo caso, para evitar los fraudes, los emperadores trataron de acelerar el envío del oro al *comitatus*.

Además, los *praepositi* de los tesoros –como los demás *praepositi* dependientes del *comes sacrarum largitionum*- estaban obligados a presentar fiadores idóneos al asumir su cargo. Y en CTh. 1.32.3 (a. 377) se dice lo siguiente: “aunque convenga entregar las cosas recibidas inmediatamente, sin embargo, en algunos casos, será oportuno hacer las cuentas para el sucesor en el cargo, dentro de los treinta días, en el caso del dinero menor, y dentro de los cuatro meses, las cuentas de las <cosas> que deben estar guardadas en los almacenes”; y –añade la constitución- en caso de que resulte deficit injustificado el *praepositus* no podrá pretender ningún honor o dignidad y será sometido al castigo con varillas hasta la extinción de la deuda; vid. *infra* p. 622. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 269, 272 ss.

k) *Comes rei privatae* o *rerum privatarum*:

Funcionario palatino, de rango ilustre y miembro del consistorio, su función principal era la gestión de los bienes que formaban la *res privata* o *res fiscalis* del emperador, como era el caso de los bienes confiscados (*bona damnatorum*) o de los bienes vacantes y caducos¹⁹². Este funcionario tenía bajo sus órdenes a funcionarios subalternos tanto en las oficinas centrales en Roma¹⁹³ como en las provincias; concretamente, el servicio provincial, bajo las órdenes del *comes rei privatae*, estaba formado a su vez por los *rationales vel procuratores rerum privatarum*, los *praepositi bastagarum rei privatae*, los *praepositi gregum et stabulorum* y los *procuratores saltuum*.

Por último, en CTh. 8.7.14 = C. J. 12.23(24).2 (a. 377) los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano dispusieron que “ningún *thesaurensis* (tesorero) u oficial del *comites thesaurorum* reclame mediante ningún pacto, una vez descubierto como malversador (*eversor*), su propio cargo o pretenda para sí por intriga (*per ambitum*) otra dignidad, o pase a otro cualquier empleo”.

¹⁹²SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, pp. 108-110; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 597 ss.

¹⁹³La composición de las cuatro oficinas centrales aparece en la *Notitia Dignitatum* (Or., XIV; Occ., XII): *scrinium beneficiorum*, *scrinium canonum*, *scrinium securitatum*, *scrinium largitionum privatarum*.

I) *Primicerius notariorum*:

Este funcionario, del orden de los *spectabiles*¹⁹⁴, era el jefe de los *notarii*¹⁹⁵ - especie de secretarios de Estado encargados de las notas (*notae*), actas y deliberaciones del consistorio -. Se ocupaba de llevar el registro (*laterculum maius*) donde eran inscritos todos los funcionarios públicos tanto civiles como militares (*omnis dignitatum et administrationum notitia, tam militarium quam civilium*), así como de todo lo referente a sus cargos, salarios y actas de nombramiento; estaba también encargado de transmitir al Senado los escritos del emperador (CTh. 6.2.14)¹⁹⁶.

II) *Magistri militum*:

¹⁹⁴ Vid. *infra* p. 406.

¹⁹⁵ TEITLER H. C., *Notarii and exceptores. An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A. D.*, Amsterdam, 1985.

¹⁹⁶ Joviano ocupaba esta dignidad cuando se convirtió en emperador en el año 363 (Amiano, 26.6).

Tienen su origen en la reforma de la estructura del ejército romano llevada a cabo por Constantino ocupando el más alto grado dentro de la jerarquía militar y perteneciendo al rango de los ilustres (C. J. 1.29: <<*De officio magistri militum*>>)¹⁹⁷. Dirigían el ejército (generales de las tropas) y ejercían sobre los militares una jurisdicción análoga a la del prefecto del pretorio sobre los funcionarios civiles (C. J. 1.29.1, a. 386-387: <<*Viri illustres comites et magistri peditum et equitum in provinciales nullam penitus habeant potestatem, nec amplissima praefectura in militares viros*>>)¹⁹⁸.

m) Condes de los *protectores domestici*:

¹⁹⁷ Hasta entonces el prefecto del pretorio era el que dirigía el mando militar. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I., pp. 112-115; HOEPFFNER A., *Les magistri militum praesentales au IV^e siècle*, en Byzantion. Revue internationale des études byzantines, Bruxelles, 11, 1936, pp. 483 ss.

¹⁹⁸ El *magister militum* podía conocer de las demandas presentadas por un civil contra un militar demandado (*actor sequitur forum rei*): vid. C. J. 3.13.6 (a. 413). GORIA F., *Giudici civili e Giudici militari nell'età giustiniana*, SDHI, 61, Roma, 1995, pp. 447 ss.; AGUDO RUIZ A., *Nota sobre la jurisdicción militar en C. J. 12.35.18*, RGDR (www.iustel.com), 12, Madrid, 2009.

Los dos condes pertenecían al rango de los ilustres y estaban encargados de dirigir la Guardia de Palacio (*protectores domestici*)¹⁹⁹; asimismo, tenían el privilegio de acercarse a la persona del emperador y de besar su vestimenta de color púrpura (*sacram purpura adorare*) y estaban excusados de todas las cargas sórdidas (C. J. 10.48(47).2). Además, en materia criminal, tenían el privilegio de ser juzgados por el tribunal del prefecto del pretorio (CTh. 7.20.5).

3. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL. UNA ESPECIAL REFERENCIA A CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD.

a) INTRODUCCIÓN.

Respecto de la Administración provincial y municipal partimos también de SERRIGNY que nos hace la siguiente reflexión: “*sous l’empire, le pouvoir descendait de l’empereur aux gouverneurs de provinces, et de ceux-ci aux magistrats municipaux, tandis que sous la*

¹⁹⁹CTh. 6.24.8-9-10. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*,

*république il remontait des citoyens aux magistrats élus par eux ou par le sénat*²⁰⁰.

NOETHLICHHS nos refiere que “la estructura básica de la Administración imperial prácticamente desde la mitad del siglo IV estaba articulada en prefecturas, diócesis y provincias. Junto a ello existen, sin embargo, particulares unidades administrativas las cuales no entran en el sistema y que mantienen fundamentalmente su status particular en virtud de razones históricas. Así se encuentra el ámbito municipal de Roma y Constantinopla, las provincias proconsulares de Asia, África y Achaia (Grecia), así como Egipto (...)”. Este Autor entiende que dentro de este ámbito provincial “no se puede hablar de una construcción administrativa firmemente jerarquizada, es decir, de un sistema de control-vigilancia administrativa lo cual debe ser significativo para la explicación de muchos delitos de los funcionarios”²⁰¹.

Añade NOETHLICHHS que la ordenación jerárquica y la articulación de las unidades administrativas atendiendo a la *Notitia dignitatum* se configuraba de la siguiente forma: *praefecti praetorio* (*Orientis, Illyrici, Italiae, Galliarum*); *praefecti urbis* (*Constantinopolitanae* y *Romae*); *proconsules Asiae, Achaiae, Africae*; *comes Orientis*;

I *op. cit.*, pp. 115 ss.

²⁰⁰SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, p. 137.

praefectus Augustalis (Aegypti); vicarii (Asianae, Ponticae, Thraciarum, Macedoniae, urbis Romae, Italiae, Africae, Hispaniarum, Septem provinciae, Britanniarum); consulares; correctores; praesides.

b) LOS GOBERNADORES PROVINCIALES. PARTICULAR ALUSIÓN A SU RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Al frente de las provincias se encontraban los gobernadores provinciales los cuales son llamados indistintamente en las fuentes *administratores, iudices, rectores* o *praesides*; este último término se aplica genéricamente a todos los gobernadores provinciales como señala Macer en D. 1.18.1 (Mac., 1 de off. praes.): <<*Praesidis nomen generale est. eoque et proconsules, et legati Caesaris, et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur. proconsulis appellatio specialis est*>>²⁰². El gobernador era la más alta

²⁰¹ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 45.

²⁰² El nombre de <<gobernador>> es genérico, y por ello se llama <<gobernadores>> a los procónsules, a los legados del César y a todos los que rigen provincias, aun cuando sean senadores; la denominación de <<procónsul>> es especial`.

autoridad en la provincia después del príncipe y, como recogen las fuentes, era en ella su representante: <<*Praeses provinciae maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem*>> (D. 1.18.4; Ulp., 39 ed.); D. 1.16.8 (Ulp. 39 ed.): <<*et ideo maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem*>>²⁰³.

Entre las atribuciones que desempeñaban los gobernadores provinciales podemos destacar: funciones administrativas -como las relativas a la recaudación de impuestos²⁰⁴, al mantenimiento de la paz y

En época imperial las provincias fueron divididas en tres grupos según su grado de importancia: *maiores*, *mediae* y *minores*. Las primeras eran gobernadas por los procónsules con el rango de *spectabiles*. Las medianas por los *consulares* o *correctores* y las *minores* por simples prefectos (*praefecti* o *praesides*).

²⁰³Sobre el reclutamiento y competencias de los gobernadores provinciales: AUSBÜTTEL F. M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen in spätantiken Italien*, Frankfurt am Main, 1988; CARRIÉ J.-M., *Le gouverneur romain à l'époque tardive: orientations de l'enquête*, en *Antiquité Tardive* (Ant. Tard.) 6, Paris, 1998, pp. 17-30; ROUECHÉ Ch., *The Functions of the Governor in Late Antiquity: Some Observations*, Ant. Tard., 6, 1988, pp. 31-36; CECCONI G. A., *I governatori delle province italiche*, en Ant. Tard. 6, 1988, pp. 149-179; GARRIDO GONZÁLEZ E., *Los gobernadores provinciales en el occidente bajo-imperial*, Madrid, 1987; SLOOTJES D., *The Governor and his Subjects in the Later Roman Empire*, Leiden-Boston, 2006.

²⁰⁴Su principal deber en este ámbito era fijar la base tributaria y llevar a cabo la recaudación de los impuestos. A este respecto Justiniano les encomienda en Nov. 17.1 que “vigilantemente se cobren los tributos fiscales y que no adquieran ningún lucro, ni mayor ni menor, y que no negocien capciosamente contra los súbditos, debiendo conservar ante todo manos limpias para Dios, para nosotros, y para la ley”; y en Nov. 17.7 se dice que los gobernadores “no librarán de la exacción a ninguno de aquellos a quienes se les exigen los tributos fiscales, pero no permitirán tampoco que sufran cosa alguna violenta o

sediciosa los que hacen la exacción, sabiendo que, si hicieren alguna cosa semejante, serán obligados a satisfacerle con lo suyo al Fisco ``.

La percepción de los impuestos, generalmente recaudados por los curiales, era hecha por los gobernadores y su oficio, y más raramente por el vicario. Cada gobernador debía tener en su oficio dos *tabularii* -uno para las cuentas de la prefectura del pretorio (*arca fiscalis*) y otro para las *sacrae largitiones* (CTh. 8.1.12, a. 382 = C. J. 12.49(50).4; C. J. 10.72(70).13, a. 408)-. Valentiniano III exigió además que a la salida de su cargo los *tabularii largitionalium* fuesen enviados al *comes sacrarum largitionum* con los libros de cuentas para controlar de esta forma su actividad (Nov. Val. 7.3).

El nombramiento de los recaudadores de los títulos de liberalidades era competencia del gobernador: Valentiniano I recomendó en CTh. 8.3.1 (a. 364) que los recaudadores (*susceptores*) no fuesen nombrados entre los curiales sino entre los *largitionales* (representantes del *comes sacrarum largitionum* en las ciudades más significativas) y antiguos oficiales provinciales que fuesen idóneos por sus costumbres y fortuna. Los palatinos enviados a las provincias por el *comes sacrarum largitionum* apremiaban a los gobernadores en el nombramiento de los recaudadores y verificaban también dicho nombramiento (C. J. 10.23.3.3, a. 468) siendo el gobernador y su oficio responsables del mismo (C Th. 12.6.1, a. 321: la mala gestión y las malversaciones de los *susceptores* obligaron a Constantino a establecer la responsabilidad del *creator* –gobernador- de estos agentes). Más tarde, Justiniano exigió que cada gobernador prestase una caución ante el prefecto del pretorio, el *comes sacrarum largitionum* y el *comes rei privatae* (Nov. 134.2, simplificada en Nov. 149.1). DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 246 ss.

Las faltas más graves cometidas por los gobernadores provinciales eran las relacionadas con la recaudación de los impuestos: por ejemplo, en CTh. 1.15.17 (Impp. Arcadio y Honorio) se dice que ``el vicario de África, a quien constriñe el cuidado de la recepción y de la remisión de los impuestos, vigile de cerca a los gobernadores provinciales, de modo que indague, con la mayor diligencia, cuánto ha sido entregado a cada uno y en qué meses, y cuánto ha sido remitido; y deberá reclamar contra aquellos cuya desidia fuese descubierta``; en CTh. 1.22.1 se prohíbe al gobernador alardear de un celo excesivo para asegurar el cobro de impuestos: el *iudex* (gobernador provincial) que hubiese ``sacado`` fuera de su casa a una *materfamilias* para el pago de sus contribuciones, teniendo en cuenta que la venta de los bienes de la deudora hubiese permitido el pago de dicha deuda, será castigado con la pena capital ``vel exquisitis ... supliciis``; y en CTh. 12.9.1 se

establece que el gobernador no podía utilizar el producto de los impuestos para otros fines diferentes a los que estaban destinados, y añade que tampoco le estaba permitido realizar préstamos con dichos fondos estando castigada también la mera tentativa por parte del gobernador; si bien, la pena correspondiente no está indicada en la constitución, la doctrina ha supuesto que sería aplicada posiblemente la deportación. También se castigan las infracciones de los cobradores (*exactores*) de las oficinas del gobernador (*ducenarii*, *centenarii*, *sexagenarii*): en CTh. 11.7.1 (a. 315?) Constantino dispone que la *exactio* debe ser hecha *sine concussione*; si alguien prueba que ha sido objeto de una exacción injusta o que ha sido inquietado por error “*severa in exactores... proferatur*”. Además, se dispone en CTh. 11.8.2 (a. 400) = C. J. 10.20.1 que lo cobrado ilícitamente sea devuelto por el duplo a los habitantes de las provincias “mas si alguno de los cobradores se hubiere habituado al crimen de la exacción indebida (*superexactionis crimen*), se ha de rechazar e impedir su codicia con la pena capital, si perseverase en los mismos delitos”; y en CTh. 1.16.11 que “los gobernadores provinciales, poco a poco, y según el uso, recorran todas las villas y lugares, y examine, cada uno, atentamente, cuanto cobró insolente o ambiciosamente cada perceptor de tributos; aquél pues de quien nos llegare alguna queja, será condenado a la última pena”; igualmente, CTh. 12.6.22 (a. 366) = C. J. 10.72(70).4.2 dispone que “no se tengan cobradores (*exactores*) perpetuos con prolongada facultad de vejar a los provincianos, como dominándolos con sus concusiones, sino que sean cambiados cada año por diligencia del gobernador provincial, a no ser que la costumbre de la ciudad o el orden de los decuriones los compela a serlo durante un bienio”; Nov. 8.10.2, Nov. 28.3. Véase *infra* nt. 856.

En este sentido, NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, p. 157, después de analizar las fuentes relativas a esta materia, concluye señalando que los gobernadores provinciales y sus oficiales son los funcionarios que son citados un mayor número de veces en las leyes destinadas a castigar estos fraudes: 50 veces los gobernadores provinciales y sus oficinas, frente a 21 los *exactores*, 18 los *susceptores*, 9 los *numerarii*, 7 los *tabularii*, 7 los *milites*, 6 los *palatini*, los *discussores*, y los *compulsosores*, y por último, 4 veces los *rationales*. Ante estos hechos los emperadores tomaron medidas penales y disciplinarias: multas en dinero y patrimoniales, proscripciones, deportaciones, penas relativas a la carrera funcional, limitaciones en la duración del servicio, destituciones, degradaciones, etc..., e incluso frecuentemente la pena de muerte. Véase SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, I, pp. 135-136; DUPONT CL., *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin, Les infractions*, Lille, 1953, pp. 87 ss.; PIGANOL A.,

L'empire chrétien, Paris, 1972, pp. 376-377; BRANDES W., *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9- Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2002.

Siguiendo a NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, pp. 116 ss., podemos referir diferentes infracciones de los funcionarios en materia tributaria:

a) Reclamaciones ilícitas de cobro de impuestos a los particulares: se pueden distinguir dentro de este apartado dos tipos de reclamaciones, aquéllas que son en sí mismas ilícitas o ilegales y, por otro lado, aquéllas que sobrepasan lo que es lícito: CTh. 8.1.6; CTh. 7.4.12; CTh. 8.1.10; CTh. 6.31.1; CTh. 7.13.7; CTh. 7.13.9; CTh. 7.4.18; CTh. 7.4.22; CTh. 8.10.3; CTh. 7.4.30; CTh. 8.10.4; etc ...

b) Reclamaciones ilegales a funcionarios o ex funcionarios que gozaban de privilegios o exenciones en materia de impuestos: CTh. 6.35.1; CTh. 6.35.6; CTh. 6.35.10; CTh. 6.35.11; CTh. 7.20.13; CTh. 6.23.3; CTh. 6.23.4; etc ...

c) Negativa de los funcionarios de Hacienda a recibir el pago de los tributos o a expedir los correspondientes recibos (justificantes de pago) a los contribuyentes: a este respecto existía un registro público (*“ratiocinia publica”*) que ayudaba a los contribuyentes en caso de pérdida del justificante de pago, pero –NOETHLICH, *op. cit.*, p. 135– “en una sociedad en la que la escritura estaba extendida de un modo desigual, los funcionarios tenían aquí espacio abonado para ejercer la coacción y el engaño sobre los contribuyentes”: CTh. 5.15.20; CTh. 12.6.2; CTh. 11.26.2; CTh. 11.1.32; CTh. 12.1.185 (a. 429) = C. J. 10.22.2: “No sea lícito que por otro juez (gobernador) se vuelva a exigir el recibo que una vez se dio respecto al pago de las cargas”. Por lo que el prefecto del pretorio “prohibirá en lo sucesivo que habiéndose observado la forma de un muy conveniente y justo cobro sean constreñidos a la discusión de la carga transigida los que apareció claro que se regocijaban por haber obtenido la tranquilidad de un recibo”.

d) Actos violentos en el cobro de impuestos, por ejemplo, ante la falta de pago o su realización fuera de tiempo: CTh. 10.4.1; CTh. 11.7.3; CTh. 12.1.128; CTh. 7.4.35; y en el ámbito municipal: CTh. 11.7.1; CTh. 12.1.117.

e) Concesión ilícita de beneficios a contribuyentes: se estudia el caso de funcionarios de Hacienda que benefician a contribuyentes en perjuicio del Estado o de otras personas (CTh. 12.1.1; CTh. 12.16.10; CTh. 11.16.11; CTh. 11.28.3; etc...), así como la acogida de contribuyentes bajo el *“patrocinium”* de una persona influyente

(funcionarios civiles y militares o grandes propietarios de tierras). La entrada bajo este *patrocinium* les liberaba de sus obligaciones tributarias y a cambio debían darle a su “protector” una compensación en natura o en dinero para protegerlos de los *exactores* fiscales (CTh. 11.24.1; CTh. 11.24.4-5, y en el ámbito municipal: CTh.12.1.179; CTh. 13.10.8; CTh. 12.19.3).

Respecto al *patrocinium* podemos referir una ley de Constancio (CTh. 11.24.1), del año 360, que nos dice que en aquella época se habían establecido relaciones de patrocinio entre colonos y altos cargos como los *duces*, liberando a los colonos del *consortium vici* (comunidad vecinal), de tal manera que a cambio de protegerles de los *exactores* del Fisco tenían que pagar una tasa al patrono. La ley dispone que fuesen entregadas las sumas debidas al Fisco y que el vínculo de patrocinio fuese disuelto. Por otro lado, una ley de Valente del 370 ordenó el “*supplicium*” para los ciudadanos que hubiesen buscado el *patrocinium* y una multa de 25 libras de oro para el que lo hubiese concedido (CTh. 11.24.2). Y una ley del 395 recogida en CTh.11.24.3 prueba que el sistema de *patrocinium* continuaba pese a las sanciones previstas y que incluso oficiales del *comes* y de otros funcionarios otorgaban su *patrocinium* a los ciudadanos para sustraerlos de los *munera publica*. Poco después, Arcadio se vió obligado a publicar una ley que aumentaba a cuarenta libras de oro la multa prescrita para los que ofrecían el patrocinio, y menciona como eventuales transgresores a los más altos funcionarios civiles y militares (*magistri utriusque militiae, comites, procónsules, vicarii, praefecti augustales, tribuni*).

f) Inactividad de los funcionarios de Hacienda en el cumplimiento de sus obligaciones: CTh. 8.1.9; CTh. 11.7.11; CTh. 14.3.12; CTh. 10.20.13; CTh. 14.4.10; etc ...

g) Malversación y hurto de los recursos financieros recaudados (vid. sobre *peculatus*, nt. 938): CTh. 12.6.1; CTh.12.6.3; CTh. 12.6.11; CTh. 10.24.3; CTh. 9.28.1; CTh.11.14.3, CTh. 1.5.12; CTh. 10.1.16; CTh. 7.4.28; CTh. 8.8.9; Nov. Val. 28; etc ...

h) Infracciones en relación con los objetivos perseguidos y la distribución de los recursos financieros: CTh. 1.5.5; CTh. 8.4.6; CTh. 7.4.11; CTh. 10.24.1; CTh. 15.7.6; CTh.8.1.12; CTh. 11.14.2; CTh. 13.5.36; etc ...

el orden social²⁰⁵, o a la ejecución de las obras públicas²⁰⁶ -; funciones judiciales²⁰⁷; funciones civiles y de jurisdicción voluntaria (adopciones,

²⁰⁵ Como la alta inspección en materia de juegos y espectáculos públicos.

²⁰⁶ D. 1.16.7.1 (Ulp., 2 *de off. proc.*): <si el procónsul hubiese llegado a alguna ciudad ...> debe recorrer los templos y las obras públicas con el fin de inspeccionar si se hallan en buen estado o si necesitan alguna reparación; y si existen algunas obras comenzadas debe procurar que se terminen, en la medida de las posibilidades de la ciudad que sea ...

Recogemos también diversas constituciones imperiales que contienen normas relativas a la responsabilidad de los gobernadores provinciales en esta materia: en C. J. 8.12 (13).1 pr. (a. 485-486?) se prohíbe a los gobernadores provinciales y a otros funcionarios como el prefecto Augustal o el conde de Oriente, así como a sus alguaciles, que en materia de obras públicas se abstengan de reivindicar para sí una vigésima cuarta parte por cada sólido que se haya de gastar, o procurándose un lucro cualquiera, nada común con tales cosas, por cuanto se hallan encomendadas a los padres de las ciudades y al cuidado de los mismos. Y en C. J. 8.12 (13).1.2, se añade que: <<pero si el gobernador provincial o sus oficiales hubieren infringido esta ley, examinando contra lo vedado las rentas, o las obras públicas, o reivindicando una vigésima cuarta parte ..., no duden los cinco primeros oficiales que condenados a destierro perpetuo habrán de ser reivindicados sus bienes para la ciudad que hubiesen lesionado, y el gobernador de la provincia será castigado con una multa de 50 libras de oro, amenazando esta última pena a los gobernadores aunque tuviesen el rango de ilustres y a sus oficiales.

²⁰⁷ En las fuentes, los gobernadores provinciales son llamados indistintamente *administratores* o *iudices* ya que en época imperial eran los jueces ordinarios en las provincias. Ahora bien, Juliano en una constitución del año 362 (CTh. 1.16.8) concedió a los gobernadores provinciales la facultad de nombrar jueces pedáneos para que juzgasen en los negocios de menor cuantía. A este respecto, se dispone en D. 48.19.38.10 (Paul. 5 *sent.*) que `` los jueces pedáneos, si se dijera que fueron corrompidos por dinero, o son removidos las más de las veces de la curia por el gobernador provincial, o son enviados al destierro, o relegados temporalmente``. SCHIAVO S., *I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l'Apostata*, en *Per il 70*

compleanno di Scritti Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà, Milano, 2009, pp. 408 ss.

La apelación contra las sentencias de los jueces ordinarios se hacía ante el superior jerárquico (el procónsul, el conde de la provincia, el vicario, el prefecto del pretorio, o el prefecto de Roma o de Constantinopla), y a su vez se podían apelar las decisiones de los anteriores al emperador, salvo las de los prefectos del pretorio: así, en un edicto de Constantino contenido en CTh. 1.5.1 se dispone que si “los provinciales habiendo apelado ante sus propios gobernadores no les hubieren hecho caso, apelen ante tu gravedad <prefecto del pretorio>, y que si constare que aquello ocurrió por culpa o negligencia de los gobernadores, tu gravedad lo refiera de inmediato a nuestro conocimiento, a fin de que puedan ser convenientemente castigados”. Vid. CTh. 11.30.16= C. J. 7.62.19.

En CTh. 1.16.6-7 (a. 331) se recogen diversas normas que debían guiar la actividad de los gobernadores provinciales (*praesides*) y de sus colaboradores en materia de administración de justicia: los gobernadores habían de desarrollar los procesos públicamente una vez que los interesados se encontrasen en la sala, y –añade la constitución– en el momento de escuchar las causas civiles no debían “ocultarse” en las secretarías del tribunal, de tal forma que el litigante no pudiese encontrarlos y presentar su demanda si no era abonándoles una cantidad. Por tanto, se refiere esta constitución al problema de la publicidad de los procesos y a la libertad y gratuidad de acceder al juez para obtener el examen de una causa civil. Asimismo, en CTh. 1.16.7 se trata de la tutela de los provinciales contra las ilícitas exacciones que por parte del *officium praesidis* podían ser pedidas en varios momentos del procedimiento civil y se castigan estas extorsiones como *crimen concussionis* con gran dureza e incluso en algunos casos con la pena capital.

Debemos hacer una mención especial a la cuestión del juez prevaricador: a tenor de las fuentes, la *lex Iulia repetundarum* castigaba al juez que se dejaba sobornar a la hora de dictar sentencia (Cic., *Cluent.*, 41,114; D. 48.11.3; Mac., 1 *de iud. pub.*; D. 48.11.7 pr.; Mac., 1 *de iud. pub.*), estableciéndose en el seno de la *cognitio extra ordinem* la pena de destierro para el juez prevaricador en P. S. 5.28 b y D. 48.11.7.3, el cual estaba sujeto incluso a la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* cuando se tratase de magistrado o juez de un tribunal de causa capital que cobrara una cantidad para hacer a alguien reo por <un crimen castigado en> una ley pública (D. 48.8.1.1, Marcian. 14 *inst.*); VENTURINI C., *Studi sul <<crimen repetundarum>> nell'età repubblicana*, Milano, 1979, pp. 47, 482 ss.; MOLLÁ NEBOT S., *Iudex*

unus. Responsabilidad judicial e iniuria iudicis, Madrid, 2010, pp. 47, 162, 166; SCEVOLA R., *La responsabilità del iudex privatus*, Milano, 2004. Asimismo, se dispone en CTh. 9.27.5 (a. 383) = C. J. 9.27.3 “que abstengan todos los conocedores y jueces sus manos de recibir cantidades y patrimonios, y no juzguen que es presa suya la contienda ajena ...>”, y en CTh. 1.16.3 (a. 319) = C. J. 7.49.2, se dice lo siguiente: <<Respecto al que corrompido por precio o por favor hubiere juzgado mal désele al que él hubiere lesionado acción para perseguir no solamente la pérdida de la reputación sino también el perjuicio del litigio>>. Véase sobre este tema, DE MARINI AVONZO F., *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero. 1. I principi generali del processo in un editto di Costantino*, en Studi Urbinati, 31, 1962-1963, pp. 297 ss.

También en relación a la mala administración de la justicia en general, NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., pp. 159 ss., nos aporta el siguiente cuadro relativo a la responsabilidad de los funcionarios de la Administración en este ámbito en época postclásica:

a) Ausencia injustificada del *iudex*, denegación de justicia:

Es el supuesto del *iudex* que no comparece en la causa o que abandona discrecionalmente la misma: CTh. 1.5.1; CTh. 1.16.6; CTh. 1.16.7; CTh. 9.4.14; CTh. 2.1.6; CTh. 7.4.21; Nov. Marc. 1; etc...

b) Desacato o incumplimiento por parte del juez de las instancias judiciales: CTh. 1.16.1; CTh. 9.1.1; CTh. 1.10.4; CTh. 12.12.9; CTh. 12.12.12; etc ...

c) Obstrucción procesal:

Se hace referencia al retraso en los procesos por pereza o negligencia de los jueces o funcionarios subalternos, lo cual se debe contrarrestar con el establecimiento de plazos más firmes (CTh. 1.12.1, a. 315: <<Deberás oír públicamente todas las causas civiles y principalmente aquéllas que por fama son más célebres y también los casos criminales y mandarás que las actas sean concluidas al tercer día, o a más tardar al cuarto, o, indefectiblemente al quinto. Los legados observarán también todas estas cosas, advertidos bajo sanción>>). Asimismo, en el ámbito de los recursos, algunas abstenciones culpables del juez o de su *officium* son severamente castigadas: así, en caso de *relatio* al emperador o de apelación, Constantino en CTh. 11.30.8, fijó un periodo de veinte días para la transmisión al *comitatus* imperial de la instrucción del asunto. Si este periodo no es respetado, los *officiales*

deberán entregar al Fisco una multa igual al valor del asunto “*cuius suppressa fuerit instructio*”.

Véase también: CTh. 2.6.1; CTh. 2.6.2; CTh. 2.10.2; CTh. 6.31.1; CTh. 2.1.6; CTh. 4.22.4; etc...

d) Trato ilegal o vejatorio a acusados y detenidos: CTh. 1.22.2; CTh. 11.30.2; CTh. 9.3.1; CTh. 12.1.47; CTh. 9.3.4; CTh. 9.1.8; CTh. 8.8.2; etc ...

e) Rechazo de los preceptos relativos a la conducción ordenada del proceso: CTh. 1.16.9; CTh. 1.16.10; CTh. 1.29.5; CTh. 6.4.22; CTh. 6.30.10; CTh. 14.3.20; CTh. 11.30.6. (=C. J. 1.21.2); etc ...

f) Empleo falso de las normas jurídicas, abuso de criterios aplicables al juicio y también la omisión del procedimiento prescrito en el Derecho: CTh. 1.16.3; CTh. 1.5.2; CTh. 1.5.3; CTh. 9.40.8; CTh. 12.11.2; CTh. 14.3.20; etc ...

g) Actuaciones ilegales en la ejecución en el procedimiento civil y en el cumplimiento de las penas (procedimiento penal):

Se trata de retrasos imputables al juez relativos a la ejecución de la sentencia recaída o de faltas en el cumplimiento del servicio por parte de los funcionarios encargados de la ejecución de la sentencia: CTh. 2.30.1; CTh. 9.40.5; CTh. 1.29.5; CTh. 9.40.15; CTh. 9.41.1; etc ...

h) Reclamaciones de honorarios excesivos y falsos consejos (informes) realizados por abogados (*advocati*): CTh. 2.10.3 (a. 325): <<Cada vez se hace más evidente que algunos de entre los abogados anteponen a su propia estimación grandes e ilícitas ganancias bajo el nombre de honorarios>>; CTh. 2.10.4; CTh. 8.10.2; etc ...

i) Rechazo, dificultad o admisión ilegal de instrumentos jurídicos - como la *apellatio* -.

En ocasiones los gobernadores provinciales como *iudices ordinarii* denegaban injustamente a las partes la reclamación a una instancia superior: si un juez rechazaba la apelación formulada por una de las partes, ésta podría dirigirse al emperador que pronunciará la sanción apropiada (CTh. 11.30.16); CTh. 11.30.3; CTh. 11.30.4; CTh. 11.30.9; CTh. 11.30.22; CTh. 11.30.29; CTh. 11.30.31; CTh. 11.30.58; etc ...

En relación con este tema, podemos añadir que Justiniano crea en Nov. 80 (a. 539) la figura del *quaesitor* con funciones de policía y

emancipaciones, *missiones in possessionem*, nombramiento de tutores y curadores²⁰⁸, autenticación de testamentos)²⁰⁹.

jurisdicción penal para conocer y castigar los abusos cometidos por los funcionarios judiciales. Su competencia en este ámbito abarcaba tres tipos de abusos: a) exacción indebida de costas procesales (*sportulae*); b) la *admonitio sine iudiciale praecepto*; c) *suscipere querelam falsitatis seu falsa scriptura* (tramitación de acusaciones infundadas apoyadas en documentación falsa). En todos estos casos se confiere poder al *quaesitor* para detener a los acusados de estos delitos, conocer de la causa correspondiente y emitir un fallo condenándoles a las *poenae secundum nostras leges* y ordenando la devolución de las exacciones ilegales.

La “*admonitio sine iudiciale praecepto*” se refiere a una corruptela en relación con el procedimiento de citación: el *libellus conventionis* que se presentaba al magistrado, el cual, tras un breve examen, lo aceptaba o rechazaba, emitiendo, en la primera hipótesis un decreto en el que ordenaba la notificación del *libellus* al demandado - que se llevaba a cabo por un *executor*-. El delito consistía en que algunos de estos alguaciles o *executores* (de los que Justiniano en Nov. 53.3 pr. decía que a veces “*causam arte maquinantur dolose*”) llevaban a cabo la notificación de un libelo que no había pasado por el trámite del examen y decreto judicial sumiendo sin más al que lo recibía en un procedimiento judicial. De la citada Nov. 53 se deduce que el abuso de los *executores* adoptaba formas aún más graves ya que en ocasiones hacían la *admonitio* al demandado incluso sin libelo, forzándole a presentarse ante el juez y a realizar la *litis contestatio* con lo que quedaba privado de las posibles alegaciones que hubiese podido presentar. Sobre este tema: ARIAS RAMOS J., *Un curioso cargo en la burocracia bizantina: el <<quaesitor>>*, en Revista de Estudios Políticos, 62, 1952, Madrid, pp. 107 ss.; FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano, 1998, pp. 103 ss.

²⁰⁸D. 26.5.5 (Gai., 12 ed. prov.): <<Constó siempre que el gobernador puede nombrar tutor tanto al ausente como al presente, y tanto para el presente como para el ausente>>; D. 26.5.6 (Ulp., 8 de *omn. tribun.*): <<Y también sin la voluntad del nombrado, o contra ella>>.

²⁰⁹FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Jurisdicción voluntaria...*, op. cit., pp. 95 ss.

Como señaló SERRIGNY, los gobernadores provinciales *“cumulaient l’administration générale, soit pure, soit contentieuse, avec les pouvoirs judiciaires, civils et criminels. Cette concentration de puissance leur donnait une force immense pour le mal (...)”*²¹⁰. *Les constitutions des empereurs sont remplies de dispositions tendant à réprimer ces abus*²¹¹.

Los gobernadores provinciales contaban con numerosos asesores o consejeros (*adsessores*) que les ayudaban en sus funciones judiciales, así como también con un conjunto de empleados (*officiales*) repartidos en diferentes oficinas (*scrinia*)²¹². Los asesores de los gobernadores eran generalmente abogados (*iuris studiosi*) elegidos por

²¹⁰A este respecto, KUNDEREWICZ C., *Le gouvernement et les étudiants dans le code théodosien*, RHDF, 50, Paris, 1972, p. 587, señala que el nivel de honestidad en la Administración Pública bajó hasta tal punto que en el prefacio de la Nov. 1.1 Marciano afirma que el único medio de asegurar la ejecución honesta de las funciones de un gobernador provincial es nombrar para este puesto a un hombre que no quiera desempeñar el cargo.

²¹¹En D. 1.18.6 (Ulp., 1 *opin.*) se enumeran una serie de posibles abusos que solían cometer los gobernadores provinciales respecto a la exacción ilícita de tributos (vid., *supra* p. 134 nt. 204), a la administración de justicia y al alojamiento de funcionarios o militares en localidades de la provincia (vid., *infra* pp. 505 ss.). LASSANDRO D., *“Exhaustae provinciae... praesidentium rapinis”*. *Corruzione e rivolta morale nella Gallia tardoantica (nei “Panegyrici” e in Salviano)*, en *Vetera Christianorum*, 34.2, Bari, 1997, pp. 251 ss.

²¹²ROSEN K., *Iudex und officium. Kollektivstrafe, Kontrolle und Effizienz in der spätantiken Provinzialverwaltung*, en *Ancient Society*, 21, Louvain, 1990, pp. 273 ss.; PALME B., *Die Officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, en *Antiquité Tardive*, vol. 7, Paris, 1999, pp. 85-133.

aquellos entre los que demostrasen más méritos (C. J. 1.51.1)²¹³. Su función principal era instruir las demandas y preparar los edictos, los decretos e informes del gobernador como resulta de D. 1.22.1 (Paul., *de off. ads.*): <<*Omne officium adsectoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis*>>. Los asesores no podían ejercer al mismo tiempo la profesión de abogado respecto de litigios que tuviesen lugar en donde ellos residían (D. 1.22.5).

Los empleados que asistían al gobernador provincial eran designados con el nombre de *cohortales*, *cohortalini* o *militia cohortalis*²¹⁴ y estaban repartidos en oficinas (*scrinia*) como los empleados u oficiales de los grandes dignatarios de la Administración central, y –como veremos más adelante- ellos no podían, sin un permiso especial del emperador, abandonar su empleo ni aspirar a otra condición a no ser que hubiesen cumplido 25 años de servicio²¹⁵.

²¹³AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados. Un estudio histórico-jurídico*, Logroño-Zaragoza, 1997, p. 245.

²¹⁴SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, II, *op. cit.*, pp. 379-380.

²¹⁵Por lo que hace a los ayudantes de los gobernadores provinciales, concretamente los domésticos y los cancilleres, se establece en CTh. 1.35.3 (a. 423) = C. J. 1.51.8 que sean elegidos entre los miembros de su oficio “*periculo enim primatum officii*” (a riesgo de los superiores del oficio); en caso de que el gobernador nombrase a otro que no perteneciese a su oficio se dispone que será castigado con la nota de infamia y con la confiscación de sus bienes.

A la cabeza de esta *militia* se encontraba el *princeps officii*, encargado de supervisar a los oficiales que integraban los diferentes *scrinia*²¹⁶; después le seguían en el rango jerárquico: el *cornicularius*, especie de secretario de juzgado que asumía, entre otras funciones, la guarda de las sentencias de los *iudices*, de los decretos y de los edictos dirigidos al gobernador, y el *primipilaris* o *primipilus* que estaba encargado de distribuir los salarios (en víveres o en dinero) a los demás oficiales del gobernador y a los soldados²¹⁷, así como de inspeccionar todo lo relativo al mantenimiento del servicio público de correos: carros, caballos (*veredi*) y mansiones (*exhibitio cursus publicus*). El resto del personal que formaba parte del *officium* del gobernador eran el *adiutor* (ayudante personal), el *commentariensis* (director de las prisiones)²¹⁸,

²¹⁶El *princeps* ejercitaba un control sobre la actividad administrativa del *officium* como demuestra la necesidad de su firma en todo acto burocrático.

²¹⁷El *primipilaris* (*primipilus*) se encargaba asimismo del transporte de alimentos desde su provincia hasta el lugar donde se encontraba el ejército (*pastus primipilus*).

²¹⁸El *commentariensis*, tanto en provincias como en las capitales del Imperio, dirigía las prisiones del Estado y tenía entre sus funciones la custodia y la guarda de los prisioneros y la de conducirlos ante el juez (CTh. 9.3.5, a. 371= C. J. 9.4.4) siendo responsables en caso de huida de estos de tal manera que, si lograban escapar de la prisión, el *commentariensis* sería castigado con la misma pena que se le había impuesto al preso. Este funcionario llevaba el registro de los encarcelamientos (*commentaria*) y cada treinta días debía poner al corriente al gobernador provincial – o al *praefectus urbi*, en su caso - del estado de los prisioneros indicando el nombre y la edad de los detenidos en cada cárcel, el delito cometido y la fecha de entrada en prisión, bajo multa de veinte libras de oro si hubiese desatendido estas obligaciones,

y de diez libras de oro contra el *iudex* que no hubiese exigido al *commentariensis* su cumplimiento (CTh. 9.3.6, a. 380= C. J. 9.4.5). MINIERI L., *I commentariensis e la gestione del carcere in età tardoantica*, en Teoria e Storia del Diritto Privato (rivista internazionale on line), 4, 2011.

Tenía bajo su órdenes un personal numeroso de carceleros (*carcerarii, custodes carcerum, clavicularii*) responsables, de igual forma que su jefe, de la evasión de los prisioneros y de la provisión de víveres a los mismos: así, en CTh. 9.3.1.1= C. J. 9.4.1.4 se dice que si el guardián de la prisión, *strator*, deja morir de hambre o de cualquier otra forma por un trato de excesiva crueldad a un acusado detenido se expone también con sus ayudantes a la imposición de una pena; CTh. 9.3.1.1= C. J. 9.4.1.5. En este sentido se dispone en D. 42.1.34 (Lic. Ruf., 13 *reg.*) que “si alguien impide que se lleve al reo <en prisión> el alimento o coberturas que necesita, debe darse contra él una acción penal útil, o según opinan algunos, se podrá ejercitar contra él la acción de injurias”. Sobre el trato ilegal a los acusados y detenidos, especialmente cuando estos eran personas que gozaban de privilegios como los altos dignatarios que estaban libres de castigos corporales, especialmente de la tortura, en la investigación judicial: CTh. 11.30.2; CTh. 9.3.1; CTh. 12.1.47; CTh. 9.2.2= C. J. 9.3.1; CTh. 8.8.2; CTh. 12.1.85...); NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, pp. 167-168.

Asimismo, referimos otras fuentes relativas a la responsabilidad de los funcionarios en esta materia: D. 48.3.8 (Paul., *de poen. mil.*): <<El alcaide de la cárcel, si se ha dejado sobornar para tolerar que el reo ande suelto en ella o se le haga llegar un arma o veneno, debe ser castigado por ministerio del juez; si el hecho ha ocurrido sin su conocimiento, debe ser depuesto de su cargo en razón de su negligencia>>; D. 48.3.10 (Ven., 2 *de off. proc.*): <<A fin de que nadie deje en libertad sin <justa> causa al preso que se le encargó, se dispone así en los mandatos: si supieres que algunos de los que están en las ciudades fueren dejados libres precipitadamente y sin causa por los magistrados, mandarás que sean reducidos a prisión, y les impondrás una multa a los que les hubieren soltado; porque sabiendo los magistrados que también para ellos habrá molestia, si fácilmente hubieren soltado a los presos, no lo harán indiferentemente otra vez>>; en D. 48.3.12 (Call., 5 *de cognit.*) se hace referencia a la responsabilidad de los encargados de la vigilancia militar en caso de huida de un preso así como a la responsabilidad de aquellos en el supuesto de que dejen libre a un preso o bien actúen negligentemente en esta materia; y también en D. 48.3.14.2 (Mod., 4 *de poen.*) se alude a las penas y sanciones que se imponen a los encargados de la vigilancia

los *actuarii vel ab actis* (ejercían una función notarial al redactar los contratos realizados entre los particulares, testamentos, donaciones, etc...), los *numerarii* o *tabularii* (oficiales encargados de la contabilidad, especialmente de los tributos que recaudaba el Fisco en la provincia respectiva)²¹⁹, los *exceptores* (escribanos), y los *ducenarii*, *centenarii* y *sexagenarii* (agentes y oficiales de justicia)²²⁰.

de los presos. Respecto a la liberación de presos sin justa causa (CTh. 9.21.2, a. 321; CTh. 7.18.1, a. 365; CTh. 14.10.1, a. 382), véase NOETHLICH, K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 193.

Para terminar, señalamos que en C. J. 9.5.1 (a. 486) el emperador Zenón prohíbe que alguien tenga en sus campos o en su casa una cárcel privada, y castiga severamente a los gobernadores provinciales y a sus subordinados que hayan consentido que existan dichas cárceles como crimen de lesa majestad.

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, op. cit., pp. 173-174. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 235; LOVATO A., *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, pp. 185 ss.; DUPONT CL., *Le droit criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille, 1955, p. 16; EISENHUT W., *Die römische Gefängnisstrafe*, en ANRW, I, 2, Berlin-New York, 1972, pp. 268 ss.; BIANCHINI M., *Usi ed abusi della "custodia reorum"*: una testimonianza di Agostino d'Ippona, en Atti del III Seminario Romanistico Gardesano, Milano, 1988, pp. 443 ss.; PAVÓN TORREJÓN P., *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano*, Madrid, 2003.

²¹⁹Había dos *numerarii* (contables) en cada provincia: uno de ellos, que dependía del *comes rei privatae*, se encargaba de llevar la contabilidad de todos los bienes que eran debidos al príncipe por sucesión, confiscaciones u otras causas; el otro se ocupaba de la contabilidad de los impuestos que ingresaba el Fisco, y formaba parte del departamento del *comes sacrarum largitionum*.

Parece ser que los *numerarii* eran bastante corruptos a tenor de lo que resulta de diversas constituciones imperiales: así, Constantino en el año 334 les hace merecedores de tortura y de otros castigos en CTh. 8.1.4=C. J. 12.49(50).1: <<De tal modo se ha de reprimir el propósito de

c) LOS DECURIONES Y SU RESPONSABILIDAD EN LA
GESTIÓN PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS.

El gobierno y la administración de los municipios en época imperial correspondía a los decuriones (*curiales*)²²¹ los cuales formaban

voracidad y de fraudulencia de los numerarios, que en diversos servicios están a las órdenes de los gobernadores, que ya de antes sancionamos y también lo mandamos ahora, que sean ellos sometidos a la aplicación de tormentos, y sujetos al potro y a laceraciones>>; y en CTh. 8.15.2 (a. 334) se declara que si los *numerarii* coaccionan a vender bienes a los provinciales, dichas ventas serán nulas e ineficaces (*irritae et inanes*) y los compradores, calificados de detestables, serán castigados con la pérdida del precio y otras sanciones adicionales. También CTh. 8.1.8; CTh. 8.15.2; CTh. 6.35.11. SERRIGNY D., *Droit public et administratif* ..., I, *op. cit.*, pp. 174-175.

²²⁰SERRIGNY D., *Droit public et administratif* ..., I, *op. cit.*, pp. 170 ss.

²²¹Pomponio nos dice en D. 50.16.239.5 que los <<decuriones>> se llaman así, “según dicen algunos, porque en su origen, cuando se fundaban las colonias, solía elegirse una décima parte de su población para formar un consejo público”.

En época postclásica las formas de ingreso en la curia eran las siguientes: por nacimiento (los hijos de un decurión seguían la condición de su padre); por ofrecimiento que hacía a la curia el padre de un hijo natural (de este modo el hijo deviene legítimo); y por la voluntad libre y espontánea de los que quisieran ingresar en la curia. No obstante, como estos modos eran insuficientes para completar las curias, los decuriones tenían derecho de hacer entrar en las mismas a los ciudadanos con edades comprendidas entre los 25 y 55 años que, por ejemplo, hubiesen recibido a título de herencia bienes que hubiesen pertenecido a curiales, o a aquellos que desempeñasen funciones en las oficinas municipales como oficiales, contables, etc..., o a los que, siendo de origen plebeyo, poseían el patrimonio determinado por la ley. Además, se estableció en

en las diferentes ciudades un orden (*ordo decurionis*), configurándose como una especie de nobleza hereditaria al ser nombrados de por vida y dado que su condición se transmitía hereditariamente al igual que sucedía en Roma con el patriciado²²². Los decuriones no podían abandonar su condición salvo en raras excepciones y, ordinariamente, siempre que hubiesen recorrido todos los escalafones de la jerarquía municipal.

El decurionato era un cargo honorífico (D. 50.3.1 pr., Ulp., 3 de *off. proc.*: <<*maximus honor in municipio...*>>; D. 50.4.14 pr., Call., 1 de *cognit.*: <<*honor municipalis est administratio reipublicae cum dignitatis gradu*>>²²³) y su importancia queda reflejada en Nov. Maior. 1 cuando nos dice que los decuriones son los nervios y la fuerza del Estado

ciertos casos la entrada en la curia como un castigo penal, y así Justiniano impuso esta pena contra los hijos de los veteranos que se mutilasen para no ingresar en el servicio militar (CTh. 7.22.1). SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, *op. cit.*, pp. 190-193.

²²²JONES A. H. M., *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, en *La società del Basso Impero. Guida storica e critica* (a cura di D. Vera), Bari, 1983 [= *The Caste System in the Later Roman Empire*, en *Eirene*, VIII, 1979, pp. 79-96], pp. 27 ss; NUYENS M., *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain, 1964; CUENA BOY F., *Nuevos significados de origo en las fuentes legislativas postclásicas*, *op. cit.*, pp. 14 ss.

²²³LOVATO A., *Sull "honor decurionatus" nel I libro delle "Disputationes" ulpianee*, en *SDHI*, 56, Roma, 1990, p. 199, sostiene que: *"nella presenza della dignitas, si un "elemento spirituale", si situa la fondamentale differenza con il munus publicum"*. Recordamos aquí la definición que de <<*munus*>> nos da Calístrato en D. 50.4.14.1: <<*Munus aut publicum aut privatum est. Publicum munus dicitur, quod in*

(<<*curiales nervos esse reipublicae ac viscera civitatum nullus ignorat* ...>>): ellos se encargaban de la gestión de los bienes comunales, de la compra del grano, de la construcción de los acueductos, de la conservación de las vías públicas en el municipio, de la organización de los juegos y espectáculos y, lo que es más importante y resultaba más gravoso para ellos, de la recaudación de los impuestos debidos al Fisco por los munícipes²²⁴; además, desempeñaban funciones

administranda re publica cum sumptu sine titulo dignitatis subimus>> (vid., *supra* pp. 37-39).

²²⁴Los decuriones nombraban, entre ellos, a los *susceptores* y a los *exactores* que estaban obligados a garantizar su gestión y en el curso de la cual no podían vender sus bienes. En caso de insolvencia respondían quienes les hubiesen designado en el procedimiento de la *nominatio* y, en última instancia, la curia por entero (CTh. 12.6.8, a. 365= C. J. 10.72(70).2: <<con arreglo a las antiguas leyes queden obligados los nominadores de los recaudadores (...) si no fueran idóneos los que por ellos mismos hubieren sido nombrados (...)>>). Este sistema de responsabilidad inducía a elegir personas solventes. Por lo demás la curia también era responsable colectivamente de la entera carga fiscal, hubiese sido o no efectivamente cobrada: si las tierras habían sido abandonadas por los campesinos o no eran productivas el impuesto era debido igualmente y pesaba sobre la ciudad.

Hubo intentos de modificar este sistema de recaudación de impuestos como sucedió en el año 365 cuando Valentiniano I sustituyó en Oriente y en Italia a los curiales (*susceptores* y *exactores*) por funcionarios de las oficinas de los gobernadores provinciales –en la práctica sólo se estableció para determinadas contribuciones- (CTh. 12.6.5; CTh. 12.1.70). Como ha puesto de relieve la doctrina, este intento del emperador se enmarcaba en su política de lucha contra las prácticas abusivas o corruptas de los curiales en la recaudación de impuestos, persiguiendo al mismo tiempo con ello la salvaguarda de los intereses económicos del Estado mediante una mejor gestión de los ingresos y gastos públicos y un mayor control de la Hacienda de las ciudades; no obstante, el antiguo sistema se mantuvo posteriormente para numerosos impuestos y contribuciones (CTh. 12.6.20, a. 386= C. J. 10.72(70).8).

jurisdiccionales²²⁵ como las relativas al nombramiento de los tutores dativos de los menores por delegación del gobernador provincial²²⁶, y también funciones de policía.

Precisamos que los *susceptores* eran los encargados de percibir los pagos por parte de los contribuyentes, mientras que junto a ellos se encontraban los *exactores* los cuales realizaban funciones de control de la actividad de los recaudadores así como otras funciones como las relativas a la reclamación de atrasos y de deudas fiscales asumiendo personalmente la recogida de géneros y productos en la ciudad en ausencia de funcionarios especializados en estas tareas. En época postclásica los *exactores* eran, o bien nombrados por los gobernadores provinciales dentro los miembros de sus oficinas, o bien, elegidos por los propios curiales. Junto a los anteriores, mencionamos también a los *compulsores* que eran funcionarios a las órdenes del prefecto del pretorio, de la *annona*, del *comes sacrarum largitionum* o del *comes rei privatae* con la misión de controlar los abusos, fraudes o negligencias de los *susceptores* y *exactores* (CTh. 1.16.11; CTh. 8.10.3.4). DI PAOLA L., *I curiales nella legislazione di Valentiniano e Valente*, en AA. VV., *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Troisièmes Journées d'Etude sur le Code Théodosien (Neuchâtel, 15-17 février 2007), Genève, 2009, pp. 213 ss.; DELMAIRE R., *Cités et fiscalité au Bas-Empire. A propos du rôle des curiales dans la levée des impôts*, en AA.VV., *De la fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III siècle a l'avènement de Charlemagne* (Actes du colloque tenu à l'Université de Paris X-Nanterre, 1-3 avril, 1993), Bari, 1996, pp. 59 ss. Véase, APARICIO PÉREZ A., *Las grandes reformas fiscales del Imperio Romano (reformas de Octavio Augusto, Diocleciano y Constantino)*, Oviedo, 2006, p. 69

Véase, DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, *op. cit.*, pp. 468-469; HAHN I., *Immunität und Korruption der Curialen in der spätantike*, en *Korruption im Altertum*, hrsg. W. Schuller, München-Wien, 1982, pp. 179-195; LEPELLEY C., *Quot curiales tot tyranni. L'image du decurion oppresseur du Bas Empire*, en E. FRÉZOULS (eds.), *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du III milieu du IV siècle ap. J.-C.)*, Strasbourg, 1983, pp. 143 ss.

²²⁵ ALBURQUERQUE J. M., *La administración provincial, colonial, municipal y la justicia en la Hispania romana (I): especial referencia a la Bética romana, su capital Corduba y los magistrados municipales y*

Dentro del orden de los decuriones había diferentes grados:

- Los *dunviros* (*duumviri*), que eran los magistrados municipales con mayor rango de la ciudad²²⁷ y tenían atribuidas competencias en materia administrativa y jurisdiccional (D. 50.1.26; C Th. 12.1.174, a. 412= C. J. 10.32(31).53)²²⁸.
- Los *quinquennales*, que ejercían durante cinco años las funciones de censor en los municipios más importantes.
- El *defensor civitatis*²²⁹, primer magistrado de la ciudad después de los *dunviros*, el cual fue establecido en las

órganos con iurisdictio según la lex Irnitana, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 7, Madrid, 2006, pp. 1 ss.

²²⁶ Justiniano les permitirá hacer el nombramiento directamente siempre que la fortuna personal del pupilo fuese menor de quinientos *solidi*.

²²⁷ D. 50.3.1 pr (Ulp., 3 *de off. proc.*): <<Debe escribirse la lista de decuriones según se ordene en la ley municipal, pero si nada se dice en la ley, entonces debe respetarse el orden de prelación de las magistraturas que han ejercido en el municipio; por ejemplo, los que ejercieron el *dunvirado*, si tiene preferencia este cargo, y entre ellos la preferencia por antigüedad; luego, los que han ejercido el cargo que sigue al *dunvirado*; luego los de tercer rango y así sucesivamente, hasta, por último, los decuriones que no han tenido cargos, por orden de antigüedad>>. SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, *op. cit.*, p. 203.

²²⁸ Las sentencias de los magistrados municipales podían ser apeladas ante los gobernadores provinciales (CTh. 11.31.3).

²²⁹ La primera constitución que se refiere oficialmente al *defensor civitatis* en la parte oriental del Imperio es del año 371 (CTh. 13.10.7). GANGHOFFER R., *L' évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas Empire*, Paris, 1963, pp. 163-170.

ciudades más importantes para proteger al pueblo y a los decuriones contra las vejaciones de los *potentiores* y contra los abusos de los gobernadores: así, se dispone en C. J. 1.55.4 (a. 385) respecto del *defensor civitatis* que: “ante todo hagas las veces de padre de la plebe, no consientas que se abrume a los habitantes de los campos y de las ciudades con repartos de contribuciones, te opongas, dejando a salvo la reverencia debida, a la insolencia de los oficiales y a la procacidad de los jueces (...) Impidas los gravámenes que hayan de exigirse de más, o los despojos de los que piden con exceso a aquellos a quienes debes proteger en calidad de

Valentiniano I luchó contra la corrupción existente en la Administración y una de sus medidas más significativas fue la creación de una nueva figura, el *defensor civitatis*, para defender principalmente a la clase campesina frente a los abusos de los *potentiores* y de los funcionarios provinciales. Sobre la figura de este emperador puede consultarse, SORACI R., *L'imperatore Valentiniano I*, Catania, 1971.

Sobre el *defensor civitatis*, MANNINO V., *Ricerche sul “defensor civitatis”*, Milano, 1984; HARMAND L., *Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire*, Paris, 1957; ROMANO S., v. “*defensor civitatis*”, NNDI V, Torino, 1960, pp. 313-316; PERGAMI F., *Sulla istituzione del defensor civitatis*, en SDHI, 61, Roma, 1995, pp. 413 ss.; CUENA BOY F., *El defensor y el protector de indios: breve ilustración en paralelo*, en *Ius Fugit*. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 7, Zaragoza, 1998, pp. 179 ss.; FRANKES R. M., <<Contra potentium iniurias>>. The <<Defensor civitatis>> and Late Roman Justice, München, 2001; SILVESTROVA E., *Il titolo Cth. 1. 29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano*, en Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. XIV Convegno Internazionale in memoria di G. Nocera, 2003, Napoli, pp. 253 ss.

hijos ...`; y en CTh. 1.29.7 (a. 392)²³⁰ = [C. J. 1.55.5] se establece que: <<*defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes, nominis sui tantum fungantur officio: nullas infligant mulctas, severiores non exercent quaestiones, plebem vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur ...*>>. El *defensor civitatis* tenía jurisdicción limitada en un principio a las materias que no excediesen de sesenta sólidos, límite que aumentó Justiniano hasta los trescientos *aurei* (Nov. 15.3.2)²³¹.

- El *curator civitatis*, que aunque desempeñaba sus funciones en las ciudades del Imperio técnicamente no era un magistrado municipal sino un funcionario de la Administración central nombrado mediante *epistola* del emperador. Se configuraba como el administrador de los bienes de la ciudad (ordenaba el cobro de los impuestos municipales, alquilaba los bienes de la ciudad...) con ciertas funciones de policía, encargándose también de mantener la paz y la seguridad en

²³⁰<<Nada indebido ni de manera insolente reclamen para sí los defensores, sólo desempeñen el cargo de su denominación: no impongan multa alguna, ni muevan cuestiones de ninguna naturaleza, defiendan sólo al pueblo y a los decuriones de toda insolencia y temeridad de los ímprobos, para que no dejen de ser aquello que dicen ser>>. Vid., Nov. 15 *praef.*

²³¹Las decisiones del *defensor civitatis* podían ser apeladas ante los gobernadores provinciales.

la ciudad. Estaba sujeto a rendir cuentas de su gestión debiendo reintegrar al municipio los intereses de las sumas no empleadas, a menos que hubiese un motivo legítimo para ello (D. 50.8.11(9); Papir. lust., 2 *constit.*)²³².

La responsabilidad de los que estaban encargados de los asuntos municipales -como los *dunviros* o los *curatores civitatis*-²³³, bien por

²³²SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 222. SARTORI M., *Osservazioni sul ruolo del curator rei publicae*, en *Athenaeum*, 77, Pavia, 1989, pp. 5 ss.

²³³*Si iussu eius, qui rerum civitatis, qui administrationi rerum civitatis praepositus est (...) Pomponius scribit quod iussu cum eo agi posse* (D. 15.4.4, Ulp. 10 ed.).

TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa...*, op. cit., p. 305, destaca que de la experiencia romana relativa a los diversos aspectos relacionados con la responsabilidad civil-administrativa de los sujetos intervinientes en la actividad administrativa pública, resulta de las fuentes una especial referencia al ámbito de la administración municipal en el cual emerge la figura del magistrado local y en particular la del *dunviro*.

En este ámbito, el Autor, op. cit., pp. 307-310, expone una relación de diversas acciones penales privadas que los particulares podían ejercitar frente a los magistrados municipales: la *actio ex lege Aquilia* (D. 9.2.29.7: <<Los magistrados municipales pueden ser demandados por la Aquilia si hubiesen causado daño injusto. Pues también cuando alguno hubiese tomado reses en prenda y las hubiese matado de hambre, no permitiendo que les llevase alimento se ha de dar una acción por el hecho. Asimismo, si creyendo que se toma la prenda según ley, no la hubiese tomado legalmente y devolviera las cosas rotas y destrozadas, se dice que tiene lugar la ley Aquilia; lo mismo hay que decir también si tomó la prenda legalmente. Sin embargo, si un magistrado hubiese actuado violentamente contra el que se le resiste, no quedará obligado por la Aquilia pues también cuando hubiese tomado un esclavo en prenda y éste se hubiera ahorcado, no se da acción alguna>>; D. 18.6.13(12)-14(13), vid. RODRÍGUEZ LÓPEZ R.,

voluntad propia, bien al asumir los cargos de modo coactivo (D. 50.1.38.6, rescripto de Marco Aurelio y Vero), era análoga a la derivada de las disposiciones relativas a la representación tutelar ya que se entendía que la ciudad gozaba en general de los derechos de un menor de edad bajo la tutela de los magistrados del municipio (esta idea también se aplicó respecto de la administración de establecimientos de beneficencia -*piae causae*- como hospitales u orfelinatos, a efectos de poder reclamar una *restitutio in integrum* en favor de las entidades administradas)²³⁴.

En este sentido, dichos magistrados responden cuando proceden al arrendamiento de fincas municipales y no se acordaba una *cautio* suficiente (D. 50.8.5 (3.1); Pap., 1 *resp.*), o cuando en caso de venta de

Las obligaciones indemnizatorias..., op. cit., pp. 115, 244 ss.); la *actio iniuriarum* (D. 47.10.13.1 y 6; D. 47.10.15.39; D. 47.10.32-33); la *actio de dolo* (D. 4.3.15.1); la *actio quod metus causa* (D. 4.2.3.1; D. 4.2.9.1); y junto a ellas, la *actio subsidiaria* (D. 27.8.1 pr.; I. J. 24.2.; C. J. 5.75.5) que se enmarca dentro del procedimiento de nombramiento de tutor a favor del pupilo menor de edad por un magistrado municipal cuando resultase que el nombrado no fuese un tutor solvente o no prestara la debida garantía -*cautio rem pupili salvam fore*- en cuyo caso el pupilo, una vez alcanzada la mayoría de edad, podía ejercitar esta acción frente al magistrado por los daños y perjuicios sufridos por aquél, habiéndose denominado esta acción “subsidiaria” por el hecho de que el menor sólo podía dirigirse contra el magistrado después de haber actuado infructuosamente contra el tutor y sus fiadores); vid. MORENO DICENTA T., *La responsabilidad subsidiaria del magistrado en la tutela y curatela patronal*, en *La responsabilidad civil. De Roma al derecho moderno* (coord. A. Murillo), Burgos, 2001, pp. 297 ss.

²³⁴ ORESTANO R., *L'assimilazione degli enti ecclesiastici ai pupili e la sua derivazione romanistica*, en *Études Le Bras*, II, Paris, 1965, pp.

bienes del municipio se produce una lesión patrimonial para el mismo debido a la actuación negligente del magistrado (D. 50.8.12 (9.3).1; Papir. lust., 2 *constit.*), también son demandados por el municipio - corporación de decuriones - dichos magistrados cuando a consecuencia de los negocios realizados por ellos resulten acciones judiciales contra el municipio (D. 44.7.35.1; Paul., 1 *ed.*) de tal manera que podrá la corporación ejercitar contra los mismos una *actio utilis* (D. 3.4.10; Paul., 1 *man.*; D. 13.5.5.9; Ulp., 27 *ed.*).

En estos casos se debe distinguir entre aquellos magistrados municipales que responden a causa de su cargo (*ex officio*) y aquellos que lo hacen por virtud de un contrato realizado en nombre de la *civitas* con un tercero (*ex contractu*)²³⁵. Respecto de esta materia podemos distinguir las siguientes fuentes²³⁶:

1353 ss; BLANCH NOUGUÉS J. M^a., *Régimen jurídico de las fundaciones en Derecho Romano*, Madrid, 2007, pp. 203-204.

²³⁵D. 50.1.21.1 (Paul., 1 *resp.*): ``respondió Paulo que los demandados, no por un contrato de la persona que garantizaron, sino por el cargo que ésta administró suelen responder de la cantidad debida pero no también de los intereses devengados por la misma``. Y según una disposición de Alejandro Severo contenida en C. J. 11.39(38).1, el funcionario que concedió el crédito público a un particular debía responder del mismo aún cuando se hubiese perdido sin su culpa. Ahora bien, en dicho fragmento se dispone que responde sólo por el capital y no por los intereses.

²³⁶LIEBENAM W., *Städverwaltung im kaiserreiche*, Roma, 1967, pp. 306-308.

- En D. 50.8.12.6 (9.9) el funcionario responde por los créditos concedidos durante el ejercicio de su cargo a particulares insolventes, pero no de los concedidos antes de su nombramiento a dichas personas.

- En D. 50.1.36.1 (Mod. 1 *resp.*) Modestino se plantea un caso, posiblemente de escuela, en el que un magistrado municipal, Ticio, concedió a un particular un préstamo de dinero público, exigiendo a cambio del deudor la entrega en prenda de un fundo de su propiedad. Dicha operación fue aprobada por los sucesores en el cargo de Ticio hasta llegar al último, Mevio, que también la aprobó. Durante el mandato de este último venció el plazo para la devolución del préstamo y como el deudor resultó insolvente se procede a ejecutar la prenda resultando que el fundo era de una cabida inferior a la manifestada por el deudor con lo que el precio de venta de dicho fundo no cubrió el importe total del crédito impagado. Modestino se pregunta: ¿Quién debía responder ante la ciudad por no haberse cobrado el préstamo?. El jurista exonera de tal responsabilidad a Ticio y a los posteriores funcionarios salvo al último, Mevio, que corre con la responsabilidad a no ser que pruebe haber endosado la

aprobación del préstamo a otro sucesor idóneo²³⁷ (*Vid. C. J. 11.36(35).4*).

Por otro lado, vemos también la vigencia de la regla según la cual para que se entienda que un municipio no ha obtenido ningún provecho de la actuación ilegal de sus representantes debe devolver todos los bienes injustamente obtenidos de terceros en virtud de aquella actuación:

²³⁷Sobre la responsabilidad de los gestores de los fondos públicos, MANTOVANI D., *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, en *Gli Statuti Municipali* (a cura di L. Capogrossi-Colognesi; E. Gabba), Pavia, 2006, p. 279, nos dice que con anterioridad a estas fuentes ya existía una responsabilidad patrimonial hacia la *res publica* como resulta de un documento epigráfico, el llamado tercer rescripto de Vardagate, de la segunda mitad del siglo I d. C., por tanto de la época de la *lex Irnitana*. En la *epistula*, el *princeps* afirma que los magistrados incurren en responsabilidad cuando asumen *praedes non idonei* (no solventes), deber que, por ejemplo, les es impuesto en *Irñ. 63* cuando proceden a la *locatio* de *vectigalia* o de *ultra tributa*. Serán exonerados de responsabilidad sólo cuando la inidoneidad del garante venga sobrevenida: *Magistratus qui parum idoneos pra(e)des acceperunt cum cavendum esset rei / publicae ipsi obligati sunt; quod si praedes tunc quidem idonei fuerunt cum / acciperentur posea vero aliqua ex causa minuerunt facultates, non e[s]t / fortuna praedum magistratibus imputanda. Vale*. Sobre esta fuente: GABBA E., *Aspetti sociali del rescripto imperiale di Vargate*, en AA. VV., *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture. Classes sociales dirigeantes et pouvoir central*, dir. M. Cébeillac-Gervasoni, Paris-Rome, 2000, pp. 457 ss. Añade MANTOVANI que la respuesta del *princeps* no es nueva sino que se trata de una regla consolidada que a su vez recalca un principio vigente en el Derecho privado para la gestión de negocios de otro, siendo así el magistrado considerado gestor de los *negotia* de los munícipes (D. 50.1.13: <<*si alter ex magistratibus... rei publicae negotia non gesserit*>>).

- En D. 4.3.15.1 (Ulp. 11 *ed.*) se establece que si un administrador de un municipio realiza un fraude o engaño en un contrato llevado a cabo en nombre de la ciudad con un tercero, dicho administrador responde penalmente con la acción de dolo mientras que la ciudad sólo responde civilmente en la medida del beneficio injustamente obtenido por dicho fraude²³⁸.
- Y en D. 31.78.2 (Pap. 9 *resp.*) se dice que responden los funcionarios municipales encargados del cumplimiento de un fideicomiso confiado a la ciudad por un particular respecto del perjuicio que hubiere podido seguirse de la mora en el cumplimiento de la condena dictada judicialmente contra la ciudad para que se cumpla el fideicomiso. Sin embargo, la ciudad estará obligada a pagar los intereses de demora a favor del particular.

La propia idea de la colegialidad de los magistrados municipales ha determinado además una amplia vinculación de unos magistrados en las medidas adoptadas por los otros. Las actuaciones administrativas estaban ciertamente separadas pero la responsabilidad por delitos o faltas eventuales recaían sobre el conjunto de ellos (*magistratum*

²³⁸BLANCH NOUGUÉS J. M., *Acerca de la responsabilidad penal de las civitates* ..., *op. cit.*, pp. 261 ss.

officium individuum ac periculum esse commune: D. 50.1.11; 13; D. 50.8.2.8). Así vemos que los magistrados municipales gestionaban una misma actividad administrativa de tal manera que ésta se entendía realizada por una sola persona (*unius hominis vices sustinet*). Este principio está normalmente contenido en las leyes municipales así que se le atribuye un valor de derecho consuetudinario a menos que fuese formalmente excluido (D. 50.1.25; Ulp. 1 ed.: <<Los magistrados municipales como administran una misma magistratura, hacen también las veces de una sola persona; se les reconoce esto generalmente en la misma ley municipal, pero, aunque así no sea, procede por costumbre, si no se les deniega expresamente>>²³⁹.

El colega del funcionario municipal que realizó la gestión administrativa debe ser demandado cuando ni éste (insolvente) ni su garante respondan por los daños causados. De otra manera, si el funcionario fuese solvente (*si persona vel cautio sit idonea*) respondería él solo de su propia actividad (*unusquisque in id quod administravit*

²³⁹VOCI P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, IURA 21, Napoli, 1970, p. 124, nos dice que, por regla general, las funciones de los magistrados son indivisibles (*officium individuum*; D. 50.1.25). El ejercicio del cargo puede ser de los dos y también de uno solo (que gestiona por iniciativa personal o de acuerdo con su colega). Actúen los magistrados juntos o cada uno por su lado, la ciudad considera todos los actos como si fuesen ejecutados por los dos juntos. Esta es la regla, la cual puede a veces no ser seguida: por ejemplo, un ordenamiento ciudadano puede tener magistrados con competencias divididas por estatuto o por cláusula colocada en el acuerdo de nombramiento (*creatio*). Vid. VARELA MATEOS E., *De contutoribus: cotutela y pluralidad de tutores en Derecho Romano*, Madrid, 1979.

tenebitur. D. 50.1.11; C. J. 4.19.3, a. 231)²⁴⁰. Asimismo, en relación con este tema vemos el supuesto contemplado en D. 50.8.2.7 (Ulp., 3 *opin.*) en caso de que el magistrado municipal solvente en el momento de su nombramiento sufriese luego un quebranto económico por causa fortuita, de tal manera que, a su vez, perjudicase a la ciudad (por ejemplo, por los contratos realizados en nombre de la misma con terceros si estos últimos resultasen insolventes y no pudiesen garantizar con su patrimonio dichas deudas en favor de la ciudad); en tal caso, se dice en la fuente que no debe responder el magistrado que nombró a dicho magistrado insolvente en virtud de la regla que establece <<*quia fortuitos casus nullum humanum consilium providere potest*>>. Y en D. 50.1.11.1 (Pap., 2 *quaest.*) se refiere el caso del magistrado que siendo solvente nombró bajo su responsabilidad a otro que resultó insolvente: se plantea si debe darse acción contra el primero directamente como si fuera un fiador o sólo en segundo lugar si no se hubiese conseguido la indemnización por parte de un funcionario colega del insolvente: “Y se admitió que, como se hace con el fiador, debe demandarse primeramente al que hizo el nombramiento (*qui nominavit*), ya que el colega puede ser demandado por su descuido y en concepto de pena, pero el que hizo el nombramiento puede serlo por razón de garantía”; y

²⁴⁰ LIEBENAM W., *Städverwaltung im Kaiserreiche*, *op. cit.*, p. 309.

en D. 50.1.12 (Pap. 1 *resp.*) se añade a lo anterior que “no debe darse una acción útil contra el colega del que aquél propuso”²⁴¹.

Ahora bien, en C. J. 11.36(35).1 se hace referencia al caso en el que se encomienda la administración de dinero público de una ciudad simultáneamente a dos magistrados: no habrá entonces separación de responsabilidad entre ambos de tal forma que los dos quedan sujetos al mismo deber de resarcimiento (*in solidum rei publicae obligantur*); si bien, deberá ser demandado en primer lugar aquél que hubiera realizado el negocio en cuestión. Además, en C. J. 11.36(35).2 (Imp. Gordiano) se establece que cuando cada uno responde solidariamente por el todo (*periculo soliditatis obstrictus*) son ambos demandados en primer término, y si fracasa dicha vía, entonces serán demandados los *nominatores*. Pero –añade– si desde un principio se establece una división de competencias entonces deberá responder por las pérdidas cada magistrado e incluso su garante²⁴², y en segundo lugar, aquél que hubiese presentado al candidato para su elección por la ciudad, y

²⁴¹En D. 50.1.15.1 (Pap. 1 *resp.*) se dice que no debe darse acción contra el que propuso un sucesor, bajo su responsabilidad, si al cesar en su cargo el sucesor resultaba solvente. Y en caso de que un magistrado (colega) hubiese pagado por otro, el gobernador provincial mandará a éste o a sus herederos en caso de fallecimiento, que le reembolse a aquél la cantidad que pagó (D. 50.8.2.10).

BRIGUGLIO F., *Fideiussoribus succurri solet*, Milano, 1999, pp. 112 ss.

²⁴² Vid. C. J. 11.35(34).1; D. 50.8.5(3.1).3(4); D. 50.1.38.2.

cuando la pérdida tampoco hubiese sido satisfecha por éste, entonces responde el colega en el cargo.

No obstante, a tenor de D. 50.8.12(9.3).5(9.8)²⁴³, los magistrados estaban obligados a intervenir para impedir una actuación de su colega de la que se derivarían daños para la ciudad, de tal manera que si pudiendo intervenir en la gestión de su colega, no lo hacían, debían responder de tal hecho.

En relación con lo anterior, LIEBENAM²⁴⁴ se pregunta en qué medida esta responsabilidad es exigida al colega del funcionario que realiza la gestión. La respuesta resulta del ejemplo desarrollado por Papiniano en D. 50.1.13 (Pap., 2 *quaest.*) en el que se plantea el caso de un magistrado que hubiere estado ausente un año entero o que, aún estando presente, no se ocupó de la gestión pública por contumacia, pereza o mala salud; en tal caso se demandará, en primer lugar, por el todo al magistrado que administra la gestión pública y a sus garantes; en segundo lugar, se demandará al que propuso una persona no idónea; por último, al otro magistrado que no intervino en aquella gestión.

²⁴³Papirius Iustus, 2 *de constitutionibus*.

²⁴⁴LIEBENAM W., *Städverwaltung im kaiserreiche*, *op. cit.*, p. 310.

4. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CIUDADES DE ROMA Y CONSTANTINOPLA.

a) EL *PRAEFFECTUS URBI* DE ROMA Y SU OFFICIUM: ALGUNOS SUPUESTOS RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DE FINANCIACIÓN DE LA ANNONA.

Por lo que hace a las ciudades de Roma y Constantinopla recordamos que estaban sujetas a un régimen especial: SERRIGNY nos dice al respecto que *''l'administration de Roma et de Constantinople avait plutôt un caractère national que municipal''*²⁴⁵.

A la cabeza de la administración de Roma se encontraba el prefecto de la ciudad (*praefectus urbi*), funcionario de rango ilustre situado inmediatamente detrás del prefecto del pretorio en el orden de precedencias (C. J. 1.28: <<*De officio praefecti urbis*>>). El *praefectus urbi* era equivalente –SERRIGNY- en Roma a ''lo que en los municipios el jefe de la curia, es decir, el primer magistrado de la ciudad y el

²⁴⁵SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, I, *op. cit.*, p. 249.

presidente del Senado²⁴⁶. Entre sus numerosas competencias podemos referir las siguientes: el aprovisionamiento de la capital y la distribución de alimentos a los habitantes de la misma, los acueductos y las cloacas, los juegos y espectáculos públicos, las obras públicas²⁴⁷,

²⁴⁶En CTh. 1.6.7 (a. 376) =C. J. 1.28.3 se dice que “la *praefectura urbis* tenga la primera categoría entre todas las dignidades que hay dentro la ciudad”.

CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*; VITUCCI G., *Ricerche sulla prefettura urbi in età imperiale I-III*, Roma, 1956; SINNINGEN W., *The officium of the Urban Prefecture during the Later Roman Empire*, Rom, 1957; SOLIDORO MARUOTTI L., *Aspetti della giurisdizione civile del praefectus urbi nell'età severiana*, LABEO, vol. 39, n. 2, Napoli, 1993, pp. 174 ss.

²⁴⁷El prefecto de la ciudad encargaba la edificación o reparación de los edificios públicos a arquitectos-ingenieros (*mechanici* o *architecti*); cuando se trataba de construir una obra importante el arquitecto era nombrado por el propio emperador y le incumbía a aquél, bajo el control del prefecto, diseñar los planos y establecer el presupuesto del trabajo encargado; en tal caso, el emperador concedería las sumas necesarias para la realización de la obra.

Una ley del 385 (CTh. 15.1.24 = C. J. 8.11(12).8) dispuso que desde ese año el arquitecto será considerado responsable de la obra que haya realizado durante los 15 años siguientes desde que acabaron los trabajos; y si algún vicio de construcción se manifestaba y causaba un accidente en este tiempo, la obra debía ser reparada con cargo al culpable o a sus herederos (CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 349-353). Esta medida encuentra una posible explicación en los incidentes que se desarrollaron en Roma entre los años 382 a 387. Símaco –que fue prefecto de la ciudad en esa época- nos refiere (*rel.* 25-26; *ep.* 4.70; 5.76) el llamado “asunto del puente y la basílica”: en el año 382 Graciano decidió la construcción de un nuevo puente en Roma. El trabajo fue confiado al arquitecto *Cyriades*, y después a su sucesor *Auxentius*, quienes recibieron las sumas en oro previstas en los presupuestos. El puente estaba casi terminado y los créditos próximos a agotarse cuando se produjo un accidente a finales del 382 que determinó la paralización de los trabajos. El caso se complicó ya que los dos arquitectos, que se llevaban mal entre sí, se acusaban mutuamente de engaño, negligencia y malversación. Ante estos hechos, el

emperador ordenó al prefecto *Bassus*, a finales del 382 o principios del 383, que realizase una investigación y, a tenor de la cual, el prefecto repartió las responsabilidades entre los dos arquitectos. Parece que *Bassus* era más favorable a *Auxentius*, al que se le concede la terminación del puente y la reconstrucción de la basílica de San Pablo Extramuros. Por otro lado, *Cyriades*, tenido como el arquitecto mayormente responsable, recibió un rescripto de Valentiniano II, poco después de la muerte de Graciano, ordenándole acusar a los que estimase culpables de lo sucedido. *Cyriades* acusó entonces a *Auxentius*, lo que motivó una segunda investigación que fue dirigida sucesivamente por *Aventius* y por Símaco. Este último confió la investigación sobre el puente a los *magistri fabrilis artis* (patronos de las corporaciones de *artifices*), los cuales debieron hacer una estimación de los trabajos efectuados por cada uno de los arquitectos y de los daños sufridos. La investigación continuó bajo el prefecto *Pinianus*, sucesor de Símaco. A falta de documentos posteriores ignoramos como terminó el asunto pero, en cualquier caso, Símaco afirma que las sumas entregadas por los arquitectos sirvieron para pagar el puente y la basílica. Véase también, MARTÍNEZ-FAZIO L. M., *La segunda basílica de San Pablo Extramuros. Estudios sobre su fundación*, Roma, 1972; VERA D., *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbis dal 383 al 387. Opere pubbliche e corruzione in Roma alla fine del IV secolo d. C.*, en SDHI, 44, Roma, 1978, pp. 45 ss.

Añadimos que cuando los trabajos de construcción o de reparación de un edificio público terminaban, el prefecto hacía gravar sobre el monumento una inscripción dedicatoria, bien con su nombre o con el del emperador. Para los trabajos importantes en los que el emperador había tomado la iniciativa y para los que se había acordado la concesión de un crédito por el Fisco debía figurar, necesariamente, el nombre del emperador de tal manera que el prefecto estaba obligado a gravar junto al suyo el nombre de aquél, siendo castigado en caso de no hacerlo como autor de un crimen de lesa majestad como sucedía también en provincias respecto de los gobernadores provinciales (CTh. 15.1.31, a. 394 = C. J. 8.11(12).10). MALAVÉ B., *Régimen Jurídico Financiero de las obras públicas en el Derecho Romano tardío: los modelos privado y público de financiación* (prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2007, pp. 174-176.

Por último, señalamos también que los prefectos de la ciudad de Roma fueron responsables de verdaderos expolios de edificios públicos para la construcción o reconstrucción de otros edificios. Así, los prefectos utilizaron los templos antiguos como canteras para aprovisionarse de materiales. Diversas leyes imperiales vinieron a prohibir o limitar esta práctica como, por ejemplo, una constitución de

así como competencias en materia de jurisdicción contenciosa, sea administrativa o judicial.

Para atender a sus múltiples atribuciones el prefecto contaba con un importante plantel de funcionarios subordinados entre los que se encontraban²⁴⁸:

Mayoriano (Nov. Maior. 4) la cual establecía que, en caso de incumplimiento, el prefecto sería castigado con una fuerte multa y sus *officiales* con diversas penas infamantes, como incluso, el apaleamiento y la amputación de una mano. Ahora bien, si la necesidad del momento impusiese recurrir a los materiales de un edificio antiguo, el prefecto debía someter la cuestión al Senado y después dirigir un informe al emperador, que decidiría en última instancia. VARELA MATEOS E., *La reconstrucción de los edificios privados en la Roma clásica*, en Estudios en homenaje al profesor Hernández-Tejero, Madrid, 1994, pp. 539 ss.; JIMÉNEZ SALCEDO M. C., *Notas sobre urbanismo en Derecho Romano*, en RGDR (www.iustel.com), 5, 2005, pp. 1 ss.

²⁴⁸A partir de Constantino el *officium* del *praefectus urbi* tuvo cada vez más importancia. Una ley del año 382 insistía sobre el rol ejecutivo del *officium urbanum* de Constantinopla: <<*officiales... per quos statuta complentur ac necessaria peraguntur*>> (CTh. 14.10.1). En realidad el papel del *officium* y de los oficiales más elevados del mismo era determinante teniendo en cuenta que los prefectos estaban poco tiempo en el cargo. En este sentido, Símaco (*rel.*, 34,6; *ep.* 7,96) nos cuenta de forma sugestiva la independencia de los oficiales que sacaban dinero de las cajas que ellos dirigían en nombre del prefecto sin advertirle de este hecho. Numerosas leyes confirman que el *officium* era responsable de las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, al igual que el prefecto, y que podía ser castigado al mismo tiempo que éste con una multa. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, pp. 218-220, nos refiere que esta solidaridad del funcionario y de su *officium* existía en los reinados de Constancio II, así como en los de Graciano y Honorio, mientras que Valentiniano II hizo pesar la carga sobre el prefecto; por ello, en esta época, los prefectos cuya responsabilidad era mayor que la de su oficina tuvieron especial interés en controlar de cerca la actividad de sus empleados. Por el contrario, el *officium* sobre el que recaía una parte de la responsabilidad tenía el derecho y el deber de resistirse al prefecto en la aplicación de sus ordenes injustas (CTh. 12.1.85, a. 381 = C. J. 10.32(31).33) y, en este sentido, el “buró”

- El *praefectus vigilum* que era un funcionario perteneciente al rango de los *spectabiles* el cual estaba encargado de la vigilancia de los incendios que se producían en la ciudad de Roma tanto de día como de noche, junto con otras funciones meramente administrativas, y tenía competencias jurisdiccionales como la de enjuiciar a los incendiarios o a los ladrones de objetos en baños públicos²⁴⁹.
- El *praefectus annonae* estaba encargado de las distribuciones gratuitas de víveres a la plebe de la ciudad y gozaba de competencias jurisdiccionales sobre las corporaciones

vigilaba la actividad prefectoral y podía servir de freno a la ambición del prefecto de la ciudad (el papel de “espía oficial” de la Corte del prefecto fue atribuido al *princeps* del *officium*). De este modo, el *praefectus urbi* era vigilado en Roma por un agente del *magister officiorum* así como por sus propios empleados.

²⁴⁹DE MAGISTRIS E., *La militia vigilum della Roma imperiale*², Roma, 1898; REYNOLDS P. K. Baillie, *The vigiles of imperial Rome*, Oxford, 1926; GUARINO A., *Le notti del praefectus vigilum*, en *Labeo* 8.3, Napoli, 1962, pp. 248-350; CAPPONI S.-MENGOZZI B., *I vigiles dei Cesari. L'organizzazione antincendio nell'antica*, Roma, 1993; SABLAYROLLES R., *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Roma, 1996; NICOSIA R., *Il praefectus vigilum nella Nov. XIII di Giustiniano. Bilinguismo a Costantinopoli tra ideologia ed ermeneusi testuale*, en *Mediterraneo antico*, 6, n. 1, Pisa, 2003, pp. 469 ss.; SARACHO J. T., *El servicio de vigiles en Roma*, en *Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos* (coord. E. Crespo/M^a. J. Barrios), vol. 3, Madrid, 2001, pp. 195 ss.; FERNÁNDEZ ROSÁENZ A., *El cuerpo de vigiles*, en *Revista General de Derecho Romano (RGDR)*, www.iustel.com, 2, Madrid, 2004; WALLAT K., *Sequitur Clades.- Die Vigiles im Antiken Rom. Eine zweisprachige Textsammlung*, Frankfurt am Main, 2004; QUINTANA ORIVE E., *Acerca de la regulación jurídica de los baños públicos (balneae) en Derecho Romano*, en *Revista General de Derecho Romano (RGDR)*, www.iustel.com, 14, 2010.

existentes en la capital como, por ejemplo, la de los panaderos (*pistores*) o la de los medidores (*mensores*)²⁵⁰.

²⁵⁰El prefecto de la annona recibía cada año una suma (en el año 434 era en Constantinopla de 611 libras de oro) destinada a comprar el trigo dirigido a atender las necesidades alimenticias de la población estando obligado por ello a rendir cuentas al Senado. El *arca frumentaria* estaba bajo la responsabilidad del *praefectus urbi* y de su oficio desde el año 331 (con anterioridad era competencia del *praefectus annonae*) y estrechamente relacionada con el *canon frumentarius* y las distribuciones de pan.

Ahora bien, en épocas de necesidad, los recursos ordinarios del *arca frumentaria* no eran suficientes y en estos casos había que obtener créditos adicionales, normalmente recurriendo al Senado. Los senadores podían entonces excepcionalmente controlar los registros de la caja y el uso hecho de las sumas que ellos habían aportado (CTh. 14.16.1).

Toda malversación de dinero o de trigo efectuada en perjuicio de la caja frumentaria era castigada severamente: nos cuenta Símaco en *rel.* 37 que por diversas causas el *arca frumentaria* no pudo hacer frente a los gastos; concretamente nos dice que *personae tenues* (pequeños personajes) buscaban recursos de forma ilegal y que se produjeron numerosas denuncias por ello. Estas personas eran probablemente los *numerarii* del *officium urbanum* que eran los que gestionaban materialmente la caja; las quejas presentadas les apuntaban directamente pero alcanzaban también al prefecto urbano que era el responsable superior - este prefecto era *Bassus* que ejercía su cargo en el año 382 -. *Bassus* recibió una denuncia después de su salida del cargo comenzando la investigación del proceso en el año 384 la cual fue llevada a cabo por el *vicarius urbis* y por Símaco que era prefecto del pretorio ese año. En el curso de la investigación resultó que el *officium urbanum* -y principalmente el *adiutor-primiscrinus*- tuvo una participación en este asunto. La investigación del proceso de *Bassus* se reanudó más tarde, posiblemente en el 385, después de la sustitución de Símaco, examinándose detenidamente los registros del *arca frumentaria* y del *arca olearia* y se descubrió el nombre del culpable que era uno de los principales funcionarios del oficio. Valentiniano II fue informado por el prefecto *Pinianus* y por el vicario *Helenius* y reveló al Senado el nombre del culpable en una *oratio* dirigida a la asamblea; posteriormente el emperador dirigió al vicario - el 5 de agosto de 386 - un edicto (CTh. 12.11.2) en el que se pronunciaba el siguiente veredicto:

- El *comes formarum* o *curator aquarum* se ocupaba junto con sus oficiales (*aquarii*) de los acueductos que abastecían de agua a la ciudad²⁵¹.

pena de muerte para los *primates officii* (el *princeps*, el *cornicularius*, el *adiutor-primiscrinus*, y puede que también el *primiscrinus-numerarius*) ya que se reconocía su culpabilidad, y una multa de 20 libras de oro para el *iudex*, es decir, el ex-prefecto *Bassus* como responsable último de la caja. Esta sentencia estableció prácticamente la inocencia personal de *Bassus*, pero le condenaba ya que el funcionario superior respondía también de las malversaciones realizadas por sus propios subordinados.

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., pp. 263 ss.; CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 316-320; PAVIS D'ESCURAC H., *La préfecture de l'annone: service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Paris, 1976; GIARDINA A., *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, en *Sicilorum Gymnasium*, 30, 1977, pp. 65 ss.

²⁵¹En el Alto Imperio la *cura aquarum* estaba dirigida por el *curator aquarum (et Miniciae)* encargado, entre otras funciones, del mantenimiento y conservación de los acueductos públicos. Hacia el año 330 el servicio de aguas pasará a depender del prefecto de la ciudad que será ayudado en este ámbito por el *curator aquarum*. En el siglo V dicho servicio estará dirigido por el *comes formarum* bajo las órdenes del prefecto (CIL. VI, 1765: *Iulius Felix Campanianus*).

Sobre el sistema de abastecimiento de aguas en Roma citamos: ASHBY T., *The Aqueducts of Ancient Rome*, Oxford, 1935; HAINZMANN M., *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadtrömischen Wasserleitungen*, Wien, 1975; ROBINSON O. F., *The water supply of Rome*, en SDHI, 46, Roma, 1980, pp. 44 ss.; PALMA A., *Le curae pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980 (rist. 1991), pp. 196 ss.; PACE P., *Gli acquedotti di Roma e il De Aquaeductu de Frontino*², Roma, 1986; BRUUN C., *The water supply of Ancient Rome: a Study of Roman imperial Administration*, Helsinki, 1991; EVANS H. B., *Water Distribution in Ancient Rome: The Evidence of Frontinus*, Ann Arbor, 1994; KOLOSKI-OSTROW A. O., et al., *Water in the Roman Town: New Research from Cura Aquarum and the Frontinus Society*, en *Journal of Roman Archaeology (JRA)* 10, Portsmouth (Rhode Island), 1997, pp. 181 ss.; GEISSLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin, 1998; TAYLOR R.,

- El *comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum* se ocupaba del mantenimiento del río Tíber y de las cloacas de la ciudad²⁵².
- El *comes portus*, funcionario público encargado de la administración y de la policía del puerto y del faro de Ostia²⁵³.
- El *magister census* estaba encargado de reunir y conservar todos los datos necesarios para los asientos de las contribuciones directas así como de la insinuación para los

Public needs and private pleasures. Water distribution, the Tiber river and the urban development of Ancient Rome, Roma, 2000; DE KLEIJN G., *The water supply of Ancient Rome*, Amsterdam, 2001; HODGE A. T., *Roman Aqueducts and water supply*², London, 2002; CATALANO R., *Acqua e acqueducti romani*. Fontis Augustei Aquaeductus, Napoli, 2003; PEACHIN M., *Frontinus and the curae of the curator aquarum*, Stuttgart, 2004; ERNSTBERGER N., *Untersuchungen zur Infrastruktur Roms in der Kaiserzeit. Die Versorgung Roms mit Wasser, Waren and Energie*, Hamburg, 2005; GONZÁLEZ J., *Frontino y el ordenamiento jurídico del abastecimiento de aguas en Roma*, en AA.VV., *El agua y las ciudades romanas...*, op. cit., pp. 33 ss.; AA.VV., *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain* (Actes du colloque international, Université de Laval, octobre 2006), Roma, 2008. Sobre la *lex Quinctia de aquaeductu* (9 a. C.), citada por Frontino (*De aquaed.*, 129.4), con una finalidad de tutela de los acueductos: SAMPER F., *Revista de derecho de aguas*, 4, Santiago de Chile, 1993, pp. 155-157. GEISLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin, 1998; PEACHIN M., *Frontinus and the Curae of the Curator Aquarum*, Heidelberg, 2005.

²⁵²LE GALL J., *Le Tibre, fleuve de Rome dans l'Antiquité*, Paris, 1953; VIGANÒ R., *Appunti sulla cura riparum et alvei Tiberis: gestione diretta o indiretta*, en Studi in onore di G. Scherillo, II, Milano, 1972, pp. 803-808.

²⁵³HOUSTON G. W., *The administration of Italian sea ports during the first three centuries of the Roman Empire*, en D'ARMS and KOPFF (eds.), *The Seaborne Commerce of Ancient Rome*, Rome, 1980, pp.

testamentos y donaciones. Este funcionario contaba con empleados, los *censuales*, que estaban bajo su responsabilidad²⁵⁴.

- Los *curatores operum publicorum* eran los encargados de la construcción y conservación de las obras públicas y de las vías públicas²⁵⁵.

b) EL *PRAEFECTUS URBI* DE CONSTANTINOPLA.

Por lo que hace a la ciudad de Constantinopla, nos refiere también SERRIGNY²⁵⁶ que *l'organisation administrative de la capitale*

157-71; COLINI, *Il porto fluviale del foro Boario a Rome*, en D'ARMS and KOPFF (eds.), *op. cit.*, pp. 43-53.

²⁵⁴DE DOMINICIS M. A., v. *magister (navis, populi, equitum, officiorum, admissionum, memoriae, epistolarum, census, vici, militum)*`, NNDI, X, Torino, 1964, pp. 26-28; D'ELIA F., *Nuove osservazioni sull'officium del magister census*, en Quaderni Catanesi, 6, 1984, pp. 337 ss.

²⁵⁵En las provincias había también *curatores operum* colocados bajo la autoridad de los procónsules y demás gobernadores provinciales, y así Ulpiano cuando habla de los deberes de un procónsul nos dice en D. 1.16.7.1 (Ulp., 2 *de off. proc.*): <<... *curare debet curatoresque operum diligentes sollemniter, sollemniter praeponere...*>>.

PONTE ARREBOLA V., *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano* (prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2007, pp. 218 ss.

de l'empire d'Orient avait la plus grande analogie avec celle de l'empire d'Occident`. Así, tomando como modelo la ciudad de Roma, el *praefectus urbi*, instituido por Constancio en el año 359, aparece también como el gran dignatario de Constantinopla con las mismas atribuciones administrativas y jurisdiccionales y con análogos funcionarios bajo su cargo (*praefectus vigilum, praefectus annonae* ...).

²⁵⁶SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, op. cit., I, p. 283.

C) CONCLUSIONES

I.

La organización de la Administración Pública en el Bajo Imperio se caracteriza por su centralización basada en el principio de jerarquía y en la creación de una fuerte burocracia diferenciada del régimen de las magistraturas republicanas en la duración en el cargo, la retribución de los funcionarios, y el fundamento de su competencia que se entendía delegada y ejercida en representación del príncipe. Por lo que hace a la responsabilidad penal de los magistrados por el desempeño de sus funciones, ésta se hizo exigible a finales de la República básicamente a través de las *leges repetundarum* que inicialmente hacían referencia a las exacciones ilícitas exigidas por los gobernadores provinciales pero que, a lo largo del Principado e Imperio, y en virtud de la labor de la jurisprudencia y de la legislación imperial, se fue extendiendo a otros supuestos de la actividad administrativa ampliándose progresivamente su ámbito de aplicación para atender no sólo al interés de los particulares lesionados por la conducta ilícita de los funcionarios, sino también para defender el interés general de la comunidad política romana de preservar la honestidad de sus funcionarios y garantizar el correcto desarrollo de las funciones públicas. En este sentido, asistimos en época de Diocleciano y Constantino a la creación de un nuevo

Derecho Penal disciplinario relativo a la actuación administrativa de los funcionarios públicos.

II.

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los magistrados y funcionarios derivada de actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, causantes de algún daño o perjuicio a los ciudadanos, nos encontramos con que en el Derecho Romano no estaban nítidamente separadas las categorías de responsabilidad civil y responsabilidad penal derivadas de un acto ilícito, con la consecuencia de que sólo cabía en estos casos la posibilidad de que el ciudadano perjudicado –o cualquier ciudadano cuando se tratase de una acción popular– ejercitase una acción penal privada dirigida exclusivamente a la imposición de una pena pecuniaria contra el magistrado o funcionario causante del daño sin que, como sucede hoy en día en nuestros ordenamientos jurídicos, la responsabilidad civil del magistrado se imputase también al “ente público” -ya sea el *Populus Romanus*, ya sea el municipio - en cuyo nombre y por cuya cuenta realizó el acto dañoso. Así sucede en el campo de la expropiación forzosa de bienes de los particulares por causa de utilidad pública cuando un ciudadano consideraba insuficiente el precio fijado por el magistrado

correspondiente, en cuyo caso podía ejercitar una acción penal privada contra el mismo por el importe de la lesión sufrida por dicho particular.

Ahora bien, respecto de los municipios debemos puntualizar que en la jurisprudencia clásica y en las leyes imperiales se sentó la regla en virtud de la cual los municipios eran civilmente responsables de la actuación ilícita de los magistrados municipales en la medida en que aquellos se hubiesen enriquecido de dicha gestión.

III.

La multiplicidad de supuestos que pueden dar origen a la responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos romanos, así como la gran diversidad de órganos políticos, de competencias a veces concurrentes en una misma materia, y la ausencia en las fuentes jurídicas de un deslinde conceptual entre las diversas categorías de responsabilidad de los funcionarios, nos obliga a realizar un esquema de los diferentes órganos que integran la Administración imperial romana haciendo una somera referencia a sus funciones para de esta manera ir entresacando –fundamentalmente en las notas de pie de página- supuestos de responsabilidad de los funcionarios públicos: a título de ejemplo se hace referencia al deber y responsabilidad que tenían los pretores en época postclásica respecto de la organización de los juegos públicos; asimismo se hace especial mención a la responsabilidad de los prefectos del pretorio que eran las

más altas dignidades del Imperio y que tenían la competencia en materia de recaudación de impuestos siendo los responsables últimos de la gestión del cobro de los tributos y asumiendo la tarea fundamental de vigilar e inspeccionar la actuación de los gobernadores provinciales en este ámbito; el prefecto del pretorio era el juez encargado de conocer las infracciones y los delitos cometidos en el ámbito de sus funciones por los vicarios y los gobernadores provinciales así como por los funcionarios destinados en sus oficinas respectivas. El *magister officiorum* que tenía bajo su dirección y jurisdicción a casi todos los *palatini*, entre los que se encontraban los *agentes in rebus*, era el responsable del *cursus publicus* respecto del cual se producían frecuentes abusos (uso indebido por parte de funcionarios no autorizados o para sus fines particulares, concesión fraudulenta de las *evectiones*, esto es, de los permisos para la utilización del *cursus publicus*, empleo abusivo del servicio de correos por parte de personas no autorizadas o cobro en exceso de este servicio). El *comes sacrarum largitionum* que estaba encargado del establecimiento y organización de los impuestos destinados al Fisco como eran los *vectigalia* o la *collatio lustralis* y que tenía entre sus funciones el control de la recaudaciones de los impuestos por parte de los gobernadores provinciales; a estos efectos enviaba a los palatinos competentes en esta materia lo que, a tenor de diversas fuentes literarias y jurídicas, dio lugar a la creación de ámbitos de corrupción y de abusos por parte de estos frente a los administrados; destacamos también la actuación del *comes sacrarum*

largitionum respecto de la malversación de fondos públicos realizados por los *praepositi thesaurorum*, encargados de los depósitos del Fisco, los cuales recogían el oro, la plata y otros productos preciosos aportados por los contribuyentes y destinados a las sagradas liberalidades.

IV.

La organización administrativa imperial romana se basaba en el poder emanado del emperador que recaía sobre los gobernadores provinciales y los magistrados municipales, a diferencia de lo que ocurría en la República en la que el poder emanaba del pueblo que elegía a los magistrados. Los gobernadores provinciales gozaban de una gran autonomía política y jurisdiccional configurándose como un elemento esencial de la Administración del Bajo Imperio siendo en la práctica débiles los mecanismos de control ejercidos sobre los mismos por la Administración Central lo cual dio lugar a situaciones de impunidad por parte de ellos. Los gobernadores eran responsables de la gestión y recaudación tributaria dentro de sus provincias que se llevaba a cabo por los decuriones municipales; dichos gobernadores debían seguir las instrucciones y estaban sujetos a la inspección de los prefectos del pretorio y, más concretamente de los palatinos enviados por el *comes sacrarum largitionum*. El Código Teodosiano y el de Justiniano contienen un amplio régimen jurídico relativo a la

responsabilidad de los gobernadores y de los cobradores de impuestos (*susceptores* y *exactores*) situados bajo sus órdenes por conductas tales como concusión, cobro excesivo, malversación de fondos recaudados, negligencia en el cobro, cohecho, etc...

Asimismo, los gobernadores provinciales se configuraban como los *iudices* competentes para conocer en primera instancia las demandas judiciales y los crímenes y delitos cometidos en su territorio, de tal manera que también la legislación imperial contiene un amplio y pormenorizado régimen jurídico relativo a los delitos y faltas, por acción u omisión, que cometan los gobernadores en este ámbito, desde el supuesto más grave de prevaricación del juez parcial hasta casos tales como los de denegación de justicia o la exacción indebida de costas procesales (*sportulae*). Los gobernadores provinciales contaban con un *officium* integrado por asesores y funcionarios que responden también de la actuación ilícita de aquellos.

V.

El gobierno y la administración de los municipios en época imperial correspondía a los decuriones (curiales) los cuales formaban en las diferentes ciudades un orden (*ordo decurionis*), configurándose como una especie de nobleza hereditaria al ser nombrados de por vida y dado que su condición se transmitía hereditariamente. Los decuriones eran los responsables de la recaudación directa de los tributos ante los

gobernadores provinciales. El Derecho Romano contiene una serie de normas y principios en relación con la responsabilidad de dichos magistrados cuando realicen negocios con terceras personas en representación de sus municipios por los posibles daños y perjuicios causados a estos por su actuación dolosa o negligente. Asimismo, las fuentes recogen normas relativas a la responsabilidad del magistrado municipal por la actuación llevada a cabo por su colega en el cargo. Sólo responde en caso de que aquél, su garante y su *nominator* fuesen insolventes. Finalmente, los juristas romanos destacaron la analogía existente entre la responsabilidad de los magistrados municipales frente a los ciudadanos y la de los tutores respecto de sus pupilos

VI.

Las ciudades de Roma y Constantinopla estaban sujetas a un régimen especial bajo el gobierno y jurisdicción del *praefectus urbi*, el cual contaba a su vez con un *officium* integrado por funcionarios que respondía, en cierta medida y según las épocas, solidariamente de la actuación de aquél; como contrapartida dicho *officium* ejerció por disposición de la ley una verdadera labor de control de la actividad del prefecto. El *praefectus urbi* era el responsable último de la construcción y reparación de los edificios públicos en Roma y, a través del *praefectus annonae*, de la distribución de alimentos a los habitantes de la ciudad, dándose en estos ámbitos casos de malversación de fondos públicos

que fueron objeto de investigación y sanción por parte de los emperadores y de los prefectos del pretorio tal y como nos relata Amiano Marcelino.

PARTE II

CAPÍTULO III

**LA RESPONSABILIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS EN RELACIÓN CON EL
ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA
ANTIGÜEDAD TARDÍA.**

A) INTRODUCCIÓN.

La selección para el desempeño de un empleo público en los *officia palatina* o en los *officia* de los prefectos quedó recogida en numerosas constituciones imperiales que establecieron los requisitos para el acceso de los diferentes funcionarios a la Administración Pública romana²⁵⁷. Asimismo, las leyes municipales²⁵⁸ regularon también los requisitos para el nombramiento de los magistrados de las ciudades según criterios que debían suponerse uniformes como, por ejemplo, tener la condición de ingenuo (*ingenuus*), no estar incurso en una causa de infamia, y tener una edad mínima de veinticinco años²⁵⁹.

Para su entrada en la *militia* los candidatos debían pasar un examen previo (*probatio* o *examine*) en su ciudad de origen o de residencia sobre distintos aspectos relacionados con su nacimiento,

²⁵⁷VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público...*, *op. cit.*, pp. 227 ss.

²⁵⁸Como la *lex municipii Malacitani*, 90.

²⁵⁹DE MARTINO F., *Storia della costituzione...*, *op. cit.*, vol. IV.2, p. 629.

condición y ortodoxia religiosa²⁶⁰; no obstante, por lo que se refiere a las competencias técnicas para el desempeño del cargo, veremos que sólo para ocupar determinados puestos se exigía al aspirante un examen o prueba de idoneidad.

Con carácter general, podemos afirmar que si los candidatos hubieren sido seleccionados sin contar con alguno de los requisitos (físicos, morales, cualificación requerida...) exigidos en la ley para entrar a ocupar un cargo en la Administración se establecía en la mayoría de estos casos la responsabilidad de quien propuso al candidato siendo aquél sancionado con penas pecuniarias y además teniendo lugar la expulsión del seleccionado (CTh. 1.1.9; CTh. 1.12.4; CTh. 7.13.8-9; etc...)²⁶¹.

²⁶⁰CTh. 7.2.1-2; CTh. 6.27.4; CTh. 6.30.15; CTh. 10.22.6 (=C. J. 11.10(9).4); C. J. 2.7.11; C. J. 2.7.17, etc ...

²⁶¹ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., pp. 57 ss.

B) REQUISITOS FÍSICOS.

1. EDAD.

Un fragmento de Pomponio recogido en I. J. 1.6.9 [=D. 1.6.9, Pomp., 16 *ad Q. Muc.*] nos dice que <<el hijo de familia es tenido en lugar del padre de familia en las cosas públicas, como para que desempeñe la magistratura o sea nombrado tutor>>²⁶²; vemos por tanto, a tenor dicho fragmento, que el hecho de estar bajo la patria potestad no impedía desempeñar un cargo público; sin embargo, sí se exigía una edad mínima para la entrada en un puesto administrativo, y así tenemos diversos textos que hacen referencia a este requisito: Escévola, en un fragmento que será estudiado más adelante (D. 32.102.2; Scaev., 17 *dig.*), alude a esta condición: <<*Sempronio, alumno meo, illud et illud: et cum per aetatem licebit, militiam illam cum introitu comparari volo*>>. Más tarde, Ulpiano nos refiere una *iuris regula* contenida en D. 50.17.2.1

²⁶²LATORRE A., *Sobre la capacidad jurídica de Derecho público del "filius familias"*, en Estudios homenaje a Ursicino Álvarez, Madrid, 1978, pp. 251 ss.

(Ulp., 1 Sab.) en la que se establece: <<*item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere*>> (‘‘el impúber debe abstenerse de todas las funciones civiles’’), y el mismo jurista en D. 50.4.8 (Ulp., 11 ed.) nos dice que <<no debe admitirse a los menores de veinticinco años en la administración de las ciudades...>>²⁶³, mientras que para la contribución a los *munera patrimonii* era indiferente que el gravado fuese menor de veinticinco años²⁶⁴.

Atendiendo a estas fuentes podemos comprobar que desde el Principado la edad idónea (*perfecta* o *legítima aetas*) para desempeñar un cargo público era a partir de los veinticinco años²⁶⁵, si bien, pese a

²⁶³ *Ad rem publicam administrandam ante vicesimum quintum annum, vel ad munera, quae non patrimonii sunt, vel ... honores admitti minores non oportet ...*

²⁶⁴ LOVATO A., *Sul “honor decurionatus” nel I libro delle “Disputationes ulpianee*, SDHI, 56, Roma, 1990, p. 210. También en C. J. 10.42(41).7 los emperadores Diocleciano y Maximiano responden a Alejandro que los menores de edad suelen estar sujetos a las cargas de los patrimonios, por lo que no tienen inmunidad y deben soportar los cargos que exigen gastos.

²⁶⁵ Recordamos que ya en época republicana la *lex Villia Annalis*, del año 180 a. C., estableció la edad mínima de acceso a cada una de las magistraturas: treinta y un años para la cuestura, treinta y siete para la edilidad, cuarenta para la pretura, y cuarenta y tres para el consulado (Tit. Liv., 40, 44,1: <<*eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio tribuno plebis, quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque. Inde cognomen familiae inditum ut Annales appellarentur*>>; Cic., *de off.*, 2,17,59).

BRASSLOFF S., *Aetas legitima*, en ZSS, 22, Weimar, 1901, pp. 169 ss.; ROTONDI G., *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1922, pp. 278-279; ASTIN A. E., *The Lex Annalis before Sulla*, Bruxelles, 1958; RÖGLER G., *Die Lex Villia Annalis. Eine Untersuchung zur*

esta regla, Ulpiano en D. 1.10.1.2 (Ulp., 2 de off. cons.) [=D. 40.2.20.4] prevé el caso en el que un cónsul sea menor de veinte años, diciendo que <<no existe duda alguna que los cónsules pueden manumitir ante sí a sus propios esclavos; pero si acaeciere que el cónsul es menor de veinte años, no podrá manumitir ante sí ...>>, y además, no olvidemos que los menores de veinticinco años podían obtener al cumplir los veinte, por rescripto del emperador, la *venia aetatis* que les concedía la plena capacidad de obrar aunque no hubiesen alcanzado todavía aquella edad, normalmente exigible para la adquisición de tal capacidad (CTh. 2.17.1; C. J. 2.44(45)).

Por lo que hace al ámbito municipal, señala SANTALUCIA que *“salvo in ipotesi del tutto eccezionali, per la giurisprudenza classica i venticinque anni rappresentano l'età a partire dalla quale i minori possono assumere gli honores de essere assoggettati ai carichi municipali, patrimoniali o non patrimoniali che siano”*²⁶⁶. Calístrato en D. 50.2.11

Verfassungsgeschichte der römischen Republik, en KLIO 40, Frankfurt am Main, 1962, pp. 76 ss.; SUMNER G. V., *The Lex Annalis under Caesar*, en Phoenix, 25, Toronto, 1971, pp. 246 ss.; EVANS R. J. – KLEIJWEGT M., *Did the Romans like young men? A study of the Lex Villia Annalis: causes and effects*, ZPE, 92, Bonn, 1992, pp. 181-195; BECK H., *Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik*, Berlin, 2005, pp. 335 ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*, op. cit., p. 132; VIÑAS A., *Instituciones políticas y sociales de la Roma Antigua*, op. cit., p. 133.

²⁶⁶SANTALUCIA, B., *I <<libri opinionum>> di Ulpiano*, vol. 1, Milano, 1971, p. 89.

(Call., 1 *cognit.*) nos refiere que no pueden ser elegidos como decuriones los menores de veinticinco años salvo que haya una causa que lo justifique²⁶⁷: solamente en caso de circunstancias particulares (*urgentibus patriae necessitatibus*) podrían los menores de esta edad ser admitidos a la curia²⁶⁸, pero aún en este supuesto no tendrían el derecho a participar en las votaciones (D. 50.2.6.1; Pap., 1 *resp.*). No obstante, debemos añadir que los *impuberes* no podían en ningún caso ser llamados a los *honores* (cargos municipales) aunque “obligue la necesidad por la penuria de hombres”, como se dice en un rescripto dirigido al legado Venidio Rufo y recogido en D. 50.6.3 (Ulp., 4 *de off. proc.*)²⁶⁹.

No obstante, la Tabla de Heraclea (45 a. C.), *vulgo dicta Lex Iulia municipalis*, estableció (L. 89) como edad mínima para poder ser nombrado magistrado municipal la de treinta años, a menos que el munícipe hubiese realizado aquellas actividades o servicios especificados en la *Tabula*, lo que determinaba una dispensa de dicha edad mínima.

²⁶⁷ Este límite de edad será reducido a los dieciocho años en época postclásica (CTh. 12.1.7 y 19). DALLA D., *Ricerche di diritto delle persone*, Torino, 1995, p. 102.

²⁶⁸ Los emperadores Diocleciano y Maximiano en C. J. 7.64.8 responden a Constancio: <<si cuando hubieres sido nombrado decurión, tu padre no lo consintió, y tienes quince años de edad, el gobernador de la provincia, a quien se hubiere recurrido, si viere que eres inhábil para el honor de decurión, revocará el injusto nombramiento, porque a esta edad se auxilia aunque hubieses prescindido de la apelación>>.

²⁶⁹ SANTALUCIA B., *I <libri opinionum> di Ulpiano*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 88-89.

Sin embargo, citamos la opinión de Ulpiano recogida en D. 50.5.2 pr. (Ulp., 3 *opin.*) respecto a la edad del encargado de la compra de trigo

La regla clásica que fija la edad mínima de veinticinco años para el acceso a la curia será recogida implícitamente también por Diocleciano en C. J. 10.50 (49).¹ cuando establece que ningún estudiante sea llamado para desempeñar los *munera* en sus ciudades de origen hasta los veinticinco años: <<... *ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur* >>.

de la ciudad cuando dice: <<no conviene (*non oportet*) que sea llamado para el cargo de la intendencia de la compra de granos el que tiene dieciséis años; pero si en su patria no se guarda ninguna peculiar observancia, se ha de observar la edad legítima (*iusta aetas*) también respecto al nombramiento de los menores de veinticinco años para los cargos u honores>>. Considera, a tenor del fragmento, SANTALUCIA B. (*I <<libri opinionum>> di Ulpiano*, vol. 1, *op. cit.*, pp. 87-88) que si las disposiciones locales lo consienten podían ser llamados a los *munera* y a los *honores* los menores de veinticinco años.

Sobre el *munus sitoniae* o *publica comparatio specierum* que obligaba a los ciudadanos a la venta del trigo u otras *species annonariae* que tenían almacenadas, a un precio fijado por la autoridad y según las necesidades de cada provincia, con la finalidad de aprovisionar a la misma de productos de primera necesidad: vid. C. J. 10.28: <<Del cargo de comprador de trigo para los graneros públicos>> (ed. García del Corral). Concretamente en C. J. 10.28.3 se recoge que: <<el nombramiento del encargado de la compra de granos debe hacerse entre los poseedores a arbitrio y por elección del obispo y de los principales de cada ciudad entre los oficiales de la región, no como les pareciere a estos ni entre las personas que ellos quisieren sino que sean promovidos solamente los oficiales de aquella región que están todavía en ejercicio y que dejaron su cargo. (...) Deben suministrar el trigo no a mayor precio que al que se suele vender en los mercados. El que viole la ley o hubiese permitido que se violara pague una multa de 30 libras de oro>> (ed. García del Corral).

SIRKS A.J.B. –SIJPESTEIJN P.J. –WORP A., *Ein frühbyzantisches Szenario für die Amtswechselung in der Sitonie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem anhang über die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte*, München, 1996.

Sin embargo, el emperador Constantino romperá con estas reglas como resulta, por ejemplo, de CTh. 6.4.1 y 2 en donde se aprecia que el cargo de pretor era desempeñado frecuentemente en esta época por jóvenes menores de veinte años y el de cuestor por menores de dieciséis años²⁷⁰. También PEDERSEN²⁷¹ pone de relieve que fueron admitidos menores para ciertos cargos administrativos y en concreto el Autor cita CTh. 6.24.2 (a. 365)²⁷² y CTh. 7.1.14 (a. 394)²⁷³. Asimismo será Constantino quien rebaje a los dieciocho años cumplidos la edad de entrada en la curia (CTh. 12.1.19, a. 331)²⁷⁴ dado que, ante la dificultad de reclutamiento de los decuriones, algunas ciudades habían

²⁷⁰La pretura y la cuestura constituían en época de Constantino el comienzo de la carrera senatorial.

²⁷¹PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public posts in late antiquity*, en *Classica et Mediaevalia* 31, Aarhus, 1970, p. 180, nt. 68.

²⁷²CTh. 6.24.2 (Impp. Valentinianus et Valens AA. Severum comitem domesticorum): *Domesticorum filios propinquos parvos vel impuberes domesticorum coetibus adgregamus, ita ut non solum matriculis inserantur ...*

²⁷³CTh. 7.1.14 (Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Theodoto magistro officiorum): *Quicumque infantes vel pueri militare coeperunt, sterni eos inter ultimos iussimus, ita ut ex eo tempore, ex quo parere coeperint, locum sibi incipiant vindicare, ut laborum suffragiis incrementa militiae consequantur.*

²⁷⁴CTh. 12.1.19 (Imp. Constantinus A. ad Evagrium): *Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intemperanter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocarunt, ut septem vel octo annorum constitutos nonnullos nominasse firmentur, decernimus, ut omnino nullus in curiam nocogatur, nisi qui decimum et octavo annum aetatis fuerit ingressus...* (=Brev. 12.1.3). SANTALUCIA B., *I <<libri opinionum>> di Ulpiano*, op. cit., pp. 89-91.

llegado a llamar a niños de siete y ocho años para formar parte del senado municipal y ello a pesar de la constitución del mismo emperador emanada cinco años antes, en la cual se establecía que la edad mínima para acceder al cargo de decurión era la de veinte años (CTh. 7.22.2, a. 326)²⁷⁵.

Por lo que hace a la edad máxima para el desempeño del decurionato citamos dos fragmentos: uno de Ulpiano, recogido en D. 50.2.2.8 (Ulp., 1 *disput.*), en el que se establece que los mayores de cincuenta y cinco años no pueden ser llamados contra su voluntad al cargo de decurión²⁷⁶, y el otro de Calístrato en el que se afirma que no pueden ser nombrados decuriones los mayores de cincuenta y cinco años (D. 50.2.11; Call., 1 *cognit.*)²⁷⁷. Señala a este respecto LOVATO que “la fissazione dei limiti di età per il decurionato da venticinque a

²⁷⁵...ut aut decurionatus muneribus obtemperent aut militent, observaturo devotionis tuae officio, ut qui probantur ab annis viginti usque ad viginti et quinque annos aetatem agant.

²⁷⁶DALLA D., *Ricerche di diritto delle persone*, op. cit., p. 102. Véase también, LOVATO A., *Sull honor decurionatus...*, op. cit., pp. 200-205.

²⁷⁷ *Non tantum qui tenerae aetatis, sed etiam qui grandes natu sunt decuriones fieri prohibentur. Illi quasi inhabiles rem publicam tueri ad tempus excusantur, hi vero in perpetuum amoventur: non alias seniores, ne seniorum excusatione iuniores onerentur ad omnia munera publica suscipienda soli relictī. Neque enim minores viginti quinque annis decuriones allegi nisi ex causa possunt, eque hi, qui annum quinquagesimum et quintum excesserunt. Nonnumquam etiam longa consuetudo in ea re observata respicienda erit. Quod etiam custodiendum principes nostri consulti de allegendis in ordine Nicomedensium huius aetatis hominibus rescripserunt.*

*cinquantacinque anni corrispondeva, scrive Callistrato in D. 50.2.11.1 cogn., L. 9, a una longa consuetudo confirmata da alcune norme imperiali*²⁷⁸.

Concluimos constando que no encontramos en las fuentes jurídicas - salvo en las arriba mencionadas: D. 50.4.8; D. 50.5.2 pr.; D. 50.2.11- una edad mínima general para acceder a un cargo público en la Administración romana imperial²⁷⁹. Frente a ello, llama la atención el

²⁷⁸ LOVATO A., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 195, nt. 229.

Esta idea estaría ya presente en época republicana en donde los mayores de sesenta años no participaban en los comicios centuriados ni ejercían, en general, cargos públicos (Festo, v. <<Depontani>> [66.5 s. L.]: <<depontani senes appellabantur, qui sexagenarii de ponte deiciebantur>>; Festo, v. <<Sexagenarios>> [452 L.]: <<iuniores conclamaver ut de ponte deicerentur sexagenarii, qui iam nullo publico munere fungerentur>>). GUARINO A., *Depontani senes*, en *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, pp. 167 ss.; NÉRAUDAU J. P., *Sexagenarii de ponte. Réflexions sur la genèse d'un proverbe*, en *Revue des Études Latines (REL)* 56, Paris, 1978, pp. 159 ss.; SUDER W., *Sexagenarios de ponte. Statut juridique des vieillards dans la famille et dans la société romaine. Quelques remarques et opinions*, en *RIDA* 42, Bruxelles, 1995, pp. 393 ss.; RYAN F. X., *Sexagenarius, the Bridge, and the Centuria Praerogativa*, en *Rheinisches Museum für Philologie (RhM)*, 138.2, Köln, 1995, pp. 188 ss.; MOREAU P., *Les 'depontani senes' romains*, en *Metis. Revue d'Antropologie du Monde Grec Ancien*, n. 5, Paris, 2007, pp. 239 ss.; RAMPAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli, 2008, pp. 88-89.

²⁷⁹ Podemos mencionar, a título de ejemplo, que la edad media de acceso al cargo por parte de altos funcionarios de la Administración central en época del Bajo Imperio, como son el *comes sacrarum largitionum* y el *comes rei privatae*, oscilaba entre treinta y cuarenta años, y también que la edad de aquellos que eran nombrados para estas dignidades al final de su carrera estaba entre los cincuenta y los sesenta años como es el caso de *Cyprianus, comes sacrarum*

hecho de la existencia de una normativa general respecto de la edades mínimas para asumir funciones religiosas en una época en la que los eclesiásticos ejercían funciones cuasi-públicas, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional (*episcopalis audientia*) o en el ámbito de la beneficencia pública (*piae causae*): así, vemos que en Nov. 123. 13 se establece una edad mínima de treinta y cinco años para alcanzar el cargo eclesiástico de presbítero, de veinticinco años para el de diácono o subdiácono, y de dieciocho años para ser lector. Por último, se prohíbe en dicha ley que sea ordenado obispo el menor de treinta y cinco años.

2. SEXO.

Por lo que se refiere a la presencia de la mujer en puestos públicos existe desde antiguo en Roma la *iuris regula* que la excluye de todo cargo político²⁸⁰ como se recoge en un fragmento de Ulpiano (D.

largitionum en el año 524 (Casiód. 8, 21); también señalamos que la edad media de los prefectos de la ciudad de Roma en época de Constantino estaba comprendida entre los cuarenta y dos y los cincuenta y tres años. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 93; CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 413.

²⁸⁰La situación de inferioridad jurídica de la mujer frente al hombre en el mundo antiguo queda patente en numerosos textos del Digesto y del Código de Justiniano; a modo de ejemplo podemos traer a colación el fragmento de Papiniano recogido en D. 1.5.9 (Pap., 31 *quaest.*) en el que se dice que <<*in multis iuris nostri articulis deterior est conditio*

feminarum, quam masculorum>>, o D. 2.13.12 (Call., 1 ed. monit.) que establece que <<las mujeres están excluidas del oficio de cambista (*officium argentarii*), porque es cosa propia de hombres>>; D. 22.4.6 (Ulp., 50 ed.) en donde se dispone que para depositar las tablas de un testamento es preferible el varón a la mujer; C. J. 5.35.1 (a. 224) en el que se determina que <<administrar la tutela es cargo viril, y tal oficio es superior al sexo de la debilidad femenina>>; asimismo, véase también: C. J. 2.13.4; C. J. 2.13.18; C. J. 2.13.21; D. 3.1.1.5. DIXON S., *Infirmity of sex: womanly weakness in roman law*, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 52, Groningen-Bruxelles-La Haye, 1984, pp. 343 ss.; MERCOGLIANO F., *Sulla rilevanza giuridica della divisione dei sessi nell' esperienza romana*, en Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz II, Varsavia, 2000, pp. 597 ss.; MERCOGLIANO F., <<*Deterior est condicio feminarum quam masculorum*>>, INDEX, 29, Napoli, 2001, pp. 209 ss.; CENERINI F., *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna, 2002.

Sin embargo, constatamos que en la vida municipal romana las mujeres desempeñaron importantes funciones en el ámbito religioso o cultural como es el caso de las *flaminicae* o sacerdotisas. MAC MULLEN R., *Woman in public in the roman empire*, en Historia, 29. 2, Wiesbaden-Stuttgart, 1980, pp. 208 ss.; ALFÖLDY G., *Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris*, Madrid, 1973. Destaca ANDREU PINTADO J., *Munificencia pública en la provincia Lusitania (siglos I-IV d. C.)*, Zaragoza, 2004, p. 156, el gran número de actos evergéticos llevados a cabo por estas mujeres como *Flavia Rufina* y *Iulia Modesta* en la provincia de Lusitania en el s. II d. C. “pensando en el posible ascenso a *flaminica provinciae*, que se operaría seguramente a través de una elección realizada en el seno del *concilium provinciae*”. Véase también, DEL HOYO J., *El sacerdocio femenino, medio de integración de la mujer en las estructuras municipales de gobierno*, en AA. VV., *Epigrafía y sociedad en Hispania durante el Alto Imperio. Estructuras y relaciones sociales* (Armani/Hurlet-Martineau/Stylov, eds.), Alcalá de Henares, 2003, pp. 129 ss. Por su parte, M. D. SAAVEDRA GUERRERO ha estudiado también el papel que las mujeres desempeñaron dentro de las asociaciones en época imperial: *La mujer y las asociaciones en el imperio romano*, Santander, 1991; ID., *Las mujeres y las magistraturas colegiales: entre el honor y la función real*, BIDR, 96-97, Milano, 1993-1994, pp. 542 ss.

Citamos sobre esta materia la siguiente bibliografía: HERRMANN C., *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles, 1964; PEPPE L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, pp. 97 ss.; THOMAS Y., *La divisione dei sessi nel diritto romano. Storia delle donne*

50.17.2; Ulp., 1 *ad Sab.*)²⁸¹ en donde se establece que <<las mujeres están excluidas de todos los oficios civiles o públicos; y por esto no pueden ser jueces, ni desempeñar la magistratura, ni postular, ni intervenir por otro, ni ser procuradores>>²⁸²; si bien en D. 5.1.12.2 (17 ed.) Paulo nos refiere que es la costumbre y no el carecer de juicio lo que impide que las mujeres desempeñen funciones públicas como la de juez²⁸³.

in Occidente. vol. 1. *L' Antichità*, Bari, 1990, pp. 103 ss.; KIRBIHLER F., *Les femmes magistrats et liturges en Asie Mineure, (II s. av. J.-C-III s. ap. J.-C.)*, KTEMA, 19, Strasbourg, 1994, pp. 51-75; ARJAVA A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford, 1996, pp. 252 ss.

²⁸¹*Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere ...*

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho privado romano*, 4 ed., Madrid, 2011, p. 200.

²⁸²De igual forma Ulpiano en D. 50.4.3.3 (2 *opin.*) sostiene que: “su mismo sexo les deniega a las mujeres las cargas corporales” (<<*corporalia munera feminis ipse sexus denegat*>>). Sin embargo, vemos como Diocleciano y Maximiano en C. J. 10.42(41).9 responden a Marcia que <<también las mujeres deben participar en los *munera patrimonii*>>. A este respecto, SANTALUCIA B., *I <libri opinionum> di Ulpiano*, op. cit., p. 118, comenta que “*tale costituzione... perseguiva... la finalità ultima de ampliare il più possibile il numero delle persone alle quali potessero addosarsi i carichi municipali*”. Estos emperadores nos recuerdan en C. J. 10.52 (51).5 que ya los emperadores anteriores (*divi parentes nostri*) establecieron que las mujeres participasen en los *munera personalia* o *patrimonii*. Véase también C. J. 10. 64 (62).1 (Imp. Philippus A. Claudio).

²⁸³*Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: dam natura, quidam moribus. natura, ut sordus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est. Moribus feminae et servi, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur.*

Pese a todo lo anterior, podemos añadir que en época imperial la mujer podía adquirir por matrimonio el *status* de *clarissima* como se establece en C. J. 12.1.13 (a. 392): <<elevamos a las mujeres al honor de sus maridos, las ennoblecemos en su linaje, les otorgamos fuero por razón de sus maridos, si posteriormente se uniesen con un hombre de orden inferior serán privadas de la condición anterior y seguirán la condición del segundo marido>>²⁸⁴.

Por último, mencionamos el papel que tuvieron las mujeres que trabajaban dentro de la Administración imperial al servicio de la emperatriz como *ornatrices* (vestidoras), *unctrices* (masajistas), *pedisequae* (pedicuras), etc..., las cuales servían en palacio como camareras (*cubiculariae*, vid. C. J. 12.5.4.2) y estaban encargadas del cuidado de las mujeres de la familia imperial. Se pregunta LOUIS-LOUCAS si dichas cubicularias estaban investidas de una milicia y señala al respecto: “*nullement;... les cubiculariae étaient bien membres,*

²⁸⁴D. 1.9.8 (Ulp., 6 de *fideic.*): <<Las mujeres casadas con personas <<excelentísimas>> se incluyen en la denominación de tales>>.

CHASTAGNOL A., *Les femmes dans l'ordre sénatorial: titulature et rang social à Rome*, en *Revue historique* 262, Paris, 1979, pp. 3 ss.; RAEPSAET-CHARLIER M. T., *Clarissima femina*, RIDA, 28, Bruxelles, 1981, pp. 189 ss.; ID., *Épouses et familles de magistrats dans les provinces romaines aux deux premiers siècles de l'Empire*, en *Historia*, 31, Wiesbaden-Stuttgart, 1982, pp. 56 ss.; CHASTAGNOL, A., *La législation du clarissimat féminin de Sévère Alexandre à la fin du IVe siècle*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Constantiniana. III Convegno internazionale*, Perugia, 1983, pp. 255 ss.

*mais non titulaires de la militia dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions*²⁸⁵, lo cual se contrapone a la condición que se reconocía a los hombres que ejercían funciones similares en el palacio imperial bajo las órdenes del *praepositus sacri cubiculi*.

3. SALUD FÍSICA Y MENTAL.

Otro requisito necesario para acceder a un cargo público era ya desde la República²⁸⁶ el que hace referencia al estado físico y a la salud

²⁸⁵LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques et sur celle des offices ministériels depuis l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours*, I, Paris, 1882, p. 469, nt. 91; TREGGIARI S., *Jobs in the household of Livia*, en *Papers of the British School at Rome* (PBSR), 43, Roma, 1975, p. 52: "the roman functionaries are all men, even when they work for imperial women"; GARLAND L., *Byzantine empresses: women and power in Byzantium, AD 527-1204*, London-New York, 1999, pp. 84, 216, 221.

²⁸⁶La posesión de una buena salud física y mental como requisito para desempeñar una magistratura aparece ya referida por Dionisio de Halicarnaso (5.25.3) o por Séneca (*controv.* 4.2), si bien, conocemos casos de personas que desempeñaron magistraturas, a pesar de sufrir defectos físicos graves, teniendo en cuenta los méritos excepcionales de las mismas, como es el caso de *M. Sergius Silus* que fue elegido pretor urbano en el año 197 a. C. después de haber perdido su mano derecha en una batalla (Plin., *N.H.*, 7.28.104; Liv. 32.27.7; 32.31.6; 33.21.9; 33.24.4), o de *Q. Sertorius* que perdió un ojo en acciones bélicas y, sin embargo, obtuvo la pretura en España en el 83 a. C. (Plut., *Sert.* 4 y 6).

DE LIBERO L., *Mit eiserner Hand ins Amt? –Kriegsversehrte römische Aristokraten zwischen Recht und Religion, Ausgrenzung und Integration*, en *Res publica reperta*. Fest. für J. Bleicken, Stuttgart, 2002,

de los funcionarios, sobre todo para ciertos cargos como era el caso de los gobernadores provinciales que debían viajar por toda la provincia en el ejercicio de sus funciones²⁸⁷, o, por razones obvias, el de los militares²⁸⁸. De esta manera, en numerosas constituciones se hace referencia a la salud de los funcionarios como, por ejemplo: C. J. 12.22.4.1 (<<...*ob adversam corporis valetudinem militiae finem...*>>), C. J. 12.21.1 (<<... *quodsi morbo vel aetatis senio capti...*>>), o C. J. 12.19.15 pr. (<<... *veluti senium vel morbum vel aliam necessariam causam...*>>).

pp. 172 ss.; GAGÉ J., *Infirmes, blessés de guerre et marques corporelles dans l'ancienne Rome*, en *Revue des Études Latines (REL)*, 47, Paris, 1969, pp. 196 ss.; RAMPAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi...*, *op. cit.*, pp. 75, 251 ss.

²⁸⁷De esta manera podemos referir que en CTh. 1.5.9 se dice que si los gobernadores provinciales resultan incapaces para prestar el servicio a causa de lesiones o enfermedades corporales (*corpore marcentes*), los prefectos del pretorio debían destituirles del cargo. También en D. 50.5.2.7 (Ulp., 3 *opin.*) Ulpiano nos refiere que el gobernador provincial (*praeses*) que <<observare que está agobiado por vejez o debilidad del cuerpo (*senio et corporis inbecillitate*) de tal forma que no sea capaz para el cargo de llevar caudales dimita y nombre a otro>>.

²⁸⁸En CTh. 7.1.5 (a. 364) se establece que los hijos de veteranos que por causa de una mutilación de guerra queden incapacitados para el servicio militar deberán servir en otros *officia*, y en C. J. 12.36.6 se dice que <<a los que una vez han sido licenciados por inválidos no se les suele conceder el reingreso so pretexto de haber recobrado la salud, pues no son licenciados inconsideradamente, sino que se licencia a los que consta, por denuncia de los médicos y mediante diligente examen del juez competente, *vitium contraxisse*>>.

Los defectos físicos como la sordera, la ceguera o la enfermedad mental²⁸⁹ eran causa de incapacitación para ejercer un cargo en la Administración²⁹⁰ (D. 50.16.113, lav., 14 ex Cass.: “<<*Morbus sonticus*>> est, qui cuique rei nocet”²⁹¹). Así vemos que en D. 5.1.12.2

²⁸⁹En materia de minusvalía física y psíquica en el mundo romano: NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983; GARLAND L., *The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World*, London, 1995.

²⁹⁰Ahora bien, en D. 5.1.6 Ulpiano (6 ed.) nos dice que el ciego (*caecus*) puede desempeñar el cargo de juez: <<*caecus iudicandi officio fungitur*>>. También en D. 3.1.1.5 (6 ed.) el mismo jurista establece que aunque “el ciego privado absolutamente de vista” no puede postular puede seguir disfrutando de la dignidad de senador y desempeñar la función de juez, pero, se pregunta el jurista: ¿acaso podrá desempeñar una magistratura (*numquid ergo et magistratus gerere possit*)?, y después de ponernos el ejemplo de Apio Claudio, que, siendo ciego, asistía a los consejos públicos, nos dice: “en verdad puede uno retener la magistratura ya obtenida, y en absoluto se le prohíbe aspirar a otra nueva, *idque multis comprobatur exemplis*” (trad. García del Corral). KÜSTER A., *Blinde und Taubstume...*, op. cit., pp. 151-152, pone de relieve respecto de D. 3.1.1.3 que “el contenido del fragmento puede incluso sorprender ya que el iudex dentro de la valoración de la prueba puede encontrarse también con la necesidad de una inspección visual (...). En resumen, podemos establecer que los requisitos mínimos para desempeñar el cargo de juez no eran muy elevados”; RAMPAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi...*, op. cit., pp. 250-251.

²⁹¹“<<Enfermedad impeditiva>> es la que perjudica para toda cosa”. Véase también en este sentido la definición que da Venuleyo Saturnino de la expresión <<*morbus sonticus*>> en D. 21.1.65 (Venul., 5 action.). Por otro lado, resulta de interés la distinción contenida en D. 50.16.101.2 (Mod., 9 diff.), donde se contraponen enfermedad temporal y defecto físico: <<*verum est ‘morbum’ esse temporalem corporis inbecillitatem, ‘vitium’ vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est*>> (Es cierto que <<enfermedad>> es una debilidad física temporal y <<defecto>>, un impedimento físico perpetuo, como <fracturarse un talón> o <perder un ojo> pues también el tuerto es ciertamente defectuoso). MARTINI R., *Di nuovo sulla <<definitio>> fra retorica e giurisprudenza*, LABEO 41.2,

(Paul., 17 ed.) se establece que no pueden ser nombrados jueces los que están impedidos por la naturaleza como el sordo, el mudo y el perpetuamente furioso (<<...*Natura, ut sordus, mutus et perpetuo furiosus ... quia iudicio carent*>>²⁹², y en D. 5.1.46 (Paul., 2 quaest.) se dice que una enfermedad perniciosa y constante (*morbus santicus*) exime al juez de su cargo, debiendo ser sustituido por otro (*ergo mutari debet*)²⁹³; asimismo Ulpiano afirma en D. 5.1.18 (Ulp., 23 ed.) que se deberá cambiar (*mutari*) al juez que no pudiese conocer del asunto por sobrevenirle una enfermedad (*infirmirate*), y en D. 50.2.7.1 (Paul., 1 sent.) Paulo nos refiere respecto de la Administración municipal que “el

Napoli, 1995, p. 177; RAMPAZZO N., Quasi praetor non fuerit. *Studi...*, op. cit., pp. 249-250.

²⁹²LANZA C., <<*Sordus mutus*>> in D. 5.1.12.2, LABEO 40.2, 1994, Napoli, pp. 234-236; KÜSTER A., *Blinde und Taubstume im römischen recht*, Köln, 1991, pp. 148-150; LANZA C., *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di diritto classico*, BIDR, 90, Milano, 1987, p. 507; MOLLÁ NEBOT S., *Iudex unus. Responsabilidad judicial...*, op. cit., pp. 67-68.

²⁹³Sin embargo, frente a lo arriba señalado, vemos que se dice al principio del fragmento que el juez nombrado para su cargo permanecerá en él aunque hubiere comenzado a estar loco (*licet furere coeperit*). Esta idea es recogida por Ulpiano también en D. 1.5.20 (Ulp., 38 Sab.): <<el que comenzó a enloquecer (*qui furere coepit*) se reputa que retiene (*retinere*) el estado y la dignidad en que estuvo, y la magistratura y la potestad ...>>, y Papiniano en D. 5.1.39 (Pap., 3 quaest.) refiere que cuando se nombra juez a una persona que está loca <<no dejará de haber juicio porque ese día no pueda juzgar, puesto que la sentencia que hubiese pronunciado una vez recuperado el juicio será válida>>, con lo cual se presupone en el fragmento que la enfermedad es provisional. Véase también, LANZA C., *Impedimenti del giudice...*, op. cit., p. 512; NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale...*, op. cit., pp. 173-174; RAMPAZZO N., Quasi praetor no fuerit. *Studi...*, op. cit., pp. 241 ss.

sordo y el mudo, si en absoluto no oyeran o no hablaran, son excusados de los honores civiles (magistratura municipal), no así de las cargas (*munera*)²⁹⁴.

²⁹⁴ *Sordos et mutus, si in totum non audiant, aut non loquantur, ab honoribus civilibus, non etiam a muneribus excusantur.* Recordamos también la prohibición de ejercer la abogacía que recaía sobre las personas sordas o ciegas (D. 3.1.1.3; D. 3.1.1.5).

Ahora bien, no queda eximido de desempeñar los cargos civiles (*munera civilia*) el que oye poco (*minus audiens*): D. 50.5.2.6 (Ulp., 3 *opin.*).

C) REQUISITOS MORALES. LA INFAMIA COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La honestidad y buena fama eran muy tenidas en cuenta a la hora de seleccionar al futuro candidato para desempeñar un cargo en la Administración imperial²⁹⁵: concretamente en C. J. 12.1.2 se recoge una constitución publicada por Constantino en la que se establece que no

²⁹⁵A este respecto referimos algunas fuentes en las que se alude a la necesidad de que el candidato a un puesto en la Administración sea poseedor de buena fama como C. J. 12.20.5 (<<... *et tam moribus optimis praeditum* ...>>) o D. 50.9.1 (<<... *ut certi de probitate morum* ...>>); también en D. 37.15.1.3, Ulpiano recoge que será indigno de la milicia (*indignus militia iudicandus est*) el que hubiere llamado delincuentes (*maleficos*) a sus padres que además se encargaron de su educación; y en CTh. 1.9.1 (a. 359) [= C. J. 1.31.1] se dice que <<todos los que de indignos nacimientos y de pésima idiosincrasia aspiraron al cuerpo de los *agentes in rebus* o a él fueron incorporados conociéndolo el *magister officiorum*, sean separados (cesados) de vuestro consorcio>> (señalamos la notable intervención del *magister officiorum* en la admisión de nuevos miembros a la *schola* de los *agentes in rebus* si tenemos en cuenta a tenor de CTh. 6.27.1 que hasta el año 395 no se requiere el beneplácito del emperador para las nuevas incorporaciones), idea que se repite en una constitución de los emperadores Honorio y Teodosio recogida en CTh. 6.27.18 (a. 416) en la que se ordena al *magister officiorum* que expulse de la *schola* de los *agentes in rebus* <<*quos vita culpabiles, et origo habet ignobiles, et ex servili foece prorupisse demonstrat ... Quo, remotis abjectis, pessimis, criminosis, spectata militia, in statum pristinum revocata, bonorum virorum collegio frequentetur*>>. DI PAOLA L., *Per la storia degli "occhi del re"*..., op. cit., p. 100.

podrán desempeñar ningún cargo público o dignidad aquellas personas tachadas con nota de infamia²⁹⁶ o que hubiesen cometido algún crimen: <<*neque famosus et notatus, et quos scelus aut vitae turpitudine inquinat,*

²⁹⁶Recordamos que ya en la República la infamia entrañaba la pérdida de todos los derechos políticos (*ius honorum; ius imaginum; ius suffragii*). Concretamente en D. 3.2 (<<*De his qui notantur infamia*>>) se afirma que el ejercicio de la profesión de actor llevaba aparejada la infamia (D. 3.2.1, lul., 1 <dig.>: *Praetoris verba dicunt: infamia notatur ... qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit*); de esta manera, los actores en época de la República no tenían acceso al Senado ni a las magistraturas y vemos que en la Tabla de Heraclea (CIL I² 593) se les excluye del *ordo decurionum* y de otros cargos municipales como son los de *duumviri* o *quattuorviri* (L. 122). FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Observaciones acerca de las nociones de ignominia e infamia en Derecho Romano*, en Homenaje a Juan B. Vallet de Goytisolo, vol. 4, Madrid, 1988, pp. 313 ss.; ID., *Derecho privado romano*, op. cit., pp. 202-203.

En época imperial, podemos referir una constitución recogida en C. J. 10.59(57).1 (Diocleciano y Maximiano) en la que se dice que <<las personas infames, aunque no pueden ostentar ninguno de los honores que se suelen conceder a los hombres de íntegra dignidad, no tienen sin embargo exención de cargos curiales o civiles ...>>. De igual forma se dice en C. J. 12.35(36).3 que los militares licenciados por ignominia, al estar tachados de infamia, no podían disfrutar de ninguno de los honores (*nullis honoribus*) que se suelen conceder a los hombres de íntegra dignidad (vid. C. J. 10.55(54).1). Y en D. 1.22.2 (Marc., 1 *de iud. publ.*) Marciano nos dice, respecto de los declarados infames, que <<aunque las leyes no les prohíben asesorar opino no obstante que, según está establecido también en un decreto imperial que suele citarse, no pueden ejercer el ministerio de asesor>> (ayudantes de los gobernadores provinciales en materia jurisdiccional).

.Sobre esta materia: DUCOS M., *La condition des acteurs à Rome. Données juridiques et sociales*, en Theater und Gesellschaft im Imperium Romanum, coord. J. Blänsdorf, Tübingen, 1990, p. 20; QUINTANA ORIVE E., *Sobre la condición jurídica de los actores en Derecho Romano*, RIDA, 50, Bruxelles, 2003, pp. 302-305; PHANG S. E., *Roman military service: ideologies of discipline in the late Republic and early Principate*, Cambridge, 2008, p. 146.

*et quos infamia ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae patebunt>>*²⁹⁷.

Marciano en D. 48.7.1 pr. (Marc., 14 *inst.*) nos refiere que la *lex Iulia de vi privata* dispuso que el que hubiese sido condenado por este crimen además de sufrir la confiscación de una tercera parte de sus bienes <<*ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in quem ordinem sedeat, neve iudex sit*>>, siendo privado de todo honor <<*quasi infamis*>> en virtud de un senadoconsulto; en el ámbito militar, recogemos lo dispuesto en D. 49.16.4.7 (Arrio Menandro, 1 *de re milit.*):

²⁹⁷ Los glosadores destacaron que la infamia no sólo impide la obtención de oficios y cargos públicos sino que también afecta a las personas que ya los detentaban en el momento de ser tachados de infamia. MASFERRER A., *La pena de infamia en el derecho histórico español. Contribución al estudio de la tradición penal europea en el marco del ius commune*, Madrid, 2001, p. 102; MIGLIORINO F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1985, pp. 154-157.

De igual forma, la regla contenida en C. J. 12.1.2 será posteriormente llevada al Derecho histórico español: *Liber Iudiciorum* (LV); *Costums de Tortosa* (II. 8.2); *Furs de Valencia* (III. 1.8) y Partidas VII, 6,7 en donde se transcribe lo siguiente: << ...e tan grande fuerça a el enfamamiento, que estos atales no pueden ganar de nuevo ninguna dignidad, nin honrra, de aquellas para que deuen ser escogidos omes de buena fama; e avn las que auian ganado ante, deuenlas perder luego que fueron prouados por tales>>; se sanciona, por tanto, que el infame no sólo verá cerradas las puertas de las dignidades sino que también perderá aquéllas que pudiera ostentar con anterioridad a la comisión del hecho o crimen jurídicamente infamante. MASFERRER A., *La pena de infamia en el derecho histórico español...*, op. cit., pp. 150, 177, 301-303.

Igualmente vemos en el ámbito del Derecho canónico medieval que la regla <<*infamibus portae non pateant dignitatum*>> se recoge en el *Corpus Iuris Canonici* [*Sexto Decret.* 5, 12 (*De regulis iuris*), c. 87].

<<no podrán ser admitidos entre los militares los condenados por adulterio, o en algún otro juicio público>>; también en C. J. 10.60(58).1²⁹⁸ (a. 223) se alude a un rescripto del emperador Alejandro Severo que recuerda como ya sus antecesores establecieron que los acusados como reos de un crimen “no debían aspirar a nuevos honores antes de purgar su inocencia”²⁹⁹.

Y en el ámbito municipal, Macer (D. 47.10.40; Mac., 2 *de iud. pub.*) nos refiere una carta del emperador Septimio Severo a Dionisio Diógenes en la que se dice que el condenado por injuria grave no puede pertenecer a la curia: <<... *atrocis iniuriae damnatus in ordine decurionum esse non potest* ...>>; también en un rescripto de Gordiano contenido en C. J. 10.61(59).2 se dice que <<el decurión a quien se le hubiere mandado estar temporalmente desterrado y que cumplido el tiempo hubiere regresado, recobra ciertamente su antigua dignidad, pero

²⁹⁸ *Reos criminis postulatos novos honores appetere non debere, antequam purgarent innocentiam suam, et a divis parentibus nostris et a me saepe rescriptum est.* Vid., D. 50.4.7 (Marcian., 2 *de iud. publ.*).

NASTI F., *L'attività normativa di Severo Alessandro. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006, pp. 25 ss., 109 ss.

²⁹⁹ Sobre la política moralizante de la Administración imperial llevada a cabo en época de Alejandro Severo, GIANGRECO PESSI M. V., *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli, 1988, pp. 95-100.

no es admitido a nuevos honores, a no ser que se hubiere abstenido de ellos tanto tiempo cuanto por su fuga estuvo ausente>>.

Por otro lado, siguiendo con nuestra exposición, vemos que en las ciudades se limita el acceso a las magistraturas municipales a los deudores de las mismas si antes no hubiesen satisfecho lo que deben a su ciudad (D. 50.4.6.1; Ulp., 4 *de off. proc.*)³⁰⁰; de igual forma en las Instituciones de Marciano se recoge un rescripto de Antonino Pío en el que se establece que no pueden desempeñar el cargo de legado de un municipio los deudores de la ciudad³⁰¹ (D. 50.7.5(4) pr.: <<... *debitorem reipublicae legatione fungi non posse*>>; Marcian., 12 *inst.*)³⁰²; tampoco podrán desempeñar dicho cargo aquellos que no tienen capacidad para

³⁰⁰ Ahora bien, Ulpiano, en este mismo fragmento de su libro “*De officio proconsulis*”, matiza, a estos efectos, que son deudores de la ciudad solamente aquellos que han dejado de pagar algo de las deudas contraídas por su administración (*ex administratione reipublicae*), puesto que si no fuesen deudores por su gestión, sino que recibieron de la ciudad una cantidad en préstamo, no tienen por qué ser excluidos de las magistraturas.

No obstante, añade Ulpiano que los que son deudores por su gestión podrán acceder a las magistraturas si dan caución con prendas o fiadores idóneos como dispusieron los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero en un rescripto dirigido a Aufidio Hereniano.

³⁰¹ En este sentido, se dice también en C. J. 11.32(31).1 que el que sea deudor de la ciudad no puede desempeñar en ella ningún cargo honorífico sin haber pagado antes lo que debe.

³⁰² De todas formas, apuntamos que a los deudores del Fisco sí se les permitía que desempeñasen el cargo de legado de la ciudad (D. 50.7.5(4).2).

actuar ante los tribunales (*ius postulandi*)³⁰³ o los condenados a luchar en la arena del circo como recoge Marciano en D. 50.7.5(4).1 mencionando una disposición de los emperadores Septimio Severo y Antonino Caracalla³⁰⁴.

Terminamos este apartado con una serie de normas que reflejan como la honestidad y la buena fama se exigirán también a lo largo de la carrera funcional: así, en CTh. 9.40.11 (a. 367) se sanciona al palatino que se emplee como gladiador: <<*neminem de numinis nostri sacrario prodeuntem harena suscipiat, lanista doceat, saeva meditatio et pugnatrix exerceat; multa si quidem possunt esse supplicia, quibus culpa plectatur*>>; en C. J. 11.41(40).7 (a. 457-467)³⁰⁵ se establece que si el que desempeña un cargo en la milicia se dedica también a la alcahuetería (*lenocinium*) perderá no sólo dicho cargo sino también todos sus bienes; y en C. J. 3.12.9(11) (a. 469) se castiga con la pérdida de la milicia (*ammisionem militiae*) y la confiscación de su patrimonio (*proscriptionem militiae*) al funcionario que en alguna ocasión asista el domingo (*dies dominicus*) a espectáculos como el teatro o el circo; de

³⁰³En D. 3.1.1 se contemplan las personas a las que se les niega el *ius postulandi*.

³⁰⁴Sobre D. 50.7.5(4).1: ROBLES REYES J. R., *La competencia jurisdiccional y judicial en Roma*, Murcia, 2003, p. 118.

³⁰⁵Epítome de la constitución del emperador León tomada de los Basílicos.

igual forma se castigará al ayudante del juez que realice este día festivo cualquier negocio público o privado.

D) REQUISITOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

1. EL REQUISITO DE SUFICIENCIA ECONÓMICA DEL CANDIDATO COMO GARANTÍA DE SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR SU GESTIÓN.

Junto a los requisitos referidos anteriormente, podemos afirmar a tenor de lo dispuesto en las fuentes, que la situación económica y el origen social del aspirante eran tenidos en cuenta también a la hora de pretender el acceso a un cargo público, y así podemos citar la reflexión de BALDO DE UBALDIS que, respecto de los administradores públicos, nos dice que <<la pobreza es causa de muchos delitos>>³⁰⁶. De esta forma se establecía que el candidato debía probar su situación económica para el desempeño de determinados puestos como sucede, por ejemplo, en CTh. 6.4.13 (a. 361) donde se alude a los vicarios que quieran acceder al grado de pretor para lo que era necesario un gran

³⁰⁶BALDO DE UBALDIS, *In VII a XI Cod. lib. comm.*, p. 259 (cit., GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media*, Sevilla, 1974, p. 197).

desembolso de dinero, y en CTh. 12.6.25 (a. 399) que establece que nadie puede pretender acceder a una *praepositura* o *susceptio* sin que previamente el candidato y su garante hubiesen probado su suficiencia económica a juicio del *palatinum officium* del *comes rei privatae*³⁰⁷.

En el ámbito municipal recordamos que ya la *lex Irnitana* (cap. 86) establecía que para alcanzar la condición de *decurio conscriptusve* era necesario tener un patrimonio superior a cinco mil sestercios³⁰⁸. Y citamos también un fragmento de Ulpiano (D. 50.4.6 pr.; Ulp., 4 *de off. proc.*) que recoge un rescripto de Marco Aurelio y Lucio Vero, dirigido a Rutilio Lupo y referido al nombramiento de una magistratura municipal, en el que se dice que <<debe observarse siempre que resulten ser todos los decuriones idóneos y en número suficiente, pero si los hay pobres y arruinados (*tenuēs et exhausti*) y no resultan suficientes para ocupar los cargos municipales (...) tan sólo pueden ocupar las magistraturas aquellos que, por su personal fortuna, pueden tener la dignidad de una magistratura>>³⁰⁹; por último, Calístrato (D. 50.4.14.3;

³⁰⁷DUBOULOZ J., *Le patrimoine foncier dans l'Occident romain: une garantie pour la gestion des charges publiques (Ile-IVe siècle)*, en *Histoire et Sociétés Rurales*, 19, 2003, pp. 15 ss.

³⁰⁸LAMBERTI F., <<*Tabulae Irnitanae*>>. *Municipalità e <<ius romanorum>>*, Napoli, 1993, pp. 35-36, señala que *''tale principio censitario è attestato ad esempio, nelle fonti letterarie, da Plinio (ep. 1.19.2: Municeps tu meus... esse autem tibi centum milium census, satis indicat quod apud nos decurio es), per il caso di Comum''*.

³⁰⁹Si bien los decuriones podían obtener alimentos si se encontraban en la indigencia, especialmente si ésta se debía a su

Call., 1 *de cognit.*) señala que para el desempeño de un cargo municipal se ha de considerar entre otros requisitos << ... si sus bienes podrán ser suficientes para el cargo impuesto ...>>.

El requisito de suficiencia económica aparece sin duda como la mejor garantía en caso de que el funcionario incurriese en algún tipo de responsabilidad por daños y quedase, por tanto, obligado a indemnizar dichos daños con cargo a su propio patrimonio.

Sin embargo, observamos que para los puestos administrativos “menos atractivos” no se tenía en cuenta la riqueza del candidato: a modo de ejemplo, mencionamos CTh. 12.1.133 (a. 393) [=C. J. 12.59(60).4] en donde se dice que <<no se prohíbe que militen en el número de los *apparitores* (alguaciles) los que tienen muy pequeña cantidad de bienes familiares>>³¹⁰, e incluso se llegó a permitir en épocas de crisis la admisión en el servicio militar de esclavos, como se contempla en CTh. 7.13.16³¹¹ (a. 406) en donde se establece que en tiempo de guerra los esclavos también debían ser soldados (*servi apti*

generosidad para con su ciudad, como se recoge en D. 50.2.8 (Hermog., 1 *iur. epit.*): <<*Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni permissum est, maxime si ob munificentiam in patriam patrimonium exhauserint*>>.

³¹⁰*Qui vel exiguam rei familiaris substantiam habent, militare in apparitorum non vetentur.*

³¹¹*Servos etiam huius auctoritate edicti exhortamur, ut cum primum se bellicis sudoribus offerant, praemium libertatis, si apti ad*

ad militiam) y que como recompensa obtendrían su libertad y un sueldo de dos sólidos (*pulverati etiam nomine binos solidos accepturi*)³¹².

2. EL ORIGEN SOCIAL DE LOS CANDIDATOS COMO CONDICIÓN PARA EL INGRESO EN LA ADMINISTRACIÓN IMPERIAL.

a) CTh. 7.2: <<*Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*>>.

En primer lugar, por lo que hace al origen social de las altas dignidades podemos constatar el hecho de que la mayoría de ellas fueron ocupadas por personas cercanas al círculo del emperador; así, gracias al cuadro sinóptico que ha realizado DELMAIRE³¹³ sobre los condes financieros (*comes sacrarum largitionum* y *comes rei privatae*)

militiam arma susceperint, pulveratici etiam nomine binos solidos accepturi.

³¹²GIUFFRÉ V., *Su i "servi" e la "militia" secondo il codice Teodosiano*, LABEO 24, Napoli, 1978, pp. 191-197; ID., <*lura*> e <*Arma*>. *Intorno al VII libro del codice teodosiano*³, Napoli, 1983, p. 115.

³¹³DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 96-101.

vemos que, o bien son familia del emperador o de parientes que habían estado al servicio de éste, como es el caso de *Eucherius* (CRP, a. 379) que era tío de Teodosio I, o el de *Eutychianus* (CSL, a. 388) que era hijo de un prefecto del pretorio; también la entrada en estos puestos se debía con frecuencia a las recomendaciones de altos personajes, como sucedió con *Palladius* (CSL, a. 381) y *Gorgonius* (CRP, a. 386) que fueron apoyados por Símaco, prefecto de Roma. Por el contrario, como ha puesto de manifiesto DELMAIRE, fueron pocos los condes financieros que provenían de familias modestas como fue el caso del CSL, *Domitianus*, cuyo padre era un trabajador manual³¹⁴.

Respecto de los candidatos a puestos intermedios, tanto de la *militia* armada como de la *militia* civil palatina, podemos referir los presupuestos básicos para que el acceso a la Administración se recogen en dos disposiciones de los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio conservadas en CTh. 7.2 (<<*Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*>>)³¹⁵: nacimiento libre y libertad de cargas respecto del Estado o del municipio (CTh. 7.2.1, a. 383; CTh. 7.2.2, a. 385).

³¹⁴CARILE A., *Gerarchie e caste*, en *Morfologie sociale e culturale in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo* (V Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo), Spoleto, 1998, p. 160; CECCONI G. A., *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.)*, Como, 1994.

El primer requisito que se exigía al candidato era que no estuviese sujeto a ninguna condición hereditaria para lo cual el futuro funcionario debía someterse a un examen sobre su origen (*genus*) y condición debiendo probar que pertenecía a una familia *honestissimi* (CTh. 7.2.1-2³¹⁶): así, en CTh. 6.30.15 (a. 399) se establece que los *palatini* del *comes sacrarum largitionum* debían probar su origen antes de su designación.

Aquellas personas que estaban ligadas de forma hereditaria a una condición (*conditionales*) debían ser descartadas para ocupar

³¹⁵ GIUFFRÉ V., <lura> e <arma>. *Intorno...*, op. cit., pp. 36-39.

³¹⁶ CTh. 7.2.1 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Postumiano P.P.): *Quotiescumque se aliquis militiae crediderit offerendum, statim de natalibus ipsius ac de omni vitae condicione examen habeatur, ita ut domum genus non dissimulet et parentes. Nec tamen huic ipsi rei nisi honestissimorum hominum testimonio adstipulante credatur: ita enim fiet, ut et curias nemo declinet et ad militiam nullus adspiret, nisi quem penitus liberum aut genere aut vitae condicione inquisitio tam cauta deprehenderit* (a. 383).

CTh. 7.2.2 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Neoterium P. P.): *Quisquis cinguli sacramenta desiderat, in ea urbe, qua natus est vel in qua domicilium collocat, primitus acta conficiat et se ostendat non patre, non avo esse munice penitusque ab ordinis necessitatibus alienum, sciturus se in perpetuum revocandum nec temporis nec militiae praerogativa, si ita non gesserit, defendendum. Ordines etiam urbium noverint, si cuiquam praestitisse se gratiam doceantur ac non vera actis promendo per mendacium quemquam abire permiserint, se periculo subiacere* (a. 385).

Como ha apuntado GIUFFRÉ V., <lura> e <arma>. *Intorno...*, op. cit., p. 38, nt. 48, “CTh. 7.2.1-2, sostanzialmente identiche, possono essere considerate il risultato del fenomeno di duplicazione formale delle constitutiones per dare loro con certezza vigenza in entrambe le partes imperii”.

puestos en la Administración como era el caso de los soldados, colonos o *corporati*, así como los hijos de estos; en este sentido en C. J. 12.33 (34)³¹⁷ (bajo la rúbrica <<*Qui militare possunt vel non possunt, et de servis ad militiam vel dignitatem adspirantibus ...>>*) se recogen una serie de leyes que prohíben el desempeño de un cargo en la *militia* a los colonos, curiales, cohortales o esclavos.

De esta manera, Constantino en CTh. 6.37.1³¹⁸ [=C. J. 12.32(33); <<*De perfectissimatus dignitate*>>] establece que no pueden alcanzar la dignidad de perfectísimos³¹⁹ aquellos que tuviesen la condición de esclavos, o los que estuviesen sujetos al Fisco o a la curia, o los panaderos, o los comerciantes, o los que hubiesen obtenido por sufragio tal honor, así como los que hubiesen administrado los bienes de otro³²⁰. Estas limitaciones se recogen también en una constitución de Constancio y Juliano contenida en CTh. 1.9.1 (a. 359), dirigida a la escuela de los *agentes in rebus*, en la que se establece que <<todos los que de indignos nacimientos o de pésima idiosincrasia aspiraron al cuerpo de los *agentes in rebus* (...) sean separados de vuestro

³¹⁷ = Bas. 57.1.36 ss.

³¹⁸ = Bas. 6.34.2.

³¹⁹ Véase *infra* p. 406.

³²⁰ *Codicillis perfectissimatus fruantur, qui impetraverint, si abhorreant a condicione servili vel fisco aut curiae obnoxii non sint vel si pistores non fuerint vel non in aliquo negotio constiterint, nec sibi honorem venali suffragio, nec rem alicuius administraverint.*

consorcio...>>³²¹; y en el ámbito militar se dispone en CTh. 7.13.8 (a. 380) que si fuesen propuestos para las tropas de élite candidatos impropios como, por ejemplo, esclavos, taberneros (*tabernarii*), borrachos, cocineros (*coci*), panaderos (*pistores*), o en particular <<*quem obsequii deformitas militia secernit*>>, los que hicieron el nombramiento serán castigados con severas multas y deberán escoger tres reclutas apropiados por cada uno impropio.

b) SITUACIONES PERSONALES QUE IMPIDEN O CONDICIONAN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LAS SANCIONES APLICABLES A LOS INFRACTORES DE LA NORMATIVA APLICABLE A ESTA MATERIA.

A continuación, pasamos a exponer en particular las siguientes situaciones personales que impedían o limitaban el ingreso en la Administración imperial:

³²¹Y continúa diciendo la constitución: <<Ninguno llegue a ducenario o a centenario ni a biarca <del cuerpo de los *agentes in rebus*> por favor, sino que cada uno llegue por su trabajo, habiéndose servido del testimonio de todos y alcance la principalía recorriendo el escalafón, de modo que al desempeño de los cargos y a la carrera

I) Los soldados (*tirones*)³²²:

En CTh. 7.22.6³²³ (a. 349) se establece que los hijos de los veteranos o de los soldados en servicio no deben trabajar en las oficinas de los gobernadores provinciales; esta prohibición será recordada en CTh. 7.22.8 (a. 372): <<*filios veteranorum, qui armatae militiae parvissent, si in officiis publicis vel ministerio chartularum atque observatione rationum inveniuntur, sciat tua*

vayan aquellos a quienes llama la jerarquía del servicio imperial y su trabajo ...>>.

³²²Los soldados eran marcados en un brazo a fin de que en caso de desertión pudiesen ser fácilmente reconocidos (C. J. 11.10(9).3; Vegetio, 2.5). La eficacia de esta medida no debía ser muy alta ya que son numerosas las leyes que prometían recompensas a quienes encontrasen a soldados desertores y que castigaban a los que les dieran escondite (pérdida de la propiedad de la finca donde los tenían escondidos, multas de hasta veinte libras de oro...): CTh. 7.18.7 (a. 383); CTh. 7.1.17 (a. 398); CTh. 7.18.12 (a. 403); CTh. 7.18.14 (a. 403).

ARANGIO-RUIZ V., *Sul reato di diserzione in diritto romano*, en Scritti di diritto romano, 2, Napoli, 1974, pp. 1 ss.; CAÑIZAR PALACIOS J. L., *Posibles causas de desertión en el ejército romano vistas a través del "Codex Theodosianus": problemática bajo Constantino y problemática a partir de la segunda mitad del siglo IV d. C.*, en *Studia historica. Historia antigua*, n. 16, Salamanca, 1998, pp. 217 ss.; VALLEJO GIRVÉS M., *Sobre la persecución y el castigo de los desertores en el ejército de Roma*, en *POLIS: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica*, n. 5, Alcalá de Henares, 1993, pp. 241 ss.; ID., *La legislación sobre los desertores en el contexto político-militar de finales del siglo IV y principios del V d. C.*, en *Latomus*, 55, Bruxelles, 1996, pp. 31 ss.

³²³*Observetur, ne veteranorum seu militum filii officiis praesidalibus adgregentur.*

sinceritas esse revocandos...>>, es decir, “deben ser reclamados los hijos de los veteranos que han servido en el ejército cuando son encontrados en oficios públicos, o en el servicio de los actos públicos o de los jueces...”³²⁴; también en C. J. 1.46.3 (a. 443), dirigida a Anatolio -*magister militum*-, los emperadores Teodosio y Valentiniano prohíben que aquél que hubiese servido a las órdenes de los generales del ejército sea asociado subrepticamente, una vez haya cumplido su servicio militar, al colegio de los *agentes in rebus*, y si alguno hubiese desobedecido esta disposición se establece que será despojado de su cargo y verá confiscada la tercera parte de sus bienes (<<*militia spoliatus proscriptionis poena pro parte bonorum tertia constringatur*>>). Por último, mencionamos una ley del emperador León recogida en C. J. 12.35(36).16 la cual prohíbe que los militares ocupen cargos civiles, y en caso de que los hubiesen obtenido serán inmediatamente despojados de la milicia y de todos sus privilegios: <<*militares viros civiles curas adripere prohibemus, aut si aliquam huiusmodi sollicitudinem forte susceperint, et militia statim et privilegiis omnibus denudari decernimus ...>>*.

³²⁴ Los hijos de los militares y de los veteranos estaban sujetos al servicio militar como resulta de CTh. 7.2.6 y 10; CTh. 7.20.2.

II) Los colonos (*coloni*)³²⁵:

Constantino señala en C. J. 11.68(67).1³²⁶ que ningún *colonus rei privatae* del emperador sea llamado a un cargo en la ciudad ya que <<*ad haec suprema praesidia iniuriosa nominatione descendendum est*>> (‘‘no se ha de descender a estos supremos recursos con un nombramiento injurioso’’), y también en C. J. 11.68(67).3 el mismo emperador dispone que los colonos y esclavos imperiales, así como sus hijos y nietos, que hubiesen entrado clandestinamente a ocupar un cargo en la milicia armada,

³²⁵ Los colonos eran ‘‘arrendatarios’’ de predios pertenecientes al Fisco (<<*Coloni, id est, conductores praediorum ad fiscum pertinentium*; C. J. 5.62.8, a. 225>>) o a particulares que, aunque libres, estaban sujetos a la tierra. El propietario de la finca a la que estaban adscritos a perpetuidad podía venderlos con ella, pero no sin la misma (C. J. 11.50(49).2 : <<*utpote dominis, eum cum possessionibus distrahi posse non dubium est*>>). En sus relaciones con el propietario de los fundos, el colono estaba obligado a pagar una suma o prestación (*reditus*), normalmente en especie, a cambio del disfrute de la tierra que ocupaba. Acerca del colonato en el Bajo Imperio, GANSHOF F. L., *Le statut personnel du colon au Bas-Empire. Observation en marge d’une théorie nouvelle*, en *L’Antiquité classique*, 14, Louvain, 1945, pp. 261 ss.; PALLASSE M., *Orient et Occident, à propos du colonat romain au Bas-Empire*, Paris, 1950; GILIBERTI G., *Servus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro della società romana*, Napoli, 1981; BRAVO G., *El colonato bajoimperial*, Madrid, 1991; ROSAFIO P., *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione nel quarto secolo*, en *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi*, Napoli, 1995, pp. 447 ss.; ID., *Studi sul colonato*, Bari, 2002, pp. 126 ss.

³²⁶ Véase, CTh. 12.1.11 (a. 325).

fuesen despojados del cingulo y devueltos a su condición aunque hubiesen alcanzado el grado de protectores. Los emperadores posteriores vuelven a recordar esta medida en C. J. 11.48(47).11 (Arcadio y Honorio al pueblo) en donde se dice que <<los colonos originarios no se eximan de su condición (...), por ninguna dignidad...>>³²⁷; en C. J. 11.48(47).18 los emperadores Teodosio y Valentiniano prohíben que los colonos sean admitidos, de ninguna forma (*nulla ratione*), a un cargo en la milicia aunque sea humilde (*humilioris militiae*), ni siquiera como alguaciles (*apparitores*) del *magister* de la milicia³²⁸; de igual forma los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio establecen en C. J. 11.64(63).1³²⁹ que los hijos de los colonos de fundos patrimoniales o de bosques, cuyos abuelos y padres hubiesen estado sujetos a dicha condición, serán devueltos al cultivo de los campos si por connivencia de las oficinas militares hubiesen pasado al servicio militar o a otros cargos en la Administración.

³²⁷ *Originarios colonos nullis privilegiis, nulla dignitate ...*

³²⁸ El motivo que alegan Teodosio y Valentiniano en su disposición es el de no vulnerar el derecho de los dueños de las fincas y la utilidad pública.

³²⁹ *Quicumque parvuli ex municipibus vel colonia patrimonialibus aut saltuensisibus, quorum tamen avi ac patres implicati huiusmodi functionibus fuerint, conniventia militaris officii ad stipendium castrense vel officia diversa transierint, ad munera patriae vel agrorum cultus conventis ducibus tribunis ac praepositis revocentur neque his prosint stipendia.*

Sin embargo, vemos que Justiniano sí permitirá que los colonos sean ordenados clérigos en las mismas fincas en las que están adscritos, incluso contra la voluntad de sus dueños, pero quedando siempre sujetos a sus deberes de colonato (Nov. 123. 17).

III) Los *corporati*:

Son numerosas las fuentes que nos refieren que las personas pertenecientes a corporaciones (*corporati*) que prestan un servicio público no pueden acceder a un cargo en la Administración³³⁰: en

³³⁰Los miembros de las corporaciones y sus descendientes estaban afectos a su condición de tal manera que en caso de abandono su misma corporación podía reivindicarlos, de igual forma que las curias podían reivindicar a sus decuriones huidos: <<*curialem suum municipales vindicent, collegiatum proprium corpus adstringat*>> (CTh. 6.30.16).

Sobre esta materia podemos referir la siguiente bibliografía: WALTZING J.-P., *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, Tome II, Louvain, 1895 (ed. anast. Roma, 1968); CHARBONNEL N., *La condition des ouvriers dans les ateliers impériaux aux IVème et Vème siècles*, en *Aspects de l'empire romain*, Paris, 1964 pp. 61 ss.; PENDÓN MELÉNDEZ E., *Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho Romano* (prólogo de Antonio Fernández de Buján), Madrid, 2002; DELMAIRE R., *Les esclaves et conditionales fiscaux au Bas-Empire romain*, en *Topoi. An International Review of Philosophy*, 9, Dordrecht, 1999, pp. 179 ss.; QUINTANA ORIVE E., *Cth. 10.20: Acerca del régimen jurídico de los gynaecearii, murileguli, monetarii y bastagarii en época postclásica*, RIDA 53,

CTh. 6.30.16-17 (a. 399) se dispone que sólo serán admitidos en la *militia* como funcionarios del *comes sacrarum largitionum* o del *comes rei privatae* aquellos que no estén ligados a ninguna corporación añadiendo que estas personas serán devueltas a sus corporaciones si fuesen descubiertas entre los palatinos; en CTh. 10.22.4 (a. 398) [=C. J. 11.10(9).3] se dice respecto de los *fabricenses*, empleados en las fábricas de armas del Estado bajo la autoridad del *magister officiorum*³³¹, que <<...*sine dubio fabricae vindicandis, et qui subreptione quadam declinandi operis ad publicae cuiuslibet sacramenta militiae transierunt*>>, es decir, “debiendo, sin duda, ser reivindicados para la fábrica (...) los que para evitarse el trabajo pasaron de forma subrepticia a prestar juramento en cualquier milicia pública”³³²; respecto de los

Bruxelles, 2006, pp. 339, 340; CHARLES M. B., *Unseemly Professions and recruitment in late Antiquity: Piscatores and Vegetius Epitoma 1.7.1-2*, en *American Journal of Philology*, vol. 131, n. 1, New York, 2010, pp. 101 ss.

³³¹Las fábricas de armas del Estado estaban consideradas de utilidad pública por lo que, como ya vimos, los trabajadores de las mismas y sus hijos no podían abandonar su corporación. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., II, pp. 369 ss.

³³²De todas formas les sería bastante difícil a estos *corporati* el ingreso en cualquier milicia ya que se establece en la misma constitución que, desde su entrada en vigor, estos trabajadores fuesen marcados en los brazos (*stigmata fabricensium brachiiis*) para evitar su huida como ocurría con los soldados; si bien, podemos comprobar que esta medida no fue del todo eficaz ya que años más tarde el emperador León prohíbe a los *fabricenses* dedicarse a actividades distintas de la fabricación de armas (C. J. 11.10(9).7, a. 467-470). SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, op. cit., pp. 387 ss.

panaderos (*pistores*) se dice en una constitución de León (C. J. 11.16 (15).1, a. 457-465), dirigida al prefecto del pretorio Viviano, que cualquiera de los dependientes del *comes horreorum* que por intriga, favor o dinero (*ambitione vel gratia vel pecunia*), o de cualquier otro modo, hubiese conseguido una *dignitas* o un cargo en la milicia sea de nuevo llamado al gremio de los panaderos, despojado del cargo y multado con veinte libras de oro; y en CTh. 6.37.1 [=C. J. 12.32(33).1]³³³ se establece que los panaderos no pueden obtener la dignidad de perfectísimo: <<... *vel si pistores non fuerint...*>>³³⁴. Asimismo, los *monetarii*, trabajadores fiscales

³³³ =Bas. 6.34.2.

³³⁴Recordamos que en el Bajo Imperio solía imponerse frecuentemente como sanción penal la incorporación de los condenados por diversos crímenes a alguna de las corporaciones del Estado; el primero de estos supuestos de trabajo-sanción fue la vinculación obligatoria de ciertos delincuentes al *corpus* de los *pistrini* (molineros) o *pistores* (panaderos). Así, por ejemplo es interesante referir la disposición contenida en CTh. 14.3.22 (a. 417) [=C. J. 12.53(54).2] en la que se establece que <<cualquier alguacil de la prefectura del pretorio que con clandestino fraude hubiese hecho sufrir concusión a un panadero, acusado y convicto, sea sometido a las obligaciones del oficio perpetuo de panadero>>; también mencionamos en este sentido, CTh. 9.40.3; 5; 6; 7; 9; CTh. 13.5.12 y 17; Nov. 80.5. Con ello se perseguía, por un lado, castigar al culpable y, por otro, tratar de aliviar la grave situación derivada del insuficiente abastecimiento annonario que atravesaba sobre todo la ciudad de Roma. Esta *damnatio ad pistrinos* se caracterizaba por su perpetuidad legal y su dureza como pone de relieve MURGA GENER J. L., *La <<Obnoxietas>> una esclavitud legal*, en Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité (a cura di I. Piro). Atti della 51 Sessione della SIHDA (Crotone-Messina, settembre 1997), Catanzaro, 1999, p. 447; CEPARANO M. L., *I 'pistrina' nei Regionari di IV secolo*, en Mélanges de l'École française de Rome (MEFRA), 110, Roma, 1998, pp. 917 ss.

(*obnoxii fisco*) encargados de la acuñación de la moneda en los talleres monetarios bajo las órdenes del *comes sacrarum largitionum*, no podían abandonar libremente su condición³³⁵ y tenían vetado el acceso a cualquier cargo en la milicia (CTh. 10.20.1 [=C. J. 11.8(7).1]: <<*nec dignitatis cuiuscumque privilegio ab huiusmodi condicione liberari*>>); los *murileguli*, trabajadores fiscales empleados en los talleres imperiales de tintura (*baphia*), tampoco podían acceder a un puesto en la Administración como se refleja en una constitución del año 424 [CTh. 10.20.14 (= C. J. 11.8(7).11)] en la que se dice que los que hubiesen huido de su oficio para obtener cargos en la *militia* <<*ad propriae artis et originis vincula revocentur*>>, es decir, “sean llamados a las obligaciones de su propio oficio y origen”; igualmente no podían abandonar su condición los *bastagarii*, encargados de transportar en carros los productos y materias correspondientes a las manufacturas imperiales y al Fisco, castigándose en CTh. 10.20.11 [=C. J. 11.8(7).8] al tribuno militar que los hubiese admitido en el ejército con una multa de una libra de oro. Por último, mencionamos D. 50.2.9.1 (Paul., 1 *de decr.*) que prohíbe que los *navicularii*, encargados del transporte marítimo de los

³³⁵CTh. 10.20.1 (a. 317): *Monetarios in sua semper durare condicione oportet.*

objetos de consumo, fuesen nombrados decuriones <<...*quin navicularii non debent decuriones creari*>>.

IV) Los cesarianos (*caesariani*):

Empleados subalternos del *procurator rei privatae* –funcionario de pendiente del *comes rei privatae* el cual estaba encargado, entre otras funciones, de la confiscación y venta de los bienes confiscados a los particulares³³⁶ - no podían abandonar su empleo para obtener un título o dignidad hasta después de haber cumplido el tiempo establecido y haber rendido cuentas de su gestión (CTh. 10.7.1)³³⁷. Ellos gozaban de una pésima reputación como reflejan numerosas leyes dirigidas a luchar contra sus

³³⁶ Los *procuratores rei privatae* fueron en numerosas ocasiones acusados de participar en los fraudes de los *caesariani*: extorsiones, hurtos, acusaciones falsas para provocar las confiscaciones, precipitación en la ocupación de los bienes y en inventariar antes de que hubiese sido dictada la sentencia (CTh. 10.1.5, a. 326 =C. J. 10.1.7.1; CTh. 10.16.3, a. 377= C. J. 10.1.5).

³³⁷ *Caesarianos in actu dumtaxat constitutos ad perfectissimatus vel ducenae vel centenae vel egregiatus dignitates non oportet admitti. Sed si inculpate compleverint suum officium et ab omni vacent ratione fiscali iudicio, datam huiusmodi dignitatem prodesse eis oportet.*

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., II, pp. 380-381.

fraudes: <<*iubemus (...) bona (...) ne fraudibus caesarianorum
inminuantur vel petentibus aliquid abiuretur*>> (CTh. 10.8.2)³³⁸.

³³⁸ A este respecto, el edicto sobre los delatores (CIL., V, 2781) condenaba sus prácticas y en numerosas inscripciones se han conservado los edictos imperiales de comienzos del s. IV contra los abusos de los *caesariani* (CIL., III, 12044). Durante su cargo estaban excluidos de todo honor y dignidad (CTh. 10.7.1) y debían probar que sus bienes habían sido adquiridos honestamente para poder transmitirlos a terceros (CTh. 9.42.1, a. 396 = C. J. 9.49.9.2).

Un caso grave de responsabilidad de los *caesariani* era el relativo a los fraudes en las confiscaciones – ya fuese una *publicatio bonorum* general o una confiscación parcial - sobre los bienes de los deudores fiscales o las que resultaban de una sentencia judicial por la comisión de un crimen. Las autoridades no podían ocupar estos bienes antes de que la sentencia o la orden de proscripción fuese dictada – además, el procedimiento se suspendía si mediaba una apelación (C. J. 9.6.6; C. J. 7.62.22) - y que los bienes fuesen puestos bajo secuestro. En ese momento se colocaban sobre los bienes muebles o sobre las puertas de los edificios sellos o rótulos (*tituli*) para evitar desvíos antes del inventario ordenado por el gobernador que dictaba la sentencia (CTh. 10.9.1, a. 369= C. J. 10.10.3). La colocación de los *tituli* sin disposición de la justicia o sobre bienes ajenos era castigado con la proscripción o la deportación en caso de que fuese un *honestior*, y con la muerte si fuese realizada por un plebeyo (C. J. 2.15(16).2, a. 439), y aunque Justiniano lo castiga en numerosas Novelas (28.5; 29.4; 30.8) vemos que las amenazas no debieron surtir efecto ya que en la Novela 12 de Tiberio II se muestra que los responsables (*curatores*) de la *domus divina* abusaban de su autoridad en estos casos.

También en el proceso de inventario era frecuente que los funcionarios bajo las órdenes del *procurator rei privatae* “disimulasen” o sustrajesen objetos de valor para amigos, familiares o para ellos mismos; en caso de que fuesen descubiertos debían pagar una suma igual al valor de los objetos disimulados (CTh. 9.42.7, a. 369 = C. J. 9.49.7). Vid. CTh. 10.1.5 (a. 326).

El mismo problema se planteaba con los bienes vacantes y los bienes caducos que eran denunciados al Fisco por los delatores a falta de actuación de oficio por parte del *advocatus fisci* (la delación estaba prohibida a mujeres, veteranos, senadores...). El procedimiento justiniano para la incorporación de estos bienes al Fisco es

desarrollado en C. J. 10.11.8.12 y sustituyó a la mayor parte de las leyes anteriores sobre la delación: se establece en el mismo que el *comes rei privatae* y su oficio deben observar esta ley ya que podían ser denunciados al emperador o al *magister officiorum* y castigados con "multa de cincuenta libras de oro por cada capítulo de la ley que infrinja", y también al gobernador provincial y a su oficio "con una multa de treinta libras de oro por cada infracción".

Estos bienes fiscales pasaban a la *res privata* y el emperador podía decidir afectar dichos bienes a una comunidad (ciudad, iglesia, curia), a particulares que lo solicitasen – los peticionarios eran normalmente altos dignatarios próximos al emperador (Lact., *de mort.*, 37.6; Amiano, 16.8.12) –, a la *domus* imperial, o puestos a la venta en pública subasta: en este último caso los gobernadores y el *rationalis rei privatae* debían hacer la estimación de la "*rei qualitas et reddituum quantitas*" para fijar un precio correcto (CTh. 10.17.3 a. 392 = C. J. 4.44.16). Gordiano (C. J. 2.50(51).5, a. 240), Zenón (C. J. 7.37.2 pr., a. 474-491) y después Justiniano autorizaron a las personas injustamente lesionadas por una venta fiscal a dirigirse en un plazo de 4 años contra el Fisco para reclamar el reembolso del perjuicio (C. J. 7.37.3 pr.-1, a. 531). Vid., D. 49.14.3.5 (Call., 1 *de iur. fisc.*) que refiere un rescripto de Marco Aurelio y Lucio Vero en donde se exige una actuación del funcionario encargado de las ventas fiscales (*procurator*) con arreglo a los principios de buena fe (*fides*) y de responsabilidad en el ejercicio de su función (*diligentia*), de tal manera que, en caso de la venta de un bien, se deberá tener en cuenta no el valor precedente de adquisición del mismo sino la estimación de su valor actual en función de la variación que se haya producido por razón del estado de conservación del bien: PULIATTI S., *Il <<de iure fisci>> di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, pp. 191 ss., 217-218; AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci en Derecho Romano*, op. cit., pp. 55 ss.

Sobre los fraudes en las confiscaciones, véase: SPAGNUOLO VIGORITA T., *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, pp. 68-69; MONKS G. R., *The Administration of the Privy Purse. An Inquiry into Official Corruption and the Fall of the Roman Empire*, en *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, 32, n. 4, Cambridge (MA), 1957, pp. 748-779; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., pp. 214, 610 ss.; PINO ABAD M., *La pena de confiscación de bienes en el Derecho histórico español*, Córdoba, 1999, pp. 73 ss.; SORACI R., *Consuetudo fraudium e rigor iuris: repressione a "corrente alternata" e a direzione variabile*, en *Atti del Convegno*

V) Los libertos:

Si bien jugaron un importante papel en los puestos subalternos de la Administración del Alto Imperio, sabemos que a partir de Septimio Severo comienzan a ser apartados de las funciones administrativas, y que en época de Galieno están prácticamente excluidos de estos cargos, posiblemente –BOULVERT- debido a que este emperador “*qui est obligé pour assurer la survie de l’Empire d’associer au pouvoir de nouvelles couches de la population, donne à son administration une allure militaire et fait tenir les divers emplois par des ingénus*”³³⁹.

En diversas constituciones imperiales, como hemos visto más arriba, comienza a exigirse la condición y el nacimiento como libre a las personas que quieran desempeñar sus funciones en la Administración Pública (CTh. 7.2.1, a. 383)³⁴⁰. Ya anteriormente

Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità (Catania, 1995), Catania, 1999, pp. 185 ss.

³³⁹BOULVERT G., *Domestique et fonctionnaire sous le Haut Empire romain. La condition de l’affranchi et de l’esclave du prince*, Paris, 1974, pp. 453 ss.; WEABER P.R.C., *Freedmen procurators in the imperial administration*, en *Historia*, 14, Wiesbaden-Stuttgart, 1965.

³⁴⁰Vid. pp. 215-216.

en C. J. 9.21.1³⁴¹ (a. 300[?]), que recoge una constitución de los emperadores Diocleciano y Maximiano, se hacía referencia a una *lex Visellia* (24 d. C.)³⁴² que perseguía a los libertos que se hubiesen atrevido a aspirar a los honores y dignidades que son propias de los ingenuos o a apoderarse del decurionato <<a no ser que estén apoyados en el “derecho de anillos de oro” otorgado por el príncipe³⁴³. Porque entonces –continúa diciendo

³⁴¹*Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum adipere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur, tunc enim quod vivunt imaginem, non statum ingenuitatis obtinent et sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica. 1.- Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri: in curiam autem se immiscens damno quidem cum infamia adficitur: muneribus vero personalibus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est.*

³⁴²La *lex Visellia de libertinis* estableció la persecución criminal de los libertos que usurpasen los derechos de los *ingenui* (especialmente el derecho a portar el anillo de oro) y les prohibió el acceso a las magistraturas municipales, además concedió la ciudadanía a los *latini Iuniani* que hubiesen servido seis años en la guardia urbana de Roma (Gai., 1.32 b; Ulp. Tit., 3.5; C. J. 9.21.1; Nov. 78). De igual forma impedían el acceso de libertos a las magistraturas las leyes flavias de *Malaca* (cap. 54) e *Irni* (cap. 55). Sin embargo, la *lex Ursonensis* (cap. 105) recogía la posibilidad de que los libertos accediesen al *ordo decurionum*. Suet., *Claudio*, 25; Tac., *ann.* 13.27.1. ROTONDI G., *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, pp. 464-465; SHERWIN-WHITE A. N., *The Roman citizenship*, Oxford, 1979, p. 331; WELLESLEY K., *A privy council on the behavior of freedmen* (Tac., *ann.* 13.26.2), en LMC 8, 1983, pp. 136-139; HERRMANN-OTTO E., <<Causae liberales>>, INDEX, 27 (in memoria di G. Impallomeni), Napoli, 1999, p. 144.

³⁴³El *ius aureorum anulorum* o derecho al uso del anillo de oro correspondió en un principio a los senadores y se extendió posteriormente a los caballeros e ingenuos. En época imperial se concedió, a título de favor, a los libertos que eran de esta forma

la constitución- obtienen mientras viven la apariencia, no el estado de ingenuidad, y desempeñan sin riesgo también los cargos públicos de ingenuos>>. Y en un rescripto³⁴⁴, los mismos emperadores respondieron a un tal Saturnino que se prohíbe a los libertos el ingreso en la curia a no ser que hubiesen alcanzado el *ius aureorum anulorum* y, en caso contrario, si hubiesen ingresado en la curia -entendemos nosotros fraudulentamente- el gobernador provincial <<no solamente no permitirá que forme parte de la curia, sino que lo castigará con arreglo a la severidad de la ley con la pena correspondiente>>³⁴⁵.

equiparados a los ingenuos (C. J. 6.8; D. 40.10), si bien, el *ius anulorum* como *imago status ingenuitatis*, solamente atribuía en vida la ingenuidad mientras que después de la muerte hacía revivir todos los derechos de patronato ya que el difunto era considerado liberto (C. J. 6.8.2, a. 294; D. 38.2.3 pr., Ulp., 41 ed.).

³⁴⁴C. J. 10.33(32).1: *Si libertus vel ius aureorum anulorum adeptus non est vel natalibus suis non restitutus, praeses provinciae non tantum curiae participare non permittet, sed iuxta legis severitatem congruenti poena ulciscetur.*

³⁴⁵Si bien en el ámbito municipal los libertos de alto nivel económico y social podían acceder a ciertos cargos sacerdotales como eran los de *augustales* y los de *seviri augustales* elegidos por el *ordo decurionum* y que, como ha señalado ANDREU PINTADO J., *Munificencia pública en la provincia Lusitania* (siglos I-IV d. C.), Zaragoza, 2004, p. 163: "...suponían para ellos un verdadero aporte de *dignitas* al ser al fin y al cabo una especie de pseudomagistraturas". Respecto de los *augustales* dedicados al culto del *numen* de Augusto en sus respectivas ciudades: DUTHOY R., *La fonction sociale de l'augustalité*, en *Epigraphica*, 36, 1-2, Bologna, 1974, pp. 134 ss.; DUTHOY R., *Les Augustales*, en *ANRW II*, 16.2, Berlin-New York, 1978, pp. 1254 ss.

Los libertos estaban de igual forma excluidos de la *militia palatina* como se recoge en CTh. 4.10.3 (a. 426) [= C. J. 6.7.4]: << *numquam ad honores vel palatinam adspirare militiam*>>³⁴⁶, en donde se establece también que los hijos de estos no podían pasar de un determinado rango administrativo (<<*ad locum usque proximum protectoris*>>): a partir de esta ley los hijos de los libertos sólo podían alcanzar el rango inferior al de *protector* ya que este título era un honor que daba derecho a adorar la púrpura del emperador³⁴⁷ y a entrar en el rango de los *honorati*, lo que implicaría, a su vez, la abolición de los vínculos con sus patronos, cosa que el emperador no quería que sucediese³⁴⁸. Sin embargo, en esta fuente se advierte también que los hombres que tuviesen la condición de liberto o sus hijos, si ejerciendo la *militia* se

No obstante, en D. 50.2.9 pr. (Paul., 1 *decr.*) se contiene un rescripto de Septimio Severo en el que se admite la entrada en la curia de los hijos de padre esclavo y de madre libre.

³⁴⁶ *...ex manumissis nati ad locum usque proximum protectoris licitum nullatenus adire mereantur ita, ut patronis patronorumve heredibus reverentia privilegia conserventur.*

Sin embargo, en D. 1.22.2 nos dice Marciano: <<*liberti assidere possunt*>>, es decir, los libertos pueden ser asesores de los gobernadores provinciales en materia judicial.

³⁴⁷ Vid. *infra* p. 363 nt. 569.

³⁴⁸ No obstante, los emperadores Valentiniano y Valente en C. J. 12.1.9 (a. 364-365) habían establecido que <<*libertorum filios adipisci clarissimam dignitatem non prohibemos*>>, es decir, no prohibimos que los hijos de los libertos alcancen la dignidad de los muy esclarecidos.

probare que se hubieran comportado con ingratitud (*ingrati*), serán reducidos a la esclavitud: <<*libertinae condicionis homines vel eorum filii si militantes docebuntur ingrati, ad servitutis nexum procul dubio reducentur*>>. Por tanto, podemos constatar a tenor de CTh. 4.10.3 la presencia de libertos en la *militia* en esta época ya que, como hemos visto en dicha constitución, se establecía que si los mismos resultasen ingratos³⁴⁹ se les podía condenar a la esclavitud, estableciéndose al final de la ley que, aunque estos fuesen posteriormente manumitidos, no podrían ser admitidos de nuevo en ningún puesto de la milicia por humilde que sea: <<*ipsos vero, qui manumissi sunt, nulla ratione ad ullum quamvis humilis militiae locum sinimus admitti*>>³⁵⁰.

VI) Los esclavos (*servi*):

Los esclavos estuvieron escasamente representados en los aparatos administrativos del Bajo Imperio con excepción de los

³⁴⁹Entendemos del contexto de la constitución que la ingratitud está relacionada con el desempeño de sus funciones administrativas: <<... *nam si militantes etiam docebuntur ingrati*...>>.

³⁵⁰CHRISTOL M./ DEMOUGIN S., *De Lugo à Pergame: La carrière de l'affranchi Saturninus dans l'administration impériale*, en

eunucos pertenecientes al *sacrum cubiculum* que, como ayudas de cámara (*cubicularii*), servían al emperador en sus aposentos y dependían del *praepositus sacri cubiculi*³⁵¹. Los eunucos, empleados en el palacio imperial, eran comprados como esclavos fuera del Imperio al estar castigada en Roma la castración con la pena capital³⁵². A este respecto, interesa señalar la disposición del emperador León contenida en C. J. 12.5.4 (a. 467-468) en la que se establece que los esclavos eunucos que hubiesen sido donados por su dueño, o bien dados por el mismo a título oneroso a la sacra cámara (*sacrum cubiculum*), serán manumitidos por el emperador aunque no medie <<ninguna escritura ni confección alguna de actuaciones>>³⁵³. Además, se

Mélanges de l'École française de Rome (MEFRA), 102, Roma, 1990, pp. 159-211.

³⁵¹El *praepositus sacri cubiculi*, funcionario de la Corte con rango de ilustre, era el responsable de todo lo referente al servicio de vestuario, cocina y residencia del emperador (C. J. 12.5: <<*De praepositus sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum*>>). Vid., *supra* pp. 112-114. DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, *op. cit.*, pp. 280 ss.

³⁵²En C. J. 4.42.1 Constantino castigaba con la pena capital a los autores materiales de la castración y ordenaba además la confiscación del esclavo castrado y del lugar en donde aquélla se realizó cuando el propietario tuviese conocimiento del hecho. Vid. también C. J. 4.42.2 (a. 457-465).

³⁵³Del mismo modo la Iglesia siguió la política de admitir la ordenación como sacerdotes de esclavos pero siempre que interviniese el consentimiento del *dominus*. En este sentido, diversos autores ven la influencia que las enseñanzas de San León Magno, concretamente la *Epist.* 4.1 (Migne, *PL*, LIV, 611), tuvieron en las disposiciones contenidas

dice que estos nuevos libertos adscritos al *sacrum cubiculum* podrán hacer testamento como si fuesen ingenuos³⁵⁴, si bien, en caso de que muriesen intestados sus bienes serían reivindicados por el Fisco como si hubiesen muerto sin sucesores legítimos: <<...*intestatorum vero nemo dubitet facultates utpote sine legitimis successoribus defunctorum fisci viribus vindicari...*>>³⁵⁵. Sin embargo –continúa la constitución-, si el eunuco hubiese entrado a servir en el palacio, bien por haber sido arrebatado violentamente a su dueño o bien porque él se hubiese ofrecido, contra la voluntad de su dueño o ignorándolo éste (*violenter extortus, aut invito domino vel ignaro*), a prestar servicio en el *sacrum cubiculum*, en este caso el *dominus* podrá reivindicarlo con su peculio, estableciéndose para ello un plazo de cinco años, transcurrido el cual, si en ese tiempo no lo hubiese hecho no podrá reivindicar al que había sido su esclavo (C. J. 12.5.4.2-5).

en C. J. 12.5.4. Véase sobre esta cuestión, ALLARD P., *Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à la fin de la domination romaine en Occident*, Paris, 1876, pp. 202 ss.; MANFREDINI A. D., *Sugli schiavi ordinati invito dominio*, en *Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi*, Napoli, 1995, pp. 529 ss.; SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I, op. cit.*, pp. 104-105.

³⁵⁴Señalamos que ya Constancio en C. J. 6.22.5 (a. 352) había concedido con carácter general la posibilidad de hacer testamento y de redactar codicilos a los eunucos (<<*eunuchis liceat facere testamento...*>>).

³⁵⁵Vemos el paralelismo entre esta normativa con el régimen de los *latini luniani* relativo a la sucesión intestada.

Esta normativa se extiende también a las camareras (*cubiculariae*)³⁵⁶, de origen servil, que se encargaban del cuidado de las mujeres de la familia imperial (C. J. 12.5.4.6).

Por otro lado, respecto de la presencia de los *servi* en general en la Administración imperial romana mencionamos un fragmento de Marciano (D. 49.16.11, Marcian., 2 *reg.*) referido a la *militia armata* en el que se recoge el siguiente principio: <<*ab omni militia servi prohibentur, alioquin capite puniuntur*>>, es decir, “los esclavos están excluidos de toda milicia, y en caso de infracción serán castigados con la pena de muerte”³⁵⁷. Igualmente, Paulo refiere que la costumbre (*moribus*) impide que los esclavos desempeñen funciones públicas (D. 5.1.12.2, *Paul.*, 17 *ed.*) al afirmar que los mismos al igual que las mujeres no

³⁵⁶Vid. *supra* p. 199.

³⁵⁷SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, I, *op. cit.*, p. 324, nos dice respecto a la exclusión de los esclavos de la milicia armada: “Cette loi avait un double motif: la sûreté de l’État, qui ne permettait pas de mettre des armes aux mains de ceux qui n’avaient point d’intérêt à défendre la patrie; et la sécurité des maîtres, qui ne voulaient point ouvrir une porte par où les esclaves auraient pu échapper à leur pouvoir”.

Sin embargo, en épocas de crisis se llegó a permitir la admisión de esclavos en el servicio militar como se contempla en CTh. 7.13.16 (a. 406) en donde se dice que en tiempo de guerra los esclavos (*servi apti ad militiam*) también deben ser soldados y que como recompensa obtendrán su libertad y un sueldo de dos sólidos (<<*pulverati etiam nomine binos solidos accepturi*>>).

pueden ser elegidos jueces ya que “por las costumbres no pueden desempeñar funciones civiles”³⁵⁸.

La política de excluir a los esclavos de la Administración Bajo Imperial, que contrasta con el importante papel que tuvieron en época de los emperadores flavios³⁵⁹, se refleja en diferentes textos de época postclásica: así, en un rescripto de Diocleciano y Maximiano recogido en C. J. 7.16.11 (a. 293), se dice que <<no cambian de estado los esclavos, si ilícita e indebidamente hubiesen obtenido honores civiles ...>>³⁶⁰; igualmente en C. J. 10.33(32).2 los mismos emperadores respondían a Orcina que <<si el gobernador (*praeses provinciae*) conociere que el que desempeña el cargo de edil es esclavo tuyo, y viere ciertamente que no ignorando su propia condición aspiró al cargo de edil, lo castigará con la pena correspondiente por haber mancillado la dignidad de la curia con la tacha de la esclavitud (*servili macula*

³⁵⁸ También el mismo jurisconsulto en D. 50.17.175 pr. (Paul., 11 Plaut.): <<*in his, quae officium per liberas fieri personas leges desiderant, servus intervenire non potest*>>, es decir, “allí donde las leyes exigen la intervención de personas libres no puede intervenir un esclavo”.

³⁵⁹ Sobre este aspecto, BOULVERT G., *Esclaves et Affranchis Impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli, 1970; BOULVERT G., *Domestique et fonctionnaire sous le Haut Empire romain. La condition de l' affranchi et de l' esclave du prince*, Paris, 1974.

³⁶⁰ RAMPAZZO N., Quasi praetor non fuerit. *Studi...*, op. cit., p. 452-453.

curiae dignitatem). Mas si siendo tenida en la opinión pública como libre su madre, y habiendo nacido de un decurión, procedió inducido por el error a solicitar aquel honor, lo someterá a tu dominio>>. También en una constitución de los emperadores Arcadio y Honorio del año 401 contenida en CTh. 8.2.5 [=C. J. 10.71(69).3] se dispone que en lo sucesivo para desempeñar el cargo de *tabularius* sean nombrados hombres libres (*liberi homines ordinentur*) y en ningún supuesto personas que estén sujetas a la esclavitud (<<*neque ulli deinceps ad hoc officium patescat aditus, qui sit obnoxius servituti*>>) ya que, en caso contrario, se hará responsable al dueño que hubiese permitido a su esclavo o colono hacer documentos públicos y el esclavo será castigado con azotes y adjudicado al Fisco. Es interesante señalar que esta función pública³⁶¹ había sido desempeñada

³⁶¹ Los *tabularii* (contadores) estaban encargados principalmente de la llevanza de la contabilidad en las administraciones provinciales y municipales así como de la custodia de los documentos públicos y de los archivos (cfr. D. 43.5.3.3). Respecto de los *tabularii civitatum*, véase también D. 11.6.7.4 (Ulp., 24 ed.). RODRÍGUEZ NEILA J. F., <<*Tabulae publicae*>>. *Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid, 2005.

Por otro lado, en D. 48.13.11(9).5 se refiere un senadoconsulto que dispuso la aplicación de la *lex Iulia peculatus* respecto de los *tabularii* que facilitasen la inspección y copia de los registros públicos por parte de terceras personas sin permiso del encargado de esta competencia. Se trataba, por un lado, de salvaguardar la confidencialidad de los registros públicos, y al mismo tiempo, de castigar la conducta de estos empleados subalternos que obtenían un beneficio fraudulento de dicha práctica. GNOLI F., *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano, 1979, p. 151.

hasta la fecha principalmente por *servi publici*³⁶² y que a partir de la ya mencionada ley de Arcadio y Honorio sólo podrán acceder a esta función las personas libres; no obstante, vemos que este puesto municipal termina convirtiéndose en una gravosa carga (*munera personalia*) para los ciudadanos por lo que eran frecuentes las deserciones como se contempla en CTh. 8.2.1 [=C. J. 10.71(69).1] (a. 341)³⁶³.

Por lo que hace a esta materia Justiniano estableció en C. J. 12.33(34).6 (a. 529) que, en caso de que un esclavo hubiese ingresado en la milicia civil ignorándolo su dueño, se permite que este último acuda al juez competente para demostrar que desconocía este hecho y de esta forma recuperarlo para su dominio (<<*eoque modo spoliatos eos militia in suum dominium trahere*>>); en este caso el dueño tiene un plazo de treinta días

³⁶²A tenor de un rescripto de los emperadores Diocleciano y Maximiano (C. J. 7.9.3, a. 290 ó 293) se deduce que en esta época se permitía que también los hombres libres desempeñasen el cargo de tabulario: <<... *si ... manumissus civitatem Romanam consecutus es, post vero ut libertus tabularium administrando libertatem, quam fueras consecutus, non amisisti, nec actus tuus filio ex liberis ingenuo suscepto, quominus decurio esse possit, obfuit*>>, es decir, “si habiendo sido manumitido, alcanzaste la ciudadanía romana, y por administrar después, como liberto, el archivo no perdiste la libertad que habías conseguido ni tu función,...”

³⁶³ *Nullus omnino ex tabulariis vel scribis vel logographis eorumque filiis in quocumque officio militet, sed ex omnibus officiis, nec non et si intra nostrum palatium militant, necdum impleto quiquennio reperti et retracti protinus officiis municipalibus reddantur.*

desde la promulgación de la ley para dirigirse al juez, justificar su inocencia y recuperar al esclavo, pasado ese plazo perderá el dominio y todo derecho de patronato sobre dicho esclavo³⁶⁴. Pero si la entrada del siervo en la milicia fuese conocida por el *dominus* se establece que éste pierda no sólo la propiedad del esclavo sino también todo derecho de patronato sobre el mismo, en cuyo caso el esclavo será considerado nacido libre (*illos ingenuos effectos*)³⁶⁵, y <<si verdaderamente hubieran parecido útiles para el empleo (*utiles ad militiam*) que se les dio, continúen en él (*in ea durare*), y si no fueran idóneos sean privados del mismo (*sin vero minime idonei sint, ea privari*)>>³⁶⁶. Justiniano recuerda dos años más tarde esta normativa en C. J. 12.33(34).7 pr. (a. 531) cuando dice: <<si alguno hubiese consentido que un esclavo suyo tenga una dignidad, así como un empleo en la milicia, sea despojado tanto del dominio del esclavo como del derecho que les

³⁶⁴En CTh. 7.13.11 (a. 382) [=C. J. 12.43(44).2] los emperadores Graciano, Valentiniano y Valente castigaban al que hubiese conseguido que un esclavo ajeno fuese inscrito <<*in tirocinio militiae*>>, quedando obligado a pagar, si fuese descubierto, una libra de oro al Fisco; además el esclavo sería devuelto a su dueño si éste hubiese ignorado el hecho.

³⁶⁵Se trataría en este caso de una restitución en la ingenuidad (*natalium restitutio*) concedida por el emperador (C. J. 6.8; D. 40.11.2; D. 40.11.3; Nov. 78. 1-2-5) y no del *ius aureorum anulorum*; vid. *supra* nt. 343. HERRMANN-OTTO E., <<Causae liberales>>, INDEX 27 (in memoria di G. Impallomeni), Napoli, 1999, p. 155.

³⁶⁶HERRMANN-OTTO E., <<Causae liberales>>, *op. cit.*, pp. 144-145.

corresponde a los patronos>>³⁶⁷; y también al final del prefacio de la Nov. 81 (a. 539) el mismo emperador añade: <<porque hemos sancionado que, si sabiéndolo su dueño obtuviera un esclavo la milicia, o alcanzara cualquier dignidad, fuese hecho libre inmediatamente por el imperio, y fuese llevado a la misma ingenuidad>>³⁶⁸.

Ahora bien, a tenor de las fuentes jurídicas y literarias vemos que debían ser habituales los procesos de *status (causae liberales)*³⁶⁹ respecto de personas que se decían libres o cuyos padres eran

³⁶⁷LOUIS-LUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques...*, op. cit., p. 460, opina que *''la conclusion qui ressort nettement de cette constitution, c'est que l'esclave était absolument incapable d'être titulaire d'une militia''*. Véase, LUCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, p. 12.

³⁶⁸La misma política es seguida por Justiniano en Nov. 123. 17 (a. 546) respecto del esclavo que con el asentimiento de su dueño es ordenado clérigo por el obispo: <<*liber et ingenuus erit*>>; si por el contrario, hubiese sido ordenado ignorándolo el dueño, se concede a este último que en el plazo de un año pruebe la condición servil del mismo y pueda así recobrar al esclavo. En cualquier caso se establece también que si posteriormente el esclavo abandona su estado eclesiástico y pasa a la vida seglar sea devuelto a su antiguo dueño.

Recordamos que anteriormente en una ley de Zenón del año 484 se había permitido que los esclavos pudiesen llevar una vida solitaria en monasterios siempre que hubiesen recibido el consentimiento de sus dueños, estableciéndose que si posteriormente abandonaban la vida monacal perderían la libertad y volverían a caer en la esclavitud: C. J. 1.3.37(38).

³⁶⁹HERRMANN-OTTO E., <<Causae liberales>>, op. cit., p. 144. VISMARA G., *'Causae liberales' nel tribunale di Agostino vescovo di Ippona*, SDHI 61, Roma, 1995, pp. 365 ss.

considerados como tales³⁷⁰. En todo caso se trataría de una conducta dolosa por parte del esclavo mismo o de su familia al hacerse pasar aquél por libre para conseguir así un ascenso social o un puesto en la Administración llegando incluso algunos al rango senatorial como consecuencia de estas falsas afirmaciones³⁷¹.

VII) Los comerciantes (*negotiatores*):

³⁷⁰ Son numerosas las fuentes jurídicas y literarias que se refieren a los *servi fugitivi*, esclavos que se escapaban de sus dueños sin *animus revertendi* (D. 21.1.17), los cuales necesariamente ocultaban su verdadero *status* para poder aspirar a una magistratura, como era el caso contemplado en D. 1.14.3 (*servus fugitivus* como pretor); vid. *infra* pp. 389-390.

Sobre la condición jurídica del *servus fugitivus*: BUCKLAND W. W., *The Roman Law of Slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908, pp. 267 ss.; y recientemente, KLINGENGER G., *Corpus der römischen Rechtsquellen zur Sklaverei X.6. Juristisch speziell definiert Sklavengruppen: Servus fugitivus*, Stuttgart, 2005; CASCIONE C., 'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma antica, en *Filía*, Scritti per G. Franciosi, I, Napoli, 2007, pp. 501 ss.; RAMPAZZO N., Quasi praetor non fuerit. *Studi...*, *op. cit.*, pp. 396 ss.

³⁷¹ C. J. 10.33(32).2: *servus natus* como edil; C. J. 7.16.41: *servus* como decurión y *principalis*. También Dion Cas., 48.34.4-5, nos menciona dos siervos fugitivos que actuaron como *quaestor* y *praetor* (39 a. C.).

La legislación imperial prohibía que los *negotiatores* pudiesen acceder a un puesto en la Administración³⁷²; en este sentido, ya Constantino estableció en CTh. 6.37.1 [=C. J. 12.32(33).1]³⁷³ la prohibición de que pudiesen alcanzar la dignidad de perfectísimo³⁷⁴, y en el s. V se publicaron diversas constituciones que reiteraban esta prohibición: en una ley de Honorio y Teodosio recogida en C. J. 4.63.3 (a. 408-409) no se permite que se dediquen al comercio aquellos que tengan un origen noble,

³⁷²Los comerciantes (*negotiatores*) eran considerados en el Bajo Imperio como personas que ejercían profesiones viles y deshonestas, asimilados a los *abjecta officia* y a los empleos que procuraban *turpia lucra* (C. J. 12.1.6, a. 357-360: <<...*ex ultimis negotiatoribus vel monetariis abiectisque officiis vel deformis ministerio stationarii*>>; C. J. 12.57(58).12.3, a. 471). Nos recuerda FADDA C., *Istituti commerciali del diritto romano. Introduzione*, Napoli, 1987, p. 22, que “è un principio tradizionale del diritto pubblico romano che non possa aspirare alle pubbliche cariche chi esercita una industria o riceve una mercede per la prestazione dell’opera sua”. GARCÍA BROSA G., *Mercatores y negotiatores: ¿simples comerciantes?*, en *Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiquitat de la Mediterrània Occidental*, n. 30, Barcelona, 1999, pp. 173 ss.

Sin embargo, vemos que en D. 50.2.12 (Call., 1 *cognit.*) no se prohíbe que los comerciantes sean nombrados decuriones u otro cargo municipal ya que no se les considera infames.

³⁷³ = Bas. 6.34.2.

³⁷⁴... *vel non in aliquo negotio constiterint* ...

GIGLIO S., *Il tardo impero e il suo senato...*, *op. cit.*, p. 112, recoge que esta ley fue emanada con seguridad por Constancio II.

honores o un gran patrimonio³⁷⁵; en C. J. 12.57(58).12.3 (a. 436) los emperadores Teodosio y Valentiniano disponen que todos aquellos <<*qui diversarum rerum negotiationibus detinentur*>>³⁷⁶ serán excluidos de todos los oficios provinciales <<*ut omnis honor atque militia contagione huiusmodi segregetur*>>; también el emperador León recuerda en C. J. 12.20.5 al *magister officiorum* Patricio, respecto del ingreso en el cuerpo de los *agentes in rebus*, que <<quedan exceptuados (...) todos los comerciantes que por sí o por personas interpuestas ejercen algún comercio, porque a éstas se les prohibió ya de antes por las constituciones imperiales desempeñar un empleo en la milicia>>³⁷⁷. No obstante, vemos que pese a esta legislación era práctica frecuente que los comerciantes siguiesen alcanzando puestos en la milicia, a tenor

³⁷⁵ *Nobiliiores natalibus et honorum luce conspicuos et patrimonio ditiores perniciosum urbibus mercimonium exercere prohibemus, ut inter plebeium et negotiationem facilius sit emendi vendendique commercium.*

FADDA C., *Istituti commerciali del diritto romano...*, op. cit., p. 23.

³⁷⁶ En el texto de la ley se menciona a los banqueros (*trapezitas*), a los vendedores de pedrería, de plata, o de vestidos (*gemmarum argentique vestiumve venditores*), a los boticarios (*aphotecarios*), y en general, se dice que estarían excluidos los que en sus talleres comercian con otras mercancías (*institores aliarum mercium ergasteriis*).

³⁷⁷ ... *exceptis videlicet universis negotiatoribus, quodlibet mercimonium per se gerentibus interpositasve personas, quum eis ante sacratissimis constitutionibus interdictum sit militare ...*

de las palabras de Sidonio Apolinar³⁷⁸ (*epist.* I) que, cuando enumera los males de su tiempo (s. V d. C.), exclama: <<*Vigilant fures, dormiunt potestates, foenerantur clerici, student pilae senes, aleae iuvenes, armis eunuchi, negotiatores militant, milites negotiantur*>>. La misma medida es adoptada por Justiniano en una ley contenida en C. J. 12.34(35), a. 528-529: <<*Negotiatores ne militent*>>, que prohíbe en su único fragmento el ingreso en la milicia (*militare prohibemus*) a aquellos que en Constantinopla o en provincias estén al frente de cualquier taller (*ergasterius*), con la única salvedad de los comerciantes que en la ciudad de Constantinopla se dediquen a la venta de plata (*exceptis argenti distractoribus*)³⁷⁹ a los que se les prohíbe que entren a formar

³⁷⁸Sobre la persona y la obra de Sidonio Apolinar, véase FERNÁNDEZ LÓPEZ M. C., *Sidonio Apolinar, humanista de la antigüedad tardía: su correspondencia*, en *Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Antigüedad tardía*, vol. 11, Universidad de Murcia, 1994, pp. 11-291 ss.

³⁷⁹En Constantinopla los argentarios formaban una corporación (*corpus argentariorum*) dependiente del *comes sacrarum largitionum*. Además, existía un *scrinium ab argento* formado por once miembros y otro de treinta y nueve *argentarii comitatenses* (C. J. 12.23(24).7.16 y 18, a. 384). DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 476, 480; LUCHETTI G., *Spunti per una imagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii costantinopolitani*, en *Studi Senesi. Rivista dell'Università degli Studi di Siena*, 2005, pp. 40, 70.

Añade DELMAIRE (*Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, 476, nt. 21) que es difícil distinguir entre los *argentarii* la función de banquero de la de fabricante o comerciante de plata, puesto que el *faber argentarius* y el *vascularius* son únicamente artesanos y el *nummularius* o *trapezitas* exclusivamente cambista y banquero, mientras que el *argentarius* combinaba en realidad las dos actividades. Véase, PLATON

parte de la milicia armada (<<*armata quidem militia penitus abstinere sancimus*>>) pero que pueden acceder a cualquier puesto en la milicia civil³⁸⁰. Se establece también en esta ley que si pese a esta prohibición alguno hubiese ingresado en la Administración deberá elegir entre su negocio o la milicia, pero si optasen por quedarse en esta última y posteriormente se descubriese que no habían abandonado su negocio, serían privados de su cargo en aquella. Una excepción a esta norma venía dada respecto de los *armorum negotiatores* (fabricantes de armas) a los que se les permitía compatibilizar su negocio con una milicia *competens suam professionem*, es decir, una *militia fabricensium*³⁸¹.

G., *Les banquiers dans la législation de Justinien*, en *Nouv. Rev. Hist. de Droit Français et Étranger*, 33, Paris, 1909, pp. 289 ss.; GRUMMERUS H., *Die römische Industrie. Wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen*, en *KLIO*, 14, Frankfurt am Main, 1915, pp. 132 ss.; ANDREAU J., *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV siècle av. J.C.-III ap. J.C.)*, Rome, 1987; DÍAZ BAUTISTA A., *Estudios sobre la banca bizantina (negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987.

³⁸⁰En *P. Cairo Masp.* 67126 se habla de un banquero, *Flavius Andreas*, que ocupó un cargo en la Administración en el año 541. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, p. 480.

³⁸¹Recogemos la Nov. 85.1 (a. 539) en la que Justiniano establece que: <<ningún particular se dedique al trabajo de fabricación de armas y que sólo fabriquen armas los que están empleados en las fábricas públicas de armas, o los que se llaman *fabricenses*>>. La razón podría ser de orden público ya que parece ser a tenor de la ley que habría bastantes asesinatos y hechos violentos en aquella época en la ciudad de Constantinopla; y en el cap. 3.1 de dicha Novela se dice: <<(...) prohíban que los particulares fuera de los *fabricenses*, hagan el

VIII) Los curiales³⁸²:

negocio de la fabricación de armas (*armifecturae agere causam*). (...) mas si entre los operarios particulares hubiesen encontrado artífices idóneos, inclúyanlos si ellos quisieren, en las milicias, e inscriban sus nombres en la matrícula, (...) y reciban, también del fisco, las *annonas*>>.

³⁸²Los términos curial, decurión y munícipe son sinónimos desde el s. IV d. C.; PIGANOL A., *L'empire chrétien...*, *op. cit.*, p. 394. Recordamos (vid. pp. 146 ss.) que los decuriones (*curiales*) formaban un orden (*ordo decurionis*) y eran una especie de nobleza hereditaria (nombrados de por vida, su condición se transmitía hereditariamente al igual que en Roma el patriciado), de la que no se podía salir salvo raras excepciones como la de tener doce hijos y, ordinariamente, siempre que se hubiesen recorrido todos los escalafones de la jerarquía municipal. El decurionato era un cargo honorífico: <<*maximus honor in municipio...*>>, se dice en D. 50.3.1 pr. (Ulp., 3 *de off. proc.*); y en D. 50.4.14 pr. (Call., 1 *de cognit.*) se recoge que: <<*honor municipalis est administratio reipublicae cum dignitatis gradu*>>. La importancia de estos cargos se refleja –como ya vimos– en Nov. Maior. 1 cuando nos dice que los decuriones son los nervios y la fuerza del Estado (<<*curiales nervos esse reipublicae ac viscera civitatum nullus ignorat ...*>>): ellos administran los bienes de la ciudad, se encargan de la gestión de los bienes comunales, de la compra del grano, de la construcción de los acueductos, de la revisión del catastro, de la conservación de las vías públicas de la ciudad, de la organización de los juegos y espectáculos, así como de la percepción de los impuestos de su ciudad - nombraban bajo su responsabilidad a los recaudadores (*susceptores*)-, además desempeñaban también funciones jurisdiccionales y de policía. Desde Constantino eran responsables de la gestión con su propio patrimonio.

Además de estas cargas, que asfixiaban a los curiales, se estableció la necesidad de obtener la autorización del gobernador de la provincia para la venta de sus bienes inmuebles y esclavos, la cual sólo podría acordarse si había una causa legítima y necesaria ya que en caso contrario la venta sería nula y el adquirente perdería no sólo el precio de la cosa sino que también debería devolver la posesión de la misma con sus frutos (CTh. 12.3.1, a. 386 [=C. J. 10.34(33).1]); asimismo se prohibió que los curiales se retirasen al campo abandonando sus obligaciones en la ciudad bajo pena de confiscación de todos sus bienes rurales: C. J. 10.38(37).1, a. 396.

Desde el siglo III d. C. era habitual la huida de los curiales de sus ciudades, bien para ascender socialmente, bien para escapar de las pesadas cargas inherentes a su función. También era frecuente que los curiales que escapaban de la curia ingresasen en la Administración, sobre todo en las oficinas de los gobernadores provinciales -como es el caso de *Evagrius* que obtuvo en el año 363 un puesto de asesor del gobernador, y en otoño del 364 deviene gobernador provincial gracias a la ayuda del prefecto del pretorio *Salutius*³⁸³- y en las oficinas de la Administración central, llegando incluso los más afortunados a introducirse entre los clarísimos³⁸⁴.

Sin embargo, frente a lo anterior podemos reseñar que los decuriones gozaban de ciertos privilegios: podían servirse de los caballos de la posta en caso de un viaje por razón de su cargo (CTh. 9.30.1) y estaban exentos de las cargas extraordinarias ajenas a su ciudad como, por ejemplo, las requisiciones de vestimenta para las tropas (CTh. 12.6.31).

³⁸³CTh. 12.1.83 (a. 380). PETIT P., *Les fonctionnaires...*, *op. cit.*, p. 93.

³⁸⁴También en su huida los curiales se enrolaban en el ejército (CTh. 12.1.56) o se hacían abogados, profesores o notarios (CTh. 12.1.87, CTh. 12.1.98, CTh. 12.1.3), e incluso algunos se introducían entre los obreros de las fábricas del Estado, como es el caso de los trabajadores de las fábricas de armas (*fabricenses*), en donde para ingresar en esta corporación se debía probar que el interesado <<no es descendiente de abuelo ni de padre curial, y que no debe nada al ordo de los decuriones de su ciudad>> [CTh. 10.22.6 (=C. J. 11.10(9).4), a. 412]. Asimismo, era frecuente que los curiales abandonasen la curia para convertirse en clérigos, disponiéndose en Nov. 123.15 (a. 546) que

En un primer momento, se consintió a los curiales entrar en los oficios palatinos y de esta forma numerosos funcionarios de las oficinas centrales o de la Administración provincial fueron reclutados entre los mismos³⁸⁵: en Occidente, los *palatini*, sus hijos y sus nietos fueron dispensados de la curia por un privilegio general como se recoge en CTh. 6.35.1 (a. 313) y CTh. 6.35.3 (a. 319)³⁸⁶, pero esta exención durará poco tiempo ya que en el 341

<<*sed neque curialem aut officialem clericum fieri ut non ex hoc venerabili clero iniuria fiat (...)>>*, estableciéndose que estas personas deberán ser restituidas a su propia condición, como si no hubiesen sido ordenadas (...) salvo que hubiesen estado en la vida monástica un mínimo de quince años en cuyo caso se reivindicará para la curia y el Fisco las tres cuartas partes de sus bienes.

La entrada en la milicia armada estaba vedada al curial y a sus hijos: así, los emperadores Diocleciano y Maximiano en C. J. 12.33(34).2 establecen que <<*...sed omnibus in fraudem civilium munerum nomina armatae militiae dantibus fraudem prodesse displicuit>>*; y Constantino dispone en CTh. 12.1.13 (a. 326)=C. J. 10.32(31).17 que <<el que fuere militar habiendo abandonado la curia sea de nuevo llamado a la curia>>; esta medida se contiene también en una breve constitución de León I (C. J. 12.33(34).4), dirigida a Dióscoro, prefecto del pretorio, en la que se establece: <<*omnes omnino curialis vel cohortalis condicionis constituti nullam armatam militiam in posterum adripiant>>*. Podemos citar también a este respecto: CTh. 12.1.10; CTh. 12.1.13; CTh. 7.13.1; CTh. 7.2.1; CTh. 7.2.2; CTh. 12.1.113; CTh. 12.1.154; CTh. 7.20.3.3; CTh. 12.1.147; CTh. 12.1.181.

³⁸⁵PIGANIOL A., *L` empire chrétien...*, op. cit., p. 394, nos dice que Constancio había permitido que muchos curiales abandonasen las curias municipales para acceder al Senado de Constantinopla; como reacción Teodosio I y ya antes Valentiniano I exigieron que el curial que llegase a senador aportase un sustituto a su curia (CTh. 12.1.122, a. 371)

³⁸⁶No obstante, en el año 325 Constantino estableció que fuesen buscados los decuriones que por huir de la curia hubiesen ingresado en las oficinas de los gobernadores provinciales (*ad militiae praesidia*) salvo

el emperador Constancio II ordena que los palatinos que no tuviesen al menos cinco años de antigüedad en el cargo retornen a sus ciudades (CTh. 12.1.31)³⁸⁷; en el año 382 Graciano estableció un plazo de prescripción de treinta años de servicio para la *dignitas palatina* (CTh. 12.1.88: <<*curiales nisi ... per triginta annos dignitas palatina defendat, certum est origini esse reddendos*>>)³⁸⁸, y será Honorio quien en el año 397 suprima

aquellos que, por su grado o situación, estuviesen encargados de la alimentación de las tropas (CTh. 12.1.11). Al año siguiente, el mismo emperador dispuso que fuesen devueltos a sus ciudades los decuriones que de forma fraudulenta hubieran entrado en los diferentes *officia* a no ser que llevasen veinte años de servicio (CTh.12.1.13, a. 326). Constantino en el 336 renueva para todo el Imperio la orden de devolver a las curias a los curiales y a sus descendientes que hubieran ingresado en la milicia salvo aquellos que sirviesen en los oficios palatinos (CTh. 12.1.22).

³⁸⁷Desde ese año los decuriones no serán, en principio, elegibles para los oficios palatinos quedando siempre expuestos a ser devueltos a sus respectivas curias salvo que asegurasen su inmunidad personal con un largo servicio; sus hijos, en cualquier caso, quedaban obligados a seguir la condición curial de sus padres. Así, en una ley de Constancio II se concedió la inmunidad de la condición curial a los *agentes in rebus* que hubieran servido durante veinte años -en el siglo IV muchos miembros de la *schola agentium in rebus* eran curiales que habían huido de sus ciudades, como refleja Libanio en su obra (*Or.* 14,12 y 18,135-140)-; y en el año 413 se estableció que si un decurión hubiese alcanzado el grado más alto dentro del cuerpo de los *agentes in rebus* (*princeps*) se aseguraba la inmunidad no sólo para él sino también para los hijos nacidos después de la promoción; en época de Justiniano este privilegio se otorgó también a los que hubiesen alcanzado el grado de *proximi* en los *sacra scrinia*.

³⁸⁸Sin embargo, un año más tarde, en el 383, una ley de Graciano, Valentiniano y Teodosio I (CTh. 6.35.12), estableció un periodo de diez años de servicio en la *militia palatina* para que no fuesen devueltos a su curia.

totalmente aquel privilegio de los *palatini* (CTh. 12.1.154)³⁸⁹. Un año más tarde, los emperadores Arcadio y Honorio disponen, en defensa del orden curial, que retornen a sus curias aquellos que se hubiesen “refugiado” en el *officium* del procónsul de África³⁹⁰, constituido por cuatrocientos empleados, estableciendo además que este número no fuese superado, bajo multa de cinco libras de oro para el gobernador provincial y de diez libras para su *officium* (CTh. 1.12.6, a. 398), también el mismo año los referidos

³⁸⁹ *Post alia: si qui municipum vel palatinam vel armatam aliquando militiam debitis praetulerit functionibus, nullis privilegiis, nullis postremo temporibus exuatur nec ei annorum spatia stipendiorumque merita supputentur, sed teneat suum curia et perpetua sibi obnoxium vindicatione defendat.*

La Cancillería imperial en época de Honorio, ante la fuga en masa de los curiales de sus *civitates*, se vió obligada a tomar importantes medidas al respecto: en mayo de 395 (CTh. 12.1.143-144) prohibió a los *municipes* (=curiales) que eludiesen con actos fraudulentos, como enrolarse en el ejército, las obligaciones tributarias hacia sus ciudades, disponiendo la expropiación de su patrimonio en favor de la curia después de un quinquenio de ausencia. En otra constitución de diciembre de 397 recogida en CTh. 12.1.153 establecía que, dado que algunos decuriones habían alcanzado el título de *protectores* o *domestici*, conservasen las dignidades honorarias, mientras que los que hubiesen alcanzado estos grados con medios ilícitos sufran *verbera iudicariae emendationis*. De igual forma unos años antes, en CTh. 1.12.4 (a. 393) [=C. J. 12.55(56).1, con alguna variante], Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio se dirigían a Flaviano, procónsul de África, ordenándole que ningún curial ni nadie de origen plebeyo fuese agregado a su servicio, y que en caso de que algunos de estos hombres hubiesen ingresado entre los oficiales de justicia sean inmediatamente restituidos a sus respectivos empleos municipales.

³⁹⁰ SORACI R., *Il curialato nella legislazione di Onorio*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno internazionale in memoria di A. Chastagnol, Napoli, 2001, pp. 544-545.

emperadores sancionan en CTh. 12.1.159³⁹¹, con gran severidad, a los curiales que hubieran obtenido la administración de una provincia sustrayéndose al cumplimiento de los *munera curialia*: serán privados del cargo que hubiesen obtenido y conducidos a su municipio *velut manu mox iniecta*³⁹², además serán sancionados con la confiscación de la mitad de su patrimonio: <<*sciant se eo quem meruerant honore privandos et non solum ad curiam velut manu mox iniecta revocandos et cunctis rursus ad exordio muneribus servituros, verum etiam media patrimonii parte multandos*>>; todavía Arcadio y Honorio castigan en el año 399 (CTh. 12.1.161 [=C. J. 10.32(31).51]) a los que huyendo de su curia de origen entran “*qualibet fraude atque ambitione*” en los oficios siendo perseguidos “*plectibili severitate*”; las sanciones establecidas serán la expulsión de la milicia y la confiscación de sus bienes en beneficio de la curia. Y ambos emperadores reiterarán en CTh. 12.1.179 (a. 415) y en CTh. 12.1.181 [= C. J.

³⁹¹Recogida parcialmente en C. J. 10.32(31).50.

³⁹²La *manus iniectio* era en esta época el procedimiento empleado para hacer retornar a su condición a quienes se dedicaban a otra actividad distinta de aquella a la que estaban sujetos por su condición, y, en nuestro caso, constituye un medio concedido a los órganos de la curia para la *vindicatio* de un *curialis fugitivus*. MOLÈ M., *La manus iniectio nel codice teodosiano*, RISG, vol. 11, Roma, 1963-1967, pp. 39-41, 60; DE SALVO L., *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi*, Napoli, 1995, pp. 550 ss.

10.32(31).54] (a. 416) la prohibición que impedía a los decuriones la entrada en la *militia*, y concretamente, en esta última disposición se establece el arresto preventivo mediante *manus iniectio* (<<*in eundem manus iniectioem concessa*>>) del presunto curial que niegue su origen³⁹³.

De todos modos, en el año 423 Teodosio II acordará (CTh. 6.35.14) que los palatinos de las finanzas que no hayan sido reclamados por sus corporaciones de origen durante quince años podrán conservar su puesto en la *militia*; ahora bien, para sus hijos se dispone que quedarán ligados a las cargas curiales de las que su padre hubiese sido dispensado. Pero, frente a lo anterior, en CTh. 12.1.188 [=C. J. 10.32(31).55] (a. 436), los emperadores Teodosio II y Valentiniano III reiteran que si algún decurión o cualquiera que estuviese sujeto a la curia hubiese alcanzado algún cargo en la milicia deberá ser restituido a la curia sin ampararse en ninguna prescripción de tiempo.

³⁹³En CTh. 8.7.10 (a. 369), los emperadores Valentiniano I y Valente ratifican un edicto del prefecto del pretorio Vivencio por el que se expulsaba de la Administración a algunos *praefectiani* considerados incapaces (*iners vulgus, indigni militia*), impidiéndoles que retornen al servicio aunque sea con otro grado; en caso de que se incumpla esta disposición se establece que todo *rector* puede ejercitar sobre ellos una *manus iniectio*. MOLÈ M., *La manus iniectio...*, op. cit., p. 58.

Es interesante mencionar una constitución de Zenón recogida en C. J. 10.32(31).64 en la que se dice que si alguno que estando sujeto a la curia fuese promovido a las altas dignidades de *comes rei privatae*, *comes sacrarum largitionum*, *comes domesticorum*, *quaestor sacri palatii* o *magister officiorum* podría abandonar sus obligaciones curiales, pero se establece que una vez hayan cesado de su cargo deben volver a la curia, quedando sujetos a la misma sus hijos, aún los nacidos mientras desempeñaba dicho cargo. Además, se dice que mientras estén en la Corte deberán nombrar un sustituto en la curia, quedando en todo caso sus bienes vinculados a la corporación³⁹⁴. Respecto de los que fueron nombrados para dichas dignidades con

³⁹⁴Esta disposición está en consonancia con lo establecido en una constitución de Teodosio II y Valentiniano III recogida en C. J. 10.32(31).60 (a. 442) en la que se dice que nadie, salvo que hubiese obtenido un beneficio especial, desempeñe las funciones curiales por medio de cualquier persona que le sustituya, aunque ostente la dignidad de espectable (*spectabile dignitate*). Sin embargo, se establece que a los que obtuvieron la dignidad de ilustre a título honorario no se les prohíba que desempeñen los cargos en la curia por medio de sustitutos, pero quedando, en este caso, obligados sus propios bienes. Sobre la posibilidad para los curiales de liberarse de sus obligaciones nombrando un sustituto idóneo, BIANCHINI M., *‘Vincula curialia’ e ‘substitutae personae’*, en *Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca*, vol. I, Napoli, 2001, pp. 221-236 (p. 236), considera que *“la figura del sostituto permette quindi di non escludere da cariche nell’amministrazione imperiale i decurioni più capaci e forniti di provata esperienza di gestione della cosa pubblica, senza impoverimento delle curie cittadine (...)”. L’inquadramento di un sostituto e l’accertamento della sua idoneità non sono lasciati ad automatismo o all’arbitrio dei singoli e nemmeno alla decisione delle curie, ma è richiesta la prudente valutazione di un funzionario, caso per caso*”.

anterioridad a esta ley se dispone que quedarán libres de las obligaciones curiales tanto ellos como sus hijos.

Justiniano deroga esta ley de Zenón en C. J. 10.32(31).67(66), del año 529, estableciendo que únicamente los que hubiesen obtenido el patriciado, el consulado honorario u ordinario, la prefectura del pretorio o de la ciudad, o el cargo de *magister militum* estarán exentos de la condición de curial juntamente con sus bienes y sus hijos nacidos desde que obtuvo la dignidad, ya que los nacidos anteriormente no quedarían exentos de su condición curial. Se concede esta exención también a los abogados del Fisco de la prefectura de Oriente y de Iliria cuando asciendan al cargo de patrono del Fisco, a los *principes* de la escuela de los *agentes in rebus*, y a los *proximi* de las sagradas secretarías, así como a los hijos de todos ellos que hubiesen nacido después de haber desempeñado estos cargos.

No obstante lo anterior, Justiniano en Nov. 70 (a. 538), dirigida a Juan, prefecto del pretorio, renueva la ley que permitía la posibilidad de que el emperador liberase de su condición a un miembro de la curia otorgándole las credenciales de una administración (*codicillis administrationis*)³⁹⁵, pero recordando también que si lo que se le había concedido era un cargo

³⁹⁵ Vid. *infra* pp. 333 ss.

honorario en la Administración no quedaría liberado de su condición (*<<Ut ordinariae praefecturae urbanae duae et praetorianae praefecturae quae in cingulo et in actu sunt solae, non etiam honorariae liberent a curiali fortuna>>*).

Terminamos recogiendo la opinión de GANGHOFFER³⁹⁶ acerca de la legislación fluctuante en las dos partes del Imperio respecto de la entrada de los curiales en la Administración de época postclásica: *“... en Orient, où la politique consiste à favoriser le plus largement possible le recrutement de fonctionnaires, ces règles concernant l’entrée dans les administrations publiques, prouvent que <l’ échange> bureaux-curies est possible. L’ Orient, à la différence de l’ Occident, était bureaucratique”*³⁹⁷.

IX) Los cohortales:

³⁹⁶GANGHOFFER R., *L’ évolution des institutions municipales...*, *op. cit.*, pp. 82-83.

³⁹⁷DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, *op. cit.*, pp. 526 ss.

Esta categoría de empleados públicos formaba parte del *officium* de los gobernadores provinciales³⁹⁸ siendo los mismos reclutados principalmente entre los miembros de profesiones liberales y entre los curiales; estos oficiales no podían abandonar su empleo ni aspirar a otra condición sin un permiso especial del emperador, o bien, en el caso de que hubiesen desempeñado este cargo durante venticinco años³⁹⁹. De esta manera, podemos constatar que el cohortal que hubiese entrado en otra milicia debía ser devuelto a su antigua condición y despojado de la dignidad u honor conseguido tal y como establecieron los emperadores Teodosio y Valentiniano en CTh. 8.4.30 [=C. J. 12.57(58).12 pr.-1]⁴⁰⁰ (a. 436) que recuerdan también que los hijos de los

³⁹⁸ Los cohortales eran repartidos en *scrinia* (oficinas), como sucedía también entre los oficiales de los altos funcionarios de la Administración central, distinguiéndose dentro de los cohortales el *princeps officii* –que llevaba la dirección de los *scrinia*–, los *principes*, el *cornicularius*, el *primipilaris*, el *adjutor*, el *commentariensis*, los *actuarii vel ab actis*, los *numerarii*, los *exceptores*, los *ducenarii*, *centenarii* y *sexagenarii*. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., vol. I, pp. 169-175.

³⁹⁹ A este respecto señala SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 381, que “la cohorte des gouverneurs avait été originariament composée d’un corps de soldats; et si plus tard cette milice avait revêtu un caractère mixte et autant civil que militaire, elle avait conservé ce rapport d’analogie avec l’armée, que les membres qui en faisaient partie restaient attachés à leur condition pendant un temps à peu près égal à celui du service militaire”.

⁴⁰⁰ *Si cohortalis apparitor aut obnoxius cohorti ad ullam adspiraverit dignitatem, spoliatus omnibus impetrati honoris insignibus ad*

cohortales u *officiales* del gobernador nacidos estando su padre en este *officium* seguirán la condición del mismo: <<*liberis etiam in tali eius condicione susceptis, fortunae patriae mancipandis*>>. Solamente la prescripción de cuarenta años podía liberar al que hubiese conseguido entrar en otra milicia: <<*quod si quis ex his ausus fuerit ullam adfectare militiam, nulla praescriptione temporis muniatur praeter eam scilicet, quae ex quadriginta annis colligitur...*>>.

También el emperador León dispone en C. J. 12.21(22).7 (a. 468) que: <<cualquiera que procedente del cuerpo de los cohortales hubiere procreado un hijo militando en la corporación de los *agentes in rebus*⁴⁰¹>>, si el hijo nació con anterioridad a ser distinguido el padre con el honor de la principalía (*princeps officii*)⁴⁰², quedará sujeto a la condición de cohortal, y si hubiese nacido con posterioridad a este nombramiento <<el que nació sea libre (...) y ajeno a esta condición>>. Además, en C. J. 12.57(58).14 (a. 471) el mismo emperador establece que aquél que estando todavía obligado a los servicios de cohortal hubiese

statum pristinum revocetur...; véase también C. J. 12.57(58).13 (a. 442?).

⁴⁰¹ En el año 468, la *schola* de los *agentes in rebus* quedó abierta también a los cohortales como se deduce de CTh. 12.21.7. DI PAOLA L., *Per la storia degli 'occhi del re'...*, op. cit., p. 101.

obtenido el cargo de gobernador provincial o un oficio o dignidad en otra milicia, aunque alegue que tal cargo se le confirió por voluntad del emperador, sea <<obligado a desempeñar solamente el cargo de primipilo (*primipilus*), habiendo de quedar sujeto hasta el término de su vida a las funciones curiales de la ciudad en la que nació>>⁴⁰³. Y en C. J. 12.33(34).4 (a. 472?) el emperador León reitera una vez más la prohibición de que los cohortales y los curiales abandonen sus responsabilidades ingresando en la milicia armada, y así establece que: <<*omnes omnino curialis vel cohortalis constituti nullam armatam militiam in posterum adripiant*>>.

Buena prueba del carácter gravoso que tenía la condición de cohortal la encontramos en una constitución de Justiniano (C. J.

⁴⁰² Los *agentes in rebus* al término de su servicio, que era de veinticinco años, eran distinguidos con el honor de la principalía.

⁴⁰³ Recordamos que los *primipilares* eran empleados de los gobernadores provinciales y estaban afectos a su milicia al igual que sus hijos (C. J. 12.47(48).2, a. 380?: <<*filios primipilariorum paternam sequi condicionem oportet*>>). Se encargaban del *pastus primipilus* (transporte de alimentos desde su provincia al lugar donde se encontraba el ejército) y de la *exhibitio cursus publici* (mantenimiento de la posta pública: carros, caballos y *mansiones*). Estas funciones entrañaban una gran responsabilidad pero procuraban a los *primipilares* privilegios particulares.

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, pp. 172-173; SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, op. cit., pp. 171-173, 372. Sobre estos oficiales: DOBSON B., *Die Primipilares. Die Entwicklung und Bedeutung. Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges*, Köln, 1978.

1.4.34.4) dirigida a Epifanio, arzobispo y patriarca de Constantinopla, en la que se castigaba a los sacerdotes que habitualmente jugaban a los dados y asistían a espectáculos teatrales o circenses (reiteradas veces Justiniano les había prohibido tales diversiones) con la separación del orden eclesiástico durante un tiempo, y si pasado este plazo se comprobaba su arrepentimiento se permitía que volviesen al estado eclesiástico; pero, si no fuese así, se dispone que serían expulsados del orden sacerdotal e integrados en la curia en la que ejercían su ministerio con todos sus bienes, si los tuvieran. En caso de que el sacerdote no tuviese ningún patrimonio se ordena que ingrese como cohortal en el *officium* del gobernador provincial, <<imponiéndosele esta deshonra en lugar de su antigua dignidad>>⁴⁰⁴.

⁴⁰⁴ QUINTANA ORIVE E., *D. 11.5 (De aleatoribus) y C. 3.43 (De alea lusu et aleatoribus): precedentes romanos del contrato de juego*, Anuario jurídico y económico escurialense, XLII, San Lorenzo del Escorial, 2009, p. 32 [= Revista General de Derecho Romano, www.iustel.com, n. 12, Madrid, 2009].

E) REQUISITOS TÉCNICOS: LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL CANDIDATO COMO GARANTÍA DE SU ACTUACIÓN.

La posesión de una serie de conocimientos técnicos constituía un requisito valorado por las leyes para el acceso a un cargo en la milicia, sin embargo, lo cierto es que esta exigencia o valoración dependía de las circunstancias de cada caso⁴⁰⁵. A este respecto, podemos citar a Juan Lido que en su obra <<*De magistratibus reipublicae*>>⁴⁰⁶ hace una distinción dentro de los departamentos (*ministeria*) de la prefectura del pretorio entre aquellos que denomina *ministeria litterata* como son, por

⁴⁰⁵Sobre el reclutamiento, la formación y la profesionalidad de los funcionarios en la Antigüedad tardía: PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public posts in late antiquity*, en *Classica et Mediaevalia* 31, Aarhus, 1970, pp. 161-213; ANDREADES A., *Le recrutement des fonctionnaires et les universités dans l'empire byzantin*, Mélanges Cournil, 1926, pp. 17-40; MARROU H.I., *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris, 1965, pp. 412-413; ANDREADES B.L., *Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine society*, en *Kleronomia* 2, Thessaloniké, 1970, pp. 272-291; KUNDEREWICZ C., *Le gouvernement et les étudiants dans le Code Theodosien*, *Revue historique de droit français et étranger* (RHD), 50, Paris, 1972, pp. 575 ss.

⁴⁰⁶Lid., *mag.*, 3,7; 3,21. CAIMI J., *Burocrazia e diritto ...*, *op. cit.*, p. 33.

ejemplo, los *exceptores* que son llamados *virī litteratī*, y los *ministeria illiterata* entre los que estarían los *cursores* (empleados de correos)⁴⁰⁷.

Por lo que hace a la preparación de los funcionarios podemos señalar que los estudios clásicos como el latín, la retórica y el Derecho⁴⁰⁸ fueron principalmente la vía más segura para alcanzar la condición de alto funcionario desde la época del Principado. También se generalizan en la Administración del Bajo Imperio los estudios técnicos, como es el caso de la estenografía⁴⁰⁹ para ciertos puestos como el desempeñado por los *notarii* (encargados en un primer momento de redactar las notas del consistorio)⁴¹⁰.

⁴⁰⁷NELLEN D., *Virī litteratī. Gebildetes Beamtentum uns spätrömischen Reich im Westen zwischen 284 und 395 nach Christus*, Bochum, 1977. Este Autor recoge (pp. 91-97) en una tabla el origen social, la formación académica y la carrera administrativa de diversos altos funcionarios del s. IV.

⁴⁰⁸A tenor de lo establecido en una constitución de Teodosio II y Valentiniano III, recogida por Justiniano en C. J. 2.7.9 (a. 442), vemos que era habitual en aquella época reclutar a los gobernadores provinciales entre abogados distinguidos. AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados. Un estudio histórico-jurídico*, op. cit., p. 160.

⁴⁰⁹Señala MARQUARDT J, *La vie privée des romains*, II, Paris, 1893, p. 497, que “la sténographie antique, inventée vers le temps de Cicéron, nous est connue en subsiste que sous la forme d’une récénsion du moyen âge”.

⁴¹⁰Mencionamos que los panegiristas de Autún (*Pan. Lat.*, 4.5; 7.23) insisten sobre la próspera carrera que aguarda a sus retóricos: tribunales, gobiernos provinciales, direcciones ministeriales (*palatini magisteria*); Ausonio exhorta a su nieto para que estudie retórica ya que el dominio de la misma le conducirá a altos puestos oficiales (*Protr.*, 43-44); Símaco nos muestra en sus cartas como el estudio de las letras es el sendero que lleva a las más altas magistraturas (*Ep.*, 25); y San Juan

Podemos constatar, en este sentido, el empleo en las fuentes jurídicas de diferentes términos que hacen referencia a las cualidades o aptitudes del candidato tenidas en cuenta para el desempeño del cargo que pretende ocupar como son: <<*dignus*>>, <<*utilis*>> o <<*idoneus*>> (CTh. 8.1.1⁴¹¹; C. J. 12.33(34).6 pr.; C. J. 10.77(75).1; C. J. 1.55.2); así como de expresiones tales como <<*fides et industria*>> (CTh. 8.1.10; CTh. 6.28.8)⁴¹²; <<*diligentiam efficaciamque*>> (CTh. 1.15.6; CTh.

Crisóstomo nos presenta a los padres ambiciosos que impulsan a sus hijos a seguir el camino de las letras para que triunfen cuando estén al servicio del emperador (C. Opp., 3,12,369).

En época de Libanio (313-394?) los estudios de retórica comienzan a decaer, mientras que el latín, el Derecho y la taquigrafía, se afirman en la formación del abogado y son más valorados a la hora de hacer carrera en la Administración. Es verdad que entre los personajes-funcionarios mencionados por Libanio en sus cartas muchos tienen cultura literaria y son discípulos de este rétor, mientras que otros tantos están provistos de cultura jurídica o son estenógrafos. Es a partir de este momento cuando comienza a asentarse la opinión de que el abogado no sólo debe ser un retórico sino que también debe ser un experto conocedor de las leyes: en una disposición del prefecto del pretorio de Oriente, Taciano (a. 338), se dispone la obligatoriedad de los conocimientos de Derecho para todos los abogados (Lib., *Or.*, 1,234; 1,185; 48,26; 3, 441.), aunque dicha norma fue derogada dos años después (Lib., *Ep.*, 916 XI, 62 ss.), a. 390). Tendremos que esperar al año 460 cuando el emperador León sanciona en C. J. 2.7.11.2 que el dominio del Derecho es condición indispensable para ser abogado (AGUDO A., *Abogacía y abogados...*, op. cit., p. 27). Una fuente valiosa para conocer los estudios y la preparación de los funcionarios a finales del siglo IV es la constituida por las <<Cartas>> de *Libanius*. Véase PETIT P., *Les fonctionnaires dans l'oeuvre de Libanius*, Paris, 1994.

⁴¹¹... *quod idoneus esse manifestum est aut aetate non impediende complere id posse monstrantur...*

⁴¹²En CTh. 6.28.8 [=C. J. 12.21(22).4] (a. 435), los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, disponen que los principales de los *agentes in rebus* pueden tener como domésticos a aquellas personas

8.8.9); <<*scientiam peritiamque rerum*>> (C. J. 12.20.5; D. 50.9.1). Vemos también que en CTh. 1.9.1 (a. 359) [=C. J. 1.31.1] el emperador Constancio requiere que las promociones dentro de la escuela de los *agentes in rebus* se hagan conforme a la laboriosidad del candidato y no en virtud de favor (<<*nemo suffragio sine labore*>>), y que el nombramiento del *adiutor* de la escuela sea hecho entre personas de probadas costumbres y por sus buenas cualidades (<<*idoneus probitate morum ac bonis artibus*>>)⁴¹³; además, en CTh. 1.9.3 (a. 405), dirigida al *magister officiorum* Emiliano, los emperadores Arcadio, Honorio y Teodosio establecen para los *agentes in rebus* que <<... los laboriosos sean preferidos a los indolentes, los presentes a los ausentes y a los que constatemente se ocupan de sí mismos (...), cualquiera llegue a nuestro servicio, no sólo por su noble linaje, sino también por su mucha industria y trabajo>>; asimismo, en CTh. 6.27.18 (a. 416) se dice que hay gente -“*culpabiles*”, “*ignobiles*”, “*ex servile faece*”- que ha llegado a la *schola agentium in rebus* como a un “refugio” y se encarga al *magister officiorum* que los expulse para que este servicio imperial esté formado por un “*collegium bonorum virorum*”; de igual forma, los

que por su fidelidad y aptitud estimen probadas (*fidem industriamque probatam*), aunque hubiesen desempeñado muchas veces el mismo oficio, y en CTh. 10.2.2 (a. 398), que contiene disposiciones sobre el nombramiento del *susceptor vestium*, se establece que la elección debe hacerse entre los *principales* y los *honorati*, debiendo basarse en la *fides* e *industria* del aspirante.

⁴¹³PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public posts...*, *op. cit.*, p. 185.

emperadores Teodosio II y Valentiniano III en C. J. 12.19.8 (a. 443-444?) se refieren a las cualidades que deben avalar a los subsecretarios de las sacras secretarías (*proximos sacrorum iscriniorum*) como son la fidelidad (*fides*), la habilidad (*industria*), y la formación (*litterata militia*). En el ámbito municipal, se exige en C. J. 10.31(32).46 (a. 395) que los que vayan a ser desempeñar los *munera patriae* sean elegidos entre los curiales más dignos, así por sus méritos como por sus facultades (<<*dignissimi et meritis et facultatibus curiales eligantur*>>)⁴¹⁴.

Este deseo de competencia, habilidad y eficacia del personal de la Administración civil en general queda también patente en numerosas fuentes literarias de la época⁴¹⁵: así, Símaco, prefecto de la ciudad de

⁴¹⁴Si bien mencionamos un rescripto de Diocleciano y Maximiano recogido en C. J. 10.32(31).6 en el que se afirma: <<*Expertes litterarum decurionis munera peragere non prohibent iura*>>, es decir, “las leyes no prohíben que desempeñen los cargos de decurión los que sean expertos en letras”. Ahora bien, García del Corral traduce dicha frase en sentido contrario: <<Las leyes no prohíben que desempeñen los cargos de decurión los que no saben de letras>>, con lo cual podemos pensar que el traductor ha entendido que en el texto, tal y como ha llegado hasta nosotros, falta el adverbio de negación “no”.

⁴¹⁵Gregorio Nacianceno (*Or.*, 43, 26) recalca la importancia de promocionar según el mérito y de nombrar a personas competentes; Amiano Marcelino (21.16.3) nos cuenta que Constancio II prefería personas con experiencia en el servicio para los puestos civiles superiores; por el contrario, Lactancio describe como Maximiano enviaba jueces inexpertos a las provincias (*Lact., mort. pers.*, 22). Nos refiere también Amiano un caso de promoción para ocupar el cargo de *comes Orientis* por razón del conocimiento de varios idiomas del candidato (24.1.9), y señala en su obra que los emperadores Joviano (25.10.15: <<*mediocriter eruditus, magisque benivulus, et propensius, ut apparebat ex paucis, quos promoverat, iudices electurus*>>) y Valentiniano I (30.9.3: <<*Scrupulosus in deferendis potestatibus celsis*

Roma durante 384-385, en una carta (*relatio* 17) enviada a Valentiniano II se queja de la pésima cualificación del personal que el emperador le ha enviado diciéndole que el bien común (*publicus usus*) espera que el emperador nombre hombres diligentes y aprobados (*industrios et probatos*) que puedan hacer su trabajo impecablemente y con facilidad (*inculpata facilitate*), ya que si fracasan, el daño será para él⁴¹⁶.

nec imperante eo provinciam nummularius rexit aut administratio venumdata, nisi inter initia ut solent occupationis spe vel impunitatis quedam scelestas committi>>) no eligieron nunca como gobernadores provinciales a gente con intenciones “*maligni*”. Fue principalmente Valentiniano I y, posteriormente, sus sucesores quienes establecieron unas normas de acceso al funcionariado más severas rompiendo con la costumbre de emperadores anteriores de promocionar a los altos cargos de la Administración a amigos y parientes, como nos recuerda Amiano Marcelino (30.9.2): <<*hancque ob causam tamquam retinaculis petulantiam frenarat aulae regalis, quod custodire facile potuit, necessitudinibus suis nihil indulgens, quas aut in otio reprimebat aut mediocriter honoravit absque fratre, quem temporis compulsus angustias in amplitudinis suae societatem adsumpsit>>*.

También podemos mencionar que el *praefectus urbi* debía enviar cada año a los *scrinia* de la Corte una observación individual sobre los alumnos más distinguidos, a fin de que el emperador pudiese elegir entre ellos a aquellos que pudiesen ser “fichados” para la Administración imperial como establecieron en CTh. 14.9.1 (a. 370) los emperadores Valentiniano I, Valente y Graciano: <<*...Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque conpertis utrum quandoque nobis sint necessarii, iudicemus>>*.

CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 288; PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public posts ...*, op. cit., pp. 182-183; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 202; NELLEN D., *Viri litterati ...*, op. cit., pp. 13, 161.

⁴¹⁶ *Fidem meam convenit amor saeculi vestri et cura rei publicae, ne corrigenda dissimulem, ddd. Imppp. Cum ad praefecturam urbanam civilium rerum summa pertineat, minoribus officiis certa quaedam*

Estos valores (*fides, officium, utilitas, diligentia...*), que tienen ya su origen en la antigua moral republicana⁴¹⁷, aparecen también recogidos retratando al ‘‘magistrado ideal’’ en la obra de Símaco: <<todo hombre de bien es reclamado para el servicio público>> (*epist.*, 57)⁴¹⁸.

Por otro lado, para controlar la capacidad técnica y asegurar el acierto en la selección de los aspirantes se estableció, aunque sólo para determinados cargos, la obligación de pasar un examen o prueba de idoneidad (*probatio*), como era el caso de los médicos y profesores públicos⁴¹⁹ o el de los abogados de los tribunales y de los jueces⁴²⁰; sin

membra creduntur, quibus regendis industrios et probatos oportebat adhiberi, ut suum quisque munus inculpata facilitate promoveat.

HECHT B., *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.*, Berlin, 2006, pp. 163 ss.

⁴¹⁷ LIND L. R., *The Idea of the Republic and the Foundations of Roman Morality*, en *Studies in Latin Literature and Roman History* (C. Deroux, ed.), Bruxelles, 1989, pp. 5 ss.

⁴¹⁸ Sím., *rel.*, 12, 2-3; *rel.*, 25,4; *rel.*, 26.7. GUZMÁN ARMARIO F. J., *La fama de una época. Retrato del magistrado íntegro en la obra de Quinto Aurelio Símaco*, en AA. VV., *La corrupción en el mundo romano* (G. Bravo-R. González Salinero, eds.), Madrid, 2008, pp. 110 ss.

⁴¹⁹ Los médicos públicos (*medici* o *archiatri*) constituían un cuerpo con su propia jerarquía y un modo de reclutamiento y ascenso específico. Una ley del año 370 (CTh. 13.3.9 [= C. J. 10.53(52).10]) precisaba para la ciudad de Roma el modo de nombramiento de los *archiatri*: <<si alguno ha de ser incorporado por méritos de promoción (*promotionis meritis*) en el lugar de un protomédico ya fallecido ...>>, el candidato era sometido en primer lugar a un examen (*probatio*) por sus propios colegas y era necesario que obtuviese al menos siete votos (la mayoría absoluta de los miembros del tribunal): <<... *non ante eorum*

embargo, para la elección de los mismos jueces no era necesario que estos superasen una prueba de idoneidad sino que eran nombrados

particeps fiat, quam primis qui in ordine reperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobetur>>; después el prefecto de la ciudad de Roma informaba al emperador del nombre del candidato elegido y éste ratificaba el nombramiento. En los municipios, el gobernador provincial no estaba legitimado para intervenir en la *adlectio in numerum* de los médicos ya que ésta correspondía exclusivamente al *ordo decurionum* y a los poseedores de inmuebles de cada ciudad los cuales debían valorar la probidad y la capacidad de los mismos como se recoge en D. 50.9.1 (la *adlectio in numerum* era el acto formal de la curia por el que determinados médicos de la ciudad eran oficialmente autorizados para ejercer su profesión y poder así disfrutar de los privilegios e inmunidades que les correspondían). SANTALUCIA B., / *libri opinionum de Ulpiano, op. cit.*, p. 36, nt. 51; SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, pp. 303 ss.

Por lo que hace a los profesores públicos debían pasar un examen realizado por el prefecto de la ciudad - ayudado por representantes del cuerpo de profesores públicos - ante el Senado, posteriormente el prefecto informaba al emperador de la decisión senatorial y éste otorgaba el decreto de nombramiento. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 285, 290.

⁴²⁰AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados...*, *op. cit.*, pp. 97, 221, 225, 245.

En C. J. 1.51.1 (a. 286) Diocleciano y Maximiano refieren que los gobernadores, cuando desempeñasen su labor jurisdiccional, se asocian a aquellos que por sus conocimientos y estudios (*studiorum labor*) consideran que les son necesarios. También Anastasio en C. J. 2.7.22(3).4 (a. 505) dispone que no se admita a nadie como patrono del fisco sin que antes se sepa que durante el tiempo establecido estuvo dedicado al estudio de las leyes (<<*nec de cetero quemquam, antequam per statuta tempora legum eruditioni noscatur inhaesisse, supradicto consortio sociari*>>). AGUDO RUIZ A., *Los advocatus fisci en la legislación de Anastasio*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 6, Madrid, 2006, pp. 1 ss. También, C. J. 2.7.11.2, a. 460: <<(…) *lurisperitos etiam doctores eorum iubemus iuratos sub gestorum testificatione depromere, esse eum, qui posthac subrogari voluerit, peritia iuris instructum...*>>; C. J. 2.7.22(3).5, a. 505: <<(…) *solito tempore legum doctrinam meruerint*>>; C. J. 2.7.26(7) pr., a. 524:

atendiendo a diversas consideraciones entre las cuales se encontraba principalmente su formación en las Escuelas de Derecho y también su experiencia en cargos de responsabilidad⁴²¹.

<<(…) nisi vel eorum filii, qui triginta priorum obtinent numerum, facundiae studiis eruditi ...>>.

⁴²¹ Así, en Nov. 82, *praef.* (a. 539) se dice: <<... Non enim aestimavimus oportere habere iudicum quosdam nomina, maxime legum ineruditorum, deinde neque causarum habentium experimentum>>; cap. 1: <<... et electi sunt a nobis iudices Anatolius vir spectabilis, iam advocacy dudum completa, et inter spectabilis fisci advocatos deputatus ...>>.

F) RELIGIÓN: LIMITACIONES AL EJERCICIO DE UN CARGO PÚBLICO POR MOTIVOS RELIGIOSOS. CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD.

Desde finales del siglo IV d. C. se exigió la profesión de la fe cristiana ortodoxa como presupuesto para el ingreso en la *militia*⁴²², y en este sentido son numerosas las leyes de esta época que limitan la entrada en la Administración Pública apoyándose en motivos

⁴²²DE GIOVANNI L., *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli, 1980; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho privado romano*, op. cit., pp. 203-204.

Asimismo, recordamos que entre las medidas adoptadas por Diocleciano, defensor a ultranza de la religión pagana tradicional frente al cristianismo, estuvo la de actuar contra los funcionarios (*palatinos ac milites*) cristianos, como nos refiere Lactancio (*de mort. persec.* 11, 3): <<...*diu senex* [Diocleciano] *furori eius* [Galerio] *repugnabit ostendens quam perniciosum esset inquietari orbem terrae, fundi sanguinem multorum; illos* [cristianos] *libenter mori solere; satis esse si palatinos tantum ac milites ab ea religione prohiberet*>>. Posteriormente, el emperador Licinio excluye también a los cristianos de la *militia* como nos cuentan Eusebio de Cesarea (*Vita Constantini*, I 52 y 54) y el presbítero hispano Orosio que vivió a principios del s. V (*Hist. adv. paganos*, VII 28, 18). Véase, VON HAEHLING R., *Die Religionszugehörigkeit der höhen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie*, Bonn, 1978, p. 3 nt. 11.

religiosos⁴²³. Las primeras constituciones que se conservan sobre esta materia datan ambas del año 395⁴²⁴: en CTh. 16.5.25.1 se prohíbe a los eunomianos (denominación dada a los arrianos en el s. IV) servir en la

⁴²³MACERATINI R., *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano ad Ugucione)*, Milano, 1994, p. 95, señala que "in questo campo vale il principio generale della esclusione degli eterodossi da pubblici uffici e funzioni in quanto questi non siano piuttosto da considerare degli oneri pubblici". También, NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 65; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 136.

⁴²⁴Ya Teodosio I había prohibido a los apóstatas desempeñar cualquier *splendor dignitatis* que hubiesen adquirido por mérito o por nacimiento (CTh. 16.7.5, a. 391); por otro lado, vemos que ese mismo año, dicho emperador publicó otra constitución (CTh. 16.10.10-11) en la que se castigaba con penas pecuniarias a los gobernadores y a otros funcionarios que frecuentasen los templos paganos lo que a su vez pone de manifiesto que todavía en esta época importantes cargos de la Administración eran ocupados por paganos. SPAGNUOLO VIGORITA T., *L'incapacità nella legislazione religiosa tardoantica*, en *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari, 2006, p. 283; ID., *Nulla indulgenda militia. L'esclusione dalle cariche nella legislazione religiosa del tardo antico*, en *Filía*. Scritti per Gennaro Franciosi, IV, Napoli, 2008, p. 2512, nt. 18.

Mencionamos también algunas fuentes literarias de época postclásica que reflejan la importancia del hecho de que los funcionarios profesasen la religión católica: así, vemos el caso de un alto cargo de la Corte de Valentiniano II, llamado *Benivulus*, que elaboró una ley considerada como proarriana, lo cual provocó una reacción del conjunto de los funcionarios cristianos ortodoxos; ante esta situación, *Benivulus* se vio forzado a poner su cargo a disposición (Gauden., *praef.* 5; Rufin., *HE* XI 16; Sozom., *HE* VII 13, 5 ss.). Un caso análogo al anterior fue la que vivió el hermano de Gregorio Nacianceno, *Caesarius*, el cual dimitió del cargo de médico (*archiatros*) que desempeñaba en la corte del emperador pagano Juliano (Greg. Nacianc., *Or.*, 7, 9-13). VON HAEHLING R., *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger ...*, op. cit., p. 9, nt. 30 y 31.

*militia*⁴²⁵, y en CTh. 16.5.29 se ordena al *magister officiorum* que excluya a los herejes de servir en los *scrinia*, en los oficios palatinos o en la escuela de los *agentes in rebus*⁴²⁶.

Asimismo, las fuentes nos refieren que las llamadas sectas heréticas (*inimicus catholicae sectae*)⁴²⁷ fueron proscritas de las milicias

⁴²⁵La expulsión de los eunomianos de la *militia* fue reafirmada en el año 415 (CTh. 16.5.58) y en el 423 (CTh. 16.5.61).

⁴²⁶*Sublimitatem tuam investigare praecipimus, an aliqui haereticorum vel in scriniis vel inter agentes in rebus vel inter palatinos cum legum nostrarum iniuria audeant militare, quibus exemplo divi patris nostri omnis et a nobis negata est militandi facultas. Quoscumque autem deprehenderit culpa huius adfines, cum ipsis, quibus et in legum nostrarum et in religionum excidium conventiam praestiterunt, non solum militia eximi, verum etiam extra moenia urbis huiusce iubebis arceri.*

CASTELLO M. G., *Cristianesimo e burocrazia tardo imperiale. La religiosità dei magistri officiorum*, en CrSt., 26, 2005, pp. 633 ss.

palatinas; concretamente, vemos que en el reinado de Teodosio II los paganos fueron apartados de la Administración en el año 416 (CTh. 16.10.21); por otro lado, en el año 418 se prohíbe a los judíos y a los samaritanos de Occidente el acceso a los honores y a las dignidades (CTh. 16.8.24)⁴²⁸, siendo dicha prohibición ratificada por Teodosio II en

⁴²⁷El término *haereticus* es utilizado generalmente con un sentido amplio en las fuentes de los siglos V y VI d. C.; de esta manera en Novela 3.1 de Teodosio II (a. 438) se dice: <<*iudaeos, samaritas, paganos et cetera haereticorum genera*>>; en C. J. 1.5.18: <<*ceteri atem haeretici, id est qui non sunt orthodoxi...*>>; y en C. J. 1.5.12.4 (Imp. Justino y Justiniano) encontramos la siguiente definición de hereje: <<*haereticum enim vocamus, quicumque non est addictus catholicae ecclesiae et orthodoxae sanctaeque fidei nostrae*>>. La pertenencia a ciertas sectas heréticas, por ejemplo, maniqueos o donatistas, es considerada en esta época como un crimen de lesa majestad divina (CTh. 16.5.40 [= C. J. 1.5.4.4], a. 407) y a dichos herejes se les castigaba con el exilio y la pérdida consiguiente de la ciudadanía así como con la *publicatio bonorum* (confiscación de todos sus bienes). Además podemos referir, con carácter general, que en CTh. 16.5.52 pr. (a. 412) se les sanciona con una multa en dinero, que variaba según su condición: los herejes ilustres deberían pagar una multa de cincuenta libras de oro, los *spectabiles* una de cuarenta libras de oro, los senadores, una de cincuenta, los *clarissimi* y los *principales*, de veinte, y los decuriones, de cinco.

ZUCCOTTI F., “*Furor haereticorum*”. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodoxia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992; ZINSER H., *Religio, Secta, haeresis in den Häresiegesetzen des Codex Theodosianus (16,5,1/66) von 438*, en *Hairesis. Festschrift für Karl Hoheisel* (M. Hutter, W. Klein, U. Vollmer, eds.), Bonn, 2002, pp. 215-219.

⁴²⁸Los judíos habían sido ya excluidos del cuerpo de los *agentes in rebus* en el año 404 por un decreto de Honorio y Arcadio (CTh. 16.8.16). Sobre esta ley, véase: NEMO-PEKELMAN C., *L'exclusion des juifs des fonctions et des dignités*, en AA. VV., *Empire chrétien et Église aux IV et V siècles. Intégration ou <<concordat>>? Le témoignage du Code Théodosien* (Actes du Colloque international, Lyon, 6-8 octobre 2005), Paris, 2008, pp. 416 ss.

el año 438 para la parte oriental del Imperio (Nov. Teod. 3.2 y 5 [= C. J. 1.9.18 (19) pr. y 2]: <<...*neminem Iudaeorum, quibus omnes administrationes et dignitates interdictae sunt...*>>⁴²⁹ y después reconfirmada por el edicto de Justino y Justiniano del año 527 (C. J. 1.5.12.6) que excluye a los judíos y a los samaritanos de todo cargo civil y militar: <<*supra dictorum igitur quemquam vel dignitatem adipisci vel cingulum aut civile aut militare nancisci vel ad ordinem quemcumque pertinere vetamus nisi cohortalium qui dicuntur*>>⁴³⁰; también en CTh. 16.5.65.3 [parcialmente reproducida en C. J. 1.5.5.3] (a. 428), los emperadores Teodosio II y Valentiniano III reiteran lo recogido en disposiciones anteriores acerca de la prohibición de los herejes de

De todas formas, el acceso de los judíos a los cargos municipales no estuvo prohibido por las leyes imperiales a tenor de D. 50.2.3.3 (Ulp., 3 *de off. proc.*): <<los <emperadores Septimio> Severo y Antonino <Caracala> permitieron que los judíos de religión puedan acceder a los cargos municipales, pero con las obligaciones que no sean lesivas para su religión>>. DE BONFILS G., *Honores e munera...*, *op. cit.*, pp. 215-217; 415-416.

⁴²⁹En el párrafo 2 se establece que el que perteneciendo a la religión judía hubiese obtenido un cargo administrativo o una dignidad (aunque fuese honoraria) sea expulsado de ellos.

⁴³⁰MARGIOTTA BROGLIO F., *Il divieto per gli ebrei di accedere alle cariche pubbliche e il problema della giurisdizione ecclesiastica sugli infedeli nel sistema canonistico e fino alle decretali di Gregorio IX*, en Études G. Le Bras, II, Paris, 1965, pp. 1071 ss.; RABELLO A. M., *Giustiniano, ebrei e samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, vol. II, Milano, 1988, pp. 679; 782-783; DE BONFILS G., *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998.

ingresar en la milicia⁴³¹; y el mismo Teodosio en Nov. 1.7.6 [= C. J. 1.5.8.6(4) (a. 455)], afirma que ninguno de los que pertenece a la secta de los apolinaristas y a la de los eutiquianistas aspire a un cargo en la milicia, y que en caso de que alguno hubiese sido descubierto desempeñándolo sea despojado del cargo y se le prohíba que habite en ninguna ciudad o aldea: <<*militari cingulo soluti (...) palatii communione priventur, nec in aliqua, nec in qua nati sunt, civitate, vel vico, aut regione versentur ...*>>⁴³².

Siguiendo el orden cronológico de nuestra exposición, los emperadores León I y Antemio, en una carta dirigida al prefecto del pretorio de Oriente Nicostrato, exigirán también en C. J. 1.4.15 [=C. J. 2.6.8], del año 468, la pertenencia a la religión católica de los abogados que actúan en los tribunales de la prefectura del pretorio o del gobernador provincial (<<*sacrosanctis catholicae religionis fuerit imbutus mysteriis*>>), y en caso de que esta norma no fuese observada se castigaba con una multa de cien libras de oro al *officium* del prefecto del pretorio que hubiese tolerado la infracción, también era sancionado aquél que fraudulentamente hubiera ejercido la abogacía con la

⁴³¹Vid. Nov. 18.3-4 de Valentiniano III (a. 449).

⁴³²Ese mismo año, en C. J. 1.1.4 (a. 452) se castiga con la pérdida del cingulo al que afecto a la milicia (<<*si vero militia praeditus sit cingulo spoliabitur*>>) hubiese discutido en público de la fe cristiana buscando ocasión de tumulto. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 136; DOVERE E., *Occasioni e tendenze della normazione religiosa tardoantica*, LABEO, 38, Napoli, 1992, pp. 147 ss.

expulsión de la profesión forense así como con la confiscación de sus bienes y el destierro perpetuo y, por último, se establece que el gobernador provincial sufrirá la confiscación de la mitad de sus bienes y la pena de destierro durante cinco años si consiente que no se cumpla lo mandado en este precepto⁴³³. Los mismos emperadores en una ley del año 472 recogida en C. J. 1.11.8 disponen que las casas y los fundos en los que se celebren ritos paganos sean confiscadas por el Fisco, y que si los dueños de los mismos tuviesen conocimiento de estos hechos, si estuviesen revestidos de alguna dignidad u oficio, lo perderán, además de sufrir la confiscación de todo su patrimonio, mientras que si los dueños eran particulares de condición humilde serían fustigados y condenados a las minas de por vida⁴³⁴.

También numerosas constituciones de la época, referidas al *defensor civitatis*, insisten en el requisito de pertenencia a la Iglesia Católica de dicho funcionario: en C. J. 1.4.19 [=C. J. 1.55.11] (a. 505) el emperador Anastasio ordena (*iubemus*) que sólo pueden ser nombrados defensores de las ciudades aquellos que pertenezcan a la religión cristiana ortodoxa, de tal forma que deben probar esta circunstancia *sub*

⁴³³Véase, SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, *op. cit.*, pp. 324 ss.; AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci...*, *op. cit.*, pp. 28-29.

⁴³⁴SPAGNUOLO VIGORITA T., *Nulla indulgenda militia...*, *op. cit.*, p. 2516.

gestorum testificatione, bajo juramento, ante el prelado⁴³⁵. Posteriormente, en C. J. 1.5.12.7 (a. 527), Justino y Justiniano prohíben que los herejes reciban los cargos de *defensor* y de *pater civitatis*; dicha prohibición se encuentra también en C. J. 1.5.14, conservado en la llamada *Collectio Constitutionum Ecclesiasticorum* (KRÜGER, *ed. minor* p. X), que castiga con la pena capital a quien infrinja esta disposición⁴³⁶.

Los emperadores Justino y Justiniano vuelven a recordar la exigencia de pertenecer a la ortodoxia católica y establecen medidas penales para evitar la entrada en las milicias palatinas de personas que no profesen esta religión; de esta manera, prohíben en C. J. 1.5.12, promulgada entre el 4 de abril y el 1 de agosto del año 527, el acceso a los herejes, judíos, paganos y samaritanos a cualquier cargo o dignidad en la Administración civil y militar⁴³⁷; sin embargo, se establece en el

⁴³⁵En C. J. 1.55.8 pr. (a. 408) se dice: <<*Defensores ita praecipimus ordinari, ut sacris orthodoxae religionis imbuti mysteriis...*>>.

GÜNTHER R., *Der soziale Charakter des Defensorenamtes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung*, en INDEX, 7, Napoli, 1977, p. 207; TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, 2006, p. 125. Sobre las causas del nombramiento de un judío de Menorca para el cargo de *defensor civitatis* en el año 418, RABELLO A. M., *Gli Ebrei nella Spagna romana e ariana-visigotica*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. IV Convegno Internazionale in onore di M. de Dominici, Perugia, 1981, p. 819, nt. 15.

⁴³⁶SPAGNUOLO VIGORITA T., *Nulla indulgenda militia...*, *op. cit.*, p. 2516, nt. 28.

⁴³⁷*...Neminem ergo eorum, quos iam diximus, dignitatis ullius participem omnino esse patimur, vel cingulo civili vel militari cingi, vel in*

número 6 de la ley una excepción para el puesto de decurión cohortalino, que era especialmente gravoso, si bien, se prohíbe que en el desempeño de este cargo los judíos inicien procesos o la ejecución forzosa de sentencias por deudas públicas o privadas contra cristianos ortodoxos.

Sin embargo, pese a las reiteradas leyes que prohibían o, al menos, discriminaban el acceso de personas que no profesaban la religión católica, vemos a tenor de la misma ley (C. J. 1.5.12.1) que era frecuente la entrada de heterodoxos en la Administración: <<*eos autem intolerabilis audacia invasit et se legum sanctione neglecta militiis intruserunt, quarum tales homines participes fieri ipsa imperialium formarum verba manifeste prohibent*>>. Esta práctica fue ya censurada

ordinem venire quemquam... Divina igitur, quae plurimis militiis dantur, cinguli signa adiectum habeant, orthodoxum esse debere eius participem...

Esta prohibición será recordada dos años más tarde por Justiniano en C. J. 1.5.18 (a. 529). BASSANELLI G., *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518 - 1 Agosto 537)*, SDHI 37, Roma, 1971, p. 151, ha señalado que *''La c. 1.5.12 è quindi, la prima di una serie di costituzioni: c. 18 e 21 h.t., che portano, attraverso una equiparazione sul piano pratico della applicazione delle norme, all'equiparazione teorica: non cristiano ortodosso=eretico''*. Véase también, PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*. vol. II. *Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano, 1991, pp. 251 ss.; RABELLO A. M., *Giustiniano, ebrei e samaritani...*, op. cit., vol. II, 1998, p. 720.

en el siglo V por San Ambrosio⁴³⁸, obispo de Milán (*Expo. ps. 118,20,49*): <<*venit quis in ecclesiam, dum honorem affectat sub imperatoribus christianis, simulata mente orationem deferre se fingit; inclinatur et solo sternitur qui genu mentis non flexerit, videt illum homo, christianum putat*>>.

El incumplimiento de dicha norma será sancionado con penas severas como se recoge en C. J. 1.5.12.1 *i.f.* en donde se impone una multa de cincuenta libras de oro al funcionario que autorizó la inscripción y apoyó la entrada del aspirante que no profesaba la religión católica, de ocho libras de oro al funcionario que lo inscribió si conociendo su condición lo hubiese admitido en la *matricula* y, por otro lado, el hereje que hubiese entrado en la Administración después de la promulgación de esta ley verá invalidado su nombramiento (*inutilem creationem*) y además será castigado con una multa de treinta libras de oro (C. J. 1.5.12.13)⁴³⁹. Por último, se añade que el montante de estas multas será destinado por el *comes aerarii* a los bienes privados del emperador.

⁴³⁸McLYNN N., *Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley, 1994; PULIATTI S., *S. Ambrogio, vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico*, en *Studi in onore di Antonino Metro*, vol. V, Milano, 2010, pp. 135 ss.

⁴³⁹ Los herejes que estuviesen desempeñando su cargo con anterioridad a esta ley serían destituidos a tenor de C. J. 1.5.12.9: <<*si qui vero haereticorum eoque magis paganorum vel iudaeorum vel Samaritarum et qui iis similes sunt iam quid eorum quae commemoravimus teneant et dignitatem nacti vel matriculam*

Justiniano publica una constitución recogida en C. J. 1.4.20⁴⁴⁰ que establece la prohibición para todos los herejes de desempeñar cargos públicos, civiles y militares, fijando como condición para el ingreso en la Administración la presencia de tres testigos que garanticen la ortodoxia del postulante mediante juramento sobre los Evangelios y que éste se haga en presencia del funcionario bajo cuya dependencia va a entrar⁴⁴¹; se dispone también que en caso de desatenderse este requisito serán castigados con una multa tanto el funcionario jefe que deberá pagar cincuenta libras de oro como los miembros de su *officium* que serán castigados con veinte libras del mismo metal⁴⁴². El candidato que haya

causidicorum recepti vel militia cingulove quocumque potiti sunt, eos confestim eorum communione privari iubemus>>.

⁴⁴⁰De dicha ley sólo queda el epítome que se halla en la *Coll. Constit. Eccles.* 1.4.20.

⁴⁴¹*Nemo militat, nisi in actis sub trium testimonio adpositis sanctis evangelii Christianus orthodoxus comprobetur, gestis apud praesidem excipiendis, sub quo militaturus est, duobus solidis pro iis solvendis.*

Años más tarde, en Nov. 8 (a. 535) Justiniano estableció la obligación general de prestar juramento de ortodoxia a todos los que pretendieran ocupar un cargo en la Administración civil y militar. PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II.* vol. II. *Problemi di diritto privato...*, op. cit., pp. 263-265.

⁴⁴²En esta fuente se recoge la regla de la responsabilidad penal objetiva del *officium*, es decir, sin necesidad de que tenga que verificarse el eventual dolo o culpa por parte de los funcionarios que lo integran: se castiga no sólo al gobernador provincial o alto funcionario correspondiente sino también a todos los componentes de su *officium*, como se verá también en numerosas fuentes a lo largo de nuestra exposición. Así, por ejemplo, en CTh. 1.15.16 (a. 401) se impone que ningún *“honoratus”* (dignidad civil o militar) vaya a una *publica salutatio*

mentido sobre su pertenencia a la religión católica deberá abonar el pago de diez libras de oro y será expulsado de la *militia*. En caso de que los testigos hubiesen jurado en falso se establece que sufrirán penas corporales y además se impondrán multas (*mulctae*) sobre sus propios bienes.

ante el vicario desprovisto de su clámide, de tal manera que el *officium* que haya descuidado el cumplimiento de esta norma deberá pagar una multa de diez libras de oro; o el caso de CTh. 2.1.6 (a. 385) en donde se dispone que mientras que el gobernador provincial es obligado al pago de una suma de dinero, los principales de su *officium* son condenados con la deportación. CENTOLA D., *In tema di responsabilità penale nella legislazione tardoimperiale*, en SDHI, 68, Roma, 2002, p. 571.

No obstante, PIETRINI S., *Sull' iniziativa del processo criminale romano (IV-VI secolo)*, Milano, 1996, pp. 136 ss., señala que se puede hipotizar sobre la existencia de un deber de los funcionarios del *officium* de verificar, y quizás de exhortar a su superior a aplicar escrupulosamente las disposiciones imperiales, llegando incluso en algunos casos, los funcionarios subalternos a sufrir penas más severas que las previstas para su superior jerárquico. Así señala el Autor que “*a quest'ultimo proposito, tale differenza di disciplina trova una giustificazione probabilmente anche nel fatto che mentre i funzionari di grado superiore, posti a capo dell'officium, come il praefectus urbi e quello praetorio, sono all'apice di una carriera politica e, di solito, vi rimangono per un periodo di tempo piuttosto limitato, i funzionari subalterni, quali ad esempio gli apparitores, sono membri del servizio imperiale, che svolgono la loro attività in maniera molto più stabile all'interno dell'apparato statale*”.

Sobre la responsabilidad colectiva del *officium*: ROSEN K., *Iudex und officium. Kollektivstrafe, Kontrolle und Effizienz in der Spätantiken Provinzialverwaltung*, en Ancient Society 21, Louvain, 1990, pp. 273 ss.; LANIADO A., *Les amendes collectives des officia dans la législation impériale après 438*, en Ancient Society 23, Louvain, 1992, pp. 83 ss.

Justiniano en C. J. 1.5.18⁴⁴³ vuelve a reiterar la exclusión de los herejes de la Administración y dispone que <<los herejes, esto es, los que no son ortodoxos, y los paganos, y los samaritanos no forman parte de la milicia, ni son decorados con alguna dignidad, ni obtienen ninguna administración pública ...>>⁴⁴⁴, y continúa diciendo: <<si alguno fingiese para obtener uno de estos cargos que era ortodoxo, y resultase que tenía esposa e hijos herejes, y que no los hace entrar en la ortodoxia, será expulsado>> (C. J. 1.5.18.4-5)⁴⁴⁵.

Toda esta normativa había provocado que muchos de los que ambicionaban un cargo o dignidad en la Administración se convirtiesen a la religión cristiana-ortodoxa, como es el caso, en época de Justiniano,

⁴⁴³ Observa PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*. vol. II. *Problemi di diritto privato...*, op. cit., pp. 268-269, que la razón de ser de esta ley viene dada por la *''inosservanza delle disposizioni da parte delle minoranze non cattoliche a fronte della mancata applicazione da parte degli organi dello Stato per connivenza o negligenza ovvero per oggettive difficoltà di cui il legislatore non mancava di presentare in varie sedi una campionatura; e soprattutto l'esigenza di creare un <<testo unico>> ai fini giurisdizionali e della prassi giudiziaria''*.

⁴⁴⁴ ...ut tali morbo affecti neque militent neque dignitate ulla fruuntur.

⁴⁴⁵ ...eum prorsus advocacy vel militia vel cura publica removeri iubemus.

Sobre la privación de la *dignitas* a los funcionarios que se separan de la fe cristiana ortodoxa, BACCARI M. P., *Gli apostati nel Codice Teodosiano*, en Apollinaris, 54, n. 3-4, Roma, 1981, pp. 538 ss.

del samaritano *Faustinus* (Proc., H.A., 27, 26-27)⁴⁴⁶. Con esta ley Justiniano pretendía castigar las conversiones no sinceras, de tal forma que en el supuesto de que una persona hubiese fingido convertirse a la religión cristiana-ortodoxa para entrar en la Administración el castigo sería la pérdida del cargo y la incapacitación patrimonial para la realización de ciertos negocios jurídicos importantes como, por ejemplo, no podría transmitir sus bienes ni por negocios *inter vivos* ni *mortis causa*, salvo a cristianos ortodoxos, ni tampoco recibir herencias ni donaciones estableciéndose que, en caso contrario, se reivindicase la herencia para el Fisco (<<... *videlicet quae hereditate vel donatione aliave causa haeretico deferuntur ... fisco vindicentur*>>)⁴⁴⁷; además se castigaba con diversas penas a los gobernadores provinciales y a los oficiales civiles y militares que no persiguiesen o denunciasen a estos funcionarios, así como a los obispos que no hubiesen informado al

⁴⁴⁶ Acerca de la conversión al cristianismo de la aristocracia pagana a comienzos del siglo V, véase: BROWN P.R.L., *Aspects of the Cristianization of the Roman Aristocracy*, en JRS, 51, London, 1961, pp. 1 ss.; BARNES T.D., *Statistics and the Conversion of the Roman Aristocracy*, en JRS 85, London, 1995, pp. 135 ss.

⁴⁴⁷ C. J. 1.5.18.7 (=18 pr., ed. García del Corral).

En C. J. 1.5.17.1, Justiniano estableció que solamente los cristianos ortodoxos podían tener sucesores por testamento o *ab intestato* y recibir legados. Los bienes de los herejes eran reivindicados para el Fisco. PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*. vol. II. *Problemi di diritto privato...*, op. cit., 1991, p. 272.

príncipe de la negligencia de los gobernadores en este ámbito⁴⁴⁸. Asimismo, se establece en C. J. 1.5.16.1⁴⁴⁹ que serán castigados con la pena correspondiente las dignidades civiles y militares que no hubiesen denunciado, una vez descubierta, la falsa conversión a la religión cristiana ortodoxa de un maniqueo que desempeñase un cargo en la milicia, <<pues de igual manera pecan los que conocieron al reo de tal crimen, y no lo denunciaron>>.

Vemos también que no sólo el funcionario sino que toda su familia, esposa e hijos, debían pertenecer a la religión católica como se dispone en otra constitución de Justiniano referida a los paganos y recogida en C. J. 1.11.10.6⁴⁵⁰ (posiblemente posterior a C. J. 1.5.18 y que se encuentra como ésta entre las recordadas en C. J. 1.5.19.4, del año 529) en la que se dice: <<pero mandamos, que los que con el pretexto de tener algún cargo militar, o una dignidad, o un patrimonio, se acercaron o se hayan de acercar a recibir ciertamente con hipocresía el bautismo, dejando a sus esposas, o a sus hijos, o a los demás, que pertenecen a su misma familia, en el error de los paganos, sean

⁴⁴⁸ C. J. 1.5.18.10-13 (=18.2, ed. García del Corral).

En general, sobre los poderes de control de los obispos en la legislación justiniana, BANFI A., *Habeant illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origine del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005.

⁴⁴⁹ = Bas. 1.1.32.

⁴⁵⁰ = Bas. 1.1.20.

castigados con la confiscación, y privados de la ciudadanía, y sometidos además a las penas correspondientes, si hubiesen manifestado no haber recibido el bautismo con fe sincera>>.

Como hemos comprobado hasta ahora, la ortodoxia religiosa se exigirá desde principios del siglo V como presupuesto inexcusable para el desempeño de un cargo público en la Administración, y sin embargo a tenor de las fuentes, vemos que esta regla no se aplicará siempre en todos los casos ya que para los puestos más bajos del funcionariado provincial como es el supuesto de los cohortales, empleados en las oficinas de los gobernadores provinciales (C. J. 1.5.12.6, a. 527: <<... *pertinere vetamus nisi cohortalium qui dicuntur*>>), o para el ingreso en la *castrensis militia*⁴⁵¹, tan falta de personal, se permitirá el acceso de los herejes a estos puestos.

Tampoco en el ámbito municipal se impondrá el requisito de la ortodoxia a los miembros del *ordo decurionum*: así, en CTh. 12.1.157 [=C. J. 10.32(31).49]⁴⁵² (a. 398), de los emperadores Arcadio y Honorio,

⁴⁵¹CTh.16.5.65.3 (a. 428) [= C. J. 1.5.5]: *nulla his penitus praeter cohortalinam in provinciis et castrensem indulgenda militia*. También CTh. 16.5.48 (a. 410); CTh. 16.5.61 (a. 423).

⁴⁵²*Omnes, qui quolibet curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad implenda munia teneantur.*

En CTh. 12.1.158 (a. 398), Arcadio y Honorio establecieron que las comunidades ebraicas de Apulia y Calabria, beneficiarias todavía a finales del s. IV de inmunidad de las obligaciones curiales, asumiesen los deberes municipales.

se dice que <<todos los que por cualquier derecho se deben a la curia estén obligados, de cualquier secta que sean, a desempeñar los cargos>>⁴⁵³; y en Nov. Teod. 3.6 [= C. J. 1.5.7] (a. 438) los emperadores Teodosio II y Valentiniano III disponen a este respecto que <<mandamos que los curiales de todas las ciudades obligados con cargos honerosos... permanezcan en sus cuerpos de cualquiera secta que sean...>>⁴⁵⁴. Esta política será mantenida por Justiniano ya que era frecuente que judíos, samaritanos y herejes alegasen esta condición para quedar liberados de sus funciones curiales. De esta manera estableció en Nov. 45⁴⁵⁵ (a. 537) que ninguna religión exime de la condición de curial⁴⁵⁶, quedando todos aquellos obligados a desempeñar

⁴⁵³DE BONFILS G., *CTh. 12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro*, Bari, 1994; ID., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1993, pp. 99, 106; ID., *Due leggi di Onorio sulle curie occidentali. Cth. 12.1.157 e 158*, en *Studi in ricordo di A. F. Panzera*, 3, Bari, 1995, pp. 1302 ss.; ID., <<Honores>> e <<munera>> per gli ebrei di età severiana, *LABEO*, 44, Napoli, 1998, pp. 204-207; ID., *Omnes... ad implenda munia teneantur...*, *op. cit.*, pp. 59 ss.; SORACI R., *Il curialato nella legislazione di Onorio*, *op. cit.*, pp. 550 ss.

⁴⁵⁴RABELLO A. M., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani...*, *op. cit.*, p. 719; LANATA V., *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1984, p. 135.

⁴⁵⁵= Nov. 52 del *Authenticum*. Véase RABELLO A. M., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani...*, *op. cit.*, pp. 802-803.

⁴⁵⁶Recordamos que unos años más tarde, el mismo Justiniano en Nov. 124.4 (a. 546) manda que a partir de esta ley el orden episcopal libera de la condición de esclavo, pero no de la curia o del oficio en la milicia -circunstancia sobre la que ya había abundado anteriormente el mismo emperador en C. J. 1.3.52(53), del año 532-; en caso de que un curial o un oficial fuesen ordenados obispos serían removidos del

las cargas propias de esta función (*munera corporalia et pecuniaria*), si bien -advierde- no podrán disfrutar de ninguno de los honores y privilegios propios de los curiales⁴⁵⁷.

obispado y devueltos a la curia y al oficio. Sin embargo, se establece que aquellos curiales que, con anterioridad a esta ley, hubiesen sido ordenados obispos quedarán libres de la curia y de la milicia pero deberán dar la legítima parte de sus bienes a la curia y al Fisco.

⁴⁵⁷PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*. vol. II. *Problemi di diritto privato...*, op. cit., pp. 237 ss.; RABELLO A. M., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani...*, op. cit., pp. 720 ss.; ID., *The Samaritans in Justinian's Corpus iuris civilis*, en *Israel Law Rev.*, 31, Jerusalem, 1997, pp. 720 ss.

G) CONCLUSIONES.

I.

En la legislación postclásica y justiniana se establecieron una serie de normas y reglas que vinieron a fijar diversos requisitos de índole físico, moral, económico, social y técnico que debían cumplir, según los casos, aquellos candidatos que pretendían acceder a un cargo público estableciéndose también, en diversas constituciones del Código Teodosiano, la responsabilidad de quien propuso al candidato que no cumpliera dichos requisitos siendo aquél sancionado con penas pecuniarias y teniendo lugar además la expulsión del seleccionado.

II.

Con carácter general aparecen en las fuentes como requisitos físicos: edad mínima, sexo masculino y salud física y mental. La edad idónea (*perfecta* o *legitima aetas*) para el desempeño de un cargo público era a partir de los veinticinco años, si bien se recogen en las fuentes casos de funcionarios públicos y magistrados municipales menores de esta edad. Las mujeres estaban excluidas de toda función pública aunque en la vida municipal romana desempeñaron importantes

labores en el ámbito religioso y de beneficencia como era el caso de las *flaminicae* o sacerdotisas. También el desempeño de los diferentes cargos públicos exigía la ausencia de enfermedades o defectos físicos o psíquicos que impidiesen o dificultasen el ejercicio del cargo. En este sentido las fuentes distinguían entre “enfermedad temporal” y “defecto físico perpetuo”. No obstante, las reglas establecidas en esta materia contaron con numerosas excepciones.

III.

El Derecho Romano sentó la regla contenida en C. J. 12.1.2 en virtud de la cual no podían desempeñar ningún cargo público o dignidad aquellos que hubiesen sido tachados con nota de infamia o que hubiesen cometido algún crimen, siendo expulsados de la Administración los funcionarios en quienes concurriesen dichas circunstancias. Dicha regla será recibida en el Derecho Histórico español (*Liber Iudiciorum*, LV; *Costums* de Tortosa, II,8,2; *Furs* de Valencia, III,1,8; *Partidas*, VII,6,7).

IV.

Junto a los requisitos anteriores se exigía a los candidatos para ocupar altos cargos de la Administración Central, así como para alcanzar la condición de decurión, una suficiencia económica que

aparecía como garantía tanto de una gestión honesta como también de la asunción de responsabilidad patrimonial que les correspondía al estar obligados a indemnizar con su propio patrimonio los daños ocasionados por su actividad.

Respecto al origen social de los candidatos constatamos que las más altas dignidades del Imperio fueron ocupadas en la mayoría de los casos por personas cercanas a los emperadores; por otro lado, los funcionarios en época postclásica y justiniana debían ser de nacimiento libre, debiendo someterse a un examen acerca de su origen y condición, de tal manera que aquellas personas que estaban ligadas de forma hereditaria a una condición (*conditionales*) debían ser descartadas para ocupar puestos en la Administración: los militares así como sus hijos no podían ocupar cargos civiles, y en caso de que los hubiesen obtenido, se dispone en la ley que serán despojados de su cargo y de todos sus privilegios; los colonos así como sus hijos y nietos no podían acceder a la Administración, ni siquiera a cargos humildes, debiendo ser devueltos a las fincas a las que estuvieren adscritos anteriormente; los *corporati*, como los *fabricenses*, *pistores*, *monetarii*, *murileguli*, etc..., tampoco podían ocupar un cargo público sino que estaban sujetos de por vida a sus respectivas corporaciones; los *caesariani*, empleados subalternos del *procurator rei privatae* y responsables de numerosos fraudes y extorsiones en materia de confiscación y venta de bienes de los particulares, no podían obtener ningún título o dignidad hasta después de haber cumplido el tiempo

establecido y haber rendido cuentas de su gestión; los libertos fueron progresivamente apartados de la Administración Pública a partir de Septimio Severo de tal manera que en época postclásica encontramos constituciones imperiales en las que se persigue a los libertos que subrepticamente ocuparan cargos propios de ciudadanos nacidos libres, estableciéndose una normativa análoga en el ámbito municipal respecto de los decuriones; los esclavos estaban excluidos en esta época de la milicia civil y militar salvo en tiempo de guerra en el que se llegó a permitir la admisión de esclavos en el servicio militar obteniendo como recompensa su libertad y un sueldo de dos sólidos; los *negotiatores* (comerciantes y artesanos) tampoco podían ingresar como regla general en la Administración siendo éste un principio tradicional del Derecho Público Romano; los curiales, bien para ascender socialmente, bien para escapar de las pesadas cargas inherentes a su función, solían ingresar en la milicia, tanto en las oficinas de los gobernadores provinciales, como en la Administración Central en calidad de palatinos llegando incluso algunos a la condición de clarísimos; no obstante, en el siglo IV diversas constituciones vinieron a limitar dicho acceso fijándose plazos de prescripción hasta que a finales del siglo IV los emperadores Arcadio y Honorio establecieron una legislación muy restrictiva al respecto que comprendía la expulsión de la milicia y la confiscación de los bienes del curial. Por último, el emperador Zenón y, posteriormente, Justiniano dispusieron sendas reglamentaciones de esta materia en las que se aprecia una

flexibilización de la normativa anterior ante la circunstancia de que el Imperio Romano de Oriente se encontraba necesitado de un gran número de funcionarios tanto a nivel central como provincial; por último, los cohortales constituían una categoría de empleados públicos que formaba parte del *officium* de los gobernadores provinciales, los cuales desempeñaban funciones consideradas en su tiempo como gravosas y debían permanecer en las mismas durante un plazo de veinticinco años salvo permiso del emperador, no pudiendo en dicho plazo ingresar en otra milicia o administración siendo en tal caso devueltos a su antigua condición y despojados de la dignidad u honor conseguidos; asimismo los hijos de los cohortales nacidos estando su padre en activo debían seguir la condición del mismo.

V.

La legislación postclásica estableció como presupuesto básico para el acceso a los puestos altos y medios una buena formación técnica así como la exigencia de fidelidad y laboriosidad de los funcionarios como garantía de la eficacia y buen hacer de la Administración Pública; concretamente, se establece la obligación de pasar un examen o prueba de idoneidad para los médicos y profesores públicos.

VI.

Se afianza a partir del siglo IV la regla según la cual no puedan acceder a la gestión pública más que los candidatos que profesen la religión católica ortodoxa excluyéndose tanto a los seguidores de sectas heréticas como a los paganos e imponiéndose severas penas a los funcionarios que hubiesen permitido la entrada de estos candidatos y la responsabilidad objetiva del *officium* de aquellos. Asimismo, Justiniano estableció penas severísimas a quienes fingiesen profesar la religión católica para acceder o permanecer en la Administración. Con esta política se pretende garantizar la unidad ideológica del funcionariado público. No obstante, se establecieron excepciones respecto de los puestos “menos atractivos” como era el caso de los cohortales y de los decuriones y, en todo caso, para la milicia armada.

CAPÍTULO IV

**TRÁFICO DE INFLUENCIAS, VENALIDAD Y
SUCESIÓN HEREDITARIA EN EL ACCESO A
LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA
ADMINISTRACIÓN IMPERIAL ROMANA:
LÍMITES Y REGLAMENTACIÓN LEGAL.**

A) INTRODUCCIÓN.

Podemos comenzar constatando que no existió en Derecho Romano postclásico y justiniano una normativa general relativa al nombramiento de los funcionarios llamados a ocupar los puestos superiores de la Administración, sino que dicho nombramiento estaba sometido a la discrecionalidad del emperador⁴⁵⁸. Ahora bien, aunque todas las *dignitates* eran nombradas por el mismo, en la práctica el emperador elegía solamente a los titulares de los puestos más importantes como eran el *praefectus urbi*, el *praefectus praetorio*, el *magister militum* o los principales ministros palatinos⁴⁵⁹.

⁴⁵⁸DE MARTINO F, *Storia della costituzione romana*, vol. IV, *op. cit.*, p. 575.

⁴⁵⁹CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 191. La elección de los cónsules pertenecía también al emperador (Nov. 105. 1: <<Qui, a nobis per annum eligitur consul...>>) y su designación constituía una recompensa por los servicios prestados. Desde el s. IV el emperador nombraba directamente a los cuestores y a los pretores, elegidos por el Senado entre sus miembros previo informe de los *censuales* que tenían el inventario de sus patrimonios (C. J. 1.39.2, a. 450: <<Mandamos que en esta ciudad se nombre, a juicio del Senado, únicamente tres pretores de buena opinión cada año, que tengan domicilio en Constantinopla y no en las provincias>>); en C. J. 12.1.1 (a. 450) se establece que los *clarissimi* y los *spectabiles* que vivían en provincias no fuesen llamados desde esta fecha a la pretura.

El emperador solía también delegar esta facultad en otras personas de su confianza para la elección de los cargos menos elevados siendo en estos casos el acto de nombramiento una prerrogativa imperial; en este sentido, no debemos olvidar que el funcionario no era soberano en su competencia -como ocurría con los magistrados republicanos- sino que su oficio lo ejercía por delegación del emperador.

Recordamos que más que magistraturas la cuestura y la pretura eran cargas que gravaban a los cuestores y pretores, obligados a dar al pueblo los juegos más costosos (CTh. 6.4.18); vid. *supra* pp. 107-109. GIGLIO S., *Il "munus" della pretura a Roma e a Costantinopoli nel corso del tardo impero romano*, op. cit., pp. 65 ss.

B) EL *SUFFRAGIUM*. LIMITACIONES LEGALES AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

El *suffragium*⁴⁶⁰ era en el Bajo Imperio un modo usual de designación de un aspirante o candidato a un cargo público por medio de

⁴⁶⁰En su origen la palabra *suffragium* hacía referencia al voto emitido por los ciudadanos en las asambleas populares si bien, a partir de Tiberio, se emplea para referirse al dinero que se da para alcanzar a cambio una función pública.

KOLIAS G., *Ämter -und Würdenkauf im früh-und Mittelbyzantinischen Reich*, Athènes, 1922, pp. 23-62; COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, en *Revue historique de droit français et étranger (RHD)*, 43, Paris, 1965, pp. 185 ss.; LEVICK B., *Imperial Control of the Elections under the Early Principate: commendatio, suffragatio and "nominatio"*, en *Historia* 16, Wiesbaden-Stuttgart, 1967, pp. 207 ss.; GOFFART W., *Did Julian combat Venal Suffragium? A note on Cth. 2.29.1*, en *Classical Philology (CPh)*, 65, Chicago, 1970, pp., 145 ss.; LIEBS D., *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike: propaganda und Sachzwang bei Julian dem Abtrünnigen*, en *ZSS*, 95, Weimar, 1978, pp. 161 ss.; DAUBE D., *"Suffrage" and "precedent", "mercy" and "grace"*, en *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (T.)*, 47.3, Groningen-Bruxelles-La Haye, 1979, pp. 235 ss.; VEYNE P., *Clientéle et corruption au service de l'État. La vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, en *Annales Economies, Sociétés, Civilisations*, 36, Paris, 1981, pp. 339-353; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, pp. 69 ss.; GIZEWSKI Ch., *Zur Normativität und Struktur der Verfassungsverhältnisse in der späteren römischen Kaiserzeit*, München, 1988 (concretamente el app. VII: *Zum legalen und illegalen Ämterkauf in der spätantiken Gesetzgebung*, pp. 223 ss.); NERI C., *Suffragium. Per la storia di un' idea*, en *Hestiasis, Studi di Tarda Antichità offerti a S.*

las recomendaciones de personas cercanas al emperador o a quien debía proceder al nombramiento⁴⁶¹.

En los inicios del Principado las recomendaciones (*commendationes*) dirigidas a la obtención de un empleo público se daban en numerosas ocasiones en virtud de relaciones de amistad y gratitud

Calderone, 5, Messina, 1988 [1992], pp. 115 ss.; PERELLI L., *La corruzione politica nell'antica Roma. Tangenti, malversazione, malcostume, illeciti, raccomandazione*, Milano, 1994; HAYASHI N., *Il Suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale in onore di Arnaldo Biscardi, Napoli, 1995, pp. 461 ss.; MALAVÉ OSUNA B., *Una constitución de Teodosio I en la historia del suffragium*, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 5, Granada, 2002, pp. 541 ss.; ID., *Suffragium: un crimen publicum en la frontera de la legalidad*, SDHI 69, Roma, 2003, pp. 291-300; CAPUTO M., *Il patrociniu nell'accesso alle cariche pubbliche: la pratica del suffragium nel Tardoantico*, tesi di dottorato, Pavia, 2004.

⁴⁶¹CUJACIO nos legó la siguiente definición de este término: <<*suffragium vocamus favorem et opem, quam quis nobis praebebat apud iudicem obtinendae alicujus rei causa. Cyprianus dixit faventiam. Dicitur et suffragium pecunia, quae datur ejus nomine*>> (Ad libr. IV Codicis; recitat. solemn., tit. III, De suffragio, t. 7, col. 704); con este mismo sentido, GODOFREDO: <<*suffragium est non modo auxilium, intercessio, commendatio, verum et praemium seu remuneratio, seu id quod suffragii nomine datur suffragatori, aut promittitur*>> (Ad. rubr. Tit. 29, lib. II, CTh., ed. Ritter, t. 1, f. 252 (b)). Cit. LOUIS-LUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, op. cit., p. 305 nt. 44.

Aunque el *suffragium* estaba dirigido principalmente a la obtención de un empleo público podía tener también en forma de soborno otras finalidades como eran la exoneración fiscal (CTh. 11.24.4) o la presión sobre un juez (CTh. 1.29.8). En esta última ley, del año 392, los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio reclaman de los *defensores civitatum* un constante empeño contra los jueces, a los que el texto legal llama “*latrones*”, a fin de que los crímenes cometidos por ellos no quedasen impunes, disponiendo además que fueran apartados los *patrocinia* que hubiesen favorecido a los culpables y prestado ayuda

siendo ya en esta época el tráfico de influencias una práctica reconocida y aceptada, como queda reflejado en las cartas de Plinio, el cual nos cuenta que eran corrientes las recomendaciones que amigos y altos dignatarios del Imperio solicitaban al príncipe (ep. 10,85-86-87; 2,9)⁴⁶². También en época de Claudio nos refiere Dion Casio (60,17,5-8) que era habitual la venta de cargos e incluso de la ciudadanía por la emperatriz Mesalina y sus libertos, y en tiempos de Antonino Pío y de Marco Aurelio sabemos que los libertos del palacio vendían sus recomendaciones (Capitol., *M. Antonini pii*, 11: << *amicis suis in imperio non aliter usus est quam privatus quia et ipsi numquam de eo cum libertis suis per fumum aliquid vendiderunt si quidem libertis suis severissime usus est ...>>*)⁴⁶³.

Si bien es verdad, que hubo también intentos de frenar estos abusos por parte de diversos emperadores como Alejandro Severo (S.H.A.,

a los criminales: MANFREDINI A. D., *Municipi e città nella lotta ai "latrones"*, en *Annali dell'Università di Ferrara*, 5.6, 1992, pp. 23-34.

⁴⁶²PAVIS D' ESCURAC H., *Pline le jeune et les lettres de recommandation*, en *La mobilité sociale dans le monde romain*, E. Frézouls (ed.), Strasbourg, 1992, pp. 5-69; BÉRENGER A./ BADEL Chr., *Les critères de compétence dans les lettres de recommandation de Fronton et de Pline Le jeune*, REL 78, Paris, 2000, pp. 164-179.

⁴⁶³Capitol., *M. Antonini pii*, 29: << *suffragatoribus non cito credidit, sed semper diu quaesivit, quod erat verum*>>.

COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, op. cit., p. 189; MALAVÉ OSUNA B., *Corrupción política y amistad en la Roma de Cicerón*, en *El Derecho Penal: de Roma al Derecho actual* (VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano), coords. Camacho de los Ríos-Calzada González, Madrid, 2005, pp. 351 ss.

Lamprid., Alex. Sev., 49: <<*Honores iuris gladii nunquam vendi passus est, dicens: Necesse est ut qui emit vendat. Ego non patiar mercatores potestatum: quos si patiar, damnare non possim. Erubesco enim punire illum hominem qui emit et vendit*>>) o Gordiano III (S.H.A., Lamprid., Alex. Sev., 35-36), lo cierto es que en el siglo III d. C. el *suffragium* aparece como una práctica común tal y como recogen diversos autores de *Historia Augusta* (S.H.A., Lamprid., *Heliogab.*, 6: <<*Vendidit et honores et dignitates et potestatem tam se quam per omnes servos ac libidinum ministros...>>).*

Por otro lado, la comercialización de recomendaciones para la obtención de títulos y puestos en la Administración imperial era práctica frecuente a comienzos del s. IV entre los curiales para acceder a una *dignitas* que les eximiese de sus funciones municipales y de sus cargas, y este comercio de títulos se extiende pronto a otros ámbitos de la Administración como ocurre con el cuerpo de los *agentes in rebus* que intentaban por esta vía obtener rápidos ascensos.

A este respecto, NOETHLICHs pone de relieve que el *suffragium* no era considerado una práctica ilegal si bien añade que “las carreras basadas en la recomendación estaban consideradas como de valor inferior”⁴⁶⁴; así, los que entraban en la Administración por

⁴⁶⁴NOETHLICHs K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 70.

recomendación (*suffragium* o *gratia potentium*) tenían que pagar mayores espórtulas: en CTh. 6.24.3 (a. 364) se dice que los que hayan llegado a la *schola* de los *agentes in rebus* por mérito deben pagar como espórtulas a los *primates* del oficio entre cinco y diez sólidos, y los que llegaron mediante sufragio o apoyo de los potentes, cincuenta sólidos; asimismo, en CTh. 12.1.36 (a. 343) [=C. J. 10.65(63).4] los emperadores Constancio y Constante responden a Taciano que todos los *comes* y gobernadores provinciales que hubiesen obtenido su puesto mediante sufragio no gozarán de las exenciones a los *munera* y a los cargos civiles una vez hayan abandonado su función ``a fin de que no sean perjudicadas las conveniencias públicas con pacto secreto de sufragio``.

No obstante lo anterior, ante esta situación los emperadores del siglo IV intentarán poner freno a este tráfico de influencias⁴⁶⁵ y así vemos que en el periodo que va desde el año 316 al año 362 se publicaron catorce constituciones referidas al *suffragium*, de las cuales once de ellas se refieren a los curiales, y en el periodo que va desde los

⁴⁶⁵Lógicamente este sistema no permitía que fuesen los mejores los que ocupasen los cargos en la Administración sino que dependía de la existencia de un protector en la Corte.

HAYASHI N., *Proceso histórico de la contractualización del suffragium*, AHDE 54, Madrid, 1984, p. 669 indica que ``en el Bajo Imperio el *suffragium* desempeñó un papel importante como modo de nombramiento de determinados funcionarios``.

años 363 al 417 se redactaron otras veinte constituciones sobre esta materia, cinco de ellas a propósito de los curiales⁴⁶⁶.

Concretamente, son numerosas las constituciones de Constantino y sus sucesores en las que se prohíbe y castiga el sufragio dándose prioridad a los criterios de antigüedad y a los méritos en el servicio (*labore et ordine*) para acceder a un cargo público: en CTh. 6.22.1 (a. 318 o 321) Constantino se refiere a los que obtienen *codicilli* (títulos de nombramiento) contra el pago de dinero, distinguiéndolos de aquellos <<*qui bonorum virorum suffragio nulla data pecunia*>>; también CTh. 12.1.20 (<<... *qui si vero per suffragium ad hoc pervenerit administrare ...*>>, a. 331) ; CTh. 1.9.1 (<<... *nemo suffragio, sed per laborem ...*>>, a. 359); CTh. 6.29.4 (<<*cesset omnis ambitio atque suffragium ...*>>, a. 359)⁴⁶⁷; CTh. 7.1.7 (prohibición de la práctica del sufragio en el ejército, a. 365); CTh. 6.30.7 (= C. J. 12.23(24).7: <<... *beneficium emendicato suffragio...*>>, a. 384); CTh. 6.30.11 (<<... *sub occasione indepti honores...*>>, a. 386); CTh. 8.7.16 (= parcialmente

⁴⁶⁶ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen ...*, op. cit., pp. 71 ss.

⁴⁶⁷ Esta ley falta en el Código de Justiniano y en ella se fijan los criterios de nombramiento de los *curiosi*. DI PAOLA L., *Per la storia...*, op. cit., pp. 33-34. Sobre CTh. 6.29: FORMIGONI W., *Codex Theodosianus*, lib. VI, titulus XXIX, De Curiosis: “*Constantius curiosorum insolentiae, ambitioni, avaritiae modum ponit: officium eorum circa cursum publicum et curas agendas instruit*”, en Ann. Univ. Ferrara, 13, 1999, pp. 45-61.

reproducida en C. J. 12.53(54).1: <<... *omnium suffragiorum obreptione cessante...*>>, a. 385)⁴⁶⁸.

Junto con el *suffragium* aparece en el Código Teodosiano, en el ámbito del Derecho privado, otra figura: el contrato de “patronaje” (CTh. 11.24: <<*De patrociniis vicorum*>>) dirigido entre otras finalidades también a la obtención de un empleo público. A este supuesto se refiere el título C. J. 11.54 <<*ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum*>> que contiene dos constituciones: en la primera (C. J. 11.54.1, a. 468) el emperador León establece la nulidad de los actos de disposición de la propiedad dirigidos a constituir una relación de patrocinio, así como la confiscación de los bienes transferidos por esta causa, y también los de los notarios que hubiesen participado voluntariamente en este ilícito; esta ley es confirmada en la segunda constitución del título (C. J. 11.54.2; sin fecha, probablemente de Justiniano)⁴⁶⁹.

En relación con el tema del *suffragium* mencionamos dos disposiciones contenidas, respectivamente, en CTh. 2.29.1 (a. 361) y CTh. 2.29.2 (a. 394) que se configuran como las dos leyes más

⁴⁶⁸MALAVÉ OSUNA B., *Suffragium: Un crimen publicum...*, op. cit., pp. 291-300.

⁴⁶⁹GIGLIO S., *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*², Perugia, 2008, pp. 33-34.

importantes de esta época sobre la materia. En la primera⁴⁷⁰, el emperador Juliano prohíbe el *suffragium* por su inmoralidad e ilícitud y establece los medios dirigidos a su persecución basándose en principios propios del Derecho privado clásico⁴⁷¹: la imposibilidad de repetir lo entregado por parte del funcionario que consiguió el puesto a través de *suffragium* (*condictio ob turpem causam*): <<... *omnem repetendi eorum, quae prodige nefarieque proiecerunt, copiam prohibemus...*>>. Además, se establece que este último deberá entregar al Fisco una cantidad igual a la que había pagado con motivo del sufragio: <<... *et quod dedit apud suffragatorem eius manebit vel extortum restituet et alterum tantum fisci viribus inferre cogetur*>>. En cuanto a la segunda constitución mencionada anteriormente, ponemos de relieve que el emperador Teodosio I, viendo que el *suffragium* seguía siendo una práctica

⁴⁷⁰Transcribimos al castellano la fuente recogida en CTh. 2.29.1: <<Aquellos que con deshonestas invenciones, consiguieron apoderarse de lo que se difiere a los buenos, como recompensa, y habiendo conseguido actuar en la cosa pública de cualquier modo, estiman con mayor impudicia y deshonestidad que deben recuperar el dinero que deshonestamente habían pagado; otros a su vez creyeron que debían apoderarse de nuevo de aquello que entonces habían regalado o más bien dilapidado por motivos sin razón. Pero por cuanto las leyes romanas desconocen totalmente contratos de esta naturaleza, les vedamos toda autorización para recuperar aquellas cosas que pródiga y nefastamente hubiesen dilapidado. Por lo tanto el que trata de recuperar o está convicto de haber recuperado, no sólo lo que dio quedará en poder del sufragador, o restituirá lo extorsionado, sino que tanto se le obliga por la fuerza del Fisco, a entregar otro tanto>> (trad. A. DÍAZ BIALET, Córdoba (Argentina), 1964, p. 49)

⁴⁷¹MALAVÉ OSUNA B., *Suffragium: un crimen publicum...*, op. cit., p. 315.

corriente entre los candidatos a un puesto en la Administración, promulga el 4 de marzo del año 394 junto con los emperadores Arcadio y Honorio una conocida constitución contenida en CTh. 2.29.2⁴⁷² y recogida en C. J. 4.3 (<<*De suffragio*>>), que viene a suponer la “contractualización” del *suffragium*⁴⁷³: Teodosio reconoce la validez del acuerdo (*pactio suffragiorum*)⁴⁷⁴ si el mismo adopta la forma de una

⁴⁷²<<Si los que desean exponer sus deseos le hubieren pedido a alguno que les preste su sufragio, y para corresponder a ello se hubieren obligado con promesa, restituyan lo prometido cuando consigan lo que hubieren deseado; y si con maquinaciones lo demoran, han de ser compelidos al pago de lo debido. Pero si por ese motivo hubiera dado algo en oro o plata, o en otras cosas muebles, bastará la sola entrega de una cosa mueble hecha de buena fe. Pero si el pacto contuviere predios rústicos o urbanos, extiéndase la escritura que los transfiere a otro, hágase después la entrega corporal y que las actas atestigüen que el asunto ha quedado terminado, porque de otra manera no puede pasar al nuevo dueño ni separarse del anterior derecho. Pero si alguien basado sólo en la advertencia acerca del sufragio hubiera pensado que debía ocupar los bienes, será enjuiciado como reo de temeridad y violencia y se volverá la posesión a su prístino estado, quedando excluido de la petición aquél que no dudó en tomar por la fuerza aquello que debió pedir>>.

⁴⁷³MALAVÉ OSUNA B., *Suffragium: un crimen publicum...*, op. cit., pp. 312 ss., 316; ANDREOTTI R., *Problemi del “suffragium” nell’imperatore Giuliano*, en Atti Accademia Romanistica Constantiniana. I Convegno internazionale, Perugia, 1975, pp. 3 ss.; HAYASHI N., *Proceso histórico de la contractualización del “suffragium”*, AHDE 54, Madrid, 1984, pp. 655-669; LOUIS-LUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, op. cit., pp. 320 ss; DE STE CROIX G., *Suffragium: from vote to patronage*, en British Journal of Sociology (B.J.S.), 5, 1954, pp. 47-48.

⁴⁷⁴A diferencia de lo dispuesto en esta ley, el emperador Constancio castigó severamente en CTh. 12.1.36 (a. 343) la obtención de cargos en la Administración mediante este pacto.

*sponsio*⁴⁷⁵, pero a diferencia de la estipulación clásica aquélla es causal ya que se dispone que el *suffragator* solamente podrá exigir la remuneración acordada⁴⁷⁶ en caso de que el recomendado hubiese alcanzado el puesto deseado (<<... *et ob referendum vicem se sponsione constrinxerint, promissa restituant ...>>*; C. J. 4.3.1 pr.); además, la ejecución de esta *sponsio*, es decir, la transferencia de los bienes prometidos al *suffragator* aparece sometida al cumplimiento de diversas formalidades según que los bienes prometidos sean muebles o inmuebles; si se trataba de bienes muebles bastaba la mera entrega (<<*traditio sola sufficiat, et contractus habebit perpetuam firmitatem*>>) para la transmisión de la propiedad, y si eran bienes inmuebles (*praedia rustica vel urbana*) se exigían los siguientes requisitos para que pudiesen pasar al nuevo dueño (*ad novum dominum transire possunt*): formalización por escrito (*scriptura*), entrega material (*traditio corporalis*)⁴⁷⁷ y que se dé testimonio en actas (*et ... gesta testentur*). Se

⁴⁷⁵ Recordamos a este respecto la definición que de *sponsio*, entendida en sentido amplio como promesa contractual, nos da Paulo en D. 50.16.7 (Paul., 2 ed.): <<*Sponsio appellatur, non solum quae per sponsus interrogationem fit, sed omnis stipulatio promissioque*>>.

⁴⁷⁶ La retribución pagada al *suffragator* podía consistir, según se establece en esta constitución, en dinero o en especie (oro, plata, cosas muebles o inmuebles) e incluso adoptar a tenor de lo dispuesto en C. J. 9.27.6 (a. 439) la forma de una venta, por ejemplo, a bajo precio, de un arrendamiento o de una donación.

⁴⁷⁷ Considera GIGLIO S., *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*², op. cit., p. 58, respecto de la *corporalis traditio* en caso de bienes inmuebles, que: “*tale precisazione, in quest’ ultimo caso, era doverosa, perché la traditio evidentemente avrebbe potuto essere*

añade también en C. J. 4.3.1.3 que el *suffragator* que ocupe estos bienes contraviniendo lo dispuesto en esta ley será enjuiciado como reo de temeridad y de violencia (*reus temeritatis ac violentae*) y por supuesto deberá devolver la posesión de los mismos. El nuevo contrato de sufragio aparece, en palabras de COLLOT, como “un contrato específico, individualizándose en su causa y en su ejecución”⁴⁷⁸.

Sin embargo, la reglamentación del contrato de *suffragium* no impidió que siguiese existiendo un sufragio ilícito, lo que motivó que durante los siglos V y VI se desarrollase una nueva política imperial dirigida a acabar definitivamente con este tráfico de influencias pero esta vez desde el ámbito del Derecho público: en C. J. 9.27.6⁴⁷⁹ (a. 439) los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, después de prohibir que

effettuata anche mediante costituito possessorio e perché, al contrario, si voleva costringere il cedente/protetto a concludere un atto giuridicamente ineccepibile di fronte a testimoni”. Anteriormente una ley de Constantino del año 316, recogida en CTh. 8.12.1, había exigido la *traditio corporalis* para garantizar la transferencia de la propiedad inmobiliaria. LÉVY J.-Ph., *Essai sur la promesse de donation en droit romain*, RIDA, 3, Bruxelles, 1949, pp. 108-109

⁴⁷⁸ COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire...*, op. cit., p. 221. En este sentido D'ORS A., *Derecho privado romano...*, op. cit., p. 413, señala que: “un interesante caso de transformación datable de *datio ob causam* en *contractus* presenta el del *suffragium* o <<compra de oficio>>: en tanto para el emperador Juliano (Cth. 2.29.1 [del 362]) se trataba todavía de una *datio* con causa ilícita para ambas partes, y por ello, irrepetible, para Teodosio I (Cth. h.t.2 [del 394]=C. J. 4,3 ún.) se trata ya de un <<contractus>> real (<<*traditio sola sufficiat et contractus habebit perpetuam firmitat*>>)”.

⁴⁷⁹ Esta disposición se encuentra recogida en el título <<*ad legem Iuliam repetundarum*>> (C. J. 9.27).

nadie dé cosa alguna para obtener un cargo administrativo⁴⁸⁰, califican por primera vez el ilícito como *crimen publicum*, permitiendo a cualquier ciudadano la persecución tanto del *suffragator* como del que realizó este pago ilícito y sancionando a los culpables con el cuádruplo de la cantidad ilícitamente recibida o entregada⁴⁸¹, mientras que en la ya referida disposición de Juliano contenida en CTh. 2.29.1, se castigaba solamente al que entregó la cantidad y no al *suffragator*. Asimismo, en la constitución de Teodosio II se retoma el procedimiento clásico de la acción popular de la *lex Calpurnia de ambitu* referida en D. 48.14.1.

En la misma línea, el emperador Justiniano establece en Nov. 8.1⁴⁸² el principio de gratuidad de los cargos (<<... *sed gratis quidem*

⁴⁸⁰Teodosio II y Valentiniano III se preocuparon de la integridad moral y de la respetabilidad de los propios funcionarios en esta constitución del 439 (C. J. 9.27.6 pr.) sancionando que el futuro gobernador jure que no ha dado nada ni que dará nada por persona interpuesta para conseguir el cargo. La interposición de personas o el recurso a ventas simuladas o a donaciones para conseguir un cargo fue considerado *in fraudem legis sacramentique*. Por *lex* se entiende, en esta constitución, tanto lo dispuesto en C. J. 9.27.6 pr., como también toda la legislación sobre el *crimen repetundarum* y sobre el comercio de cargos. FASCIONI L., *Osservazioni sull'uso del concetto di <<Fraus legi>> nelle costituzioni imperiali*, en Studi Senesi, 95, fasc. 1, 1983, pp. 66-69.

⁴⁸¹*Sancimus eiusmodi viros ad provincias regendas accedere, qui ad honoris insignia non ambitione, vel pretio, sed probatae vitae, et amplitudinis tuae solent testimonio promoveri ...*

⁴⁸²La Nov. 8 (<<*Ut iudices sine quoquo suffragio fiant*>>), publicada el 15 de abril de 535, es una de las Novelas justinianas más amplias. BONINI R., *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna 1979, pp. 22, 32-33;

sumere administrationes ...>>), prohibiendo que nadie “dé sufragio alguno, ni donación alguna por un cargo administrativo (...) y den módica cantidad con ocasión de lo que se satisface por los cingulos y las credenciales” (<<*neque... dare aliquod suffragium, neque pro administratione quamlibet donationem... pauca vero praeberere occasione horum, quae pro singulis dantur cingulis, codicillis et chartis*>>)⁴⁸³. Este principio se recogerá también en Nov. 24.4 (a. 535), referida al pretor de la Pisidia, cuando dice: << ... el que reciba esta magistratura, puesto que siempre se la concedemos gratis, y absolutamente por ninguna retribución (*nulla penitus mercede*), y contento solamente con lo que se le da del Fisco...>>⁴⁸⁴, y en Nov. 29, del mismo año, se dice que los cargos sean conferidos gratuitamente: <<*gratis accipiens cingulum et gratis hoc impetrans*>>.

La innovación de Justiniano en este campo será la de establecer un sistema de tasas legales por el cual los que acceden a un cargo público deberán entregar como gastos de tramitación determinadas

GARBARINO P., *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli, 1992, pp. 39 ss.; DEMICHELI A. M., *L'Editto XIII de Giustiniano in tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino*, Torino, 2000.

⁴⁸³La “rapacidad” de los administradores públicos provocaba la pobreza de los súbditos lo que terminaba por impedir el recto cumplimiento de las cargas fiscales y producía el empobrecimiento del Fisco. BALZARINI M., *Giustiniano e lo stato di diritto. Mito e realtà nella legislazione e nella prassi*, en *Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999, pp. 53 ss. (p. 62).

sumas en las oficinas encargadas de la expedición de las credenciales de nombramiento (<<...*pauca vero praeberere occasione eorum, quae pro cingulis dantur et chartis...*>>)⁴⁸⁵. El montante a pagar, que es minuciosamente fijado en una *notitia* añadida a la ley, era bastante elevado puesto que comprendía una suma de entre 63 y 196 sólidos de oro. Ahora bien, una cantidad tan alta hace pensar que también cubriría no sólo los gastos de timbre, redacción o de envío, sino que comprendería también un sufragio reducido y legalizado⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ En Nov. 25.2.1 (a. 535) se repiten estas mismas palabras.

⁴⁸⁵ BONINI R., *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna, 1976, pp. 22 ss.

⁴⁸⁶ COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire...*, *op. cit.*, p. 218.

C) REGLAMENTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA MILITIA POR VENTA O DISPOSICIÓN A TÍTULO GRATUITO.

El titular del *officium* podía disponer libremente de su cargo tanto *inter vivos* como *mortis causa* ya que la *militia* era considerada como una *res* patrimonial o *in commercio*, y ello a diferencia de la *dignitas*⁴⁸⁷ que no podía ser objeto de disposición por su titular: <<*militia est in patrimonio nostro, ergo conferetur, dignitas non est in patrimonio*>>. Ahora bien, una cosa era la disposición de la *militia* mediante testamento (legado o fideicomiso), pudiendo también el funcionario disponer de su *salarium* (venalidad lícita), y otra cosa era el sufragio venal o abusivo que no respetaba los límites establecidos en la ley.

La milicia podía, por tanto, ser objeto de venta por su titular⁴⁸⁸, pero sin embargo, el *pretium* no podía ser libremente determinado por

⁴⁸⁷ Este término designaba en general el rango elevado de una persona y –como hemos visto– en sentido más restringido hacía referencia a los oficios más elevados de la burocracia estatal.

⁴⁸⁸ LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, op. cit., p. 515, señala que dicha compraventa “constituait une opération

las partes, al quedar fijada una tasa máxima que los interesados no podían ni debían superar; esta medida la encontramos en una ley de Anastasio recogida en C. J. 12.19.11 y en Nov. 35, del año 535⁴⁸⁹.

A continuación citamos diversos textos recogidos en el Digesto que hacen referencia a la venta de la milicia⁴⁹⁰ y a disposiciones a título gratuito de la misma en forma de legados o fideicomisos:

- D. 19.1.52.2 (Scaev., 7 *dig.*) que contiene un supuesto de venta de *militia* en el que se pacta que el *salarium* pendiente de recibir por el funcionario vendedor del cargo corresponda al comprador⁴⁹¹; por tal motivo el vendedor deberá cederle las <<*actiones extraordinarias... eo*

complexe, dont chacune des deux parties était indépendante de l'autre: la première, consistant dans une promesse de présentation, restait libre pour les contractants qui la faisaient et la recevaient, au gré de leurs volontés respectives; la seconde, consistant dans une promesse de démission, était nécessairement subordonnée à une condition suspensive, qu'il n'était plus en la puissance des parties de supprimer et d'écarter`.

⁴⁸⁹ Vid. *infra* p. 320.

⁴⁹⁰ LOUIS-LUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, *op. cit.*, p. 504.

⁴⁹¹ MARCHI A., *I testi delle pandette relativi alla vendita e al legato della militia*, *op. cit.*, p. 303, considera que el texto ha sido retocado por los compiladores. Apuntamos que la cesión *inter vivos* de créditos a título particular no fue reconocida por los juristas clásicos sino que sólo fue posible a partir de época postclásica y justiniana. LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité...*, *op. cit.*, pp. 528-529.

nomine, quas haberet>>, ya que las acciones para reclamar un *salarium* se intentaban *extra ordinem*⁴⁹².

- D. 32.102.2 (Scaev., 17 *dig.*) en el que una persona manda por fideicomiso que se compre un cargo en la *militia* para un alumno suyo⁴⁹³: <<A Sempronio, mi alumno, (...), y quiero que cuando por su edad fuere lícito se le compre tal cargo en la milicia con su entrada (*introitus*)>>.

- D. 32.102.3 (Scaev., 17 *dig.*) donde se recoge el caso de un testador que lega a su liberto un cargo en la milicia que había desempeñado él mismo, en estos terminos: <<doy y lego a Seyo, mi liberto, aquel cargo en la milicia>>⁴⁹⁴; en este caso se dice que el heredero deberá pagar al liberto todas las cargas y los gastos de ingreso en la milicia (*onera omnia, et introitus militiae*).

- D. 34.1.18.2 (Scaev., 20 *dig.*) en el que se plantea el siguiente supuesto: el testador encarga a su hijo Seyo o a los herederos de éste,

⁴⁹² LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, *op. cit.*, p. 528.

⁴⁹³ *Alumno praecepit militiam his verbis: Sempronio alumno meo illud et illud: et cum per aetatem licebit, militiam illam cum introitu comparari volo: huic quoque omnia integra...*

MAC MULLEN R, *Roman bureaucratise*, *Traditio* 18, 1962, pp. 364 ss.

⁴⁹⁴ El testador lega su puesto en la milicia a su liberto, y el jurista Escévola responde que el heredero deberá pagar también todas las cargas y los gastos de ingreso en la milicia (*introitus militiae*). Estamos

en caso de que el hijo fallezca antes de cumplir los veinticinco años, que compre un cargo en la *militia* al liberto Estico siempre que dicho liberto no le hubiese dejado de prestar los servicios debidos a su patrono Seyo.

- D. 31.22 (Cels., 21 *dig.*) refiere el siguiente caso: un ciudadano, Lucio Ticio, deja en su testamento su propio cargo en la milicia a Publio Mevio o bien el dinero que por la venta del mismo hubiese podido obtener el testador. Habiendo sobrevivido Lucio Ticio a su testamento vendió su cargo en la milicia y entregó el precio de la venta a Publio Mevio. La cuestión que se plantea es que a la muerte de Lucio Ticio, Publio Mevio exige a los herederos de aquél o el cargo en la milicia o el precio del mismo. Celso respondió que Publio Mevio no tiene derecho al precio a no ser que “el legatario probara que el testador, incluso después de pagarle el precio había querido que lo cobraría otra vez...”.

- D.32.11.16 (Ulp., 2 *fideic.*) alude a un fideicomiso de un cargo en una *militia* hecho a un esclavo ajeno y se pregunta el jurista si el esclavo adquiere la milicia para su dueño; ante lo cual responde que si el testador sabía que el beneficiario era esclavo, el dueño tendrá derecho a la estimación, pero si lo ignoraba no podrá el dueño reclamar

ante un legado *per vindicationem*, cuya finalidad era la de hacer pasar, *recta via*, la *militia* del patrimonio del testador al patrimonio del legatario.

el fideicomiso, ya que si el disponente hubiese sabido que era esclavo no le hubiese dejado el cargo⁴⁹⁵.

Mencionamos también varios fragmentos recogidos en el Digesto en los que se admite que la mujer pueda realizar una donación al marido para que éste adquiriera un cargo en la milicia, tal y como se contiene en D. 24.1.40⁴⁹⁶, o bien un ascenso en su carrera, como dispuso Antonino Pío en D. 24.1.41⁴⁹⁷. Estos supuestos aparecen como una excepción al principio general contenido en D. 24.1.1: <<... *ne inter virum et uxorem donationes valerent*>>, si bien es verdad que en estos casos la donación será válida solamente hasta el límite de la cantidad necesaria para pagar la dignidad o el ascenso. También Gayo nos dice en D. 24.1.42 (Gai., 11 *ed. prov.*) que el emperador Antonino Pío admitió como causa de donación entre esposos la llamada donación *honoris causa* que sería aquella en la que una mujer dona algo a su marido para que pueda aspirar al rango senatorial, para hacerse del orden ecuestre, o para poder dar las fiestas <que deben dar los que obtienen ciertos cargos

⁴⁹⁵VOCI P., *L'errore nel diritto romano*, Milano, 1937, p. 60, señala que el fragmento estaría interpolado desde <<*et aut scit hasta non reliquisset*>>.

⁴⁹⁶D. 24.1.40 (Ulp., 2 *resp.*): *Quod apiscendae dignitatis gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus ratum est quatenus dignitati supplendae opus est.*

⁴⁹⁷D. 24.1.41 (Lic. Ruf., 6 *reg.*): *nam et imperator Antoninus constituit, ut ad processus viri uxor ei donare possit.*

públicos>. Por último, en D. 24.1.5.17⁴⁹⁸ Ulpiano recoge la opinión del jurista Marcelo respecto a la siguiente cuestión: si la mujer gasta para las espórtulas destinadas a la promoción de un pariente lo que le ha donado el marido, la donación es válida ya que no parece que la mujer se hubiese enriquecido, aunque hubiese tomado dinero en préstamo y lo hubiese gastado en favor de un pariente (=Eisagoge de Focio 20.17; =Bas. 30.1.5.17).

Tanto la venta como el legado o el fideicomiso de la *militia* estaban dirigidos a la adquisición efectiva del oficio; ahora bien, en aquellos casos en los que la toma de posesión del cargo no fuese posible por parte del adquirente, por ejemplo, por el legatario o por el fideicomisario, cabía la posibilidad, a tenor de lo dispuesto en D. 30.114.5 (Marcian., 8 *inst.*) y en D. 32.11.16 (Ulp., 2 *de fideic.*)⁴⁹⁹, de que se reconociese un derecho a la *aestimatio* equivalente al precio usual de venta.

En la compraventa de cargos, normalmente el comprador era el oficial que seguía al vendedor en la *matricula*⁵⁰⁰, de esta forma obtenía a

⁴⁹⁸D. 24.1.5.17 (Ulp., 32 *Sab.*): *Marcellus libro septimo Digestorum quaerit, si mulier acceptam a marito pecuniam in sportulas pro cognato suo ordini erogaverit, an donatio valeat? Et ait valere nec videri locupletiores mulieres factas, quamvis mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfines erogatura.*

⁴⁹⁹ Vid. *supra* pp. 316-317.

⁵⁰⁰ Vid. *infra* pp. 365 ss.

precio de oro un ascenso más rápido como se refleja en C. J. 12.19.7.4 (a. 443-444?): <<...*id est offerendae pecuniae et adipiscendi statuti locum liberam habere praecipimus facultatem*>>. Así, según esta ley, cuando un funcionario numerario (*proximus*) de un *scrinia* se retiraba podía vender su puesto por un precio fijo de 250 sólidos al primero de los supernumerarios, y en caso de que éste rechazase el puesto, podía ofrecérselo al siguiente, y así sucesivamente hasta que encontrase un adquirente; también los herederos del funcionario fallecido podían vender el puesto al supernumerario más antiguo. Pero, si el comprador era extraño al *officium* debía ser aceptado por el funcionario que dirigía la oficina. Y además, en algunos casos, era necesario que el nuevo funcionario obtuviese la aprobación por mayoría de los demás miembros del *officium*; sabemos que un sistema de cooptación existía al menos en la *schola* de los *agentes in rebus* tal y como se recoge en CTh. 6.27.4 (a. 382); CTh. 6.28.8 (a. 435); CTh. 6.29.4 (a. 359)⁵⁰¹.

⁵⁰¹CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine ...*, op. cit., p. 223; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., pp. 50, 64, 67, 84, 155.

El asistente (*adiutor*) del *magister officiorum* era nombrado por el emperador bajo la recomendación del cuerpo entero de los *agentes in rebus* (C. J. 1.31.1, a. 359); sin embargo, el nombramiento para el desempeño del cargo de *princeps officii* no era un privilegio exclusivo de los miembros de la *schola* sino que también los componentes de los *officia* de los *magistri militum*, de los *praefecti* del pretorio y del *praefectus urbi* podían ser nombrados príncipes del oficio. PURPURA G., *I curiosi e la schola agentum in rebus*, en *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)*, 34, 1973, p. 244.

Esta materia será tratada también por Justino que establece en C. J. 12.33(34).5.3 (a. 524) que los funcionarios que hasta esa fecha hubiesen venido desempeñando dos o más milicias las pueden vender <<a los que la quieran y obtener su precio según lo que hasta ahora fue costumbre en los mismos cuerpos>>, pero siempre que <<la milicia de la que se han de separar estuviera entre las que es lícito vender>>⁵⁰².

Y Justiniano permitirá en Nov. 35 (a. 535) que los asistentes (*adiutores*) del *quaestor sacri palatii* o sus herederos vendan los cargos por una cantidad fija de cien sólidos, aunque los tres *adiutores* más antiguos (*laterculensis* de los memoriales y *melloproximi* de los otros dos *scrinia*) quedaban exentos de esta limitación y podían vender el puesto al mejor postor (<<... itaque et venditionis ius habeant, et quanti potuerint pacisci, tanti et vendant>>), si bien había de ser nombrado como subrogado en el cargo (es decir, el comprador) aquél de entre los

Sobre la promoción dentro de la *schola* al rango de *princeps*, vid. CTh. 6.27.19 (a. 419) en donde se establece que no por *suffragium* sino por el tiempo de servicio (veinte años) y los méritos se llega a la principalía y que sólo en caso de enfermedad o defecto corporal se podría obtener la promoción antes de los veinte años. En cualquier caso para el acceso a la *schola agentium in rebus* era necesaria la preventiva emisión de la carta de nombramiento por el *scrinium memoriae*.

⁵⁰²<<...inter eas habetur, quas volentibus licet distrahere, et in alios eam conferendi et pretia consequendi ...>>. BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III*, I. Fonti, Padova, 1988, p. 129.

Procopio denunciaba también en época de Justiniano la venalidad de los cargos de los palatinos del *comes sacrarum largitionum*, del *comes rei privatae* y del *comes* del patrimonio (H. A., 22.12).

aspirantes que el *quaestor sacri palatii* hubiere elegido, a fin de que no recaiga el cargo *in homines minus idoneos*.

También sabemos que en esta época los banqueros (*argentarii*)⁵⁰³ hacían préstamos de dinero a particulares con el objeto de que pudiesen comprar un cargo en la Administración para ellos mismos o para sus hijos; la Nov. 36.2 (a. 535) parece referirnos el caso del que ha pedido un préstamo a un *argentarius* para comprar una *militia* para él o para sus hijos y establece que si el mutuario no podía pagar de ningún otro modo la deuda: “satisfágaseles con la milicia de los hijos a los encargados del establecimiento del banco, en cuyo favor hemos establecido esta ley”⁵⁰⁴.

⁵⁰³ Sobre las grandes fortunas de los banqueros en los siglos V y VI: COSENTINO S., *Le fortune di un banchiere tardoantico, Giuliano argentario e l' economia di Ravenna nel VI secolo*, en Santi banchieri re. Ravenna e Classe nel VI secolo (a cura di A. Augenti), Milano, 2006, pp. 43 ss.

⁵⁰⁴ ...*Nam si debitum aliunde dissolvere nequant, tum ex militia liberorum praepositis mensae argentariae satisfiat ...*

CARRIÉ J-M., *Les métiers de la banque entre public et privé* (IV-VII siècle), en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti, Milano, 1998, pp. 65 ss., y concretamente pp. 85 ss.; PETRUCCI A., *Persistenza di negozi bancari nelle fonti giuridiche tra la fine del III e i primi decenni del V secolo d.C.*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII

Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti, Milano, 1998, pp. 236-

D) SUCESIÓN HEREDITARIA EN LA TITULARIDAD DE LA MILICIA POR DISPOSICIÓN DE LA LEGISLACIÓN IMPERIAL.

Los oficiales vinieron a constituir *de facto*, como otros cuerpos del Bajo Imperio, una verdadera “casta hereditaria”⁵⁰⁵: en el año 331 Constantino estableció en CTh. 7.22.3 [= C. J. 12.47(48).1] que los hijos de los oficiales civiles pudieran heredar el cargo de su padre: << *li, qui ex officialibus quorumcumque officiorum geniti sunt, sive eorunden parentes adhuc sacramento tenentur sive iam dimissi erunt, in parentum locum procedant* >>⁵⁰⁶, y este derecho se tornó en obligación a partir del año 349, como se recoge en CTh. 8.7.3, que estableció que los hijos de los oficiales civiles, bajo pena de ser eventualmente enrolados en el ejército, debían seguir la carrera burocrática de sus progenitores:

237.

⁵⁰⁵JONES A. H. M., *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, en *La società del Basso Impero. Guida storica e critica* (a cura di D. Vera), Bari, 1983 [= *The Caste System in the Later Roman Empire*, en *Eirene*, VIII, 1979, pp. 79-96], pp. 35-36.

⁵⁰⁶Considera JONES A. H. M., *Il sistema delle caste...*, *op. cit.*, p. 36, que “forse questa legge mirava non tanto a ribadire il servizio

<<universi officiales diversorum officiorum, qui ex protectoribus epistulas meruerunt, officiis pristinis militiaque reddantur nec opponant quaesitae sibi vocabulum dignitatis>>⁵⁰⁷.

También podemos traer a colación otros ejemplos de constituciones imperiales que establecen la sucesión de los hijos en la *militia* desempeñada por los padres como son diversas disposiciones contenidas en C. J. 2.7.11.2-3 (Imp. León I, a. 460) en las que se da preferencia a los hijos de los abogados de los tribunales del prefecto del pretorio para cubrir los puestos vacantes dejados por sus padres, y en C. J. 2.7.22(3).5 (a. 505) en donde se dispone que los hijos de los *patroni fisci* del prefecto del pretorio tendrán un derecho preferente para ocupar este puesto: <y sean preferidos a los extraños que soliciten dicho cargo los hijos de los abogados que entonces se hallaban ejerciendo tal cargo, o de los que sobrevivientes o fallecidos (*superstitum vel mortuorum*) hubiesen cesado en el patronato del fisco, y

ereditario in generale, ma piuttosto insisteva sul fatto che i figli dovevano essere arruolati nello stesso officium in cui aveva servito il genitore``.

⁵⁰⁷CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 216; PIGANOL A., *L'empire chrétien*, op. cit., p. 389.

En este sentido, también PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public...*, op. cit., p. 198, refiere como los hijos de los empleados del *staff* son los preferidos para estos puestos, y DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 133, opina que el reclutamiento hereditario venía condicionado por el hecho de que un grupo importante de la sociedad no podía ingresar en la *militia* civil (soldados, curiales, *cohortales*, negociantes, trabajadores fiscales, *collegiati...*), como hemos referido ya anteriormente.

admítaseles gratis, y sin gastos, si también ellos, como se ha dispuesto, hubieren adquirido en el tiempo acostumbrado el conocimiento de las leyes>>⁵⁰⁸.

Y en Nov. 35 (a. 535), referida a los ayudantes del *quaestor sacri palatii*, Justiniano nos dice que en caso de fallecimiento el funcionario transmitirá su cargo a sus herederos o hijos, aunque no sean herederos, pero que será el *quaestor* quien elija al que tenga las aptitudes necesarias y pague las *sportulae* correspondientes⁵⁰⁹.

⁵⁰⁸El emperador Anastasio concedió un año más tarde a los dos *patroni fisci* del tribunal del *praefectus praetorio*, una vez hubiesen cesado en el cargo, el privilegio de inscribir a sus hijos ingenuos en el colegio de los *tribunii* y *notarii* sin pagar ningún tipo de *sportula* (C. J. 2.7.23(4).2, a. 506). AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci ...*, op. cit., p. 122.

E) CONCLUSIONES

I.

El emperador se reservaba discrecionalmente el nombramiento directo de las más altas dignidades como era el caso, por ejemplo, de los *praefecti urbi* y de los *praefecti praetorio* ya que se configuraban como cargos políticos de responsabilidad y, por tanto, sus titulares debían contar con la total confianza del emperador.

II.

Junto a los requisitos exigidos para el acceso a la función pública, el *suffragium* aparece también en época imperial como un modo usual de acceso a altos puestos administrativos mediante el pago de sumas de dinero u otros bienes por parte de los candidatos; a lo largo del Principado fue práctica habitual el nombramiento de altos funcionarios por medio de recomendaciones basadas en el tráfico de

⁵⁰⁹Vid. *infra* pp. 591; 596

influencias así como la venta de cargos públicos, incluso por libertos al servicio de la Administración imperial como resulta de diversas fuentes literarias. Los emperadores del siglo IV se propusieron poner límites a estos usos en el marco de un esfuerzo por moralizar la función pública y mejorar su rendimiento. Así, son numerosas las constituciones de Constantino y sus sucesores en las que se prohíbe y castiga el *suffragium* dándose prioridad a los principios de antigüedad y a los méritos en el servicio (*labore et ordine*) para acceder a un cargo público, sancionándose asimismo toda relación de patrocinio dirigida a estos fines. Sin embargo, a pesar de las reiteradas prohibiciones, debió seguir siendo habitual la compraventa de cargos públicos lo que motivó que el emperador Juliano condenase solemnemente estas prácticas y estableciese para estos casos que el funcionario que hubiera conseguido un puesto de esta forma no pudiese reclamar lo pagado a aquél que le nombró, disponiéndose además que debería pagar otro tanto a favor del Fisco. Ahora bien, los emperadores Teodosio, Arcadio y Honorio dieron un giro completo en esta materia al publicar una constitución en el año 394 en la que se legalizó y reguló el “contrato de *suffragium*” como forma de *sponsio* causal por la que el aspirante a un cargo acordaba la entrega de bienes muebles o inmuebles al funcionario competente para su elección a cambio de la efectiva obtención del puesto solicitado. No obstante, la existencia a partir de entonces de un sufragio legalizado no impidió que a lo largo de los siglos V y VI fuesen frecuentes supuestos de sufragio ilícito que iban más allá de lo permitido

por la legislación imperial, lo cual determinó una fuerte reacción moralizante dirigida de nuevo a la supresión de toda forma de *suffragium*, siendo considerado ahora como un crimen público denunciable por cualquier ciudadano por medio de la acción popular de la *lex Calpurnia de ambitu* y castigándose a los intervinientes en el *suffragium* al pago al Fisco del cuádruplo de la cantidad respectivamente recibida y satisfecha. Esta legislación ejemplarizante culmina en la Nov. 8 de Justiniano que afirma decididamente el principio de gratuidad en el acceso a la función pública si bien fijó un sistema de tasas legales que en teoría cubrían los gastos de tramitación del nombramiento del funcionario pero que, en la práctica y dada su cuantía, venían a suponer una especie de sufragio reducido y legalizado.

III.

A diferencia de las *dignitates* cuyos titulares no podían por principio vender sus cargos, los miembros de los *officia*, integrantes de los diversos escalafones de la *militia* civil, podían disponer de sus plazas con libertad, por actos *inter vivos* o *mortis causa*, gratuitamente o de forma onerosa, dentro de los límites marcados por las leyes, en tanto en cuanto la *militia* tenía la consideración jurídica de *res* patrimonial: << *militia est in patrimonio nostro, ergo conferetur, dignitas non est in*

patrimonio>> . Esta materia dio lugar una rica casuística en las fuentes exponiéndose en este capítulo una serie de textos, fundamentalmente del Digesto, en los que se plantean y resuelven numerosas cuestiones: por ejemplo, resulta de interés comprobar como se estableció en este ámbito una excepción a la prohibición de donaciones entre cónyuges admitiéndose la validez de la donación realizada por la mujer al marido para que éste pueda comprar un cargo en la *militia* o ascender en su carrera funcional. Por otro lado, resulta de las fuentes analizadas que en muchos casos el comprador era el oficial que seguía al vendedor en la *matricula*: se trata de un supuesto especialmente reglamentado en diversas leyes imperiales por medio del cual el candidato obtenía así un ascenso más rápido al puesto superior aspirado. Por último, resulta de interés constatar la actividad desarrollada por los banqueros de la época consistente en el otorgamiento de créditos a particulares para que con ellos pudiesen comprar un puesto en la milicia, para ellos mismos o para sus hijos, con la cláusula de que si aquellos no podían luego devolver la cantidad recibida con el correspondiente interés, la plaza comprada debía entregarse entonces a los responsables del banco.

IV.

Los oficiales, miembros de la *militia* civil y militar, vinieron a constituir de facto un verdadera “casta hereditaria”: Constantino estableció que los hijos de los oficiales civiles pudieran heredar el cargo de su padre mientras que una constitución del año 349 fijó con carácter general la sucesión hereditaria forzosa de padres a hijos de los diversos oficios imponiendo el enrolamiento obligatorio en el ejército de aquellos hijos que no quisiesen continuar en el mismo puesto que su padre. La doctrina ha puesto de manifiesto que este reclutamiento hereditario también venía condicionado por el hecho de que un grupo importante de la sociedad no podía ingresar en la milicia civil (soldados, cohortales, comerciantes, *collegiati*, libertos, cohortales....).

CAPÍTULO V

CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD RELATIVAS AL NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS

A) CODICILLI Y PROBATORIAE: REQUISITOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTO.

El nombramiento de los funcionarios era conferido mediante *codicilli* o *probatoriae*⁵¹⁰: los *codicilli*⁵¹¹ eran documentos emitidos por el

⁵¹⁰SEECK O., v. *codicilli*, PW, 4.1, Stuttgart, 1900, pp. 174 ss.; DE RUGGIERO E., v. *codicilli*, en *Dizionario epigrafico di Antichità romane*, II, rist. anast., Roma, 1961, pp. 316-318; GRIGG R., *Portrait Bearing-Codicils in the Illustrations of the Notitia Dignitatum*, JRS, 69, London, 1979, pp. 107 ss.; BERGER P. C., *The insignia of the Notitia Dignitatum*, New York, 1981; LIZZI TESTA R., *Codicilli imperiali e Insignia episcopali: un'affinità significativa*, RIL 122, Milano, 1988, pp. 3 ss.; ECK W., *Tituli honorarii curriculum vitae e autorappresentazione nell'Alto Impero*, en *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma, 1996, pp. 319 ss.; MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura tra principato e tardo impero romano*, en *Ostraka. Rivista di Antichità*, 8.1, Napoli, 1999; HERRMANN-OTTO E., *Promotionszeremoniell und Personalpolitik an Kaiserlichen residenzen*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno Internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001, pp. 83 ss.; VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público...*, *op. cit.*, pp. 283 ss.

⁵¹¹Son numerosas las referencias epigráficas y literarias a los codicilos de nombramiento en época clásica y postclásica: CIL., VI, 6190; CIL., VI, 8440; CIL., XIV, 4011; Tác., *dial.* 7; Epíct., *diss.* 1.10.5; Suet., *Tib.* 22; S.H.A., *Sev. Alex.* 49.1; Liban., *epist.* 84; Temist., 18, 224 b (...). En el Código Teodosiano aparece el término *codicillus* en: CTh.

primicerius notariorum para el conferimiento de una *dignitas* (CTh. 6.22: <<*de honorariis codicillis*>>); así por ejemplo, en Nov. 13.3 Justiniano establece respecto de la dignidad de *praetor plebis*⁵¹²: <<mandamos en primer lugar que no entre nadie en la mencionada dignidad antes que reciba de nosotros las credenciales del cargo (*codicillos administrationis*), y que por ninguna razón se atreva a ocupar este cargo sin las credenciales imperiales (*imperiales codicillos*), sino que espere a la resolución del emperador ...>>. Las *probatoriae*, emitidas por los *sacra scrinia* o por otros oficios palatinos, eran utilizadas para el nombramiento de los funcionarios del servicio civil (*militia*)⁵¹³. En las fuentes se encuentran también otros términos como *epistulae*, *insigniae*, *apices* o *adnotationes* para referirse a los títulos de nombramiento de los grados inferiores⁵¹⁴.

6.38.1 (a. 313 ?); CTh. 12.1.5 (a. 317); CTh. 12.1.20 (a. 331); CTh. 12.1.74 (a. 371); CTh. 6.7.1 (a. 372); CTh. 6.4.23 (a. 373); CTh. 9.27.1 (a. 380); CTh. 9.2.7 (a. 380); CTh. 15.14.8 (a. 389); CTh. 13.11.11 (a. 406); CTh. 12.1.180 (a. 416); y en el Código de Justiniano citamos: C. J. 12.4.1 (a. 372)= CTh. 6.7.1; C. J. 12.1.12 (a. 380)= CTh. 9.2.7; C. J. 1.49.1.2 (a. 479); C. J. 1.27.18 y 19 (a. 543).

⁵¹² Esta dignidad era conferida por Justiniano a personas de su confianza o a altas dignidades de la Administración.

⁵¹³ La rúbrica de C. J. 12.59(60) se titula: <<De los diversos oficios y de los alguaciles de los gobernadores y de sus credenciales (... *et probatoriis eorum*)>>.

⁵¹⁴ En CTh. 6.27.4 (a. 399) se establece que los palatinos del *comes sacrarum largitionum* necesitaban para su entrada en la milicia de una *adnotatio* imperial, y se dispone en C. J. 2.7.23(4).2 (a. 506): <<*Et postquam tale deposuerint officium, si quidem filios ingenuos habeant, eos clarissimorum notariorum inseri consortio tribunorum,*

El *codicillus* se presentaba como un diploma escrito en letras de oro sobre una tabla cerrada⁵¹⁵. Podemos hacernos una idea del contenido de estos textos oficiales gracias a las *formulae* reunidas por Casiodoro en su obra <<*Variae*>>⁵¹⁶, según las cuales, todos los *codicilli* de nombramiento seguían, en mayor o menor medida, el mismo modelo: en primer lugar, se contienen alabanzas o cumplidos pomposos sobre los méritos del personaje (*diligentia, experientia, industria* ...) y sobre la nobleza de su familia; después, venía el nombramiento mismo: <<*te per indictionem secundam ad praefecturae urbanae culmen erigimus ...*>> (*Var.*, I, 42, 3); y por último, eran recordadas con cierta precisión las principales competencias y deberes de su función acompañadas de ciertas recomendaciones generales: <<*... Dicioni tuae non solum Roma commisa est, quamvis in illa contineantur universa, verum etiam intra centesimum potestatem te protendere antiqua iura voluerunt, ne tantae civitatis iudicem muralis agger includeret, cum Roma omnia possideret.*

sacras solitas epistulas sine quadam suffragii solutione percepturos>>; vid. CTh. 6.22.5; CTh. 8.5.25; CTh. 9.27.1; CTh. 13.11.11...

⁵¹⁵El *codicillus* “se componía de dos planchas de marfil sobre una de las cuales, la cubierta frontal, se reproducía el busto del emperador”: NEIRA FALEIRO C., *La Notitia dignitatum...*, op. cit., p. 31.

⁵¹⁶FRIDH Ä, *Terminologie et Formules dans les “Variae” de Cassiodore. Études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l’Antiquité*, Göteborg, 1956, pp. 60 ss.; KAKRIDI C., *Cassiodors <<Variae>>. Literatur und Politik im ostgotischen Italien*, München, 2005.

*Tu etiam ex designatis lege provinciis ab appellatione cognoscis>> (Var., VI, 4: *Formula praefecturae urbanae*)⁵¹⁷.*

MAROTTA⁵¹⁸, en su estudio sobre la evolución histórica de estos documentos de nombramiento, pone de relieve como a lo largo del Principado el *codicillus* aparece como un medio utilizado para comunicar de forma más o menos solemne el nombramiento del funcionario y no para definir las competencias y los deberes de este último⁵¹⁹, función que era cumplida por los *libri mandatorum*⁵²⁰.

Ahora bien, durante el curso de los siglos IV, V y principios del VI, los *libri mandatorum* fueron integrados en los *codicilli* de nombramiento, con lo cual estos títulos van a recoger también las principales competencias y deberes del funcionario. Justiniano recuperará los *libri mandatorum* de época clásica e insistirá a menudo sobre el hecho de

⁵¹⁷CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 191; MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura...*, op. cit., p. 207.

⁵¹⁸MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura...*, op. cit., pp. 164-165, 202 ss.

⁵¹⁹En CLP 238 se recoge un *exemplar codicillorum* del año 84 enviado por Domiciano a L. Laberius Maximus para comunicarle su nombramiento como prefecto del pretorio (MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura ...*, op. cit.).

⁵²⁰D. 47.22.1 pr. (Marcian., 3 inst.): <<Se ordena a los gobernadores provinciales, en algunos mandatos imperiales, que no toleren la existencia de asociaciones de cofrades, ni que los militares tengan asociaciones en sus campamentos...>>; D. 32.1.1; D. 48.19.15; D. 48.3.10...

que los *mandata* fuesen entregados al funcionario junto (*unacum*) a los codicilos en el acto de toma de posesión de su cargo administrativo, como se dispone en Nov. 17 *praef.* (a. 535)⁵²¹, la cual contiene una *epistula* dirigida a Triboniano -cuestor del sacro palacio-, en donde se dice: <<...hemos compuesto un libro de mandatos (...) para que les sea dado a nuestros administradores (...), y depositados en el sacro registro, a fin de que los administradores, por recibirlos juntamente con las credenciales (*codicillis*), no ignoren de qué modo pueden ser útiles a la república>>⁵²²; igualmente se dispone en Nov. 24.6, del mismo año que la anterior y dirigida al prefecto del pretorio Juan, que: <<... hemos determinado no solamente darles las insignias de la magistratura que se llaman credenciales (*codicilli*), sino también prescribirles el modo en como desempeñarán su administración (lo que los legisladores anteriores a nosotros llamaban mandatos del príncipe -*mandata principis*-) a fin de que atendiendo a ellos rijan los mismos su administración (...) Así pues establecemos que estos mandatos se

⁵²¹ Exceptuando el prefacio, toda la Novela se encuentra recogida en Bas. VI.3.22.

⁵²² ... *ideo librum mandatorum composuimus (...) ut detur administratoribus nostris (...) et in sacro laterculo deponi praecipiat, quatenus ex his una cum codicillis suscipiendis administratores; quemadmodum possint reipublicae subvenire, non ignorent.*

guarden en nuestro sacro registro (*in sacro nostro laterculo*) a fin de que se les den conjuntamente con las credenciales ...>>⁵²³.

Vemos también que en Nov. 17 Justiniano recoge, a lo largo de los dieciséis capítulos que integran dicha Novela, un catálogo de instrucciones y preceptos dirigidos a los gobernadores provinciales como guía para el buen desempeño de su cargo; concretamente en el capítulo 1 se dice: <<es conveniente que recibiendo tú con pureza y sin sufragio alguno el cargo administrativo, conserves ante todo manos limpias para Dios, para nosotros y para la ley, no adquieras ningún lucro, ni mayor ni menor, y no negocies capciosamente con los súbditos sino que te contentes únicamente con las cosas que se te suministran por el Fisco ...>>. Y en el capítulo 16 se le ordena al gobernador que en cuanto llegue a la provincia deberá consignar en actas (*sub gestorum insinuatione*) los preceptos recibidos en el *liber mandatorum* y exponer en público un ejemplar de los mismos no sólo en la metrópoli sino también en las demás ciudades de la provincia <<a fin de que todos conozcan con qué deberes recibiste el cingulo y vean si los observas y te muestras digno de nuestro juicio>>.

⁵²³ ... *perspeximus non solum eis praebere magistratus insignia in his qui vocantur codicilli, sed etiam inscribere modum secundum quem regant administrationem, quae ante nos legislatores mandata principis apellabant (...)* Igitur etiam recondi in sacro nostro laterculo huiusmodi divina mandata praecepimus, quatenus una cum codicillis dentur... .

Por último, señalamos que los codicilos eran enviados a su destinatario como cualquier otra *epistula*, salvo cuando se trataba de los más altos funcionarios, en cuyo caso se consignaban durante las ceremonias de investidura en presencia del emperador⁵²⁴.

Las *probatoriae*, emitidas por los *sacra scrinia* o por otros oficios palatinos, eran un requisito necesario para acceder como funcionario a la *militia civilis*: debían ser *authenticae*, no copias (<<... *non passim nec licenter solis auctoritatibus vel sacrarum literarum exemplaribus ...>>*), emitidas por la correspondiente secretaría⁵²⁵, y firmadas por el

Véase también Nov. 25.6 (<<*De praetore Lycaoniae*>>, a. 535) y Nov. 30.9 (<<*De proconsule Cappadociae*>>, a. 536).

⁵²⁴MAC CORMACK S., *Art and Ceremony in Late Antiquity (Transformation of the Classical Heritage)*, Berkeley, 1981, pp. 214 ss.; HERRMANN-OTTO E., *Promotionszeremoniell und personalpolitik...*, *op. cit.*, p. 90.

⁵²⁵Una constitución del emperador León I recogida en C. J. 12.59(60).10.2 da una relación de los *sacra scrinia* encargados de la emisión de las credenciales de los miembros de los distintos oficios: los *scrinia memoriae* emitían las credenciales de los *agentes in rebus*, de los palatinos del *comes rei privatae* y del *comes sacrarum largitionum*; en los *scrinia sacrarum epistolarum* se encargaban de las credenciales del oficio de los prefectos del pretorio de Oriente y de Iliria, del oficio del procónsul de Asia, etc ...; los *scrinia sacrarum libellorum* emitían las credenciales del oficio de los maestros militares de ambas milicias y de los *duces* y también de los empleados de los distintos *officia palatina* menores, como eran los *admissionales*, los *lampadarii*, o los *decani*...

En esta disposición de León vemos el intento por parte del emperador de controlar los *sacra scrinia* estableciendo que para la admisión en cualquier milicia civil deben ser emitidas, bajo la responsabilidad de los jefes de cada *officium*, *probatoriae* auténticas que contengan, además de la firma imperial, la firmas de los funcionarios bajo cuya jurisdicción estarán los destinatarios de las cartas de

emperador (<<*sacris probatoriis manu nostra subscriptis*>>), como se recoge en C. J. 12.59(60).9 (a. 470?)⁵²⁶; la *probatoria* era posteriormente registrada en la secretaría de las memorias (C. J. 12.20.3.2: <<*Nemo autem sine divali probatoria, quam codices in sacro nostro scrinio memoriae ...*>>), además, las copias de las probatorias auténticas, que debían ir firmadas también por los funcionarios bajo cuya jurisdicción estarían los destinatarios de las cartas de nombramiento, debían ser conservadas en las oficinas correspondientes (<<*apud singula quoque officia, prout convenit*>>: C. J. 12.59(60).10 pr.)⁵²⁷. En caso de que algún funcionario hubiese falsificado la firma imperial se le aplicaba lo establecido en CTh. 9.35.1 (a. 369) [=C. J. 9.8.4] siendo castigado con la pérdida de todos sus privilegios y además quedando sometido a tortura como reo de *crimen maiestatis* (<<*...li quoque citra consultationis modum subiciantur quaestioni, qui evidentibus argumentis subscriptiones nostras finxisse prodentur, qua in re ne palatini quidem nominis adsumptionem huius esse volumus quaestionis exortem*>>).

nombramiento. Véase SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, *op. cit.*, pp. 378-381.

⁵²⁶Se sabe que todos los nombramientos de los más altos funcionarios hasta el grado de los gobernadores provinciales y de los oficiales hasta el tribuno debían ir firmados por el emperador en persona.

⁵²⁷SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, *op. cit.*, pp. 376-378.

La entrada en la milicia burlando alguno de estos requisitos era castigada no sólo con la pérdida del cargo sino también con multas y sanciones penales, como vemos en CTh. 8.7.7 (a. 358) [=C. J. 12.57(58).2], en donde los emperadores Constancio y Constante se dirigen a Tauro, prefecto del pretorio, estableciendo que los gobernadores provinciales no pueden aprobar o promocionar (*probare vel provehere*) a nadie *sine sacra probatoria*, con la única excepción de los oficiales provinciales encargados de la posta pública, y esto último por razones de interés general; en CTh. 8.7.21 [=C. J. 12.59(60).6] (a. 426) se castiga con una multa de veinte libras de oro al procónsul de Asia, al *comes* de Oriente, al prefecto Augustal y a los vicarios que admitiesen en sus oficios a alguien sin la debida probatoria⁵²⁸; en C. J. 12.20.3.2, el emperador León I dice <<que ningún *agens in rebus* reciba los estipendios ni privilegios sin que tenga la *probatoria* imperial que debe recibir para ser registrada en la secretaría de memorias>>⁵²⁹; en C. J. 12.59(60).9 (a. 470?) el mismo emperador se dirige a Hilario, *magister officiorum*, y establece para los que no hubiesen obtenido legítimamente sus credenciales no sólo la pérdida de la milicia y la confiscación de

⁵²⁸NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 67.

⁵²⁹C. J. 12.59(60).10.2: *...omnes, qui sive in hoc sacro palatio nostro, sive in aliis quibuscumque officiis deinceps militare cupiunt ... nisi praecedentibus sacris probatoriis, militiae sociari...*

SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, op. cit., pp. 361-362.

todos sus bienes sino también la pena de proscripción (exilio) si las credenciales (*probatoriae*) de los oficiales del gobernador provincial no hubiesen sido auténticas y suscritas por el emperador <<de suerte que ningún dolo o fraude pueda introducirse en ellas>>; también en C. J. 12.59(60).10.2, León amenaza con la pérdida de la milicia, así como la de todos sus bienes, y con la *poena capitis* a aquellos que *coniventia vel negligentia* hubiesen entrado a prestar algún servicio en el palacio imperial o en cualquier otro oficio sin haber obtenido la probatoria conforme a lo establecido en la ley, considerándolos responsables de un delito de falsedad (<<...utpote criminis falsitatis obnoxios semet esse plectendos...>>)⁵³⁰.

Por último, en C. J. 1.31.5 pr. (a. 527) los emperadores Justino y Justiniano, dirigiéndose al *magister officiorum* Taciano, establecen que desde ese momento no se admita a nadie en el cuerpo de la Guardia de Palacio sin la credencial correspondiente, y que en caso contrario será privado de la *militia* y condenado al pago de una multa de veinte libras de oro.

⁵³⁰ SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, op. cit., pp. 376-

B) EL JURAMENTO DE ENTRADA EN EL CARGO COMO GARANTÍA MORAL DE “BUEN GOBIERNO”.

Comenzamos haciendo referencia al juramento de oficio que desde el siglo V d. C. debían prestar los funcionarios de las diferentes Administraciones antes de su entrada en el cargo (investidura)⁵³¹: <<*iuratur in militiae sacramenta, ut necessitates publicae procurentur*>>, se dice en Nov. Teod. 7.1.

Este juramento de fidelidad, que aparece como una garantía de tipo moral, tiene su antecedente en época republicana en donde los magistrados una vez elegidos debían jurar observar las leyes y administrar de forma imparcial la justicia (Liv., 31.50.7: <<*C. Valerius Flaccus, quem praesentem creaverant, quia flamen Dialis erat iurare in leges non poterat*>>); la omisión de dicho juramento implicaba la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la magistratura más allá de

381.

⁵³¹ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 22.

cinco días (Liv., 31.50.7: <<*magistratum autem plus quinque dies, nisi qui iurasset in leges, non licebat gerere*>>)⁵³².

En el ámbito municipal mencionamos el capítulo 26 de la *lex Irnitana* en donde se exigía a todo duoviro, edil o cuestor, un juramento dentro de los cinco días siguientes a su entrada en el cargo, imponiéndose una multa de diez mil sestercios al magistrado que no hubiese prestado el mencionado juramento, pero sin que ello impidiese el desempeño de la magistratura; no obstante, en el capítulo 59 de esta ley no se preveía ninguna multa en caso de que el candidato elegido en los comicios no hubiese prestado el juramento sino que la omisión del mismo sólo llevaba consigo el que no fuese proclamado magistrado⁵³³.

⁵³²El *iusiurandum in leges* era la primera obligación del magistrado romano; debía realizarse a la entrada en el cargo, pudiéndose, no obstante, llevar a cabo dentro de los cinco días siguientes a la asunción de las funciones (= *magistratum occipere* o *inire*).

DUMAS A, *Le serment de fidélité et la conception du pouvoir du I au IX siècle*, en *Revue historique de droit français et étranger* (RHD), 10, Paris, 1931, pp. 32 ss.; LUZATTO G. I., *Sull' <<iusiurandum in legem>> dei magistrati e senatori romani*, en *Scritti in memoria di U. Borsi*, Padova, 1955, pp. 23 ss.; LICANDRO O., *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999, pp. 39 ss.; MILAZZO F., *Iurare in leges e altri giuramenti magistratuali nel Panegirico pliniano*, en *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly*, Köln-Wien, 2002, pp. 511 ss.; MILAZZO F., *Giurare 'in legem' e 'legi parere' nel de inventione*, en *Studi per G. Nicosia*, V, Milano, 2007, pp. 427 ss.; RAMPAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi...*, op. cit., pp. 171-172.

⁵³³Cfr. *Lex Salpens.* c. 26 [CIL. II 1963]: *quique Ilviri aediles quaestoresve postea ex hac lege creati erunt, eorum quisque in diebus*

En relación con el juramento de entrada en el cargo podemos citar, ya en época postclásica, una constitución de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III recogida en C. J. 9.27.6 pr. (a. 439) en la que se exigía a los nombrados gobernadores de provincias que prestasen un juramento en virtud del cual prometían no haber dado nada para obtener el nombramiento, ni a título de donación, venta o por cualquier otro contrato, ni directamente ni por persona interpuesta: << ... *iurati inter gesta depromant se pro administrationibus sortiendis neque dedisse quippiam neque daturos umquam postmodum fore, sive per se sive per interpositam in fraudem legis sacramentique personam, aut donationis, venditionisve titulo aut alio velamento cuiuscumque contractus ...*>>; además de esto, el gobernador se comprometía en su juramento a no recibir nada más que su salario en virtud de los ``favores`` prestados durante su administración, no sólo durante el tiempo que desempeñase su cargo sino también después de haberlo abandonado: <<*exceptis salariis nihil penitus tam in administratione*

quinque proximis, ex quo Ilvir aedilis quaestor esse coeperit, priusquam decuriones conscriptive habeantur, iuranto pro contione. LAMBERTI F., <<*Tabulae Irnitanae*>>. *Municipalità e <ius romanorum>*, op. cit., p. 76; D`ORS X., *Regulación y control de la actividad pública en la ``lex Flavia Municipalis``*, en *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 2, Madrid, 1992, p. 89.

Asimismo, en el cap. 73 de la *lex Irnitana*, referente a los escribas que asisten a los *dunviros*, se establece que escribirán con buena fe los registros públicos de sus municipios y que no consignarán en ellos algo falso conscientemente y con dolo malo. Concretamente, se dice en la ley: <<el que no jure de esa forma no será escriba>>. MENTXACA R.,

positos quam post depositum officium ...>>. La ley considera que la interposición de persona o el recurso a ventas simuladas o a donaciones para obtener un cargo es realizado *in fraudem legis sacramentique*⁵³⁴, y la pena que se establece por la inobservancia de esta norma era del cuádruplo de la suma entregada, la cual recaería no sólo contra el que recibió el dinero sino también contra el que lo dio.

Justiniano nos ha dejado en un documento anexo a la Novela 8 (a. 535) testimonio de la fórmula del *iusiurandum quod praestatur ab his qui administrationes accipiunt*, el cual comenzaba con las siguientes palabras⁵³⁵: <<*Iuro per Deum omnipotentem, et Filium eius unigenitum, dominum nostrum Iesum Christum...*>>; después de la invocación a Dios omnipotente, a la Virgen María, a los cuatro Evangelios y a los arcángeles Miguel y Gabriel, el funcionario juraba sumisión al emperador Justiniano y a su esposa Teodora, y prometía fidelidad a la Iglesia Católica; por otro lado, también juraba no haber obtenido el cargo con

Sobre el capítulo 73 de la “*lex Irnitana*”, en LABEO, 38.1, Napoli, 1992, p. 66.

⁵³⁴FASCIONE L., *Osservazioni sull'uso del concetto di "fraus legi" nella costituzioni imperiali*, en Studi Senesi, 95, fasc. 1, Siena, 1983, p. 66.

⁵³⁵La fórmula trinitaria se encuentra también en el juramento militar que recoge Vegetio (*Epitome rei militaris*, II, 5): <<*iurant autem per Deum et Christum et sanctum Spiritum et per maiestatem imperatoris...*>>. En este sentido, BIONDI B. (*Il diritto romano cristiano III*, Milano, 1954.p. 408) identifica el juramento justiniano con el “juramento cristiano”. Véase también, SPRUIT J. E., *L' influence de*

suffragio o concusión y ``comportarse con pureza respecto de los súbditos, contentándose con las annonas que le están señaladas por el Fisco`` (<<... *sed sicut sine suffragio percepi cingulum, sic etiam pure me exhibeo circa subiectos piissimorum nostrorum dominorum, contentus his, quae statutae sunt mihi de fisco annonis*>>)⁵³⁶. En esta Novela Justiniano unifica el llamado juramento de fidelidad al emperador con el juramento de buen gobierno⁵³⁷. CALORE⁵³⁸ considera que nos encontramos en este caso ante un protocolo rígidamente dispuesto por una ley imperial y que confería al juramento el significado de una verdadera ceremonia de investidura⁵³⁹.

Théodora sur la législation de Justinien, RIDA 24, Bruxelles, 1977, p. 401.

⁵³⁶ZUCCOTTI F., *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico*, Milano, 2000, pp.100-101.

⁵³⁷CALORE A., ``Iuro per deum omnipotentem...``: *il giuramento dei funzionari imperiali all'epoca di Giustiniano*, en *Seminari di storia e di diritto II*, <<Studi sul giuramento nel mondo antico>>, Milano, 1998, pp. 116-117.

Se hace referencia al juramento de los funcionarios también en las siguientes Novelas de Justiniano: Nov. 15.1.1; Nov. 24.1; Nov. 25.2 pr, Nov. 26.2 pr; Nov. 28.5 pr; Nov. 29.5; Nov. 102.1.

⁵³⁸CALORE A., ``Iuro per Deum omnipotentem...``, *op. cit.*, p. 119.

⁵³⁹La ausencia de juramento antes de la entrada en el cargo es contemplada en Partidas II.9.26. GREGORIO LÓPEZ (gl. 5 y 6 a P. II.9.26) comenta que el funcionario que no preste su juramento debe ser expulsado y castigado; además señala que en estos casos no será posible la posesión del oficio, para lo que se apoya en la autoridad de BALDO DE UBALDIS: <<*Qui si entrarent officium, non praestito isto iuramento? Dic quod sunt expellendi, ut puniendi, quia malo ordine intraverunt... neque possunt esse in canonica possessione officii*>>.

De acuerdo con lo anterior, vemos en Nov. 8.7 que los altos funcionarios presentes en Constantinopla en el momento de su investidura debían prestar el juramento ante Justiniano, y solamente en caso de ausencia del emperador, ante el prefecto del pretorio, o bien ante otros funcionarios ilustres como el *comes sacrarum largitionum*, el *quaestor sacri palatii* o el *comes rei privatae*, siendo en todo caso indispensable la colaboración del *chartularius sacri cubiculi*⁵⁴⁰. Se establece también en el capítulo 14 de esta ley que a los funcionarios que, viviendo en provincias, se les hubiese enviado las credenciales del cargo (*cinguli codicilli*), deberán prestar el juramento ante el obispo de la ciudad y ante los próceres (*primates*) de la misma. De igual forma el funcionario prestará juramento de que <<él no ha dado absolutamente ninguna cosa ni con ocasión de sufragio o de patrocinio>>⁵⁴¹. Asimismo,

Véase GARCÍA MARÍN, J. M., *El oficio público en Castilla...*, op. cit., p. 225; LALÍNDE ABADÍA J., *Los medios de gestión...*, op. cit., p. 114, nt. 562.

⁵⁴⁰ *Sic igitur a nobis cingulis discretis convenit eum, qui ic acceperit administrationem, cum dei memoria coram nobis, aut si non vacat, coram tua celsitudine, et qui tuam rexerint sedem, et qui semper fuerit gloriosissimo comite sacrarum nostrarum largitionum et gloriosissimo quaestore sacri nostri palatii et gloriosissimo comite ubique sacrarum nostrarum privatarum, praesente quoque et per tempora magnificentissimo chartulario sacrarum nostrarum cubiculorum ...*

⁵⁴¹ Igualmente en *Eisagoge* 7.2 y en *Basílicos* 6.3.6 se recoge la misma obligación. Reproducimos la traducción del texto griego de la *Eisagoge*: <<Decretamos que los gobernadores, en presencia del prefecto de nuestra ciudad, del conde de nuestras sagradas finanzas, del glorioso cuestor de nuestro palacio, del gloriosísimo conde de todos nuestros sagrados bienes privados, y en presencia también del cartulario de nuestras sagradas estancias, suscriban de su puño y letra

el *Authenticum* ha restituido como apéndice de la Novela 8 un *iussum* de Justiniano dirigido a *Dominicus*, prefecto del pretorio de Iliria, que establecía que quienes fuesen a asumir el cargo de gobernador provincial o de *defensor plebis* debían pronunciar el juramento en presencia del obispo, del prefecto del pretorio, de los curiales y de los *officiales* de la prefectura⁵⁴².

En caso de que el funcionario no observase las promesas hechas en el juramento quedaría sujeto no sólo al “*terribilis iudicium*” de Dios sino también a las “penas laicas” como podían ser la pérdida del cargo y de sus bienes u otros castigos como el destierro o penas corporales⁵⁴³.

que no han ofrecido nada a nadie de ninguna forma, ni han prometido dar nada, ni han anunciado que darán su patrocinio a nadie, ni han accedido a enviar nada desde la provincia ni a las otras personas que tienen cargos (...). Debe saberse que si algunas personas se atrevieran a recibir de los que acceden a los mencionados cargos algo más allá de lo que nosotros les fijamos de acuerdo con las costumbres existentes, que el castigo que recaerá sobre ellos no será pequeño, sino que los magistrados de mayor rango que se hayan atrevido a recibir algo de los que acceden a los mencionados cargos o que permiten que en su propia administración se haga algo similar a esto y no obedecieran lo que se les ordena, no sólo devolverán el cuádruplo de todo lo que tomaron, sino que nuestra gran cólera recaerá sobre ellos y correrán el riesgo de perder su cargo. Y las personas que están en su entorno y los funcionarios que les obedecieron, si intentaran recibir algo más de lo que nosotros les hemos concedido, se verán afectadas por las mismas penas, devolverán hasta el cuádruplo y perderán además sus bienes y el cingulo, además de padecer los castigos adecuados a sus faltas>> (trad. esp., SIGNES J. y ANDRÉS SANTOS F. J., *La introducción al Derecho (Eisagoge) del patriarca Focio*, Madrid, 2007, pp. 303-304).

⁵⁴² *Scriptum est exemplar huiusmodi Dominico ...*

⁵⁴³ Nov. 8.7 y anexo.

Este juramento de fidelidad que prestaba el funcionario antes de recibir su investidura y que será renovado ante el advenimiento de cada nuevo emperador, persiste hasta el final del Imperio bizantino; así vemos que en Novela 97 de León VI (886-912) se presenta el juramento como una garantía que debían prestar todos los funcionarios en el momento de su nombramiento: <<... *ut, qui magistratum ineant, et litem de re dubia intrent, iureiurando fidem facint, se veritatem mendacio praelaturos, nec ullo modo a recta via aberrantes, in obliquam fraudis semitam concessuros esse*>>⁵⁴⁴.

En Nov. 8.8.1 se añade lo siguiente: <<... y si se probara o que da dinero para obtener aquel destino en la Administración, o que lo recibe por virtud del cargo en la Administración (porque ambas cosas son igualmente punibles) sepa que sufrirá la confiscación y el destierro y azotes y suplicios corporales. Y también sujetaremos a las más grandes penas al mismo que de él lo hubiere recibido, según antes dijimos; porque exigimos que los gobernadores provinciales tengan manos limpias para cuidar nosotros de los contribuyentes...>> (= *Eisagoge* 7.4 ii; = *Bas.* 6.3.7.1).

A este respecto, pone de relieve DE ROBERTIS F., *La funzione della pena nel diritto romano*, en *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli, 1949, pp. 186, 190-194, que la función preventiva de la pena, que aparece como dominante o casi exclusiva en las constituciones del Bajo Imperio (así, en C. J. 9.27.1, en materia de *crimen repetundarum*, se afirma el propósito intimidatorio de la pena establecida cuando se dice <<*ut unius poena metus possit esse multorum*>>), se recoge en Nov. 8.8 con las palabras “*ne ultra agere praesumat ad exemplum respiciens*”.

⁵⁴⁴CALORE A., “*Iuro per deum omnipotentem...*”, *op. cit.*, p. 107; SVORONOS N., *Le serment de fidélité a l'empereur byzantin et sa signification constitutionale*, en *Revue des études byzantines*, IX, Paris, 1951, pp. 107 ss.

Añadimos que la expresión <<juramento político>> aparece por primera vez en un tratado de *Moschopoulos* escrito en el siglo XIV; vid.,

C) LA EXIGENCIA DE FIANZA COMO GARANTÍA ECONÓMICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL FUNCIONARIO.

Además de la garantía moral que representaba el juramento, algunos funcionarios tenían la obligación de dar una garantía económica del cumplimiento de su función mediante la entrega de una fianza⁵⁴⁵. En este sentido, encontramos en época postclásica numerosas fuentes que aluden a algún tipo de garantía o caución que debía prestar el futuro funcionario como requisito de entrada en el cargo: por ejemplo, en CTh. 1.32.4 (a. 379) se establece que los oficiales palatinos del *comes sacrarum largitionum* <<procuren estar vigilantes de que quien desempeña una *administratio* que necesita fianza, de ninguna manera

PRODI P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale*, Bologna, 1992, p. 61, citando a SVORONOS N., *Le serment de fidélité...*, *op. cit.*, pp. 129-136.

⁵⁴⁵El requisito de presentar garantes antes de la entrada en el cargo se exigía también en el Egipto romano como recogen numerosos papiros: Oxy. 2135 (s. II); Oxy. 82 (s. III); Oxy. 972 (s. III); PSI. 86 (a. 375). En caso de que el funcionario no presentase fiadores debía garantizar su función con sus propios bienes (Oxy. 1642, s. III). KUNDEREWICZ C., *Evolution historique de la responsabilité des*

sea escuchado, cuando ofrece como fiador a un decurión>>; también en CTh. 12.6.25 (a. 399) se establece que para acceder al cargo de *praepositus* o de *susceptor* debe haberse probado previamente la suficiencia económica del candidato y de su garante; de igual forma en una constitución de Teodosio II y Valentiniano III recogida en CTh. 10.20.16, a. 426 (= C. J. 11.8(7).14) se establece que a los *praepositi thesaurorum* y a otros funcionarios subalternos dependientes del *comes sacrarum largitionum* <<no se les permita entrar a administrar cosa alguna del sacro erario antes que la administración de los mismos sea robustecida con fianzas (*satisfactionibus*) convenientes ...>>⁵⁴⁶.

fonctionnaires dans l’Egypte ptolémaïque, romaine et byzantine, RIDA, 4, Bruxelles, 1957, p. 185.

⁵⁴⁶*Privatae vel linteariae vestis magistri, thesaurorum praepositi, vel baphiorum ac textrinorum procuratores ceterique, quibus huiusmodi sollicitudo committitur, non ante ad rem sacri aerarii procurandam permittantur accedere, quam satisfactionibus dignis eorum administratio roboretur.*

Justiniano exigirá en Nov. 134.2 *in fine* a los gobernadores provinciales que presten caución ante el prefecto del pretorio, el *comes sacrarum largitionum* y el *comes rei privatae*, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de igual forma, en la Nov. 149 de Tiberio II (a. 569) se establecía que los gobernadores provinciales presentasen caución al Fisco (<<*fisco cautionem praestantes*>>).

Por otro lado, podemos también mencionar diversas fuentes en las que se contiene la obligación que tenían los magistrados municipales de prestar garantías antes del desempeño de su cargo⁵⁴⁷: los candidatos, por ejemplo, al duovirato y a la cuestura, debían dar *praedes* o *praedia* en garantía de una buena administración (*rem publicam salvam fore*)⁵⁴⁸ como vemos en D. 27.8.1 pr. (Ulp., 36 ed.), D. 50.1.11

⁵⁴⁷ Al igual que los magistrados municipales, los tutores debían prestar una fianza antes de entrar en la administración de los bienes del pupilo (*cautio rem pupilli salvam fore*) como se establece en D. 26.1.6.1 (Ulp., 38 Sab.): *non aliter ei gerere permittendum, quam si rem salvam fore caverit*; también en I. J. 1.24 (<<*De satisfactione tutorum et curatorum*>>). GOMÉZ-IGLESIAS A., *Régimen procesal de la caución tutelar*, SDHI, 58, Roma, 1992, pp. 43 ss.

⁵⁴⁸ Los magistrados municipales que habían desempeñado honestamente su cargo solían ser objeto de homenaje por parte del *ordo* de los decuriones: era habitual levantar estatuas en cuyos pedestales se hacía alusión a los méritos del homenajeado, y entre las fórmulas utilizadas como reconocimiento de tales méritos era frecuente la expresión <<*ob rem publicam bene administratam*>>. RODRÍGUEZ NEILA J. F., *Elogio público de un magistrado municipal romano*, en Habis, 18-19, Sevilla, 1987-1988, p. 425, considera que ‘‘lo que se valoraba para homenajear a un ciudadano con dicha fórmula era el ejercicio de la *honestas*, esto es, que hubiera llevado a cabo una gestión

(Pap., 2 *quaest.*), D. 50.1.2.5 (Ulp., 1 *disput.*)⁵⁴⁹ y D. 50.1.38.6 (Pap., *lust. 2 de const.*). También en este último fragmento se contiene un rescripto de los emperadores Antonino Pío y Vero en el que se establece la obligación de los magistrados municipales de dar caución⁵⁵⁰: <<*non minus eos, qui compulsi magistratu funguntur, cavere*

honesta de la *res publica* no malversando los fondos públicos`. Véase también, ANDREU PINTADO J., *Munificencia pública en la provincia Lusitania (siglos I-IV d. C.)*, *op. cit.*, pp. 119-122.

⁵⁴⁹ LOVATO A., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 139, nt. 95; MANTOVANI D., *Il iudicium pecuniae communis...*, *op. cit.*, p. 328.

⁵⁵⁰ A propósito de los magistrados municipales nos dice D'ORS X., *Regulación y control de la actividad pública en la 'lex Flavia Municipalis'*, *op. cit.*, p. 87, que <<los que pretenden ser elegidos como duumviros o cuestores deben dar garantías acerca de la administración de los fondos públicos del municipio. (...). Estas garantías son de dos tipos: a) la presentación de garantes, al común de los munícipes (...); y b) en el caso de que estos fiadores sean considerados insuficientes, deberán los candidatos hipotecar los inmuebles que el anterior magistrado considere oportuno (...). Sólo después de prestar estas garantías, se podrá proceder a la votación. En cambio, el que se niegue a dar, o no pueda hacerlo, las mencionadas garantías, no será tenido en cuenta como candidato a la elección>>.

Esta obligación se recoge en otras leyes municipales: así, en *Irn.* 60 se dice que el candidato a la magistratura debe dar *praedes* <<*in commune municipium (...) pecuniam communem eorum, quam in honore suo tractaverit, salvam is fore*>>; también en *Urs.* 81; y en *Tarent.* II. 10-11: <<*quae pecunia publica sacra religiosa eius municipi ad se in suo magistratu pervenerit, eam pecuniam municipio Tarentino salvam recte esse futuram*>>. MANTOVANI D., *Il iudicium pecuniae communis...*, *op. cit.*, pp. 325-326; GNOLI F., *Peculato e responsabilità dei magistrati nella <<lex municipii Tarentini>>*, en Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo dell'Oro, Padova, 2001, pp. 2 y 13; TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa...*, *op. cit.*, pp. 312-313.

*debere, quam qui sponte officium agnoverunt>>*⁵⁵¹. Asimismo, en D. 50.1.17.15 (Pap., 1 *resp.*) se dispone que: <<*fideiussores, qui salvam rempublicam fore responderunt, et qui magistratus suo periculo nominant, poenalibus actionibus non adstringuntur, in quas inciderunt hi, pro quibus intervenerunt; eos enim damnum reipublicae praestare satis est, quod promitti videtur>>*⁵⁵². Además, debe tenerse en cuenta la regla general establecida en I. J. 3.20.2, según la cual <<*fideiussor non tantum ipse obligatur, sed etiam heredem obligatum relinquit>>*.

⁵⁵¹ <<... no menos deben dar caución los que compelidos desempeñan la magistratura, que los que espontáneamente aceptaron el cargo>>.

TRISCIUOGLIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa...*, op. cit., p. 311, nos refiere que el sistema de garantías gira en torno a la promesa estipulatoria (*cautio*) exigida obligatoriamente al administrador público con la cual se asegura que “el patrimonio de la comunidad será preservado” (*rem publicam salvam fore*) durante la gestión del cargo. Añade el Autor que el administrador público se responsabiliza “por contrato” (tal es la *cautio rem publicam salvam fore*, identificable con la *stipulatio*), frente a la colectividad, de la correcta gestión de los bienes públicos.

⁵⁵² <<Los fiadores <de un magistrado municipal> que respondieron que quedaría a salvo la cosa pública, y los que a su propio riesgo nombraron magistrados, no están sujetos a las acciones penales en que incurrieron aquellos por quienes fueron fiadores; porque es suficiente que ellos respondan a la ciudad del daño por el que parece que se promete>>.

En este sentido en D. 46.1.68 pr. (Paul., 3 *decr.*) se alude a una constitución de Septimio Severo en la que se dispone que: <<los fiadores de los magistrados no deben ser demandados a causa de una pena o multa que no hubieran especialmente prometido>>.

Igualmente en C. J. 11.35(34).1⁵⁵³ se dice que los garantes (*fideiussores*) de los magistrados respondían (*ad reipublicae administrationem pertinent teneri*) de la gestión llevada a cabo por dichos magistrados, pero no penalmente de los delitos o faltas cometidos por estos en su gestión (<<*non in his quae ob culpam vel delictum eis poenae nomine inrogentur, tam mihi quam divo Severo patri meo placuit*>>)⁵⁵⁴. Por tanto, en virtud del principio romano de la personalidad de la pena, los garantes no respondían penalmente por lo que un funcionario dejase de pagar a un tercero en nombre de la ciudad, sino sólo del daño causado a ésta⁵⁵⁵.

Por último, vemos que en D. 50.1.38.2 (Pap. lust., 2 *de const.*) y en D. 27.8.6 (Ulp., 1 *ed.*) se establece que los fiadores respondían sólo después de los funcionarios municipales y de sus herederos.

A continuación recogemos algunos casos planteados en el Digesto relacionados con esta materia: en D. 50.1.2 pr. (Ulp., 1 *disput.*) se hace referencia al nombramiento como decurión de un *filiusfamilias* con el consentimiento del padre, y se dispone que este último estará sujeto a todas las cargas que se le impongan a su hijo como si fuera

⁵⁵³C. J. 11.35(34): <<*De periculo eorum, qui pro magistratibus intervenerunt*>>.

⁵⁵⁴LONGO G, *Delictum e crimen*, Milano, 1976, pp. 156-157.

⁵⁵⁵Vid. D. 27.8.4 (Ulp., 3 *disput.*) en relación con la responsabilidad de los herederos de los magistrados.

fiador de éste (*quasi fideiussor pro filio*)⁵⁵⁶, añadiéndose al final del fragmento la siguiente regla jurídica: <<el padre responderá como fiador de todos los actos del hijo en la gestión pública>>⁵⁵⁷; de igual forma, en C. J. 10.62(60).1 Alejandro Severo y Antonino Caracalla recalcan que el padre que ha prestado su consentimiento a su hijo emancipado no quedará obligado por los actos de este último, sin embargo sí quedará obligado en caso de que estuviese bajo su potestad⁵⁵⁸.

Por último, en D. 50.8.5(3,1).2(3,3) (Pap., 1 *resp.*) Papiniano nos plantea el caso contrario: el del hijo que ha de prestar caución por la gestión que va a realizar su padre considerando que <<no es necesario que se obligue a un hijo a dar caución por su padre al ser éste

⁵⁵⁶SANTALUCIA B., *I <<libri opinionum>> di Ulpiano*, vol. II, Milano, 1971, pp. 118.

⁵⁵⁷<<*Proinde, quidquid in republica filius gessit, pater ut fideiussor praestabit*>>. En el fragmento se dice que se considera que el padre prestó su consentimiento para el decurionato del hijo si estando presente no se opuso al nombramiento.

Ulpiano en el número 1 del mismo fragmento nos dice: <<debemos considerar como <actos en la gestión pública> la administración de los fondos y las órdenes de gastos>>. Vid. D. 50.1.21.1-7.

⁵⁵⁸D'ORS A., *De nuevo sobre los estratos de las Pauli Sententiae*, BIDR, 37-38, Milano, 1995-1996, señala que en D. 50.1.2 pr. y en C. J. 10.62(60).1-2 se afirma que el padre responde por su hijo si no se ha opuesto a su nombramiento. El Autor (pp. 7-8) pone de relieve que aquí el silencio del padre se interpreta como consentimiento y que sólo podía evitar su responsabilidad si declaraba su oposición en la misma curia. Sin embargo, en *Paul. Sent.* 1,13 (conservado en D. 50.2.7.3; *Paul.*, 1 *sent.*) se dice que puede declarar su disentimiento

nombrado administrador de la ciudad <*curator reipublicae*>, y no hace diferencia el hecho de que su padre, después de emancipar a su hijo y antes de ser éste nombrado administrador de la ciudad, le hubiese cedido en donación una parte de sus bienes>>.

ante el gobernador (*apud acta praesidis*), ante la curia, o de cualquier otro modo.

D) LA CEREMONIA DE INVESTIDURA Y LA INSCRIPCIÓN EN LA MATRICULA DEL FUNCIONARIO. CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD.

Una vez prestado el juramento el siguiente paso que debía realizar el designado para ocupar un puesto en la Administración era la toma de posesión mediante la investidura en el cargo⁵⁵⁹, la cual tenía

⁵⁵⁹El término “investidura” no aparece recogido en las fuentes romanas sino que surge por primera vez en el lenguaje jurídico de la Edad Media; así, GREGORIO LÓPEZ, siguiendo a BALDO DE UBALDIS, nos dice: <<*Nota de isto nomine investidura, quod antiquitatus non fuit in uso, neque in legibus Digestorum invenitur, ut etiam dicit Bald...*>>; mientras que la expresión “toma de posesión” era corriente ya en el siglo XV y es la que se utiliza normalmente hoy en día. Así, una vez que el oficial había prestado la garantía se procedía a la “investidura” (P. II,9,26). Añade GREGORIO LÓPEZ que dicha “investidura” es doble, real y verbal, señalando como forma de la misma la consistente en la entrega de un anillo: <<*Nota de isto nomine investidura investitura, quod antiquitus non fuit in uso, neque in legibus Digestorum invenitur, ut etiam dicit Bald... et est duplex investitura, ssio in incorporalibus, veluti iurisdictione...*>>. La toma de posesión, que debía realizarse personalmente, es lo que atribuye el oficio y determina el inicio de todos los derechos y deberes del funcionario. También LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., p. 116, nos refiere que “en virtud de su carácter de posesión da derecho a la protección interdictal, que la doctrina castellana a través del tratadista Melchor Peláez de Meres (s. XVII), niega únicamente al oficial nombrado *ad beneplacitum*, quien no puede intentar el interdicto *uti possidetis* porque no tiene si no ministerio desnudo y administración en nombre del señor”.

lugar con la entrega al seleccionado del título de nombramiento. La toma de posesión, diríamos hoy en día, facultaba al nuevo funcionario para el ejercicio del cargo y determinaba también el inicio de todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

Las ceremonias de investidura en el Bajo Imperio fueron elaboradas en virtud de procedimientos y formas de ceremonial ya existentes y utilizados desde la época del Principado y no -como ha destacado MAROTTA- sobre la base de modelos orientales⁵⁶⁰, si bien, no será hasta la primera mitad del siglo V d. C. cuando quede fijado un cuadro ceremonial de forma más precisa⁵⁶¹.

Las ceremonias tenían lugar en el *Palatium* -un *officium admissionis* existía ya en época de Nerón según testimonio de Suetonio,

⁵⁶⁰ MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina...*, op. cit, p. 187, nt. 281; p. 164, nt. 137.

Diversas fuentes literarias como Plin., *Paneg.*, 67,8; Aurel. Vict., 13.9; Sidon. Apol., *Carm.* 5,558-561, testimonian la existencia en este periodo de un preciso ritual de investidura establecido para los prefectos del pretorio.

⁵⁶¹ En el año 328 se creó un cuerpo ceremonial organizado: los llamados *silentiarii*. El mismo emperador Anastasio I fue *decurio* de los *silentiarii* antes de su acceso al trono. BOAK A. E. R., *Imperial Coronation Ceremonies of the Fifth and Sixth Centuries*, en Harvard Studies in Classical Philology, vol. 30, 1919, pp. 37 ss.; CAPIZZI C., *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma, 1969, p. 150; ACERBI S., *La figura del "silentarius" en la corte bizantina*, en Ilu. Revista de ciencias de las religiones, n. 19, Madrid, 2007, pp. 209-221.

divus Vesp. 14-, y sabemos por Pedro Patricio⁵⁶² que en tiempos de Justiniano, el emperador consignaba los codicilos en el *consistorium* cuando se trataba de altas *dignitates* presentes en Constantinopla (Const. Porfirog., *de caer.* 1.84: *Observanda in promotione comitis admissionum*), mientras que cuando el funcionario elegido estaba en su lugar de residencia -lo que era habitual- la investidura se hacía indirectamente, como ocurrió con *Hypatius* que recibió en Antioquía, en el verano del año 378, las insignias de prefecto de la ciudad de Roma (Lib., *Or.*, 1, 179)⁵⁶³.

Conocemos algunos elementos de la etiqueta de la corte imperial que aparecían en el acto de nombramiento de los altos funcionarios como eran, por ejemplo, el *ritus manus velatae*, que nos ha transmitido Amiano Marcelino, por el que el funcionario recibía del emperador el decreto de nombramiento con las manos cubiertas por su túnica (16.5.11): <<*cum inducti essent iussu eius quadam sollemnitate agentes in rebus in consistorium, ut aurum acciperent inter alios, quidam ex*

⁵⁶²*Petrus Patricius* (Pedro el Patricio, 500-565), desempeñó el cargo de *magister officiorum* con Justiniano durante veintiséis años, y en el año 548 publicó el manuscrito titulado <<Sobre la constitución política>> que ha sido conservado en parte gracias a la obra de Constantino VII Porfirogéneta (905-959): <<*De caeremoniis aulae byzantinae*>>, editada en el siglo X. Sobre esta última, véase la edición de J. J. REISKE (Bonn, 1829) y el libro de VOGT A., *Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies*, Paris, 1935. Acerca del ceremonial en Bizancio, MAC CORMACK S. G., *Art and Ceremony in Late Antiquity...*, op. cit., 1981.

⁵⁶³CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 192.

eorum consortio, non (ut moris est) pansa chlamyde, sed utraque manu cavata suscepit. Et imperator "rapere" inquit "non accipere sciunt agentes in rebus">>; o las adclamaciones⁵⁶⁴ que eran rituales pronunciados por los presentes después de la investidura del funcionario elegido y que formaban parte de las ceremonias romanas desde época clásica: <<Vincas, valeas multis annis imperes>> o <<Vivas, floreas, vincas, multis...>> (S.H.A., Alexand., 10.8)⁵⁶⁵.

Un ejemplo iconográfico de como sería una ceremonia de investidura de un funcionario en el siglo IV lo tenemos en el *missorium* de Teodosio I (CIL II, 483)⁵⁶⁶, que consiste en una bandeja circular

⁵⁶⁴Luciano de Samosata (*pro lapsu inter salutandum*, 13), s. II d C., recoge la fórmula tardo-republicana de felicitación (*formula valetudinis*) y el saludo <<vale>> (o <<valeas>>). Como también ha puesto de manifiesto MAROTTA V., *Liturgia del potere...*, op. cit., pp. 152, 158, el término <<vale>> aparece en el siglo II d. C. en las ceremonias de despedida (partida hacia su provincia: *profectio*) de un magistrado, en el momento de la *salutatio ad portam*: Fest. 276 (Lindsay), v. *Praetor ad portam, nunc salutatur is qui in provinciam pro praetore aut pro consule exit*.

⁵⁶⁵En una constitución de Teodosio I recogida en CTh. 6.9.2 (a. 380) se menciona la existencia de una fórmula (*adclamaciones excipiantur solita*) para saludar y aclamar en determinadas ceremonias a los más altos funcionarios. Y el díptico ebúrneo de Probianio (a. 402 d. C.) recogía la invocación <<Floreas...>> en las aclamaciones de las ceremonias de investidura (MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina...*, op. cit., pp. 195, 198).

⁵⁶⁶Hoy en día esta joya, que se encontró en Almendralejo (Badajoz) en el año 1847, se guarda en el Museo de la Real Academia de la Historia en Madrid, y tuve ocasión de contemplarla en enero de 2009 en una exposición organizada por el Museo del Prado. Sobre el *missorium*, véase: MELIDA J. R., *El disco de Teodosio*, Madrid, 1930; ARCE J., *El missorium de Teodosio I: problemas históricos y de*

realizada en plata en torno al año 388 para celebrar el décimo aniversario de su mandato (*decennalia*) y enviado por el emperador como regalo a un vicario de la diócesis de *Hispania*; en ésta aparece Teodosio dejando caer sobre la túnica de un alto funcionario el codicilo que contiene su decreto de nombramiento⁵⁶⁷.

La única descripción de una ceremonia de investidura del periodo comprendido entre el emperador León I y Justino I se contiene en la ya mencionada obra de Constantino VII Porfirogéneta; concretamente en el capítulo 85 del libro 1 se recoge el nombramiento de un prefecto de Egipto (*Augustalis*)⁵⁶⁸, el cual tenía lugar en el *consistorium* de la siguiente manera: después de la ceremonia de la *adoratio purpurae*⁵⁶⁹

iconografía, en El disco de Teodosio (coord. M. Almagro), Madrid, 2000, pp. 281 ss.

⁵⁶⁷OTERO M. T. / VERDUGO J., *La imagen pública del dominator: ceremonial y circo en la antigüedad tardía*, en Actas del II Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía. Ocio y Espectáculos, Alcalá de Henares, Octubre, 1997 (Alcalá de Henares, 2001), pp. 119-120

⁵⁶⁸Sobre la figura del prefecto de Egipto, HÜBNER H., *Der praefectus Aegypti von Diokletian bis zum ende der römischen Herrschaft*, München, 1952; DE LAS HERAS G., *Un punto de vista acerca de la posición del "praefectus Aegypti" en sus orígenes*, en Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias, vol. 3, Madrid, 1988, pp. 1233 ss.; LICANDRO O., <<Aegyptum imperio populi romani adieci>>. *L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli, 2008; JÖRDENS A., *Statthalterliche Verwaltung in Der Römischen Kaiserzeit: studien zum Praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009.

⁵⁶⁹La *adoratio purpurae* consistía en arrodillarse ante el emperador y besarle el manto de púrpura, de donde surge la expresión

se procedía a la entrega de los codicilos y a continuación el funcionario, acompañado del prefecto del pretorio, salía del palacio imperial en el vehículo oficial del prefecto mientras los *scrinia* le aclamaban utilizando una fórmula que era común a todos sin distinción del rango⁵⁷⁰.

Por lo que hace a la fecha de entrada en el cargo no encontramos una norma que regule de forma general este tema sobre todo en el caso de los altos funcionarios⁵⁷¹; sin embargo, sabemos que desde Teodosio I las promociones de oficiales se realizaban el día del aniversario del nacimiento del emperador como se recoge en CTh. 6.29.6 (a. 381), CTh. 6.26.11 (a. 397), CTh. 6.26.17 (a. 416): <<*Felicitis natalis nostri die iidem*

<<*adorare purpuram*>>: CTh. 6.24.3; CTh. 7.1.7; CTh. 12.1.70; C. J. 12.29(30).2. DE MARTINO F., *Storia della costituzione...*, op. cit., p. 208.

⁵⁷⁰Con Justiniano asistiremos a un intento de restaurar algunas instituciones del pasado, recuperando ceremonias y rituales ya extinguidos en época del Principado (Nov. 17 a: <<*Quia igitur nobis reparantibus omnem vetustatem, iam deminutam, iam deperditam...*>>). MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina...*, op. cit., pp. 205, 215.

Respecto del *praefectus urbi* sabemos que una vez entregados los codicilos, el emperador avisaba oficialmente del nombramiento del nuevo prefecto al Senado (Casiód., *Variae* I, 43; III, 12), y después de convocado éste, el funcionario se presentaba ante el mismo y pronunciaba una *oratio* de entrada en el cargo (como ejemplo, el discurso XVII de *Themistius*). Al final de esta ceremonia, el prefecto era aplaudido por los senadores y por el pueblo. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 192-193.

⁵⁷¹En la República se fijó, en torno al 154 a. C., para las magistraturas mayores el día 1 de enero como fecha de entrada en el cargo (*Livii periochae* 47: <<*Consules anno quingentesimo nonagesimo octavo ab urbe condita magistratum <kal. Ian.> inire coeperunt*>>); RANDAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi ...*, op. cit., p. 173.

*ut principis primi quoque scholarum mittantur ad provincias curiosi anniversarium munus acturi ...>>*⁵⁷², y que solamente desde el año 476, y concretamente en Occidente desde Teodorico, los funcionarios públicos del nuevo reino ostrogodo comenzarán sus funciones el día 1 de septiembre para terminar el 31 de agosto⁵⁷³.

Después de la investidura, el funcionario era inscrito en la *matricula*⁵⁷⁴ de oficiales que se llevaba en los diferentes *officia*, como resulta, entre otras fuentes, de CTh. 6.35.3, CTh. 7.12.2, CTh. 8.8.4, CTh. 6.30.16 y CTh. 12.1.147.

La *matricula* servía como documento probatorio del número real de funcionarios dependientes de la Administración y también para llevar un control de los ascensos de los empleados de los diferentes *officia* atendiendo a su antigüedad (*matricula decurrente*), así como de cara a

⁵⁷²Los ceremoniales de investidura debían tener lugar en el *dies felicissimus*, con ocasión del nacimiento o de las fiestas jubilares del emperador. CHASTAGNOL A., *Le feste giubilarie (quinquennali, decennali...) degli imperatori da Gallieno a Costantino*, en Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. VII Convegno internazionale, Perugia, 1988, pp. 501 ss.; ID., *La fête décennale de Valentinien II en novembre 384*, en Revue Numismatique (RN), 151, Paris, 1996, pp. 171 ss.

⁵⁷³Sobre el comienzo de este calendario, al menos, desde el 462: C. J. 1.27.1; C. J. 1.27.8; C. J. 1.27.18. Sin embargo, véase también DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, p. 95.

⁵⁷⁴El término *matricula*, diminutivo de *matrix*, significa listado, relación o catálogo, y aparece por primera vez en el lenguaje administrativo en un documento del año 199 d. C. (CIL VI, 1585 a, Bruns

las numerosas reclamaciones relativas a las retribuciones y aprovisionamiento⁵⁷⁵, tal y como vemos en una constitución del emperador Constancio dirigida a los *agentes in rebus* (CTh. 1.9.1, a. 359 [=C. J. 1.31.1]): <<... debe alcanzarse el puesto superior por riguroso escalafón, de tal suerte que para las administraciones y expediciones salgan aquellos a quienes llama el orden que ocupan en la milicia>>⁵⁷⁶.

La *matricula* contenía, como hemos visto, un listado con el nombre de los funcionarios atendiendo a su antigüedad en el servicio⁵⁷⁷.

Font. 144 a). ENSSLIN W., v. *matricula*, PW, 14, Stuttgart, 1930, pp. 2250-2259.

⁵⁷⁵CTh. 11.5.1: ... *id tantum, quod est necessarium intra Africam militibus consistentibus, provincialibus iubemus indici ac iuxta matricularum fidem quod exigit ratio postulari...* (a. 401).

⁵⁷⁶... *principatum vero adipiscatur matricula decurrente, ita ut ad curas agendas et cursum illi exeant, quos ordo militiae vocat et laborum.* CUNEO P. O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante* (337-361), Milano, 1997, pp. 383-384.

Pone de relieve GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 160, nt. 63, que en la Edad Media los funcionarios seleccionados “debían ser inscritos en la matrícula donde se hallaba registrada la nómina de los oficiales, BARTOLO (*In treis cod. lib. praelec.*, fol. 59) señala que el oficial público sólo podrá percibir el salario y disfrutar de los privilegios si está inscrito en la matrícula, ya que ésta constituye al oficial en la cuasiposesión del oficio y supone presunción de que le pertenece la titularidad del mismo, de tal modo que la carga probatoria deberá recaer sobre el oponente”.

⁵⁷⁷No solamente el nombramiento de los funcionarios de la Administración central era recogido en un registro-matrícula sino que también en los municipios, como nos dice Ulpiano en D. 50.3.1 (Ulp., 3 de off. proc.), los decuriones <<*in albo ita scriptos esse oportet ut lege municipali praecipitur...*>>, es decir, “deben ser inscritos en el registro de la manera que establece la ley municipal”, si nada dijese la ley a este respecto -continúa Ulpiano- se deberá atender al orden de las

Los admitidos a un puesto en la *matricula* eran llamados *statuti* y los aspirantes a un puesto ordinario eran los *supernumerarii* (C. J. 2.7.13, 468: <<... *in loco deficientium supernumerariis antepoenendiis...*>>)⁵⁷⁸.

La dirección de la matrícula correspondía, en principio, al *adiutor* del *officium* respectivo (CTh. 6.30.16: <<...*adiutoribus, qui matriculas tractant...*>>), y quedaba sujeta a la inspección de los más altos funcionarios e incluso del emperador como resulta de CTh. 1.9.3 (a. 405): <<Tu Magnificencia <*magister officiorum*> examinará y perfeccionará el escalafón de la corporación de los *agentes in rebus* con arreglo a nuestra autorización...>>⁵⁷⁹, o de C. J. 12.20.3 pr., en donde el emperador León aprueba la *matricula* de los *agentes in rebus* que le presenta el *magister officiorum*, Patricio.

A continuación, referimos una serie de normas relativas a la responsabilidad de los funcionarios en esta materia:

dignidades. De igual forma, los cohortales, empleados en las oficinas de los gobernadores provinciales (CTh. 8.4.20) y los hijos de los *domestici* que por herencia debían seguir la profesión del padre (<<*domesticorum filios vel propinquos parvos vel impuberes domesticorum coetibus adgregamus, ita ut non solum matriculis inserantur...*>>) estaban inscritos en un registro-matrícula. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 169.

⁵⁷⁸ Vid. *infra* pp. 407-409.

⁵⁷⁹ ... *magnificentia tua matriculam scholae agentum in rebus ex nostra auctoritate tractabit atque perficiet* ; CTh. 6.27.23.

En CTh. 6.30.16-17 (a. 399) se establece que será castigado el *adiutor* del *officium* con la deportación y la confiscación del patrimonio si inscribe en la *matricula* un número de empleados que sobrepase al permitido en el cuerpo, y con una multa de una libra de oro en el caso de que un palatino sea enviado a su provincia de origen o al lugar donde hubiese establecido su domicilio o residencia⁵⁸⁰; también en C. J. 12.57(58).10 (a. 407) se establece que el que hubiese solicitado el cargo de las cartas o de las tablas (*chartas vel tabulas*) en la prefectura del pretorio debe esperar a que sea admitido su nombre en la *matricula*, estableciéndose una pena para el que lo hubiese admitido sin respetar esta norma; de igual forma, en C. J. 1.30.3 (a. 492) el emperador Anastasio prohíbe que ninguna persona pueda alcanzar el puesto de oficial en el *sacro scrinio memoriae* sin autorización del emperador, castigando al que no hubiese cumplido esta norma con la confiscación de todos sus bienes (*publicatio bonorum*) y con una multa de tres libras de oro a las oficinas del gobernador de la provincia que no hubiesen exigido al candidato el correspondiente rescripto del emperador.

Junto a la *matricula*, el *laterculum maius* aparecía como el registro o la lista puesta al día de todos los altos funcionarios y oficiales del Imperio tanto civiles como militares (<<*notitia omnium dignitatum et*

⁵⁸⁰Vid *infra* pp. 550 ss. En CTh. 1.10.8 se establece que el *adiutor* debía inscribir en los *gesta* el nombre de los palatinos destinados a provincias y certificar que estos no habían estado antes en la provincia a la que hubiesen sido enviados.

*administrationum tam civilium quam militarium>>)*⁵⁸¹, además, contenía también el cuadro del ejército, de las guarniciones y de las *scholae palatinae*, así como los esquemas para el nombramiento de los funcionarios, los codicilos, las insignias del grado, las instrucciones para el servicio y los *mandata principis*⁵⁸². El *primicerius notariorum*⁵⁸³, funcionario situado a la cabeza de los *notarii*, se ocupaba del *laterculum maius* (*sub cura viri spectabilis primicerii notariorum*), y era el encargado de emitir los *codicilli* o títulos de nombramiento de los altos funcionarios (CTh. 6.2.20)⁵⁸⁴.

El *laterculum minus*, que recogía la lista de aquellos funcionarios y oficiales de grado elevado pero de categoría inferior al *dux*, quedaba

⁵⁸¹Vid. *supra* p. 126.

⁵⁸²El *laterculum maius* se contenía en un código rojo con cintas del mismo color y las hendiduras de la cubierta eran broches metálicos para protegerlo de posibles daños: NEIRA FALEIRO C., *La Notitia Dignitatum...*, *op. cit.*, p. 511. También, SEECK, v. *Laterculum*, RE, 12.1, Stuttgart, pp. 904-907; DE BONFILS G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia constantiniana*, Napoli, 1981, p. 72.

⁵⁸³La palabra *primicerius* viene de “*in prima cera scriptus*”, ya que los antiguos escribían en tablillas de cera y se utilizaba la expresión *in prima*, *in secunda*, *in tertia*, *in extrema* o *in ultima cera* para indicar lo que estaba escrito en la primera, en la segunda, en la tercera o en la última tabla de cera. En la *Notitia Dignitatum* (Or., 18; Occ., 16) aparecen reproducidas las insignias de los *primicerii notariorum* junto con los decretos de su nombramiento (*codicilli*) y un tipo de *codex* enrollado con unos lazos que aparece denominado *laterculum maius* (SEECK, v. *Laterculum*, *op. cit.*, p. 904).

⁵⁸⁴Claudiano (*epith. Pell.*, 85-91) nos describe las competencias del *primicerius notariorum*.

bajo el control del *quaestor sacri palatii*⁵⁸⁵, que era ayudado en este ámbito por el *scrinium memoriae*, tal y como se recoge en CTh. 1.8.1.2 [=C. J. 1.30.1] (a. 424) dirigida al *quaestor sacri palatii* Salustino: <<*totius minoris laterculi curam scias ad tuae sublimitatis sollicitudinem pertinere, ita ut tuo arbitratu ex scrinio memoriae totius minoris laterculi dignitates, hoc est praepositurae omnes, tribunatus et praefecturae castrorum*>>, es decir, “sepas que el cuidado de todo el Libro Menor de asientos de oficios y dignidades compete a la diligencia de tu sublimidad <*quaestor sacri palatii*>, de suerte que quedan a tu arbitrio, las dignidades de todo el Libro Menor (...), esto es, de todas las preposituras, tribunados y prefecturas, sean en lo sucesivo sacadas del Archivo de Memorias”⁵⁸⁶. El *quaestor sacri palatii* publicaba cada año la lista de los funcionarios⁵⁸⁷.

⁵⁸⁵Como ya vimos, este funcionario era uno de los grandes dignatarios del Imperio y pertenecía al rango de los *illustres* junto con el *magister officiorum*, el *comes sacrarum largitionum* y el *comes rerum privatarum*. HARRIES J., *The roman imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II*, JRS, 78, London, 1988, pp. 148 ss.

⁵⁸⁶En C. J. 1.30.2, del mismo año, se dice que “*omnes minoris laterculi dignitates*”, que durante un tiempo habían estado bajo el cuidado de los maestros militares, pasen a depender del *quaestor sacri palatii*; y en C. J. 1.31.5.2 (Impp. Justino y Justiniano, a. 527) se dice que el *magister officiorum* realice cada cuatro meses informes (*breves*) de todos los guardias de palacio y que se presenten y depositen dichos informes en la sacra secretaría del registro (*sacro scrinio laterculi*) <<para tener siempre noticias ciertas de estos guardias de palacio>>; véase también, Nov. 35.

PAOLA L., *Sull'uso dei breves nell'amministrazione romana tardoantica*, en *Il tardoantico alle soglie del duemila*. Diritto, religione,

Terminamos este apartado diciendo que tenemos constancia de la existencia de un *laterculum minus* solamente en la parte oriental del Imperio mientras que un *laterculum maius* aparece recogido en la *Notitia Dignitatum* de Oriente y Occidente⁵⁸⁸.

società. Atti del V Convegno Internazionale dell' Associazione di Studi Tardoantichi, Pisa, 2000, pp. 189 ss.

⁵⁸⁷LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, *op. cit.*, p. 406.

⁵⁸⁸DE BONFILS G., *Il comes et quaestor...*, *op. cit.*, p. 103; SEECK, v. *Laterculum*, *op. cit.*, p. 907.

**E) LOS DERECHOS DE LA CANCELLERÍA IMPERIAL EN LA
EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE NOMBRAMIENTO DE
LOS FUNCIONARIOS (*SPORTULAE*): REGLAMENTACIÓN
Y SANCIONES LEGALES.**

Los funcionarios que recibían su nombramiento debían pagar a título de derechos de entrada, en el momento de su inscripción en la *matricula*, diversas cantidades de dinero (*sportulae, introitus, introitus militiae, introitus erogatio, pecuniae oblatio*)⁵⁸⁹, fijadas consuetudinariamente (*consuetudinum nomine*), a los diversos funcionarios encargados de la expedición de los nombramientos⁵⁹⁰ (*chartularii sacri cubiculi, primicerius notariorum, quaestor sacri palatii*) y a los ayudantes de estos -oficiales de los *sacra scrinia*-, como se vino a recoger en C. J. 12.19.7.2(1) [a. 443-444?] en donde se establece que <<el que obtiene el lugar de un numerario pague 250 sólidos al

⁵⁸⁹D. 32.3.102. 2-3.

⁵⁹⁰DE FRANCISCI P., *Storia del diritto...*, *op. cit.*, p. 136. El *Ordo salutationis* de Timgad (*CIL* VIII, 17896) nos ha dejado las tasas de las *sportulae* que debían pagar los funcionarios del consular de Numidia en época de Juliano.

subsecretario, y veinte o quince sólidos, según la costumbre de cada secretaría, al inmediato a subsecretario o al auxiliar>>.

El nuevo funcionario debía también comunicar su nombramiento al *officium* del prefecto del pretorio competente para la asignación de la annona correspondiente, y por este acto el funcionario debía pagar, *pro iussione*, otras *sportulae*⁵⁹¹.

Como ya vimos, en época de Justiniano se prohibió aceptar o pagar *sportulae* que no fuesen las legalmente debidas (C. J. 1.27.1.17(6), a. 534: <<*sportulas etiam ab officio tam viri magnifici, praefecti praetorio Africani, quam reliquorum iudicium, sic exigere iubemus, quomodo in nostris legibus est dispositum, et ab omni republica nostra custoditur, ut nullus audeat quocumque modo earum excedere quantitatem*>>).

Asimismo Justiniano estableció en C. J. 1.27.1.18(7) que los gobernadores provinciales no debían satisfacer a título de espórtulas grandes cantidades de dinero por la formalización de sus credenciales (<<*non multa dispendia pro completionem chartarum vel codicillorum vel in nostro laterculo, vel in scriniis praefecti praetoriorum per Africam*>>), fijándose el pago de seis sólidos al registro (*laterculum*) y de doce

⁵⁹¹KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, I, *op. cit.*, pp. 869-870; DE MARTINO F., *Storia delle costituzioni romane*, vol. V., *op. cit.*, p. 336.

sólidos, como máximo, a las secretarías del prefecto del pretorio. En la misma constitución se dispone que se castigará al gobernador provincial, que hubiese pagado una tasa mayor a la fijada anteriormente, con una multa de treinta libras de oro, y serán castigados también sus oficiales que quedarán sujetos a la misma multa que éste y además a la pena capital.

Igualmente en una constitución dirigida a Belisario, *magister militum* de Oriente, y recogida en C. J. 1.27.2.17 (a. 534), Justiniano ordena que ninguno de los gobernadores que son enviados a las fronteras africanas pague una cantidad mayor a la establecida⁵⁹² ni a la prefectura del pretorio ni al *magister militum*, y si esto no fuese observado se castigará al funcionario que hubiese recibido una cantidad mayor de lo tasado con una multa de treinta libras de oro.

Y por último, en un anexo a la Nov. 8 (a. 535) Justiniano estableció las cantidades que debían pagar las más altas dignidades por los títulos de nombramiento (<<*notitia eorum, quae ab unaquaque subditarum administrationem debent praeberi circa consuetudinem quantitatis ab is, qui administrationes habent; nullo praesumente extra ea, quae subscripta sunt, nequaquam requirere amplius aliquid*>>);

⁵⁹² Así, por ejemplo, en C. J. 1.27.2.20 se fijan las espórtulas que debía pagar el *dux* de cada frontera: seis sólidos al sacro registro (*in sacro laterculo*), y doce sólidos a las oficinas del *magister militum* y a las oficinas de la prefectura de África, respectivamente.

como ejemplo, mencionamos que el conde de Oriente debía satisfacer en la sacra cámara: al primicerio *tribunorum notariorum*, sesenta y tres sólidos, a los cuatro secretarios del sacro registro, cincuenta sólidos, al ayudante del primicerio, tres sólidos, y al oficio de los prefectos del pretorio, ochenta sólidos.

**F) ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD RELATIVOS AL
NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS
MUNICIPALES. LA QUERIMONIA O IMPUGNACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO.**

Dentro del ámbito municipal, los *duumviri* eran, como ya vimos, los magistrados municipales de mayor rango y ellos mismos, tal y como se establece en D. 50.2.7.2 (Paul., 1 *sent.*), nombraban a sus sucesores elegidos únicamente dentro de los miembros del *ordo decurionum*: <<*Is, qui non sit decurio, duumviratu, vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur*>>⁵⁹³.

⁵⁹³“El que no es decurión no puede desempeñar el duvirado ni los otros cargos, pues los plebeyos <es decir, los que no son decuriones> están excluidos de los cargos de los decuriones”.

En algunas ciudades la elección de los *duumviri* podía hacerse por votación popular (*ex postulatione populi*), pero también en estos casos la responsabilidad de los *duumviri* así elegidos recaía en los predecesores como se establece en una constitución de Constantino, del año 326, contenida en CTh. 12.5.1: <<*li magistratus, qui sufficiens duumvir in futurum anni nominationes impertunt, periculi sui contemplatione provideant, ut quamvis populi quoque suffragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur, tamen ipsi nitantur pariter ac laborent, quemadmodum possint ii, qui nominati fuerint, idonei*

En relación con este tema recogemos la opinión de SERRIGNY⁵⁹⁴, contraria a la de SAVIGNY⁵⁹⁵ que consideraba que los *duumviri* sólo intervenían en el nombramiento (*nominatio*) de sus sucesores y no en la elección (*creatio*) propiamente dicha que era competencia del conjunto de los decuriones. Por el contrario, SERRIGNY se apoyaba en el hecho de que en los textos se habla de *creatio*⁵⁹⁶ (C. J. 11.34(33).1: <<... *qui a te collega que tuo magistratus creati sunt...*, *periculo vos creationis...*>>) y de que los magistrados municipales que dejaban sus cargos eran responsables pecuniariamente de la gestión de sus sucesores, por lo que “ *il était naturel qu’ils eussent la liberté du choix ...*”⁵⁹⁷.

reperiri. Nam aequitatis ratio persuadet, nisi idonei fuerint nominati ipsos, quorum est periculum adtineri>>.

SIRKS B., *Die nomination fur die städtischen Ämter im römischen Reich*, en Stadt - Gemeinde - Genossenschaft. Festschrift für G. Dilcher zum 70. Geburtstag, Berlin, 2003, pp. 13-22.

⁵⁹⁴SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, op. cit., I, p. 204.

⁵⁹⁵SAVIGNY F. C., *Hist. du Droit rom.*, t. I, p. 19 (cit. SERRIGNY D., op. cit., p. 204, nt. 2).

⁵⁹⁶SIRKS B., *Die nomination fur die städtischen Ämter...*, op. cit., p. 13, señala que además del vocablo <<*nominatio*>> hay otros términos en las fuentes que se refieren al nombramiento de un magistrado municipal como: <<*cretio*>> y <<*create*>>, <<*designatio*>>, <<*eligere*>> y <<*electio*>>, <<*onomasia*>> y <<*onomazein*>>, <<*cheirotonein*>> y <<*cheirotonia*>>, <<*probolê*>>.

⁵⁹⁷C. J. 11.34(33) <<*De periculo nominatorum*>>; D. 50.1.11 (Pap., 2 *quaest.*). Los *nominatores* eran los magistrados que proponían a las personas que iban a sucederles en una magistratura. La responsabilidad por la gestión no sólo recaía sobre el elegido para el

El *dunvirado* era una magistratura anual⁵⁹⁸ y el nombramiento para dicho cargo se realizaba el día 1 de marzo (CTh. 12.1.8), al menos tres meses antes de su entrada en funciones, con la finalidad de que el magistrado nombrado pudiese, en caso de que lo creyese oportuno, impugnar la elección ante el gobernador provincial, como se recoge en CTh. 12.1.8 (a. 323) [= C. J. 1.56.1]⁵⁹⁹, dejándose dos meses para

desempeño de la magistratura, sino también sobre los garantes que él debía dar y sobre quien lo hubiese nombrado: C. J. 11.34(33).1-2.

Como señala VOCI P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, op. cit., p. 126, los magistrados no responden solamente ellos de su gestión municipal sino que son responsables también sus garantes y sus *nominatores*. Garantes y magistrados estaban obligados solidariamente, en cambio el *nominator* únicamente se obligaba después de que el magistrado por él nombrado hubiese sido demandado inútilmente (D. 50.1.11 pr.-1; D. 50.1.13). Añade D. 50.8.2.8-10 (Ulp., 3 *opin.*) que el colega que hubiera pagado por el otro tiene la acción de regreso, transmisible contra los herederos.

El *nominator* paga por el magistrado insolvente por él propuesto y por tanto evita el pago al magistrado colega de éste; igualmente tiene acción contra el primero pero no contra el segundo. Dicha acción de regreso es denominada *actio utilis* y posiblemente se refiera a la *actio negotiorum gestorum*. VOCI P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, op. cit., pp. 126-130.

Respecto de esta materia añadimos las siguientes reglas establecidas en las fuentes: D. 50.1.15.1 (Pap., 1 *resp.*): <<No debe darse acción contra el que a su riesgo nombró sucesor, si concluida su magistratura era solvente el sucesor>>, y en D. 50.1.17.14 (Pap., 1 *resp.*) se añade que: <<La responsabilidad del sucesor nombrado no obliga al fiador del que lo nombró>>. También en C. J. 10.72(70).2 (a. 365) se establece que los *nominatores* de los recaudadores (*susceptores*) y de los prepósitos de graneros y aldeas responderán (*teneantur obnoxii*) si estos no fuesen idóneos; C. J. 10.72(70).8 *in fine*.

⁵⁹⁸ D. 50.1.13 (Pap., 2 *quaest.*).

⁵⁹⁹ CTh. 12.1.2; CTh. 11.31.8.

apelar y un mes más para que el juez dictase sentencia. En caso de que el gobernador provincial anulase dicho nombramiento se preguntaba SERRIGNY si podía éste nombrar al sustituto o si sólo los *duumviri* que ocupaban el cargo estaban facultados para hacerlo, siendo la opinión de este Autor la siguiente: *“Les textes ne sont pas très-clairs sur ce point important: cependant la première opinion me paraît plus probable d’après les textes et leur esprit. Si le judex n’ avait pas eu le pouvoir de substituer d’autres magistrats à ceux dont l’élection était annulée, il aurait fallu renvoyer cette nomination aux anciens duumvirs avec faculté d’appeler de nouveau, et il serait écoulé des délais indéfinis, délais incompatibles avec l’époque de l’entrée en fonctions”*⁶⁰⁰.

Los *decuriones* que hubiesen sido nombrados para el cargo de *duumvir* no podían rechazarlo salvo que hubiese motivos legítimos: así, Constantino en CTh. 12.1.16 (a. 326) [=C. J. 10.32(31).18] establece que si el nombrado para el *duumvirato* abandonaba sus funciones sin una causa justificada y huía, sería castigado con la entrega de sus bienes al que ocupase el cargo de *duumvir* en su lugar, y en caso de que fuese hallado posteriormente, sería condenado a doblar la duración del cargo, por lo que quedaría obligado a desempeñarlo por un periodo de dos años. También en una constitución de los emperadores Constancio y Constante dada en el año 340 (CTh. 12.1.29 = C. J. 10.32(31).20) se

⁶⁰⁰SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 139.

hace referencia a los magistrados desertores de su cargo los cuales quedaban obligados a reembolsar los gastos que la ciudad hubiese anticipado por ellos; además en CTh. 12.1.63 (a. 365) [=C. J. 10.32(31).26] se establece que los que por pereza (*ignavia*) abandonen sus cargos en la ciudad y se escondan con los monjes solitarios (*monazonton*), una vez encontrados, deben volver a ocuparlos ya que, en caso contrario –añade la constitución-, serán privados de sus bienes familiares los cuales podrán ser reivindicados por los que ocupen sus funciones⁶⁰¹.

Por lo que hace al *defensor civitatis*⁶⁰² -que desempeñaba su cargo durante un periodo de cinco años (*et tempus quinquenuii spatii*: C. J. 1.55.4) el cual fue reducido a dos años por Justiniano (Nov. 15.1.1)- debía ser nombrado por acuerdo de los principales habitantes de la ciudad (obispos, clérigos, honorables, *poseessores* de bienes inmuebles, curiales), y no solamente por los miembros de las curias como ocurría en el caso de los *duumviri*. En CTh. 1.29.6 (a. 387) se dice que serán nombrados defensores aquellos a quienes las ciudades

⁶⁰¹Sabemos que durante los siglos IV y V aumentó considerablemente el número de personas que se retiraban a los monasterios, principalmente huyendo de la rapacidad del Fisco. NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 80.

⁶⁰²El *defensor civitatis* -recordamos- era el primer magistrado de la ciudad después de los *duumviri* y fue establecido en las ciudades más importantes para proteger al pueblo y a los decuriones contra las vejaciones de los *potentiores* y contra los abusos de los gobernadores provinciales.

hubiesen elegido por decreto, y que el prefecto del pretorio deberá castigar al *defensor civitatis* que se haya hecho elegir por ambición (*ad locum defensionis ambitione pervenerit*) con una multa de cinco libras de oro que se destinará al Fisco, y con la expulsión del cargo⁶⁰³.

Además, se estableció en CTh. 1.29.3 [=C. J. 1.55.2] (a. 368?, 370?, 373?) que no serán elegibles para este cargo los decuriones o los cohortales⁶⁰⁴: <<escójanse para el cargo de defensor entre los administradores que fueron cónsules o gobernadores provinciales, o entre los palatinos o los pertenecientes al servicio secreto, o entre aquellos que desempeñaron la vicaría o el principado de vuestra excelsitud <prefecto del pretorio>, o entre los expertos, pero no entre el cuerpo de los decuriones>>. Esta restricción será suprimida por Justiniano en Nov. 15.1 (a. 535) que estableció que podían ser elegidos para desempeñar este cargo municipal <<todos los más nobles habitantes de las ciudades>> y se dispuso que no fuese lícito a nadie declinar el nombramiento de *defensor civitatis* ya que en caso contrario quien lo hiciese sería castigado con una multa de cinco libras de oro que se destinarían a obras públicas en dicha ciudad, y –añade la constitución- además de esta pena será obligado después a aceptar el

⁶⁰³El nombramiento del *defensor civitatis* debía ser confirmado posteriormente por el prefecto del pretorio (C. J. 1.55.8 pr., a. 409). MANNINO V., *Ricerche sul <<defensor civitatis>>*, Milano, 1984, p. 94.

⁶⁰⁴*Defensores civitatum non ex decurionum seu cohortalium corpore, sed ex aliis idoneis personis huic officio deputentur.*

cargo de defensor (C. J. 1.4.19; Auténtica *de defensor. civitat.* § *Interim.* Nov. 15.1; ed. García del Corral).

En relación con la impugnación del nombramiento de los magistrados municipales, señalamos como ha puesto de manifiesto PERGAMI⁶⁰⁵, que el Derecho Romano contempló también la posibilidad de apelar aquellos actos que en el lenguaje jurídico moderno se pueden definir como de naturaleza administrativa, especialmente cuando estos podían lesionar los intereses de los ciudadanos. Así vemos que en un fragmento de la obra <<*De apellationibus*>> de Ulpiano, recogido en D. 49.4.1 (Ulp., 1 *de apell.*), se admite la apelación como un instrumento para tutelar al particular frente a la actividad de la Administración Pública⁶⁰⁶.

Esta situación podía darse en aquellos supuestos en los que el nombramiento de un magistrado municipal hubiese sido ilegal: en tal caso establecieron los emperadores Diocleciano y Maximiano en C. J. 10.32(31).2 que una vez comunicado el nombramiento al interesado por medio de oficial público, éste <<podrá, si quisiere, apelar y defender su causa ante el gobernador provincial en la forma legal acostumbrada; y si se hubiese probado que de ninguna manera debió ser nombrado,

⁶⁰⁵PERGAMI F., *L'apello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, pp. 353-354.

convendrá que se le restituyan por el que lo nombró los gastos del litigio>>⁶⁰⁷, pero si el que apeló no prueba su causa, resulta de D. 49.10.1 (Ulp., 3 *de offic. cons.*) que <<si apelaran los elegidos para cargos públicos (*munera publica*) y no hubieran probado las causas <de su excusa>, deben saber que corren el riesgo del daño que pueda sufrir la ciudad por el retraso de la apelación>>; también en D. 49.1.21.2 (Papir. Iust., 1 *constit.*) se dice que si el magistrado nombrado hubiese apelado contra su nombramiento, deberá su colega desempeñar entre tanto interinamente el cargo de ambos; en caso de que hubiesen apelado los dos se nombraría entretanto a otro en el lugar de ellos.

De la apelación como instrumento de control jurisdiccional de los actos administrativos también se habla en CTh. 11.30.10 (a. 320) [=C. J. 7.63.1]⁶⁰⁸, donde Constantino fijó el plazo de dos meses para impugnar

⁶⁰⁶ Concretamente, en D. 49.4.1,3-4, se alude a las apelaciones a los gobernadores respecto al nombramiento de los magistrados municipales.

⁶⁰⁷ *Exemplum sacrarum litterarum Diocletiani et Maximiani AA.: Observare magistratus oportebit, ut, decurionibus solemniter in curiam convocatis, nominationem ad certa munera faciant, eamque statim in notitiam eius, qui fuerit nominatus, per officialem publicum perferre curent, habituro appellandi, si voluerit, atque agendi facultatem apud praesidem causam suam iure consueto; quem si constiterit nominari minime debuisse, sumptus litis eidem a nominatore restitui oportebit (Sine die et consule).*

⁶⁰⁸ <<Si nombrado uno, estando ausente, o llamado para las insignias del duntirado y de otros honores, o para otro cargo, hubiese recurrido al auxilio de la apelación, se le ha de computar para interponerla el plazo de dos meses desde el día que probare que tuvo

el nombramiento (*ad provocationis auxilium*) si fue hecho en presencia del interesado (*nam praesenti, qui factam nominationem cognovit*); en caso de que el nombramiento se hubiese realizado en ausencia de aquél (*si per absentiam nominatus est*) el plazo correrá desde el momento en que tuvo conocimiento de la noticia⁶⁰⁹.

Para reparar esta supuesta ilegalidad y resolver rápidamente la cuestión a fin de poder cubrir el puesto que quedaba vacante, el emperador Constantino introdujo a tal efecto tres años más tarde un recurso autónomo, la *querimonia* (=querella)⁶¹⁰, dirigido a impugnar el decreto de nombramiento a una magistratura municipal, como se recoge en CTh. 11.30.12, a. 323 (<<*Si nominatus magistratus..., sed mox super*

conocimiento del nombramiento>>. Véase, LEGOHEREL H., *Reparatio temporum*, IURA 16, Napoli, 1965, p. 102.

⁶⁰⁹Se establece por tanto un plazo más largo que el previsto para la impugnación de las sentencias judiciales que oscilaba entre uno y tres días. Véase PERGAMI F., *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità*, en Atti Accademia Romanistica Costantiniana. XV Convegno Internazionale in onore C. Castello, Perugia, 2005, pp. 418-419; también ORESTANO R., *L' apello civile in diritto romano*, Torino, 1966², pp. 237 ss.

⁶¹⁰El término <<*querimonia*>> aparece en dos textos jurídicos anteriores a Constantino: C. J. 4.30.8 (a. 228) y C. J. 9.2.4 (a. 241).

BOYÉ A. J., *P. Oxy. XVII 2130. L' editio opinionis et l'appel en matière de charges liturgiques*, en Studi in onore di P. Bonfante, IV, Milano, 1930, pp. 183 ss.; CRUZ E TUCCI J. R., *La "querimonia" nella legislazione di Costantino il Grande*, en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, IV, Napoli, 1984, pp. 1787 ss.; COLLINET P., *La nature des "querelae" des origenes à Justinien*, SDHI, 19, Roma, 1953, pp. 251 ss.

huiusmodi querimoniis diceptandum>>)⁶¹¹, y en CTh. 12.1.8 (a. 323) [=C. J. 1.56.1] (<<*Decuriones ad magistratum vel exactionem annonarum ante tres menses vel amplius nominari debent, ut, si querimonia eorum iusta videatur >>*).>

Posteriormente, en una constitución del año 339 recogida en CTh. 11.30.19, los hijos de Constantino vuelven a calificar como *apellatio* la impugnación de quien se considerase ilegítimamente nombrado <<*ad curias vel ad duumviratus aliorumque vel munus aliquod>>*. Asimismo reseñamos que en el año 395 los emperadores Arcadio y Honorio sancionan en CTh. 11.30.53 la nulidad de los nombramientos públicos por <<*libellis vel edictis factae citra consilium publicum>>*⁶¹² y disponen que para hacer valer tal nulidad no era necesario recurrir a la apelación (<<*...non valeant nominationes; de quibus nec appellari necesse est, si sollemnitas deest>>*)⁶¹³.

⁶¹¹El emperador Constantino afirma en CTh. 11.30.2 (= Brev. 11.8.1) que en estos casos debe hablarse de *querimonia* o *querella* y que no puede hablarse de “apelación” ya que este término se emplea en cuestiones de mayor importancia (<<*apellationibus enim verbum, in maioribus rebus dici oportet>>*). Sobre los motivos que llevaron a Constantino a sustituir el instrumento de la apelación por la *querimonia*, véase PERGAMI F., *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi...*, op. cit., pp. 421-424.

⁶¹²<<... nombramientos públicos hechos por libelo o edicto sin la autorización del consejo público>>.

⁶¹³PERGAMI F., *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi...*, op. cit., p. 425; SIRKS B., *Die nomination fur die städtischen Ämter...*, op. cit., p. 19.

La posibilidad de apelar el nombramiento como magistrado municipal fue recogida también por comentaristas como BÁRTOLO DE SASSOFERRATO⁶¹⁴, BALDO DE UBALDIS⁶¹⁵ o PABLO DE CASTRO⁶¹⁶; concretamente este último subraya que si la parte lesionada por la elección efectuada no apelara a su debido tiempo el nombramiento quedará confirmado por tácito consentimiento.

En CTh. 12.1.23 se dice también que si después de tres requerimientos los *nominati* no hubiesen contestado o no hubiesen acudido al *consilium*, quedarían sujetos a sus obligaciones (SIRKS B, *Die nomination fur die städtischen Ämter...*, *op. cit.*, p. 19).

⁶¹⁴BÁRTOLO DE SASSOFERRATO, *In tres cod. lib. prael.*, fol. 18; ID., *In sec. dig. nov. part. praelec.*, p. 243.

⁶¹⁵BALDO DE UBALDIS, *In VII a XI cod. lib. comm.*, p. 264.

⁶¹⁶PABLO DE CASTRO, *In sec. part. cod. prael.*, pp. 172-173.

G) LA UTILITAS PUBLICA COMO FUNDAMENTO DE LA VALIDEZ DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FUNCIONARIO DE HECHO.

La expresión <<funcionario de hecho>> es propia del lenguaje de la doctrina administrativista moderna y se refiere a aquellas personas que sin reunir los requisitos legales ejercen funciones públicas, bien por existir una irregularidad en su título de nombramiento o en el nombramiento mismo, como puede ser una investidura viciada en el procedimiento, o bien, por la falta de algún requisito como la edad o que se trate de un nombramiento realizado por error⁶¹⁷.

⁶¹⁷En materia de funcionario de hecho, se exige en la legislación española que además de un título o nombramiento ilegal, el "funcionario" ejerza sus funciones de buena fe y de forma pública y continuada, ya que si conocía que su nombramiento era ilegal incurrirá en un delito castigado con penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, tal y como se recoge en los artículos 405 y 406 del Código Penal español.

Sobre la problemática del funcionario de hecho en el Derecho moderno: WALLACH K. R., *De facto Office*, en *Political Science Quarterly* 22, New York, 1907, pp. 460 ss.; JÈZE G., *Essai d'une theorie générale des fonctionnaires de fait*, en *Rev. Droit public*, 21, Paris, 1914, pp. 48 ss.; DE LA VALLINA J. L., *Sobre el concepto de funcionario de hecho*, en *Revista de Administración pública*, n. 29, Madrid, 1959, pp.

Podemos remontarnos en esta materia al ordenamiento jurídico ateniense que establecía los requisitos de elegibilidad y de capacidad de los candidatos a un oficio público y subordinaba el ejercicio efectivo del mismo a un riguroso control preventivo (*dokimasía*) que se llevaba a cabo mediante un estricto procedimiento del que tenemos noticia gracias a la constitución de Clístenes⁶¹⁸ y sobre todo por Aristóteles (*Ath. Polit.*, 55.2-5), señalando al respecto CERAMI que a tenor de tal procedimiento “se puede decir que era imposible que se diese el

103 ss.; AA. VV., *Il funzionario di fatto* (a cura di CAVALLO B.), Milano, 2005; LUST HITTA E., *Funcionario de hecho: ¿Destitución o revocación?*, en *Revista de Derecho público*, n. 30, Montevideo, 2007, pp. 45 ss.

⁶¹⁸Político griego (570-507 a. C.) que introdujo importantes reformas legislativas e institucionales en la antigua Atenas, dentro de las cuales mencionamos la <<*dokimasía*>>, es decir, el procedimiento llevado a cabo en Atenas con la finalidad de verificar la capacidad de los ciudadanos para el ejercicio de una función pública. Señala PALAO J., *El sistema jurídico ático clásico* (prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2008, pp. 175; 411 ss., que “a los arcontes, designados, también, por la suerte, les somete el Consejo a una examen (*dokimasía*) para comprobar su origen, su respeto a las creencias del pueblo ateniense y a sus padres, además del cumplimiento puntual de las cargas públicas, incluido el servicio militar. Después, el Consejo llama a cualquiera que quiera oponerse al nombramiento del nuevo arconte. Al designado para el examen, sobre el ara sacrificial le toman juramento de desempeñar el cargo con justicia y conforme a las leyes, y de no recibir regalos con motivo del desempeño de su magistratura. Si es rechazado en el examen, puede apelar a la asamblea popular”.

FARENGA V., *Citizen and self in ancient Greece. Individuals performing justice and the law*, Cambridge, 2006, pp. 361 ss.; MARTINI R., *Roma e Atene. Note comparatistiche in ‘campo costituzionale’*, en *Tradizione romanistica e costituzione I*, Napoli, 2006, pp. 411 ss.; y recientemente, FEYEL C., *Dokimasia: La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy, 2009.

supuesto de ejercicio de hecho de funciones públicas en virtud de un título inválido⁶¹⁹.

Por lo que hace al Derecho Romano vemos que el fragmento de Ulpiano contenido en D. 1.14.3⁶²⁰ aparece, en palabras de CERAMI,

⁶¹⁹CERAMI P., *Strutture costituzionale romana e irrituale assunzione di pubblici uffici*, en *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)*, 31, 1969, p. 47.

⁶²⁰ D. 1.14.3 (Ulp., 38 *ad Sabinum*): *Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset Romae praeturae petiit et praetor designatus est. Sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. Et tamen videamus: si servus quamdiu latuit, dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? Quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? An fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? Et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. Quod ius multo magis in imperatore observandum est.*

Sobre este fragmento: POMA G., “*Servi fugitivi*” e *schiavi magistrati in età triumvirale*, INDEX, 15, Napoli, 1987, pp. 149-174; VOCI P., D. 1.14.3. *Note in tema di esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975, pp. 59-80; CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, Studi G. Scadutto III, Padova, 1970, pp. 377-423; ARU L. *Una congettura du D. 1.14.3: “Barbarius Philippus”*, Studi Volterra, 3, Milano, 1971, pp. 653-669; GUARINO A., *Frustula iuris Romani. V. La pretura di Barbario Filippo*, en ANA, 99, 1988, pp. 273-278 [=Pagine di diritto romano, III, Napoli, 1994, pp. 411 ss.]; KNÜTEL R., *Barbarius Philippus und seine Spuren. Falsus praetor, parochus putativus und Scheinbeamter*, en Festschrift Mikat, Berlin, 1989, pp. 345 ss.; CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici...*, op. cit., p. 387.; LUCIFREDI-PETERLONGO M. E., *Barbarius Philippus... servus fugitivus... praetor designatus est (Contributi all'esegesi di D. 1.14.3)*, en Contributi allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni, Milano, 1965, pp. 1-113 (rec., Cerami, Iura, 17, Napoli, 1966, pp. 370 ss.); GEHLEN T., *La signification de la lex Barbarius Philipus (D. 1.14.3) pour le notariat en Hollande et Zelande aux 17^{ème} et 18^{ème} siècles*, en Viva vox iuris civilis. Essays in honour of J. E. Spruit, Amsterdam, 2002, pp. 51 ss.

como un “*effettivo precedente storico della figura di funzionario di fatto nel nostro diritto positivo*”.

Este fragmento nos refiere el famoso caso de Barbario Filipo, esclavo fugitivo, que haciéndose pasar por libre viene elegido pretor en época del segundo triunvirato a finales de la República. El jurista se plantea cual sería entonces la condición jurídica de los actos emanados de un magistrado elegido sin tener los requisitos personales -en este caso la libertad y, por lo tanto, la ciudadanía romana- requeridos para el ejercicio de la magistratura⁶²¹.

En el supuesto planteado, el *vitium* se descubre una vez que el magistrado ha cesado en el cargo, y si bien era castigado por ello, todos los actos realizados durante el desempeño de sus funciones se consideraban válidos atendiendo, según la opinión de Ulpiano, principalmente a la *utilitas publica* y a la buena fe de los ciudadanos: <<... *propter utilitatem eorum (...) nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est...*>>⁶²².

También, GODOFREDO, *De electione magistratus inhabilis seu incapacis per errorem facta, dissertatio*, en *Opuscula varia*, Genova, 1654. Por lo que hace al Derecho histórico español: Partidas IV, 4.

⁶²¹CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici ...*, *op. cit.*, p. 387.

⁶²²Así, LUCIFREDI-PETERLONGO M. E., *Barbarius Philippus...*, *op. cit.*, p. 95, señala que “l’ esercizio di una magistratura, la cui investitura è basata sul vizio, non può convalidare la magistratura stessa; ma gli atti compiuti durante l’ esercizio della magistratura in parola debbono, tuttavia, essere considerati valedoli propter utilitatem”.

La *utilitas publica*⁶²³, como fundamento de la validez o invalidez de los actos emanados de sujetos desprovistos de alguno de los requisitos necesarios para revestir un cargo público, aparece también en dos fragmentos de Ulpiano: D. 26.5.8.1 (Ulp., 8 *de omn. trib.*)⁶²⁴ y D. 42.1.57 pr. (Ulp., 2 *disput.*)⁶²⁵.

El primero se refiere al pretor o al gobernador provincial que *“in furore aut dementia constituta”* nombra un tutor; en este caso considera CERAMI que el nombramiento del tutor no tendrá ningún valor ya que *“la utilitas publica non potrà mai realizzarsi nella ipotesi di atti posti in essere da furiosi”*⁶²⁶. En el segundo fragmento (D. 42.1.57 pr.) el vicio

A este respecto, DE ROBERTIS, *Dal potere personale alla competenza dell'ufficio*, SDHI, 8, Roma, 1942, pp. 216 ss., distingue entre *“capacidad a la función”* y *“capacidad al ejercicio de la función”*.

⁶²³ NAVARRA M., *Utilitas publica-utilitas singulorum tra IV e V d. C.*, en SDHI, 63, Roma, 1997, pp. 269 ss.; ALBURQUERQUE J. M., *Notas acerca de la utilitas publica*, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 5, Madrid, 2005.

⁶²⁴ *Si praetor vel praeses provinciae in furore aut dementia constitutos dederit tutorem, non puto valere; quamvis enim praetor vel praeses sit, nec furor ei magistratum abroget, attamen datio nullius erit momenti.*

⁶²⁵ *Quidam consulebat, an valeret sententia a minore viginti quinque annis iudice data... certe si magistratum minor gerit, dicendum est iurisdictionem eius non improbari.*

⁶²⁶ CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici...*, op. cit., p. 404.

La falta de un requisito personal como es la capacidad de entender no comportaba en sí la abrogación de la magistratura, esto es la remoción del cargo, no obstante el defecto físico padecido (<<*magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus*>>, Varrón, de

viene dado por la falta de la edad requerida, concretamente se plantea la validez de la sentencia dada por un juez menor de veinticinco años: Ulpiano contesta que la sentencia será válida (*valere sententiam*) en virtud de la *utilitas publica* a no ser que el juez sea menor de dieciocho años⁶²⁷.

También podemos incluir dentro de la figura del funcionario de hecho los casos de usurpación (*usurpatio*) o de ejercicio de funciones públicas sin título alguno; así, por ejemplo, el jurista Modestino responde en D. 50.2.10 (Mod., 1 *resp.*) que <<de ningún modo se hizo decurión por la sola inscripción en el registro el que no fue creado <nombrado> decurión con arreglo a la ley>>; asimismo citamos el fragmento de Ulpiano que se recoge en D. 49.1.12 (Ulp., 2 *de opin.*) en donde la *creatio* de un magistrado municipal no es realizada conforme a la ley sino que es afectuada por aclamación popular (*vocibus popularium postulatum*), con el indebido asentimiento del procónsul, *quod facere non debuit*⁶²⁸ : en este caso es innecesaria la apelación por parte del

lingua latina, 6, 30); sin embargo, los actos de jurisdicción voluntaria por él realizados serían inválidos. RAMPAZZO N., Quasi praetor non fuerit. *Studi...*, *op. cit.*, pp. 239-240.

⁶²⁷Vid. *supra* pp. 187 ss.

SOLAZZI S., *Saggi di critica romanistica. L'età del <<i>iudex>> e del <<procurator litis>>*, BIDR, 49-50, Milano, 1947, pp. 338 ss.; RAMPAZZO N., Quasi praetor non fuerit. *Studi...*, *op. cit.*, pp. 246 ss.

⁶²⁸SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, vol. 1, Milano, 1971, p. 34.

nombrado *dunviro* “por ser un asunto manifiesto”. Vemos, por tanto, con CERAMI⁶²⁹ que en estos casos la falta de investidura determina una “*carezza totale di potere*” lo que a su vez implica la invalidez de los actos administrativos eventualmente realizados.

Por lo que hace a la época postclásica, parece que se aprecia una orientación legislativa más severa respecto de los casos de usurpación de funciones públicas, y así citamos una constitución recogida en CTh. 6.5.2 (a. 384)= C. J. 12.8.1⁶³⁰ en la que se establece que <<si alguno hubiese usurpado para sí un lugar indebido, no se defienda con su ignorancia, y sea evidentemente reo de sacrilegio (*sacrilegii reus*)...>>; de igual forma en CTh. 6.35.13 (a. 386)= C. J. 12.28(29).4 se castiga con la pena de sacrilegio al que hubiese intentado usurpar el puesto que corresponda a otros de mayor antigüedad en el desempeño de dignidades palatinas o del gobierno provincial. No obstante, señala CERAMI que “*appare imperniato sul principio dell’invalidità e della elezione viziata e degli atti conseguenziali, ma ammette la possibilità di una convalida, per motivi di utilità pratica e*

⁶²⁹CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici...*, op. cit., p. 412.

⁶³⁰= Bas. 6.1.55

La rúbrica de C. J. 12.8 lleva por título: <<*Ut dignitatum ordo servetur*>>, es decir, <<De que se observe el orden de las dignidades>>.

di umanità, degli atti posti in essere dal funzionario di fatto nei casi in cui il vizio sia scoperto post officium...`631.

⁶³¹CERAMI P., *Problemi storico-dogmatici...*, op. cit., p. 408.

H) CONCLUSIONES.

I.

El nombramiento de los funcionarios era conferido mediante *codicilli* o *probatoriae*: los *codicilli* eran documentos emitidos por el *primicerius notariorum* para el otorgamiento de una *dignitas* mientras que las *probatoriae* eran emitidas por los *sacrae scrinia* u otros oficios palatinos para el nombramiento de los funcionarios del servicio civil (*militia*). El *codicillus* se concebía como el medio de comunicar el nombramiento del funcionario y no para definir sus competencias y deberes, función que era cumplida por los *libri mandatorum*; ahora bien, a lo largo de época postclásica dichos libros fueron integrados en los *codicilli* y así, Justiniano en su Nov. 17, recoge todo un catálogo de instrucciones y preceptos dirigidos a los gobernadores provinciales como guía para el buen desempeño de su cargo. Concretamente en el capítulo 1 se dice: <<es conveniente que recibiendo tu con pureza y sin sufragio alguno el cargo administrativo, conserves ante todo manos limpias para Dios, para nosotros y para la ley, no adquieras ningún lucro ni mayor ni menor, y no negocies capciosamente con los súbditos sino

que te contentes únicamente con las cosas que se te suministran por el Fisco>>.

Respecto de las *probatoriae*, las leyes insisten que debían ser *authenticae* y no copias, emitidas por la correspondiente secretaría y firmadas por el emperador. La falsificación de dicha firma se castigaba como *crimen maiestatis*. La entrada en la milicia sin contar con la correspondiente probatoria en regla era sancionada con la expulsión del funcionario, la confiscación de todos sus bienes y la pena de proscripción (exilio).

II.

Los funcionarios al acceder al cargo debían prestar un juramento de fidelidad al emperador y de realizar una actuación honesta a lo largo de su mandato; dicho juramento, que aparece como una garantía de tipo moral, tiene su antecedente en época republicana en donde los magistrados una vez elegidos debían jurar observar las leyes y administrar la justicia de forma imparcial, de tal manera que la omisión de dicho juramento implicaba la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la magistratura más allá de cinco días. En términos análogos se exigió dicho juramento en la legislación municipal romana.

En Nov. 8, Justiniano nos ha legado un testimonio de la fórmula del *iusiurandum* exigido a sus funcionarios en el que unifica el llamado

juramento de fidelidad al emperador con el juramento de buen gobierno; destacamos que se disponía que el funcionario jurase no haber obtenido el cargo con sufragio o concusión así como comportarse con pureza respecto de los súbditos, contentándose con las *annonas* que le estuviesen señaladas por el Fisco. En caso de que el funcionario no observase las promesas hechas en el juramento, Justiniano establece que el mismo quedará sujeto no solamente a las penas severas que le puedan corresponder, como podían ser la pérdida del cargo o de sus bienes, sino también al “*terribilis iudicium*” de Dios.

III.

Además de la garantía moral representada por el juramento algunos funcionarios tenían la obligación de dar una garantía económica del cumplimiento de sus funciones para hacer frente a los daños ocasionados tanto por los ilícitos cometidos en su gestión como por los ocasionados por su impericia o negligencia. Dicha garantía debía ser prestada por los funcionarios que gestionasen fondos públicos así como, en todo caso, por los gobernadores provinciales y los magistrados municipales que asumían las funciones de *duumviri*. Las garantías podían asumir la forma de cauciones, presentación de fiadores y constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles; incluso si el magistrado era un *filius* no emancipado y actuaba con la autorización de su padre éste debía responder como fiador de todos los actos del hijo en

su gestión pública. Particularmente, los fiadores de los magistrados municipales asumían la responsabilidad civil por los daños ocasionados al municipio por la actuación del magistrado pero, en ningún caso, la responsabilidad penal derivada del ilícito cometido la cual correspondía exclusivamente al magistrado en virtud del principio de personalidad de la pena.

IV.

Después de prestar juramento los funcionarios debían tomar posesión del cargo mediante la ceremonia de investidura la cual tenía lugar en el Bajo Imperio por medio de procedimientos y formas de ceremonial ya existentes y utilizados desde época del Principado y no sobre la base de modelos orientales. Los funcionarios después de tomar posesión del cargo debían ser inscritos en la matrícula de oficiales que se llevaba en los diferentes *officia*. La dirección de la matrícula se encargaba al *adiutor* del respectivo oficio y quedaba sujeta a la inspección de los más altos funcionarios e incluso del emperador estableciéndose la deportación y la confiscación del patrimonio de aquél si inscribía en la matrícula un número de empleados que sobrepase al permitido en el oficio.

V.

Los funcionarios que recibían su nombramiento debían pagar, a título de derechos de entrada, en el momento de su inscripción en la matrícula, diversas cantidades de dinero (*sportulae*), fijadas en un principio consuetudinariamente y más tarde determinadas por ley, a los funcionarios encargados de la expedición de los nombramientos y a los ayudantes de estos. Justiniano prohibió aceptar *sportulae* que no fuesen las legalmente debidas y, concretamente estableció que los gobernadores provinciales no debían satisfacer grandes cantidades de dinero a título de espórtulas castigando al que hubiese pagado una tasa mayor de la fijada legalmente con una multa de 30 libras de oro. Llama la atención que en este caso los oficiales del gobernador (cohortales) quedaban sujetos a una gravísima responsabilidad objetiva ya que tenían que satisfacer la misma multa impuesta al gobernador siendo además castigados con la pena capital. Por último, Justiniano en Nov. 8 reglamentó toda esta materia al menos para las dignidades.

VI.

En el ámbito municipal los magistrados eran responsables de la gestión de sus sucesores, por ellos elegidos, en el cargo. Ahora bien, dicha responsabilidad de los *nominatores* se hacía efectiva sólo si el magistrado nombrado, y en su caso su fiador, fuesen insolventes pudiendo el *nominator* ejercitar una acción de regreso contra aquél; sólo

en caso de que dicha acción resultase inútil sería también responsable el magistrado colega del nombrado.

El *dunvirado* era una magistratura anual y su elección debía hacerse conforme a lo establecido en la ley. En caso de que el nombramiento fuese legal no podía el *dunviro* rechazar su cargo sin causa justificada de tal manera que si huía y era posteriormente encontrado quedaba obligado al desempeño del mismo durante dos años y además era castigado con graves penas patrimoniales. Si el nombramiento hubiese sido ilegal podía impugnarlo apelando al gobernador provincial conforme al procedimiento legalmente establecido. Constantino fijó un plazo de impugnación de dos meses cuando el nombramiento hubiera sido hecho en presencia del interesado corriendo dicho plazo desde el momento en que el nombrado tuvo conocimiento de la noticia en caso de que dicho nombramiento hubiese sido hecho en ausencia de aquél; asimismo este emperador estableció a tal efecto un procedimiento especial de impugnación llamado <<*querimonia*>> (=querella) para este supuesto, pero más tarde, en el año 339, sus sucesores vuelven a calificar este último procedimiento como de apelación (*apellatio*).

El *defensor civitatis* tampoco podía rechazar injustificadamente su nombramiento siendo en tal caso obligado a aceptar este cargo y castigado con una multa de 5 libras de oro que se destinaba a la realización de obras públicas en la ciudad. Con la misma pena y a la

expulsión del cargo se castigaba al *defensor civitatis*, conforme a CTh. 1.29.6, cuando se demostraba que se hizo elegir por ambición.

VII.

El funcionario de hecho es aquél que asume un cargo público sin contar con alguno de los requisitos legalmente exigidos para el acceso a la función pública. En Atenas esta posibilidad quedó prácticamente excluida según de la reforma institucional establecida por Clístenes en el siglo VI a. C.. Sin embargo, tanto en la República romana como en época posterior se dieron a tenor de las fuentes numerosos casos llegando incluso al supuesto extremo del esclavo fugitivo Barbario Filipo que haciéndose pasar por ciudadano libre fue elegido pretor a finales de la República. La solución dada por la jurisprudencia romana consistió en imponer, por un lado, el merecido castigo al culpable, y por otro, establecer *propter utilitatem causam*, la validez de los actos realizados por el mismo atendiendo a la buena fe de los ciudadanos y siempre que no concurriesen circunstancias especialmente agravantes, como es el caso de la locura del funcionario de hecho. No obstante, en la legislación postclásica se aprecia una orientación más severa hacia los casos de usurpación de funciones públicas y así se establece en la ley que si alguno hubiese usurpado para sí un puesto indebido, no se defienda con su ignorancia, y sea evidentemente reo de sacrilegio.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CURSO DE SU CARRERA ADMINISTRATIVA

A) LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DE LA ADMINISTRACIÓN IMPERIAL: EL DEBER DE OBEDIENCIA Y RESPETO DE LOS FUNCIONARIOS HACIA SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS.

DE FRANCISCI nos refiere que la reorganización de los oficios llevada a cabo por Diocleciano y Constantino “otorgó a estos un carácter unitario y rigurosamente jerárquico”⁶³². El emperador constituía el vértice de este sistema y todos los funcionarios estaban a él subordinados. En este sentido BÖCKING⁶³³ habla de una “*hierarchia iurisdictionis*” junto a la cual se daba una “*hierarchia honoris*” que no siempre coincidía con la primera.

El sistema de carrera funcional, utilizando una terminología moderna, se funda en el Bajo Imperio en la existencia de categorías personales jerarquizadas. En una ley de Valentiniano II recogida en CTh. 6.7.1 (a. 372) y dirigida al prefecto de Roma, *Ampelius*, se fijó una nueva jerarquía de los altos funcionarios así como de las equivalencias

⁶³²DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano, op. cit.*, p. 102.

entre las funciones civiles y las militares: las dignidades fueron divididas en tres categorías que comportaban títulos honoríficos; en primer lugar estaban los *illustres*, entre los que se encontraban los prefectos del pretorio, el prefecto de la ciudad, el *praepositus sacri cubiculi* y los *magistri militum*; después venían los *spectabiles* que eran los condes del consistorio (*quaestor sacri palatii*, *magister officiorum*, *comes sacrarum largitionum* y *comes rerum privatarum*) y los procónsules; y en una escala inferior estaban los *clarissimi* (el *magister scriniorum*⁶³⁴, los pretores, los cuestores y los gobernadores provinciales)⁶³⁵. Junto a los anteriores, podemos citar a los *perfectissimi*, título que podían obtener aquellos funcionarios que hubieran desempeñado un puesto del rango de los *clarissimi*, así como aquellos a quienes se les concedía de modo honorífico después de haber terminado el tiempo de su servicio en determinadas funciones⁶³⁶; y por último, los *egregii*, distinción acordada

⁶³³B. E. BÖCKING, *Notitia Dignitatum*, Bonn (ed. 1839-1853).

⁶³⁴Jefe de las oficinas centrales de la Administración. BURY J. B., *Magistri scriniorum, antigrapheis and rhepherendarioi*, en *Harvard Studies Classical Philology*, 21, 1910, pp. 23 ss.

⁶³⁵PIGANIOL A., *L'empire chrétien...*, *op. cit.*, p. 208; CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine ...*, *op. cit.*, pp. 432-434.

⁶³⁶CTh. 8.1.6; CTh. 8.1.10. SERRIGNY D., *Droit public et administratif ...*, *op. cit.*, I, p. 43.

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, I, p. 44. CHASTAGNOL A., *Les modes de recrutement du sénat au IV siècle après J. C.*, en Cl. Nicolet (éd.), *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Caen, 25-26 avril 1969), Paris, 1970, pp. 187 ss.; CECCONI G. A., *Aviano Simmaco, Costante e l'andamento delle*

a título honorífico a los que hubiesen desempeñado notablemente un cargo administrativo civil o militar (CTh. 6.22.1). Parece ser que esta última distinción se convirtió en práctica habitual, perdiendo de esta forma su valor (Lactancio; *div. inst.*, v. 34: <<*nemo egregius, nisi qui bonus et innocens fuerit*>>).

Por otro lado, las dignidades -y los oficios- se clasificaron también en efectivas (*in actu praepositi, in actu positi* o *statuti*), vacantes (*supernumerarii*) y honorarias (*honorarii* u *honorati*): las dignidades efectivas eran desempeñadas por los funcionarios que estaban en el servicio activo; las vacantes eran ocupadas por funcionarios que estaban a disposición para desempeñar un cargo por haber transcurrido el tiempo para el que fueron nombrados anteriormente y que, después del ejercicio de este último, se les concedía a título honorífico el rango inmediatamente superior⁶³⁷, y eran nombrados por el emperador para ocupar –al menos transitoriamente- un puesto superior de tal manera que si bien sus nombres figuraban en la *matricula*, dichos funcionarios

carriere senatorie nel tardo Impero (in margine all'interpretazione di AE. 1998, 217), SDHI, 62, Roma, 1996, pp. 343 ss.

⁶³⁷ ... *dignitates nullus nec annonas nec strenas perciperet* ...

Por ejemplo, si el *comes sacrarum largitionum* se retiraba sin haber sido nombrado como titular de una prefectura, tenía derecho a las insignias y a los honores de dicha prefectura y era asimilado a los ex-prefectos. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, p. 42. NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, p. 39, ve en esta categoría de funcionarios un paralelismo con la situación del funcionario cesante del siglo XIX.

no recibían ningún tipo de emolumento (CTh. 6.30.15, CTh. 6.30.17)⁶³⁸; por último, los *honorarii* u *honorati* eran dignidades que habían recibido el rango y el título correspondientes a un oficio pero que no habían servido nunca en la milicia, estaban desprovistos de toda función, y simplemente habían recibido un diploma honorífico de una dignidad (*honorarii codicilli*), de tal manera que estas personas ostentarían una *dignitas* pero sin la *administratio*⁶³⁹.

Podemos añadir el dato de que a lo largo del siglo V había en el Imperio Romano de Oriente una fuerte presión para entrar en el servicio activo ya que por un lado se había fijado un número máximo de puestos efectivos (*statuti*) y por otro lado había un gran número de supernumerarios a la espera de un puesto en la Administración. DE MARTINO considera que la atribución de dignidades vacantes y sobre

⁶³⁸La figura de los *supernumerarii* en Derecho Romano guardaría relación con las “cartas expectativas” existentes en Castilla en la Edad Media: éstas eran un mecanismo de atribución de oficios por medio del cual el rey otorgaba un oficio a un particular sin esperar a que el cargo quedase vacante; el investido -que como contrapartida había satisfecho una cantidad a las arcas del Estado- adquiriría un documento en el que contaba con una promesa real de concesión de un oficio cuando éste quedase vacante: <<*si qua vacaret, alioquin proximo vacatura*>>. Dicho documento llamado “carta expectativa” o “carta en blanco” confería una expectativa de derecho sobre el cargo en cuestión. GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público en Castilla...*, op. cit., pp. 149, 150.

⁶³⁹En Nov. 71 *prae*f., Justiniano nos dice respecto del cargo de prefecto honorario que <<habiéndose concedido respecto a ella las credenciales por el emperador (...). Mas la llamaban así, porque no confería a aquellos a quienes se les daba, ninguna otra cosa sino el puro honor>>.

todo la concesión de dignidades honorarias servía tanto para satisfacer las exigencias de premiar servicios prestados como para apaciguar las ambiciones que no se podían o no se querían satisfacer de otra forma⁶⁴⁰.

Además, vemos que en una ley de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III contenida en C. J. 12.8.2 pr.⁶⁴¹ (a. 440-441) se estableció el rango entre las diferentes dignidades con la finalidad de fijar el orden del ceremonial: en primer lugar venían las que tuviesen una efectiva administración (*in actu positi* o *inter agentes*), después las vacantes que habían recibido el *cingulum* en presencia del emperador (*vacantes praesentes* o *supernumerarii*), posteriormente, las vacantes que hubiesen obtenido el *cingulum* en ausencia del emperador (*vacantes absentes* o *supernumerarii*), a continuación, los *honorarii* que hubiesen obtenido sus credenciales en presencia del emperador (*honorarii praesentes*), y por último, los *honorarii* (*honorarii absentes*) que estando ausentes se les enviaban las credenciales a su lugar de residencia⁶⁴².

⁶⁴⁰ DE MARTINO F., *Storia della costituzione...*, vol. V, *op. cit.*, p. 315.

⁶⁴¹ = Bas. 6.1.56.

⁶⁴² C. J. 12.8.2 pr. (Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro PP): *Omnes privilegia dignitatum hoc ordine servanda cognoscant, ut primo loco habeantur ii, qui in actu positi illustres peregerint administrationes: secundo venient vacantes, qui praesentes in comitatu*

También dentro de la escuela de los *agentes in rebus* la distribución de sus miembros se hacía con arreglo a diversas categorías; vemos así que en época del emperador León existían cinco rangos dentro de la corporación, cuya composición era la siguiente: *ducenarii*, *centenarii*, *biarchi*, *circitores* y *equites* como se recoge en una constitución de León contenida en C. J. 12.20.3 pr.⁶⁴³.

Referido todo lo anterior, vemos que la organización jerárquica de la Administración imperial determinaba el deber de obediencia y respeto de los funcionarios inferiores hacia sus superiores jerárquicos. Dicha *reverentia* u *honorificentia* debida se recoge en numerosas disposiciones del Código Teodosiano y del Código de Justiniano, castigándose de esta manera el desacato o desprecio de los funcionarios inferiores hacia los que ocupan los puestos más altos, en la mayoría de los casos, con la imposición de multas:

- C. J. 1.40.5 (a. 364) establece que los inferiores deben guardar el debido respeto a los jueces de grado superior (<<*potioris gradus iudicibus ab inferioribus competens reverentia tribuatur*>>), si bien –

illustris dignitatis cingulum meruerint: tertium ordinem eorum prospicimus, quibus absentibus cingulum illustris mittitur dignitatis: quartum honorariorum, qui praesentes a nostro numine sine cingulo codicillos tantum honorariae dignitatis adepti sunt: quintum eorum quibus absentibus similiter sine cingulo mittuntur illustris insignia dignitatis.

⁶⁴³Por encima de estas categorías estaba el jefe directo del departamento: el *princeps scholae agentum in rebus*. SCARCELLA, A. S., *La legislazione di Leone...*, op. cit., pp. 361-362.

continúa la constitución- no se infiere al superior ninguna injuria cuando tratándose de la utilidad pública el juez inferior hubiere investigado la verdad.

- C. J. 1.48.2 (a. 384) recuerda a los jueces que han de rendir los honores debidos a los funcionarios más altos (<<*honorificentiam esse debitam praestandam*>>) y que no pueden utilizar un lenguaje poco respetuoso; concretamente, dice la ley lo siguiente: <<y no se atrevan a llamarles hermanos en sus comunicaciones>>, ya que en caso contrario se castigará con una multa al cuerpo de los alguaciles, al que se le responsabiliza de la observancia de estas normas (<<*apparitione mulctanda, cuius haec est cura*>>).

- CTh. 6.35.13 (a. 386) establece la jerarquía en el rango de los palatinos según su antigüedad; en caso de que alguno de ellos asuma funciones de otro más antiguo en el cargo por ``*temeraria usurpatio*`` comete crimen de sacrilegio.

- CTh. 6.26.5 = C. J. 12.19.2 (a. 389) castiga con una multa de tres libras de oro al *princeps* de la oficina de los jueces-gobernadores provinciales o a los alguaciles de la sala si no hubiesen guardado la reverencia en el saludo a los funcionarios que desempeñan su cargo en las sacras secretarías del emperador. *Vid.*, CTh. 12.29.2 = C. J. 1.48.3 (a. 389).

- Otros supuestos de falta de obediencia o respeto de los funcionarios hacia sus superiores jerárquicos se contienen en: CTh. 6.30.4 (a. 379), CTh. 1.32.6 (a. 387), CTh. 1.7.2 (a. 393), CTh. 6.18.1 (a. 412)⁶⁴⁴.

⁶⁴⁴ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op.

**B) PROMOCIÓN Y ASCENSO DE LOS FUNCIONARIOS
SEGÚN CRITERIOS DE ANTIGÜEDAD Y MÉRITOS:
REGLAMENTACIÓN Y SANCIONES.**

La promoción y ascenso de los funcionarios es característico de una estructura u organización corporativa de los diferentes *officia*. Y si bien, este principio jerárquico que comprende categorías y escalafones parece encontrarse en Europa a finales del siglo XVIII⁶⁴⁵, podemos decir que se encuentra ya en la Administración imperial romana y que el Derecho Romano reguló las promociones y ascensos de sus funcionarios.

La promoción y el ascenso venía determinado en el Bajo Imperio principalmente por la antigüedad en la matrícula (CTh. 6.30.9: <<*prioribus decedentibus locus sequentibus detur*>>), y así el funcionario debía cumplir un número determinado de años en el cuerpo para poder alcanzar una categoría superior y los méritos aparecían

cit., pp. 87-88.

⁶⁴⁵LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, *op. cit.*, p. 118.

también como requisito para obtener una promoción en el escalafón, con lo que resultaba de ello un sistema de promociones y ascensos que podríamos calificar hoy en día como de “antigüedad cualificada”⁶⁴⁶.

El paso de una categoría a otra superior siguiendo un orden de antigüedad y atendiendo a los méritos del funcionario⁶⁴⁷ se recoge sobre todo en las fuentes jurídicas referidas a los *agentes in rebus*:

- CTh. 1.9.1 (a. 359) = C. J. 1.31.1 dispone que nadie alcance el puesto superior sino es por riguroso escalafón (*matricula decurrente*), de tal forma <<que para las administraciones salgan aquellos a quienes llama el orden que ocupan en la Administración>>.
- CTh. 6.27.4 (a. 382) establece que los *agentes in rebus* no podían ser promocionados sino después de cinco años de servicio satisfactorio.
- CTh. 1.9.2 (a. 386) manda que <<no deben los inferiores pedir o esperar cargos de más elevada categoría; y por tanto nadie

⁶⁴⁶ CTh. 8.1.2 (*locus, ordo, meritum*); CTh. 1.5.8; CTh. 6.5.1; CTh. 6.26.11; CTh. 6.32.1; etc...

⁶⁴⁷ En la realidad de los hechos ello no siempre era así y Amiano Marcelino (26.10.7) nos ha dejado ejemplos de promociones por soborno y *ambitus*.

nos solicite que alguno de los agentes del servicio secreto sea incorporado al servicio imperial, a cargo más alto, a no ser que tu proposición <*magister officiorum*> ponga de manifiesto que debe ser aceptado, siempre que conste que el postulante puede estar en puesto más alto. Pero ninguno altere el orden ni los estipendios del servicio imperial, aunque mediante obrepción hubiese presentado un permiso de nuestro númen; y si se demostrare que ha presentado un documento de ese tenor, sea vuelto al lugar del cual indecorosamente se ha elevado, de manera que antecede en grado, a los demás, sólo aquél a quien unos estipendios mayores o una labor esmerada, pusieren en primer término>>.

- CTh. 6.27.14 (a. 404) = C. J. 12.20.1 establece que debe suceder al funcionario que ha fallecido el que por orden de estipendios (*ordine stipendiorum*) y méritos de trabajo (*laborum merito*) le seguía para el grado del cargo, diciendo que ninguno de los *agentes in rebus* intente invadir el lugar de otro que haya fallecido, sino que tan pronto como éste hubiese fallecido le suceda.

MALAVÉ OSUNA B., *El acceso y la promoción de los funcionarios en la administración del Bajo Imperio*, en Revista de estudios histórico-jurídicos, 27, Santiago de Chile, 2005, pp. 101 ss.

- CTh. 1.9.3 (a. 405) dispone que <<...los laboriosos sean preferidos a los indolentes, los presentes a los ausentes y a los que constantemente se ocupan de sí mismos (...), cualquiera llegue a nuestro servicio, no sólo por su noble linaje, sino también por su mucha industria y trabajo>>.
- CTh. 1.6.12 (a. 424) = C. J. 1.28.5 establece que el *primicerius* del oficio del prefecto del pretorio (encargado del personal de dicho oficio), en caso de que alguno de sus empleados hubiese perdido el puesto que ocupaba en la administración bien por fallecimiento o por otra razón, deberá conceder el puesto vacante al que le siga en la matrícula.

Era competencia del *magister officiorum* la concesión de los ascensos dentro del cuerpo de los *agentes in rebus* (CTh. 1.9.3: <<Tu magnificencia <*magister officiorum*> examinará y perfeccionará el escalafón de la corporación de los agentes del servicio secreto <*agentes in rebus*>, con arreglo a nuestra autorización ...>>), si bien es verdad que el principio de antigüedad no siempre era respetado en este cuerpo siendo el ascenso concedido en ocasiones arbitrariamente por el *magister* o incluso por el mismo emperador (CTh. 6.27.3; 7; 9; 19) a instancias por lo general de la mayoría de la escuela de *agentes in rebus* (CTh. 6.27.4).

Asimismo en una constitución recogida en CTh. 6.32.2 (a. 422) = C. J. 12.25 (26).2 se menciona un orden que había de seguirse en los

ascensos de los funcionarios en general de tal forma que estos se agrupaban en tres niveles (*formae*) y la promoción a los puestos vacantes en la primera clase o nivel debía realizarse alternativamente o bien con los funcionarios en activo (*statuti*) de la segunda clase o con los supernumerarios de la primera⁶⁴⁸. Y se dispone en la constitución que aquél que intentase saltarse el orden referido tratando de obtener un puesto sin atender su turno será castigado con el retroceso al último puesto de los supernumerarios de tercera clase⁶⁴⁹.

No obstante, el orden de promoción de los funcionarios basado en la antigüedad de los mismos podía verse excepcionalmente alterado a tenor de lo dispuesto en C. J. 12.19.7 pr. (a. 443-444?) en donde se dispone que se respete dicho orden de antigüedad de los que militan en las sacras secretarías salvo que el funcionario más antiguo sea superado por uno que lleve menos tiempo en el ejercicio de sus funciones <<de manera que apoyado en el testimonio de quince jefes de la misma secretaría, prestado bajo juramento, sea considerado más digno que los predecesores>>.

Otra cuestión que se planteaba es la relativa al supernumerario que obtenía un puesto efectivo en la Administración (*statuti*); dicho

⁶⁴⁸CHASTAGNOL A., *Constantin et le Sénat*, en Atti dell' Accademia Romanistica Constantiniana. Il Convegno internazionale, Perugia, 1976, pp. 49 ss.

supernumerario debía abonar al subsecretario (*melloproximus*) 250 sólidos en concepto de *sportulae*⁶⁵⁰ y quince o veinte sólidos al auxiliar del subsecretario ya que si rehusase pagar esta cantidad o, en cualquier caso, si no quisiese acceder a la condición de numerario, se permitía en C. J. 12.19.7.2(1)-3-4 (a. 443-444?)⁶⁵¹ al siguiente supernumerario la posibilidad de ofrecer dicha cantidad y de subrogarse en la posición del primero. No obstante, el primer supernumerario conservaba su rango y se le permitía obtener un puesto de *statuti* en la siguiente oportunidad dentro de la Administración ordinaria.

Por último, respecto de la promoción y ascenso de los funcionarios palatinos y de los oficiales de los gobernadores provinciales referimos, en primer término, que esta materia fue reglamentada para

⁶⁴⁹ JONES A. H. M., *The Later Roman Empire...*, I, *op. cit.*, p. 571; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen....*, *op. cit.*, p. 39.

⁶⁵⁰ Vid. *supra* pp. 299 ss.

⁶⁵¹ Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Nomo, magistro officiorum: *Illum tamen, qui locum statuti meretur, proximo quidem ducentos quinquaginta solidos, melloproximo vero vel adiutori pro consuetudine uniuscuiusque scrinii viginti aut quindecim solidos offerre praecipimus. Quodsi quis de supernumerariis, qui in statuti locum subire debuerat, ne pecuniam offerat, statuti etiam gradum recusare voluerit, sequenti tam offerendae quantitatis praedictae quam subrogandi licentia permittatur, ita videlicet, ut si secundus etiam vel tertius vel cuiuslibet numeri in eadem excusationis voluntate duraverit, accedenti semper eadem copia, quam praecedens excusaverat, tribuatur. Hos autem, qui ad statutorum ordinem progredi noluerint, nec de suo gradu volumus removeri, et, quum vacaverit statuti locus, condicionem, quam antea repudiaverant, id est offerendae pecuniae et adipiscendi statuti locum, liberam habere praecipimus facultatem.*

los palatinos por una ley de Valente que no ha llegado hasta nosotros pero que es recordada en CTh. 6.30.13 (a. 395)⁶⁵². Además podemos añadir que el palatino que hubiese alcanzado los primeros puestos de la milicia podía continuar su carrera en la Administración imperial sin perder los privilegios ya conseguidos; este principio se recoge en una constitución de Constantino del año 319 (CTh. 6.35.3 = C. J. 12.1.3: <<*maior dignitas nulli debet circa prioris dignitatis seu militiae privilegia praeiudicium facere*>>⁶⁵³).

En C. J. 12.59(60).7 (a. 438-443), de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, se dice, respecto a los oficiales de los gobernadores provinciales, que <<después de que hubieren desempeñado con continua laboriosidad su anterior empleo, admitiremos a los que acudan a los privilegios de mejor dotada milicia, que hubieren creído haberlos de solicitar con el deseo de alcanzar un honor, no a los que ambicionaren con el propósito de satisfacer su codicia, para que colocados en mejor posición, u oculten los delitos que se demuestre que cometieron antes, o puedan cometer otros impunemente>>⁶⁵⁴. Asimismo, se establece en C.

⁶⁵²DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., pp. 145-146.

⁶⁵³<<Una dignidad mayor no debe causar perjuicio a nadie respecto a los privilegios de una dignidad anterior o de un cargo en la milicia>>.

⁶⁵⁴*Ad splendidioris militiae privilegia, posteaquam priorem continuo labore compleverint, eos venientes admittimus, qui ea voto adipiscendi honoris crediderint expetenda non eos qui studio*

J. 12.7.2.4(3) (imp. Zenón) que <<hemos considerado (...) que a nadie le sea alguna vez lícito por ambición o por favor, o con pretexto de cualquier ocasión, o con motivo de trabajos o de cuidados perturbar la serie de los grados públicos, y menospreciada la razón de tiempos, ser antepuesto a los que ya militaban, y arrebatado por apresuramiento los beneficios que promete una vejez ya amparada por largos y continuados servicios. Debiéndose añadir también esto, que el primicerio obtenga según la antigua costumbre, después de haber cesado en el cargo público de los contadores, la dignidad de *magister officiorum* como si hubiese desempeñado el mismo cargo administrativo cuya dignidad consigue, debiendo de ser antepuesto a todos los que estén vacantes, aunque le precedan en tiempo>>.

exercendae cupiditatis ambierint, ut velut in meliore fortuna positi aut ea scelera quae prius commisisse doceantur occultent aut alia deinceps possint impune committere.

C) LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LOS *OFFICIA*: RELACIÓN DE FUENTES.

Para hacernos una idea de la notable cantidad de personas que prestaba sus servicios en las oficinas de los altos funcionarios de la Administración del Bajo Imperio podemos referir que en el año 399 el *comes sacrarum largitionum* de Oriente disponía de 834 oficiales (concretamente 224 *statuti* y 610 *supernumerarii*: CTh. 6.30.15)⁶⁵⁵, y el de Occidente 546 oficiales en el año 399 (CTh. 6.30.16). El *officium* del prefecto de la ciudad de Roma a finales del s. IV lo cifra CHASTAGNOL en aproximadamente unos 1000 oficiales⁶⁵⁶. Sabemos también que el conde de Oriente no podía tener más de 600 oficiales (CTh. 1.13.1, a. 394), y que los vicarios de la prefectura de África tenían en el año 365 (CTh. 1.15.5) 300 empleados; asimismo, en el año 430 el número de *statuti* entre los *agentes in rebus* era de 1174 (CTh. 6.27.3),

⁶⁵⁵En C. J. 12.24(25).7 pr.-1 (a. 384) dirigida a Trifolio, *comes sacrarum largitionum*, se determinaba el número de dignidades que debía haber en cada secretaría (*scrinia*) del *officium sacrarum largitionum* y se establecía también que a éstas <<les está cerrado el paso para ambicionar otras, aunque alguno hubiere logrado conseguir por *emendicato suffragio* (favor mendigado) un beneficio especial>>.

ascendiendo su número a 1198 *agentes* en el año 465 (C. J. 12.20.3 pr.); por último, podemos añadir el dato de que en época de Justiniano el prefecto del pretorio de África contaba con 396 empleados (C. J. 1.27.1). A este respecto, CHURRUCA nos dice que el número total de funcionarios en el Bajo Imperio posiblemente se elevaría a unos 30.000 o 40.000⁶⁵⁷.

Ante el quizá excesivo número de funcionarios existente en los respectivos *officia*, no es de extrañar la política de los emperadores dirigida –también por motivos fiscales- a poner límites numéricos que en ningún caso debían ser superados; así, como hemos visto, Teodosio, Arcadio y Honorio en CTh.1.13.1 (a. 394) = C. J. 12.56(57).1 limitaron a seiscientos el número de los *apparitores* (oficiales) del conde de Oriente <<los que ciertamente hemos visto que bastan sobradamente para las necesidades públicas>>⁶⁵⁸, y en CTh. 1.15.5 (a. 365), dirigida a

⁶⁵⁶CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 228.

⁶⁵⁷CHURRUCA J., *Introducción histórica...*, *op. cit.*, p. 198. No obstante, CARILE A., *Gerarchie e caste*, en *Morfologie sociali e culturali in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo* (V Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo), Spoleto, 1998, p. 141, considera que tampoco puede decirse que hubiese un gran número de funcionarios ya que en la época de máxima expansión del Bajo Imperio, éste no tendría más de 30.000 funcionarios <civiles> entre burócratas y dignatarios, para una población en torno a los 40 millones de habitantes.

⁶⁵⁸<<quos quidem publicis necessitatibus novimus abunde suppetere>>. ROBINSON O., *Private prisons*, RIDA, 15, Bruxelles, 1968, pp. 389 ss.

Draconte, vicario de África, se establecía que el personal de la vicaría de la prefectura de África no sobrepasara de trescientos empleados.

Sobre esta materia podemos mencionar las siguientes constituciones imperiales que limitan el número de los funcionarios matriculados en los distintos *officia* haciendo responsables del cumplimiento de estas leyes a los superiores jerárquicos respectivos:

- CTh. 1.15.12 (a. 386), Valentiniano, Teodosio y Arcadio, a todos los vicarios: <<sepan que en las diócesis a ellos <vicarios> confiadas sólo trescientos pueden prestar servicios...>>; los mismos emperadores en CTh. 1.15.13 (a. 395) limitaban a doscientos los empleados que podían prestar sus servicios en la diócesis de Asia, que comprendía en esta época ocho provincias.
- CTh. 1.12.6 (a. 398), los emperadores Arcadio y Honorio limitan a 400 los funcionarios empleados como oficiales de justicia de los vicarios y de sus legados, estableciendo que si, con temeridad, se sobrepasa este número se castigará la negligencia del gobernador provincial con una multa de cinco libras de oro por cada uno que haya entrado de más, y al *officium* de este último con diez; y en C. J. 12.57(58).9, de los mismos emperadores, se dispone que en la provincia de Iliria sólo haya cien empleados en el *officium* de cada gobernador provincial y que <<excediendo de este límite no aspire ninguno

a esta milicia, o no continúe en ella por connivencia de los gobernadores>>.

- En CTh. 6.27.23 (a. 430) se establece que el número de los *statuti* en el cuerpo de los *agentes in rebus* no debe sobrepasar de 1174, y en caso de que supere este número la responsabilidad recaerá sobre el *magister officiorum*.
- En C. J. 2.7.11 pr. (a. 460) el emperador León establece el número máximo de 150 abogados que pueden asesorar al prefecto del pretorio; y en C. J. 12.19.10 fija el número de los oficiales pertenecientes a los *scrinia* del *magister officiorum* Iliriciano: 62 en la secretaría de memorias, 34 en la secretaría de epístolas y en la de libelos. De igual forma, en C. J. 12.20.3 pr. se determina el número máximo de los componentes de la escuela de *agentes in rebus*: 48 ducenarios, 200 centenarios, 250 biarcas, 300 circitores y 400 caballeros.

Esta política dirigida a limitar el número de funcionarios, principalmente por motivos económicos, continúa en época de Justiniano:

- En C. J. 1.27.1.13(3) (a. 534) se fija que el prefecto del pretorio de África no tenga más de 396 empleados en las diversas secretarías y oficinas, y que en las de los consulares

y de los gobernadores provinciales no haya más de cincuenta funcionarios en cada una.

- En C. J. 12.19.13.2, dirigida a Próculo *-quaestor sacri palatii-*, el emperador se lamentaba de que no se había respetado el número de auxiliares que se había fijado para trabajar en las sacras secretarías (doce en la de memorias y siete en la de epístolas y libelos), y dispone que en el futuro <<a todos los demás se les prohíba aspirar a este título hasta tanto que con los que salgan y se retiren pueda disminuir la aglomeración vedada, y que quede el número legítimo...>>; esta misma idea se recoge en C. J. 12.19.15 pr.-2 (a. 527) dirigida a Taciano, *magister officiorum*⁶⁵⁹.
- En Nov. 26.2 (a. 535) se establece que el pretor de Tracia no tenga más de 100 oficiales a su servicio, y esta misma cifra es asignada al gobernador del Helenoponto en Nov. 28 (a. 535); en Nov. 10, del mismo año, Justiniano limita a ocho el número de los refrendarios del palacio, pero se establece que los que

⁶⁵⁹ Señala BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III*, op. cit., p. 130 que "questo testo e la pragmatica di Zenone contenuta in C. 12.21.8 ci testimoniano ciò che ben si poteva immaginare: questi frequenti provvedimenti vantaggiosi per l'una o per l'altra categoria di impiegati dello stato erano spesso emanati per soddisfare le richieste degli interessati, presentate all'imperatore ora direttamente, ora indirettamente, tramite altri funzionari: per lo più i responsabili degli uffici stessi".

estuviesen ocupando ya este cargo -que en ese momento eran catorce- no sean expulsados del servicio sino que permanezcan en esta situación <<sin que sea agregado absolutamente nadie, hasta que el número llegue al de ocho individuos>>. Se dispone también que en caso de que alguien solicite el puesto de refrendario, estando cubierto el cupo, sea castigado con la pena de diez libras de oro y sea despojado de su cargo.

**D) NORMATIVA SOBRE PERMANENCIA Y REPETICIÓN EN
EL CARGO: ESPECIAL REFERENCIA A LA
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO
DE SU INCUMPLIMIENTO.**

DE MARTINO⁶⁶⁰ constata que en la Administración imperial romana se dio la tendencia histórica de conferir sus cargos a los altos funcionarios civiles (*dignitates*) por breves periodos de tiempo. La brevedad –considera este Autor- venía motivada en muchas ocasiones no tanto por razones de orden interno sino por la gran masa de aspirantes que deseaban obtener un alto cargo en la Administración y, de todas formas, la duración en el cargo era muy variable dependiendo del arbitrio del emperador que a su vez estaba sujeto a los consejos y presiones de la Corte.

El plazo medio de permanencia para los altas dignidades era generalmente de uno o dos años; así vemos que la duración media en el cargo de los prefectos de la ciudad de Roma era de un año durante el

⁶⁶⁰DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana...*, vol. V, *op. cit.*, p. 331.

periodo que va desde el 290 hasta el año 424 (en 133 años hubo 129 prefectos, si bien hay alguna excepción como la del *praefectus urbi Valerius Maximus Basilius* que permaneció durante cuatro años, del 319 al 323, en dicha prefectura); también apuntamos que desde el año 476 los prefectos de los reyes “bárbaros” fueron nombrados regularmente por un periodo de un año (año indiccional) como refiere Casiodoro (*Var.*, 1,42,3, a. 509)⁶⁶¹. Sin embargo, respecto de la prefectura del pretorio señala DE MARTINO⁶⁶² que, aunque nuestras informaciones varían mucho de prefectura a prefectura y en los diversos periodos, el tiempo medio estaría entre los tres o cuatro años.

La duración anual o bianual en el cargo se recoge también en las fuentes relativas al *advocatus fisci*: en C. J. 2.7.8 (a. 440) y C. J. 2.7.10 (a. 452) se establece una duración de un año y, posteriormente, en C. J. 2.7.12 (a. 463), C. J. 2.7.13 (a. 468), C. J. 2.7.17 pr. (a. 486), C. J. 2.7.22(3) (a. 505) y C. J. 2.7.24(5) pr. (a. 517) se amplía a dos años⁶⁶³.

De todos modos podemos constatar que no se encuentran en las fuentes una reglamentación general en esta materia, ya que, por ejemplo, respecto del *comes sacrarum largitionum* vemos como alguno

⁶⁶¹ CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 187-188.

⁶⁶² DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana...*, vol. V, *op. cit.*, p. 329.

⁶⁶³ AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci...*, *op. cit.*, p. 123.

de los funcionarios que desempeñaron esta dignidad permanecieron menos de un año en su puesto, y por el contrario, se dieron casos como el de *Tatianus* que se mantuvo durante seis años (374-380) en dicho cargo. Destacamos, sin embargo, la estabilidad en los altos cargos de la Administración en época del emperador Valente⁶⁶⁴.

Frente a lo anterior, vemos que los funcionarios de los diferentes oficios (*militia officialis*), debían, en principio, hacer toda su carrera profesional en la oficina en la que entraron tras su nombramiento. De esta manera existía una normativa en virtud de la cual se prohibió pasar de un “buró” a otro durante el periodo de servicio: CTh. 6.30.5 (a. 383)= C. J. 12.23(24).5: <<*quidam post impletum ordinem militiae palatinae, quam gesserant, honoremque transactum ad exceptorum scrinia transire nituntur. hac igitur lege sancimus, ut nulli prorsus dehinc ista audendi relinquatur occasio: sed unusquisque eius scrinii, quod primum militando elegit, ordinem persequatur, nec in alterius loco finem militiae requirat, qui iam proprii ordinis transegerit principatum*>>⁶⁶⁵.

⁶⁶⁴DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 113.

⁶⁶⁵<<Algunos, después de cumplido el término del empleo palatino, que habían desempeñado, y terminado su cargo honorífico, intentan pasar a las secretarías de los escribanos. Mandamos, pues, por esta ley, que a nadie absolutamente se le deje en lo sucesivo ocasión para atreverse a ello; sino que cada cual siga en el orden de la secretaría que primeramente al emplearse eligió...>>. Ya anteriormente, en el año 341, se había prohibido (CTh. 8.2.1) a los hijos de los escribas y *tabularii* locales el acceso a la milicia palatina.

La regla general era la permanencia en la misma oficina durante un periodo de veinte o veinticinco años: así en CTh. 8.7.6 (a. 326) se dice que los oficiales del prefecto de la ciudad de Roma debían ocupar su cargo durante veinticinco años, y en CTh. 6.26.8 (a. 396) = C. J. 12.19.3, se habla de veinte años para los oficiales de los *scrinia* palatinos⁶⁶⁶.

Desde mediados del s. IV, concretamente a partir del año 365, se publicaron varias disposiciones (CTh. 7.1.7; CTh. 8.7.9; CTh. 8.7.11; CTh. 8.7.14-15; CTh. 8.4.21-22) que establecieron con carácter general la ilicitud de los cambios de una milicia a otra durante el periodo de servicio ya que con anterioridad a esta fecha era frecuente, por ejemplo, que los cohortales provinciales intentasen pasar a las milicias palatinas⁶⁶⁷, tal y como nos cuenta Símaco (*Rel.* 23.8) respecto del palatino *Bonifatius* que había sido un antiguo empleado de la prefectura urbana.

Entre las constituciones que recuerdan esta prohibición citamos las siguientes⁶⁶⁸:

⁶⁶⁶También los *agentes in rebus* (CTh. 6.27.19; CTh. 6.28.8) debían permanecer veinticinco años en su puesto: <<*et si qui agens in rebus post XXV annorum curricula...>>.*

⁶⁶⁷Vid. *supra* pp. 257 ss.

⁶⁶⁸Otras disposiciones que hacen referencia a los cambios ilícitos de oficina o carrera son: CTh. 12.1.120 (a. 389); CTh. 6.30.16 (a. 399); CTh. 1.10.5 (a. 400); etc...

- En CTh. 6.30.12 (a. 390) se establece que los *palatini* que prestan su servicio en el gran salón imperial no pueden ser cambiados a otro puesto sino es con licencia del emperador.
- En CTh. 8.4.25 (a. 412?) se dispone que los funcionarios del gobernador provincial no pueden alcanzar indebidamente un *“altioris militiae gradus”* sin conocimiento del prefecto del pretorio debiendo ser llamados estos funcionarios a su *“antiqua militia”*.
- En C. J. 1.55.10 (a. 441), Teodosio II y Valentiniano III dispusieron que ninguno de los *defensores civitatis* puede dejar su cargo sin haber obtenido una concesión escrita del prefecto del pretorio; en caso contrario estará sujeto a una multa de treinta libras de oro⁶⁶⁹.
- Valentiniano III prohíbe al palatino cambiar su milicia por otra o dejarla para ingresar en el clero bajo pena en ambos casos de ser devuelto degradado a su antiguo puesto y ordena llamar a los que hayan cambiado de milicia desde hace, al menos, tres años (Nov. Val. 7.3, a. 447).

JONES A. H. M., *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, *op. cit.*, p. 36; NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, pp. 98 ss.

⁶⁶⁹MANNINO V., *Ricerche sul << defensor civitatis>>*, Milano, 1984, pp. 138-139.

Otra cuestión que se planteaba en este ámbito era el de la <<iteratio>> que consistía en la repetición en el ejercicio de un mismo cargo por parte de un funcionario una vez transcurrido el periodo usual establecido para el desempeño del mismo. La legislación imperial fue contraria a esta práctica⁶⁷⁰ y así en CTh. 9.26.2 (a. 400)= C. J. 9.26.1⁶⁷¹, de los emperadores Arcadio y Honorio, se estableció que nadie se atreviese a solicitar un cargo público que hubiese desempeñado anteriormente, e incluso se añade que si dichos funcionarios volvieran a desempeñar el mismo oficio, aún en virtud de *sacras litteras*, deberán cesar en su desempeño y se les impondrá la pena de deportación conforme a lo establecido en la *lex Iulia de ambitu*⁶⁷².

⁶⁷⁰La prohibición de que un funcionario desempeñase dos o más veces el mismo cargo fue regla general en la Administración imperial romana; sin embargo, vemos que por razones excepcionales no siempre se respetó dicha regla: CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 188, nos dice que “... le privilège de l’itération était accordé à des hommes que le prince désirait honorer d’une façon particulière pour raisons précises”; como ejemplo citamos el caso de *Anicius Galabrio Faustus* que desempeñó tres veces (421-423) el cargo de prefecto de la ciudad de Roma en época de Valentiniano III.

⁶⁷¹C. J. 9.26.1 (Imp. Arcadius et Honorius AA. Pompeiano, Proconsul Africae): *Nullus omnino principatum vel numeratum seu commentariensis gradum vel cetera officia repetere audeat, cum publicae disciplinae semel gesta sufficient. At si quispiam promotorum denuo ad munus etiam per sacras litteras inrepserit, quod ante docebitur gessisse, cassatis quae hoc modo sunt impetrata, ad solutionem debiti primitus artetur, et qui contra fecerint poenam deportationis ad instar legis Iuliae ambitus excipiant.*

⁶⁷²El crimen de *ambitus* que en su estructura originaria, en época republicana, comprendía la corrupción electoral en los comicios, viene ahora a identificarse con el *contractus suffragii* (C. J. 4.2.16, a. 408). Se

En las fuentes se recogen también otros casos de prohibición de *iteratio*:

- En CTh. 9.26.2 (a. 400) se prohíbe que se desempeñe por segunda vez el *principatus* y otros *officia* y que en caso de contravención se castigará con la deportación al autor del hecho y a los *primates officii* (*vid.* CTh. 9.26.3, a. 403).
- En C. J. 1.51.5 (a. 415) los emperadores Honorio y Teodosio recuerdan que <<a ninguno, que haya desempeñado una vez en las provincias el cargo de doméstico o de canciller, se le conceda volver a desempeñar de nuevo por ninguna pretensión el mismo cargo>>; y los mismos emperadores en CTh. 8.1.16 (a. 417) = C. J. 1.51.6, refieren que <<ningún doméstico de los duques o de los condes militares, que se cuente en el número de sus oficiales, se atreva a aspirar nuevamente al mismo cargo, después de transcurrido el tiempo de éste, habiéndose fijado la pena de diez libras de oro, si alguien hubiere querido violar esta ley; y debiendo ser castigado también con la misma pena el oficio, si por ambición o avaricia hubiese consentido que se viole alguna de estas disposiciones>>; igualmente en CTh. 9.26.4 (a. 416)

castigan también en el mismo título aquellos culpables en la repetición de un cargo público y que hayan obtenido por segunda vez el cargo mediante abusivas *supplicationes*.

establecieron la sanción de confiscación del patrimonio contra el que intentase repetir por segunda vez el cargo de procónsul, vicario, gobernador provincial, *comes in discussionibus* o *principatus* de un *officium* (<<*contra definitionem suam*>>); y en CTh. 6.32.1= C. J. 12.25(26).1 (a. 416) dispusieron también respecto de los castrensianos y ministerianos que una vez que hubiesen cumplido el tiempo establecido no puedan desempeñar de nuevo al mismo cargo.

- En CTh. 8.1.16 (a. 417) se dispone que ningún *numerarius* del *dux* de Libia desempeñe el mismo cargo después del tiempo de servicio, estableciéndose una pena de diez libras de oro para el funcionario y también para el *officium* que lo consintió por “*ambitio*” o “*avaritia*”⁶⁷³.
- En CTh. 1.10.8 (a. 428) se establece que <<ningún palatino debe ejercer más de una vez un cargo público dentro de la misma provincia, así que en los registros debe asentarse de manera expresa, tanto el nombre del palatino como el hecho de que nada le ha sido confiado a él dentro de la misma provincia con anterioridad. Y si se hubiese omitido tal solemnidad o si un palatino hubiese sido enviado a una

⁶⁷³CTh. 8.8.9 (a. 416); CTh. 1.6.12 (a. 424); CTh. 1.10.8 (a. 428). NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, pp. 101-102.

provincia con repetida designación, una pena de treinta libras de oro afectará al asistente (*adiutor*) del oficio y también al primicerio y al secundicerio <responsabilidad colectiva del oficio>, y, no les será lícito valerse de imposturas como éstas, a saber: que a la misma persona pueden encomendársele funciones, siempre que no sean éstas las mismas; ya que a un mismo palatino, dentro de una misma provincia no le es lícito tener más de una vez cualquier cargo público ...>>.

Sin embargo, frente a lo anterior, vemos que en el ámbito municipal se preveía que si no hubiese quien desempeñase los cargos honoríficos (*honor municipalis*) serían llamados los mismos que ya los hubiesen desempeñado, como afirma Calístrato en D. 50.4.14.6 (Call., 1 *de cognit.*), aludiendo a muchas constituciones y, concretamente, a un rescripto del emperador Adriano sobre la repetición de cargos (*de iterandis muneribus*): <<*Illud consentio, ut, si alii non erunt idonei, qui hoc munere fungantur, ex his, qui iam functi sunt, creentur*>>⁶⁷⁴.

⁶⁷⁴ <<Consiento que si no hubiere otros idóneos que desempeñen este cargo, se nombren de los que ya los desempeñaron>>.

E) CONCLUSIONES

I.

Los funcionarios se agrupaban en categorías personales jerarquizadas: dentro de las dignidades se distinguían los *illustres*, los *spectabiles*, los *clarissimi*, los *perfectissimi* y los *egregii*. Asimismo, según el *status* del funcionario que ocupaba un cargo las dignidades y los *officia* se clasificaban en efectivas, vacantes y honorarias.

La propia organización jerárquica de la Administración Pública determinaba un deber de obediencia y respeto de los funcionarios inferiores hacia sus superiores jerárquicos siendo castigado el desacato o desprecio de aquellos hacia sus superiores con la imposición de sanciones consistentes en multas en la mayor parte de los casos.

II.

COSTABILE F., *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Napoli, 1984, p. 160.

La promoción y ascenso de los funcionarios se reglamentaba siguiendo los principios de antigüedad y de méritos, si bien debemos advertir que autores como Amiano Marcelino nos relatan numerosos casos de promociones hechas por soborno y *ambitus* y que además dichos ascensos se concedieron en ocasiones arbitrariamente por el *magister officiorum* o incluso por el mismo emperador.

La ley estableció tres niveles (*formae*) administrativos dentro de las respectivas oficinas (*scrinia*) de tal manera que la promoción a los puestos vacantes en el primer nivel de las mismas debía realizarse alternativamente o bien con los funcionarios en activo (*statuti*) de la segunda clase o con los *supernumerarii* de la primera, y se dispone que el funcionario que intentase saltarse el orden referido tratando de obtener un puesto sin atender su turno sería castigado con el retroceso al último puesto de los supernumerarios de la tercera clase. Por último, la ley determinaba las *sportulae* que debían pagar los funcionarios con ocasión de los ascensos como era, por ejemplo, el caso del supernumerario que obtuviese la condición de numerario.

III.

Dado el notable número de funcionarios que prestaban sus servicios en las respectivas oficinas, en diversas leyes contenidas en el Código Teodosiano los emperadores pusieron límites cuantitativos a los mismos, principalmente por motivos económicos, que no debían ser en

ningún caso superados por los responsables de las oficinas bajo la imposición de importantes penas pecuniarias.

IV.

Las normas sobre la duración y permanencia en el cargo de los funcionarios en el Bajo Imperio estaban inspiradas en los principios de:

1.- brevedad en la duración en el cargo de las dignidades que se limitaba a uno o dos años; 2.- permanencia de los funcionarios que prestaban servicios en sus respectivos *officia* durante un periodo de veinte a veinticinco años; 3.- no admisión de cambios de oficina por parte de los funcionarios adscritos a las mismas de tal manera que debían desarrollar toda su carrera administrativa en una misma oficina; 4.- prohibición de la repetición (*iteratio*) en el ejercicio de un mismo cargo por parte de un funcionario una vez que hubiese transcurrido el periodo usual de desempeño del mismo estableciéndose que, en caso contrario, el funcionario en cuestión debía cesar en el desempeño de su cargo imponiéndosele además la pena establecida en la *lex Iulia de ambitu*. Sin embargo, frente a lo anterior, se preveía en el ámbito municipal que si no hubiese quien asumiera los cargos honoríficos serían llamados aquellos que ya los hubiesen desempeñado.

CAPÍTULO VII

CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN RELACIÓN CON EL COBRO DE SUS RETRIBUCIONES

A) EL PROBLEMA DE LA *ADAERATIO* Y EL CONTROL DE LAS *SPORTULAE*.

El derecho de los funcionarios a percibir un salario⁶⁷⁵ al igual que la regla de la proporcionalidad entre la retribución recibida y el rango jerárquico de aquellos⁶⁷⁶ constituye, frente al principio republicano de gratuidad de las funciones públicas, uno de los ejes de la organización administrativa romana de época imperial, tal y como se recoge en diversas fuentes jurídicas de época postclásica y justinianeas⁶⁷⁷.

A diferencia de las magistraturas republicanas que, como sabemos, eran ejercidas por sus titulares de forma gratuita, los

⁶⁷⁵Se utilizaron diferentes términos en el lenguaje administrativo romano para hacer referencia a la retribución de los funcionarios: <<*solatia*>> (C. J. 2.7.15.1; C. J. 12.50(51).13; C. J. 12.20.3.1); <<*commoda*>> (C. J. 12.62(63).1); <<*emolumenta*>> (C. J. 1.27.1.4; C. J. 1.27.2.18); <<*salarium*>> (D. 19.1.52.2); <<*stipendia*>> (C. J. 1.31.2; C. J. 3.28.37).

⁶⁷⁶La idea de proporcionalidad entre la retribución y el servicio prestado se contiene expresamente también en Partidas II,9,2 (LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., 1970, p. 150).

funcionarios imperiales fueron desde comienzos del Principado retribuidos en función a la posición que ocupaban en la escala jerárquica de la Administración⁶⁷⁸; precisamente vemos en este sentido que en época de Adriano los procuradores ecuestres eran clasificados según su salario en *trecenari* (300.000 sestercios), *ducenari* (200.000), *centenari* (100.000) y *sexagenari* (60.000)⁶⁷⁹.

En época del Principado los funcionarios recibían sus emolumentos en dinero, sin embargo, la grave crisis económica que asoló el Imperio romano durante el gobierno de los Severos y a lo largo de los siglos III y IV -la cual dio lugar a una gravísima inflación monetaria- motivó que los sueldos tanto de la *militia* armada como de la *militia* civil fuesen pagados principalmente *in natura*⁶⁸⁰ y que sólo una

⁶⁷⁷CTh. 6.30.7; CTh. 6.30.11; C. J. 2.7.23(4) (Imp. Anastasius A. Constantino P.P.): *Laudabile vitaeque hominum necessarium advocacionis officium maxime principalibus praemiis oportet remunerari...*

⁶⁷⁸Es Augusto el que inaugura el sistema de retribuciones de los empleados públicos.

⁶⁷⁹GROSSO G., *Lezioni di storia del diritto romano*, 5 ed., Torino, 1965, p. 371; VARELA GIL C., *Los derechos de los administradores públicos en Roma*, Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 3, Madrid, 2004.

⁶⁸⁰Durante el siglo II d. C. los altos funcionarios gozaron de grandes sueldos: por ejemplo, los procuradores cobraban un mínimo de 15.000 denarios hasta un máximo de 75.000 denarios, y el procónsul de África recibía 250.000 denarios. Estos estipendios no fueron aumentados durante el siglo III d. C. y, por ejemplo, mencionamos que un *magister memoriae* ganaba en época de Diocleciano 75.000 denarios los cuales equivalían a unos 400 denarios de la época anterior a iniciarse el proceso inflacionario (*Pan. Lat.*, 9.2).

parte de los mismos fuese pagada en metálico (*stipendium*)⁶⁸¹ como complemento de la *annona*⁶⁸². Como puso de relieve DE MARTINO⁶⁸³ “todo el ordenamiento financiero del Imperio estaba organizado para asegurar el pago *in natura* y el peso que gravaba los productos era destinado a alimentar esta inmensa máquina”⁶⁸⁴.

⁶⁸¹Esta parte del sueldo en dinero era pagada cuatrimestralmente en época anterior a Constantino.

⁶⁸²SEGRÉ A., *Essay on Byzantine Economic History*, vol I: *The Annona civica and the annona militaris*, en *Byzantion. Revue internationale des études byzantines*, 16, Bruxelles, 1942-1943, p. 413; CERATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975; VAN BERCHEN D., *La annona militaire est-elle un mythe?*, en *Armées et Fiscalité dans le Monde Antique*, Colloques Natiaux, n. 396, Paris, 1977, pp. 331 ss.; PFLAUM H. G., *Les salaires des magistrats et de fonctionnaires du Haut-Empire*, en *Les dévaluations à Rome. Époque republicane et impériale*, Roma, 1978, pp. 311 ss; VOGLER C., *La rémunération annonaire dans le Code Théodosien*, en *Ktema*, 4, Strasbourg, 1979, pp. 293 ss.; BOREN H. C., *Studies relating to the stipendium militum*, *Historia*, 32, Wiesbaden-Stuttgart, 1983, pp 427 ss.; THOMAS J. D., *P. Lond. III 959 Descr.: a Receipt for Wine for Annona militaris*, en *The Bulletin of the American Society of Papirologists (BASP)*, 22.4, Michigan, 1985, pp. 349 ss.; REMESAL J., *La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania*, Madrid, 1986; MITTHOF F., *Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs und Heeresgeschichte des römischen Reiches im 3. bis 6. jh. n. Chr.*, Firenze, 2001; PONS L., *The annona militaris in the Tingitana: observations on the organization and provisioning of the roman troops*, en *New Perspectives on the Ancient World. Modern Perceptions, Ancient Representations* (Funari/Garraffoni/Letalien, eds.), London, 2008, pp. 145 ss.

⁶⁸³DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana, op. cit.*, vol. V, p. 337.

⁶⁸⁴En el Bajo Imperio la presión fiscal que soportaban los ciudadanos vino motivada, entre otras causas, por el gran desarrollo del funcionariado y la necesidad de retribuir a todo el personal civil y militar

Esta forma de remuneración *in natura* consistía principalmente en la entrega de una cantidad de raciones alimentarias (*annonae civicae*)⁶⁸⁵ y de un cierto número de unidades de forraje o pienso para los caballos (*capita* o *pabula*)⁶⁸⁶ regulándose este tema en diversas constituciones como son las contenidas en CTh. 7.4: <<*De erogatione militaris annonae*>>, en C. J. 12. 37(38), con la misma rúbrica, en C. J. 11.25(24): <<*De annonis civilibus*>>, y en C. J. 1.52: <<*de annonis et capitu administrantium ...*>>⁶⁸⁷.

La remuneración annonaria de las oficinas civiles instaladas en Palacio o en las provincias no fue organizada de forma sistemática hasta finales del siglo IV d. C., lo que dio lugar a abusos por parte de los

de la Administración, a lo que debemos añadir los abusos y fraudes cometidos en este ámbito por numerosos funcionarios. Véase nt. 204.

⁶⁸⁵Los víveres eran aportados por los habitantes de las provincias y depositados en los graneros o en los edificios públicos. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 336.

⁶⁸⁶Amiano Marcelino, 22.4.9: <<...*vicenas diurnas annonas, totidemque pabula iumentorum, quae vulgo dictitant capita, et ...*>>.

⁶⁸⁷Los altos funcionarios como el prefecto del pretorio o el prefecto urbano recibían principalmente como salario productos alimenticios (trigo, aceite, vino, cebada, carne...) y diversos artículos de lujo; también formaba parte de su retribución el servicio prestado por las personas afectas a su servicio particular, así como el equipo y las insignias del cargo; ahora bien, tanto los servidores como sus insignias debían ser “devueltos” por el funcionario al cesar en sus funciones. Solamente una porción del salario de estos altos funcionarios era pagada en oro (CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., p. 211). Por lo que hace a los gobernadores provinciales recibían del Estado o de la provincia los víveres y las raciones de forraje (C. J.

funcionarios, dado que estos muchas veces no tenían más remedio que asegurarse su subsistencia a través de sus actuaciones respecto de los ciudadanos; estas prácticas abusivas recaían, por tanto, sobre los administrados que recurrían a sus servicios: en este sentido, Amiano Marcelino (30.4.19) nos refiere los retrasos injustificados en los litigios por parte de los oficiales del gobernador provincial (*secretarii, principes* de los oficinas, *auditores* ...) a no ser que los litigantes les hiciesen efectivas cantidades importantes en dinero o en especie (<<... *nudatis litigatoribus* ...>>), y Salviano de Marsella⁶⁸⁸ (*Gub. Dei*, 1.2.11) se lamentaba de los abusos de los altos funcionarios con las siguientes palabras: <<*itaque tunc illi pauperes magistratus opulentam rempublicam habebant, nunc autem dives potestas pauperem facit esse rempublicam*>>⁶⁸⁹. Estas prácticas fueron castigadas por Constantino en

12.50(51).2): <<*Praesidibus et rationalibus ceterisque, quibus propterea res publica et annonas et alimenta pecoribus subministrat...*>>.

⁶⁸⁸Escritor cristiano nacido hacia el año 400 en Colonia o Tréveris, su obra más conocida es <<*De gubernatione Dei*>> escrita entre 440-450 d. C.: LAGARRIGUE G., *Salvien de Marseille*, Ouvres, Paris, 1975; BLÁZQUEZ J. M., *La sociedad del Bajo Imperio en la obra de Salviano de Marsella*, Madrid, 1990; RIZZO F. P., *Il De Gubernatione Dei di Salviano nel quadro della problematica di fine impero*, en *Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999, pp. 393 ss.

⁶⁸⁹Salviano de Marsella condena en el libro V de su obra la corrupción política y nos habla de la revuelta social que tuvo lugar en la Galia –con el nombre de *Bagauda*- y la relaciona con la gran corrupción política y administrativa existente en la época presentando a los funcionarios deshonestos y a los *exactores* de impuestos, autores de las *rapinae*, como la causa de aquel fenómeno (Salv., *Gub. Dei*, 5,28-29):

una conocida ley del año 331 recogida en CTh. 1.16.7 (=Brev. 1.6.1):

<<cessent iam nun rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecedentur. Non sit venale non ingressu redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aequae aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius qui officii princeps dicitur depraedatio: nullas litigatoribus adiutores eorundem officii principum concussionibus adhibeant ...>>⁶⁹⁰.

<<Illud indignius ac poenalius, quod omnium onus non omnes sustinent, immo quod pauperculos homines tributa divitum premunt, et infirmiores ferunt sarcina fortiorum //Adiectiones tributarias ipsi interdum divites faciunt, pro quibus pauperes solvunt>>. LASSANDRO D., "Exhaustae provinciae... praesidentium rapinis". *Corruzione e rivolta morale nella Gallia tardoantica (nei "Panegyrici" e in Salviano)*, en Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania, 11-13, dicembre 1995), Catania, 1999. Este Autor (pp. 295-296, 302) aporta también testimonios de autores paganos, anteriores a Salviano de Marsella, en los que se describe el mal gobierno de los "mali iudices": en la *Gratiarum actio Iuliano imperatori*, solemnemente pronunciada en Constantinopla en el año 362 d. C. en presencia del soberano, el orador –el alto funcionario Claudio Mamertino, prefecto de Iliria-, nombrado cónsul, pronuncia palabras de elogio hacia Juliano, y en ellas contrapone la honestidad de este emperador con la difundida corrupción de los funcionarios en general: *Paneg. 3/11.1.4*: <<nam cum me aerarium publicum curare voluisti, cum quaerens virum animi magni adversus invidiam me qui tibi viderer eiusmodi delegisti, idque eo tempore quo exhaustae provinciae partim depraedatione barbarica, partim non minus exitiis quam pudendis praesidentium rapinis ultro opem imperatoris exposcerent>>. Sobre esta cuestión, también MOLÉ C., *Rivolta morale e rivolta sociale nella Tarda Antichità*, en Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania, 11-13 dicembre, 1995), Catania, 1999, pp. 147 ss.

⁶⁹⁰ SPAGNUOLO VIGORITA T, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco...*, op. cit., p. 52; DE MARINI AVONZO F., *La giustizia nelle*

A finales del s. IV d. C. la situación cambia al financiarse ya la annona de los “burós” con los impuestos públicos autorizándose también, de forma general, que los funcionarios pudiesen sustituir las prestaciones *in natura* por dinero (*adaeratio*)⁶⁹¹, teniendo en cuenta que las distribuciones *in natura* presentaban grandes problemas como, por ejemplo, los derivados de la instalación y de la gestión de los graneros, del aprovisionamiento de los mismos realizado por los contribuyentes muchas veces agobiados con tasas y requisiciones, del transporte de la annona etc...; y todo ello además de los fraudes cometidos por las autoridades encargadas de la distribución⁶⁹².

province agli inizi del basso impero. I principi generali del processo in un editto di Costantino, en Studi Urbinati, 31, 1962-1963, pp. 313 ss.

⁶⁹¹VAN SICKLE C. E., *The “salarium” of Claudius Gothicus (Claudius XIV,2-15) viewed as a historical document*, en L’Antiquité classique, 23, Louvain, 1954, pp. 47-62 .

⁶⁹²Mencionamos los abusos que en este ámbito sufrían los particulares: así el caso de la *coemptio equorum* o impuesto que gravaba a los ciudadanos con la venta forzosa de caballos destinados principalmente al ejército a un precio fijado por el Fisco (*De rebus bellicis*, 4.4). A finales del s. IV, Sinesio (*ep.*, 6.131) nos refiere que dicho precio era irrisorio y que no podía ser rechazado por los contribuyentes.

Por otro lado, en CTh. 6.31.1 (a. 373) = C. J. 12.24(25).1 se castiga a los que ofrecen sólidos a un *strator* (inspectores encargados de la revisión de los caballos) para inducirle a aceptar un caballo sin las características de forma, altura y edad requeridos (*equi probabiles*), y se impone una multa de 100 libras de plata al *officium* del gobernador que si <<sabiendo que se hizo (...) no los hubiera denunciado al juez>>.

DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 316 ss.; BERNARDI A., *La equorum adaeratio nel Basso Impero*, en Studia Ghisleriana I, 2, 1955, pp. 191 ss.; CATAUDELLA M. R.,

Como ha señalado DE MARTINO respecto de la *adaeratio* “vi fu una lunga lotta sociale e gli imperatori furono costretti a stabilire in via legale i prezzi de la *adaeratio*”⁶⁹³; así mencionamos una constitución del año 393 (CTh. 7.4.20=C. J. 12.37(38).7), de los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio, dirigida al prefecto del pretorio Rufino

Contribuenti e pubblica amministrazione: punti di vista a proposito di H. A., Vita Claudii, 11,14, en *Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico*, Atti del Convegno Nazionale, Firenze 6-7 dicembre 2007 (a cura di M. R. Cataudella- A. Greco- G. Mariotta), Padova, 2010, pp. 147 ss.; AGUDO RUIZ A., *Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio*, en *Revista General de Derecho Romano*, (www.iustel.com), 15, 2010.

⁶⁹³DE MARTINO F., *Storia delle costituzione romana, op. cit.*, vol. V, p. 337; MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma, 1951.

La *adaeratio* beneficiaba a los funcionarios en perjuicio de los contribuyentes ya que los precios de la misma solían ser superiores a los de mercado, de tal manera que a los productores se les requisaba (*coemptio*) los bienes a dicho precio de mercado o incluso inferior a éste, y el *interpretium* resultante (diferencia entre el valor de los precios de la *adaeratio* y los precios de mercado o de las *coemptiones* forzosas) resultaba en beneficio de los funcionarios (DE MARTINO F., *Storia della costituzione...*, *op. cit.*, vol. V, p. 368).

Uno de los abusos más frecuentes en época de Constantino (DE MARTINO F., *Storia della costituzione...*, *op. cit.*, vol. V, p. 370) en torno a este tema consistía en que había oficiales del ejército que no retiraban de los graneros públicos los productos agrícolas para distribuirlos sino que los responsables de este servicio se apropiaban de ellos, y reteniendo entonces las reservas de víveres no consumidos, lo que hacían era reclamar nuevamente a los contribuyentes no ya productos agrícolas sino dinero. Contra estas prácticas abusivas actúa la Cancillería imperial (CTh. 8.4.1, a. 325). Podemos citar otras fuentes que hacen referencia a abusos en materia de annonas: CTh. 7.4.24 (a. 398)=C. J. 12.37(38).9; CTh. 7.4.30 (a. 409)= C. J. 12.37(38).13; C. J. 12.37(38).16 (Imp. Anastasio). Véase KOLB F., *Die Adaration als Korruptionsproblem in der spätantike*, en *Korruption im Altertum*, München, 1982, pp. 163-173.

que refleja esta situación: <<a ningún militar le sea lícito pedir el precio en lugar de las annonas que se destinan a las provincias, habiendo rechazado en su tiempo la abundancia de provisiones, y habiendo esperado la ocasión de escasez; de suerte que, si por razón de la abundancia del año hubiere alguno rehusado lo que se le ofreció, y después hubiere valorado lo que rechazó, habiéndose puesto según la necesidad precio a las cosas, ni se le deje exigir lo que pide contra esta ley, ni consiga lo que hubiera dejado de recibir>>; y ya anteriormente en una ley de Graciano, Valentiniano y Teodosio contenida en CTh. 6.30.7 (a. 384) [= C. J. 12.23(24).7] se dice al comienzo de la misma que las dignidades empleadas en las secretarías de liberalidades reclamen las annonas con arreglo a la cuantía fijada y <<que no se tome una cosa de más>>.

La *adaeratio* se generaliza a comienzos del siguiente siglo y, de esta manera, en el año 423 las distribuciones de las *annonae* de todos los funcionarios fueron obligatoriamente conmutadas en oro con tarifas fijadas conforme a la utilidad pública⁶⁹⁴ (CTh. 7.4.35 [con alguna

⁶⁹⁴Con el sistema de la *adaeratio* se garantizaba el poder adquisitivo de los funcionarios puesto que se les pagaba el equivalente en dinero del coste real de las annonas en cada época. GIUFFRÉ V., <lura> e <arma>. *Intorno...*, *op. cit.*, pp. 40 ss. Los salarios eran evaluados en unidades llamadas “annonas” que correspondían en el año 445 al valor de 160 modios de trigo por año (Cfr. Nov. Val. 13.3).

variante en C. J. 12.37(38).15]⁶⁹⁵. En época de Justiniano los sueldos de los funcionarios se seguían calculando en *annonae* pero se pagan ya en sólidos o libras de oro⁶⁹⁶.

En relación con el importe que recibían los funcionarios podemos decir que hasta Justiniano no conocemos con exactitud su nivel retributivo: en una constitución del año 534 contenida en C. J. 1.27.1⁶⁹⁷ se informa minuciosamente de la reforma de la administración africana señalando los sueldos concretos de los distintos funcionarios de esta prefectura. Así en el párrafo 14 (4) se dice que en una nota anexa a esta constitución se recoge de forma detallada el salario que deben percibir el prefecto del pretorio de África, los consulares y los gobernadores

⁶⁹⁵ *Annonas omnes, quae universis officiis atque sacri palatii ministeriis et sacris scriniis caeterisque cunctarum adminiculis dignitatum assolent delegari, quasque hi, qui ad earum exactionem mittuntur, pro cupiditate ac libidine sua graviter ex provincialium visceribus eruebant, ad similitudinem militum, quibus aerariae praebentur annonae, adaerari praecipimus, ut omnibus superius designatis emolumenta debita in pretiis dispositio tui culminis pro publica utilitate taxatis praecipiat erogari*; es decir, <<que todas las annonas que se suelen destinar a todas las oficinas, y a los ministerios del sacro palacio, y a las sacras secretarías (...) sean valoradas a la manera de los militares, a quienes se les dan annonas en metálico, de tal forma que (...) se les distribuyan los salarios debidos en precios tasados conforme a la utilidad pública>>.

⁶⁹⁶ JONES A.H.M., *The Later Roman Empire...*, I, *op. cit.*, p. 397.

⁶⁹⁷ PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione <<regionale>> di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980, pp. 59 ss., realizó un estudio sobre esta constitución recogiendo en unos cuadros sinópticos toda clase de datos e información sobre cada uno de los funcionarios de esta administración periférica; TORRENT A., *La legislazione regionale di Giustiniano*, en Labeo, 29, Napoli, 1983, p. 179.

provinciales, así como cada uno de sus oficiales⁶⁹⁸; por ejemplo, el salario del prefecto del pretorio de África era en época de este emperador de *auri libras centum* (C. J. 1.27.1.21)⁶⁹⁹. Justiniano mejorará considerablemente la retribución de los funcionarios de la prefectura africana y esta revalorización de los salarios será utilizada por el mismo emperador como un instrumento para combatir la corrupción de sus funcionarios al existir –PULIATTI⁷⁰⁰– una importante correlación entre

⁶⁹⁸PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione <<regionale>> di Giustiniano*, op. cit., p. 82 señala que “la notitia con cui si chiude la C. J. 1.27.1, come sempre nella legislazione di Giustiniano, ha carattere strettamente tecnico. A prima vista essa si presenta come un <<prontuario>> degli stipendi dei funzionari; ma in sede di esegesi precisa con abbondanza di particolari la struttura e l'organico degli uffici di prefettura, e cioè la forza numerica del personale e la sua ripartizione per i vari scrinia ed officia, i livelli retributivi delle diverse qualifiche...”

⁶⁹⁹El procónsul de Capadocia recibirá veinte libras de oro = 1440 sólidos (Nov. 30.6.2); el *quaesitor*, diez libras de oro= 720 sólidos (Nov. 80.8); el gobernador del Helenoponto, 725 áureos y su oficio, 447 sólidos (Nov. 28.3). Por lo que hace a la remuneración de los *advocati fisci* aparece regulada en numerosas constituciones: C. J. 2.7.15.1 (a. 472); C. J. 2.7.22(3) pr. (a. 505); C. J. 2.7.23.1 (a. 506), en donde el emperador Anastasio establece que la remuneración sea pagada el primer día de enero del año que desempeñan dicho cargo; C. J. 2.7.25(6) pr. (a. 519); y en C. J. 2.7.26.4 (a. 524) el emperador Justino destina sesenta libras de oro a favor de los *patroni fisci* de la prefectura pretoriana de Oriente y 600 áureos a los abogados de la prefectura urbana que deberán ser pagados en las Calendas de Octubre de cada año. AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci...*, op. cit., pp. 109-112; ID., *Consideraciones sobre el salarium del advocatus fisci*, en *Personalidad y capacidad jurídicas: 74 contribuciones con motivo del XXV aniversario de la Facultad de Derecho de Córdoba*, vol. 1, Córdoba, 2005, pp. 43 ss.

⁷⁰⁰PULIATTI S. *Ricerche sulla legislazione “regionale” di Giustiniano...*, op. cit., p. 94. Este Autor considera que la política retributiva de Justiniano se orienta en el sentido de que los sueldos generosos son mejor instrumento que las normas represivas para combatir la corrupción pública. Además, el cobro de un mayor salario en

independencia económica y honestidad administrativa; este postulado aparece enunciado también en Nov. 8 *praef.*, Nov. 24.2, Nov. 26.3 y Nov. 28.4.1⁷⁰¹.

Por otra parte, al ser la retribución de los funcionarios en época postclásica sensiblemente inferior a la recibida en época del Principado, como hemos visto, estos solían completar sus retribuciones con obsequios o propinas (*sportulae*) que recibían de los particulares por todo servicio realizado en el ejercicio de su cargo. Frente a esta arraigada costumbre Constantino publicó en el año 331 una constitución (CTh. 1.16.7)⁷⁰², ya mencionada anteriormente, en virtud de la cual se prohibió que los funcionarios cobrasen todo tipo de *sportulae*: <<cesen inmediatamente las rapaces manos de los funcionarios, cesen, digo, porque si, ya advertimos, no cesaren, ´les serán cortadas con las espadas`. Que el acceso al magistrado no sea obtenido por dinero, ni el consejo privado sea infamado por la mejor postura, ni el acto mismo de ver al juez lo sea por un precio: los oídos del juzgador se abrirán igualmente a los más pobres y a los ricos (...)>>.

África, entre otras razones, sería fijado para estimular a los funcionarios a establecerse en esta provincia ante la alarma provocada por las campañas de los vándalos.

⁷⁰¹HENDY M. F., *Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450*, Cambridge, 1985, pp. 178-181.

⁷⁰²*Vid. supra* p. 446.

No obstante, las *sportulae* se volverán a admitir posteriormente considerándolas Graciano como parte esencial del sueldo de los funcionarios (CTh. 8.9.2, a. 382)⁷⁰³, si bien las mismas fueron estrictamente tasadas para cada caso como se contempla en el *ordo salutationis* de Timgad que nos muestra las tasas de las *sportulae* que los particulares debían pagar al consular de Numidia bajo el reinado de Juliano (CIL., VIII, 17896)⁷⁰⁴.

Justiniano pone límites a esta antigua costumbre ya que si bien las espórtulas estuvieron permitidas en su época (Nov. 53.3: <<preséntesele al que es llamado a juicio la demanda (*libellus*), y después de pagadas las espórtulas y de prestada la fianza...>>), vemos

⁷⁰³ PIGANOL A., *L'empire chrétien...*, op. cit., p. 350.

Recogemos también una ley de los emperadores Valentiniano y Valente (CTh. 1.31.2, a. 370) referida a aquellos que desempeñan un cargo de administración dentro de las ciudades: <<por una antigua costumbre, se había atribuido a los cargos de administradores dentro de la ciudad, el derecho de agregar al título una pequeña ganancia; pero en adelante toda esta costumbre de dar y recibir cese a fin de que desaparezca totalmente, lo que suele llamarse de práctica. Pero si los administrados, quisieren dar algo a cada uno de estos, en consideración de los gastos, quede al arbitrio de los que dan, no al poder de los que reciben. Pero si constare que alguien, por esta causa, hubiere dado algo, contra su voluntad y no lo hubiese llevado a juicio, de inmediato castíguese severa y públicamente no menos al que da que al que recibe>>.

⁷⁰⁴ CAPIZZI C., *L'imperatore Anastasio I (491-518)...*, op. cit., p. 142, pone de relieve que Anastasio estableció diversas medidas para eliminar los abusos que en materia de *sportulae* tenían lugar en el ámbito de la administración militar según resulta de diversas fuentes epigráficas.

que las mismas no podían pasar de una determinada cuantía tal y como se dispone en C. J. 3.2.5⁷⁰⁵, del año 530, que refiere que a los ejecutores (*exsecutores*) de los litigios se les dé en concepto de espórtulas una cantidad cierta, según la cuantía consignada en el *libellus conventionis*: por ejemplo, se dice que si ésta es inferior a cien sólidos se pagará como espórtula sólo medio sólido y que si la cuantía es mayor también lo pagado en concepto de espórtulas será mayor. Asimismo, los editores del Código de Justiniano añaden un suplemento de la misma constitución que se encuentra recogido en I. J. 4.6.25 en donde se dice que se podrá ejercitar una acción por el cuádruplo contra los ejecutores de los litigios que hubiesen exigido a los demandados una cantidad mayor que la establecida. Y Nov. 129.9, a. 539, en la que se establece: <<mas si alguno, siendo dependiente de un *magisterianus* o de un *praefectianus*, o de cualquier otra condición recibiere por espórtulas más de lo que está fijado en nuestras sacras constituciones, mandamos que castigue esto bajo su propia responsabilidad con arreglo a nuestra ley el gobernador de la provincia y les imponga castigo a los que a ello se atrevieren. Pero si esto no lo castigare el mismo gobernador, le damos licencia al santísimo obispo de cada ciudad para denunciarnos lo que sobre el particular se hace, y qué milicia o dignidad

⁷⁰⁵ = *Theophilus* 4.6.24.

SITZIA F., *Su una costituzione di Giustiniano in tema di sportulae*, en BIDR, 75, Milano, 1972, pp. 221 ss.

tiene el que a esto se hubiese atrevido, a fin de que impongamos responsabilidad también al gobernador que lo permite y que desprecia nuestro mandato, y mandemos que también sea castigado el mismo que se atreve a tales cosas>>⁷⁰⁶.

Podemos reseñar también que desde el Bajo Imperio, junto al *stipendium*, que era el salario oficial anual de los funcionarios, se añadían ciertos pagos realizados con ocasión de algún acontecimiento importante o para conmemorar un aniversario⁷⁰⁷: el *donativum* tenía carácter general y se daba a toda la milicia en diferentes situaciones como eran las proclamaciones de los nuevos emperadores (en estos casos el donativo era llamado *augustaticum*), los aniversarios como el día 1 de enero y probablemente los *nataliciae dies* de Roma (21 de abril) y de Constantinopla (11 de mayo), que eran festivos (CTh. 2.8.19, a. 389 [=C. J. 3.12.6(7)]), y también con ocasión de los matrimonios y nacimientos en la familia imperial. Los *donativa* eran iguales para todos

⁷⁰⁶ Véase también, Nov. 17.3; Nov. 82. 7 pr.; Nov. 86. 9; Nov. 124. 3.

⁷⁰⁷ Cuando el emperador residía en la Corte el pago de los *donativa* debía ser más rápido y coincidir con el aniversario; en estos casos dicho pago, celebrado en una sesión del consistorio, tomaba entonces la forma de una ceremonia en donde los oficiales palatinos se presentaban ante el emperador siguiendo un orden jerárquico decreciente (Amiano Marcelino, 16.5.11); aceptar este donativo equivalía a un acto de sumisión y de fidelidad. Véase sobre este tema, DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., pp. 546 ss.; MORELLI A. L., *La moneta nella elargizioni pubbliche e private tra i IV e V secoli d. C.*, en Eburnea diptycha. I dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo (a cura di M. David), 2007, Bari, pp. 267 ss.

los funcionarios (cinco sólidos y cinco libras de plata en las proclamaciones, y cinco sólidos en los aniversarios) a diferencia de los aguinaldos (*strenae*) que eran variables y proporcionales al rango de cada uno y a sus méritos (CTh. 6.30.11). Los aguinaldos eran pagados en Año Nuevo (*felix annus*) por las mismas cajas públicas que pagaban el *salarium* (CTh. 6.30.11)⁷⁰⁸ y, en agradecimiento, los funcionarios al comenzar el año entregaban al emperador una libra de oro y sólidos de oro puro (*una libra auri et solidis obryzicis*⁷⁰⁹) como se recoge en una ley de Honorio dirigida al prefecto de Roma, Basilio (CTh. 7.24.1 [=C. J. 12.48(49).1], a. 395)⁷¹⁰.

Por último, señalamos que el Fisco además del pago del salario se encargaba también de proporcionar a los funcionarios el uniforme o

⁷⁰⁸En esta constitución, del año 384, se castiga a aquellos funcionarios que recibiesen regalos o cobrasen emolumentos más allá de la cuantía fijada obligándoles a restituir todo lo recibido de más y, posiblemente, con la destitución del grado obtenido, aunque sobre este aspecto la norma guarda silencio: <<... *et id quod ex superfluo praeбитum est exigi facias et deinceps ultra statutas dignitatis nihil praeberi permittas*>>. Desde finales del s. IV d. C. fueron estrictamente tasados tanto los aguinaldos recibidos por los funcionarios como los regalos que recibía el emperador de ellos. MALAVÉ B., *Suffragium: un crimen publicum...*, *op. cit.*, p. 297; CHASTAGNOL A., *Le prefecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 212.

⁷⁰⁹El *obryzum* era el oro purificado al fuego.

⁷¹⁰Símaco, *rel.* 15; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 405-406.

vestimenta de trabajo (*annonas et vestes*)⁷¹¹, como disponen CTh. 8.5.32 (a. 370 o 371?) y CTh. 6.26.18 (a. 426), que atribuyen a toda dignidad un uniforme que le será dado por el *comes sacrarum largitionum* en el momento de su promoción: <<*tam proximo scriniorum quam comiti dispositionum pro delata eis comitivae secundi ordinis*

⁷¹¹El vestuario de la *militia* estaba formado principalmente por la clámide (túnica) y el *cingulum* (cinturón) en oro con adornos y hebilla de bronce, vid. *infra* pp. 511-512. Un impuesto (*vestis militaris*: CTh. 7.6.1-3) era destinado a uniformar no sólo a los soldados sino también a todos los empleados del Estado y era pagado normalmente desde finales del siglo IV en dinero (*adaeratio*) y no en especie como ocurría anteriormente: vid. CTh. 7.6.3, a. 377 [=C. J. 12.39(40).2]. En una ley del año 423 recogida en CTh. 7.6.5 [=C. J. 12.39(40).4] se establece que la recaudación de este impuesto sea hecha en metálico (<<*militaris adaeratio vestis a conlactoribus exigatur ...>>). Este tributo subsiste en época de Justiniano y se encuentra regulado en C. J. 12.39(40): <<De militari veste>>. DELMAIRE R., *Largesses sacrées...*, *op. cit.*, pp. 332 ss., GIUFFRÉ V., <lura> e <Arma>. *Intorno...*, *op. cit.*, p. 47; DARIS S., *Conto per la vestis militaris*, en ZPE, 7, Bonn, 1971, pp. 275 ss.; YOUTIE H. C., *P. Mich. Inv. 1378: Vestis militaris*, ZPE, 38, Bonn, 1980, pp. 289 ss.*

Sabemos que el coste de la clámide de los soldados de élite fue fijado por Honorio (CTh. 7.6.4) en un *solidus* (= 25 libras de bronce en época de este emperador); la misma cifra parece que se destinaba con este fin en época de Justiniano, el cual reproduce en C. J. 12.39(40).3 la constitución de Honorio. Podemos también añadir que los uniformes destinados al ejército y a los funcionarios en general eran confeccionados en los talleres textiles (*gynaecaea*) pertenecientes al Fisco; a la cabeza de estos centros se encontraban los *praepositi gynaeciorum* bajo la dirección del *Comes Sacrarum Largitionum*. Sobre el origen, localización y personas empleadas en estas manufacturas del Estado: WILD J. P., *The gynaecium at Venta and its Context*, Latomus, 26, fasc. 3, Bruxelles, 1967, pp. 649 ss.; ID., *The Gynaecaea, Aspects of the Notitia Dignitatum*, en British Archaeological Reports (BAR), suppl. 15, Oxford, 1976, pp. 51 ss.; QUINTANA ORIVE E., *Cth. 10.20: acerca del régimen jurídico los gynaeciarii...*, *op. cit.*, pp. 335 ss.

dignitate vestem ex integro in posterum praeberi tua celsitudo disponat>>.

La responsabilidad del pago de los salarios de los funcionarios correspondió principalmente a lo largo del Bajo Imperio al prefecto del pretorio y al *comes sacrarum largitionum*. El prefecto del pretorio, que tenía su propia caja (*arca praetoria*), pagaba los salarios de sus innumerables empleados, de los gobernadores y de los demás funcionarios provinciales; era además el encargado de proveer las distribuciones *in natura* a los funcionarios y al ejército en general⁷¹². En la ciudad de Roma es probable que fuese el *praefectus urbi* quien pagase el salario de los funcionarios que estaban a él subordinados como era el caso del *praefectus annonae* o del *praefectus vigilum*⁷¹³, y de los miembros de su buró (CTh. 8.9.2). Los sueldos en dinero de los altos funcionarios y de los oficiales palatinos eran pagados por el *comes sacrarum largitionum*, funcionario central encargado del Fisco.

En el siglo V d. C., concretamente desde el emperador Anastasio, el salario -que como hemos visto era ya pagado en sólidos- estaba asegurado por la prefectura del pretorio; un siglo más tarde, Procopio (*H. A.*, 24, 2-3), nos dice que el salario es pagado por los logotetas,

⁷¹²NICOLETTI A., *I prefetti del pretorio e la riscossione dell'annona militare*, Labeo 15, Napoli, 1969, pp. 177 ss.

⁷¹³Sobre esta responsabilidad del *praefectus urbi* en el s. III d.C. se hace referencia en *Historia Augustae* (*Aurel.* 9, 2-9).

funcionarios que dependían de la prefectura del pretorio⁷¹⁴. Y en Occidente a finales del siglo V d. C. Casiodoro (*Var.*, 1,10) señala a los *arcarii* como encargados del pago de la retribución de los *domestici*⁷¹⁵.

Terminamos refiriendo que desde la época de los Severos el Estado asume un gran número de obligaciones que le lleva a exigir por motivos económicos que muchos de estos servicios públicos fuesen prestados por ciudadanos de forma gratuita; de esta forma se pudo disponer de obreros “gratuitos” para la construcción de carreteras y puentes o para reparar los edificios públicos (*munera extraordinaria* o *sordida*) o de funcionarios “gratuitos” (*munera personalia*)⁷¹⁶. Dentro de esta categoría de funcionarios que ejercían su actividad en el ámbito municipal sin cobrar ningún tipo de remuneración se encontraban por ejemplo: los encargados de los libros de cuentas de la ciudad

⁷¹⁴En el s. VI d. C. es el prefecto del pretorio de África quien paga a sus subordinados y oficiales (C. J. 1.27.1.4 y 8). Sin embargo, DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 713, nos dice que los logotetas, funcionarios que se multiplican bajo Justiniano, se convierten en este siglo en los verdaderos administradores de las finanzas imperiales y terminan por eclipsar a los prefectos del pretorio. Sobre estos funcionarios véase, MILLET G., *L'origine du logothète général, chef de l'administration financière à Byzance*, Melanges F. Lot, Paris, 1925, pp. 563-573; GUILLAND R., *Les logothètes. Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin*, en *Revue des études byzantines* 29, Paris, 1971, pp. 1-15.

⁷¹⁵SILVESTRINI M., *Gli arcarii delle città*, en *Mélanges École Française de Rome (MEFRA)*, vol. 117, n. 2, Roma, 2005, pp. 541 ss.

⁷¹⁶Los *munera personalia* entendidos como obligaciones que exigen no tanto la fortuna como el tiempo y trabajo de las personas a ellas sujetas.

(*Kalendarii*), los curadores (*curatores rei publicae*), encargados de recaudar las rentas públicas de las ciudades⁷¹⁷, los recaudadores de impuestos (*susceptores*), los jefes del servicio de correos (*praepositi mansionum*) y los jefes de la policía local⁷¹⁸ (*irenarchae*)⁷¹⁹.

⁷¹⁷Respecto de la responsabilidad de los *curatores rei publicae*, se establece en C. J. 11.40(39).1 que: <<... si se descubre que por fraude de un esclavo público, el *curator rei publicae* sustrajo cantidades pagadas por los deudores de la ciudad, el curador restituirá de su peculio lo que de este modo falta>>.

⁷¹⁸CTh. 12.14, a. 409 (= C. J. 10.77(75).1).

⁷¹⁹PIGANIOL A., *L'empire chrétien...*, op. cit., pp. 378-380. JAPPELLA CONTARDI L., *Un esempio di 'burocrazia' municipale: i 'curatores kalendarii'*, en *Epigraphica*, 39, Bologna, 1977, pp. 71 ss.; BURTON G.P., *The curator rei publicae: towards a Reappraisal*, en *Chiron*, 9, München, 1979, pp. 465 ss; CAMODECA G., *Ricerche sui "curatores rei publicae"*, en *ANRW*, II-13, Berlin-New York, 1980, pp. 453 ss.; GILIBERTI G., *Legatum Kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del Principato*, Napoli, 1984; SIRKS B., *The management of Public Loans of Towns (the cura kalendarii) and of their finances in general*, en *Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale*, Napoli, 1998, pp. 377 ss.; JASCHKE K., *Munera publica. Funzione e carattere dei curatores nella città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, en *Gli Statuti Municipali*, op. cit., pp. 183 ss.

B) LA OBLIGACIÓN DEL *FILIUSFAMILIAS* FUNCIONARIO DE COLACIONAR SU *PECULIUM QUASI CASTRENSE*.

Junto a la retribución que le correspondía al funcionario, el Derecho Romano reconoció al *filiusfamilias* que ocupaba un cargo en la Administración el llamado *peculium castrense*⁷²⁰, auténtico *ius singulare*, que el emperador Constantino concedió en el año 326⁷²¹ a todos los *palatini filiifamilias* sobre aquellos bienes que hubiesen adquirido con su

⁷²⁰El *peculium castrense* nace en el ámbito militar para que los *filiifamiliarum milites* pudiesen disponer tanto en vida como *mortis causa* de “*id quod in castris adquisiverit*” (I. J. 2.12 pr.). Macer nos da en D. 49.17.11 pr. la siguiente definición de peculio castrense: <<*castrense peculium est... quod ipse filiusfamilias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset: nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense non est*>>, que es confirmada por Paulo en Sent. 3.4.3: <<*Castrense... peculium est, quod in castris acquiritur*>>.

FITTING H., *Das <<castrense peculio>>*, Halle, 1872; LEHMANN B., *Der <<peculium castrense>> der <<palatini>>*, Labeo 23, Napoli, 1977, pp. 49 ss.; LA ROSA F., “*peculium*”, NNDI, XII, 1965, p. 756; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *El filiusfamilias independiente en Roma y en el Derecho español*, Madrid, 1981, pp. 33 ss; ID., *Derecho privado romano*³, op. cit., p. 280; MASTRANGELO L., *Il peculium quasi castrense. Privilegio dei palatini in età tardo antica*, en RIDA 52, Bruxelles, 2005, pp. 261 ss.

propio trabajo o por donaciones del emperador (CTh. 6.35.15 [=C. J. 12.30(31).1-2]: <<*peculia sua praecipua retineant, quae, dum in palatio constituti sunt, aut labore, ut dictum est, proprio aut dignatione nostra quaesierint*>>⁷²²).

Un privilegio similar fue concedido por los emperadores Honorio y Teodosio en dos constituciones dirigidas el mismo día, 10 de abril de 422, al prefecto del pretorio, *Eustathius*: la primera recogida en CTh. 2.10.6 (=C. J. 2.7.4) otorgó el privilegio de poseer un peculio castrense a los abogados del foro del prefecto del pretorio sobre los bienes adquiridos con su profesión o con ocasión de ella pudiendo reivindicarlos como propios incluso después de la muerte del padre⁷²³; la segunda, contenida en CTh. 1.34.2 (=C. J. 1.51.7), se refiere a los asesores de los gobernadores provinciales estableciendo: <<... los hijos de familia, asesores, que acostumbran a ayudar a los administradores con consejos propios, si hubiesen podido reunir algunos bienes con sus

⁷²¹Debemos advertir que en el Código Teodosiano esta constitución aparece promulgada en el año 326, mientras que en el Código de Justiniano se recoge como del año 320.

⁷²²FITTING H., *Das <<castrense peculio>>, op. cit.*, pp. 423 ss., sostiene que ya antes de Constantino se concedió a los más importantes funcionarios del Estado un peculio castrense tomando como base la transformación que el concepto de *militia* había experimentado al referirse no sólo ya a los soldados (*militia armata*) sino también a los empleados de la Administración civil (*militia civil*).

⁷²³...*id post patris obitum praecipuum veluti peculium castrense ad exemplum militum proprio dominio valeant vindicare.*

ganacias lícitas y honradas, reivindíquenlos después de la muerte del padre, como si fuera peculio castrense>>⁷²⁴.

La expresión <<*peculium castrense*>> referida a los funcionarios no aparece recogida en las fuentes jurídicas hasta una constitución de Justiniano contenida en C. J. 3.28.37 (a. 531) en la cual se crea la categoría de <<*peculium quasi castrense*>>, diferenciándolo del peculio civil y del peculio castrense de los militares: <<...*in castrensibus etenim peculii introducta est et alia subdivisio, et peculii triplex invenitur causa. Vel enim paganum est peculium, vel castrense, vel quod medietatem inter utrumque obtinet, quod quasi castrense nuncupatur...*>>⁷²⁵.

⁷²⁴Los mismos emperadores extendieron este privilegio a diversos oficiales y empleados en las oficinas del prefecto del pretorio (*praefectiani*) como se recoge en C. J. 12.36(37).6 (a. 444?): <<*lus castrensis peculii tam scriniarios quam exceptores ceterosque ...*>>. En época de los emperadores León y Antemio se acuerda este peculio en favor de los obispos, presbíteros y diáconos (C. J. 1.3.33(34), a. 472: MURGA GENER J. L., *Sobre la anómala peculiaridad de la constitución C.1.3.33 (34) del emperador León*, en IURA, 19, Napoli, 1968, pp. 33 ss), si bien los obispos que son hijos de familia dejaron de tener peculio castrense en época de Justiniano al establecerse en Nov. 81 que el *filiusfamilias* que ostentase la dignidad de obispo quedará liberado de la patria potestad. Anastasio lo concede en C. J. 12.16.5 (a. 497-499) a los *silentiarii* que trabajaban en Palacio bajo las órdenes del *praepositus sacri cubiculi* (<<...*quecumque solaciorum sive emolumentorum vel donationum seu hereditatum nomine per militiam vel quamlibet eius causam his adquisita sunt vel fuerint...*>>).

⁷²⁵<<En los peculios castrenses se ha introducido también otra subdivisión y existe una triple clase de peculios. El peculio es civil, o castrense, o el que se llama cuasi castrense...>>.

Justiniano tomó a este respecto diversas decisiones relativas al peculio de los funcionarios: en abril del año 530 estableció en C. J. 6.61.7 que debían formar parte de este peculio también las donaciones que tanto el emperador como la emperatriz hubiesen realizado en favor de *filiifamilias* de ambos sexos, independientemente de la profesión ejercida por el donatario, por tanto, aunque ellos no desempeñasen una función pública. Un año más tarde, en el 531, el mismo emperador concederá de forma general el que denomina peculio cuasi castrense a todos los funcionarios retribuidos por el Estado (C. J. 3.28.37 pr.).

Por lo que hace al contenido del *peculium quasi castrense* LA ROSA⁷²⁶, después de un estudio de diferentes textos referentes a esta materia⁷²⁷, consideró que en época del emperador Constantino dicho peculio comprendía únicamente las adquisiciones derivadas directamente de la actividad de los *palatini* y de las donaciones provenientes del emperador; más tarde, esta segunda categoría de bienes se amplió hasta comprender la herencia y donaciones de otras personas con las que el *filiusfamilias* había tenido contacto con ocasión de la actividad ejercitada.

⁷²⁶LA ROSA F., *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953, pp. 202 ss.

⁷²⁷Nov. Val. 2.2.4, C. J. 12.30(31).1 pr., C. J. 1.51.7, C. J. 2.7.4, C. J. 2.7.8, C. J. 12.65.5, C. J. 12.36(37).6, C. J. 1.3.33(34), C. J. 6.61.7.

Vemos también con LA ROSA⁷²⁸ que los *filiifamilias* funcionarios podían disponer libremente *inter vivos* de los bienes del peculio *quasi castrense*, pero no *mortis causa*, a diferencia de lo que ocurría con los hijos de familia militares. Fue Justiniano quien en C. J. 3.28.37.1f (a. 531) igualó los derechos de los funcionarios respecto de su peculio cuasi castrense con los que tenían los *filiifamilias* militares respecto del peculio castrense: <<... *omnibus qui tale peculium possident, super ipsis tantummodo rebus, quae quasi castrensis peculii sunt, ultima condere (secundum leges tamen) posse elogia: hoc nihilominus eis addito privilegio, ut neque eorum testamenta de inofficioso querella expugnentur*>>. Justiniano acuerda en esta constitución el *ius testandi de bonis quasi castrensibus* a todos los hijos de familia que posean este peculio y les concede además el privilegio de que sus testamentos no sean impugnados con la *querella inofficiosi testamenti*. Sin embargo, se dispone en C. J. 3.28.37.2 que todo lo señalado anteriormente sólo tendrá aplicación mientras el *filiusfamilias* no alcance la situación de *sui iuris*, ya que en este caso su testamento podrá ser atacado con la *querella* en tanto en cuanto los bienes que pertenecían al peculio cuasi castrense han pasado ya a confundirse con los demás bienes del testador formando un único patrimonio.

⁷²⁸LA ROSA F., *I peculii special...*, *op. cit.*, pp. 214 ss.

Es interesante reseñar también que en C. J. 12.16.5 (a. 497-499) se recoge una constitución de Anastasio referida a los *silentiarii* en la que se establece un régimen especial a favor de estos funcionarios, en virtud del cual no serán objeto de colación hereditaria tras el fallecimiento del padre, a efectos del cálculo de la legítima de los hijos, lo que un *filiusfamilias* posee como peculio castrense, es decir, los emolumentos y demás beneficios obtenidos desempeñando el cargo de silenciario, así como también la misma milicia o el sufragio aportado, en su caso, por su padre para la adquisición del cargo⁷²⁹.

No obstante lo anterior, Justiniano en una ley del año 528, recogida en C. J. 6.20.20 pr., fijó que todo lo que se impute sobre la cuarta legítima estará sujeto a colación⁷³⁰, recordando en el número 1 de dicho fragmento la donación hecha *ad emendam militiam* (que desde el año anterior quedaba comprendida en la cuarta legítima): <<...lo cual tendrá lugar tanto respecto a aquellos bienes, como en cuanto a los que con ocasión de un cargo en la milicia, adquirido para uno solo de los herederos con dinero del difunto, gana el que obtuvo el cargo en la milicia, de suerte que el lucro, que podía corresponderle al tiempo de la

⁷²⁹ LOUIS-LUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, op. cit., pp. 605 ss.

⁷³⁰ *Illud sine ratione a quibusdam in dubietatem deductum plana sanctione revelamus, ut omnia, quae in quarta portione ab intestato successionis computantur his, qui ad actionem de inofficioso testamento vocantur, etiam si intestatus is decesserit, ad cuius hereditatem veniunt, omnimodo coheredibus suis conferant.*

muerte del difunto, no solamente se compute, habiéndose hecho testamento, para la cuarta parte de la sucesión *ab intestato*, sino que también *ab intestato* se lleve a colación>>⁷³¹, y el mismo año Justiniano en C. J. 3.28.30.2 establece que el legitimario deberá imputar sobre su cuarta parte las donaciones hechas por su padre *ad emendam militiam*, lo que significaría que si estas liberalidades son iguales, al menos, a dicha cuarta parte, y desde el año 537, al tercio o a la mitad de la parte hereditaria *ab intestato* del descendiente donatario, no tendrá lugar la *querella inofficiosi testamenti*: <<Queremos que a los hijos y a las demás personas, que antes eran llamadas a la querella de testamento inoficioso, se les compute para su porción legítima también lo que es sabido que ellas pueden lucrar con ocasión del cargo adquirido para dichas personas con dinero del difunto, siempre que sea tal el cargo que se venda, o que, muerto el que lo desempeñaba, pase por cierta cantidad a sus herederos; pero de suerte, que se atienda a aquel grado del mismo cargo que disfruta el empleado al tiempo de la muerte del testador, a fin de que se compute para su porción legítima una suma igual al que está mandado que se dé, si en dicho grado hubiese muerte

⁷³¹ *Quod tam in aliis quam in his, quae occasione militiae uni heredum ex defuncti pecuniis acquisitae lucratur is qui militiam meruit, locum habebit, ut lucrum, quod tempore mortis defuncti ad eum pervenire poterat, non solum testamento condito quartae parti ab intestato successionis computetur, sed etiam ab intestato conferatur.*

el que consiguió el cargo con dinero del testador...>>⁷³². Justiniano insiste, por tanto, en que la milicia debe ser venal y hereditaria para ser colacionable, ya que si fuese una *dignitas* escaparía de la obligación de la *collatio*.

En relación con este tema citamos a Ulpiano que en D. 37.6.1.16 (Ulp., 40 ed.) recoge una decisión de Papiniano con estos términos: <<... *an id, quod dignitatis nomine a patre datum est, vel debetur, conferre quis in commune cogatur, videamus?. Et Papinianus lib. XIII Quaestionum, non esse cogendum: hoc enim propter onera dignitatis praecipuum haberi oportere. Sed si adhuc debeatur, hoc sic interpretandum est, ut non solus oneretur is qui dignitatem meruit: sed commune sit omnium heredum onus hoc debitum*>>⁷³³. A tenor del texto vemos que en caso de donación o promesa de donación hecha por el

⁷³² *Imputari vero filiis aliisque personis, quae dudum ad inofficiosi testamenti querelam vocabantur, in legitimam portionem et illa volumus, quae occasione militiae, ex pecuniis mortui eisdem personis acquisitae posse lucrari eas manifestum est, eo quod talis sit militia, ut vendatur vel mortuo militante certa pecunia ad eius heredes perveniat, ita tamen, ut ille gradus eiusdem militiae inspiciatur, quem in morte testatoris militans obtinet, ut tanta ei pecunia in legitimam portionem computetur, quantam dari constitutum est, si in eo gradu mortuus esset is, qui militiam ex pecuniis testatoris adeptus est...*

⁷³³ <<Cabe preguntarse si lo que le dio el padre, o se debe, con ocasión de un cargo está uno obligado a colacionarlo, y dice Papiniano, 13 quaest., que no, porque esto se reserva también al que lo ganó, en compensación a las cargas de la dignidad alcanzada, mas, si todavía debe algo, ha de interpretarse en el sentido de que no sólo quede gravado con esta deuda el que mereció aquella dignidad, sino que tal deuda sea a cargo de todos los herederos>>.

padre a su hijo *dignitatis causa* no estaría ésta sometida a la *collatio* en tanto en cuanto estaba destinada a sostener ciertas cargas inherentes a la *dignitas* y *''ne pouaient pas être considérés comme une donation, au sens rigoureux du mot'', ''la donation faite occasione militiae est soumise à l'obligation du rapport, tandis que celle faite dignitatis causa y échappe''*, como señala LOUIS-LOUCAS⁷³⁴ recordando las palabras de CUJACIO: *<<militia non est dignitas: alioquin militia non veniret in collationem bonorum inter fratres>>*⁷³⁵; *<<... aliud est militia, aliud dignitatis (...) Militia est in patrimonio nostro, ergo conferetur, dignitas non est in patrimonio>>*⁷³⁶.

Por último, añadimos que se establece en D. 14.6.1.3 (Ulp., 29 ed.) y D. 14.6.2 (Ulp., 64 ed.) que no se aplicará al hijo de familia que desempeñe un cargo en la milicia lo dispuesto en el Senadoconsulto Macedoniano si disfrutase del peculio castrense, hasta la cuantía del mismo, ya que si no es así se aplicaría el Senadoconsulto aunque el hijo fuese un alto dignatario⁷³⁷. En este sentido, afirma Ulpiano en D. 14.6.2

⁷³⁴ LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges...*, op. cit., p. 610.

⁷³⁵ CUJACIO., *opp.*, t. 1, col. 1018 (cit. LOUIS-LOUCAS P.).

⁷³⁶ CUJACIO, *opp.*, t. 5, col. 514 (cit. LOUIS-LOUCAS P.).

⁷³⁷ Además, como pone de relieve ROMANO G., *Conventio e consensus (a proposito di Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.1.3)*, en *Annali Palermo (AUPA)*, 48, 2003, p. 40, Justiniano en C. J. 4.28.7.1 (a. 530), siguiendo la dirección de los textos clásicos recogidos en el Digesto, termina *''por dar validez al contrato de mutuo realizado por el filiusfamilias miles sin*

(64 ed.) que los hijos de familia, respecto del peculio castrense, son como cabezas de familia.

mandatum, ratihabito, consensus o voluntad del padre, prescindiendo de la existencia de un peculio castrense`. LUCREZI F., *Il problema del mutuo di denaro erogato al 'filius familias'*, Napoli, 1993, pp. 166 ss.; LONGO S., *Filius familias se obligat?. Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano, 2003, pp. 191 ss.

C) CONCLUSIONES

I.

El derecho a percibir un salario por parte de los funcionarios y el principio de proporcionalidad entre la retribución y el rango jerárquico de aquellos constituye uno de los ejes de la organización administrativa romana de época imperial frente al principio republicano de gratuidad de las funciones públicas.

II.

En el Principado los funcionarios recibían su salario en dinero, sin embargo, la gravísima crisis económica que azotó al Imperio Romano en el siglo III provocó un proceso de enorme inflación que a su vez motivó que los sueldos tanto de la milicia civil como de la armada fuesen pagados principalmente *in natura* mediante la entrega de una cantidad de raciones alimentarias y de forraje para los caballos, siendo esta materia regulada en el Código Teodosiano y en el Código de Justiniano. Dicho sistema de retribuciones no aseguraba adecuadamente la remuneración de los funcionarios con lo que daba lugar a graves abusos cometidos por funcionarios deshonestos que pretendían asegurar su

subsistencia mediante la imposición de *sportulae* ilegales a los administrados que recurrían a sus servicios, como es el caso, de las cantidades exigidas a los litigantes por los oficiales de justicia si no querían verse sujetos a retrasos injustificados en los litigios; en este sentido, Salviano de Marsella condenó la corrupción de funcionarios sin escrúpulos y de exactores de impuestos como una de las causas de la rebelión que tuvo lugar en la Galia en el siglo V con el nombre de <<bagauda>>. A finales del siglo IV la legislación imperial trató de solucionar estos problemas estableciendo que los funcionarios pudiesen cambiar las prestaciones *in natura* por dinero (*adaeratio*) lo cual, sin perjuicio de la aparición de nuevos abusos que intentaron impedir los emperadores, ofrecía a los funcionarios el beneficio legal que venía dado por el hecho de que el precio de la *adaeratio* fijado por la Administración solía ser superior a los precios de mercado de los productos *in natura*. Para evitar estos “fraudes” se dispone a partir del año 423 que las distribuciones de las *annonae* de todos los funcionarios fueran obligatoriamente conmutadas en oro con tarifas fijadas conforme a la utilidad pública, y así en época de Justiniano los sueldos de los funcionarios se seguían calculando en *annonae* pero se pagaban ya en sólidos o libras de oro.

Justiniano estableció la política de mejorar la retribución de los funcionarios siendo consciente de que de este modo combatía la corrupción de los mismos.

III.

Desde época del Principado era práctica habitual que los funcionarios recibiesen de los particulares obsequios o propinas (*sportulae*). A partir de Constantino la legislación osciló entre la prohibición y la reglamentación de dichas *sportulae* pero siempre que, en cualquier caso, se hubiesen realizado por propia voluntad de los administrados y no mediante coacción en cuyo caso estaríamos ante un supuesto de *crimen repetundarum* con la obligación de denuncia por parte del particular. Justiniano legalizó esta práctica pero limitándola a cuantías determinadas en función de la importancia de las gestiones realizadas por el funcionario.

La responsabilidad del pago de los salarios a los funcionarios correspondió principalmente a lo largo del Bajo Imperio al prefecto del pretorio y al *comes sacrarum largitionum*; en la ciudad de Roma el *praefectus urbi* pagaba el sueldo de los funcionarios que estaban a él subordinados.

IV.

Justiniano extendió el peculio cuasi castrense a todos los funcionarios *fili familias* retribuidos por el Estado disponiendo además que los mismos podían hacer testamento sobre este peculio sin que pudiera ser impugnado con la *querella inofficiosi testamenti*, si bien

cabía dicha impugnación cuando el *filius familias* adquiriese la condición de *sui iuris* en tanto en cuanto los bienes que pertenecían al peculio cuasi castrense pasaban a confundirse con los demás bienes del testador. No obstante, el mismo emperador fijó que el *filius familias* funcionario debía colacionar dentro de su cuarta legítima la cantidad que recibió en su día de su padre para la compra de la milicia.

CAPÍTULO VIII

PRIVILEGIOS DE LOS FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN IMPERIAL ROMANA: REGLAMENTACIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

A) INTRODUCCIÓN.

El funcionario gozará a lo largo de su carrera de una serie de privilegios establecidos por ley de los que también se beneficiará posteriormente cuando llegue el momento de su retiro. En este sentido ha señalado CHURRUCA que “el mayor atractivo de los altos cargos públicos no fue en el Bajo Imperio la retribución económica oficial o extraoficial, sino el prestigio social que proporcionaban a quienes los detentaban y la serie de privilegios legales (exención de ciertas cargas) y trato privilegiado de hecho en la administración de la justicia y en la exacción de impuestos”⁷³⁸.

Los más altos dignatarios palatinos, senadores e ilustres, tenían de numerosos privilegios tanto en materia de Derecho penal, como en el ámbito procesal y civil⁷³⁹, así como también de la dispensa o exención de numerosas cargas sordidas y extraordinarias⁷⁴⁰.

⁷³⁸CHURRUCA J., *Introducción histórica...*, op. cit., p. 213.

⁷³⁹Los funcionarios gozaban de exenciones en materia de tutela (D. 27.1.6.15: <<tutela non est reipublicae munus, nec quod ad impensam pertinet, sed civile; nec provinciale videtur tutelam administrare>>, la tutela es un cargo civil (*munus*) por lo que no se

considera un cargo público ya que no comporta una *gestio rei publicae*) y curatela, como se recoge, por ejemplo, en C. J. 5.62.25 y en C. J. 12.16.5.2 en donde el emperador Anastasio establece que los silenciarios que prestan su servicio en el palacio del emperador estarán excusados de la tutela y de la curatela; igualmente los palatinos quedaban dispensados de la tutela y de la curatela como se contiene en el Libro de Derecho Siro-Romano, 11 y 91.

Asimismo, Hermogeniano afirma en D. 27.1.41 pr.-1 (2 *iur. epit.*) que mientras los administradores de los bienes patrimoniales del príncipe ocupen sus cargos estarán exentos de la tutela y de la curatela, estableciéndose esto mismo para el *praefectus annonae* y el *praefectus vigilum*; y en I. J. 1.25.1 se menciona que en un decreto de Marco Aurelio se permitió que los que administran bienes del Fisco pudieran excusarse de la tutela y de la curatela mientras desempeñan este cargo.

También en D. 27.1.8 pr. (Mod., 3 *excus.*) se dispone que los militares una vez que hubiesen cumplido el tiempo de su milicia quedaban exentos de la tutela (se establece en el número 1 de este fragmento que no gozarán de dicho privilegio los que hubiesen sido licenciados ignominiosamente, ya que se considera que nunca fueron militares. Y en el número 2 se añade que aunque un militar no hubiese completado el tiempo de su milicia gozará de la exención perpetua de la tutela si hubiese desempeñado su puesto durante al menos veinte años, salvo que se tratase de un tribuno que hubiese militado en las cohortes urbanas, en cuyo caso nos dice Ulpiano en D. 27.1.9 (Ulp., *de off. praet. tut.*) que goza de exención perpetua de la tutela, incluso de la de los hijos de un colega, gracias al beneficio otorgado por los emperadores Septimio Severo y Caracalla), pero se dice que respecto de los hijos de sus compañeros tienen exención sólo dentro del año siguiente de haber sido licenciados a no ser que tuviesen alguna otra justa excusa de la tutela como puede ser el haber cumplido ya los setenta años. Sin embargo, respecto de los nietos de sus compañeros militares no tienen la obligación de desempeñar la tutela ya que -se dice al final del fragmento- se considera que aquellos están en la misma situación que las demás personas.

Por lo que hace a los magistrados municipales nos encontramos con dos textos contradictorios en el Digesto; por un lado Modestino nos dice en D. 27.1.6.16 (Mod., 2 *excus.*) que << *excusantur a tutela vel cura magistratus municipales* >> (''son eximidos de la tutela y de la curatela los magistrados de las ciudades''); sin embargo, Ulpiano en D. 27.1.23 (Ulp., 2 *resp.*) afirma lo siguiente: <<respondí que no tenía excusa de la tutela el que iba a desempeñar una magistratura en un municipio>>. Pero junto a las fuentes citadas vemos que Calístrato en D. 27.1.17.4

(Call., 4 *cognit.*) señala que el que desempeña el cargo de edil no puede ser nombrado tutor ya que, en virtud de un rescripto de Marco Aurelio, el mismo está entre las magistraturas que están excusadas de los cargos privados, añadiendo el jurista que se consideran exentos de la tutela los que se encuentren desempeñando cargos públicos cuando se les llama por primera vez para asumir la administración de la tutela, precisando que los que ya ejercen el cargo de tutor, es sabido que ni siquiera se liberan de la tutela durante el tiempo de la magistratura.

Por último, se exige al palatino de aparecer como *defensor* en un procedimiento judicial privado (CTh. 6.30.10; a. 385, CTh. 2.12.6; a. 395: ``ningún militar sea procurador o defensor de causas``. Recordamos también aquí el fragmento de Paulo contenido en D. 3.3.54 (50 *ed.*) que refiere que ni el militar ni el que va a hacerse cargo de una magistratura *-magistratum initurus est-* son idóneos para desempeñar el papel de defensor en un juicio) o de ser designado como *intercessor* o *exsecutor* en un negocio público o privado: concretamente en C. J. 1.40.8 (a. 386) se establece que ningún juez puede nombrar como intercesor a ningún empleado de la prefectura del pretorio, palatino o militar, ni a nadie que en el pasado hubiese desempeñado tales cargos; en caso de contravenir esta disposición se establece que al juez y a sus oficiales se les impondrán <<*non solum detrimentum famae, sed etiam patrimoniorum damna*>>.

⁷⁴⁰ Los personas de rango ilustre, los altos dignatarios, los senadores, los empleados de palacio estaban dispensados también de las llamadas cargas sórdidas (*munera sordida*) -fabricación de la harina y cocción del pan, construcción y reparación de edificios públicos, carreteras y puentes, etc...- y de las cargas extraordinarias y viles, como se recoge en C. J. 12.1.4 (a. 346-349).

En CTh. 11.16.14 (a. 382) [=C. J. 10. 48(47).11], los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio declaran exentos de todos los cargos civiles a los *magistri memoriae, vel epistolis vel libellis* (encargados de la secretaría de memorias, epístolas o libelos); el mismo año en CTh. 11.16.15 [=C. J. 10.48(47).12] conceden la exención de las cargas viles (*munera sordida*) a los superiores de las más altas dignidades, a los condes del consistorio, a los secretarios (*notarii*) y a los ayudas y ex -ayudas de cámara (*cubicularii atque excubicularii*). Por lo que hace a los dignatarios palatinos de Occidente, estos son dispensados en el año 382 únicamente de las cargas sórdidas pero no de las cargas extraordinarias que son exigibles a todos ellos; este privilegio se extendió a los palatinos de Oriente en 390 (CTh. 11.16.18). Y en el año 412 los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio confirman a los dignatarios ilustres no sólo la dispensa de las cargas sórdidas sino

también de las cargas extraordinarias (CTh. 11.16.19 [=C. J. 10.48(47).16]: <<*Ab illustribus personis sordida munera et extraordinariae necessitatis damna removemus*>>).

En las fuentes se recoge que estas exenciones no eran transmisibles a los herederos ya que se habían concedido *intuitu personae*, atendiendo a su dignidad y a su cargo en la milicia; el funcionario las disfrutará en vida y no sólo durante el ejercicio del cargo (CTh. 11.16.15 [=C. J. 10.48(47).12]; CTh. 11.16.16 [= C. J. 10.48(47).13]; CTh. 11.16.19 [= C. J. 10.48(47).14]). No obstante, algunas de estas exenciones fueron suspendidas en diferentes momentos principalmente por necesidades militares (CTh. 15.3.6 [= C. J. 11.75(74).4]; CTh. 11.17.4 [= C. J. 10.49(48).1]; Nov. Val. 10.3) o de otro tipo (C. J. 10.49(48).3, a. 472-473 (Imp. Leo A. Dioscoro P.P.): <<*Hac providentissima lege statuimus, omni excusatione cessante, nullaque persona vel dignitate penitus excepta, in quibuscumque locis administrationi sublimitatis tuae commissis opus exegerit, murorum constructionem seu comparationem frumenti aliarumque specierum sine ullo impedimento, prout commodum atque necessarium magnitudo tua perspexerit*>>. SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, op. cit., pp. 453-454.

Podemos mencionar también las numerosas ventajas que disfrutaban los funcionarios palatinos desde época de Constantino como eran: la dispensa de la curia y de diferentes cargos municipales tanto para ellos como para sus hijos y nietos (CTh. 6.35.3= C. J. 12.28(29).2); la dispensa de cargas personales durante el ejercicio de su función así como una vez retirados del servicio (CTh. 6.35.1= C. J. 12.28(29).1); la exención de la inscripción en el censo de sus hijos y de sus esclavos adquiridos por medio del peculio castrense; y también quedaban exentos de ser inscritos en el censo en el lugar de los contribuyentes o responsables de cargas ausentes (*deficientes*) .

Podemos añadir a lo visto anteriormente que en materia fiscal los funcionarios palatinos que llegasen al Senado (CTh. 6.2.13, a. 383), los *principes agentium in rebus* admitidos entre los consulares (CTh. 6.27.6, a. 390) y los decuriones de palacio en Oriente (CTh. 6.23.1, a. 415), entre otros altos funcionarios, estaban exentos de pagar la *gleba* senatorial (*collatio glebalis*) -impuesto que gravaba los bienes de los senadores desde principios del siglo IV-, si bien en el año 428 Teodosio II decide limitar esta exención a una serie de antiguos funcionarios palatinos y desde ese momento sólo el emperador podrá dar dispensas por rescripto o por *adnotatio specialis* (CTh. 6.2.26).

SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, II, pp. 218 ss.; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 50-53, 381-382.

**B) LA JURISDICCIÓN COMPETENTE EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. LA
<<PRAESCRIPTIO FORI>>.**

Los funcionarios públicos gozaban en cierta medida del privilegio de la *praescriptio fori*⁷⁴¹: los altos dignatarios de la Administración tenían derecho a ser juzgados por el prefecto de la ciudad o, en caso de crímenes graves, por el *comitatus*⁷⁴² o por el emperador⁷⁴³, pudiendo

⁷⁴¹ Algunos cuerpos de la Administración podían solicitar la *praescriptio fori* sólo en las provincias, otros en Constantinopla y, según la dignidad, también se veían beneficiados la mujer, los hijos y los esclavos del funcionario. Por ejemplo, los emperadores León I y Antemio en C. J. 12.25(26).3 conceden a los *castrensiarii*, que militan en la corporación del sacro vestuario (*schola sacrae militantis*), a sus madres y a sus mujeres que solamente podrá conocer de los litigios civiles o criminales que contra ellos se promuevan el tribunal del *magister officiorum* y no un tribunal ordinario.

⁷⁴² JONES, A.H.M., *The Later Roman Empire, 284-602*, I, Oxford, 1964, pp. 366 ss.; SESTON W., *Du comitatus de Dioclétien aux comitatenses de Constantin*, Historia, 4, Wiesbaden-Stuttgart, 1995, pp. 284 ss.; WINTERLING A., *Comitatus: Beiträge zur Erforschung des Spätantiken Kaiserhofes*, Berlin, 1998.

⁷⁴³ CTh. 2.1.4; CTh. 9.16.10; CTh. 9.1.13; CTh. 1.6.11; C. J. 12.1.16. Véase GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato...*, op. cit., pp. 34, 44.

apelar ante el mismo las sentencias dictadas contra ellos⁷⁴⁴. Por otro lado, los funcionarios ilustres como el prefecto del pretorio, el prefecto urbano, el *magister militum*, los condes del consistorio, los procónsules o los vicarios debían ser representados en juicio por un procurador tanto cuando ellos entablaban un pleito como cuando fuesen parte demandada (C. J. 2.12(13).25; a. 392): <<... *procuratoris personam in negotii sui iura substituat ...*>>). Se dispone que si estos funcionarios <<se hubiesen entrometido a litigar por sí en los juicios perderán el litigio>> y además será castigado el juez que no hubiese respetado esta norma con una multa de veinte libras de oro y otras veinte libras que deberá pagar también su oficina.

En C. J. 3.24.3 (a. 485-486?) se recoge una amplia constitución de Zenón en la que se dispone que si las altas dignidades citadas en ella fuesen, después de haber abandonado su cargo, acusadas de un crimen público o privado, se atribuye el conocimiento del mismo al emperador o a la persona a la que él designe que actuará en representación suya. Además, se establece en el número 1 que en este

⁷⁴⁴CTh. 11.30.23 (a. 345): *Dudum meminimus sancientibus nobis esse decretum, ut iuris veteris auctoritate submota nullus clarissimus a praefecti urbis sententia provocandi usurparet licentius facultatem. Sed cunctas nobis partes publicae utilitatis atque communis iuris videntibus praestare visum est, ut vetustatis auctoritas et appellandi facultas et origo repetatur, scilicet consenescente priore lege, qua istius modi potestas videbatur exclusa.*

caso el que actúe como juez delegado del emperador no podrá, una vez que se haya probado el crimen, imponer la pena sino que deberá ponerlo en conocimiento del mismo que será el que imponga la pena a dichas dignidades. En el número 2 se hace referencia a los ilustres que residen en Constantinopla y hubiesen recibido el título de forma honorífica sin recibir un cargo administrativo, los cuales serán juzgados por el prefecto del pretorio, por el prefecto de la ciudad y por el *magister officiorum*, cuando lo hubiese dispuesto el emperador; pero, aún cuando los delitos estuviesen probados, estas autoridades deberán ponerlo en conocimiento del emperador antes de pronunciar sentencia.

En Occidente, una ley del año 400 (CTh. 1.5.13) ordenaba que en caso de abusos cometidos por los palatinos del *comes rei privatae* - como faltas disciplinarias, ausencias ilícitas del servicio, o desvío de fondos (CTh. 1.10.5)- fuesen denunciados por el gobernador provincial al prefecto del pretorio, mientras que los de las sagradas liberalidades serían juzgados por el *comes sacrarum largitionum*. Sin embargo en Oriente, los palatinos de las *sacrae largitiones* se beneficiaron desde el año 423/424 de una *praescriptio fori* “parcial”: así, en la ciudad de Constantinopla, salvo para los asuntos de construcciones, annonas o servidumbres, eran juzgados por el *comes sacrarum largitionum* del que dependían jerárquicamente⁷⁴⁵ y, desde comienzos del s. VI, los condes

⁷⁴⁵Es opinión común en la doctrina que los *comites* sólo tendrían jurisdicción civil y penal sobre sus respectivos funcionarios *palatini*

de las sagradas liberalidades tuvieron jurisdicción civil y criminal sobre sus palatinos. Respecto de los palatinos que estaban de servicio en las provincias, debían ser juzgados por el mismo *comes*, y sólo cuando, aún encontrándose en la provincia, “*nec causis publicis occupatos*”, serían juzgados por el gobernador provincial, que además sólo podía pronunciar una sentencia criminal contra ellos con el visto bueno del *comes sacrarum largitionum* (C. J. 12.23(24).12; Impp. Teodosio II y Valentiniano III)⁷⁴⁶. En Occidente, hasta el año 429 los palatinos culpables de abusos podían ser arrestados por el gobernador y enviados al prefecto del pretorio (CTh. 12.6.32).

Por lo que hace a los funcionarios con el rango de clarísimos, Símaco hace alusión en *rel.* 48 a una prerrogativa senatorial que consistía en “librarse” de la jurisdicción del prefecto de la ciudad de

desde el año 425 a tenor de una constitución de Teodosio II y Valentiniano III conservada en C. J. 12.23 (24).12. Sin embargo, MASI A., *La giurisdizione del <<comes sacrarum largitionum>> e del <<comes rei privatae>> sui rispettivi funzionari <<palatini>*, en *Studi economico-giuridici*, 45, Milano, 1965-1968, pp. 253-261, considera por un fragmento de Zósimo (*Hist.*, 4.14.1) que podría resultar que en materia penal el *comes rei privatae* tendría jurisdicción sobre sus *palatini*, al menos desde el 371, año en el que *Fortunatianus*, *comes rei privatae*, procesó y sometió a tortura a un funcionario palatino a él subordinado. Este Autor sostiene también que no hay elementos de los cuales pueda deducirse que la jurisdicción civil del *comes rei privatae* y del *comes sacrarum largitionum* sobre sus respectivos funcionarios hubiese sido admitida antes de la ya mencionada constitución de Teodosio II y Valentiniano III.

⁷⁴⁶ DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 140-141.

Roma⁷⁴⁷: así, según esto, los miembros de la clase senatorial escaparían bajo Constantino de la jurisdicción ordinaria (CTh. 9.1.1, a. 316; = brev. 9.1.1) no quedando de esta manera bajo la jurisdicción del *praefectus urbi*; no obstante, pone de relieve CHASTAGNOL⁷⁴⁸ que estaban sujetos a dicho prefecto por los crímenes o delitos cometidos en la ciudad de Roma o dentro del distrito de las 100 millas⁷⁴⁹. Si el crimen hubiese sido cometido en provincias, los clarísimos quedaban sometidos a la autoridad del gobernador como los demás ciudadanos no pudiendo el mismo, en estos casos, ser declarado incompetente (*sine fori*

⁷⁴⁷ Desde época de Septimio Severo el *praefectus urbi* era el juez ordinario de los crímenes cometidos en el distrito de las 100 millas de Roma: <<*omnia omnino crimina...*>> (D. 1.12.1 pr.; 4; Ulp., *de off. praef. urb.*). Más allá de las 100 millas comenzaba la competencia del prefecto del pretorio (CTh. 9.1.1). En el siglo IV será el lugar del delito el que fija la competencia del juez respectivo, y en las provincias la competencia jurisdiccional correspondía al gobernador, cualquiera que fuese la condición social del acusado. El prefecto del pretorio se configuraba como juez de pleno derecho para todos los crímenes cometidos en la *urbica diocesis*.

⁷⁴⁸ CHASTAGNOL A., *La prefecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 120-121.

⁷⁴⁹ *Quicumque clarissimae dignitatis virginem rapuerit, vel fines aliquos invaserit, vel in aliqua culpa seu crimine fuerit deprehensus, statim intra provinciam, in qua facinus perpetravit, publicis legibus subiugetur, neque super eius nomine ad scientiam nostram referatur, nec fori praescriptione utatur. Omnem enim honorem reatus excludit, quum criminalis causa et non civilis res vel pecuniaria moveatur.*

Interpretatio: *Quicumque damnabile vel puniendum legibus crimen admiserit, non se dicat in foro suo, id est in loco, ubi habitat, debere pulsari: sed ubi crimen admissum est, ab eius loci iudicibus vindicetur, nec de eius persona ad principem referatur.*

praescriptione) sino que gozaba competencia para dictar sentencia sin tener que informar al emperador (*sine relatione*)⁷⁵⁰.

Además, en materia penal, podían los clarísimos como los demás condenados, apelar al prefecto del pretorio o al emperador las decisiones de los gobernadores por los crímenes que hubieren cometido en provincias; para los cometidos en Roma y dentro de las 100 millas, Constantino, hasta el año 331, concedió a todos los condenados el derecho a apelar al emperador las decisiones del prefecto de la ciudad (CTh. 11.30.7, a. 317= C. J. 7.62.14). Posteriormente, Constante abolió esta facultad de los clarísimos entre los años 341 y 345 para restablecerla en este último año (CTh. 11.30.23); y Constancio II, con su política antisenatorial, volvió a suprimir la posibilidad de los senadores de apelar ante el emperador (CTh. 11.34.2, a. 355)⁷⁵¹.

Por otro lado, una ley del año 376 recogida en CTh. 9.1.13 organizó de una nueva forma la fijación del criterio de competencia jurisdiccional para los procesos en los que eran acusados los clarísimos, estableciéndose como criterio de competencia el lugar del crimen⁷⁵²: en

⁷⁵⁰CHASTAGNOL A., *La prefecture urbaine...*, op. cit., pp. 120-121.

⁷⁵¹CHASTAGNOL A., *La prefecture urbaine...*, op. cit., pp. 122-123.

⁷⁵²STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, II, Amsterdam, 1968, pp. 70 ss.

caso de comisión de un delito perpetrado fuera de Italia, la instrucción del proceso pertenecía, según la gravedad del caso, al gobernador o al vicario de la diócesis⁷⁵³; si la instrucción hubiese sido dirigida por un gobernador (*praeses, corrector, consularis* o *proconsul*) la sentencia correspondía al prefecto del pretorio, y si había sido tramitada por un vicario la sentencia era dictada por el emperador. Cuando el crimen había sido cometido en Roma o dentro de las cien millas, la instrucción correspondía al prefecto de la ciudad que dictaba sentencia asistido por cinco senadores en activo elegidos cada vez por sorteo. Este tribunal constituía el llamado *iudicium quinquvirale*⁷⁵⁴ y el procedimiento se aplicó también en el siglo V en las acusaciones de lesa majestad (*vid.* el proceso celebrado en Roma contra el prefecto del pretorio de la Galia,

⁷⁵³Los vicarios tenían un poder de vigilancia y control disciplinario sobre la actividad administrativa de los funcionarios provinciales pertenecientes a su diócesis (C. J. 1. 54.6.2).

⁷⁵⁴CTh. 2.1.12 (Impp. Honorius et Theodosius): *In criminalibus causis senatus, statuta iam dudum quinquviralis iudicii forma servabitur, in quo quum perfacile esse credamus, optimos legere de summis, sortito tamen ad iudicium vocabuntur, ne de capite atque innocentia alterius iudicio electi iudicent.* (= brev. 2.1.12)

Interpretatio: *Quum pro obiecto crimine aliquis audiendus est, quinque nobiles viri iudices de reliquis sibi similibus missis sortibus eligantur: ne estudio videantur electi et de capitali re aut innocentia alterius videatur facile iudicari.*

COSTER C. H., *The iudicium quinquvirale*, Cambridge (MA), 1935; FLACH A., *Das iudicium quinquvirale im Werdegang senatorischer Strafgerichtsbarkeit*, ZSS, 113, Weimar, 1996, pp. 358 ss.

Arvandus, en el año 469)⁷⁵⁵. Esta jurisdicción era una consecuencia del principio de que cada uno debe ser juzgado por sus iguales.

Por lo que respecta a la evolución de la jurisdicción especial de los clarísimos demandados en el ámbito criminal, principalmente por las acusaciones de *peculatus*, las modificaciones principales de su estatuto privilegiado se producen en los años 376 y 423⁷⁵⁶: cuando el funcionario ejercía su autoridad en la ciudad de Roma y era acusado, antes o después de abandonar su cargo, de haber desviado en su provecho dinero perteneciente al Fisco, el prefecto de la ciudad iniciaba una investigación financiera llevada a cabo por los *discussores* (inspectores del Fisco), subordinados del *comes sacrarum largitionum*; posteriormente el prefecto informaba al emperador e iniciaría la investigación judicial consagrada a la búsqueda del culpable⁷⁵⁷. La

⁷⁵⁵Sidon. Apolin., *ep.*, I, 7,1-13, que recoge el proceso de concusión y de lesa majestad ante el Senado romano contra el prefecto del pretorio de la Galia, *Arvandus*, acusado de abuso de poder y malversación. La sentencia condenó a *Arvandus* a ser estrangulado. DUVAL-ARNOULD L., *Études d'histoire du droit romain au V siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire*, Paris, 1888, pp. 36 ss.; CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 124-125.

⁷⁵⁶ CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 128-129.

⁷⁵⁷Si el *peculatus* era cometido en provincias el prefecto de la ciudad no intervenía, pero la decisión final incumbía igualmente al emperador; así, Amiano Marcelino (28.1.18) nos refiere el supuesto del procónsul de África, *Hymetius*, que fue acusado de haber desviado a su favor dinero público destinado a los graneros de Cártago siendo condenado por Valentiniano I en el año 369 a la confiscación de una parte de sus bienes.

sentencia era dictada por el emperador⁷⁵⁸ ya que el prefecto no tenía ningún derecho de decisión sobre las causas de *peculatus* las cuales no quedaban sometidas al *iudicium quinquevirale*⁷⁵⁹.

En cuanto a la jurisdicción civil, los clarísimos gozaban, en materia de fijación de competencias, del privilegio del *domicilium dignitatis* y no regía para ellos el principio general “*actor rei forum sequitur*” (el actor sigue el fuero del reo)⁷⁶⁰. Ahora bien, en caso de que el senador residiese realmente en una provincia podía optar por el fuero de la misma: y así, como señala CHASTAGNOL, si nos encontrásemos ante un proceso civil sustanciado entre un clarísimo y un provincial, el

⁷⁵⁸Previa audiencia del *comes sacrarum largitionum* o del *magister officiorum*.

⁷⁵⁹Sobre el *peculatus*, véase *infra* nt. 938.

⁷⁶⁰Al menos desde los Severos, se consideraba que los clarísimos tenían en Roma su domicilio legal, aunque ellos residiesen en provincias de forma más o menos prolongada: es el privilegio (*domicilium dignitatis*) que se recoge en C. J. 10.40.(39).8, donde se establece que <<*senatores in sacratissima urbe domicilium dignitatis habere videntur*>>; por otro lado, Paulo señalaba en D. 1.9.11 (Paul., 1 ed.): <<Los senadores aunque parezca que tienen su domicilio en la urbe, se entiende, no obstante, que también tienen su domicilio allí de donde son oriundos, porque se entiende que su dignidad les ha añadido otro domicilio y no que se lo ha cambiado>>; véase también D. 50.1.22.6 (Paul., 1 sent.).

CHASTAGNOL A., *Le problème du domicile légal des sénateurs romains à l'époque impériale*”, en *Mélanges offerts à L. S. Senghor*, Dakar, 1977, pp. 43 ss.; LICANDRO O., *Domicilium Habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004, pp. 359 ss.; LÓPEZ HUGUET M. L., *Régimen jurídico del domicilio en Derecho Romano* (prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2008.

asunto –seguramente- se desarrollaría ante el gobernador de la provincia si el senador era el demandante, y ante la jurisdicción de Roma si tenía la condición de demandado. Esta regla de competencia fue implícitamente recordada por Diocleciano y Maximiano (C. J. 3.22.3, a. 290) y estaba todavía en vigor en el año 364 (CTh. 2.1.4)⁷⁶¹.

Por último, otras constituciones que afectaban a los funcionarios de rango senatorial y a los clarísimos se contienen en C. J. 3.24 (<<*ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter convenientur*>>)⁷⁶²; concretamente, en CTh. 9.1.1 (a. 317) [=C. J. 3.24.1] –ya referida anteriormente- el emperador Constantino establece que los clarísimos (*clarissima dignitate*) que hubiesen cometido un delito o un crimen serán juzgados en la provincia en la que hubieren realizado dichos actos y no podrán utilizar la excepción del fuero (*nec fori praescriptione utatur*) ya que, termina diciendo Constantino, <<el delito excluye todo honor de esta naturaleza>>. En CTh. 9.1.13 (a. 390) [=C. J. 3.24.2] se dice respecto de los senadores que responderán de las causas pecuniarias, si viviesen en la ciudad de Constantinopla o en sus suburbios, o ante el tribunal del prefecto del pretorio o ante el del prefecto de la ciudad,

⁷⁶¹ CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, pp. 121-122.

⁷⁶² <<Donde han de ser citados civil o criminalmente los senadores o los esclarecidos>> (=Bas. 7.5.90-91).

pudiendo también dirigirse al tribunal del *magister officiorum* si lo hubiese autorizado el emperador.

A continuación, por lo que hace a los *agentes in rebus*, en C. J. 3.25 (<<*in quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt*>>)⁷⁶³ se recoge una constitución de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III, del año 439, en la que se dispone que los domésticos, los *agentes in rebus* y aquellos que tengan cualquier milicia o dignidad deben responder en cuanto a sus funciones públicas ante los gobernadores provinciales y no podrán alegar en estos casos ninguna excepción de fuero: <<*pro functionibus publicis respondere nulla fori praescriptione valitura sancimus*>>. Y en C. J. 12.20.4 pr. y 2 (a. 466), el emperador León I dispone que los que militan en el cuerpo de los *agentes in rebus* y hubiesen alcanzado el primer grado entre los ducenarios y los centenarios de la *schola*, mientras estén en Constantinopla, sólo podrán ser citados ante el tribunal del *magister officiorum*, tanto en las causas civiles como en las criminales; sin embargo, no se concede esta prerrogativa a los centenarios que se encuentren en las provincias, los cuales no gozarán en este caso de un foro especial sino que deberán someterse a la jurisdicción ordinaria, *nisi publicae exsecutionis sollicitudo his iniuncta sit*.

⁷⁶³<<En qué causas no pueden utilizar los que militan la excepción del fuero>> (=Nov. Theod. 7.1; Bas. 7.5.92).

Y respecto de los curiales y de los oficiales de los gobernadores provinciales (*cohortales*) se regula en C. J. 3.23 (<<*ubi quis de curiali vel cohortali aliave condicione conveniatur*>>)⁷⁶⁴ la jurisdicción a la que quedaban sometidos en caso de haber cometido un delito: en C. J. 3.23.1 (a. 397) los emperadores Arcadio y Honorio establecen que si algún curial o cohortal hubiese huido de su condición para entrar en la milicia y fuese posteriormente detenido no gozará de la *praescriptio honoris* que hubiese podido alcanzar, por lo que no conocerá del asunto el juez o funcionario bajo cuya autoridad estuviese en ese momento. Se establece que conocerá el caso el juez del lugar al que se hubiese acudido y que, una vez probados los hechos, sea devuelto a la corporación que había abandonado. Por otro lado, en C. J. 3.23.2 (a. 440) los emperadores Teodosio II y Valentiniano III establecen que no pueden oponer la excepción del fuero en los tribunales provinciales los que son llamados a la curia o a la oficina de los cohortales y aquellos sobre los que se afirme que han cometido exacciones indebidas o concusiones, los cuales no gozarán de la *exceptio fori* salvo que hubiesen servido con anterioridad en la milicia armada o gocen del favor del emperador; en este caso se dispone que el gobernador provincial deberá dar cuenta sobre la condición de los mismos a la prefectura del pretorio o al *magister officiorum* y <<esperen el resultado del juicio allí

⁷⁶⁴ <<Donde deban ser citados los curiales, los cohortales y los de otra condición>>.

donde las leyes mandan que se promuevan cuestiones de esta naturaleza>>. Si se hubiese cometido un delito de exacción indebida o concusión se establece que nadie podrá oponer la excepción del fuero, salvo aquellos a los que expresamente se les haya permitido, y serán juzgados por la prefectura del pretorio o por los gobernadores provinciales⁷⁶⁵.

⁷⁶⁵ Sobre el crimen de concusión, véase *infra* nt. 866.

C) LIMITACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE DERECHO PROCESAL PENAL.

Podemos comenzar constatando que en materia de Derecho penal, los altos funcionarios no estaban sometidos a tortura en el curso de la instrucción de un proceso judicial penal que se llevase a cabo contra ellos (CTh. 9.35.3, a. 377 [=C. J. 12.1.10]: <<*severam indagationem per tormenta quaerendi a clarissimo nomine submovemus*>>) ni a prisión preventiva (CTh. 9.2.1, a. 362 [=C. J. 12.1.8]: <<*ius senatorum et auctoritatem eius ordinis, in quo nos quoque ipsos numeramus, necesse est ab omni iniuria defendere. Si quis ergo senator, socius criminis insimulatus fuerit, ante causae cognitionem omni terrore calumniae, omni suspicionis molestia careat; vacuus sit prorsus et liber, antequam re convicta crimen agnoscat et exuat dignitatem*>>)⁷⁶⁶,

⁷⁶⁶Si bien las altas dignidades no podían ser encarceladas en una prisión (*carcere*), Símaco (*rel.* 36) nos cuenta el caso de dos altos funcionarios: el *comes sacrarum largitionum Macedonius* y el *comes rei privatae Ausonius*, que en el año 384 fueron “encarcelados” en una residencia privada.

salvo que se tratase de un caso de *crimen maiestatis*.⁷⁶⁷ A este respecto, señalamos que ya anteriormente Constantino había legislado en CTh. 9.5.1 (a. 314) [=C. J. 9.8.3] que <<ni por privilegio de alguna dignidad quedará liberado del tormento el reo de lesa majestad>>⁷⁶⁸; en este mismo sentido también Constancio II estableció en CTh. 9.16.6 (a. 358) [=C. J. 9.18.7] que si alguien hubiese sido descubierto en la Corte (concretamente se refiere la constitución a los funcionarios del *comitatus* del emperador) actuando como mago, hechicero, adivino o astrólogo será sometido al tormento y al martirio pese a su dignidad. Hasta tal

⁷⁶⁷ Aquellos clarísimos que hubiesen sido acusados de la comisión de un crimen que no fuera el *crimen maiestatis* quedaban libres (*vacui et liberi*) y, por tanto, sustraídos al arresto (*exhibitio*) y a la detención preventiva hasta que su culpabilidad fuese demostrada. Ahora bien, Valentiniano I abolió este privilegio de los senadores cuando prescribe en el año 365 que todo acusado de un crimen deberá ser arrestado cualquiera que sea su rango (CTh. 9.2.2). No obstante, esta situación cesa después de la muerte de Valentiniano y se asiste por contra en 376 a una reacción pro senatorial y, conforme a la misma, se aprueba en el año 377 una ley en la que se renueva la prohibición de tortura para los senadores, incluyéndose esta vez también el caso de lesa majestad (CTh. 9.35.3, a. 377= C. J. 12.1.10). VINCENTI U., *Praescriptio fori e senatori nel Tardo Impero romano d'Occidente*, INDEX, 19, Napoli, 1991, pp. 438 ss.

⁷⁶⁸ Véase, BASSANELLI SOMMARIVA G., *C. Th. 9. 5 ad legem Julian maiestatis*, BIDR, 86-87, Milano, 1984, pp. 95 ss.; GIGLIO S., *PS. 5.13-15, edictum de accusationibus e giurisdizione criminale nel tardo Impero romano*, SDHI, 63, Roma, 2002, pp. 205-263; LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, 2004, pp. 215 ss.

Ya Arcadio Carisio (s. III/IV) sostenía en D. 48.18.10.1(Arc. Char., *de testib.*) que <<en caso de crimen de lesa majestad, como afecta a las personas de los príncipes, todas las personas sin distinción pueden ser sometidas a tormento, si exige su testimonio y el asunto así lo requiere>>.

punto, dice la ley, que si siendo convicto negase obstinadamente este delito será puesto en el potro y con garfios en su costado⁷⁶⁹. Asimismo

⁷⁶⁹Esta constitución fue la primera en incluir las prácticas de ritos mágicos y de adivinación dentro del *crimen maiestatis* y, en concreto, en el ámbito de los miembros del *consistorium* del emperador, y fue abolida por Juliano ya que durante su mandato se permitió la consulta pública a filósofos y adivinos. DESANTI L., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990; LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi...*, op. cit., p. 224. Hacemos también aquí referencia a los procesos de *Scythopolis* (Palestina) ocurridos en torno al año 359 cuando ya estaba en vigor la constitución sobre los casos de magia “*in comitatu Augusti et Caesaris*” los cuales conocemos por Amiano Marcelino (19.12.1-19): a partir del 368/369 creció el número de senadores acusados, muchas veces sin fundamento, de magia y adivinación hasta tal punto que Amiano nos cuenta que a raíz de una acusación de prácticas mágicas y de envenenamiento presentada por un ex -vicario ante el tribunal del prefecto de la ciudad (Olibrio) en el año 369, éste remitió la causa al prefecto de la annona, Maximino, en vez de hacerlo ante el vicario del prefecto del pretorio que tenía una mayor competencia sobre el tema. Maximino aprovechó el hecho para iniciar una serie de procesos, torturas y persecuciones contra destacados miembros de la aristocracia senatorial que desembocó en una espiral de terror y condenas que duró hasta el final del reinado de Valentiniano I. Amiano Marcelino hace recaer toda la responsabilidad en este emperador y en los altos funcionarios nombrados por el mismo, los cuales, como él, eran de origen panonio, y a los que se les acusaba por parte de la aristocracia senatorial de incultos y corruptos.

FUNKE H., *Majestäts –und Magieprozesse bei Ammianus Marcellinus*, en JbAC, 10, 1967, pp. 145-175; VON HAEHLING R., *Ammianus Marcellinus und der Prozess von Scythopolis*, en Jahrbuch für Antike und Christentum (JbAC), 21, Bonn, 1978, pp. 74-101; LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi...*, op. cit., pp. 225 ss.; DEMICHELI A. M., *I processi di lesa maestà in Ammiano Marcellino*, en Annali Genova, 20, 1984-1985, pp. 95 ss.; MONTERO S., *Política y adivinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y harúspices (193 d. C.-408 d. C.)*, Bruxelles, 1991; CLERC J.-B., *Homines Magici. Étude sur la sorcellerie et la magie dans la société romaine impériale*, Bern, 1995.

en CTh. 9.35.1 (a. 369)⁷⁷⁰ [=C. J. 9.8.4] los emperadores Valentiniano I, Valente y Graciano dispusieron que a nadie se le prohiba que utilice la excepción de su carácter militar, de su linaje o dignidad en caso de que se le aplique el tormento de las cuerdas (*fidicularum tormenta*), salvo cuando sea por causa de lesa majestad, <<*in qua sola omnibus aequa conditio est*>>⁷⁷¹.

Concretamente, el *auctoramentum militiae* consistía en una prerrogativa judicial por la cual los altos funcionarios no podían ser torturadas sin la autorización previa del emperador, salvo que se tratase de un supuesto de fraude manifiesto o de *crimen maiestatis*: así, en C. J. 9.41.11 (a. 290) Diocleciano y Maximiano disponen que no se someta al tormento ni a las penas de los plebeyos a los descendientes de los *perfectissimi* hasta el tercer grado (bisnietos): <<... *non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici ...*>>⁷⁷², y recogen la opinión de Ulpiano (<<*Hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in*

⁷⁷⁰*Nullus omnino, qui in consultis ac nescientibus nobis fidicularum tormenta offerentur, militiae vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa conditio est.*

⁷⁷¹LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi...*, op. cit., 218, opina que asimilando la magia y la alta traición el juez podía superar las limitaciones impuestas en CTh. 9.35.1 y ser libre de colocar bajo tortura también a los senadores sin consultar preventivamente al emperador.

⁷⁷²Véase también C. J. 10.32(31).4.

publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert>>) contenida en D. 50.2.2.2 (Ulp., 1 *disput.*), en donde se observa la misma medida para el caso de los decuriones y de sus hijos. Los mismos emperadores habían establecido en C. J. 9.41.8 pr.-1 que los militares no fuesen sometidos, en las causas criminales, ni a los tormentos ni a las penas de los plebeyos, aunque hubiesen sido licenciados sin haber acabado el servicio salvo que lo hubiesen sido por ignominia. Esta prerrogativa se extendió también a los hijos de los militares y de los veteranos. Años más tarde en CTh. 9.35.1 (a. 369) [=C. J. 9.8.4], como ya vimos, los emperadores Valentiniano I, Valente y Graciano dispusieron que los funcionarios no se sujetasen a tormento salvo en caso de crimen de lesa majestad⁷⁷³; y en el año 377 reiteraron en CTh. 9.35.3 [= C. J. 12.1.10] que los clarísimos no podían ser investigados por medio del tormento.

Igualmente se recuerda en leyes posteriores que los miembros de las curias quedaban liberados de sufrir cualquier tipo de tortura: así, en CTh. 9.35.2 (a. 376) [=C. J. 9.41.16]⁷⁷⁴ Valentiniano, Valente y Graciano

⁷⁷³DILIBERTO O., *Ricerche sull' <auctoramentum>...*, op. cit., p. 93 nos dice que *“...in tal passo, si afferma che nessuno può essere privato -eccetto che nelle cause concernenti il crimen maiestatis-dell'auctoramentum militiae (o della defensio che deriva dal genus o dalla dignitas) cioè, exauctoratus, per essere sottoposto ai tormenta, se gli imperatori non ne sono al corrente”*. BONINI R., *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990, pp. 101-103.

⁷⁷⁴*Decuriones sive ob alienum sive ob suum debitum exsortes omnino earum volumus esse poenarum, quas fidiculae et tormenta*

establecen que los decuriones <<estén exentos de las penas que constituyen las cuerdas y los tormentos>>, salvo cuando se trate de un crimen de lesa majestad⁷⁷⁵; cinco años más tarde en CTh. 12.1.85 (a. 381) [= C. J. 10.32(31).33.1] se vuelve a recordar esta prohibición y se castiga al gobernador provincial que hubiese sometido a tormento a un principal o a un decurión con el pago de una multa de veinte libras de oro y con la infamia perpetua, y también se sanciona a los oficiales del gobernador los cuales quedarán obligados a pagar al Fisco una multa de cincuenta libras de oro, a menos que se hubiesen opuesto efectivamente a la tortura ordenada por su superior ya que, como vemos al final del fragmento, se les permite <<la libre facultad de

constituunt quod quidem capitale iudici erit, si in contumeliam ordinis exitiumque temptetur. 1.- Maiestatis tantummodo reos et quae nefanda dictu sunt conscios aut molientes ex ordine municipali maneat tam cruenta condicio.

⁷⁷⁵Ahora bien, recordamos que los decuriones podían ser sometidos a la tortura también en caso de crimen de falsedad, de prevaricación en las operaciones del censo y en la percepción de impuestos (C. J. 9.22.21 pr.: <<... *si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito, quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur*>>); CTh. 8.2.4. Asimismo, en una ley del año 387 contenida en CTh. 12.1.117 [=C. J. 10.32(31).40] se castiga con la pena de “azotes con disciplinas emplomadas” al principal o decurión que hubiese sido descubierto como malversador (*decoctor*) de caudales públicos o *immoderatus in exactione*.

Si bien, recordamos que en CTh. 12.1.47 se dice que en caso de que se condene a los decuriones a penas pecuniarias o corporales, los jueces debían adoptar una actitud benevolente hacia los mismos.

contradecirle>>⁷⁷⁶. De igual forma, en C. J. 9.47.12 los emperadores Diocleciano y Maximiano disponían que los hijos de los decuriones no debían ser echados a las fieras, y ya anteriormente Antonino Caracalla recordaba en un rescripto dirigido a Geminiano (C. J. 9.47.3) que los decuriones no deben ser condenados a trabajos públicos (<<*decurionem in opus publicum dari non oportere manifestum est*>>); y en un rescripto del emperador Alejandro Severo contenido en C. J. 9.47.9 se respondía a Demetriano diciéndole que al haberse probado que su madre era hija de un decurión no debió ser condenada a trabajar en las minas.

Por otro lado, por lo que hace a los altos dignatarios, podemos señalar también que estaban especialmente protegidos en caso de sufrir un atentado contra su persona, siendo castigados con la pena de muerte como reos de lesa majestad los culpables que hubiesen atentado contra la vida de un senador, de un miembro del *consilium* o del *consistorium* imperial, así como con la confiscación de todos sus bienes que serían adjudicados al Fisco y con la nota de infamia transmisble a sus hijos los cuales no podrían ser instituidos herederos ni legatarios ni por su padre ni por cualquier otra persona, quedando además excluidos para siempre de los *honores* y de la milicia⁷⁷⁷, y en

⁷⁷⁶...*ut pertinaciae iudicis sui resistat, liberam eidem contradicendi permittimus facultatem.*

⁷⁷⁷ La acción judicial dirigida a la confiscación de los bienes de los herederos podía iniciarse aún cuando no hubiese llegado a comenzar el procedimiento contra el causante debido a su fallecimiento anterior ya

relación con las hijas del condenado por este crimen se dice que no podrán recibir más que la *quarta Falcidia* respecto de los bienes maternos, ya hubiere fallecido la madre testada o intestada⁷⁷⁸. De igual forma, se establece que no serán válidas las emancipaciones que hubiesen realizado respecto de sus hijos e hijas una vez promulgada esta ley, ni tampoco las donaciones, enajenaciones o dotes que constare hubiesen sido hechas “desde el momento en que hubiesen pensado constituir la facción y la sociedad <para cometer este delito>”. Todo lo dispuesto se aplicará también a los que les hubiesen ayudado en el complot y a los cómplices así como a sus hijos. Sin embargo, serán premiadas las delaciones previas al atentado realizadas por alguno/s de los que estaban implicados, mientras que las delaciones

que, en tal caso, la actuación procesal y la condena *post mortem* (presupuesto necesario para la confiscación de lo recibido en herencia) por el *crimen maiestatis* iba dirigida a la *damnatio memoriae* del fallecido (D. 48.2.20). Asimismo, Marco Aurelio –C. J. 9.8.6– estableció una persecución *post mortem* contra los herederos en caso de *crimen maiestatis* dirigida a la confiscación del patrimonio hereditario del fallecido. BLANCH NOUGUÉS J. M^a, *La intransmisibilidad de las acciones penales...*, op. cit., pp. 57 ss.

⁷⁷⁸También en C. J. 9.8.5.5 se dispone que si las mujeres de los que participaron en el atentado se encontraren, una vez recuperada la dote, en la situación de que deben reservar para sus hijos lo que a título de donación recibieron de sus maridos deberán dejar al Fisco, una vez extinguido el usufructo, lo que con arreglo a la ley se debía a los hijos; sólo se concederá a las hijas la cuarta Falcidia.

realizadas estando avanzado el complot, pero antes de que hubiese sido descubierto por las autoridades, recibirán la absolución y el perdón⁷⁷⁹.

Toda esta normativa se regula en una ley publicada por los emperadores Arcadio y Honorio en el año 397 (CTh. 9.14.3 [=C. J. 9.8.5 pr.-5]⁷⁸⁰) y conocida como <<Lex Quisquis>>. Esta ley fue derogada por estos emperadores en el año 399 con una disposición conservada en CTh. 9.40.18 [= Brev. 9.30.4] en donde se vuelve al principio por el cual la pena sólo puede ser infligida a los autores del delito y no también a los herederos⁷⁸¹. Llama la atención que ambas leyes hayan sido

⁷⁷⁹Citamos D. 48.4.1.1 (Ulp., 7 de *offic. proc.*) en el que se dice que se castiga como reo del crimen de lesa majestad a aquél por cuya obra, consejo, o dolo malo se hubiere formado designio para que sea muerto un magistrado del pueblo romano u otra persona que tenga imperio o potestad alguna: <<... cuiusve opera consilio malo consilium initium erit, quo quis magistratus populi Romani...>>. SPERANDIO M. U., *“Exitus rerum” de “hominum consilia” in Cicerone*, BIDR, 98-99, Milano, 1995-1996, pp. 303 ss., considera que el suceso recogido por Cicerón en *Pro Mil.*, 19, parece ser el referido por Ulpiano en D. 48.4.1.1, y sería –según este Autor- la única fuente en la que aparecen castigados los meros *consilia* prescindiendo del *exitus* en un procedimiento ante una *quaestio* de época republicana.

⁷⁸⁰C. J. 9.8.5 pr. (Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano P.P.): *Quisquis... de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) cuiuslibet postremo, qui nobis militat, cogitarit (eadem enim severitate voluntatem sceleris, qua effectum puniri iura voluerunt), ipse quidem utpote maiestatis reus, gladio feriat, bonis eius omnibus fisco nostro addictis* (a. 397); C. J. 9.8.5.1: *...Filii vero eius (...) infamia eos paterna semper comitetur...*; C. J. 9.8.5.3: *...Ad filias sane eorum (...) Falcidiam tantum ex bonis matris (...) volumus pervenire...*

⁷⁸¹*Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. Propinquos, notos, familiares procul a calumnia summovemus, quos reos sceleris societas non facit.*

introducidas por Teodosio, hijo de Arcadio, en su codificación, y sin embargo vemos que la *Lex Quisquis* estará vigente en Oriente ya que – como hemos visto- será reproducida por Justiniano en C. J. 9.8.5⁷⁸².

⁷⁸²Sobre la <<*Lex Quisquis*>> puede consultarse la siguiente bibliografía: BAUMAN R. A., *Some problems of the “Lex Quisquis”*, en *Antichthon*, 1, 1967, pp. 49 ss.; KOLMER L., *Christus als beleidigte Majestät. Von der lex “Quisquis” (397) bis zur Dekretale “Vergetis”* (1199), en H. Mordek (ed.), *Festschrift für Horst Fuhrmann zur 65. Geburtstag*, Tübingen, 1991, pp. 1-13; SOLIDORO L., *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, en *Crimina e delicta nel tardo antico*. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001 (a cura di F. Lucrezi e G. Mancini), Milano, 2003, pp. 174-194.

D) ABUSOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE <<MUNUS HOSPITALITATIS>>.

Tanto los altos funcionarios, civiles y militares, como los palatinos que seguían al emperador en sus desplazamientos tenían derecho a ser alojados como huéspedes en casas particulares: de esta forma se dispone en CTh. 7.8.5.2-3⁷⁸³ (=C. J. 12.40(41).2), constitución de los emperadores Arcadio y Honorio publicada en el año 398 en Constantinopla, que el propietario de la vivienda debía dejar al funcionario una tercera parte de la misma a no ser que este último tuviese la dignidad de ilustre en cuyo caso tenía derecho a la mitad de la vivienda. Se establece además que si no se respetara lo establecido en la ley, el revestido de dignidad ilustre deberá pagar al Fisco una multa de treinta libras de oro, y los demás funcionarios serán castigados con la pérdida de su cargo⁷⁸⁴.

⁷⁸³DUPONT Cl., *Les iura in re aliena dans le Code Theodosien*, RIDA, 24, Bruxelles, 1977, p. 250.

⁷⁸⁴*Inlustribus sane viris non tertiam partem domus, sed mediam hospitalitatis gratia deputari decernimus ea dumtaxat condicione servata, ut alter ex his quilibet quive maluerit divisionem arbitrii aequitate faciat, alter eligendi habeat optionem. Et firmissimum perpetuo quod iussimus*

Esta obligación de dar hospedaje a los funcionarios debía soportarla en principio todo propietario⁷⁸⁵, si bien quedaron exentos de la

perseveret, ita ut triginta libras auri qui inlustri sunt praediti dignitate fisco nostro se inlaturos esse cognoscant, ceteri vero militia sciant se esse privandos, si generale praeceptum amplius usurpando quam iussimus reprehensibili temeritate violaverint.

Respecto de los gobernadores provinciales se establece que no podían alojarse en las casas de los particulares sino en los sacros palacios o pretorios que hubiese en la ciudad, con la finalidad de que el gobernador tuviese los edificios públicos en buen estado (C. J. 1.40.15(14), a. 471?); además, se estableció también que cuando viajasen por la provincia se alojasen en las *mansiones* – casas públicas que servían de paradas de posta y de hospedaje- (CTh. 1.16.4; CTh. 7.8.6).

⁷⁸⁵La carga de proporcionar alojamiento a los altos militares y a ciertos funcionarios civiles que tenían los habitantes de las ciudades recibía el nombre de *metatum* (C. J. 12. 40(41): <<*De metatis et epidemeticis*>>), *munus hospitalitatis*, o *munus hospitii in domo recipiendi*. TAVOLIERI C., *La fiscalité nel mondo antico. Il caso dell'hospitium militum*, en *Zeitschrift für antikes Christentum*, vol. 11, n. 3, Berlin, 2007, pp. 448-463.

Los ciudadanos quedaban obligados solamente al alojamiento, de tal manera que los oficiales militares así como los funcionarios civiles no podían pedir a los particulares nada destinado al alimento de los hombres o de los animales (CTh. 7.8.10.2, a. 413= C. J. 12.40(41).5.2: <<*Solam sane hospitalitatem sub hac observatione concedimus, ut nihil ab hospite, quod vel hominum vel animalium pastui necessarium creditur, postuletur ...*>>, estableciendo la constitución que: <<será castigado con la multa de diez libras de oro cualquier funcionario, togado, alguacil, militar o caminante que en cualquier lugar hubiese pedido alguna cosa a un huesped. Porque de tal modo queremos que sea desterrada la deprabada costumbre, que no consentimos, de que quede sin castigo ni aún los mismos que den algo, si se hubiere probado que espontáneamente dieron contra lo mandado alguna cosa>>. También se prohíbe a los gobernadores provinciales exigir una cantidad de oro a las personas sujetas a prestar este alojamiento forzoso para que puedan librarse de esta carga, imponiéndoles a dichos gobernadores la pena de confiscación y el exilio perpetuo (C. J. 12.40(41).12, a. 530: <<*Nullus praeses in circumeundo provinciam requirat aurum obtentu adaerationis metatorum (...). Quodsi hoc fecerit,*

misma en el año 384 los dignatarios ilustres como se dispone en una ley de Teodosio I contenida en CTh. 7.8.3; también en época de Valentiniano y Marciano quedarán exentos de esta obligación, en todo o

et exuitur dignitate, et bonis publicatis perpetuo exsilio subiicitur>>, ed. García del Corral).

Este fraude era denominado <<*epidemeticum*>> (C. J. 12.40(41) <<*de metatis et epidemeticis*>>), y - SERRIGNY, *op. cit.*, p. 348 - “l’*excessive sévérité de la peine prouve l’excès del’abus*”.

Los *mensores* o *metatores*, bajo las órdenes del *magister officiorum*, eran los encargados de elegir y preparar los alojamientos para la comitiva imperial y para los funcionarios civiles y militares indicando sobre la puerta de los edificios el nombre de la autoridad que se hospedaría en ellos. La cancelación del nombre por los particulares era considerada como un *crimen falsi* (CTh. 7.8.4, a. 393 [= C. J. 12.40(41).1]: <<*Si quis mentorum nostrorum manum, qua deputatas singulis quibusque domus enotant et postibus hospitaturi nomen adscribunt, delere non dubitaverit, ad instar falsi reus ex hac auctoritate teneatur*>>. SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, I, pp. 346-347; GERA G.-GIGLIO S., *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984, pp. 83-84. Véase también, GIUFFRÈ V., <<*lura*>> et <<*arma*>>..., *op. cit.*, pp. 48 ss.; GIGLIO S., *Il tardo impero e il suo senato...*, *op. cit.*, pp. 82-84.

El legislador se preocupó también de frenar los abusos sobre la propiedad privada realizados por los tribunos y demás altos mandos militares, quienes, por ejemplo, solían disfrutar de baños particulares, no siempre con el consentimiento de sus propietarios; además, se establece en CTh. 7.11.1 (a. 406)= C. J. 1.47.1: <<mandamos que no se cause molestia alguna a las curias y ciudades, y que por ellas no se calienten ningunos baños particulares para uso de los tribunos, o de los jefes, o de otros condes militares, y que por esta causa, no se consuma contribución alguna. Porque solamente a los ilustres varones, condes y maestros del ejército, les concedemos este servicio (y esto, si lo quisiesen); amenazando a los violadores de esta ley la pena del duplo>>. Vid. CTh. 7.8.12 (a. 414)= C. J. 12.40(41).6. Asimismo se prohíbe que los militares que tengan casa propia en la ciudad en la que se encuentren se hagan hospedar en casas de particulares como se dispone en CTh. 7.8.15 (a. 430). GIUFFRÈ V., <<*lura*>> et <<*arma*>>..., *op. cit.*, pp. 58-59; STASOLLA F. R., *Pro labandis curis. Il balneum tra Tarda Antichità e Medioevo*, Roma, 2002, p. 37.

en parte, otros altos dignatarios como, por ejemplo, los que hubieren obtenido la dignidad consular o el patriciado, los prefectos, los *magistri militum*, los *magistri officiorum* o los *quaestores* (C. J. 12.40(41).10). Esta dispensa de dar alojamiento beneficiaba, aunque en menor medida, también a sus herederos directos: hijos, esposa, padres o hermanos. Por otro lado, en Nov. Theod. 25 (a. 444) [=C. J. 12.40(41).9.1-4] se alude a los funcionarios que excusen el alojamiento en su propia casa, los cuales no podrían reivindicar para sí el alojamiento en casas ajenas, y si así lo hicieren, serían privados de los privilegios que establece la ley en esta materia, la cual intentaron defraudar (*quas fraudare conatus est*)⁷⁸⁶, pero, añade la constitución, si se contase entre aquellos a quienes no les está concedida ninguna dignidad, si reivindicán el alojamiento en casas ajenas, después de haber excusado la suya propia, serán multados con el pago de cien libras de oro que se habrán de satisfacer a las sacratísimas liberalidades.

A este respecto, son numerosas las fuentes, como CTh. 7.9.1-4, que castigan los frecuentes abusos y reclamaciones ilegales de

⁷⁸⁶Estamos ante un supuesto de *fraus legi* relacionado con el *metatus*. FASCIONE L., *Osservazioni sull'uso del concetto di "fraus legi"...*, *op. cit.*, p. 69.

alojamiento por parte de funcionarios con rango militar como era el caso de los *comites*, los *tribuni* o los *praepositi*⁷⁸⁷.

⁷⁸⁷ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, *op. cit.*, p. 128.

E) RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO DE LAS INSIGNIAS: UNA ESPECIAL REFERENCIA A LA *LEX VESTIARIA*.

Los funcionarios de un cierto rango gozaban también de una serie de derechos “honoríficos” que se concretaban en el tratamiento o título que debían recibir en atención al oficio que desempeñaban (a modo de ejemplo, mencionamos algunos de los títulos reservados a quienes ostentaban el grado de *illustres*: <<*tua celsitudo*>>, <<*tua serenitas*>>, <<*tua auctoritas*>>, <<*tua eminentia*>>, <<*tuum culmen*>>, etc...⁷⁸⁸), y en las insignias oficiales y distintivas de su función (*insignia* o *infulae*) como eran los uniformes o los medios de transporte, señalando a este respecto CHASTAGNOL que “l’entrée en charge consistait surtout, aux yeux des Romains de l’époque, dans le fait de revêtir les insignes officiels de la fonction”⁷⁸⁹. En este sentido, podemos añadir que se castigaba como *crimen falsi* la usurpación de grado o título o de

⁷⁸⁸Sobre este aspecto, KOCH P., *Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700*, Jena, 1903.

⁷⁸⁹CHASTAGNOL A., *Le préfecture urbaine...*, op. cit., p. 196.

insignias no competentes y el uso de falso <<diploma>> para viajar gratuitamente con la posta del Estado (D. 48.10.27.2); dicho uso de <<*insignia altioris ordinis*>> y el <<*confingere militiam*>> son contemplados también en P. S. 5.25.12 en cuanto servían para procurar ilícitas ventajas al funcionario en cuestión. La pena establecida en la *lex Cornelia de falsis* sería la de *interdictio aquae et igni* (D. 48.10.33) convirtiéndose más tarde en la deportación y confiscación de los bienes (D. 48.10.1.13)⁷⁹⁰.

La documentación que tenemos sobre las insignias de los funcionarios está constituida principalmente por las miniaturas que acompañan a los capítulos de la *Notitia Dignitatum* referentes a los distintos funcionarios, así como por diferentes documentos iconográficos que han llegado hasta nosotros⁷⁹¹. Entre las insignias destacamos en primer lugar el uniforme oficial (*habitus dignitatis*) que, como sabemos, era proporcionado por el *aerarium sacrum*⁷⁹². Los prefectos del pretorio, sus vicarios, y todos los oficiales civiles de las oficinas centrales y provinciales compartían con la *militia armata* el uniforme compuesto por

⁷⁹⁰FERRINI C., *Diritto penale romano*, Roma, 1976, pp. 400-401.

⁷⁹¹BERGER P. C., *The Insignia of the Notitia Dignitatum. A Contribution to the Study of late Antiquity Illustrated Manuscripts*, New York-London, 1981.

⁷⁹²Señala DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 468, que la ley contenida en CTh. 6.26.18 (a. 426) “*implique qu’il y a pour chaque dignité un habit de fonction qui leur est donné par le CSL <Comes Sacrarum largitionum> au moment de la promotion*”.

la túnica o clámide⁷⁹³ (CTh. 7.6.4, a. 396) y el cinturón militar o *cingulum*⁷⁹⁴. A diferencia de estos funcionarios el *praefectus urbi* estaba

⁷⁹³DELMAIRE R., *Largesses sacrées...*, op. cit, pp. 334 ss., 490-492. La clámide se acompañaba de la *fibula* (broche) cruciforme realizada normalmente en bronce dorado que aparece también como un símbolo del servicio en la milicia (Lido, *De magist.* 2, 4; S.H.A., V. Aur., 46,5: <<ut fibulas aureas gregarii milites haberent, idem primus concessit, cum antea argenteas habuissent>>). En una ley del emperador León recogida en C. J. 11.12(11).1 se castigaba con una multa de cincuenta libras de oro a los que insertasen en los broches de las clámides piedras preciosas. Desde la *lex vestiaria* (CTh. 14.10.1, a. 382) el uniforme de los funcionarios civiles se acompañaba de una especie de larga túnica decorada con insignias y un cuadrado de color cosido al pecho. Acerca del *pallium discolor* reservado a la milicia civil, véase: WILPERT G., *Das <<Pallium discolor>> der <<officiales>> im Kleidergesetz vom Jahre 382*, en Bessarione, 2 série, 9, 1904-1905, DELMAIRE R., *L`vêtement dans les sources juridiques du Bas-Empire*, en Antiquité Tardive, vol. 12, Paris, 2004, pp. 195 ss.

En CTh. 1.15.16 (a. 401) se impone que ningún “*honoratus*” (dignidad civil o militar) vaya a una *publica salutatio* ante el vicario desprovisto de su clámide y que el *officium* que haya descuidado el cumplimiento de esta norma deberá pagar una multa de diez libras de oro. NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 87; PIETRINI S., *Sull` iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, p. 136, nt. 196.

⁷⁹⁴El *cingulum* aparece como una *insignia honorum* o *dignitatum*. Así, en C. J. 12.50(51).3 (a. 365), dirigida a Rufino, prefecto del pretorio, se ordena (*iubemus*) que los numerarios (*tabularii*) de esta prefectura <<*cingulum habere et militiae ordinem tenere*>>. El cinturón estaba decorado con placas de bronce, y en el caso de los soldados palatinos y los representantes del emperador el cinturón era de oro. También los gobernadores provinciales lo llevaban como signo distintivo de su función (C. J. 12.8.2; C. J. 12. 40(41). 9). PÉREZ F., *Los cingula militiae tardorromanos de la península ibérica*, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 58, Valladolid, 1992, pp. 239 ss.

El vocablo <<*cingulum*>> se utiliza también en las fuentes con el sentido de entrar en el cargo: <<*cingulum militiae sibi sumere*>> (C. J. 12.23(24).9) y también para referirse a la salida del mismo: <<*deponere cingulum*>> (C. J. 12.52(53).3.1). Rechazar el *cingulum* equivale a desertar y el acto de quitárselo a un funcionario supone degradarle y

obligado a llevar desde la *lex vestiaria*, dada en Constantinopla en enero de 382 (CTh. 14.10.1), la indumentaria civil de los senadores⁷⁹⁵, los cuales dentro de la ciudad no podían llevar el uniforme militar (*chlamyde*) ni el *cingulum* sino el *colobium* (larga túnica blanca) cubierto con una capa (*paenula*) que debía ser sustituido por la antigua toga cuando ellos acudían a la Curia o intervenían en un acto oficial público. Se establece en esta ley que los senadores que violasen esta normativa perderían su rango, y se encarga a los *censuales* el cumplimiento de la misma bajo pena de una multa de veinte libras de oro.

En relación con las insignias tenemos que mencionar que desde el año 386 una ley de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio I contenida en CTh. 14.12.1 (=C. J. 11.20(19).1) obligaba a todos los altos funcionarios, civiles o militares, a utilizar los vehículos oficiales cuando circularan por Roma o Constantinopla: <<*omnes honorati seu civilium seu militarium vehiculis dignitatis suae, id est*

privarle del cargo; así, por ejemplo, en C. J. 1.23.7 pr. se dice: <<*ammisione cinguli ferientur*>>, y en Nov. 12.1: <<*cinguli privatio*>>: DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, op. cit., p. 493; ID., *Le vêtement, symbole de richesse et de pouvoir, d'après les textes patristiques et hagiographiques du Bas-Empire*, Fr. Chausson et H. Inglebert (éds.), en *Costume et société dans l'Antiquité et le Haut Moyen Age* (Colloque Université de Paris X-Nanterre, 23-24 avril 2000), Paris, 2003, pp. 85 ss.

⁷⁹⁵CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 197-198

carrucis, intra urbem sacratissimi nominis semper utantur>>⁷⁹⁶. Los gastos de construcción de los vehículos oficiales de los altos funcionarios, que en las fuentes aparecen designados con el nombre de *carruca* o *carpentum*, corrían a cargo del *aerarium sacrum* desde Valentiniano II como nos relata Símaco en *Rel.* 20, 1⁷⁹⁷ ya que con anterioridad a esta época los altos dignatarios utilizaban en los desplazamientos oficiales sus vehículos privados.

⁷⁹⁶En Nov. 25.5 se dice que el Pretor de Licaonia utilizará en sus desplazamientos un vehículo de plata (*argenteo vehiculo portabitur*), y en Nov. 24.4 se dispone lo mismo para el pretor de Pisidia. En Constantinopla el *carpentum* del prefecto de la ciudad estaba realizado en plata con anterioridad al año 384 (*Themistius, Or.*, XXXI, 353 d). CHASTAGNOL A., *Le préfecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 204; DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 482-483. Sabemos que Teodosio transformó el templo de Venus de Constantinopla en un garaje (*carrucarium*) en el que se guardaba el *carpentum* del prefecto del pretorio de Oriente, como nos describe J. Malalas en su obra *Chronographia* (ed. de L. Dindorf, Bonn 1831, p. 345). ENSSLIN W., *Carpentum oder carruca?*, *KLIO*, 32, Frankfurt am Main, 1939, pp. 89-105.

F) CONCLUSIONES.

I.

Los funcionarios en general y especialmente las dignidades y los magistrados municipales más importantes gozaron de numerosos privilegios como eran la dispensa de la tutela y de la curatela, la exención de *munera sordida* así como, entre otras ventajas, de diversas exenciones fiscales.

II.

Los altos dignatarios, senadores (*clarissimi*) y palatinos gozaron del privilegio de la *praescriptio fori* en época postclásica y justiniana. Los primeros tenían derecho a ser juzgados por el prefecto de la ciudad o, en caso de crímenes graves, por el *comitatus* o por el emperador y también podían apelar ante el mismo las sentencias dictadas contra

⁷⁹⁷*Cum clementia vestra meminisset faciendae carrucae inpendium de sacro aerario esse decretum, censuit, ut eius argentum publicis conditis redderetur ...*

ellos; igualmente, Zenón estableció que el conocimiento de los crímenes públicos o privados cometidos por la altas dignidades fuesen juzgados por el emperador o el juez que éste designase. Respecto de los senadores (*clarissimi*), estaban sujetos al *praefectus urbi* por los delitos cometidos en la ciudad de Roma o dentro del distrito de las cien millas y si el crimen hubiese sido cometido en provincias los clarísimos quedaban sometidos a la autoridad del gobernador pudiendo apelar en uno y otro caso ante el emperador; mediante una ley del año 376 se establece una nueva regulación de la materia fijándose que si el crimen se hubiese cometido en Roma o dentro de las cien millas la instrucción correspondía al prefecto de la ciudad que dictaba sentencia asistido por cinco senadores en activo elegidos cada vez por sorteo. Este tribunal constituía el llamado *iudicium quinquevirale*, aplicándose este procedimiento también en las acusaciones de lesa majestad, salvo que los clarísimos fuesen acusados de *peculatus* en cuyo caso el *praefectus urbi* iniciaba una investigación financiera llevada a cabo por los *discussores* (inspectores del Fisco) subordinados del comes *sacrarum largitionum* y la sentencia era dictada por el emperador; en caso de que la comisión del crimen se hubiese producido en provincias compete la instrucción del proceso, según la gravedad del delito cometido, al gobernador o al vicario de la diócesis, correspondiendo la sentencia al prefecto del pretorio en el primer caso y en el segundo al emperador. En el ámbito civil, al menos los clarísimos gozaban del privilegio del *domicilium dignitatis* de tal manera que estos podían elegir en los litigios

que pudiesen tener con un particular entre estar domiciliados, a efectos procesales, en Roma o en su provincia de residencia. Por lo que hace a los palatinos se establece en una ley del año 400 que las faltas disciplinarias, ausencias ilícitas del servicio o desvíos de fondos fuesen denunciadas por el gobernador provincial al prefecto del pretorio que era el juez competente mientras que los palatinos de las sagradas liberalidades serían juzgados por el *comes sacrarum largitionum*. Los *agentes in rebus* estaban sujetos a la jurisdicción del *magister officiorum* salvo los centenarios que se encontraban en las provincias los cuales estaban sujetos al gobernador provincial. Por último, los curiales y los cohortales que hubiesen huido de su condición para entrar en la milicia no gozaban de la *praescriptio* correspondiente al cargo que hubiesen podido alcanzar sino que conocía del asunto el juez o funcionario bajo cuya autoridad se encontrasen en ese momento; y respecto de las exacciones indebidas o concusiones cometidas por los curiales o cohortales, salvo excepciones, no gozaron de la *exceptio fori* de modo general y eran juzgados por la prefectura del pretorio o por los gobernadores provinciales.

III.

Los altos funcionarios así como sus descendientes hasta el tercer grado gozaron del privilegio de la <<*militiae auctoramentum*>>, en virtud de la cual no podían ser sometidos, sin autorización expresa del

emperador, a tortura o a prisión preventiva en el curso de la instrucción de un proceso judicial penal que se llevase a cabo contra ellos, salvo que se tratase de una causa seguida por *crimen maiestatis* o también, en esta época, por acusación de hechicería. Dicho privilegio se extendió a los militares en activo y a los veteranos así como a los decuriones y a los hijos de unos y otros.

El gobernador provincial que hubiese sometido a tormento a un principal o un decurión era castigado con graves penas pecuniarias y con la nota de infamia perpetua sancionándose también a los oficiales del gobernador si no se hubiesen opuesto efectivamente a la tortura ordenada por su superior ya que en este caso se les permitía por ley la libre facultad de contradecirle.

Los altos funcionarios estaban especialmente protegidos en caso de sufrir un atentado contra su persona siendo castigados, en virtud de la conocida como <<*lex Quisquis*>>, con la pena capital y con la confiscación de todo su patrimonio, como reos de lesa majestad, todos aquellos que hubiesen atentado contra su vida extendiéndose dicha pena a los cómplices. La acción judicial dirigida a la confiscación de los bienes se entablaba también contra sus herederos incluso en el supuesto de que hubiese fallecido el culpable antes de comenzar el procedimiento judicial contra el mismo.

IV.

Los funcionarios civiles y militares, en sus desplazamientos oficiales, tenían derecho a ser alojados como huéspedes en casas particulares. Las leyes regulaban minuciosamente las condiciones y los límites de dicho privilegio que constituía a la vez una carga para los ciudadanos del Imperio Romano (*metatum* o *munus hospitalitatis*). Estos quedaban obligados a prestar alojamiento pero los funcionarios civiles o militares no podían exigirles alimentos destinados a los hombres o a los animales ni podían hacer uso de los baños particulares sin su consentimiento. Asimismo, se castigaba con la pena de confiscación y el exilio perpetuo el abuso denominado <<*epidemeticum*>> cometido principalmente por los gobernadores provinciales que exigían una cantidad de oro a los ciudadanos obligados a prestar este alojamiento forzoso para que pudiesen librarse de esta carga.

Son numerosas las fuentes, contenidas principalmente en el Código Teodosiano, en las que se castigan los frecuentes abusos y reclamaciones ilegales de alojamiento por parte de funcionarios militares de alto rango. Y las leyes también aluden a los funcionarios que excusasen el alojamiento en su propia casa los cuales no podrían reivindicar para sí el alojamiento en casas ajenas, y si así lo hicieren serían privados de los privilegios que establece la ley en esta materia.

V.

Los funcionarios de un cierto rango gozaban de una serie de derechos honoríficos que se concretaban en el tratamiento o título que debían recibir en atención al oficio que desempeñaban y en las insignias

oficiales y distintivas de su función como eran los uniformes o los medios de transporte. Se castigaba como crimen *falsi* la usurpación de grado, título o de insignias y el uso de diplomas falsos para viajar gratuitamente por medio del *cursus publicus*.

Los funcionarios debían llevar un uniforme oficial estableciéndose sanciones en caso de incumplimiento de la normativa relativa al mismo que incluso en ocasiones alcanzaban al *officium* del alto funcionario que hubiese incumplido dicha normativa (*lex vestiaria*, del año 382).

CAPÍTULO IX

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS DURANTE EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN

A) PROHIBICIÓN DE ACUMULAR DOS O MÁS CARGOS INCOMPATIBLES ENTRE SÍ.

Comenzamos diciendo que ya en la República los magistrados no podían desempeñar otra magistratura además de aquélla para la que habían sido elegidos por el pueblo⁷⁹⁸. Esta situación tampoco era habitual dentro de la Administración imperial ya que regía la regla de la no acumulación por un mismo funcionario de dos o más cargos que podían ser incompatibles entre sí⁷⁹⁹; dicha regla se expresa en la rúbrica de C. J. 12.33(34): << ... *et ut nemo duplici militia, vel dignitate et militia simul utatur*>>⁸⁰⁰.

⁷⁹⁸ Vid. *supra* p. 85 nt. 124.

⁷⁹⁹ En CTh. 8.4.30 (a. 436) se establece la regla por la que se prohíbe a un oficial acumular su cargo con otra función burocrática, por ejemplo, un puesto en un *scrinia* y la carrera de abogado en la prefectura urbana o del pretorio. No obstante, nos encontramos con algún caso excepcional como es el de *Ulpius Limenius* que el 12 de junio de 347 fue nombrado prefecto de la ciudad de Roma, acumulando este cargo con la prefectura del pretorio según consta en la Cronografía del año 354. CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, *op. cit.*, p. 416.

⁸⁰⁰ <<... y que nadie desempeñe al mismo tiempo doble milicia, o dignidad y milicia>>. También Bas. 57.1.36 ss. Y en Partidas 1.5.50 se establece que el que posee un oficio está incapacitado para obtener otro.

Podemos referir a este respecto, dos leyes del emperador León relativas a esta materia: en primer lugar, en C. J. 12.19.10.1 se fija que <<de ningún modo desempeñen doble cargo (*duplici fungantur officio*) los susodichos *memoriales*, ni se inmiscuyan en la confección de dos documentos a fin de que no se ocupen los que hayan de reunir para sí solos muchos beneficios, sin dejar nada para los demás>>⁸⁰¹; y en C. J. 12.20.5 se dispone la incompatibilidad del desempeño del oficio de subauxiliar en las oficinas de las fábricas imperiales de bordados de seda y oro con la realización de servicios en las sacras secretarías (*scrinia*) porque <<no pueden dedicar su trabajo a dos oficios>>⁸⁰².

Asimismo, en una constitución de Justino dirigida a Licinio, *magister officiorum*, y recogida en C. J. 12.33(34).5.1⁸⁰³ (a. 524) se establece que los que estén desempeñando dos o más cargos deben elegir <<el que consideren preferible retener para sí>>, quedando prohibido el desempeño de dos o más milicias (<<...*interdicendis in commune cunctis ut dictum est binis pluribusve militiis...*>>), y además se castiga con una multa de diez libras de oro tanto al que hubiese incumplido la norma como a las secretarías u oficinas palatinas que

⁸⁰¹ SCARCELLA A. S, *La legislazione di Leone I, op. cit.*, pp. 373-374.

⁸⁰² ... *et duobus officiis operam suam adhibere non possunt* ...

⁸⁰³ BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III...*, *op. cit.*, p. 129.

hubiesen consentido o concedido subrepticamente (*subreptionem*) la acumulación de dos cargos incompatibles. La ley va incluso más allá castigando con la misma multa también la mera tentativa (*temeritate infructuosa*) por parte del funcionario de conseguir la acumulación de dos cargos incompatibles entre sí. No obstante, en el número 4 del fragmento se establece que no se aplicará esta ley <<a los que hubiesen obtenido dos cargos simultáneamente armonizados>> como es el caso de los encargados de los registros (*laterculensis*) que podían desempeñar también el cargo de los memorialistas (*memorialium cingulus*)⁸⁰⁴.

La misma idea se repite en una constitución de Justiniano contenida en C. J. 12.33(34).8⁸⁰⁵ cuando establece que ninguno tenga dos empleos al mismo tiempo: <<*ne quis eodem tempore duas militias habeat*>> y se exige que en el plazo de tres meses desde que el funcionario haya tenido conocimiento de esta ley <<declare en

⁸⁰⁴CAIMI J., *Burocrazia e diritto...*, op. cit., pp. 56-57, nos refiere el caso de Juan Lido que en el año 524 venía desempeñando un cargo en el *officium* del prefecto del pretorio y otro de *a secretis* imperial (secretaría del *consistorium*). Juan Lido tuvo que optar entre uno de los dos cargos puesto que su caso no se contemplaba dentro de las excepciones que establecía la ley. Concretamente, eligió continuar en el *officium* del prefecto.

⁸⁰⁵Este fragmento contiene una constitución de Justiniano escrita originariamente en griego recogida en los Basílicos, cuyo epítome se transcribe en la edición de García del Corral.

BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III...*, op. cit., p. 131.

actuaciones (*apud acta*) qué milicia o dignidad elige preferentemente para sí>> ante el *comes rerum privatarum*, si el funcionario desempeña su cargo en Constantinopla, mientras que si lo desempeña en provincias deberá dirigirse al gobernador de la provincia respectiva. En la constitución se establece también que si alguno hubiese intentado desempeñar doble milicia decaigan de una y de otra (<<...*et duplici forte militia uti conati fuerint, utraque excidunt...*>>), y fija también la multa de veinte libras de oro contra los transgresores de esta ley aunque hubiesen obtenido una dispensa mediante una ``sacra disposición`` admitida por el gobernador provincial. En este último caso será castigado el propio gobernador con la misma multa de veinte libras.

También en C. J. 1.51.14 pr. (a. 529) Justiniano prohíbe que quien ejerza la abogacía (*advocatus causarum*) sea nombrado asesor <<de cualquiera de los magistrados a quienes está encomendada la administración de la República (...) no sea que aplicándose a ambos, no desempeñe bien ninguno de los dos>>⁸⁰⁶; si bien -añade la constitución- el que hubiese elegido el cargo de asesor podrá una vez haya cesado en dicha función volver al ejercicio de la abogacía (<<*ita tamen, ut post consiliarii sollicitudinem depositam liceat ei ad munus advocacionis reverti*>>)⁸⁰⁷. De igual forma, en el número 1 de la misma ley, Justiniano

⁸⁰⁶ ... *ne, cum ad utrumque festinat, neutrum bene peragat...*

⁸⁰⁷ También en C. J. 2.7.9 (a. 442) los emperadores Teodosio II y Valentiniano III permitieron a los que desempeñaban la abogacía en el

prohíbe que alguien sea asesor de dos magistrados, debiendo en ese caso renunciar a uno de los dos puestos <<pues no es fácil de creer que una persona sola sea suficiente para dos cosas necesarias, porque mientras acude a un tribunal es necesario que esté ausente del otro, y que así no sea considerado completamente idóneo para ninguno de ellos>>⁸⁰⁸. Y en el número 2, se castiga severamente como delito al que con astutas maquinaciones intente eludir esta ley (por ejemplo -dice Justiniano- no poniendo en los documentos el signo (*signum*) de consejero sino que fingiere otra letra imaginada): en primer lugar será borrado para siempre de la matrícula de los abogados y deberá pagar al Fisco una multa de diez libras de oro exigible por el *comes rerum privatarum*; de igual modo será castigado el juez que toleró esta situación.

En el ámbito municipal se sigue la misma política: Modestino nos refiere en D. 50.5.14.1 (Mod., 7 *reg.*) que una misma persona no puede desempeñar al mismo tiempo dos cargos (<<*eodem tempore idem duas curas operis non administrabit*>>); de igual manera Papiniano nos dice en D. 50.1.17.4 (Pap., 1 *resp.*) que una persona no puede desempeñar

foro del prefecto del pretorio, del prefecto urbano, o en los tribunales de provincia, que aceptasen, previa renuncia, el cargo de gobernador provincial, estableciéndose que los mismos podrían, después de haber desempeñado fielmente este cargo, volver a la abogacía.

⁸⁰⁸ ... *neque enim facile credendum est duabus etiam necessariis rebus unum sufficere: nam cum uni iudicio adfuerit, altero abstrahi necesse est.*

cargos al mismo tiempo en dos ciudades, ya que en este caso tendría preferencia el desempeñado en su ciudad de origen: <<*sed eodem tempore non sunt honores in duabus civitatibus ab eodem gerendi ... potior est originis causa*>>.

B) ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD RELACIONADOS CON EL MATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS.

1. PROHIBICIÓN DE CONTRAER MATRIMONIO ENTRE UN FUNCIONARIO Y MUJER DE LA PROVINCIA EN LA QUE DESEMPEÑA SU CARGO O DOMICILIADA EN ELLA.

Pese a la ausencia de fuentes anteriores a la época de los Severos podemos suponer que la prohibición de contraer matrimonio entre un funcionario y una mujer de la provincia en la que desempeña su cargo existiría ya en época republicana: sabemos por Tácito (*Ann.* 3, 33-34) que en la República regía la costumbre en virtud de la cual los magistrados enviados fuera de la ciudad de Roma no podían llevar consigo a sus mujeres; sin embargo, el mismo Tácito nos cuenta que dicha norma no escrita había decaído en época de Tiberio⁸⁰⁹, a tenor del

⁸⁰⁹Parece ser que fue Cecilia Metella, cuarta mujer de Sila, la primera en interrumpir esta tradición republicana.

MARSHALL A. J., *Tacitus and the Governor's Lady: a Note on Annals III. 33-34*, en *Greece and Rome (second series)*, 22, Cambridge,

debate que tuvo lugar en el Senado el año 21 d. C. a propuesta de A. Severo Caecina, por el que se renovó la prohibición en virtud de la cual un magistrado no podía ir acompañado de su consorte a la provincia a la que se le hubiese destinado como gobernador provincial⁸¹⁰. Podemos pensar que entre los motivos de esta propuesta estuviese también, como señala VENTURINI⁸¹¹, la circunstancia objetiva de la frecuente implicación de las esposas en los *iudicia repetundarum* dirigidos contra diversos gobernadores provinciales en esa época⁸¹².

A este respecto citamos el fragmento recogido en D. 1.16.4.2, el cual está tomado del primer libro del <<*De officio proconsulis*>> de Ulpiano, en el que se dice: <<es mejor que el procónsul vaya a la provincia sin su mujer, aunque pueda hacerlo con ella, pero sabiendo que, siendo cónsules Cota y Mesala <20 d. C.>, el Senado decretó que si las mujeres de los que van a sus gobiernos hubieren cometido algún

1975, pp. 11 ss.; RAEPSAET-CHARLIER M. T., *Épouses et familles des magistrats dans les provinces romaines aux deux premiers siècles de l'Empire*, Historia, 31, Wiesbaden-Stuttgart, 1982, pp. 56 ss.

⁸¹⁰VOLTERRA E., *Una discussione nel senato romano sotto Tiberio*, Studi Grosso, 2, Torino, 1968, pp. 5 ss.; FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho privado romano*, op. cit., p. 205.

⁸¹¹VENTURINI C., “*Uxor socia*”: *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, IURA, 32, Napoli, 1981, p. 110.

⁸¹²FANIZZA L., *Il Senato e la prevenzione del “crimen repetundarum” in età tiberiana*, LABEO, 23, Napoli, 1977, pp. 199 ss.

delito se les exigirá a sus maridos cuenta y castigo>>⁸¹³. El senadoconsulto establecía la personal responsabilidad del marido por los beneficios obtenidos ilícitamente a iniciativa de la consorte del gobernador.

Sin embargo, vemos que no se hace ninguna referencia en las fuentes de aquella época al matrimonio del funcionario con mujer de la provincia. Las razones podrían encontrarse, por ejemplo, en que la ciudadanía romana no estaba extendida entre la población de las provincias y que las estancias de los funcionarios en las mismas solían ser por periodos de tiempo no muy largos⁸¹⁴, por lo que –como ha señalado DELL`ORO⁸¹⁵– “era difficilmente valutabile quale matrimonio in considerazione della non prevedibile fissazione di residenza nel luogo e della difficoltà, almeno nella maggior parte dei casi, di interpretare la

⁸¹³*Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur.* (vid. traducción de García del Corral).

VENTURINI C., “*Uxor socia*”: *Appunti in margine a D. 1.16.4.2...*, *op. cit.*, pp. 111 ss.

⁸¹⁴Los promagistrados y sus colaboradores, destinados en las provincias pretorias, no podían residir en las mismas más de un año según la regla fijada en la *lex Iulia de provinciis* del año 46 a. C., y los gobernadores de las provincias consulares desempeñaban su cargo por un tiempo inferior a dos años (Cic., *Phil.*, 1. 8.19).

⁸¹⁵DELL`ORO A., *Il divieto del matrimonio fra funzionario romano e donna della provincia*, en *Studi in onore Biondo Biondi*, II, Milano, 1965, p. 531.

reale volontà del funzionario sino al momento della scadenza del suo incarico``.

Esta prohibición aparece implícitamente referida por primera vez en fuentes jurídicas en una *sententia Severi* contenida en una constitución de Gordiano del año 239⁸¹⁶: *Imp. Gord. A. rationalibus: <<manifestum est nuptiis contra mandata contractis dotem, quae data illo tempore, cum traducta est, fuerat, iuxta sententiam divi Severi fieri caducam, nec si consensu postea coepisse videatur matrimonium, in praeteritum commisso vitio potuit mederi>>*. Atendiendo a esta fuente vemos que la dote dada en caso de un matrimonio *contra mandata*⁸¹⁷, como es el celebrado entre un funcionario con una mujer de la provincia, deviene caduca. Posteriormente, en un *rescriptum divinorum Severi et Antonini* citado por Marciano en su libro XI de las <<*Institutiones*>> y

⁸¹⁶ Señala DELL'ORO A., *Il divieto del matrimonio fra funzionario romano...*, *op. cit.*, p. 525, que "esta constitución nos ha llegado fuera de las compilaciones, siendo publicada por primera vez por Cujacio en *Observat.* I cap. XI: sobre la misma v. KRÜGER, *Codex Iustinianus*, Berlin 1877, 415 nota`. ORESTANO R., *La dote nei matrimonio contra mandata*, en *Studi di storia e diritto in memoria di G. Bonolis*, I, Milano, 1942 [= *Scritti II*, Napoli, 1998, pp. 750 ss.] considera que la prohibición fue establecida por Marco Aurelio y Cómodo con posterioridad al senadoconsulto emanado entre los años 177 y 180 que prohibió el matrimonio del tutor con su pupila. Sin embargo, ROBLEDA O., *El matrimonio en Derecho Romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma, 1970, opina que es posterior a Marco Aurelio.

⁸¹⁷ La prohibición de contraer matrimonio con mujer de la provincia estaba contenida en constituciones imperiales –*mandata* - dirigidas a las provincias.

recogido en D. 34.9.2.1-2, se dice que el funcionario no puede recibir por testamento de la *uxor ducta contra mandata*⁸¹⁸.

Asimismo, vemos que dicha prohibición se recoge como una verdadera *iuris regula* en las siguientes fuentes: por un lado, Ulpiano nos dice en D. 24.1.3.1 (Ulp., 32 Sab.) que: <<si (...) *nupserit* (...) *provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata* (...), *nuptiae non sunt*>>, y, por otro, Papiniano en D. 23.2.63 (Pap., 1 def.) nos refiere que: << (...) *eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit* >>⁸¹⁹. En este último fragmento⁸²⁰ el jurista compara el matrimonio entre el funcionario con una mujer de la provincia con el matrimonio del tutor con su pupila: <<*matrimonium non erit, quae species pupillae comparanda est...*>>, al

⁸¹⁸Vid. *infra* p. 538.

⁸¹⁹Vemos también que en D. 25.2.17 pr. (Ulp., 3 <4> ed.) se dice: <<... *cessat matrimonium*... tratándose de la que se casó con su tutor, o de la que se casó contra los mandatos imperiales...>>, por ello, a tenor de esta fuente, la mujer que hubiese sustraído cosas pertenecientes al funcionario no podría ser demandada con la *actio rerum amotarum* sino con la *actio furti*. ROBLEDA O., *Matrimonio inexistente o nulo en el derecho romano*, Studi in memoria di G. Donatuti, III, Milano, 1973, pp. 1147 ss. Sobre la *actio rerum amotarum*, WACKE A., *Actio rerum amotarum*, Köln-Graz, 1963.

⁸²⁰*Praefectus cohortis vel equitum aut tribunus contra interdictum eius provinciae duxit uxorem, in qua officium gerebat: matrimonium non erit: quae species pupillae comparanda est, cum ratio potentatus nuptias prohibuerit. Sed an huic quoque si virgo nupsit, non sit auferendum quod testamento relictum est, deliberari potest: exemplo tamen pupillae nuptae tutori, quod relictum est potest mulier consequi. pecuniam tamen in dotem datam mulieris heredi restitui necesse est.*

referirse concretamente al matrimonio celebrado entre un prefecto de cohorte o de caballería o de un tribuno militar con una mujer de la provincia en la que desempeña sus funciones. Así, dispone Papiniano que si se celebrase este matrimonio prohibido, la mujer, en caso de sobrevivir al marido, tendría derecho a lo que aquél le hubiese dejado en el testamento pero, no obstante, ésta deberá restituir al heredero <del marido> el dinero dado en concepto de dote a semejanza de lo dispuesto en el supuesto de la pupila casada con su tutor⁸²¹. Por tanto, no sólo la mujer no puede pedir la restitución de la dote que le correspondería por fallecimiento del marido sino que, además, al no haber existido propiamente matrimonio válido, debe restituir al heredero lo que donó en su día en concepto de dote.

Sobre el posible fundamento de esta prohibición ha señalado DELL'ORO, entre otras causas, *“la possibilità che il governatore accrescesse eccessivamente la propria potenza attraverso alleanze*

⁸²¹ Ahora bien, en este fragmento no se habla de matrimonio celebrado *contra mandata*, sino *contra interdictum*, y se refiere sólo a algunos funcionarios militares en provincias. ASTOLFI R., *Il fidanzamento nel diritto romano*, Milano, 1994, p. 145, considera que el fragmento alude a la dote constituida por la mujer y al caso de que ésta no la hubiese repetido en vida. VOLTERRA E., *Sull'unione coniugale del funzionario della provincia*, en Festschrift E. Seidl, Köln, 1975, pp. 169 ss.; CUENA BOY F., *La prohibición del matrimonio del funcionario con mujer de la provincia en la que sirve. Derecho Romano y Derecho castellano*, en *El Derecho de Familia: de Roma al derecho actual* (R. López-Rosa, F. del Pino, eds.), en *Actas del VI Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Derecho Romano* (Huelva 2003), Huelva, 2004, p. 103.

matrimoniali nella provincia e potesse sottrarre il territorio al dominio romano``, y ASTOLFI añade que ``la ragione del divieto: impedire che il funzionario abusi dei suoi poteri al fine di arricchirsi``⁸²² .

Ahora bien, del mismo año que la constitución de Gordiano antes citada y también del mismo emperador es la recogida en C. J. 5.4.6 (a. 239)⁸²³ en la que se dispone que el matrimonio *contra mandata* celebrado entre un funcionario y una mujer de la provincia deviene legítimo (*iustae nuptias*) si una vez abandonado el cargo (*depositio officii*) la mujer persevera en la misma voluntad de continuar el matrimonio⁸²⁴ y, de este modo, se consideran también legítimos los hijos concebidos y nacidos después de la *depositio officii*, tal y como se recoge en la respuesta dada por Paulo en D. 23.2.65.1 (Paul., 7

⁸²²DELL'ORO A., *Il divieto del matrimonio fra funzionario romano...*, op. cit., p. 536; ASTOLFI R., *Il fidanzamento...*, op. cit., p. 57. Véase también, DUYVENDAK N., *Restraining regulations for roman officials in the roman provinces*, en Symbolae Van Oven, Leiden, 1946, pp. 333 ss.; recientemente CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., *El matrimonio como estrategia en la carrera política durante el último tramo de la República*, en RIDROM: revista internacional de Derecho Romano, 7, 2011, pp. 367 ss.

⁸²³*Etsi contra mandata principum contractum sit in provincia consentiente muliere matrimonium, tamen post depositum officium si in eadem voluntate perseveraverit, iustae nuptiae efficiuntur; et ideo postea liberos susceptos natosque ex iusto matrimonio legitimos esse responsum viri prudentissimi Pauli declarat.*

⁸²⁴CUENA BOY F., *La prohibición del matrimonio del funcionario con mujer de la provincia...*, op. cit., p. 101.

resp.)⁸²⁵. También referimos que en D. 23.2.38 pr. (Paul., 2 sent.)⁸²⁶ no se prohíbe realmente al funcionario contraer esponsales con mujer de la provincia, estableciéndose en dicha fuente que si después de haber cesado en el cargo (*post depositum officium*) la mujer hubiese decidido no celebrar el matrimonio, cosa que le está permitido hacer, solamente deberá devolver las arras que hubiese recibido.

Sin embargo, vemos que la prohibición de contraer matrimonio no se aplicaba a los que ejercían su función en su propia patria (D. 23.2.65 pr.; Paul., 7 resp.): <<eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri>>) o a los que hubiesen contraído matrimonio con una antigua novia (D. 23.2.38.1; Paul., 2 sent.: <<veterem sponsam in provincia⁸²⁷, qua quis administrat, uxorem ducere potest et dos data non

⁸²⁵ Respondit mihi placere, etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum officium, si in eadem voluntate perseverat, iustas nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legitimos esse (=Paul. Sent., 2.19.10).

VOLTERRA E., *Sull'unione coniugale del funzionario della provincia*, op. cit., pp. 169-178.

⁸²⁶ ...quamvis sponsare non prohibeatur, ita scilicet, ut, si post officium depositum noluerit mulier nuptias contrahere, liceat ei hoc facere arris tantummodo redditus quas acceperat (= Paul. Sent., 2.19.10). VOLTERRA E., *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, BIDR, 40, Milano, 1932, pp. 87 ss. [= Scritti giuridici I. Famiglia e successioni, Napoli, 1991, pp. 339 ss.].

⁸²⁷ ASTOLFI R., *Il fidanzamento...*, op. cit., p. 61, opina que la expresión <<vetus sponsa>> utilizada por Paulo no es elegante para

fit caduca>>, =*Paul. Sent.*, 2.19.11). De igual forma se admitió que el funcionario tuviese una concubina de la provincia en la que ejercía su administración tal y como nos dice Paulo en D. 25.7.5 (*Paul.*, 2 *sent.*): <<*Concubinam ex ea provincia, in qua quis aliquid administrat, habere potest>>* (= *Paul. Sent.*, 2.20.2).

La prohibición de contraer matrimonio con mujeres de la provincia se extendía también a los hijos varones del funcionario que estaban bajo su potestad como se recoge en un fragmento de Marciano contenido en D. 23.2.57 (*Marcian.*, 2 *inst.*): <<*Qui in provincia officium aliquod gerit, prohibetur etiam consentire filio suo uxorem ducenti>>*; sin embargo, sí se permitió que las hijas de un funcionario contrajesen matrimonio con hombres de la provincia y que su padre les otorgase la dote correspondiente (D. 23.2.38.2; *Paul.*, 2 *sent.*: <<*Qui in provincia aliquid administrat, in ea provincia filias suas in matrimonium collocare et dotem constituere non prohibetur>>*, = *Paul. Sent.*, 2.19.12)⁸²⁸, como ocurría también en caso de matrimonio entre la hija del tutor o del curador y el menor que estaba bajo su tutela o curatela (C. J. 5.6.5, a. 245; D. 23.2.64.2)⁸²⁹. No obstante, señalamos que en época bizantina el

referirse a la novia prometida antes de que el funcionario tomase posesión de su cargo.

⁸²⁸ASTOLFI R., *Il fidanzamento...*, *op. cit.*, p. 60.

⁸²⁹Acerca de la prohibición de nupcias entre el tutor y la pupila, DESANTI L., *Costantino e il matrimonio fra tutore e pupilla*, BIDR, 89, Milano, 1986, pp. 449 ss.

emperador León VI (a. 886-912) extenderá también la prohibición de contraer matrimonio con un provincial <<a las hijas y a otras personas del sexo femenino>> como se dispone en la Nov. 23 de dicho emperador: <<*ne praesides in provinciis suis domestica sponsalia contrahant*>>⁸³⁰.

Por lo que hace al funcionario que <<*contra mandata duxerit uxorem ex ea provincia, in qua officium aliquod gerit*>> se establece en un rescripto de Septimio Severo y Caracalla recogido en D. 34.9.2.1 (Marcian., 6 *inst.*) que dicho funcionario no podrá recibir por testamento de la mujer al ser considerado indigno (al igual que sucedía con el tutor que hubiese contraído matrimonio con su pupila): en este caso la herencia iba a parar al Fisco, aunque el funcionario, instituido heredero universal, hubiese adido la herencia <<*nam quasi indigno ei aufertur hereditas*>>. Por el contrario, vemos en D. 34.9.2.2 (Marcian., 6 *inst.*) que mientras que todo lo que la mujer hubiese dejado en el testamento al funcionario sería confiscado, ella sí podría recibir lo dejado por el funcionario en su testamento: <<*...per contrarium autem ducta tam ab eo, qui officium in provincia gerebat, quam a tutore illicite magis est, ut dicatur capere illam ex testamento nec quasi indignam esse*

⁸³⁰Sobre la Nov. 23 de León VI, FERRARI DALLE SPADE G., *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, en *Byzantinische Zeitschrift*, 18, München, 1909, pp. 159 ss. [= Scritti Giuridici, I, Milano, 1953, p. 112].

repellendam>>⁸³¹. Por tanto, se permite en esta fuente que la casada ilícitamente con el funcionario de la provincia pueda adquirir por testamento ya que no es considerada indigna.

Como hemos visto anteriormente, los funcionarios que contraían matrimonio en estas circunstancias no tenían derecho a recibir una dote, y si la misma se hubiese constituido devenía caduca, es decir, sin efecto, y sería por tanto confiscada (*vid.* D. 23.2.61; D. 23.2.38.1)⁸³². No obstante, vemos en un fragmento de Ulpiano contenido en D. 24.1.3.1 (Ulp., 32 *Sab.*) que sí eran válidas las donaciones hechas entre los que se hubiesen casado *contra mandata* ya que se entendía que entre ellos no hay matrimonio: <<*vel provincialis mulier ei, qui provinciam regit vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae non sunt*>>⁸³³.

⁸³¹VOLTERRA E., *Sull'unione coniugale del funzionario della provincia...*, *op. cit.*, p. 171; NARDI E., *La reciproca posizione successoria dei coniugi privi di conubium*, Milano, 1938.

⁸³²ASTOLFI R., *Il fidanzamento...*, *op. cit.*, p. 57.

⁸³³Si bien, probablemente estas donaciones podrían ser revocadas por el donante en virtud de lo afirmado por Ulpiano en D. 24.1.3.1: <<*...sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sit condicio eorum, qui delinquerunt*>>. Véase, ORESTANO R., *La dote nei matrimoni...*, *op. cit.*, pp. 756 ss.; GAUDEMET J., “*Justum matrimonium*”, RIDA, 2, Mélanges Fernand De Visscher, vol. 1, Bruxelles, 1949, p. 336; DELL'ORO A., *Il divieto di matrimonio...*, *op. cit.*, p. 527, nt. 14.

La legislación del siglo IV introduce nuevas medidas para castigar los abusos de los gobernadores provinciales⁸³⁴, a tenor de dos leyes emanadas el 17 de junio de 380⁸³⁵: CTh. 3.11.1 y CTh. 3.6.1. En la primera, CTh. 3.11.1 (<<*si quacumque praeditus potestate nuptias petat invitae*>>, a. 380) [= C. J. 5.7.1]⁸³⁶, los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio castigan con una multa de diez libras de oro⁸³⁷ al gobernador provincial que abusando de su autoridad (*occasione potestatis utatur*) hubiese querido contraer matrimonio con una mujer *sui iuris* o *alieni iuris* contra su voluntad o la del que tuviese sobre ella la

⁸³⁴ En las leyes de los emperadores cristianos se aprecia no sólo el propósito de evitar el posible enriquecimiento y aumento de poder por parte del gobernador provincial sino también la finalidad de proteger la libertad de la mujer a la hora contraer matrimonio con el gobernador. Estaríamos ante una medida dirigida a fortalecer el matrimonio cristiano.

⁸³⁵ GIGLIO S., *Patrocinio e diritto privato...*, op. cit., pp. 116, 121, considera que se trata de dos fragmentos de una misma constitución enviada a varios prefectos del pretorio, ya que ambas leyes fueron emanadas el mismo día y dada la materia tratada.

⁸³⁶ *Si quis ordinaria vel quaelibet praeditus potestate circa nuptias invitis ipsis vel parentibus contrahendas, sive pupillae sive apud patres virgines sive viduae erunt, sive et iuris sui viduae, denique cuiuscumque sortis, occasione potestatis utatur et minacem favorem suum invitis his, quorum utilitas agitur, exhibere aut exhibuisse detegitur...* (=Bas. 28.5.39).

⁸³⁷ Diez libras de oro equivalían a 720 sólidos, cifra considerable teniendo en cuenta que el procónsul de Capadocia recibía un *stipendium* anual en época de Justiniano de veinte libras de oro (Nov. 30.6.2), y el *quaesitor*, de diez libras de oro (Nov. 53.8).

patria potestad⁸³⁸, siendo expulsado del Senado y prohibiéndosele que una vez haya cesado en el cargo pueda volver a ocupar la dignidad de *clarissimus*; además, si el gobernador, después de la condena, hubiese intentado desempeñar dicha dignidad que le fue prohibida, no se le permitirá habitar durante dos años seguidos en la provincia⁸³⁹.

Se añade en la ley que mientras dicho funcionario esté en el cargo se permite que la mujer y su familia puedan substraerse de la jurisdicción penal y civil de aquél, quedando obligado el *defensor civitatis*⁸⁴⁰, ayudado por los propios alguaciles (*apparitores*) del gobernador, a cuidar que se cumpla esta norma y a elevar al juez competente la instancia promovida por la mujer o su familia; se dispone también que para conocer todas las causas civiles y criminales que afecten a la mujer y a su familia sea juez competente el vicario de la diócesis a la que pertenecía el gobernador, y que en caso de que hubiese sido el mismo vicario u otro funcionario de análoga autoridad el

⁸³⁸Vemos que se castiga también la mera tentativa del funcionario de contraer matrimonio contra la voluntad de la mujer o de su familia (*licet prohibitas nuptias non peregerit*).

⁸³⁹BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (IV-VII siècle)*. I. *Le droit impérial*, Paris, 1990, p. 98. Véase también, MANNINO V., *Ricerche sul defensor civitatis*, *op. cit.*, pp. 109-110; GIGLIO S., *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VII Convegno Internazionale*, Napoli, 1988, pp. 274 ss.; ID., *Patrocinio e diritto privato...*, *op. cit.*, p. 120.

⁸⁴⁰Como en todos los casos en los que había una controversia entre *potentiores* y *humilliores*.

que hubiere empleado la violencia tenga competencia para conocer de dichas causas otro *iudex* de la diócesis⁸⁴¹, y si ambos fuesen sospechos le corresponderá al prefecto del pretorio dicha función mientras los anteriores funcionarios permanezcan en el cargo⁸⁴². Llama la atención a GIGLIO que el acusado no fuese inmediatamente destituido o suspendido de su cargo⁸⁴³, y constata también que el problema se plantea cuando los matrimonios se hubiesen celebrado a causa del patrocinio ilícitamente ejercido por el gobernador u otra autoridad del

⁸⁴¹Es interesante señalar que, de igual forma, en Partidas III, 7, 6 se prohíbe que una mujer sea emplazada ante *“aquel juzgador que la quiso forçar, o casar con ella sin su placer”*. Señala Gregorio López en su glosa a dicha ley que: *<<Concordat lex l. C. si quaquumque praeditus potestate [C. 5.7.1] à qua ista originem habuit>>*.

⁸⁴²GIGLIO S., *Patrocinio e diritto privato...*, op. cit., pp. 121-122.

También la literatura jurídica española de los s. XVI y XVII parece seguir la visión que tiene la legislación postclásica sobre estos matrimonios *contra mandata* en donde lo que se persigue es defender el libre consentimiento de la mujer de la provincia o de su familia al matrimonio frente a la coacción o violencia que hubiese podido ejercer el funcionario sobre la misma, aunque el matrimonio no se hubiese llegado a celebrar. Así mencionamos a J. MATIENZO (*Dialogus relatoris et advocati Pinciani senatus*, Pinciae, 1558, pars tertia, cap. 31, núm. 2: *<<et quando per vim id facere tentaverit, licet non perfecerit, poenitur [scil. poena] in [C. 5.7.1]>>*); P. BELLUGA (*Speculum principum*, Venetiis, 1580, rúbr. 35, núm. 13: *<<ex solo conato incurrit poenam ... ut in [C. 5.7.1]>>*); J. CASTILLO DE BOBADILLA (*Política para corregidores y señores de vasallos*, 1597 (ed. Barcelona, 1624), tomo II, lib. V, cáp. 3, núm. 119: *<<se casó o intentó casarse>>*; *<<porque se presume que, durante el dicho ministerio y en virtud del, avra usado para ello de terror y violencia, y assi no puede casarse, ni casar a sus hijos; pero a sus hijas sí>>*), cit. CUENA BOY, *El matrimonio del funcionario con mujer de la provincia...*, op. cit., p. 107, nt. 52, 53.

⁸⁴³GIGLIO S., *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano*, op. cit., p. 281; GIGLIO S., *Patrocinio e diritto...*, op. cit., p. 122.

mismo grado; en teoría –GIGLIO- estos matrimonios podrían ser declarados nulos “*ma CTh. 3.11.1 sta a testimoniare la volontà della cancelleria constantinopolitana di colpire i responsabili di quelle violenze prima del fatto compiuto, prima, cioè, che fosse celebrato il matrimonio*”⁸⁴⁴.

La otra constitución mencionada arriba, recogida en CTh. 3.6.1 (<<*Si rector provinciae vel ad eum pertinentes sponsalia dederint*>>⁸⁴⁵, a. 380), es reproducida en parte por Justiniano en C. J. 5.2.1⁸⁴⁶, en cuyo único capítulo se dice que <<si alguno que estuviere investido de autoridad pública y del honor de administrar una provincia, y que puede ser temible (*potest esse terribilis*) para los padres, tutores o curadores, o para las mismas personas que hayan de contraer esponsales, hubiere dado arras por esponsales...>>, si posteriormente los padres o ellas mismas hubiesen cambiado de opinión no sólo quedarán libres del compromiso sino que además podrán retener las arras⁸⁴⁷. La

⁸⁴⁴GIGLIO S., *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano...*, *op. cit.*, pp. 281-282.

⁸⁴⁵<<De si el gobernador de una provincia o sus subordinados hubieren dado arras por esponsales>>.

⁸⁴⁶ = Bas. 28.1.20.

⁸⁴⁷ASTOLFI R., *Il fidanzamento...*, *op. cit.*, 1994, p. 86. La posibilidad de devolver las arras esponsalicias en caso de que la mujer hubiese cambiado de opinión estaría en consonancia con el fragmento contenido en D. 23.2.38 en donde –como vimos anteriormente- se permite al funcionario contraer esponsales con mujer de la provincia, estableciéndose que, si después de haber cesado el funcionario en el

constitución extiende la norma también a los hijos, nietos, parientes cercanos y también a los colaboradores (*consiliarios domesticosque*) del gobernador⁸⁴⁸.

Lo dispuesto en CTh. 3.6.1 deroga también una constitución anterior mencionada en dicha ley en la que se establecía que el padre, la madre, el tutor o cualquier otro que hubiese concluido los *sponsalia* quedaba obligado a restituir el cuádruplo de cuanto hubiese recibido a título de *arrae sponsaliciae* (<<*poenaeque ... quae quadruplum statuit ...>>*) si el matrimonio no se hubiese celebrado finalmente por culpa de la prometida o del que tuviese la patria potestad o la tutela, a no ser que la prometida no hubiese cumplido todavía los diez años al tiempo de realizarse los esponsales, en cuyo caso era suficiente restituir los donativos recibidos antes del cumplimiento de los doce años. En CTh. 3.6.1 se establece que el cambio de la voluntad de la prometida, de sus padres, tutores o curadores no debía ser castigado con la restitución del

cargo (*post depositum officium*) la mujer hubiese decidido no celebrar el matrimonio, deberá solamente devolver las arras que hubiese recibido.

⁸⁴⁸El mismo tenor de C. J. 5.2.1, se recoge en las siguientes fuentes bizantinas: *Prochiron*, 2. 8; *Bas.*, 28.1.20; *Hex.*, 4.2.9. En *Eisagoge* (15.6.i.) se establece lo siguiente: <<No se permite que los gobernadores celebren esponsales en la misma provincia en la que ejercen sus funciones. Pero si hacen esto, a la joven y a los padres de ella, o a sus tutores o *curatores*, les es posible rechazar el matrimonio y ganar las arras. Lo mismo debe valer también para sus hijos, nietos y parientes, así como los *domestici* y asesores y todos los funcionarios y familiares suyos, si llevaron a cabo los esponsales según el deseo del gobernador. Pero, si después de dejar el cargo, la joven quiere unirse a

cuádruplo, ni tampoco que fuesen obligados a restituir lo recibido a título de arras si la celebración de los esponsales se hubiese realizado sin la voluntad de la mujer e impuesta por el gobernador provincial.

Unos años después, los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio publican una constitución recogida en C. J. 5.5.4 (a. 393) castigando las nupcias contraídas <<*contra legum praecepta vel contra mandata constitutionesque*>> no con la nulidad de las mismas sino con una sanción penal que consistía en la confiscación de todas las adquisiciones, incluida la dote, que ambos cónyuges hubieran recibido con ocasión del matrimonio, las cuales serían reivindicadas para el Fisco <<*ut indigno indignaeve sublatum*>>, salvo que tanto el hombre como la mujer hubiesen sido víctimas o bien de un error insuperable o bien de un engaño motivado por su joven edad, en cuyo caso deberían una vez descubierto el error o bien llegados a la edad legítima poner fin a su unión sin retraso alguno⁸⁴⁹.

Por último, por lo que hace al Derecho histórico español, CUENA BOY⁸⁵⁰ ha puesto de manifiesto la relación existente en esta materia entre el Derecho Romano y las Partidas, concretamente en P. IV. 14.2

él, es válido el matrimonio>> (trad. esp. SIGNES J. y ÁNDRES SANTOS F. J., *La introducción al Derecho...*, op. cit., p. 349).

⁸⁴⁹ GAUDEMET J., op. cit., p. 349; CUENA BOY F., *El matrimonio del funcionario con mujer de la provincia...*, op. cit., p. 105.

⁸⁵⁰ CUENA BOY F., *El matrimonio...*, op. cit., pp. 105 ss.

se prohíbe a los adelantados que tomen *por fuerza* esposa legítima en toda la tierra de su distrito durante el tiempo que permanecen en su cargo. De igual forma en la Nueva Recopilación se incluye en la Ley 25, tít. IV, lib. II, la norma que prohíbe que los miembros del Consejo real y los presidentes, oidores y alcaldes de las Audiencias puedan casar a sus hijos e hijas con personas que tuvieran pleito ``en los Tribunales en donde ellos residen``, a no ser que hubiese habido licencia del Rey.

2. PROHIBICIÓN DE CONTRAER MATRIMONIO CON MUJERES DE ``BAJA CONDICIÓN``.

Mencionamos también que en época postclásica continúan los impedimentos legales que afectaban desde tiempos de la República al matrimonio entre mujeres de baja condición y miembros del orden senatorial⁸⁵¹: así, en una constitución del año 336 (CTh. 4.6.3 = C. J. 5.27.1, con alguna variante) Constantino prohíbe implícitamente a las actrices y a sus hijas el matrimonio con senadores u otros altos dignatarios como los *perfectissimi*, *duumviri*, *quinquennales*, *flamines* o *sacerdotii provinciales*, castigándolos con la infamia y la pérdida de la

⁸⁵¹FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho privado romano*, op. cit., p. 205.

ciudadanía romana y denegando que estas uniones produjesen efectos semejantes a los del matrimonio como, por ejemplo, la legitimidad de los hijos⁸⁵². Este impedimento matrimonial será recogido posteriormente en Nov. *Marciani* 4.2, del año 454, que se encuentra a su vez contenida en C. J. 5.5.7⁸⁵³, en donde se establece que los senadores y las más altas dignidades pueden contraer matrimonio con mujeres pobres pero siempre que sus padres tuviesen la condición de ingenuos, ya que – argumenta la constitución - la pobreza no implica que estas mujeres sean consideradas humildes y “abyectas” (*humiles vel abiectas*); sin embargo, sí se prohibieron las nupcias con las actrices y las hijas de actrices, así como las libertas e hijas de libertas, las bodegueras (*tabernaria*) y las hijas de bodegueros y de alcahuetes (*lenonis filiam*) o de atletas (*arenarii filiam*), o las mujeres que estuvieron al frente de un comercio (*mercimoniis publice praefuit*).

Posteriormente vemos que Justiniano, influenciado por su esposa, la emperatriz Teodora, que fue actriz de teatro en su juventud, dispuso un régimen diferente en Nov. 117. 4 (a. 542) en la que se

⁸⁵²Se establece además que todo lo que el padre les hubiese donado a los hijos nacidos de estas mujeres sea entregado a los nacidos de matrimonio legítimo, y en caso de no tenerlos se devolverán a los hermanos o a los padres.

⁸⁵³FALCAO M., *Las prohibiciones matrimoniales de carácter social en el Imperio Romano*, Pamplona, 1973, pp. 52 ss.; DOMINGO R., *La legislación matrimonial de Constantino*, Pamplona, 1989, pp. 33-36, 71-72; QUINTANA ORIVE E., *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, RIDA, 50, Bruxelles, 2003, p. 311.

estableció que estas mujeres podrán contraer matrimonio con hombres de cualquier dignidad, incluso con las más altas, pero añade que se requiere para la validez del matrimonio que se acompañe de los correspondientes instrumentos nupciales⁸⁵⁴; también Justiniano rompió con la tradición clásica en C. J. 5.4.28 (a. 531 o 532) al considerar válido el matrimonio existente entre un ciudadano y una mujer liberta si con posterioridad al enlace aquél es nombrado senador, reconociéndole a la mujer la misma dignidad que ostenta su marido⁸⁵⁵. Así, señala Justiniano que mientras que Ulpiano había considerado que estos matrimonios eran nulos al ser contrarios a la *lex Papia Poppaea* de Augusto, <<es mejor mitigar en ambos casos la severidad de la ley Papia, que no disolver, por seguirla, los matrimonios de los hombres, no por vicio de la mujer o del marido, sino por razón de la próspera fortuna de una o de otra parte...>>.

⁸⁵⁴ Recordamos que salvo para las altas dignidades el matrimonio se contraía por el mero afecto siempre que los contrayentes tuviesen la condición de libres. Véase, QUINTANA ORIVE E., *Observaciones sobre la prueba del estado civil*, RIDA, 55, Bruxelles, 2008, pp. 373 ss. (=RGDR, 13 ,2009).

⁸⁵⁵Y Justiniano establece también que si la hija de un ciudadano contrae matrimonio con un liberto y después el padre de la mujer hubiere sido elevado a la dignidad de senador, no se cumpla lo dispuesto en la ley Papia y, de esta manera, no se disuelva el matrimonio. Por tanto, dicho emperador rompe con la tradición clásica contenida en D. 23.2.16 pr. (Paul., 35 *ed.*): <<Se dispone en una Oración del Divino Marco que si la hija de un senador se hubiese casado con un liberto, no existen nupcias, cuya disposición mantuvo también un senadoconsulto>>.

Por último, mencionamos que, además de las severísimas penas correspondientes en todo caso, se castigaba con la pena de la pérdida del cingulo al funcionario que hubiese contraído nupcias incestuosas (Nov. 12.1)⁸⁵⁶.

⁸⁵⁶Vid., CTh. 3.12.3, a. 396 (=C. J. 5.5.6).

**C) PROHIBICIÓN DE DESEMPEÑAR EL CARGO DE
FUNCIONARIO EN SU PROVINCIA DE ORIGEN Y EN LA
PROVINCIA DONDE TENGA SU DOMICILIO.**

Esta prohibición que se recoge en la regla <<*ut nemo adsideret in sua provincia, nemo administraret nisi Romae romanus, hoc est oriundus urbe*>>⁸⁵⁷, aparece reflejada en S.H.A., Spart., *Pescennius Niger*, c. 7.5, y está relacionada con la prohibición vista anteriormente que impedía que el funcionario pudiese contraer matrimonio con una mujer de la provincia a la que hubiese sido destinado. En ambos casos se trataba de garantizar su libertad e independencia de actuación.

La prohibición de no desempeñar el cargo en su provincia de origen o en aquélla en la que tuviere su domicilio se contiene también en diversas fuentes jurídicas:

⁸⁵⁷ Sobre el origen de esta regla, MAZZARINO S., *L' impero romano*, Roma, 1956, p. 223.

- C. J. 9.29.3(4), del año 385, establece que comete crimen de sacrilegio⁸⁵⁸ el que acepte y desempeñe un cargo administrativo en la misma provincia de la que es natural y ciudadano, a no ser que el mismo emperador se lo conceda por espontánea liberalidad⁸⁵⁹; un año más tarde en CTh. 8.8.4 (=C. J. 12.59(60).3) los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio disponen que ningún alguacil (*apparitor*) del prefecto del pretorio o de las oficinas palatinas sea enviado a la provincia donde nació, donde tiene su residencia o bien en la que hubiere desempeñado el mismo cargo administrativo, sancionándose que, en caso de que se viole esta disposición, el *primiscrinus* (principal oficial de la oficina del prefecto del pretorio) deberá pagar una multa de tres libras de oro al Fisco, y el *apparitor* que consintió en ser designado será despojado de su cargo y se le destinará al *corpus mancipum* (inspección postal)⁸⁶⁰.

⁸⁵⁸El crimen de sacrilegio, que en origen se configuraba como una particular forma de *peculatus*, es ahora concebido también como un delito contra la religión en el que se comprende también la inobservancia de las disposiciones legislativas y administrativas del príncipe.

⁸⁵⁹ PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. 1. Problemi di diritto pubblico*, op. cit., p. 136 ss. (p. 137).

⁸⁶⁰ NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., pp. 86-87.

- C. J. 1.51.10 (a. 439) castiga a los que, oriundos de una provincia, sean en ella asesores de los gobernadores provinciales durante más de cuatro meses con la confiscación de sus bienes y la acusación de crimen público, salvo que tuviesen permiso de la prefectura del pretorio⁸⁶¹. Vid. D. 1.22.6 (Pap., 1 resp.).
- C. J. 1.41⁸⁶², que bajo la rúbrica <<*ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur*>>, establece en su único fragmento que <<nadie sea nombrado prefecto Augustal, o procónsul, o conde de Oriente, en su provincia, si no tuviera para ello especial mandato>>.
- Y a continuación mencionamos dos textos del Digesto que resuelven cuestiones relacionadas con esta materia: D. 1.22.3 (Mac., 1 *de off. praes.*): <<si una misma provincia llega a dividirse y queda constituida bajo dos gobernadores, como la Germania y la Mysia, el que es oriundo de una de ellas podrá ser asesor en la otra, y no parece que haya asesorado en su provincia de origen>>. Asimismo, en D. 4.6.38 (Ulp., 6 *ad leg. lul. et Pap.*) se dice que si con un permiso especial del

⁸⁶¹ SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, op. cit., I, p. 165.

⁸⁶² = Bas. 6.1.90. Cujacio atribuyó esta constitución al emperador Anastasio.

príncipe se le hubiese permitido a alguien que fuese asesor en su propia provincia, se considera que está ausente por causa de la República; pero si el funcionario hubiese actuado sin dicho permiso se entiende que el mismo cometió un delito y que no tiene los privilegios de los que están ausentes por tal causa.

**D) PROHIBICIÓN DE COMPRAR BIENES MUEBLES E
INMUEBLES O DE RECIBIR DONACIONES EN EL LUGAR
EN EL QUE EL FUNCIONARIO DESEMPEÑA SU CARGO.
ESPECIAL REFERENCIA AL *CRIMEN REPETUNDARUM*.**

La prohibición general de adquirir bienes⁸⁶³ o de recibir donaciones⁸⁶⁴ por parte de magistrados y funcionarios existía ya desde

⁸⁶³Respecto de las adquisiciones hechas por los magistrados a cambio del pago de un precio, dicha prohibición dependía de que el consentimiento del vendedor estuviese sujeto a coacciones por parte del magistrado (Cic., *Verr.* 4.5: <<*quae fuit causa cur tam diligenter nos (magistrados) in provinciis ab emptiōibus removerent? Haec, iudices, quod putabant ereptionem esse, non emptiōem, cum venditori suo arbitrato vendere non liceret*>>). Asimismo, pone de relieve MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribili dei rurali* (CTh. 11.11.1), en *Atti del Convegno Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999, p. 279, que los juristas de época de los Antoninos y de los Severos fueron bastante prudentes al entender que para invocar la *metus causa* y poder obtener una restitución *in integrum* aduciendo que el acto jurídico había sido concluido por violencia o temor inducidos por un magistrado, se debía tratar, como señala Ulpiano citando a Pomponio, de una violencia moral *atrox* (D. 4.2.3.1; Ulp. 1 *ed.*). En época imperial, Diocleciano y Maximiano publicaron en este sentido varias constituciones imperiales en las que se establecía que el que invoque la *metus causa* deberá probar la amenaza de estos hechos graves del magistrado (C. J. 2.19(20).6, a. 294; C. J. 2.19(20).9, a. 300).

⁸⁶⁴Concretamente en Plin., *ep.* 4.9, se narra el proceso que tuvo lugar en el año 104 d. C. contra *C. Iulius Quadratus Bassus*, que fue

época republicana y continúa en la normativa imperial de los siglos III y IV d. C.⁸⁶⁵.

Así, la *lex Iulia repetundarum*⁸⁶⁶ prohibía la usucapión de las donaciones hechas a los gobernadores y a los pretores en provincias (D.

demandado después de abandonar el cargo de gobernador de la provincia de Bitinia, por haber aceptado donaciones de los provinciales. En dicha fuente se hace una mención implícita a la *lex Iulia repetundarum* de la que resulta que la misma prohibía todo tipo de donaciones a favor de los gobernadores provinciales incluso la simple aceptación de *munera* de pequeño valor. No obstante, pone de relieve VENTURINI C., *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, op. cit., p. 490, que la ley contenía determinadas excepciones a la prohibición referida con las cuales se salvaguardaba el tradicional derecho de los gobernadores provinciales de exigir para sí y para los miembros de su séquito determinadas contribuciones en dinero o *in natura* dirigidas a facilitar su sustento y alojamiento (Cic., *Att.*, 5.10.2; 16.3; 21.5; Cic., *ad fam.*, 2.17.4). Añade el Autor que la prohibición fue mitigada en época imperial respecto de las donaciones de modesta entidad denominadas *xenia*.

⁸⁶⁵ELIA F., *Cth. 11.11.1: spartiacque fra liceità ed illiceità dei munuscula e degli xenia*, en Atti del Convegno Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999, p. 485.

⁸⁶⁶Como señala VENTURINI C., *Studi sul <<crimen repetundarum>>*, op. cit., p. 1 "la tradición literaria menciona, hasta Sila, siete leyes dirigidas a regular la composición, la competencia y el procedimiento de la *quaestio de repetundis*".

El primer procedimiento relativo al *crimen repetundarum* fue el establecido por un plebiscito del tribuno Lucio Calpurnio Pisón (*lex Calpurnia de pecuniis repetundis*), del año 149 a. C., que mediante una atípica aplicación de la *legis actio sacramento* –VENTURINI- constituyó la primera *quaestio publica* sobre esta materia, el cual fue seguido de otro recogido en una *lex Iunia repetundarum*, de fecha incierta pero posiblemente anterior a los hermanos Graco. Ambos plebiscitos tenían una intención esencialmente recuperatoria puesto que se trataba de condenar al culpable al reembolso de una suma equivalente a la extorsión realizada.

Posteriormente, la *lex Sempronia (iudiciaria?) (repetundarum?)*, del año 123 a. C., trasladó la función de juzgar en esta materia a los *equites*, y la *lex Acilia repetundarum*, plebiscito propuesto por el tribuno Acilio Glabrione en 123-122 a. C., fijó el procedimiento que debía seguirse contra los magistrados acusados de este delito concediendo la ciudadanía romana a los peregrinos que con sus denuncias hubieren hecho condenar a algún magistrado (*Lex Acilia*, L. 76). La ley castigaba solamente las extorsiones realizadas por magistrados romanos – (*pecuniam*) *auferre capere cogere conciliare avertere* (*lex Acilia* L. 2) - y no otras conductas como, por ejemplo, la aceptación de donaciones o ilícitos que no comportasen un daño patrimonial para los denunciantes. Además, la *lex Acilia* dio un carácter penal al procedimiento ya que, entre otras cosas, establecía no sólo que se persiguiese a los herederos del reo en caso de fallecimiento de éste, sino que se fijaba una pena pecuniaria del *duplum* de las cantidades ilícitamente obtenidas por el magistrado (dictador, cónsul, pretor, *magister equitum*, censor, edil, tribuno de la plebe: *lex Acilia* L. 2). Dicha ley fue seguida posteriormente por la *lex Servilia Caepionis* (106 a. C.) que acentuó el rigor del procedimiento y reintrodujo a los senadores en el colegio de jueces, y por la *lex Servilia Glaucia* que fue propuesta por C. Servilio Glaucia entre el 104 y el 100 a. C. Finalmente, la *lex Cornelia repetundarum* de Sila (81 a. C.) estableció una sanción igual al valor de las cosas extorsionadas con penas accesorias al magistrado culpable como la remoción del Senado y la inelegibilidad para nuevos cargos públicos.

Por último, mencionamos la *lex Iulia repetundarum* (ley Julia relativa a las exacciones indebidas), promulgada por César en su primer consulado en el año 59 a. C., la cual permaneció en vigor durante todo el Imperio. Sabemos que tenía 101 capítulos (Cic., *ad fam.*, 8.8.3), si bien el contenido originario de la misma no ha llegado hasta nosotros. En D. 48.11.1 pr.-1 (Marcian., 14 *inst.*) se dice que: <<la ley Julia de la concusión se refiere a aquellas cantidades que alguien cobró siendo magistrado o teniendo alguna potestad, administración o legación, o algún otro oficio, cargo o servicio público, o estando en la comitiva de alguno de ellos. Hace excepción la ley en los casos en los que se puede recibir alguna cantidad de determinadas personas, como son los cognados de sexto grado o más próximo, o la mujer>>. La ley permitía dirigirse contra toda persona que se hubiere aprovechado del dinero tomado por el magistrado, prohibía la usucapión de las cosas dadas por los provinciales al magistrado, y mantenía la sanción del *simplum* de la ley anterior así como las penas accesorias de remoción del cargo de senador, de inelegibilidad para nuevos cargos, y la prohibición de que el condenado dé testimonio públicamente o que sea juez o lo solicite (D. 48.11.6.1); vid., D. 28.1.20.5.

La *lex Iulia repetundarum* tuvo progresivas ampliaciones de su ámbito de aplicación originario. A este respecto, VENTURINI C., *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, en *Mélanges Wolodkiewicz*, vol. 2, Warszawa, 2000, p. 314, señala que “*la lex Iulia repetundarum era stata assoggettata durante l’Impero ad ampliamente di vario tipo, che l’avevano trasformata in uno strumento generalizzato di controllo sui titolari di funzioni pubbliche o di determinati status e che avevano prodotto il rimescolamento, all’interno dell’illecito, di ipotesi di concussione, di corruzione, di abuso d’ufficio, di accettazione di donativi e di semplici omissione di doveri*”. También FERRINI C., *Diritto penale romano*, Roma, 1976, p. 408, nos dice que dentro del *crimen repetundarum* entra no sólo lo que en Derecho moderno llamamos concusión sino todo lo que conocemos como corrupción de funcionarios públicos: así, en D. 47.13.1 (Ulp., 5 *opin.*) se castiga en vía extraordinaria la *concussio* que se da cuando un funcionario subalterno, simulando una autorización del gobernador, establece una exacción ilícita a cargo de los contribuyentes; véase también, *Paul. Sent.* 5.25.12; D. 1.18.6.3 (Ulp., 1 *opin.*).

Debemos advertir que la expresión técnica <<*crimen concussionis*>> no aparece en el *Corpus iuris* como una figura criminal específica y se menciona en una sola constitución de Diocleciano y Maximiano, del año 290, referida en C. J. 4.7.3: <<... *restitutionem pecuniae etiam concussionis crimen inultum esse non patietur*>>, si bien se encuentra asociada en las fuentes a términos diversos como: <<*superexactiones*>> (C. J. 3.23.2); <<*furta*>> (C. J. 1.54.6.5); <<*praeda*>> (C. J. 12.61(62)) o <<*latrocinia*>> (CTh. 1.16.7). VENTURINI C., *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, *op. cit.*, pp. 314 ss.

Las constituciones postclásicas extienden el ámbito del *crimen repetundarum*, abarcando toda clase de abusos perpetrados por funcionarios de la burocracia imperial: entre los supuestos más relevantes estaban las malversaciones de los *duces* (CTh. 8.27.3= C. J. 9.27.1), la percepción de impuestos superiores a los debidos (CTh. 11.16.8; CTh. 11.16.11; C. J. 10.48(47).8; C. J. 10.20.1), o la dolosa administración de la justicia (CTh. 9.27.4-5=C. J. 9.27.2-3; vid. nt. 207), hipótesis ésta considerada por el Ordenamiento jurídico como de especial gravedad ya que parece que, a tenor de las fuentes, el procesamiento contra el juez podía ser excepcionalmente realizado también durante el desempeño de su oficio si tenemos en cuenta que desde tiempos de la República regía la regla según la cual sólo se podía procesar a un magistrado/funcionario después de que hubiese dejado su cargo: CTh. 9.27.6, a. 386 (=C. J. 9.27.4: <<... si alguien sabe que de derecho fue venal una sentencia; si alguien pudiese probar que una

pena había sido remitida por precio o impuesta por vicio de codicia, o, por último, que por cualquier causa no fue probo el juez, manifiéstelo al público, o aún desempeñando éste el cargo, o después de dejado su desempeño, delate el crimen y pruebe la delación, habiendo de reportar victoria y gloria, cuando la hubiere probado). Véase *infra* nt. 954; SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, p. 141.

Por otro lado, en época postclásica se distingue dentro del *crimen repetundarum* entre una vía judicial civil dirigida al resarcimiento del daño causado por el funcionario y a la imposición de penas pecuniarias (pena del cuádruplo: CTh. 9.27.3= C. J. 9.27.1; C. J. 1.51.3), y una vía judicial penal *extra ordinem* que se refiere a los supuestos más graves, en la que se imponen a los reos de esta ley de la concusión penas tales como la pena capital, la deportación a una isla o el destierro (D. 48.11.7.3). La vía judicial civil se daba también contra los herederos dentro del año desde la muerte del acusado (D. 48.11.2; CTh. 9.27.4=C. J. 9.27.2). No obstante, véase D. 48.2.20 (Mod., 2 de poen.).

MOMMSEN Th., *Römisches Strafrechts*, Leipzig, 1899 (reed. Graz, 1955), pp. 705 ss.; LABOULAYE E., *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, Leipzig, 1845; CAMPOLONGO F., *L'inchiesta antica e i delitti di concussione e di corruzione in Roma*, en *Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*, vol. 57, Torino, 1903; PONTENAY DE FONTETTE, *Leges repetundarum. Essai sur la répression des actes illicites commis par les magistrats romains au détriment de leurs administrés*, Paris, 1954; SERRAO F., *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, pp. 66 ss.; LINTTOT A. W., *The Leges de Repetundis and Associate Measures under the Republic*, ZSS, 98, Weimar, 1981, pp. 162 ss.; VENTURINI C., *Studi sul crimen repetundarum...*, *op. cit.*, pp. 463 ss.; ID., *Concussione e corruzione: origine romanistiche di una problemática attuale*, en Studi Biscardi, VI, Milano, 1987, pp. 133 ss.; ID., *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, *op. cit.*, p. 323; ID., *La corruzione: complessità dell'esperienza romanistica*, en *La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali* (a cura di G. Fornasari e N. D. Luisi. Atti del convegno, Trento, 18-19 maggio 2001), Milano, 2003, p. 32; ID., *La corrupción: replanteamiento actual de conductas delictivas antiguas*, en *Estudios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Madrid, 2010, pp. 535 ss.; SHERWIN-WHITE A. N., *The Lex Repetundarum and the Political Ideas of Gaius Gracchus*, JRS, 72, London, 1982, pp. 18 ss.; FERRARY J. L., *Sulla legislazione <<de repetundis>>*, *Labeo*, 29, Napoli, 1983, pp. 70 ss.; GARCÍA GARRIDO M. J., *Precedentes romanos del tráfico de influencias* (lección inaugural del curso 1992-

48.11.8 pr.; Paul., 54 ed.)⁸⁶⁷ y sancionaba con la invalidez las ventas y los arrendamientos <<realizados por un precio mejor o menor del justo, por causa de concusión>> (D. 48.11.8.1).

En época imperial diversas constituciones establecieron la prohibición de recibir donaciones⁸⁶⁸ y de realizar compraventas de bienes cuando excediesen de lo necesario para el sustento y vestido del funcionario en la provincia en la que ejercía su administración; en este sentido mencionamos la regla recogida por Modestino en D. 1.18.18

1993, UNED-Madrid), pp. 13 ss.; ID., *La concusión y el tráfico de influencias en la lex Ursonensis y en las leyes municipales*, en *Studia historica. Historia antigua*, 15, Salamanca, 1997, pp. 95 ss.; BLANCH NOUGUÉS J. M^a., *La intransmisibilidad de las acciones penales en Derecho Romano* (prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 1997, pp. 57 ss.; GONZÁLEZ ROMANILLOS J. A., *La corrupción política en época de Julio César. Un estudio sobre la Lex Iulia de repetundis*, Granada, 2009.

⁸⁶⁷La *lex Iulia repetundarum* prohibió también que los magistrados o quienes tuviesen un oficio o cargo público recibiesen *pecunia* salvo que las cantidades hubiesen sido entregadas por sus parientes (cognados hasta el sexto grado) o por su mujer (D. 48.11.1 pr.-1; Marcian., 14 *inst.*). Una mitigación de esta prohibición resulta para los magistrados de la ciudad de Roma en D. 48.11.6.2 (Ven., 3 *de iud. pub.*) que permitía que recibiesen anualmente como “regalos de uso” cantidades inferiores a cien áureos (10.000 sesteracios). Bajo el Imperio estos “regalos de uso” fueron prohibidos completamente y en época de Justiniano la pena era el pago del cuádruplo (Nov. 161.1). VENTURINI C., *Studi sul crimen repetundarum...*, *op. cit.*, pp. 490 ss.

⁸⁶⁸Recordamos que en C. J. 1.24.1 (a. 398) los emperadores Arcadio y Honorio castigaban al juez que en el ejercicio de su cargo hubiese aceptado como regalo, sin permiso del emperador, estatuas de bronce, plata o mármol, <<con una multa del cuádruplo de su salario y con la pena de su propia estimación>>; de igual forma se castigaba con la pena de infamia a los que <<por deseo de adular o por miedo hubiesen intentado hacer lo prohibido>>.

(Mod., 5 *reg.*) en donde se dice que: <<se contiene en un plebiscito que ningún gobernador provincial reciba obsequio o presente (*munus* o *donum*) a no ser cosa de comer o de beber que se consuma en pocos días>>; Ulpiano en D. 1.16.6.3 (Ulp., 1 *de off. proc.*) se extiende sobre esta materia señalando que a su juicio <<el procónsul no deberá de abstenerse totalmente de aceptar los *xenia*⁸⁶⁹, pero sí con moderación, de tal manera que ni desdeñosamente los rechace en todo caso, ni se exceda con avaricia en la cuantía de los regalos. El emperador Alejandro Severo y Antonino Caracalla – continúa Ulpiano - moderaron con elegancia este asunto en una epístola en los siguientes términos: <<en lo tocante a los regalos, escucha lo que pensamos. Hay un viejo proverbio <que dice, en griego>: <<ni todos, ni siempre, ni de todos>>; en efecto, es muy descortés no aceptarlos de nadie, pero muy indigno aceptarlos siempre y muy avaro aceptarlos todos. Y lo que se contiene en los mandatos de que el mismo procónsul o el que tuviese otro cargo en la provincia no acepte ningún obsequio o presente, o no compre cosa alguna salvo para el sustento cotidiano, no se refiere a los pequeños regalos, sino a los que excedan de lo comestible>>⁸⁷⁰.

⁸⁶⁹ García del Corral traduce como “regalos de manjares”.

⁸⁷⁰ Podemos constatar que ya desde las primeras *leges repetundarum* hasta la época de los Severos se asienta la regla por la cual los magistrados provinciales no podían aceptar *dona* o *munera* sino sólo *xenia*, esto es, moderadas cantidades de comida y bebida. Esta regla la recogió Justiniano en los fragmentos arriba citados.

Por otro lado, Modestino nos dice en D. 18.1.62 (Mod., 5 *reg.*) que <<el que desempeña un cargo civil o militar en una provincia no puede comprar predios en la misma provincia salvo si los de su padre son vendidos por el Fisco>>⁸⁷¹, y el jurista Marciano en D. 49.16.9 pr. (Marcian., 3 *instit.*) establece igualmente que a los militares se les prohíbe comprar predios en aquellas provincias en las que militan, salvo si el Fisco vendiera los de su familia paterna por dispensa concedida para este caso por los emperadores Alejandro Severo y Antonino Caracalla⁸⁷²; sin embargo, dichos militares sí podían comprar predios una vez hubiesen cumplido su servicio estableciéndose también en dicho fragmento que si el militar, mientras está en su cargo, hubiera

MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribili e doni dei rurali...*, *op. cit.*, pp. 289 ss (p. 290).

⁸⁷¹La misma idea se recoge en *Bas.* 19.1.62 y en *Eisagoge* 23.18 en donde se dice que: <<el que es titular de un cargo en la provincia no puede comprar un bien mueble o inmueble en ella, salvo del Fisco>>.

⁸⁷²D. 49.16.13 pr.-1-2 (Mac., 2 *de re milit.*): <<Está prohibido que los militares adquieran campos en la provincia en que llevan las operaciones militares; a saber, para que no se aparten de su servicio atraídos por las labores del campo, y por eso no se les prohíbe adquirir una casa y pueden adquirir también campos en otra provincia; por lo demás, en aquella provincia a la que vinieron en razón de la guerra, no pueden adquirirlos ni siquiera en nombre de otro; y la sanción es la confiscación. (1) Se prohíbe molestar, sin embargo, al que hubiera comprado un campo contra la disciplina militar, si luego hubiera sido licenciado sin que se hubiera promovido reclamación por ese hecho. (2) Pero consta que la ventaja de este precepto no vale para los que han sido licenciados a causa de deshonor, pues se entiende que se concedió como premio a los veteranos; por lo cual, puede decirse que también compete al licenciado por invalidez, ya que también a éste se le conceden los premios>>. También en el § 111 del *Gnomon* del *Idios*

comprado ilícitamente un predio, en caso de que hubiese sido denunciado (*delatus*), el mismo será reivindicado para el Fisco ya que no cabe dicha delación una vez que haya cumplido el servicio en la milicia.

Asimismo, Marciano en D. 18.1.46 (Marcian., *de delat.*) afirmaba que <<no es lícito a ninguno, en virtud del cargo que administra, comprar algo por sí mismo o por medio de otra persona; en caso contrario no sólo pierde la cosa, sino que debe responder al cuádruplo según la constitución de los emperadores Severo y Antonino; y ello es también aplicable al procurador del César. Esto se observa así salvo concesión especial>>. Posteriormente, a finales del s. III o comienzos del s. IV, Hermogeniano, en un fragmento recogido en D. 49.14.46.2 (Hermog., 6 *iur. epit.*), reafirmaba esta prohibición estableciendo respecto de lo que hubiese sido comprado por el gobernador provincial, por el *procurator* o por cualquier otro funcionario (*vel quolibet alio*) en la provincia en la que desempeñan su cargo, aún cuando lo hayan hecho por persona interpuesta, que deberá entregarse al Fisco la estimación de aquella cosa invalidándose el contrato⁸⁷³. Y al final de este fragmento

Logos se establece que a los militares se les prohíbe adquirir propiedades fundiarias en la provincia en la que militan.

⁸⁷³Sobre el fragmento de Hermogeniano contenido en D. 49.14.46.2-3, véase: WAGNER H., *Die Entwicklung der Legalhypotheken am Schuldnervermögen im römischen Recht (bis zur Zeit Diokletians)*, Köln/Wien, 1974, pp. 154-157.

se recuerda la prohibición que pesaba sobre los gobernadores de construir naves en la provincia en la que ejercen su administración⁸⁷⁴.

⁸⁷⁴Ya la *lex Claudia de senatoribus*, del año 218 a. C., cuyo contenido conocemos por Tito Livio (21,63), estableció que: <<*ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet*>>, por lo que quedaba prohibido a los senadores y a sus hijos poseer barcos con capacidad superior a trescientas ánforas (unos 800 hectolitros). La finalidad de la ley era la de impedir que la clase senatorial especulase con el transporte marítimo, si bien, no parece que la misma hubiese tenido gran eficacia en la práctica ya que el mismo Cicerón (*Verr.*, 5.18.45) nos dice: <<*noli metuere, Hortensi, ne quaeram, qui licuerit aedificare navem senatori: antiquae sunt istae leges et mortuae, quem ad modum tu soles dicere, quae vetant*>> (‘‘No temas, Hortensio, que pregunte cómo se le permitió a un senador construir una nave. Antiguas y muertas, como tú sueles decir, son esas leyes que lo prohíben’’). La prohibición fue reproducida en la *lex Iulia repetundarum* como nos refiere Escévola en D. 50.5.3 (Scaev., 3 reg.), en donde se establecía que los senadores no podían tener naves para el comercio o el transporte con fines de lucro: <<*Senatores... quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet*>>. FADDA C., *Istituti commerciali...*, op. cit., p. 32, comenta que el hecho de que el texto de Escévola haya sido integrado en el Digesto de Justiniano demuestra que la prohibición se mantuvo hasta el final del Imperio. Vid., SERRAO, *Il frammento leidense...*, op. cit., pp. 19 ss.; D’ORTA M., *Il divieto per i senatori di possedere navi ex lege Julia de pecuniis repetundis. Nota sulla legislazione Cesariana del 59 a. C.*, en *Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici* (AIIIS), 5, 1976-1978, pp. 183-220 (= <<*Moderatio legis*>> - <<*Temperatio iuris*>>. *Antinomie e sistemazione del diritto nella Roma tardo-repubblicana*, 2008); EL BEHEIRI N., *Die Lex Claudia de nave senatorum*, RIDA, 48, Bruxelles, 2001, pp. 57 ss.

Asimismo, se prohibió a los senadores asumir el arrendamiento de la exacción de impuestos públicos por lo que quedaron excluidos de las *societates publicanorum*; en este sentido, Adriano estableció que los senadores no pudiesen asumir la exacción de los *vectigalia*, ni por sí ni por persona interpuesta (Dion Cas., 69.16: <<*Multas leges sanxit, sed praesertim, ut ne quis senator, neque per se, neque per alium vectigalia conducireret*>>). Esta prohibición afectaba también a los decuriones como recoge Papiniano en D. 50.2.6.2 (Pap., 1 resp.): <<*Decurio etiam suae civitatis vectigalia exercere prohibetur*>>, y el mismo Constantino en CTh. 12.1.97 (a. 383) subrayó esta incompatibilidad administrativa y

También, los emperadores Arcadio, Honorio y Teodosio establecieron en C. J. 4.44.18 (a. 402 ó 406) que los funcionarios palatinos no podían comprar vestidos, oro y plata, o esclavos cuando estas cosas fuesen vendidas por particulares disponiéndose, en este caso, la rescisión de la venta e imponiéndoles como pena, en caso de contravenir esta norma, la pérdida del precio pagado; sin embargo, en C. J. 10.3.7 (=Bas. 56.6.7), del año 477, el emperador Zenón contestó a un tal Dominico que cuando se venden los bienes de un proscrito se permite que el *comes rei privatae*, los palatinos (*schola palatarum*) y el *advocatus fisci* puedan comprar algunos de sus bienes <<sin que nadie calumnie este contrato>>. Además se prohibió a los palatinos que dependían del *comes rei privatae* que tomasen en arrendamiento predios fiscales, ni por sí ni por persona interpuesta (C. J. 11.73(72).1, a. 401).

Por otro lado, Constantino publicó también varias constituciones relacionadas con este tema: la primera, recogida en CTh. 8.15.1.2 (<<*ne quis in administratione constitutus aliquid compararet*>>⁸⁷⁵ y tomada del

financiera: <<*ubique servandum esse, ne usquam penitus in susceptionem vel minimi vectigalis decurio conductor accedat*>>.

⁸⁷⁵Concretamente recoge una controversia presentada en primera instancia ante el *praefectus Aegypti* y posteriormente impugnada ante el emperador Constantino. BIANCHINI M., *L'imperatore Costantino e una certa Agripina. Riflessioni su Cth. 8.15.1*, en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, III, Napoli, 1984, pp. 1191-1206. Véase también, DUPONT C., *La vente et les constitutions socioéconomiques dans l'empire romain de 312 à 535 après Jésus-Christ*, RIDA, 19, Bruxelles, 1972, pp. 275 ss.

título <<*de his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*>>, establece que al *administrans* de un *pagus* (*praepositus pagi*) no se le permite comprar en el *pagus* donde desempeña su oficio ni en otro pueblo ya que de incumplir dicha prohibición las cosas compradas le serían confiscadas; la segunda constitución, del año 334 (CTh. 8.1.4=C. J. 12.49(50).1), se refiere a las compras de los *numerarii* (oficiales de los gobernadores provinciales encargados de las cuentas públicas de la ciudad) estableciendo la ineficacia de las ventas realizadas por los provinciales a causa de la extorsión o coacción de aquellos funcionarios, debiéndose devolver la cosa vendida a su antiguo propietario y siendo castigados los oficiales con la pérdida del precio (CTh. 8.1.6). Unos años antes, el mismo emperador había dispuesto en C. J. 2.19(20).11 (a. 326) que si alguno hubiese tenido miedo de alguien que ha alcanzado al menos un oficio de categoría media y hubiese transmitido a esta persona, a título de venta, una cosa situada en la misma provincia o lugar en el que ejerce su cargo, tendrá derecho a que se le restituya la cosa sin tener que devolver el precio pagado por la misma. E igual sanción se establece si el funcionario realizó la compra utilizando indebidamente el nombre de su cónyuge o de un amigo⁸⁷⁶.

⁸⁷⁶MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribile dei rurali* (CTh. 11.11.1), *op. cit.*, p. 280

Comenta MANFREDINI⁸⁷⁷, en relación con este tema, que el temor suscitado por los funcionarios sobre la población es tratado también en la legislación de Valentiniano I en tres leyes insertas en el título del Código Teodosiano (CTh. 8.15.3-4-5)⁸⁷⁸: <<*De his, quae administrationibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*>>. Las dos primeras son de los años 364 y 365⁸⁷⁹, la tercera es de fecha incierta. Según estas disposiciones estaba prohibido hacer adquisiciones de fundos (*possessiones* y *aedes*), de esclavos y también de *mobilia* en la provincia donde se administraba el oficio, y también por persona interpuesta, a excepción de los bienes paternos los cuales era lícito comprar, quizás para evitar la dispersión de los mismos (como hemos visto anteriormente era admitida la compra de los bienes de la familia cuando fuesen vendidos por el Fisco: D. 49.16.9) y siempre que

⁸⁷⁷MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribile dei rurali* (CTh. 11.11.1), *op. cit.*, pp. 281-282.

⁸⁷⁸Estas constituciones fueron derogadas por Nov. Val. 10 y ninguna de ellas está presente en C. J. 1.53.

⁸⁷⁹En el año 364 Valentiniano I crea la figura del *defensor civitatis* para que “*plebes omnis Inlyrici officiis patronorum contra potentium defendatur iniurias*” (CTh. 1.29.1; HÖPFFNER, *Un aspect de la lutte de Valentinien I contre le sénat. La creation du defensor plebis*, RH, 182, Paris, 1938, pp. 225 ss.; LOT F., *La fin du monde antique et le début du moyen âge*, Paris, 1927 (reed. 1989), p. 185). Como ya vimos, en el siglo IV los plebeyos estaban expuestos a numerosas injusticias cometidas tanto por parte de los *exceptores* como por parte de los jefes del *officium* de los gobernadores (CTh. 1.29.2). En el año 409 los *defensores civitatis* reciben poderes de policía para el arresto e investigación preliminar respecto de los delitos cometidos por los *susceptores* en el ejercicio de sus funciones fiscales (CTh. 11.8.3).

la venta se hiciese bajo la supervisión del *rector provinciae*. Esta prohibición concernía a todos los funcionarios <<*publicum munus agitantes*>>. Se dispone también en la ley que si la compraventa ya ha tenido lugar, fuese admitida entonces la reivindicación de la cosa vendida por parte del vendedor pudiendo éste por su parte retener el precio recibido. Por último, cabía la posibilidad de la reivindicación por parte del Fisco si después de cinco años el vendedor no hubiese hecho valer su derecho.

Aún más, en una constitución del año 368 contenida en CTh. 11.11.1⁸⁸⁰ (CTh. 11.11: <<*Ne damna provincialibus infligantur*>>) que se recoge interpolada en C. J. 11.55(54).2 (<<*Ut rustici ad nullum obsequium devocentur*>>) se alude a los administradores públicos que, sobre todo en los ambientes rurales más vulnerables, instrumentalizan el temor reverencial suscitado por sus funciones públicas para exigir coactivamente servicios y donaciones a los campesinos⁸⁸¹. La ley se

⁸⁸⁰=Brev. 11.5.1.

Interpretatio: *Si quicumque ex his, qui provinciarum rectoribus coniunguntur aut militant, vel qui agunt in diversis officiis principatus, vel quicumque sub occasione publici actus videntur esse terribiles, rusticano alicui necessitatem servitii, velut sui iuris mancipio imposuerint, aut servum ipsius aut bovem in sui operis utilitatem transtulerint, sive xenia aut quaelibet munera crediderint exigenda, vel si oblata non recusaverint, ultimo exitio deputantur, et rerum suarum amissione damnantur.*

⁸⁸¹MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribile dei rurali* (CTh. 11.11.1), *op. cit.*, pp. 283-286.

dirige a todos los administradores, en el sentido más amplio, y establece lo siguiente: si alguno de los oficiales impone a un campesino la necesidad de un *obsequium* (obra) como si éste fuese su esclavo, o utiliza un esclavo o un buey del campesino como si fuese propio, o le exige, como si fuesen debidos por ley, *xenia* o *munuscula*, será castigado con la confiscación de todos sus bienes y con la pena de muerte (*ultimo subiugentur exitio*)⁸⁸²; igual pena se impondrá al campesino que interrogado dice que ha ofrecido sus servicios espontáneamente.

MANFREDINI⁸⁸³ concluye afirmando que en la citada constitución de Valentiniano y Valente los *xenia* podían ser aceptados por los magistrados funcionarios, pero, también con toda probabilidad como en época anterior, no podían ser exigidos coactivamente. Igualmente, como antes, los *munera* no podían ser aceptados ni aunque fuesen ofrecidos espontáneamente y tanto menos ser exigidos. Las sanciones que establece Valentiniano son más duras ya que dispone la pena muerte, o el exilio infligido *extra ordinem*, y la confiscación de los bienes, frente a la tradicional acción por el cuádruplo que los habitantes de los pueblos prácticamente nunca habrían podido ejercitar,.

⁸⁸²Justiniano interpola este fragmento y coloca la frase <<*subiugentur exilio perpetuo*>>, con lo que sustituye la pena de muerte por la de exilio perpetuo.

En relación con este tema, Justiniano publicó en el año 528 una ley contenida en C. J. 1.53.1⁸⁸⁴ y dirigida al prefecto del pretorio Mena, que recogía una serie de prohibiciones que afectaban a todos aquellos que desempeñasen un cargo administrativo, dentro de las cuales se comprendía la de comprar bienes muebles e inmuebles o la de edificar casas en la provincia en la que los funcionarios hubieran sido destinados, a no ser que hubiesen obtenido permiso por rescripto del emperador: <<*quicumque administrationem in hac florentissima urbe gerunt, emere quidem mobiles vel immobiles res vel domus extruere non aliter possint, nisi specialem nostri numinis hoc eis permittentem divinam rescriptionem meruerint*>>.

Asimismo, se establece en el número 1 de la ley que no serán válidas las donaciones que pudiesen recibir los funcionarios cualesquiera que fuesen los objetos y el valor de los mismos a no ser que, una vez que el funcionario hubiese abandonado el cargo, el donante hubiera ratificado por escrito la donación o transcurrido un periodo de cinco años durante el cual ni el donante ni sus sucesores hubiesen formulado querella sobre dichas donaciones: <<*nisi post administrationem depositam vel specialiter in scriptis donator eandem donationem ratam habuerit vel tempus quinquennale praeterierit, in quo*

⁸⁸³ MANFREDINI A. D., *Gli ufficiali terribile dei rurali* (CTh. 11.11.1), *op. cit.*, p. 291.

⁸⁸⁴ = Bas. 6.3.51.

nulla querella super isdem donationibus vel ab ipso donatore vel ab successoribus eius facta sit >>. Es interesante señalar que la normativa que se aplica en materia de venta de bienes muebles o inmuebles y de donaciones a los funcionarios provinciales en general se endurece respecto a los gobernadores provinciales ya que se dispone en el número 2 de la ley que <<no será válida la venta o la donación que se les hubiere hecho, aunque haya transcurrido el periodo de cinco años después de haber cesado en su administración o que después de la misma haya sido dado el consentimiento del donante o del vendedor>>, si bien, se exceptúa de esta prohibición –como hemos visto más arriba– aquellas cosas que son necesarias para el sustento y el vestido (<<*quae ad alimonias vel vestem pertinent*>>)⁸⁸⁵. De igual forma, se establece en C. J. 1.53.1.2 que durante el ejercicio de su cargo los gobernadores no podrán edificar casas en la provincia.

Y también se dice en el número 3 de dicha constitución que quedarán afectados por estas prohibiciones los domésticos y consejeros de los funcionarios, añadiéndose que, ni por persona interpuesta, pueda hacerse alguna de estas cosas sin incurrir en responsabilidad (<<*ut nec*

⁸⁸⁵SERRIGNY D., *Droit public et administratif...*, *op. cit.*, I, p. 131. También en el parágrafo 70 del *Gnomon* del *Idios Logos* se establecía que no era lícito a los vicarios comprar en la provincia y se prohibía a los militares adquirir propiedades fundiarias en las provincias en las que estaban destinados.

per interpositam personam aliquid eorum sine periculo possit perpetrari>>).

Termina la constitución estableciendo en el número 4 que estas disposiciones serán aplicables a los negocios celebrados con anterioridad a esta ley, salvo que hubiesen sido realizados por transacciones o por sentencias: <<*quae etiam ad praeterita negotia referri sancimus, nisi transactionibus vel iudicationibus sopita sint*>>.

Esta normativa se suavizó en tiempos del emperador León VI (886-912) que en su Nov. 84⁸⁸⁶ permitió a los funcionarios de Constantinopla y a los funcionarios provinciales, con excepción del gobernador provincial, que pudiesen comprar bienes, edificar casas y recibir donaciones; ahora bien, respecto de los funcionarios que desempeñaban su cargo en las provincias se dispuso que dichos actos requerían de la aprobación del gobernador ya que, de lo contrario, los funcionarios que hubieran realizado tales negocios serían removidos de sus cargos⁸⁸⁷.

⁸⁸⁶El título de la rúbrica recoge el principio: <<*Ut negotiari liceat magistratibus urbis nec non aedificare pariter ac iis qui extra urbem sunt praeter praesidem*>>.

⁸⁸⁷OSTROGORSKY G., *Historia del Estado Bizantino*, trad. esp. J. Facci, Madrid, 1984, p. 257, señala que detrás de esta medida está el proceso de fortalecimiento paulatino de la aristocracia bizantina y del consiguiente debilitamiento del poder imperial. Como consecuencia de esta situación, León VI favoreció durante su gobierno a la nobleza y le otorgó los más altos cargos de la Administración Pública.

Esta medida de León VI contrasta con la recogida por su padre, el emperador Basilio I, que en *Eisagoge* 23.19 dispuso que: <<si se descubre que el gobernador local es dueño de un bien, ya por donación de alguno de los que están bajo su potestad, ya por compra, no obtendrá ganancia alguna de estos actos, ni la posesión obtenida por donación o por enajenación se hará firme con el paso del tiempo, sino que, tanto si sigue siendo gobernador como si ha abandonado el cargo, pase el tiempo que pase, si el anterior propietario reclama la propiedad, aquél será privado de aquello de lo que se consideró propietario por compra o por donación, mientras que el anterior propietario, confirmado como dueño gracias a su reclamación, recuperará lo que es suyo, sin que <prescripción> temporal alguna le impida recuperar lo que es suyo>>⁸⁸⁸.

⁸⁸⁸trad. esp., SIGNES J. y ANDRÉS SANTOS F. J., *La*

introducción al Derecho (Eisagoge)..., *op. cit.*, pp. 419-420.

E) RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE PRÉSTAMOS DE DINERO.

Numerosas fuentes jurídicas nos refieren la norma en virtud de la cual los funcionarios no podían realizar por su cuenta préstamos de dinero. En D. 12.1.33 (Mod., 10 *pandec.*) Modestino recuerda que en las constituciones imperiales se prevé que los gobernadores y “*quive circa eos sunt*” no realicen negocios y no den dinero en mutuo ni se dediquen a la usura en las provincias en donde desempeñan su cargo: <<*ne (...) negotientur mutuamve pecuniam dent foenusve exerceant*>>⁸⁸⁹. Esta misma idea se recoge en un rescripto del emperador Gordiano contenido en C. J. 4.2.3 (a. 239) cuando dice que los que desempeñan un cargo público no pueden prestar a interés, ni personalmente ni por persona interpuesta, en la provincia durante el ejercicio de su función:

⁸⁸⁹En cambio, respecto de los oficiales del gobernador provincial, Paulo afirma en D. 12.1.34 (Paul., 2 *sent.*) que pueden dar dinero en mutuo y prestarlo a interés <<*quia perpetui sunt*>>, es decir, porque – podemos traducir– son funcionarios de carrera destinados en la provincia, en principio, hasta el final de su cargo. También en el mismo fragmento se dice que al gobernador provincial no se le prohíbe tomar dinero prestado a interés: <<*Praeses provinciae mutuam pecuniam foenebrem sumere non prohibetur*>>.

<<... eos, qui officium administrant, neque per se neque per suppositas personas tempore officii sui in provincia fenus agitare posse, saepe rescriptum est>>.

También en CTh. 2.33.3 (a. 397) Arcadio y Honorio establecían la ilicitud de los préstamos con interés realizados por los senadores⁸⁹⁰; sin embargo, vemos que unos años más tarde los emperadores Arcadio, Honorio y Teodosio (CTh. 2.33.4, a. 405) les permitieron celebrar contratos de préstamo de dinero con intereses, si bien limitando estos últimos a la mitad de la centésima parte mensual del capital, o lo que es lo mismo, al 6% anual⁸⁹¹. Por último, Justiniano tolera en C. J. 4.32.26.2 (a. 528) que las personas con rango de ilustres pudiesen percibir sólo una tasa del 4% anual: <<...Y por esto mandamos que a las personas ilustres o a las que las aventajan no les sea lícito estipular a título de

⁸⁹⁰Lampridio (*vita Alexandri*, c. 25-26.3) nos refería que en época de Alejandro Severo los senadores *“usuras foeneratorum contrexerunt ad trientes pensiones, etiam pauperibus consulens”*. FADDA C., *Istituti commerciali del diritto romano...*, op. cit., pp. 22; 27.

⁸⁹¹BIANCHI E., *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, Athenaeum, 62, Pavia, 1984, pp. 150 ss.; GARBARINO P., <<Senatores in annis minoribus constituti>> e <<usurae>>. *Contributo all'esegesi di Cth. 2.33.2*, BIDR, 30, Milano, 1988, pp. 337 ss., 341; SOLIDORO MARUOTTI L., *Sulla disciplina degli interessi*, INDEX, 25, Napoli, 1997, p. 561.

interés en cualquier contrato más de la tercera parte del uno por cierto mensual>>⁸⁹².

Por otro lado, en relación con esta materia vemos que en C. J. 10.6 (<<*De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt*>>)⁸⁹³ se recogen dos leyes tomadas del Código Teodosiano y referidas al caso concreto de préstamo de dinero perteneciente a los fondos públicos: en CTh. 10.24.1, a. 368 (= C. J. 10.6.1), los emperadores Valentiniano y Valente establecieron que aquellas personas que hubiesen recibido dinero prestado con interés (*foenebrem pecuniam*) de los cobradores de impuestos, contadores, cajeros u oficiales de cuentas, serán obligadas a devolver el cuádruplo (...*ad quadrupli poenam*) si se descubriese este hecho⁸⁹⁴; asimismo, en una constitución de Graciano, Valentiniano y Teodosio, dirigida a Paladio, *comes sacrarum largitionum*, y recogida en CTh. 10.24.2, a. 381 (=C. J. 10.6.2), se prohíbe expresamente que nadie reciba dinero en mutuo procedente de las sacras liberalidades (erario privado del emperador) salvo que hubiese autorización por parte del mismo, añadiéndose que

⁸⁹²CASSIMATIS G., *Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin*, Paris, 1931, pp. 50 ss.; BIANCHINI M., *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, en *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, (=Studi in onore di A. Biscardi, II, pp. 389-426), pp. 127 ss.

⁸⁹³= Bas. 56.6.11-12.

⁸⁹⁴GNOLI F., *Ricerche sul peculatus...*, *op. cit.*, p. 41.

en caso contrario el funcionario que hubiese prestado dinero público sea castigado con la pena capital (*capitali sententia*) y el particular que recibió el préstamo condenado al destierro perpetuo (*exsilio*) y privado de todos sus bienes. Asimismo, en C. J. 12.49(50).8, Teodosio y Valentiniano establecieron que ni los empleados en la secretaría del prefecto del pretorio ni los numerarios del oficio de este funcionario se vean obligados ni a tomar dinero en mutuo ni a prometerlo a cualquiera por motivo de un gasto público⁸⁹⁵.

⁸⁹⁵ Debemos distinguir de los supuestos señalados arriba, los préstamos recibidos de particulares en relación con la administración de bienes públicos y dentro del marco de la ley, ya que en este ámbito, señala Marciano en D. 20.1.11 (Marcian., *ad form. hypoth.*), que si el que administra bienes públicos recibiera dinero en mutuo por causa de dicha administración podrá obligar bienes públicos (<<*potest rem ius obligare*>>).

Otro caso distinto es el contemplado por Paulo en D. 22.1.11 pr. (Paul., 25 *quaest.*) relativo a Cayo Seyo, administrador de los bienes de la ciudad (*qui rem publicam gerebat*), al que le estaba permitido prestar dinero público a los particulares al interés acostumbrado: se trata de un caso de *stipulatio usurarum* recibida por un administrador de la *res publica* municipal por parte de deudores de dinero público. Sobre el tema: SALAZAR REVUELTA M., *La gratuidad del mutuo en el derecho romano*, Jaén, 1999, p. 336; MROZEK S., *Foenus. Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats*, Stuttgart, 2001, p. 84, nt. 279; BRICCHI A., *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l'attività negoziale degli agenti municipali*, en *Gli Statuti Municipali*, *op. cit.*, pp. 377 ss.

Por otro lado, podemos añadir que en D. 12.1.27 (Ulp., 10 *ed.*) se establece que ‘‘la ciudad puede obligarse con la dación de un mutuo, si el dinero se hubiese invertido en utilidad de ella, de otra suerte se obligarán solamente aquellos que contrataron, no la ciudad’’ (<<*Civitas mutui datione obligari potest, si ad utilitatem eius pecuniae versae sunt; alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non civitas, tenebuntur*>>). Nos encontramos, por tanto, ante un mutuo concluido por algunos

F) CONCLUSIONES

I.

La regla de la no acumulación por un mismo funcionario de dos o más cargos incompatibles entre sí se afianzó en época postclásica; de esta manera se dispuso en diversas leyes que quien se encontrase en esta situación debía elegir el cargo que considerase preferible retener siendo en todo caso sancionado con multas pecuniarias el que hubiese incumplido esta norma. Asimismo Justiniano prohibió que quien ejerciese la abogacía (*advocatus causarum*) fuese nombrado asesor de un alto funcionario, si bien determinó que una vez que hubiese cesado en el cargo de asesor podría volver al ejercicio de la abogacía; tampoco

administradores de la ciudad. Se trata de un caso de responsabilidad en relación con el tercero mutuante para el supuesto de que el dinero dado en mutuo no haya sido efectivamente invertido en la ciudad y ésta no haya podido obtener el beneficio correspondiente. Según Ulpiano, la ciudad solamente podrá ser demandada por el tercero mutuante para obtener la restitución del dinero si la misma se ha beneficiado efectivamente del crédito; a falta de ello, el acreedor no puede reclamar su restitución a la *civitas*, ya que no recibió aquel dinero, sino a los funcionarios que recibieron la suma correspondiente. BRICCHI A., *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi...*, op. cit., pp. 354 ss.; D'ORS X., *Las relaciones contractuales con la administración pública*, en I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica (Torino 17-19 ottobre 1994), Napoli, 1997, pp. 79 ss.

permitió que un mismo abogado fuese asesor de dos funcionarios al mismo tiempo debiendo en ese caso renunciar a uno de los puestos. En el ámbito municipal se aplicó la misma política de tal manera que regía la regla en virtud de la cual una misma persona no podía desempeñar al mismo tiempo dos cargos ni en la misma ciudad ni en dos ciudades distintas en cuyo caso tendría preferencia el cargo desempeñado en su ciudad de origen.

II.

En la República existía la costumbre en virtud de la cual los magistrados enviados fuera de la ciudad de Roma no podían llevar consigo a sus mujeres para evitar la posible implicación de sus esposas en los *iudicia repetundarum* dirigidos contra los gobernadores provinciales, estableciéndose en un senadoconsulto de época de Tiberio la responsabilidad del gobernador por los beneficios ilícitamente obtenidos a iniciativa de su consorte.

En una constitución de Gordiano, del año 239, se recoge la prohibición de contraer matrimonio entre un funcionario y una mujer de la provincia en la que ejerce sus funciones; se trata de un matrimonio *contra mandata* de tal forma que la dote aportada por ella deviene caduca y, a semejanza de lo dispuesto para el matrimonio de un tutor con su pupila, se establece que el marido no puede recibir por testamento de la mujer al considerarse a aquél indigno: la herencia en

este caso iba a parar al Fisco; por el contrario la mujer sí podía recibir por testamento del marido.

La doctrina ha considerado que el fundamento de dicha prohibición es evitar el enriquecimiento o aumento de poder del gobernador provincial frente a Roma a través de alianzas matrimoniales en la provincia de destino.

Ahora bien, si una vez abandonado el cargo (*depositio officii*) la mujer perseveraba en la voluntad de continuar el matrimonio, éste devenía legítimo, considerándose del mismo modo los hijos concebidos y nacidos después del cese.

La prohibición de contraer matrimonio se extendía también a los hijos varones que estaban bajo potestad del funcionario pero no así a sus hijas.

La legislación del siglo IV introduce nuevas medidas dirigidas a impedir los abusos de los gobernadores provinciales que haciendo valer su autoridad hubiesen querido contraer matrimonio con una mujer *sui iuris* o *alieni iuris* contra la voluntad de ésta o la del que tuviese sobre ella la patria potestad.

Por último, una constitución del año 393 sancionó dicho matrimonio no con la nulidad sino con una sanción penal que consistía en la confiscación de todas las adquisiciones, incluida la dote, que ambos cónyuges hubieran recibido con ocasión del matrimonio salvo que tanto el hombre como la mujer hubiesen sido víctimas o bien de un

error insuperable o bien de un engaño motivado por su juventud, en cuyo caso debían poner fin a su unión matrimonial.

Además, la legislación de época postclásica confirmó la tradicional prohibición romana en virtud de la cual los senadores y dignatarios no podían contraer matrimonio con mujeres de baja condición (libertas, actrices, bodegueras, alcahuetas, etc...) y sus hijas.

Sin embargo, Justiniano, influenciado por la emperatriz Teodora, levantó la prohibición de contraer matrimonio con actrices siempre que se acompañase de los correspondientes instrumentos nupciales.

III.

Los funcionarios no podían desempeñar su cargo ni en su provincia de origen ni en aquélla en donde tuvieran su domicilio. En ambos casos se trataba de garantizar la libertad e independencia de actuación de aquél. El funcionario que infringiese dicha prohibición cometía un crimen público siendo despojado de su cargo en la provincia, y la autoridad que les autorizó dicho destino era sancionada también con diversas penas.

IV.

La *lex Iulia repetundarum* prohibió no sólo las coacciones o exacciones ilícitas de los gobernadores provinciales ejercidas sobre los ciudadanos sino también la aceptación de donaciones por parte de

aquellos así como la invalidez de las ventas y arrendamientos que hubiesen realizado por un precio mejor o menor del justo, por causa de concusión. Dicha ley sirvió de instrumento jurídico, gracias a la labor de interpretación extensiva de la jurisprudencia clásica, para sancionar no sólo los supuestos tipificados en la misma sino en general todo abuso de poder del funcionario que causase una lesión a los administrados o al interés de la Administración, para llegar a englobar así dentro del *crimen repetundarum* numerosos supuestos de corrupción como podían ser la exigencia indebida de impuestos, la malversación de fondos o la prevaricación en la Administración de la justicia.

La legislación del Bajo Imperio, sobre estas bases, sancionó dichas conductas mediante la imposición, por un lado, de penas pecuniarias (pena del cuádruplo) y, por otro, mediante la imposición para los supuestos más graves de castigos tales como la pena capital, la deportación o destierro, y la confiscación del patrimonio.

En esta línea, dicha legislación prohibió las donaciones hechas, por ejemplo, a los gobernadores provinciales que hubiesen ido más allá ``de cosas que se puedan comer o beber en pocos días`` así como las adquisiciones en la provincia de destino de bienes inmuebles o muebles de cierto valor por medio de compraventa ni por sí ni por persona interpuesta, estableciéndose la rescisión de dicho contrato y la pérdida del precio pagado; asimismo, se extiende a los gobernadores provinciales la prohibición existente desde la República y prevista en la

lex Iulia repetundarum que prohibía a los senadores la construcción de naves destinadas al comercio marítimo.

Por otro lado, diversas leyes aluden especialmente a las coacciones realizadas por funcionarios públicos en ambientes rurales dirigidas a exigir a los campesinos donaciones de bienes o prestación de servicios sancionándose estos hechos con penas que llegan hasta la confiscación de todos los bienes e incluso hasta la pena de muerte imponiéndose igual pena al campesino que ofrezca sus servicios espontáneamente: por tanto, las donaciones y los *munera* indebidos no podían ser aceptados ni aunque hubiesen sido ofrecidos espontáneamente y mucho menos exigidos coactivamente.

Justiniano publicó diversas leyes en esta materia confirmando la legislación anterior, si bien admitió la validez de las donaciones hechas a un funcionario una vez que hubiese abandonado el cargo si el donante hubiera ratificado por escrito la donación o hubiera transcurrido un periodo de cinco años durante el cual ni el donante ni sus sucesores hubieren formulado querella sobre dichas donaciones; ahora bien, esta posible convalidación no tenía lugar respecto de las recibidas por los gobernadores provinciales.

V.

Los gobernadores provinciales y en general, salvo excepciones, los funcionarios públicos no podían realizar actividades propias de

banquero o usurero prestando dinero con interés a los particulares ni por sí ni por persona interpuesta; mucho menos podían realizar tales actividades con dinero público porque en tales casos se les castigaría con penas tales como la devolución del cuádruplo o la confiscación de sus bienes o la pena capital. Tampoco podían recibir dinero de los particulares por causa de un gasto público salvo autorización expresa de la ley en cuyo caso, por ejemplo, tratándose de magistrados municipales, debían bajo su responsabilidad invertir dicho cantidad en utilidad de la ciudad.

CAPÍTULO X

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN FUNCIONARIAL EN ÉPOCA IMPERIAL

A) CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN FUNCIONARIAL NO IMPUTABLES AL FUNCIONARIO.

No hemos encontrado en las fuentes y bibliografía consultadas una edad de jubilación forzosa de los funcionarios en la Administración imperial romana⁸⁹⁶, si bien señalamos que la edad de setenta años era la fijada como aquélla a partir de la cual se disfrutaba de inmunidad para el desempeño de cargos civiles (*munera civilia*) y cargos personales (*munera personalia*) como eran los relativos a la defensa de la ciudad (*syndicus*), al cargo de escribano, al cuidado de las annonas, a la compra de trigo y también a la tutela y a la curatela (D. 27.1.8; D. 50.4.3.6; C. J. 10.32(31).10). No obstante, en diversas constituciones imperiales se establece que había de transcurrir un periodo mínimo de tiempo en el desempeño de los servicios del funcionario en la milicia para que quien lo desease pudiera optar por su cese voluntario: así, se dice en una constitución del año 396 (CTh. 6.26.8 = C. J. 12.19.3), de los emperadores Arcadio y Honorio, que los que hubiesen desempeñado

⁸⁹⁶La edad como causa de extinción de la condición de funcionario aparece referida expresamente en C. J. 10.55(54).2 (Impp.

un cargo en las secretarías de palacio durante veinte años puedan retirarse del mismo (*post viginti annos transactae militiae*)⁸⁹⁷.

Además, la revocación por voluntad del emperador y normalmente la muerte del emperador que le instituyó en el cargo implicaba para las altas *dignitates* el término del desempeño de sus funciones públicas.

Por otro lado, junto con lo anterior, podemos constatar que son numerosas las referencias a la mala salud del funcionario como causa de extinción de la relación funcional⁸⁹⁸, tal y como nos refieren diversas fuentes:

- En CTh. 1.5.9 (a. 339) se afirma que si los gobernadores provinciales resultan incapaces para desempeñar su cargo por causa de

Diocleciano y Maximiano a Caro): << (...) habiendo sido licenciado por vejez de edad provecta conseguiste honrosa licencia...>>.

⁸⁹⁷Vemos, sin embargo, el relato de Juan Lido (*De magistratibus populi romani*, 3.30) que nos dice que él mismo después de permanecer durante cuarenta años y cuatro meses en el *officium* del prefecto del pretorio de Constantinopla se retiró como *cornicularius* en el año 552, y nos describe la ceremonia de licenciamiento como un homenaje que era costumbre rendir al titular del oficio en el momento de su jubilación. Nos cuenta también Lido que el prefecto Efesto, en presencia de todo el *officium*, dio lectura a una ordenanza que representaba el acto oficial de licencia exaltando las dotes literarias, burocráticas y humanas de aquél.

⁸⁹⁸La <<*fessa aetas*>> era junto con la <<*aegritudo corporis*>> motivo de jubilación para los militares (CTh. 7.20.12.1, a. 400), DALLA D., *Ricerche...*, op. cit., p. 105.

lesiones o enfermedades corporales (*corpore marcentes*) los prefectos del pretorio deberán destituirlos de su función.

- En C. J. 12.57(58).7 pr. (a. 389) se establece que los alguaciles (*apparitores*) de los jueces ordinarios que hubiesen alcanzado un determinado grado no sean licenciados, aunque tengan ya una antigüedad o en consideración a sus servicios, hasta que desempeñen el cargo de primipilo, sin que sirva de excusa una enfermedad o una edad avanzada (<<*vel aegri corporis labem vel defessae senectutis extrema...>>*).

- En CTh. 6.28.8 (a. 435) = C. J. 12.21(22).4.1 se dice que: << y si algún *agens in rebus* no pudiere esperar después del transcurso de veinticinco años el fin de su servicio por causa de mala salud corporal (*ob adversam corporis valetudinem militiae finem ...*), pero por testimonio de la corporación (*schola*) hubiese pasado a la dignidad honoraria de ex principal, mandamos que sea amparado con los mismos privilegios de que disfrutaban los que pasaron al ejercicio de la principalía...>>.

- En C. J. 12.20.5.2 (21.1) el emperador León establece que en caso de que un *agens in rebus* estuviese enfermo o que por su edad o por hallarse impedido por cualquier otro defecto no pudiese desempeñar su cargo pueda nombrar un sustituto de la misma secretaría <<de su elección y a costa de sus propios bienes (... *sua suarumque periculo facultatum...*) y que sea idóneo y tan dotado de muy buenas costumbres como poseedor de ciencia y pericia en las cosas>>.

- En C. J. 12.19.15 pr., el emperador Justiniano se dirige al *magister officiorum* Taciano estableciendo que los auxiliares (*adiutores*) de los *sacra scrinia* puedan poner un sustituto <<si por algún accidente fortuito como vejez o enfermedad u otra causa necesaria no pudiesen desempeñar sus funciones>>⁸⁹⁹.

- En D. 50.5.2.7 (Ulp., 2 *opin.*) se recoge que si el gobernador provincial observare que el que agobiado por vejez o debilidad del cuerpo (*senio et corporis imbecillitate*) no sea capaz de llevar los caudales públicos (*munus perferendae pecuniae*) debe sustituirlo y nombrar a otro (*dimittat et alium constituat*).

Por lo que se refiere a la muerte del funcionario, si bien ésta opera evidentemente como un modo de extinción de la relación funcional (D. 5.1.32; Ulp., 1 *de off. cons.* <<*si iudex ... decesserit, et aliis in locum eius datus fuerit*⁹⁰⁰>>), también es verdad que el Derecho Romano reconoció ciertos derechos tanto a los hijos del funcionario fallecido como a su viuda.

⁸⁹⁹Esta solución recuerda a la <<*resignatio in favorem*>> de época medieval en virtud de la cual el titular de un oficio transmitía a un tercero su cargo por un motivo justificado como enfermedad o vejez, debiendo ser autorizado por el rey y en presencia del beneficiario. LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., p. 148.

⁹⁰⁰<<Si hubiese fallecido el juez... y en su lugar se hubiese nombrado otro...>>.

Respecto de los hijos, ya vimos anteriormente, que en el Bajo Imperio numerosas leyes establecían la sucesión hereditaria de los hijos de un oficial fallecido en la titularidad del cargo público desempeñado por el padre⁹⁰¹. Cuando el titular fallecía estando en el ejercicio de sus funciones, la milicia pasaba, como el resto de sus bienes, a sus sucesores universales *ab intestato*. En este caso los herederos del titular difunto podían presentarse para ser nombrados en la milicia vacante pero siempre que tuviesen las aptitudes necesarias para desempeñar el puesto y que pagasen el derecho de entrada (*introitus militiae, sportulae*) como cualquier otro candidato, tal como nos dice Justiniano en Nov. 35.5 (a. 535), dirigida a Triboniano, respecto de los *adiutores* del *quaestor sacri palatii* (<<... *renovamus et licentiam damus omnibus XXVI adiutoribus in sua loca alios subrogare, idoneos tamen et quos pro tempore quaestor sacrosanctis evangeliis propositis elegerit et mandata eis in scriptis praestiterit, ut centenis solidis tantummodo datis habeant licentiam homines praedicto opere digni iudicati in deficientium vel alio modo desistentium loca pervenire et adiutoris officium peragere*>>⁹⁰², y en Nov. 35.9 (<<*Illo etiam observando ut, etsi quis ex viginti sex*

⁹⁰¹ Vid. *supra* pp. 323 ss.

⁹⁰² Nov. 35.5: <<... y damos licencia a todos los veintiséis ayudantes para subrogar en su lugar a otros, pero idóneos, y a quienes eligiere, teniendo a la vista los sacrosantos evangelios, el que a la sazón sea cuestor, de suerte que, dando solamente cien sueldos, tengan licencia los hombres, juzgados dignos del susodicho trabajo, para llegar a los puestos de los que fallecen o de los que de otro modo los dejan, y para desempeñar el oficio de ayudante (...)>>.

*adiutoribus ab hac luce fuerit subtractus, in suos heredes vel liberos, licet heredes non sint, huiusmodi beneficium transmittat, ut in locum eius alius adiutor subrogetur, centenis quidem solidis ab eo offerendis, pro tempore autem sublimissimo questore electionem eius qui subrogetur secundum quod superius dictum est faciente>>)*⁹⁰³.

Por tanto, vemos que el heredero no deviene sin más titular de la milicia sino que se tenía en cuenta que fuese capaz e idóneo para ejercer el cargo y pagase el correspondiente derecho de entrada⁹⁰⁴.

Además, la transmisión hereditaria del salario u otros derechos del funcionario fallecido, devengados en vida, aparece regulada en diversas constituciones de la Cancillería imperial como son:

- C. J. 12.62(63).1⁹⁰⁵, en donde los emperadores Valeriano y Galieno contestan a Domicio que si el que desempeñó el cargo de

⁹⁰³Nov. 35.9: <<Debiéndose observar también esto, que aunque alguno de los veintiséis ayudantes hubiera fallecido transmitirá este beneficio a sus herederos o hijos, aunque no sean herederos, de forma que se subroga un ayudante en su lugar, dejándose ofrecer por él cien sueldos, pero haciendo la elección del que es subrogado el que a la sazón sea cuestor, conforme a lo que más arriba se dijo...>>.

⁹⁰⁴LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques...*, op. cit., p. 600.

⁹⁰⁵*Commoda primipilatus post administrationem deberi incipiunt, et si es, qui ea percipere debuit, prius rebus humanis eximatur heredibus petitio salva sit.*

primipilo fallece antes de percibir sus emolumentos (*commoda*) les queda abierta a sus herederos la facultad de reclamarlos⁹⁰⁶.

- CTh. 14.17.10 (a. 392) = C. J. 11.25(24).1, que se refiere a la transmisión hereditaria de la *annona* civil a los herederos del funcionario: <<... *ut, quicumque perceptarum annonarum emolumenta vel in heredes proprios iure sanguinis transfuderunt ...>>.*

- CTh. 7.4.34 (a. 414) = C. J. 12.37(38).14, en donde se dice que la paga de los guardias palatinos, que hubiesen fallecido antes de recibirla, le sea entregada a sus herederos.

- C. J. 12.20.3.1, que recoge una constitución del emperador León en la que se establece que, en caso de fallecimiento de alguno de los *ducenarii* de la *schola agentium in rebus* antes de completar su año en el cargo, se repartan sus sucesores testamentarios o *ab intestato* el fruto de su trabajo (<<*laborum eius fructum successores ab intestato vel ex testamento venientes*>>)⁹⁰⁷, y añade que durante ese año quede vacante su puesto en consideración a sus sucesores, los cuales <<disfrutarán de todos los sueldos (*solatiis*) como si en vida los hubiese reivindicado para sí mismo el que por largo tiempo los ha estado esperando>>; el mismo emperador permite que en caso de muerte de

⁹⁰⁶La constitución señala también que el derecho a recibir un salario comienza para el primipilo después de haber desempeñado su cargo.

alguno de los patronos del Fisco sean transmitidos bien por testamento o bien *ab intestato* a sus sucesores, ya sean hijos o extraños, los honorarios de todo el año (*universa totius anni solatia*) en que hubiese comenzado a ejercer dicho cargo (C. J. 2.7.15.1, a. 472)⁹⁰⁸.

- C. J. 12.37(38).16.8 (emp. Anastasio) referida a los que desempeñan su cargo en la milicia armada: <<mandamos (...) que se les han de entregar a las mujeres y a los hijos de los militares fallecidos (...), todas las cantidades que a estos les hubiesen sido debidas hasta el día de su muerte>>.

- C. J. 2.7.22(3).6 (a. 505), en donde el emperador Anastasio, se dirige a Eustacio, prefecto del pretorio, y dispone que para favorecer a los que hubiesen desempeñado el cargo de patrono del Fisco, tanto a los que todavía viven (*superstites*) como a los que ya han muerto, se concede a sus herederos las asignaciones, sin que estos últimos sean obligados a encargarse contra su voluntad del cuidado de ninguna función pública. Esta constitución es repetida básicamente en el número 24(5).6 dirigida por Anastasio en el 517 a Sergio, prefecto del pretorio.

También Justiniano en una ley contenida en C. J. 12.17.4 dirigida a Vigilancio, *comes domesticorum, consularis et patricius*, establece que

⁹⁰⁷SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I, op. cit.*, p. 362.

⁹⁰⁸Hasta el año 486 la duración del cargo del patrono del Fisco era de un año.

en caso de fallecimiento de un *domesticus*, que hubiese alcanzado el grado inmediatamente superior en el cuerpo (*equitum schola secundicerii*), reciban sus herederos todas las retribuciones y emolumentos (*solatiis ac emolumentis*) que le hubiesen correspondido al padre por el tiempo que se demuestre que le quede para el mismo grado y las retribuciones del siguiente año como si hubiese alcanzado el grado de *primicerius*, <<de tal forma que en cuanto se refiere al lucro y provecho y fruto de todo el tiempo de la milicia sea considerado como si hubiese sobrevivido hasta el último término>>⁹⁰⁹.

En todos estos casos - refiere SCARCELLA⁹¹⁰- la Cancillería imperial sigue el viejo principio según el cual al que presta servicios en la Administración Pública y a sus herederos les corresponde la entera compensación establecida en caso de imposibilidad sobrevenida de la prestación por causas a él no imputables, como sucede también con la muerte del propio funcionario⁹¹¹. Este principio se refleja claramente en

⁹⁰⁹...*ut, quod ad quaestum et compendium militiae fructum prolixè pertinet, similis habeatur, ac si superstes permanserit ad finem usque supremum.*

BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III...*, op. cit., p. 131.

⁹¹⁰SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, op. cit., p. 362, nt. 6.

⁹¹¹Este principio se recoge también en las fuentes bajomedievales que proclaman el derecho al salario íntegro del oficial que por causa ajena a su voluntad no pueda continuar prestando sus servicios por el tiempo establecido. En las Partidas (V.8.9) se establece que, en caso de

D. 1.22.4⁹¹², cuyo contenido es reproducido por Ulpiano en D. 19.2.19.10⁹¹³. En el primero, Papiniano afirma que en caso de muerte del legado del César corresponde a los *comites* puestos a su servicio el salario del fallecido por todo el tiempo restante para el que habían sido designados, a no ser que desempeñen posteriormente con otra persona ese mismo cargo. Esta condición se recoge también en el ámbito del Derecho privado en un rescripto de Septimio Severo y Caracalla referido por Ulpiano en D. 19.2.19.9⁹¹⁴ en el que se dice que un individuo

fallecimiento del oficial, los herederos “*deuen auer todo su salario de aquel año*”. Señalamos que BARTOLO (*In treis Cod. lib. comm.*, fol. 59) advierte que mientras los herederos del oficial muerto perciben el salario de este último por todo el tiempo, ningún otro oficial puede subrogarse en el lugar del anterior para no fatigar a la República con la satisfacción de dos salarios. Sobre este aspecto, véase GARCÍA MARÍN, J. M., *El oficio público...*, *op. cit.*, pp. 248-249.

⁹¹²D. 1.22.4 (Pap., 4 resp.): *Diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.*

⁹¹³ D. 19.2.19.10 (Ulp., 32 ad ed.): *Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.*

METRO A., *Locatio operarum e rischio contrattuale*, en Panorami. *Riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione*, V, 1993, pp. 56 ss. Véase también KASER M., *Periculum locatoris*, ZSS, 74, Weimar, 1957, pp. 155 ss.; COPPOLA G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel diritto romano*, Messina, 1990, pp. 196 ss., 249 ss.

⁹¹⁴ D. 19.2.19.9 (Ulp., 32 ed.): *Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas operas Antonio Aquilae*

concluye con un cierto Antonio Aquila una *locatio operarum*, obligándose a prestar sus servicios en calidad de *exceptor* (escribano, estenógrafo); Antonio Aquila fallece y el secretario se pregunta si tiene derecho a percibir el salario acordado. Los emperadores responden que ya que la imposibilidad de cumplir la prestación no es imputable al *locator*, éste tendrá derecho a percibir la retribución con la única condición de no haber prestado sus servicios a otra persona y de no haber percibido ninguna merced en ese año⁹¹⁵.

Por otro lado, interesa también mencionar que el emperador Anastasio en una ley dirigida a Eusebio, *magister officiorum*, y recogida en C. J. 12.19.11, otorgó, en caso de fallecimiento de un numerario de los *sacra scrinia*, una compensación económica a sus hijos, y a falta de estos, a los acreedores que <<con el fallecido hubiesen contratado un préstamo con interés para adquirir el puesto de numerario>>; se establece también que en caso de que la herencia del numerario no sea aceptada por los herederos, sean dichos acreedores los que perciban la

solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est.

⁹¹⁵ ELGUERA E. R., *Situación jurídica de las personas libres que trabajaban como scribae*, Studi Grosso, 2, Torino, 1968, pp. 150 ss.; PALAZZOLO N., *Le conseguenze della morte del 'conductor operarum' sul rapporto di lavoro (Osservazioni su D. 19.2.19.9)*, SDHI, 30, Roma, 1964, pp. 284 ss.

El caso que se presenta en el rescripto se refiere a si debe continuarse pagando la *merces* a un escribano (*exceptor*), el cual

compensación a modo de privilegio, como se dispone en la ley: <<... *qui foenus cum mortuo pro statui loco ei adquirendo contraxerint, consequantur; ita scilicet ut, si hereditas vel successio diem functi minime fuerit suscepta vel adita, tales personae, id est creditores quidem contra ceteros praerogativa sibi servata ...*>>⁹¹⁶. Y en Nov. 53.5 (a. 537) Justiniano extiende el derecho a percibir esta compensación económica⁹¹⁷ a los hijos y viudas de todos los funcionarios fallecidos: <<...*si quidem filii fuerint aut uxor defuncti, istos omnibus praeponimus modis, ut adeant nos: et secundum iussionem nostram haec habeant non tanquam paternam hereditatem, si in aliis inops sit, sed tanquam imperialem munificentiam, ut et substantiam relinquentibus et non habentibus merito solacium praebeamus*>>⁹¹⁸.

después de la muerte del *conductor operarum* no había podido seguir prestando más su trabajo.

⁹¹⁶ <<... que con el fallecido hubieren contratado un préstamo a interés para adquirir para él el lugar de numerario, la cantidad fijada e incluida en la sacra constitución de los príncipes de divina memoria, Teodosio y Valentiniano; pero de suerte que si no hubiere sido aceptada o adida la herencia o la sucesión del fallecido, tales personas, esto es, los acreedores, perciban esta suma guardándoseles ciertamente su prerrogativa contra los demás...>>.

⁹¹⁷ Justiniano las llama “provenientes de accidente” (*appellantur ex casu*).

⁹¹⁸ <<Si hubiere hijos o mujer del difunto los anteponemos para que se nos dirijan y tengan esto por virtud de nuestra orden, no como herencia paterna, sino como munificencia imperial, para darles merecidamente este consuelo...>>.

En relación con este tema, Justiniano en C. J. 8.13(14).27.1 (a. 528)⁹¹⁹, recogido en el título <<de pignoribus>>, regula el supuesto de aquellos acreedores que prestaron sumas de dinero a personas pertenecientes a determinados gremios de artesanos o comerciantes - como los fabricantes de seda (*metaxarii*) o los vendedores de plata (*argenti distractoris*)- para que comprasen un cargo en la *militia* para sus hijos (*liberi*), parientes (*cognati*) o incluso para un tercero (*extraneus*)⁹²⁰.

⁹¹⁹C. J. 8.13(14).27 (Imp. Iustinianus A. Mennae P.P.): *Super hypothecis, quas argenti distractores vel metaxarii vel alii quarumcumque specierum negotiatores pecunias sibi credentibus dare solent, hoc specialiter super amputanda omni machinatione sancimus, ut, si post huiusmodi contractum liberis suis vel alio modo cognatis quamcumque militiam idem negotiatores adquisierint, ea tamen vendi vel ad heredes sub certa definitione transmitti potest, liceat creditoribus eorum, etiam non probantibus ex pecuniis eorundem negotiatorum liberos eorum vel cognatos militasse (dum tamen contrarium non probetur alios e suo patrimonio dedisse pecunias), creditum ab his qui militarunt exigere vel tantum eos efflagitare, quanti vendi eadem militia possit. 1.- Quod ita obtinere sancimus, et si extraneis quibusdam idem negotiatores de suis pecuniis huiusmodi militiam adquisisse probentur, ut, quod generaliter in ipsis debitoribus militantibus talem militiam, quae vendi vel ad heredes transmitti potest, permissum est, ut liceat creditoribus et adhuc viventium debitorum iure hypothecae vindicare militias, nisi satis sibi fiat, et post mortem eorum exigere, quod pro isdem militiis pro tenore communis militantium placiti vel divinae sanctionis tale praestantis beneficium dari solet, hoc in negotiatorum personis, licet ipsi militantes minime debito obnoxii sint, integrum creditoribus eorum servetur. 2.- Quod scilicet in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi vel cognati eorundem negotiatorum, vel extranei pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus.*

DÍAZ BAUTISTA A., *Estudios sobre la banca bizantina: negocios bancarios*, op. cit., pp. 93 ss.

⁹²⁰Vid. *supra* p. 321.

Dicho préstamo se hacía constituyendo una hipoteca⁹²¹ sobre los mismos cargos comprados por los deudores de tal forma que podrían exigir el crédito a los que hubiesen accedido al cargo o bien reclamar la cantidad en la que éste pudiera ser vendido. En caso de muerte de los mismos sin haber satisfecho los créditos, los prestamistas podrían exigir la compensación a la que nos hemos referido anteriormente en C. J. 12.19.11. Señalamos que entre los diferentes acreedores del titular de una milicia la ley estableció un derecho de preferencia respecto de los prestamistas de dinero para la adquisición del cargo⁹²². Estaríamos en estos casos ante una hipoteca privilegiada del prestamista sobre la milicia de su deudor⁹²³.

Por último, referimos el caso relativo a los *praefectiani*, alguaciles del prefecto del pretorio, que hubiesen fallecido mientras estaban en la *militia* o incluso después de su jubilación (*post depositum cingulum*) sin

⁹²¹En relación con este tema, Justiniano en Nov. 53.5 (a. 537) nos dice que <<primeramente hubo muchas dudas sobre si los cargos en la milicia podían quedar sujetos a los vínculos de la hipoteca, o si estaban libres de ellos. Pero esto está ya determinado en la ley, y hay ciertas milicias que pueden ser vendidas u obligadas>>.

⁹²²LOUIS-LOUCAS P., *Étude sur la vénalité des charges et fonctions publiques...*, *op. cit.*, pp. 531 ss.

⁹²³Vid., Nov. 136.2 y Nov. 97.4. En esta última Novela se dice que tendrán preferencia sobre la mujer los acreedores que hubieren prestado dinero para la obtención de un cargo en la milicia pero siempre que se hubiese hecho constar esto en una cláusula o pacto recogido en documento (*instrumentum*) firmado por testigos y habiéndose realizado el préstamo efectivamente. De todas formas, la mujer tendrá preferencia

haber hecho testamento y sin herederos *ab intestato*, respecto de los cuales, se establece en C. J. 12.52(53).3.1 (a. 444?) que sus bienes deberán ser reivindicados y destinados a la caja de la prefectura y no al Fisco (<<*non fisci viribus sed arcae tui culminis rationibus vindicentur*>>) como ocurría con los *bona vacantia*. En este sentido se había establecido ya anteriormente en una constitución recogida en C. J. 6.62.3 (a. 349) que las posesiones de los cohortales, oficiales de los gobernadores provinciales, que morían sin testamento o sin herederos irían a parar a los demás cohortales de la misma provincia y *non ad fiscum*; esta medida fue adoptada también respecto de los curiales que morían intestados y sin herederos cuyos bienes eran adjudicados a los curiales de su misma ciudad (C. J. 6.62.4, a. 429); y así podemos citar el caso que nos refiere Libanio (*ep.*, 63.8 ss.) acerca de un alto funcionario llamado *Olympius* (†389), miembro de una de las más importantes familias curiales de Antioquía, que muere sin descendencia y cuya herencia es reclamada por la curia.

respecto de los acreedores referidos si no se hubiesen cumplido las

formalidades señaladas.

**B) CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN
FUNCIONARIAL IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD
DEL FUNCIONARIO: INCOMPETENCIA, ABSENTISMO Y
FALTA DE RENDIMIENTO.**

La expulsión o la destitución del funcionario aparece referida en las fuentes con diferentes expresiones como <<*militia privari*>> (C. J. 12.41(42).2), <<*militia spoliari*>> (C. J. 12.60(61).3), <<*privari cingulo*>> (CTh. 16.44), <<*matriculis auferri*>> (C. J. 12.43(44).2)⁹²⁴, sobre todo en relación a situaciones de ineficacia o incompetencia en el ejercicio de las funciones a él encomendadas, y también como sanción en casos de absentismo o por la comisión de una falta administrativa grave (falta de

⁹²⁴En época republicana la expresión <<*abrogatio magistratuum*>> hacía referencia a la destitución de un magistrado pronunciada por el pueblo por medio de una ley, si bien, a tenor de las fuentes, esta situación debió darse en pocas ocasiones (Cic., *Brut.*, 14.53; Tit. Liv., 22.2; 27.20-21; 29.19.6). CERAMI P., <<*Abrogatio magistratuum*>>, en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, I, Napoli, 1984, pp. 349 ss.; BUSACCA C., *Sulla pretesa <<lex Sempronia de abactis>>*, *op. cit.*, pp. 85 ss.; LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, *op. cit.*, pp. 387 ss.

rendimiento, falta de obediencia debida a un superior...) o de una acción delictiva⁹²⁵.

El cese por incompetencia se aplicaba sobre todo a los profesores y médicos públicos tal y como aparece en C. J. 10.53(52).2 o en D. 50.4.11.3. Concretamente en C. J. 10.53(52).2 el emperador Gordiano establece que <<los gramáticos u oradores pueden ser reprobados si no se prestaran a ser útiles a los estudiantes>>, y en D. 50.4.11.3 (Mod., 11 *pand.*) se recoge un rescripto de Antonino Pío que nos dice que <<el médico puede ser rechazado por la ciudad, aunque antes hubiese sido aprobado (*probatus*) por ella>>.

Por lo que hace al absentismo de los miembros de la milicia palatina, sabemos que era una práctica habitual a tenor de diversas fuentes literarias así como de la legislación de la época destinada a combatir las ausencias injustificadas de los funcionarios⁹²⁶: en CTh. 7.12.2 = C. J. 12.42(43).2 (a. 379), Graciano, en una ley dirigida al *magister officiorum* Syagrius, establece las sanciones disciplinarias que

⁹²⁵No obstante, también las leyes establecieron límites a situaciones de arbitrariedad en el despido como se establece en CTh. 1.10.5 (a. 400) en donde se dispone que vuelvan a sus respectivos puestos los que hubieren sido despojados inconsideradamente de sus derechos por negligencia del que hubiese juzgado el caso. En este sentido también CTh. 6.27.16 (a. 413).

⁹²⁶Sím., *ep.*, 4.43; 7.53; 9.5; 9.59.

se aplicaban a los empleados de los *scrinia*, a los *agentes in rebus* y al personal de las oficinas palatinas del *comes sacrarum largitionum* y del *comes rei privatae* en caso de que se ausentasen del servicio más allá de los límites establecidos en los permisos temporales (*commeatus*) o de la fecha de su misión. Concretamente, si la ausencia era superior a seis meses se castigaba al funcionario con el retroceso de cinco puestos en el orden de antigüedad en el servicio⁹²⁷; si se prolongaba por un año descendía diez grados en el mismo orden; en caso de que se abandonase el cargo durante cuatro años sería pospuesto a los cuarenta colegas que le seguían en la *matricula*; y solamente cuando la ausencia pasase de los cuatro años serían expulsados de la Administración. La ley guarda silencio cuando el absentismo era inferior a seis meses, por lo que parece que posiblemente fuese tolerado⁹²⁸; igualmente en CTh. 7.18.16 = C. J. 12.42(43).3 se dice que <<si alguno hubiere pasado sin licencia alguna en desidioso descanso un año en su

RODA S., *Un caso di assenteismo nei quadri della burocrazia alla fine della burocrazia imperiale alla fine del IV secolo d. C.*, INDEX, 15, Napoli, 1987, pp. 367 ss.

⁹²⁷La pena de <<*regradatio*>> (= rebaja de grado) forma parte de las penas no capitales mencionadas en CTh. 8.5.2 (<<*qui contra hanc fecerit sanctionem promotus, regradationis humilitate plectetur*>>); C. J. 12.17.3. PASTOR DE AROZENA B., *Rétorica y burocracia: hapax y prima dicta en el lenguaje de las cancellerías*, Latomus, 46, fasc. 4, Bruxelles, 1987, p. 370, nos dice que estamos ante una palabra nueva introducida por la Cancillería imperial. Véase también, MARICHAL R., *L'écriture latine de la chancellerie impériale romaine*, Aegyptus, 32, Milano, 1952, pp. 336 ss.

⁹²⁸RODA S., *Un caso di assenteismo...*, *op. cit.*, pp. 372-373.

propio hogar o en cualesquiera lugares sea pospuesto a los diez que le siguen; aquél en quien se halla tal culpa durante dos años, sufra que se le antepongan veinte; mas el que tres años deplorará con derecho que treinta le hayan sido antepuestos, de suerte que el cuarto año de ausencia no deje venia alguna para el que haya sido borrado de la matrícula>>.

En dos constituciones de Honorio se regula también esta materia: en CTh. 7.12.3 (a. 395) se penaliza a los funcionarios que hubiesen obtenido periodos de permiso, y no hubiesen regresado después a su puesto, con la prohibición de desarrollar cualquier actividad en la provincia y con la disminución de su grado (*gradus deminutio*); y en CTh. 6.27.15 (a. 412), dirigida al *magister officiorum*, *Namatius*, se dice que los *agentes in rebus* que no se hubiesen incorporado al servicio deberán retornar para justificar su retraso y demostrar si ha sido por causa de fuerza mayor en cuyo caso podrán conservar su puesto; si los *agentes* no hubiesen hecho esto <<*intra kalendarum Februariarum, in perpetuum matriculis eximentur*>>. Considera RODA⁹²⁹ que esta última ley, a diferencia de la del año 379 (CTh. 7.12.2=C. J. 12.42(43).2), “prevé la expulsión de la matrícula de los absentistas durante periodos relativamente breves, pero al mismo tiempo inserta una cláusula, antes

⁹²⁹RODA S., *Un caso di assenteismo...*, op. cit., p. 375.

inexistente, de valoración caso por caso que abre la vía a una subjetividad sospechosa`.

Asimismo, se castiga en las fuentes la falta de rendimiento del funcionario, dependiendo de su gravedad, bien con una multa o bien con el despido del mismo. De esta manera, en CTh. 6.24.6 (a. 395) se dice que los *protectores* que se muestran “inútiles” serán sancionados con el despido llevado a cabo por el *magister utriusque militiae*, y en CTh. 1.5.9 (a. 389), dirigida al prefecto del pretorio Taciano, se establece textualmente que: <<si tu sublimidad <prefecto del pretorio> si encontrare a algunos gobernadores provinciales decaídos de cuerpo y negligentes, que vagan en los sueños de la desidia (...); si encontrare a algunos envilecidos por la avidez del hurto servil, o manchados por la torpeza de vicios análogos, dirija tu sublimidad contra ellos la vindicta del castigo público y sean removidos>>⁹³⁰.

A modo de ejemplo, citamos también otras constituciones que tratan sobre el despido o cese de los funcionarios:

- CTh. 8.7.10 (a. 369) que refiere que aquellos que pertenecen a las oficinas del prefecto del pretorio y son despedidos no podrán alcanzar en el futuro ninguna *dignitas* y serán considerados como “*iners vulgus*” o “*indigni militia*”.

- CTh. 9.27.1 (a. 380) = C. J. 12.1.12, que dice textualmente: <<los gobernadores, que hubieren sido convictos de haberse manchado con hurtos y crímenes, sean considerados, habiéndoseles quitado las insignias de los diplomas y siendo despojados de su honor, entre los peores y como plebeyos, y en lo sucesivo no se enorgullezcan con el honor de que ellos mismos se juzgaron indignos>>.

- CTh. 8.7.18 (a. 386) = C. J. 12.59(60).2, que establece que ninguno de los *apparitores* (alguaciles) del prefecto del pretorio que hubiesen sido separados de la *militia* vuelvan indebidamente al servicio sino es con autorización del emperador, y si alguno hubiese obtenido esa autorización fraudulentamente sea castigado con una multa de cinco libras de oro.

- CTh. 1.29.6 (a. 387), en donde se dice que el *defensor civitatis* que haya llegado al cargo movido por la ambición será expulsado inmediatamente y además condenado a pagar cinco libras de oro al Fisco⁹³¹.

⁹³⁰CTh. 12.1.44 (a. 358); CTh. 1.10.7 (a. 401); CTh. 1.15.17 (a. 401). NOETHLICH K. L., *Beamtentum und Dienstvergehen...*, op. cit., p. 84.

⁹³¹CTh. 1.29.6 (Imppp. Valentiniano, Teodosio y Arcadio): *Hi potissimum constituentur defensores, quos decretis elegerint civitates. Quod si quis ad locum defensionis ambitione pervenerit, confestim eum sinceritas tua reiectum quinque libras auri fisci utilitatibus cogat inferre.*

- CTh. 8.4.16 (a. 389) = C. J. 12.57(58).7.1, establece que: <<los que despojados del cingulo de su milicia por sus delitos son sometidos a infamia, se les castiga además con la pérdida de su peculio, y que se reparta éste entre los demás compañeros de milicia>>.

- En una ley de los emperadores Honorio y Teodosio, recogida en CTh. 8.7.20 (a. 415)= C. J. 12.59(60).5, se prohíbe a los *apparitores* (alguaciles) del *praefectus urbi*, que hubiesen sido privados del cargo en virtud de sentencia *ob culpam vel negligentiam*, que puedan aspirar a otro puesto en la *militia*; en caso de que hubiesen intentado aspirar a un cargo contraviniendo esta disposición se dice que deberán ser sometidos a una gravísima pena.

- C. J. 1.40.12⁹³² (a. 412) castiga con la destitución y en su caso la pena de azotes a los alguaciles de los gobernadores provinciales que hubiesen abusado de su autoridad.

Mencionamos también, a modo de ejemplo, las siguientes fuentes que se refieren a la expulsión de la milicia: CTh. 1.15.6, CTh. 1.5.9, CTh. 1.10.7, CTh. 13.11.8, CTh. 13.11.1, etc...⁹³³.

Se reconoce al prefecto del pretorio el derecho/deber de imponer al funcionario una multa de cinco libras que irán destinadas al Fisco. MANNINO V., *Ricerche sul defensor...*, *op. cit.*, p. 81.

⁹³² C. J. 1.40.12 (Imp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.): *Omnes per provincias apparitores pro inveterata auctoritate iuxta motum iudicis nudatos verberibus, si ita res tulerit, subiacere praecipimus, ut et*

C) CONCLUSIONES

I.

Las fuentes romanas recogen como causas de extinción de la relación funcional, no imputables al funcionario: la jubilación, el cese voluntario y la revocación del cargo por el emperador. También en dichas fuentes se contienen numerosos casos relativos al cese de un funcionario por causa de enfermedad o mala salud.

En caso de fallecimiento de los oficiales se disponía, por regla general, la sucesión hereditaria a favor de sus hijos en la titularidad del cargo desempeñado, pero siempre que tuviesen la aptitud necesaria para desempeñar el puesto y pagasen las espórtulas correspondientes; asimismo, se disponía la transmisión hereditaria, a favor de los hijos y de la mujer, del salario y demás derechos económicos devengados por el funcionario fallecido. Por último, el emperador Anastasio dispuso que

facilis exsecutio rerum publicarum sit et officiorum insolentia comprimatur et iudicum severitati competens reddatur auctoritas.

⁹³³En la *schola* de los *agentes in rebus* se exige para proceder a la expulsión de uno de ellos no sólo la intervención del *magister officiorum* sino también la autorización del emperador: CTh. 6.27.14; 20; 21. En C. J. 12.20.2 (a. 415) los emperadores Honorio y Teodosio II establecen que <<nadie tenga facultad para privar del cingulo o para excluir a un agente secreto sin autorización del emperador>>.

a falta de hijos del funcionario los derechos económicos fuesen a parar a los acreedores que hubiesen contratado con el fallecido un préstamo con interés para adquirir el puesto de numerario.

II.

Son causas de extinción de la relación funcional imputables al funcionario: 1.- la ineficacia o incompetencia en el ejercicio de las funciones a él encomendadas, como se estableció expresamente en las leyes respecto de los profesores y los médicos; 2.- la comisión de actos delictivos y faltas administrativas muy graves como podían ser el absentismo, la falta de rendimiento o la falta de la obediencia debida a un superior.

El absentismo constituyó una práctica habitual entre los funcionarios de la milicia palatina; los emperadores publicaron diversas leyes dirigidas a impedir estas ausencias injustificadas estableciéndose diversas sanciones en función de la duración de las mismas: si la ausencia era superior a los seis meses se castigaba al funcionario con el retroceso de cinco puestos en el orden de antigüedad en el servicio; si se prolongaba por un año descendía diez grados en el mismo orden; en caso de que fuese superior a cuatro años sería pospuesto a los cuarenta colegas que le seguían en la *matricula* y; por último, cuando la ausencia pasase de los cuatro años serían expulsados de la

Administración. El absentismo inferior a seis meses parece que fue tácitamente tolerado a tenor del silencio de las fuentes.

Asimismo se sancionó a los funcionarios que hubieren obtenido un periodo de permiso y que no hubiesen regresado después a su puesto con la prohibición de desarrollar cualquier actividad en la provincia y con la disminución de su grado.

Se castigó también la falta de rendimiento del funcionario, dependiendo de su gravedad, bien con una multa o bien, en los casos más graves, con el despido del mismo.

Por último, se establecieron límites a la posible arbitrariedad en la imposición de las sanciones administrativa referidas anteriormente, como se dispuso en diversas constituciones recogidas en el Código Teodosiano.

CAPÍTULO XI

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS A LA SALIDA DEL CARGO POR LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA.

**A) OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS. ESPECIAL
REFERENCIA AL *CRIMEN PECULATUS* (MALVERSACIÓN
DE FONDOS PÚBLICOS) EN ESTA MATERIA.**

A la salida del cargo, los funcionarios tenían la obligación de rendir cuentas (*reddere rationes*) de la gestión realizada. Así, sabemos que debían transmitir a sus sucesores todos los documentos y libros de contabilidad que habían llevado en el desempeño de su función⁹³⁴. En

⁹³⁴La obligación de rendir cuentas a la salida del cargo era exigida también en el Derecho ático: Esquines (3, 21) recoge que la ley prohibía abandonar el territorio (*me apodemein*) a aquellos magistrados que no hubiesen rendido cuentas de su gestión al finalizar su mandato (*Euthyna*). A tal efecto eran nombrados unos magistrados (logistas) que se encargaban de revisar, en el plazo de un mes, la rendición de cuentas de aquellos que habían administrado dinero público: ROSSETTI L., *Le magistrature nell'Atene classica. Forme di controllo e forme di responsabilità*, en *L'educazione giuridica. IV. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo 1. Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia, 1981, p. 20; EFSTATHIOU A., *Euthyna. Procedure in 4th c. Athenians and the Case on the false embassy*, en DIKE. *Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 10, Milano, 2007, pp. 113 ss.

PALAO J., *El sistema jurídico ático clásico, op. cit.*, pp. 411 ss., nos refiere el procedimiento de rendición y examen de cuentas en los siguientes términos: ‘el procedimiento, o procedimientos, de rendición de cuentas eran severos. Para investigar los actos de los magistrados, el Consejo designaba diez contadores y sus asesores que recibían las cuentas cuando dejaban los magistrados sus cargos, al final de las pritanías. Investigaban, además, los delitos de malversación, cohecho y

prevaricación. Los contadores llevan al tribunal las cuentas presentadas y proponen una resolución sobre el descargo o la responsabilidad de los magistrados cesantes. A continuación, el heraldo llamaba a quien quisiera acusar al magistrado que rendía cuentas. Si alguien le acusaba, o si los contadores encontraban irregularidades en sus cuentas o su gestión, el magistrado cesante era juzgado una primera vez, imponiéndole -de haber sido culpable- las multas que ya he señalado anteriormente: diez veces el importe de la malversación y el cohecho; o la cuantía estimada del mal causado en caso de prevaricación, si se pagaba la condena antes de la novena pritanía; en otro caso, el doble. Durante los tres días siguientes a la primera rendición de cuentas ante el dicasterio, los auditores tomaban asiento en la Asamblea, ante las estatuas de los héroes epónimos de su tribu; allí, recibían las quejas y denuncias contra los magistrados que habían presentado sus cuentas...`.

La obligación de rendir cuentas a la salida del cargo se recogía también en las leyes municipales romanas: en los capítulos 67-68 de la *lex Irnitana* se establece que el que hubiese manejado dinero municipal (*pecunia communis*) debía devolverlo al municipio en el plazo de treinta días desde su cese; de igual forma, el que hubiese gestionado asuntos públicos debía rendir cuentas a los decuriones también en un plazo de treinta días (<<qui... rationes communes negotiumve quot commune municipium... gesserit tractaverit is ... in diebus XXX proximis quibus ea negotia easve rationes gerere tractare desierit... rationes edito redditoque>>). Esta obligación se extendía asimismo a los herederos. En caso de que no restituyesen el dinero o no rindiesen cuentas de su gestión se concedía una acción popular (*actio petitio persecutio*) por el doble (*tantum et alterum tantum*). LAMBERTI, F., *La lex Irnitana...*, op. cit., p. 118, señala a este respecto ‘‘può fare impressione che un’azione penale venga estesa anche ad eredi ed aventi causa dei responsabili, come è nel cap. 67: la deroga al principio della intransmissibilità dell’azione penale derivava forse dalla natura ‘contabile’, pubblicistica e meramente patrimoniale, della responsabilità, e rispondeva all’esigenza di scoraggiare chi, non intendendo restituire il denaro dei municipes, tentava di liberarsi della responsabilità trasferendolo ad altri`.

También en el estatuto del municipio de Tarento (*lex municipii Tarentini*, ll. 7-20) se establece la obligación de rendir cuentas al senado local de la *pecunia publica*. Igualmente, resulta del capítulo 67 de la *lex Malacitana*, de época de Domiciano, que quien haya sacado dinero del municipio (*pecunia communis municipum*) estará obligado a devolverlo en el plazo de treinta días. Del mismo modo, el que haya gestionado asuntos públicos del municipio deberá rendir cuentas dentro del mismo plazo y se dispone en esta ley que los que contravengan estos

este sentido, ya la *lex Iulia repetundarum* obligaba al gobernador a depositar dos copias de la contabilidad referente a su gestión en dos ciudades de la provincia y a presentar una tercera en el *aerarium* de Roma (Cic., *ad fam.*, 2.17.2; 5.20.1-7).

En realidad, la obligación de rendir cuentas al término del cargo desempeñado era común a todos los sujetos que estaban obligados por la gestión de asuntos ajenos como era el caso del tutor del impúber (Gai., 1.191: <<*Ubi pupillorum pupillarumve negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicio rationem reddunt*>>⁹³⁵). MANTOVANI⁹³⁶

preceptos serán obligados a pagar el *duplum* en favor del municipio, quedando los herederos de los que han manejado dinero o gestionado asuntos de la comunidad sujetos a las mismas obligaciones y sanciones. La acción tendente a la imposición de la multa era popular.

SERRAO F., *Sul danno da reato in diritto romano*, A.G., 20, Modena, 1956, pp. 43 ss.; MURGA GENER J. L., *Las acciones populares en el municipio de Irni*, BIDR, 88, Milano, 1985, pp. 246-247; MENTXAKA R., *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, RIDA, 37, Bruxelles, 1990, pp. 247 ss.; GNOLI F., *Peculato e responsabilità dei magistrati nella <<lex municipii Tarentini>>*, en *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo dell'Oro*, Padova, 2001, pp. 1 ss.; RODRÍGUEZ NEILA J. F., *Pecunia communis municipium. Decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania*, en *Sociedad y economía en el Occidente romano* (C. Castillo- J. F. Rodríguez Neila- F. J. Navarro), Pamplona, 2003, pp. 111-198; MANTOVANI D., *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, op. cit., pp. 261 ss.; TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa...*, op. cit., p. 313.

⁹³⁵ VOCI P., *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini...*, op. cit., pp. 140-141, pone de manifiesto que existían analogías entre la situación de los co-tutores y la de los administradores municipales: los unos y los otros estaban expuestos a un régimen de

señala el paralelismo que hay entre la rendición de cuentas privada y la de los magistrados encargados de la gestión de los fondos públicos municipales a tenor de un fragmento de Calístrato que nos permite ver qué se entiende por *rationes reddere* (D. 35.1.82; Call., 2 *quaest.*):

“Pertanto, osserva elegantemente Callistrato, il rendiconto inizia dal factum (la semplice esibizione delle scritture) e arriva alla pecunia, ossia al conteggio e versamento dei residui di gestione⁹³⁷ (...) Perciò, conclude Callistrato, *rationes reddere* significa esibire tutti i documenti della propria gestione e versare i residui. Allo stesso modo ci pare si debba intendere il dovere di reddere *rationes* che grava sul gestore dei conti e degli affari comunali”.

De acuerdo con lo anterior, vemos que, en el ámbito municipal, si la verificación de las cuentas hubiese hecho emerger robos por apropiación de dinero público (*peculatus*)⁹³⁸, por ejemplo, al inscribir en

mutuum periculum; para todos vale el principio de la responsabilidad subsidiaria del colega que no ha gestionado.

⁹³⁶MANTOVANI D., *Il iudicium pecuniae communis...*, op. cit., pp. 276-278.

⁹³⁷Vid. *infra* pp. 620-621, nt. 938.

⁹³⁸El <<*peculatus*>> y el <<*crimen de residuis*>> se referían básicamente a la apropiación indebida de fondos públicos por parte de funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

El <<*peculatus*>>, en sentido estricto, es definido en D. 48.13.11(9).2 (Paul., *de iud. pub.*) como <<*furtum publicae pecuniae*>> (Festo, *de verborum significatione*, v. *peculatus*, p. 318 L², p. 342 L²). Una *lex Iulia peculatus et de sacrilegiis et de residuis* (ley Julia del

peculado, de las sustracciones sacrílegas y de los remanentes retenidos: D. 48.13), propuesta por Julio César o Augusto -GNOLI, *Ricerche sul peculatus...*, op. cit., p. 25, considera “la lex Iulia come appartenente a un periodo non anteriore al 59 a. C. (anno d’inizio della legislazione cesariana e di approvazione della lex Iulia repetundarum), e non posteriore al 17 a. C.” - castigaba el crimen de peculado, es decir, las sustracciones de bienes pertenecientes a los dioses o al Estado romano (D. 48.13.1; Ulp. 44 Sab.). Un caso particular de *peculatus* era el relativo a los fraudes en la acuñación de moneda consistentes en mezclar junto al oro, plata o cobre respectivo, metales extraños como podían ser estaño o plomo para así disminuir el valor intrínseco de la moneda de tal manera que el autor de la mezcla pudiese obtener un enriquecimiento fraudulento que entraba dentro de la noción de *furtum pecuniae publicae* (D. 48.13.1; Ulp. 44 Sab.). Asimismo, se comprendía dentro del *peculatus* a “los que al fabricar moneda pública se la hacen aparte para sí con el cuño público o hurtan la ya acuñada” (D. 48.13.8 (6.1) pr.; Ulp., 7 de off. proc.).

La pena fijada en la ley Julia para el crimen de peculado (*poena peculatus*) era pecuniaria y consistía en el cuádruplo de la estimación del objeto del delito: *Paul. Sent. 5.27.1 [ad legem Iuliam peculatus]: <<Si quis fiscalem pecuniam attrectaverit subriperit mutaverit seu in suos usos converterit, in quadruplum eius pecuniae quam sustulit condemnatur>>*; también en D. 48.13.15 (13) (Mod., 2 de poen.), que alude al supuesto específico del robo de un botín de guerra, se establece la pena del cuádruplo del valor de lo robado. Vid. D. 49.14.46.9; *Edictum Theodorici 115: <<Qui pecuniam fisco vel publicis rationibus competentem furandi studio tulerit, eam reddat in quadruplum>>*). Sin embargo, dicha pena fue endurecida en el ámbito de la *cognitio extra ordinem* y en las constituciones de los emperadores cristianos, al menos para los supuestos más graves, con el destierro o la deportación (D. 48.13.3; Ulp., 1 de adult.), llegándose incluso a castigar este crimen con la pena de muerte (CTh. 9.28.1-2; a. 415 = C. J. 9.28.1; I. J. 4.18.9). Así, en la ley de Honorio y Teodosio II del año 415 (CTh. 9.28.1-2 = C. J. 9.28.1), recogida en el Código Teodosiano y en el de Justiniano bajo la rúbrica <<de crimine peculatus>>, se castiga como responsables de este crimen (*lege Iulia peculatus obnoxii sunt*) con la pena de muerte a los gobernadores provinciales que en el desarrollo de su actividad hubiesen sustraído dinero público, también a sus cómplices y a los que hubiesen recibido en consignación lo robado. A la misma pena estaban sujetos los oficiales del Fisco que, bajo apariencia de crédito público, hubiesen dado en mutuo dinero del patrimonio del emperador (CTh. 10.24.2; a. 481 = C. J. 10.6.2).

La acción penal de peculado prescribe en un quinquenio desde el momento del delito (D. 48.13.9 (7); Ven., 2 *de iud. pub.*). En la mencionada ley Julia se concedía acción contra los herederos de reos de *peculatus* y de *pecunia residuis* (D. 48.13.16 (14); Pap., 36 *quaest.*), sin que sepamos con claridad si estas acciones se darían contra ellos por el *simpulum* o bien por la multa correspondiente, tal y como sucede en normas provenientes de la legislación municipal, como es el caso de la *lex Malacitana* (L. 67) en la que se establece una acción popular por el *duplum* dirigida tanto contra el culpable como contra sus herederos.

Respecto al <<*crimen de residuis*>>, por el que se castigaba a quien retuviese dinero público destinado para algún uso no dándole el destino fijado (D. 48.13.2; Paul. 11 *Sab.*), podemos señalar que en el título 48.13 del Digesto se contienen referencias directas a la *lex Iulia* relativa al *crimen* (o *iudicium*) de *residuis* en tres de los dieciséis fragmentos que integran dicho título del Digesto. Concretamente, en D. 48.13.5 pr.-2, tomado de las Instituciones de Marciano, se establece que queda sujeto a la ley Julia de remanentes retenidos aquél en cuyo poder se retiene algo de una cantidad pública que recibió a causa de arriendo (*a publico facta*), de compraventa de una *res populi Romani*, de *alimentaria ratio* (distribución de *alimenta publica*), o de otra causa cualquiera. En D. 48.13.5.1 se alude al dinero recibido del Erario para ser empleado en un determinado fin y que no ha sido ni gastado ni restituído a la caja pública. Y en el número 2 de dicho fragmento se fija la pena prevista para la *pecunia residua*: el condenado por esta ley era castigado “a pagar un tercio más de lo que debe”. Vemos que, aunque se trata de un *iudicium publicum* (I. J. 4.18.11) dirigido a la recuperación de dinero público por parte del Erario, la función de la acción judicial dirigida contra el que retiene indebidamente dicha cantidad –sea un funcionario público o un particular– es de carácter resarcitorio, puesto que se persigue la recuperación de la cantidad debida por el deudor del Fisco, si bien aumentada en un tercio que GNOLI (*Ricerche sul peculatus...*, *op. cit.*, p. 70) considera como una especie de interés de demora.

Asimismo, una fuente importante para conocer el mecanismo de represión de la retención de *pecunia publica* (*crimen de residuis*) es la contenida en D. 48.13.11(9).6 (Paul., *de iud. pub.*): <<Escribió Labeón, 38 *post.*, que se aplica esta ley <ley Julia del peculado, de las sustracciones sacrílegas y de los remanentes retenidos> al que retenía dinero público para algún fin y no lo hubiera gastado en ese fin; pero contra el que, al dejar la provincia, retuviera el dinero que tenía declarándolo al Tesoro público, no se da la acción de dinero remanente por pagar, pues lo debe al Fisco como particular y debe contarse, por lo tanto, como a un deudor más, y que debe reclamárselo el que tiene

los registros públicos una cantidad menor que el precio verdadero de

poder para hacerlo, mediante toma de prendas, prisión corporal o coacción de multa; si bien, la ley Julia de remanentes retenidos dispuso que también esa cantidad se considera remanente al transcurrir un año>>. GNOLI F., *Ricerche sul peculatus...*, op. cit., pp. 161 ss.

A tenor del fragmento de Paulo se contempla la posibilidad de que el que retiene dinero público haga una *professio* de la *pecunia* retenida en sus manos con lo que él mismo se reconoce desde ese momento como deudor privado del Erario público. La consecuencia de dicha declaración es que no incurre ya en el *iudicium pecuniae residuae* “ciò significa che quella pecunia non è residua in senso tecnico” (GNOLI F., *Ricerche sul peculatus...*, op. cit., p. 164). Por tanto, tratándose de un deudor privado del Erario, el funcionario habrá de devolver la cantidad que recibió ya que de lo contrario estará sujeto a una *exactio* dirigida contra su patrimonio puesto que el dinero tomado no se distingue ya de su patrimonio personal. Solamente en caso de que el deudor del Erario haya permanecido moroso por un año entero y no se hubiese podido recuperar en este tiempo la suma debida, adquiere ésta la cualidad de *pecunia residua ex lege Iulia*. El año comenzará a correr desde la salida del cargo y la coétanea *professio* realizada por el funcionario. Por el contrario, si el funcionario que sale de la provincia no declara la *pecunia publica* que retiene en su poder incurre sin más por este hecho en el ilícito penal de *pecunia residua*.

Por último, en cuanto al crimen de sacrilegio, que en origen era una particular forma de *peculatus*, es en época postclásica concebido como un delito contra la religión en el que entran también la inobservancia de las disposiciones legislativas y administrativas del emperador (CTh. 6.5.2 = C. J. 12.8.1; CTh. 1.6.9= C. J. 9.29.2). Vid. *supra* nt. 858.

SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale...*, op. cit., p. 143; GNOLI F., *Ricerche sul peculatus*, op. cit.; MENTXAKA R., *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, RIDA, 37, Bruxelles, 1990, pp. 247 ss.; GNOLI F., *Peculato e responsabilità dei magistrati nella <<lex municipii Tarentini>>*, op. cit., pp. 1 ss.; BOTELLA VICENT C., *Lex Iulia peculatus y depósito irregular*, en *El derecho penal: de Roma al Derecho actual* (VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano), coords. Camacho de los Ríos - Calzada González, Madrid, 2005, pp. 149 ss.; RUVOLO M., *L'elemento oggettivo ed il bene giuridico del crimen peculatus e del crimen residuis nella lex Iulia peculatus*, en *Panorami* 13.1, 2001/2002, pp. 23 ss.

una venta o arrendamiento de una cosa pública (D. 48.13.12 (10) pr.; Marcian., 1 *de iud. pub.*)⁹³⁹ o mediante la injustificada remisión del débito a un particular, se concederá a los munícipes la facultad de perseguir al reo por *peculatus*.

Por lo que hace a la época postclásica en CTh. 1.32.3 (a. 377) se precisa que los funcionarios dependientes del *comes sacrarum largitionum* obligados a rendir cuentas a la entrada⁹⁴⁰ y a la salida del cargo –como eran, por ejemplo, los *praepositi thesaurorum*, los *praepositi gynaeciorum* y los *praepositi monetarum*⁹⁴¹–, debían remitir los documentos y libros de contabilidad en un plazo de treinta días desde que ocuparon el cargo (en caso de depósitos provenientes de negocios

⁹³⁹GNOLI F., *Ricerche sul peculatus...*, *op. cit.*, p. 35, pone de relieve que este fragmento es el único del Digesto –relativo al *peculatus*– que testimonia la importancia y la frecuencia del ilícito cometido mediante intervención dolosa realizada sobre documentos públicos. Ya en la *lex municipii Tarentini* aparece la falsificación de escrituras públicas como medio para cometer peculado lesionando el patrimonio municipal: <<*neive per litteras publicas fraudemve publicum peius facito dolo malo*>>. GNOLI F., *op. cit.*, pp. 149 ss.

⁹⁴⁰ Asimismo, debían presentar fiadores completamente idóneos al comienzo de sus funciones.

⁹⁴¹ Los *praepositi thesaurorum* eran funcionarios dependientes del *comes sacrarum largitionum* encargados de custodiar el oro y otros bienes preciosos destinados a las sagradas liberalidades; los *praepositi gynaeciorum* y los *praepositi monetarum* estaban situados a la cabeza de los talleres textiles y fábricas de moneda pertenecientes al Fisco.

DELMARE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, pp. 454-455; QUINTANA ORIVE E., CTh. 10.20: *acerca del régimen jurídico...*, *op. cit.*, pp. 342-343.

de menor cuantía) o de cincuenta días (en caso de negocios de mayor cuantía) y remitirlos por escrito a los recaudadores dando cuenta de todo lo que hubiesen recibido, de lo que hubiesen gastado y de todo lo que se guarda en los almacenes (stocks de mercancías); además de ello tenían también la obligación, una vez abandonado su cargo, de remitir a su sucesor en un plazo de treinta días (hasta cuatro meses para importes elevados) las cantidades que debían estar en el *arca*. En caso de que el funcionario hubiese sacado dinero o bienes, aunque de poco valor, el mismo sería despojado de todo honor y dignidad y castigado, golpeado con varillas y otros tormentos, hasta la extinción de su deuda (<<hasta que el total sea llevado a los almacenes de nuestras liberalidades>>)⁹⁴².

A tenor de D. 44.3.13.1 (Hermog., 6 *iur. epit.*) las cuentas públicas podían inspeccionarse dentro del plazo de veinte años y, en caso de fallecimiento del funcionario, aún podían ser investigados sus herederos por los errores descubiertos en las mismas dentro del plazo de diez años desde el fallecimiento de aquél; pasados estos plazos se establece la prescripción de la responsabilidad del funcionario por los errores que se detecten después en dichas cuentas⁹⁴³; no obstante, en D. 50.8.10

⁹⁴² DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata...*, *op. cit.*, p. 272.

⁹⁴³ AGUDO RUIZ A., *La prescripción de las controversias fiscales*, en AA.VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, *op. cit.*, p. 162.

(8) (Mod., 8 *reg.*) se permitía que el funcionario hiciese una retractación de las cuentas por error⁹⁴⁴ aunque hubiese transcurrido el plazo de veinte o treinta años de prescripción, si bien, no se admitiría dicha retractación si las cuentas aparecían tachadas.

⁹⁴⁴Sobre el error de cálculo, véase también C. J. 2.5.1.

B) OBLIGACIÓN DE PERMANECER CINCUENTA DÍAS EN LA CIUDAD EN LA QUE EL FUNCIONARIO DESEMPEÑÓ SU CARGO CON LA FINALIDAD DE RESPONDER A LAS ACUSACIONES QUE LE FUESEN FORMULADAS POR SU GESTIÓN.

1. NORMATIVA CONTENIDA EN LAS FUENTES ROMANAS.

Los funcionarios al término de su gestión estaban obligados a permanecer durante un tiempo en la provincia o localidad en la que habían realizado sus funciones con la finalidad de responder a las acusaciones de malversación de fondos públicos. Así, vemos que en CTh. 1.10.1 (a. 381), dirigida al prefecto del pretorio Siagrio, se establece que el palatino enviado a provincias a tal efecto no ha de permitir a ningún *administrator* abandonar la provincia antes de haber puesto sus cuentas al día y entregado al Tesoro todo lo que debe en

virtud de su cargo (*canonem propriae administrationis*)⁹⁴⁵. En caso de necesidad el palatino debía hacer un informe al emperador que impondría un grave castigo. Y en CTh. 1.10.2 (a. 385) se añade que <<los palatinos asistan a los gobernadores provinciales en la tarea de exigir los títulos largitionales <impuestos que se recaudaban para las liberalidades del emperador>⁹⁴⁶, y prohíban dejar la provincia al gobernador, aunque haya concluido el ejercicio de su cargo, hasta que el gobernador exija todo aquello que ha de destinarse a las sacras liberalidades>>⁹⁴⁷.

Asimismo, los emperadores Arcadio y Honorio establecieron en C. J. 1.51.3 (a. 399)⁹⁴⁸ para los domésticos, los cancilleres y los asesores de los gobernadores la obligación de permanecer cincuenta

⁹⁴⁵Véase también, D. 1.16.10 (Ulp., 10 *de offic. proc.*) y D. 1.16.11 (Ven. Sat., 2 *de off. proc.*).

⁹⁴⁶En CTh. 1.10.6 (a. 401) se dice que los palatinos han sido enviados a provincias para que <<estén vigilantes del comportamiento de los gobernadores>> sobre la recaudación de los *tituli largitionales*.

⁹⁴⁷Así en CTh. 1.5.11 (a. 398) se establece que <<los gobernadores provinciales, al término de su administración, demandarán el pago de los impuestos debidos a esa época>>; por otro lado, también se dispone en esta constitución que los particulares que, después de haber sido reconvenidos tres veces dentro del año, no hubiesen cumplido con sus obligaciones fiscales deberán satisfacer el doble de lo debido.

⁹⁴⁸*Consiliarios iudicum et cancellarios et eos, qui domesticorum funguntur officio, post depositam administrationem quinquaginta dies in provincia residere praecipimus. Pro confesso autem tenebitur, qui accusatus huiusmodi personam subtraxerit: eaque in quadruplum restitui*

días después de haber cesado en el cargo para responder por su gestión⁹⁴⁹; en caso de que el acusado hubiese huido será tenido por confeso y deberá restituir el cuádruplo de lo que hubiese robado, destinándose la mitad al Fisco y la otra mitad al ciudadano/s que hubiesen sufrido el expolio de los ayudantes de los gobernadores.

En CTh. 1.35.3 (= C. J. 1.51.8), del año 423, los emperadores Honorio y Teodosio reiteran que los ayudantes de los gobernadores provinciales <<después de haber cesado en su cargo no abandonen el cuerpo, y se exhiban a los habitantes de la provincia, para que tengan los que quieran la posibilidad de acusarlos>>⁹⁵⁰, e incluso se dispone que si hubiese una causa justificada que lo exigiere podrían estos auxiliares ser sometidos al tormento para descubrir los delitos del gobernador. En CTh. 1.34.3, del mismo año, se establece que los secretarios de los gobernadores provinciales deberán permanecer una vez concluida su administración en la provincia durante tres años consecutivos <<a fin de que sean acusados por aquellos que lo quisieren>>. Interesa mencionar otra constitución dada también en el año 423 por los mismos emperadores, dirigida al *magister militum*

iuvemus, quae desiderantur ablata, ut duplum spoliatus accipiat, duplum noster fiscus adquirat.

⁹⁴⁹ Esta reglamentación se aplicaba ya en el siglo IV: CTh. 8.15.1-8; Nov. Val. 32 pr.

Macedonio y contenida en C. J. 3.21.2, en la que se establece que el militar, después de haber dejado su cargo y habiendo vuelto a su vida privada, no podrá utilizar las excepciones del fuero si fuese demandado por razón de los cargos públicos que desempeñó mientras fue militar para que rinda cuentas de su gestión, y deberá en estos casos responder ante el tribunal militar presentando toda la información necesaria, con testigos y documentos.

En una constitución de Zenón, publicada en Constantinopla en el año 479 y contenida en C. J. 1.49: <<*Ut omnes tam civiles quam militares iudices post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant*>>⁹⁵¹, se recoge esta medida preventiva para todos los funcionarios provinciales una vez que hubiesen dejado su cargo y hubieran sido reemplazados por su sucesor en el mismo⁹⁵²: se establece en dicha ley la obligación del funcionario cesante de permanecer en la ciudad⁹⁵³ en donde ha desempeñado sus

⁹⁵⁰ ...*ut post depositam administrationem nec militiam deserant et provincialibus praesentiam sui exhibeant, quo volentibus sit accusandi eos facultas.*

⁹⁵¹ = Bas. 6.3.9.

⁹⁵² En C. J. 1.49.1.4 se dice que el funcionario relevado no cese en su administración hasta que su sucesor haya llegado a los límites de la provincia: <<*administrationem autem deponere non volumus decessorem, antequam successor ad provinciae fines pervenerit, licet litteris ad eum...>>.*

⁹⁵³ Se establece que los altos funcionarios provinciales deberán residir en la ciudad y no ocultarse sino estar a la vista de los ciudadanos.

funciones durante cincuenta días con la finalidad de poder responder, llegado el caso, a las acusaciones que le fuesen formuladas contra su administración⁹⁵⁴: <<... *quod si intra quinquaginta dierum numerum fuerit*

⁹⁵⁴Mencionamos un fragmento de Venuleyo Saturnino recogido en D. 48.2.12 pr. (Ven. Sat., 2 *de iud. pub.*) relativo al principio de inmunidad procesal de los magistrados el cual tenía una sólida observancia desde tiempos de la República: <<No se puede acusar a las siguientes personas: al legado del emperador, es decir, al gobernador de la provincia, en virtud de una sentencia que se dio <para> Léntulo, <en el 31 d. C.>, siendo cónsules <Fausto Cornelio> Sila y <Lucio Fulcinio> Trión; al que es legado <proconsular> exclusivamente respecto a los crímenes que hubiera cometido antes de entrar en su cargo; tampoco a un magistrado del Pueblo Romano o a quien se hallara en viaje oficial, siempre que no se haya ausentado por eludir la ley>>; vid. Dion Cas., 58.8.3. De dicho fragmento se desprende, siguiendo a BIANCHINI M., *La formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano, 1974, pp. 73 ss., que si el acusado desempeñaba una función pública se podía presentar válidamente contra él una acusación pública por delitos cometidos mientras estaba en el cargo, pero aún así, no podía desarrollarse el juicio hasta que hubiese cesado en el puesto a tenor de D. 48.5.39(38).10 (Pap., 36 *quaest.*). En este sentido, se dice en esta fuente que el que ostenta un cargo o servicio público puede ser ciertamente acusado por los actos ilícitos cometidos durante su gestión, pero, se dispuso por Tiberio César, que la causa fuese aplazada hasta que termine su función presentando caución de comparecer en juicio (*cautio iudicio sistendi causa*). BIANCHINI M., *La formalità...*, *op. cit.*, p. 72, pone de relieve que esta caución es una institución postclásica y que por tanto su mención en el fragmento sería un añadido posterior al texto, considerando la Autora que el resto del fragmento es seguramente genuino.

BIANCHINI M., *La formalità costitutive...*, *op. cit.*, pp. 73-74, refiere el precedente recogido en la *lex Acilia repetundarum* del año 122 a. C. (L. 8: <<*De heisce dum mag(istratum) aut imperium habebunt iudicium non fiet*>>) que prohibía el juicio respecto de los magistrados mientras estuviesen en el cargo, pero no por esto se impedía en dicha ley el ejercicio de la acusación contra ellos. En conclusión, la acusación podía ser presentada aunque no se pudiese proceder al juicio hasta que el magistrado abandonase su cargo. Así, destaca LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, *op. cit.*, pp. 78 ss., que la doctrina romanística unánimamente ha negado el procesamiento de los magistrados durante

el año en que ejercen sus funciones en virtud de lo dispuesto en D. 2.4.2 (Ulp., 5 ed.): <<No deben ser llamados a juicio ni el cónsul, ni el prefecto, ni el pretor, ni el procónsul ni los demás magistrados con imperio, que pueden castigar y meter en prisión (...)>> y en D. 4.6.26.2 (Ulp., 12 ed.): <<(…) No es lícito sin fraude citar a juicio, como al cónsul, al pretor y a los demás magistrados con imperio o potestad (...)>>. También, D. 5.1.48 (Paul., 2 resp.): <<Parte de una epístola del emperador Adriano, de consagrada memoria (en griego): durante el año que dura su poder no mantengan litigio los magistrados, demandando o defendiendo en juicio causa propia ni la de aquellos cuya tutela o curatela administran; pero tan pronto como termine su magistratura sea lícito que litiguen como demandantes o demandados>>. A este respecto, señala TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrative...*, op. cit., p. 315, que el administrador público (magistrado o funcionario imperial) gozaba “di una sorta di eccezione di improcedibilità, che gli garantiva il sereno svolgimento delle funzioni di governo”; véase también, LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, op. cit., pp. 380 ss.

Por otro lado, este Autor señala que en D. 47.10.13.6 (Ulp. 57 ed.) se fija el principio, que arranca de época republicana, según el cual los actos del magistrado en el ejercicio de sus funciones no podían ser objeto de la *actio iniuriarum* (<<*ad iniuriarum actionem non pertinent*>>) por parte de los ciudadanos. Añade LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, op. cit., p. 49, que este fragmento parece declarar que el ejercicio del cargo por parte del magistrado garantiza su inmunidad. Pero, vemos en D. 4.2.3.1 (Ulp., 11 ed.) que el pretor y la jurisprudencia se esforzaron en la elaboración de instrumentos de tutela a favor de los particulares frente a la prepotencia de los magistrados: así, Ulpiano a propósito del edicto *quod metus causa* distingue entre la actividad violenta del magistrado que aparece “*adversus bonos mores*” como fuera del Derecho y que es calificada de *vis atrox*, respecto de aquella ejercitada “*iure licito et iure honoris*” (vid. VENTURINI C., *Note in materia di concussione e di actio metus*, IURA, 45, Napoli, 1994, pp. 82 ss.). En este sentido, en D. 47.10.15.39 (Ulp., <5> 7 ed.) se afronta la cuestión de la perseguibilidad del magistrado municipal que hubiese azotado a un siervo ajeno, y de D. 47.10.32 (Ulp., 42 Sab.) resulta que ni siquiera a los magistrados les era lícito obrar *iniuriöse*, de tal manera que si hubiesen cometido *iniuria* podrían ser demandados en juicio por un particular con la *actio iniuriarum*: <<No se permite obrar injuriosamente ni siquiera a los magistrados; así, pues, si un magistrado hubiera inferido alguna injuria sea como particular, sea prevaliéndose de su condición de magistrado, se le puede demandar por injurias. Pero ¿cuando deje la magistratura o cuando todavía ejerce como magistrado?. Es más cierto que, si se trata de un magistrado que no

*forte pulsatus ... >>*⁹⁵⁵, de tal forma que en ese tiempo no se le podía dar ninguna autorización para salir de la provincia ni aunque reciba una credencial para desempeñar otro cargo administrativo o una orden del prefecto del pretorio para sustituir al gobernador de otra provincia (C. J. 1.49.1.7(3)).

Se dispone en C. J. 1.49.1.3 que si el funcionario incumple esta obligación será juzgado por crimen de lesa majestad y castigado con una multa de cincuenta libras de oro que deberá pagar al Fisco, también

puede ser citado a juicio impunemente, deberá esperarse que deje el cargo; pero si es uno de los magistrados menores, es decir, de los que no tienen imperio ni potestad, se les puede demandar incluso durante su magistratura>>.

Asimismo, considera LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, op. cit., pp. 62 ss., que los juristas romanos calificaron en general como *iniuria* el uso indebido del poder de los magistrados (*facere contra ius*); vid. Sén., *Controversiae*, 5.6; D. 47.10.15.39. Ahora bien, no siempre el mal ejercicio del poder venía considerado como *iniuria* sino que en los casos en los que la actividad del magistrado ocasionase un daño patrimonial injusto, la jurisprudencia los hacía recaer dentro del ámbito de la responsabilidad aquiliana, como sucede en D. 18.6.13(12); D. 18.6.14(13); D. 18.6.15(14) pr.. Concretamente, en D. 9.2.29.7 (Ulp., 18 ed.) se dispone que los magistrados municipales serán obligados *ex lege Aquilia* cuando en el ejercicio de sus funciones hubiesen ocasionado un *damnum* a terceros.

LICANDRO O., *In magistratu damnari...*, op. cit., p. 77, concluye señalando que la jurisprudencia romana elaboró instrumentos procesales para hacer valer por un lado, la responsabilidad penal de los magistrados en casos de mala administración y como, por otro lado, tiende a restringir su ámbito de irresponsabilidad por actos de gestión sólo en los casos en los que habiendo cometido un daño injusto la acción hubiese sido realizada verdaderamente en interés de la comunidad.

será castigado con la misma pena el funcionario que le sustituyó en el cargo siempre que no hubiese dado cuenta de su fuga o no hubiese tomado las medidas necesarias para retenerlo: <<... *licet et maiestatis reus non immerito iudicetur, attamen quinquaginta librarum auri multam publicis calculis inferre cogetur. simili poena plectendo, qui post eum administratione suscepta minime eum curaverit honeste retinendum aut super eius fuga protinus referendum*>>.

Se establece además en los números 5 y 6 de la misma ley que en caso de que el funcionario se hubiese fugado de la provincia sea conducido a la misma, en la que deberá permanecer seis meses (*per sex mensuum curricula ibidem moraturus*) para que durante ese tiempo salgan a la luz sus crímenes o hurtos (*crimina vel furta*) y se dispone también que el oficio que no le hubiese prohibido dejar la provincia será castigado con una multa de treinta libras de oro.

En el número 7 de la ley se ordena que, si hubiese sido demandado durante el plazo de cincuenta días que debe permanecer el funcionario en la provincia, y transcurrido dicho periodo no hubiese terminado el litigio planteado contra él, se le permitirá entonces abandonar la provincia siempre que habiendo sido demandado civilmente por delitos de hurto hubiese nombrado un procurador

⁹⁵⁵ Cualquier ciudadano podía promover una acusación contra el funcionario por los crímenes y robos cometidos.

especial, pero si la acusación hubiera sido por crímenes cometidos durante su cargo deberá permanecer en la provincia hasta el término de la causa.

Por último, se dispone en el número 8 que los jueces ante los que se ventilen controversias de esta naturaleza, *civiliter vel criminaliter*, deberán terminar dichos litigios en el plazo máximo de veinte días desde que los hubieren comenzado; en caso contrario, serán condenados a pagar una multa de diez libras de oro: <<*ipsos quidem decem librarum auri condemnationem subire censemus...>>.*

Justiniano recordará esta medida del emperador Zenón y regula de nuevo esta materia en Nov. 8.9 (a. 535) y en Nov. 95⁹⁵⁶ (a. 539) ya que parece, a tenor de las mismas, que seguía siendo frecuente que los funcionarios abandonasen la provincia antes de ser privados de su cargo por temor a las consecuencias derivadas de su mala gestión o por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, como se recoge en el prefacio de esta última ley: <<*invenimus autem aliquos sic existentes audaces, ut etiam hac posita lege, antequam discingerentur, praesumerent derelinquere provincias et ad hanc venire felicissimam*

⁹⁵⁶Dirigida a Juan, prefecto del pretorio de Oriente.

*civitatem, timore a se gestorum et ne iusta perferrent horum quae deliquerunt >>*⁹⁵⁷.

En Nov. 8.9⁹⁵⁸ reitera que el gobernador provincial, después de abandonar su cargo, debía permanecer cincuenta días en la provincia mostrándose a todos y respondiendo de las demandas de los provinciales, pero, si huyese antes de cumplirse este plazo sería llevado a la provincia que administraba y obligado a restituir el cuádruplo de todo lo que hubiere recibido ilegalmente.

⁹⁵⁷Sin embargo, a juzgar por la correspondencia de Símaco, no siempre se cumplía esta obligación de permanecer cincuenta días en la provincia o ciudad para responder de cualquier acusación por su gestión: en particular, citamos *ep.* 6.42, que nos refiere la presencia de Flaviano (hijo) en Campania poco después de la salida de su cargo como prefecto de la ciudad de Roma.

⁹⁵⁸Nov. 8.9: *Necessitatem habente eo, qui administrationem rexit, secundum priores constitutiones, dum deposuerit fasces, quinquaginta dies in provincia commorari, publice se monstrantem et ab omnibus suscipientem conventiones. Si tamen ante quam compleantur quinquaginta dies, fugiens capiatur velut aliquod inhonestissimorum Mancipiorum, damus licentiam collatoribus detinere eum in provincia et omne quod dederunt ei occasione furti hoc exigere, praesente tamen deo amabili episcopo et causam ex non scripto examinante, donec reddat omne quicquid furatus ostenditur. Sed etiam ipsos provinciales, si senserint administratorum furtum, licentiam habere, magis autem et necessitatem haec referre nobis, ut nos cognoscentes, quia omnino auro vendit iustitiam, predictis eum subiciamus poenis: super quod etiam caelestibus suppliciis reus erit, transcendens iusiurandum in quo accepit administrationem. Si autem valuerit ex quacumque causa non completis quinquaginta diebus ex provincia fugere, tunc comprehensus, ubicumque degere videtur, revocabitur quidem in provinciam in qua administrabat, omne vero quod inventus fuerit accepisse restituat quadruplum.*

Se dispone también en esta ley que los contribuyentes puedan denunciar al gobernador una vez que hubiera dejado el cargo por los delitos de hurto, si bien, se previene en el capítulo 10 que si, por el contrario, el gobernador hubiese mantenido “las manos limpias” (<<*qui puris usi sunt manibus*>>)⁹⁵⁹ y hubiese desempeñado escrupulosamente todo lo relacionado con la exacción de impuestos fiscales, y los ciudadanos que <<se hubieran atrevido a injuriarlos después de dejar la administración y no hubieran despedido con toda consideración a los que abandonan las provincias después del tiempo legal>> serán castigados con las penas más severas.

También en Nov. 95⁹⁶⁰, que regula el traspaso de poderes entre el funcionario cesado y su sucesor en el cargo, se ordena que el funcionario debe permanecer cincuenta días en la provincia en la que ejerció su administración mostrándose al público (*publice apparentem*) y levantar actas de todo lo que sucedió durante su cargo; en caso de que abandonase el lugar antes de los cincuenta días será enviado de nuevo

⁹⁵⁹Por lo que hace al lenguaje de la Cancillería imperial llama la atención la utilización de la expresión “manos limpias” (*puris utente manibus*), muchas veces repetida por Justiniano en la legislación dirigida a las provincias (Nov. 26.3; Nov. 102.1; Nov. 103.2).

⁹⁶⁰La Nov. 95 nos ha llegado por dos vías recogidas en la edición de R. Schoell (pp. 464 ss.). La primera está tomada de la Nov. 94 del *Authenticum*, cuya rúbrica se titula: <<*De administratoribus*>>, y es la recogida en la edición de García del Corral. La segunda versión aparece con el título: <<*Ut praesides quinquaginta dies post magistratum depositum in provinciis commoretur, sive militarem sive civilem magistratum gerant*>>.

a la provincia y juzgado por crimen de lesa majestad así como por los demás delitos que haya podido cometer durante el ejercicio de su función (vid. Nov. 8.1)⁹⁶¹.

También se añade en Nov. 128.23⁹⁶² (a. 545) que los provinciales que hayan sufrido algún daño por culpa del gobernador deben presentarse ante el obispo de la ciudad y que, levantándose actas, manifiesten con la mano puesta en los Evangelios los daños que el gobernador les causó. Dichos provinciales serán resarcidos con los

⁹⁶¹ Nov. 95.1 pr.: *Sancimus igitur nulli penitus licentiam esse cuiuscumque provinciae iudici et orientalium et occidentalium et ex utroque, eam relinquere antequam deponat cingulum, sed etiam postea (renovamus enim vetustatem) quinquaginta commorari dies publice apparentem in provincia in qua administravit, gesta quoque monumentorum conficere, secundum quae advenit provinciae, ut sit palam sive fiduciam habet in suis actibus sive etiam non; (1): Si quis autem administrationem administrans aliquam militarem vel civilem aut etiam remotus ab ea relinquat provinciam, administrans quidem adhuc eam dum relinquit citra nostram iussionem, ipse quidem maiestatis reus sit. in provincia vero denuo destinatus postquam accusantibus satisfecerit, tunc maiestatis novissimas sustineat poenas. Si vero deponeus cingulum deinde non moretur legitimos dies publice cunctis semet ipsum ostendens et fugiat de provincia, quae dudum a nobis de hoc sancita sunt valere.*

⁹⁶² Nov. 128.23: *Super haec sancimus provinciarum iudices omnibus modis post depositionem cinguli quinquaginta dies in provinciis commorari et conventiones aliquas contra se moventibus respondere. Si vero contigerit aliquem ex eis ante completos quinquaginta dies deserere provinciam, iubemus omnes ab eo damnum aliquod passos simul ingredi apud sanctissimum metropoleos episcopum eiusdem provinciae, et sub gestis monumentorum unumquemque tangentem sancta evangelia palam facere illata sibi dispendia, et ex illius substantia contra quem talia facta sunt monumenta omne damnum laesis restituere, providentia et periculo per tempus praefectorum et tractearum eiusdem provinciae; scientibus quia, si hoc complere neglexerint; ipsi ex propriis facultatibus omnia damna laesis restituere.*

bienes del gobernador bajo la responsabilidad de los que sean prefectos de la misma provincia, y en caso de que estos últimos hubiesen desatendido esta norma serán compelidos a indemnizar con sus propios bienes a los perjudicados⁹⁶³. Además, se establece en Nov. 128.24⁹⁶⁴ que si el gobernador es llamado a otra administración o destinado a otra provincia deberá nombrar un representante legal (*procurator*) que responda frente a quienes hayan presentado una demanda *pro damnis*; en caso de que el gobernador no cumpliera esta norma se dispone que <<se levanten actas (...) ante el santísimo obispo>> y que se indemnice a los particulares que hagan una declaración jurada de los daños sufridos a tenor de lo consignado en el acta⁹⁶⁵.

La obligación de los gobernadores de permanecer cincuenta días en la provincia una vez hayan cesado en la magistratura se recoge también en Nov. 161.1 (<<*De praesidibus*>>)⁹⁶⁶, tercera Novela del

⁹⁶³ También en Bas. VI.3.11.

⁹⁶⁴ Nov. 128.24: *Si quis autem ex iudicibus provinciarum aut evocetur ad aliam administrationem aut opus ad aliam provinciam ei credatur, iubemus eum legitimo procuratore constituto conventiones pro damnis proponentibus respondere. Quod nisi fecerit, sancimus monumenta apud sanctissimum episcopum, sicut superius dictum est agi, et pro damnis illatis eis iurantibus secundum gestorum virtutem omne damnum reddi, providentia similiter et periculo per tempus praefectorum et uniuscuiusque provinciae tractearunt.*

⁹⁶⁵ También en Bas. VI.3.14.

⁹⁶⁶ Nov. 161.1: *Nos autem leges de his latas renovantes sancimus, ut magistratum gerant illi qui ex bona existimatione spectati sunt ac plurimam in iustitia exercenda curam collocarunt, sine donis*

emperador Tiberio II (578-582), en donde se dice que <<los que cesen (...) respóndanles a los que quieran ejercitar acción>>. La ley también establece que si el litigio no hubiese terminado dentro de los cincuenta días el gobernador provincial podrá ausentarse de la provincia y nombrar un procurador que le represente en juicio si el procedimiento se desarrollase por la vía civil (*civiliter agere*) mientras que si el procedimiento sigue la vía criminal (*criminaliter agere*) el gobernador debería permanecer en la provincia hasta el fin de la causa. Se establece también que si los jueces no hubiesen terminado dentro de los veinte días siguientes al comienzo del litigio serán castigados con una multa de diez libras de oro. Además, se contempla en dicha ley que en

autem et largitione omni magistratus suscipiant, neve vero ipsi aut assessores eorum aut cancellarii aut domestici aut ullus ex iis qui ad eos pertinent quidquam auferant a subiectis, nisi in quadruplum (ut leges loquuntur) quod ab ipsis acceptum est solvere velint, sed contenti sint iis quae ex fisco et lege ipsis deputata sunt. Deinde magistratu abituri per legitimos quinquaginta dies nondum finite sit, si quidem pecuniaria sit, procuratorem dent, sin autem criminalis, usque ad terminum causae maneant; iudices autem, sive magistratus sint sive a praefectis dati, nisi intra viginti dies a lite coepta eam terminaverint, decem auri libris multentur, cum lis secundum ea quae modo dicta sunt procedat. Si qui enim ex illis mala conscientia agitate clam aufugerint et ad sacras aedes accurrerint, substantia sua exuentur, quae inter eos qui iniuria affecti sunt, secundum legem et iniuriarum modum dividatur, quemadmodum acta de ea reedita etiam ex una parte, secundum id quod pridem sancitum est demonstrent. Quae pro subiectis introducta sunt firma maneant: maneantque nimirum firma etiam reliqua quae utilitatem subiectorum de praesidibus bene ab imperatore sancita sunt. Quemadmodum autem eos qui ita peccant punimus, ita peccant punimus, ita eos quoque qui quid per hanc causam ex rebus prohibitis ab iis accipiunt quadrupli restitutioni subicimus.

caso de huida clandestina del gobernador se ejecute su patrimonio y que sus bienes sean repartidos entre aquellos ciudadanos cuyos intereses fueron lesionados por la actuación del aquél.

En todo caso, si pasado el plazo de cincuenta días se presentase alguna queja contra el funcionario por su administración, éste quedaba siempre sujeto a la persecución judicial sin que en la legislación de época postclásica hubiese reglas de prescripción al respecto; un ejemplo de ello podemos verlo en el caso de *Orfitus*, suegro de Símaco, acusado de *peculatus* por un panadero seis años después de su salida del cargo de *praefectus urbi*. *Orfitus* tuvo que exiliarse y sufrió la confiscación de todos sus bienes (Amian. Marcel., 27.7.3: <<*qui nactus copiam principis, Orfitum ex praefecto urbis solutum exsilio, patrimonii redintegrata iactura, remitti fecit in lares*>>)⁹⁶⁷. El asunto siguió

PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. 1. Problemi di diritto pubblico*, op. cit., pp. 159-161.

⁹⁶⁷ LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi...*, op. cit., pp. 423-424.

CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine...*, op. cit., pp. 178-182; ID., *Un scandale du vin a Rome sous le bas-empire, L'affaire du préfet Orfitus*, en *Annales ESC*, 5, Paris, 1950, pp. 166 ss., nos refiere el “affaire *Orfitus*” que por su interés en relación con la responsabilidad de los funcionarios pasamos a relatar. Dicho asunto tuvo lugar en época del emperador Constancio, durante la prefectura urbana de *Orfitus*, cuando se tuvo conocimiento de una salida de fondos del *arca vinaria* (CHASTAGNOL, *La préfecture...*, op. cit., p. 183, considera que el *arca vinaria* como las otras dos cajas annonarias debían ser cajas anexas al Fisco) sin justificar, e interrogado *Orfitus* al respecto, se defendió alegando en primer término que las sumas sacadas de la caja se

destinaron a trabajos públicos (así se explica el hecho de que el *officium* urbano restituyese al Fisco lo que se sacó del *arca vinaria*); entonces, Constancio señaló por medio de un rescripto que el prefecto en funciones, tenido por principal responsable, debía hacer reembolsar la deuda o hacerlo él mismo a cargo de su patrimonio. *Orfitus* recibió una *comminatio sub conditione* -orden de reembolso dirigida por decreto imperial con amenaza de sanción-. Al mismo tiempo, el rescripto de Constancio reconocía una parte responsabilidad en la oficina del prefecto (*officium urbanum*) que también fue amenazada de castigo si la suma no era reembolsada (Sím., *ep.*, 9.130; 10.34.1).

Por otro lado, a finales del reinado de Constancio, bajo la prefectura de *Tertullus* (360-361), se percibe de nuevo que falta una suma considerable del *arca vinaria*. En aplicación de las decisiones imperiales contenidas en el rescripto de Constancio, *Tertullus* recibió también una orden de reembolso, pero, lo cierto es que la deuda se remontaba en realidad a los prefectos anteriores; como resultado de la investigación, este prefecto no fue considerado culpable pero se estableció que él mismo debía investigar lo sucedido y si resultase que la culpa recaía sobre alguno de sus predecesores debía forzarlos a devolver la suma adeudada, la cual no fue restituida durante la prefectura de *Tertullus*, transmitiéndose entonces la orden de reembolso a los prefectos posteriores, bajo los reinados de Juliano y Valentiniano I, el cual confía la investigación a los prefectos correspondientes asistidos de inspectores (*discussores*) (Sím., *ep.*, 10.34.5-6).

Posteriormente *Orfitus*, fue acusado también de *peculatus* por el panadero *Terentius* (Amian., 27.3.2) recibiendo como consecuencia de dicha acusación una nueva orden de reembolso (Sím., *ep.*, 10.34.8) y siendo exilado y castigado con la confiscación de sus bienes (Amian., 27.7.3).

Es en esta época, cuando Valentiniano I publica dos leyes que contienen decisiones que parecen tener relación con este asunto: la ley de 6 agosto de 365 (CTh. 14.6.3), dirigida al prefecto de la ciudad, *Volusianus-Lampadius*, sobre las corporaciones respectivas de trabajadores de la cal y de los cocheros, en virtud de la cual el príncipe decide aligerar las cargas que pesaban sobre el *arca vinaria* y que ésta sólo proporcionase un cuarto del salario de las dos corporaciones; también prohíbe al prefecto y a su “buró” participar en los trabajos de los encargados de la cal, probablemente para impedir que se apropiasen de sumas tomadas del *arca* bajo el pretexto de que habían ejecutado o dirigido los trabajos; asimismo, el emperador prohíbe construir edificios públicos nuevos en Roma sin su orden expresa de tal manera que los prefectos sólo vigilarían los trabajos de poca importancia

y no podrían intentar justificar así las sumas sacadas de la caja de distribuciones de vino (recordemos que *Orfitus* decía que las sumas que salieron de dicha caja fueron destinadas a la realización de trabajos públicos). La segunda ley, de octubre de 367, dirigida al prefecto urbano Pretextato, se refería a los *suarii* (carniceros): respecto de estos también fueron aligeradas sensiblemente las cargas que pesaban sobre el *arca* (CTh. 14.4.4).

Pasado un tiempo, *Orfitus* fue llamado del exilio gracias a la influencia del prefecto del pretorio de Italia, *Vulcacius Rufinus*; el asunto se tapó por dos nuevos decretos y *Orfitus* llevó una existencia tranquila hasta su muerte en 369. Pero el caso *Orfitus* no fue enterrado del todo ya que Graciano se ocupó de él al final de su reinado, en el 383, confiando la investigación a dos inspectores. Graciano da su opinión en un rescripto insistiendo en la responsabilidad solidaria del prefecto y su *officium* y obligando a los tesoreros del mismo (*primiscrinii*) a rendir cuentas o a pagar la deuda (Sím., ep., 10.34.6).

Posteriormente, fue llevada a cabo una investigación por el prefecto *Bassus* (382-383) y por su sucesor *Aventius* (384). Estos prefectos demostraron en sus investigaciones, apoyándose en las conclusiones de los inspectores (*discussores*), que efectivamente una parte de la deuda había sido reembolsada no al *arca vinaria* sino al *aerarium*: 11.446 sólidos habían sido ingresados en el Tesoro de Roma desde el año 351. En este año se hizo el último inventario del Fisco antes de la apertura del “*affaire*” y se decide que lo que queda por pagar de la deuda se haga a cargo de los prefectos y de los funcionarios responsables y se subraya la culpabilidad probable del *officium*.

A finales de 384 Símaco reemplaza a *Aventius* en la prefectura urbana y cual es su sorpresa cuando recibe un rescripto del emperador Valentiniano II, hermano de Graciano, concerniente al asunto *Orfitus*. El emperador decide que el reembolso de la deuda debía ser hecho por el prefecto en funciones en el momento del delito, es decir, por el propio *Orfitus* que –como sabemos– había fallecido ya en 369, por lo que la suma fue reclamada a sus dos hijas, que fueron citadas ante el tribunal del *magister officiorum*. La hija menor (*Rusticiana*) estaba casada con Símaco (Sím., 9.150.1-2-3; 10.34.2-4,7,11-12). Este último, escribió al emperador dos cartas insistiendo sobre la injusticia de este hecho. Según alegaba Símaco, su suegro fue un excelente funcionario del Imperio que no se había enriquecido en el ejercicio de sus funciones y que había brillado más por los honores que por la riqueza; además, resultaba que la mayor parte de la suma en cuestión ya había sido reembolsada, por lo que para Símaco el emperador cometía una injusticia exigiendo a las herederas el reembolso de toda la deuda, y

examinándose después de la muerte de *Orfitus* de tal manera que la acusación se dirigió entonces contra los herederos del ex-prefecto y ello a pesar de haber transcurrido veintiséis años desde que aquél cesó en el cargo⁹⁶⁸.

añade que, en cuanto a lo que queda por pagar, es al *officium* del prefecto al que hay que reclamarlo. Símaco considera a éste culpable evocando al respecto la decisión de los emperadores y las declaraciones de los gobernadores de provincia y muestra a este propósito como el *officium* urbano juega un papel efectivo por su existencia permanente ya que los mismos burócratas de la oficina asistían a los prefectos sucesivos, mientras que los prefectos eran nombrados para desempeñar sus funciones por poco tiempo. Símaco insinúa que los *apparitores* (y sobre todo el *primiscrinus*) tomaron del *arca vinaria* el dinero que ellos necesitaban y que luego lo volvían a ingresar en el Fisco sin advertir a nadie. Símaco, en la carta al emperador, supone que todo esto es debido a enemigos personales suyos que le enemistaron a su vez con el emperador.

No sabemos si las herederas (e indirectamente Símaco) tuvieron que pagar la suma adeudada, si bien, a raíz del asunto *Orfitus*, se responsabilizará a la oficina del prefecto urbano en caso de que falte dinero en la caja: CTh. 12.6.26 (a. 400); Sím., *ep.* 7.96.3. Así, la responsabilidad del prefecto urbano respecto del *arca vinaria* será compartida con su oficio, si bien, podemos constatar que la opinión de los emperadores había ido variando sobre este punto: Constancio y Graciano consideraban al prefecto y a su *officium* responsables solidarios mientras que Valentiniano II hizo recaer la responsabilidad únicamente sobre el prefecto. De todas formas, la carga del prefecto resultaba en todo caso más gravosa que la del *officium* ya que incumbía a aquél controlar de cerca la actividad de sus *apparitores*.

Podemos añadir que LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi...*, *op. cit.*, p. 423, nt. 352, se hace la pregunta de si *Orfitus* fue, como parece, plenamente rehabilitado en el 365, cómo es posible que después -en el 384- fuese abierto un proceso penal contra sus herederos. La Autora considera que “*doveva dunque trattarsi di due processi diversi*”. Sobre el asunto *Orfitus* véase recientemente, MALAVÉ OSUNA B., *Régimen jurídico financiero de las obras públicas...*, *op. cit.*, pp. 176 ss.

⁹⁶⁸Símaco, *ep.* 9.150; *rel.* 34.

Igualmente el plazo de cincuenta días que se impone al gobernador a fin de que responda judicialmente ante posibles reclamaciones de los provinciales se recoge en obras bizantinas posteriores como son la *Eisagoge* del patriarca Focio (7.6.i)⁹⁶⁹ o los *Basílicos* (VI.3.8).

2. RECEPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DE DERECHO ROMANO EN ESTA MATERIA EN EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL: EL JUICIO DE RESIDENCIA EN LAS PARTIDAS DE ALFONSO X EL SABIO.

Esta fuente literaria nos refiere la verdadera normativa que se aplicaría en esta materia en la Administración de época postclásica. Por el contrario, en D. 48.13.7(6) (Ven. Sat., 2 *iudic. public.*) los compiladores de Justiniano vinieron a recoger el régimen jurídico de época clásica que establecía el plazo de prescripción de cinco años para el crimen de *peculatus*. Así, en dicho fragmento Venuleyo Saturnino (s. II d. C.) se dice: <<*peculatus crimen ante quinquenium admissum obiici non oportet*>>.

⁹⁶⁹<<Mandamos, además, que los gobernadores de las provincias, después de abandonar su cargo, permanezcan bajo cualquier circunstancia cincuenta días en sus provincias, y respondan ante los que quieren ejercitar una acción contra ellos>> (trad. esp., SIGNES J. y ANDRÉS SANTOS F. J., *La introducción al Derecho (Eisagoge)*..., *op. cit.*, p. 305).

Señala GARCÍA MARÍN⁹⁷⁰ respecto del control de los funcionarios regios en el reino de Castilla en la Baja Edad Media que, una vez abandonaban su cargo, estaban obligados a rendir cuentas de su actuación para someterse a la responsabilidad que en su caso les correspondiese. Por esta razón debían permanecer durante un tiempo determinado en el lugar en el que habían desempeñado su cargo - recordamos que entre los deberes del “funcionario” se recoge en las Partidas (III.4.7) la obligación de residir en el lugar en donde han llevado a cabo su función - para responder de todas las quejas y reclamaciones que se suscitasen respecto de su gestión.

Como ha señalado la generalidad de la doctrina este mecanismo de control, *post officio dimisso*, es recogido en las Partidas por influencia del Derecho Romano⁹⁷¹; concretamente en la Ley III.4.6 se contiene la

⁹⁷⁰GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, *op. cit.*, p. 317.

⁹⁷¹Por lo que hace a la obligación de permanecer en el lugar en el que administraron justicia -como hemos visto anteriormente- ya se recogía en C. J. 1.49 en donde se establecía que ningún funcionario podía abandonar el lugar en el que desempeñó su cargo hasta que pasasen los cincuenta días prescritos, debiendo residir públicamente y presentándose en los lugares más conocidos para facilitar de esta manera que los ciudadanos pudiesen promover querellas por los hurtos o crímenes que hubiesen cometido los gobernadores y oficiales públicos que cesaban en sus cargos. Esta norma sería completada posteriormente por las Novelas 8.9; 95.1; 128.23-24 de Justiniano; y por la Novela 161.1 de Tiberio II (<<*De praesidibus*>>).

Como señaló GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia*, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 152, Madrid, 1963, pp. 213-214, la Partida III que recoge este procedimiento judicial parece que fue obra del jurista

norma romana que regula el deber de los jueces de permanecer durante cincuenta días en el lugar en el que desempeñaron el cargo:

<<... E despues que los Juezes ovieren assí jurado, dévenles tomar fiadores, e recabdo, que se obliguen, e prometan, que quando acabaren el su tiempo de judgar, e ovieren a dexar los oficios en que eran puestos, que ellos por su persona finquen cincuentas dias despues, en los logares sobre que judgaren, por fazer derecho a todos aquellos, que dellos oviessen recibido tuerto...>>.

Así, el llamado a partir de las Cortes de Madrid de 1419 <<juicio de residencia>>⁹⁷² aparece regulado en tres leyes de Partidas: P. III.4.6; P. III.5.12; P. III.16.1.

En la Ley III. 4. 6 se dispone en primer lugar que los jueces antes de ser investidos en el cargo que van a ocupar están obligados a prestar

Jacobo, apodado “el de las Leyes”, de época de Alfonso X el Sabio, oriundo posiblemente de Italia y buen conocedor del Derecho Romano. Sobre este autor: PÉREZ MARTÍN, A., *La obra jurídica de Jacobo de las Leyes: Las flores del derecho*, en *Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale*, 22, Paris, 1998-1999, pp. 247-270.

⁹⁷²GONZÁLEZ ALONSO B., *El juicio de residencia en Castilla. I: Origen y evolución hasta 1480*, A.H.D.E., 48, Madrid, 1978, pp. 193 ss.; COLLANTES DE TERÁN M. J., *El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina jurídica de la Edad Moderna*, en *Historia, Instituciones, Documentos*, n. 25, Sevilla, 1998, pp. 151 ss.

juramento⁹⁷³ de que cumplirán fielmente sus obligaciones; establece a continuación que los jueces una vez hayan jurado deberán tomar fiadores⁹⁷⁴ que garanticen su presencia durante los cincuenta días que aquellos deben permanecer en el lugar donde hubiesen desempeñado su oficio para que respondan a las reclamaciones que contra ellos se formulen y hagan frente a las responsabilidades derivadas de sus actos. El juicio de residencia se practicará por el juez que sucede en el oficio al residenciado⁹⁷⁵.

⁹⁷³LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., p. 115.

En P. II.9.26 se regula de forma general la fórmula del juramento, el cual debía hacerse sobre los Evangelios ante el rey o, en caso de que el monarca no estuviese presente, el juramento debía realizarse ante la persona por él designada. Esta fórmula del juramento nos recuerda a la exigida a los funcionarios en el Derecho Romano postclásico y justiniano (vid. *supra* pp. 346-347).

A este respecto, GREGORIO LÓPEZ (gl. 5 y 6 a P. II.9.26) opinaba que los oficiales que hubiesen accedido al cargo sin prestar juramento debían ser expulsados y castigados: <<*Quid si intrarent officium, non praestito isto juramento? Dic quod sunt expellendi, et puniendi, quia malo ordine intraverunt ... neque possunt esse in canonica possessione officii...*>> (GREGORIO LÓPEZ, *Código de las Siete Partidas. Los Códigos españoles*. Imprenta La Publicidad, Madrid, 1848).

⁹⁷⁴En caso de que no prestase fianza no se procedía a la investidura del oficial.

⁹⁷⁵Respecto del procedimiento judicial vemos que en P. III.5.12 se dice que el juez tiene que defenderse por sí mismo, debiendo de estar presente en el lugar donde ejerció su cargo, y no por medio de "personero" o representante: <<... *el por si mismo se deve defender, e responder en juyzio, e non puede dar personero, por si, a las demandas que le fizieren, mientras el tiempo de cincuenta dias durare*>>. No obstante, podemos señalar –como vimos anteriormente– que en Nov.

Esta regla procedente del Derecho Romano pasó al Derecho Común siendo recogida en el siglo XIV por BALDO DE UBALDIS de la siguiente forma: <<*debet successor sindicari precesorem suum*>>⁹⁷⁶.

Como señaló GARCÍA DE VALDEAVELLANO⁹⁷⁷, la influencia del Derecho Romano en esta materia fue recibida en primer lugar en Italia en donde se elaboró y aplicó a lo largo del siglo XIII un procedimiento llamado <<*Syndicatus*>> o <<*Sindacato*>>⁹⁷⁸ por el que todos los oficiales públicos debían permanecer generalmente cincuenta días para responder ante el *magister iusticiarius* de posibles acusaciones formuladas por los ciudadanos. Como hemos visto, el plazo de cincuenta días fue recogido también en las Partidas para la <<residencia>> y se adoptó asimismo para el procedimiento medieval

128.24 (a. 545) se establecía la posibilidad de que el *praeses provinciae* en caso de ser llamado a otra administración pudiese responder a quienes le demandasen designando para ello un procurador o representante. En P. III.16.1 se permite la presencia en el juicio, en calidad de testigos, de los oficiales subordinados y colaboradores del juez: <<... e deven ser costreñidos de aduzir en juyzio los oficiales, e los otros omes que bivieron con ellos en aquellos officios...>>.

⁹⁷⁶ Veáse también LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., pp. 111 ss., 188.

⁹⁷⁷ GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia...*, op. cit., pp. 221, 225-228.

⁹⁷⁸ El <<sindacato>> se reguló por primera vez en el reino de Sicilia en el año 1231 bajo el reinado de Federico II de Suabia, pariente de Alfonso X el Sabio. Sobre la figura del <<sindacato>> escribieron numeros autores italianos de los siglos XIV y XV, entre los que se encuentra BALDO DE UBALDIS cuyos escritos gozaron en Castilla de

llamado <<purga de taula>>⁹⁷⁹. El plazo legal de residencia seguirá siendo en el siglo XV de cincuenta días, sobre el que insisten las Cortes de Madrid de 1419, las de 1435 y las de Toledo de 1436, hasta que los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480 optaron definitivamente por fijar el plazo de treinta días.

Aunque el juicio de residencia se recoge por primera vez en las Partidas no quedará instituido legalmente en Castilla hasta el Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348. En el título XXXII de la ley 44 de dicho Ordenamiento se plasma casi literalmente lo recogido en el texto alfonsino:

<<... E despues que los juezes oviesen asi jurado, devenles tomar fiadores... que se obligen e prometan que quando acabaren el su tiempo de judgar, e ovieren de dejar los oficios en que eran puestos, que ellos por si, o por sus personeros, finquen despues

una gran autoridad: <<*Tractatus singularis in materia syndicatus*>>, en *Tractatus de Syndicatu variorum authorum*, ed. Venetiis, 1561.

⁹⁷⁹LALINDE ABADÍA J., *La purga de taula*, en Homenaje a J. Vicens Vives, Barcelona, 1965, pp. 499-523. La <<Purga de Taula>>, institución surgida en los siglos XII-XIII en la Corona de Aragón, similar al juicio de residencia castellano, estaba destinada a garantizar una buena administración, exigiendo a los funcionarios responsabilidad por los actos cometidos en el ejercicio de su cargo.

*cinquenta dias en los lugares donde judgaren a cumplir de
derecho a los querellosos...>>⁹⁸⁰.*

⁹⁸⁰ Añadimos que el juicio de residencia perduró en el Derecho histórico español hasta la Constitución de 1812.

Acerca del juicio de residencia en el Derecho indiano: CONTRERAS R., *Sobre el juicio de residencia del virrey del Perú Agustín de Jáuregui (1780-1784)*, en Cuadernos de Historia Moderna, n. 12, Madrid, 1991, pp. 183 ss.; ALVARADO PLANAS J., *Control y*

C) CUESTIONES DE RESPONSABILIDAD RELATIVAS AL TRASPASO DE PODERES A LOS SUCESTORES EN EL CARGO.

Referimos en este apartado diversas normas contenidas en la legislación de Justiniano relativas a esta materia: así, se establece en Nov. 95.1.2 respecto de los *administratores* de una provincia que <<no se retrasen morosamente en el viaje sino que se dirijan rápidamente a la administración que recibieron (<<...*ipsos autem aut morose iter agere... sed velociter ad administrationem ire cuius regimina susceperunt...>>*) a fin de que ciertamente no sean unos removidos y otros no se hallen allí, y la provincia permanezca sin juez>>; se dispone también que solamente dos días antes de que lleguen a la provincia envíen una epístola amistosa (*amicabilem epistolam*) a su antecesor pidiéndole que le mande oficiales a su encuentro⁹⁸¹. Además, se dispone que el nuevo

responsabilidad en la España del siglo XIX: el juicio de residencia del gobernador general de Ultramar, Madrid, 2010.

⁹⁸¹ En este caso el nuevo gobernador debía anunciar a los provinciales su llegada por un edicto (D. 1.16.4.3); y en C. J. 1.40.13 se establece que no se hagan decretos (decisiones de la curia) para

administrator recibirá sus emolumentos no desde el momento en que recibió su credencial de nombramiento sino desde que llegó a la provincia; hasta entonces -establece Justiniano- ``recíbalos el que está en funciones y no ningún otro`` (<<*qui in rebus exstitit ea percipere et alium nullum omnium ...>>*).

Termina el capítulo 1 de esta Novela recordando que el funcionario dejará el cargo solamente dos días antes de que su sucesor entre en la provincia: <<*dum successor accesserit in provinciam, ante duos solum dies quam provinciam ille ingrediatur*>>. Y en este sentido vemos que ya en D. 48.4.2⁹⁸² (Ulp., 8 *disput.*) se afirmaba que comete *crimen maiestatis* el funcionario <<que no deja su cargo de gobierno de la provincia cuando se le hubiese dado sucesor>>⁹⁸³.

En relación con este tema se planteaban también algunos problemas en el traspaso de poderes entre el funcionario cesante y el nuevo funcionario. Podemos encontrar diferentes normas al respecto como la contenida en Nov. 134.6 (a. 556) en la que Justiniano ordena que si algún *iudex* (gobernador provincial) recibe una orden por escrito

felicitar a los gobernadores y sólo un día antes de entrar en la provincia expídase un edicto anunciándolo a los provinciales.

⁹⁸²DE CASTRO-CAMERO R., *El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 2000, p. 42.

⁹⁸³...*quive de provincia, quum ei successum esset, non discessit...*

del emperador y resulta que después cesa en el cargo, el sucesor deberá cumplirla como si a él hubiese sido dirigido el rescripto si se trata de un asunto de Derecho privado; si por el contrario, la orden se refiere a una materia de Derecho público deberá antes de ejecutarla comprobar que el Fisco no va a ser lesionado ya que si esto es así deberá ponerlo en conocimiento del emperador para que se expida una segunda orden sobre ese tema. También se establece en esta ley que el sucesor del *iudex* deberá cumplir las órdenes o mandatos dados por éste antes de que fuese separado del cargo y siempre que no fuesen contrarios a la ley o al interés público, en cuyo caso se tendrán por no escritos.

También podemos referir otras fuentes recogidas en el Digesto que contienen normas relativas a la sucesión de un magistrado en materia jurisdiccional: así, en D.1.18.17 (Cels., 3 *dig.*) se establece que <<si el gobernador provincial hubiese manumitido, o dado tutor, antes que hubiere sabido que había llegado su sucesor, serán válidos estos actos>>. Además en D. 2.1.13.1 Ulpiano (51 *Sab.*) nos dice: <<el magistrado o aquél que tenga alguna potestad, como el Procónsul, o el Pretor, u otros que gobiernan provincias no pueden autorizar un juicio para cuando vuelvan a ser personas privadas>>.

**D) REFERENCIA A LA PROTECCIÓN DE LOS PRIVILEGIOS
DE LOS FUNCIONARIOS A LA SALIDA DEL CARGO.
ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD.**

Los funcionarios disfrutaban de diversos privilegios y exenciones que disfrutaban después de su retiro (*post depositam administrationem privilegiis*)⁹⁸⁴: en CTh. 6.35.8 (a. 369) se dice que el funcionario palatino una vez retirado debe gozar de <<*plena tranquillitas*>> y de <<*quies inlibata*>> (intacto reposo), y en CTh. 6.35.11 (a. 381) se dice que los *senes debiles* que hayan servido *in sacro palatio* merecen la inmunidad y el derecho a que les dejen en paz⁹⁸⁵. La misma idea del descanso y la tranquilidad aparece en otras constituciones referidas a los militares como es el caso de CTh. 7.20.2 (a. 320)⁹⁸⁶: <<*et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruatur*>>.

⁹⁸⁴ Otra expresión que hace referencia al final de la carrera en la Administración es <<*ad calcem terminumque militiae pervenerint*>> (llegar al fin y al término de su empleo): CTh. 6.30.20 (a. 413) = C. J. 12.23(24).10.

⁹⁸⁵ DALLA D., *Ricerche...*, *op. cit.*, p. 106.

⁹⁸⁶ Reproducida parcialmente en C. J. 12.36 (37).1. DALLA D., *Ricerche...*, *op. cit.*, p. 106.

Sobre los privilegios de los funcionarios después de haber cesado en su administración mencionamos también: CTh. 6.35.1= C. J. 12.29(30).1, a. 314 (palatinos); CTh. 6.17.1= C. J. 12.14.1, a. 413⁹⁸⁷ (condes de las provincias); CTh. 6.16.1= C. J. 12.13.1, a. 413⁹⁸⁸ (*archiatri sacri palatii*); CTh. 6.21.1= C. J. 12.15.1, a. 425 (profesores públicos)⁹⁸⁹; CTh. 6.23.1= C. J. 12.16.1⁹⁹⁰, a. 415 (decuriones y silenciarios); C. J. 12.19.9, emp. León⁹⁹¹ (*officium* de los *sacra scrinia*); C. J. 2.7.13, a. 468⁹⁹² (*advocatus fisci*).

⁹⁸⁷Si hubiesen terminado su carrera como condes de primer orden gozarán de los mismos privilegios que los vicarios.

⁹⁸⁸Los médicos que ejercen dentro del palacio, si alcanzan el grado de condes de primer orden, serán comprendidos entre los vicarios.

⁹⁸⁹Se concede a los profesores públicos que durante veinte años hubiesen desempeñado eficaz y honestamente su profesión la misma dignidad que los ex-vicarios.

⁹⁹⁰Se les concede la posibilidad de optar entre la dignidad de *ex-magister officiorum* o entre la de *comes domesticorum*.

⁹⁹¹En esta constitución, del año 466, el emperador León I establece que los empleados de los *sacra scrinia* a los que se les ha concedido licencia para ausentarse durante un tiempo determinado gozarán de la exención tanto de los cargos públicos como de los civiles y quedarán también liberados del deber de alojamiento en las casas que tengan en las provincias. Se dispone asimismo que estos funcionarios gozarán de las exenciones también *post completam militiam*.

⁹⁹²El emperador León concede a los *advocati fisci* que han ejercido en los tribunales del *praefectus Augustalis* y del *Dux Aegyptiaci limitis* todos los privilegios que disfrutaron durante el ejercicio de su cargo y también el rango de ex -cónsules de una provincia. AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci...*, op. cit., p. 116; SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone...*, op. cit., pp. 333 ss.

De esta manera, se establecen diversas exenciones fiscales a favor de dichos funcionarios licenciados y se les libera de otras cargas (*munera*) como resulta, por ejemplo, de las siguientes fuentes: en CTh. 6.10.1 pr. (a. 380) = C. J. 12.7.1, se dice respecto de los *notarii* que <<si alguna vez los individuos de esta corporación cambian su trabajo por el descanso o cesan en él por senectud (...) asuman el provecho de la siguiente distinción honorífica. Y si algún temerario oficial los molestore para el pago de censos, o para revisiones, igualas, u otra cualquier cosa, sepa su oficio <prefecto del pretorio> que descubierta la ofensa aún de culpa leve, habrá de ser castigado con una cuantiosa multa, y la expulsión del autor de tal injuria>>. Como vemos se castiga al funcionario no sólo por una conducta dolosa sino también por su falta de diligencia.

Asimismo, en C. J. 12.5.2 los emperadores Teodosio y Valentiniano (a. 428) castigan al gobernador provincial y a sus alguaciles

Junto a dichos privilegios mencionamos también aquí la prohibición de litigar contra el Fisco que desde antiguo afecta a los *advocati fisci* una vez han abandonado el cargo; Calístrato (*Fragm. de iure fisci*, 2.16-17) refiere que estos funcionarios serán tachados con la nota de infamia si actúan contra el Fisco del que habían obtenido un salario: <<*Advocati fisci etiam post depositum officium contra fiscum, a quo salarium acceperunt, nisi in sua parentum filiorum pupillorumve suorum causa libertorum etiam, adesse prohibentur, et si adfuerint, infamia plectentur ...*>>; este principio se recoge también en D. 3.1.10, D. 3.1.11 y C. J. 2.9.2 (a. 254). Por otro lado, se establece que el *advocatus fisci* no podía ejercer la abogacía una vez que hubiese cesado en el ejercicio de su cargo tal y como se establece en C. J. 2.7.8 (a. 440), C. J. 2.7.13 (a. 468), C. J. 2.7.24(5) pr. (a. 517). AGUDO RUIZ A., *El advocatus fisci...*, *op. cit.*, pp. 129-133.

con una multa de diez libras de oro si no respetan las exenciones concedidas por el emperador a los *cubicularii* (ayudas de cámara) una vez que abandonaron su servicio; y en C. J. 12.16.3 (a. 432) imponen una multa de diez libras de oro al gobernador provincial y a su oficio si hubiesen molestado a los silenciarios con alguna contribución o carga de las que estaban exentos no sólo durante el desempeño de sus funciones sino también después de su retiro; igualmente en C. J. 12.9.1 (a. 444) conceden a los *magistri sacrarum scriniorum* que sigan gozando de la exención de impuestos también después de haber dejado su cargo (*post depositum etiam officium*), y en caso de que esto no se cumpla por el oficio del prefecto del pretorio, el mismo será castigado con una multa de cincuenta libras de oro; también en C. J. 1.51.11 (a. 444) los mismos emperadores castigan con una multa de cincuenta libras de oro al oficio del prefecto del pretorio si no se respetan las inmunidades concedidas a los asesores de las más altas dignidades.

E) CONCLUSIONES

I.

Los magistrados y funcionarios romanos tenían, con carácter general, la obligación de rendir cuentas (*reddere rationes*) de su gestión. Ya en el derecho ático, como posteriormente en la legislación municipal romana, se arbitraba un procedimiento de rendición y examen de cuentas del magistrado saliente, y la *lex Iulia repetundarum* obligaba al gobernador provincial a depositar dos copias de la contabilidad referente a su gestión en dos ciudades de la provincia y a presentar una tercera en el *aerarium* de Roma.

La importancia de rendir cuentas viene dada ante la posible malversación de fondos cometida por el magistrado o funcionario, de ahí la publicación a finales de la República de sendas leyes dirigidas a reprimir el *crimen* de *peculatus* y el *crimen de residuis*. El primero comprendía sobre todo supuestos de malversación de fondos y se castigaba con una pena pecuniaria del cuádruplo de la estimación del objeto del delito, si bien, en época postclásica, los emperadores

castigaron los supuestos más graves de *peculatus* con penas tales como el destierro o la deportación e incluso la pena de muerte; respecto al *crimen de residuis*, según el cual un funcionario se apropiaba indebidamente de los remanentes de fondos públicos recibidos para llevar a cabo una obra o gestión pública, la pena establecida en la ley consistía en el deber de pagar un tercio más de lo que el mismo funcionario debía devolver.

En época imperial, los altos funcionarios como los dignatarios, los jefes de oficinas, o los gobernadores provinciales debían rendir cuentas de su gestión tal y como se recoge en CTh. 1.32.3 (a. 377) respecto de los funcionarios dependientes del *comes sacrarum largitionum* imponiéndose en caso de déficit injustificado penas severísimas al funcionario responsable.

Las cuentas públicas podían inspeccionarse dentro del plazo de veinte años y en caso de fallecimiento del funcionario aún podían ser investigados sus herederos por los errores descubiertos en las mismas dentro del plazo de diez años desde la muerte de aquél.

II.

En la legislación postclásica y de Justiniano se estableció la regla en virtud de la cual los altos funcionarios responsables de la gestión de fondos públicos debían permanecer, después del desempeño de su cargo, durante cincuenta días en la provincia o localidad en la que habían realizado sus funciones con la finalidad de responder a las acusaciones de malversación de fondos públicos que pudiesen dirigirse contra ellos, e incluso en algún caso, como respecto de los secretarios de los gobernadores provinciales, se fijó que debían permanecer en la provincia durante los tres años siguientes al término de su administración. La finalidad perseguida con esta norma era la de asegurar que dichos funcionarios estuviesen localizados a fin de que pudiesen ser acusados respecto de su gestión.

Esta obligación guarda relación con el principio tradicional vigente desde la República según el cual, si bien se puede acusar a un magistrado o funcionario durante el ejercicio de su cargo por la comisión de un delito, sólo se le puede procesar judicialmente después de abandonar sus funciones.

En caso de que el funcionario en cuestión hubiese huido antes de cumplirse el plazo de cincuenta días se dispuso en la ley que sería juzgado por crimen de lesa majestad y castigado con diversas penas pecuniarias siendo sancionado también con las mismas penas el funcionario que le sustituyó en el cargo si no hubiese dado cuenta de la fuga de aquél o no hubiese tomado las medidas necesarias para

evitarla. Justiniano introduce también un procedimiento a favor de los provinciales que hubiesen sufrido algún daño por culpa del gobernador debiendo éste presentarse a tal efecto ante el obispo de la ciudad; dichos provinciales serían resarcidos en tal caso con los propios bienes del gobernador bajo la responsabilidad de los prefectos del pretorio, siendo estos también responsables con sus propios bienes.

Transcurrido el plazo de cincuenta días el alto funcionario quedaba aún sujeto a la persecución judicial derivada de la presentación de alguna demanda contra el mismo; a este respecto, si bien Justiniano recogió en D. 48.13.7 el régimen jurídico del Derecho Romano clásico que establecía el plazo de prescripción de cinco años para el crimen de *peculatus*, lo cierto es que en la legislación postclásica no aparecen plazos de prescripción en este campo lo que dio lugar a arbitrariedades e injusticias como sucedió, por ejemplo, en el caso *Orfitus* que nos relata con minuciosidad Amiano Marcelino.

Dicha obligación de permanecer durante cincuenta días se recibe en el Derecho Común europeo.

III.

La legislación de Justiniano contiene normas que regulan el traspaso de poderes de los gobernadores provinciales dando lugar el incumplimiento de las mismas a supuestos de responsabilidad, de entre los cuales el más grave consistía en la negativa injustificada del gobernador cesante a abandonar su cargo, por lo que incurriría en un *crimen maiestatis*.

IV.

Los funcionarios gozaban después de su retiro de una serie de privilegios, tales como exenciones fiscales y de diversas cargas, las cuales debían ser respetadas por los gobernadores provinciales o los prefectos del pretorio y los funcionarios pertenecientes a sus respectivas oficinas, imponiéndose penas pecuniarias en caso de que no se respetasen dichas exenciones.

APÉNDICE

A) LA RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN LA LEGISLACIÓN DE LAS PARTIDAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS OFICIOS PÚBLICOS MEDIEVALES.

En la Baja Edad Media asistimos en Castilla a un fortalecimiento del poder de la Monarquía que, unido a la recepción del Derecho Romano justiniano en virtud de la elaboración de las Partidas, dio lugar al desarrollo de una Administración Pública dentro de la cual los “oficiales” no aparecían ya tanto como vasallos o “servidores domésticos” del monarca -tal como ocurría en los reinos alto medievales- sino como titulares de oficios, es decir, como delegados del poder regio con atribuciones en muchos casos fijadas *ex lege*⁹⁹³. A este respecto, GARCÍA MARÍN⁹⁹⁴ ha señalado que “la concepción jurídica de *officium* = cargo, elaborada en el Derecho eclesiástico sobre la imagen que presenta el Derecho público romano, ha debido conformar,

⁹⁹³GONZÁLEZ ALONSO B., *Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo Régimen (Corona de Castilla, siglo XII-XVIII)*, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 4, Madrid, 2000, p. 251.

⁹⁹⁴GARCÍA MARÍN, J. M., *La función pública en la Castilla bajomedieval: consideraciones generales*, en L'educazione giuridica IV-Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo 1- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981, p. 114.

y no en escasa medida, la naturaleza y el contenido jurídico de las funciones desempeñadas por los “servidores” del príncipe secular⁹⁹⁵.

Por lo que se refiere a nuestro tema de estudio: la responsabilidad de los oficiales regios en la Baja Edad Media, señala GONZÁLEZ ALONSO⁹⁹⁶ que “falta la existencia de una monografía que atienda a la totalidad de sus diversos aspectos, ya que hasta la fecha sólo ha recibido un tratamiento disperso e incompleto”. No obstante, vamos a continuación a poner de manifiesto diversos aspectos en los

⁹⁹⁵ Como ha subrayado GARCÍA MARÍN por <<oficial>> se entendía originariamente en la Edad Media “criado” o “servidor” del monarca, lo que venía a suponer entre ellos una relación cuasi-familiar, por lo que se puede deducir que faltaba en este periodo una relación de tipo jurídico-público entre el oficial (órgano) y el príncipe (Estado). Además podemos apreciar en esta época una auténtica patrimonialización de la función pública ya que numerosos altos cargos se otorgaban a los nobles como mercedes del monarca ante los servicios prestados. GARCÍA MARÍN, J. M., *El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media*, Sevilla, 1974, pp. 26-27. Vid. MARTÍNEZ DÍEZ G., *Los oficiales públicos, de las Partidas a los Reyes Católicos*, en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971, pp. 121 ss.

Es de destacar la influencia del Derecho Romano en la literatura jurídica medieval que introduce la noción de <<officium>> como conjunto de atribuciones y deberes inherentes a un cargo tal y como se recoge en P. II.9.1; por otro lado, GARCÍA MARÍN ha referido la conexión que en esta época se da entre <<oficio>> y <<jurisdicción>>, empleándose indistintamente los términos de jueces (o magistrados) y oficiales para referirse a todo aquél que desempeña una función pública. Además, el término <<oficial>> es la denominación más común en las fuentes (por ejemplo, P. III.4.1) y en la doctrina de aquél tiempo para designar a quien ejerce una función pública independientemente de la categoría del funcionario o del nivel administrativo en el que ejerce su competencia (GARCÍA MARÍN J. M., *La función pública...*, op. cit., pp. 115-116). Véase también, COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale* (1100-1438), Milano, 1969, p. 284, que señala que el término <<iurisdictio>> se refería a cualquier manifestación de poder, principalmente a las funciones de gobierno y a las funciones administrativas y jurisdiccionales

que principios y normas del Derecho Romano postclásico y justiniano han influido decisivamente en el régimen jurídico de la responsabilidad de los oficiales públicos en la Baja Edad Media.

Las normas del Derecho bajomedieval establecían la obligatoriedad de ejercer un control sobre la actuación de los oficiales y será el rey quien ejerza esta actividad sobre ellos en los distintos niveles administrativos; este control real podía realizarse mientras el funcionario estaba desempeñando su cargo, es decir, *constante officio*, o bien una vez que había cesado en el cargo (*post officio dimisso*).

En el primer supuesto, el rey podía actuar bien de oficio o bien a instancia de parte, en muchos casos, por las quejas de las ciudades ante los abusos cometidos por sus oficiales⁹⁹⁷; el monarca contaba para ello con dos sistemas de control de la actuación de sus oficiales mientras desempeñasen su cargo: ya fuese mediante la utilización de los superiores, colegas o subordinados del funcionario sometido a vigilancia para que denunciasen todas aquellas conductas que fueran contrarias a la ley o la moral; o ya fuese encomendando a ciertos agentes “extraordinarios” no sólo la competencia de informar al rey sino también la de sancionar por sí mismos a los administradores

⁹⁹⁶GONZÁLEZ ALONSO B., *Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios...*, op. cit., p. 249.

⁹⁹⁷GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público ..*, op. cit., pp. 307-316.

incumplidores⁹⁹⁸; tales agentes extraordinarios eran los “pesquisidores”, “veedores” y “visitadores”⁹⁹⁹.

Respecto del control de los funcionarios regios una vez hubiesen abandonado su cargo, todos los oficiales estaban obligados a rendir cuentas de su actuación para someterse a la responsabilidad que en su caso les correspondiese¹⁰⁰⁰. Por esta razón, como ya hemos visto anteriormente¹⁰⁰¹, debían permanecer durante un tiempo determinado en el lugar en el que habían desempeñado su cargo¹⁰⁰² para responder de todas las quejas y reclamaciones que se suscitaran respecto de su

⁹⁹⁸GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., pp. 310 ss.; LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión del poder público...*, op. cit., p. 181; CERDÁ J., *En torno a la pesquisa y el procedimiento inquisitivo en el Derecho castellano-leonés de la Edad Media*, AHDE, 32, Madrid, 1962, pp. 483 ss.; GONZÁLEZ ALONSO B., *El juicio de residencia en Castilla. I: Origen y evolución hasta 1480*, A.H.D.E., 48, Madrid, 1978, p. 203; GARRIGA C., *Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la visita del Ordenamiento de Toledo (1480)*, AHDE, 61, Madrid, 1991, pp. 240 ss.; TORRES AGUILAR M., *Sobre el control de los oficiales en la Castilla bajomedieval y moderna. La larga pervivencia del Derecho Romano*, en *Derecho y Opinión*, Octubre-1992, Córdoba, pp. 189 ss (191-193).

⁹⁹⁹La modalidad de pesquisa fue recogida en P. III. 17.

Sin embargo, GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia*, op. cit., Madrid, 1963, p. 212, no ve en estas instituciones la influencia del Derecho Romano.

¹⁰⁰⁰GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 317.

¹⁰⁰¹Vid. *supra* pp. 614-615.

¹⁰⁰²Entre los deberes del oficial público señalan las Partidas la obligación de residir en el lugar de desempeño del cargo: P. III.4.7. En época de los Reyes Católicos no podían ausentarse sin justa causa del lugar donde ejercían su oficio bajo pena de no recibir su salario. GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 295.

gestión¹⁰⁰³: concretamente en P. III.4.6 se recoge la norma romana que regula el deber de los jueces de permanecer durante cincuenta días en el lugar en el que hubiese desempeñado su cargo.

Por lo que hace a la exigencia de la responsabilidad de los oficiales públicos, era necesaria la prueba de los actos delictivos de los que se les acusaba y la carga de la misma correspondía en su caso al querellante si el oficial denunciado se negaba a reconocer la acusación; el Ordenamiento de Alcalá (XX.2) recoge también una serie de presunciones como medio de prueba de la venalidad en que hubiesen podido incurrir los oficiales¹⁰⁰⁴.

A continuación referimos, siguiendo a GARCÍA MARÍN¹⁰⁰⁵, las principales actuaciones y omisiones de los administradores públicos que podían ser objeto de persecución y castigo:

En primer lugar, la legislación bajomedieval de Castilla castigaba con graves penas al oficial que se apropiase de dinero público (P. VII. 14.14-15), al que cometiese delito de falsedad y traición (lesa

¹⁰⁰³LALINDE ABADÍA J., *Los medios personales de gestión*, op. cit., p. 199, apunta que cuando se trataba de oficios temporales y de corta duración, normalmente de un año, el oficial se sometía al juicio de residencia al finalizar su actividad, mientras que en caso de cargos permanentes o de larga duración estaban sujetos a controles y vigilancia periódica por parte de los pesquisadores, visitantes o veedores.

¹⁰⁰⁴GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público ...*, op. cit., pp. 320-321.

¹⁰⁰⁵GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público ...*, op. cit., pp. 325-334; TORRES AGUILAR M., *Sobre el control de los oficiales ...*, op. cit., pp. 193 ss.

majestad)¹⁰⁰⁶, al que recibiese regalos de sus administrados¹⁰⁰⁷, o al que celebrara contratos privados con particulares por sí mismo o por persona interpuesta (P. V.5.5)¹⁰⁰⁸; de igual manera se castigaba la responsabilidad civil del oficial derivada de todo acto negligente que ocasionase daños a los ciudadanos; de esta forma se establecía que el

¹⁰⁰⁶ Acerca del delito de falsedad documental en el que, a tenor de las fuentes de la época, incurrieron frecuentemente los escribanos y secretarios: P. II.9.8; P. III.19.16; P. VII.7.2 y 6.

¹⁰⁰⁷ GREGORIO LÓPEZ (gl. 3 a P. III.4.6). Esta infracción implicaba para el oficial la pérdida del cargo siendo además condenado a devolver el doble de lo recibido; el particular estaba obligado por su parte a responder de su conducta, si bien en P. III. 22.26 se establecía que si denunciaba el hecho delictivo quedaría liberado de responsabilidad, pudiendo en ciertos casos recobrar lo ilícitamente entregado.

Igualmente en Italia los estatutos de las ciudades prohibían al *rector civitatis* ('podestà') y a sus oficiales recibir dinero o donaciones *in natura ultra salarium* durante su oficio, estableciéndose penas *in duplum* a cargo del mismo 'podestà' (Estatutos de Verona de 1327, en la rúbrica *De salario rectoris et familia* (I, 2): *ut milites et alia familia domini potestatis debeant exercere et facere omnia sibi inposita per dominum potestatem et eius nuncios absque alio salario* (I,5); *Ne potestas vel aliquis de sua familia accipiat dona postquam iuraverit* (I,8); *Quod potestas nec aliquis de sua familia possit accipere ex dono vel commodo aliquem equum vel equam* (I,10). QUAGLIONI D., <<Delinquens in officio>>. *Spunti dal diritto commune*, en AA.VV., La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, a cura di G. Fornasari- N. D. Luisi (atti del convegno, Trento 18-19, maggio 2001), Padova, 2003, p. 43.

Añade QUAGLIONI D., <<Delinquens in officio>>. *Spunti...*, op. cit., pp. 45-46, que en materia de corrupción, la doctrina, al menos en la época clásica del Derecho Común, se centra en el título *Ad l. Iuliam repetundarum*, sea en el *Codex* (C. 9. 27) sea en el *Digestum Novum* (D. 48.11). Asimismo, señala el Autor que en la gran *Summa* de Azón (s. XIII), el glosador se interroga sobre cuándo puede concederse la *actio repetundarum*, sobre si la acción puede concederse durante el desempeño del *officium* y acerca de cómo deben entenderse las penas *extra ordinem* referidas en el texto.

¹⁰⁰⁸ GREGORIO LÓPEZ (gl. 2 a P.V.5.5). BALDO DE UBALDIS (*In VII a XI Cod. lib. comm.*, p. 261) admite que se puedan celebrar estos

oficial público que no cumpliera diligentemente su servicio sería despojado de su cargo y castigado económicamente con una multa del doble del valor del daño ocasionado¹⁰⁰⁹; se sancionaba también en la legislación de forma severa el absentismo del funcionario¹⁰¹⁰; y al igual que sucedía en el Derecho Romano, las Partidas (IV.14.2) establecen que los altos oficiales no pueden contraer matrimonio con mujeres de la provincia como medida cautelar para evitar un posible tráfico de influencias¹⁰¹¹.

En cuanto a la responsabilidad del funcionario derivada de las conductas señaladas anteriormente, una vez cesado, quedaba obligado a responder con todos sus bienes e incluso, en ciertos casos, con los bienes dotales de su mujer¹⁰¹². En el supuesto de que el oficial no respondiese a sus obligaciones pecuniarias, y una vez hecha excusión de sus bienes, sería el fiador quien tendría que responder económicamente por los daños que el oficial hubiese podido cometer durante el ejercicio de su función. El sucesor en el cargo no estaba obligado en ningún caso a responder por la mala actuación de su predecesor ya que - JUAN DE LA PLATA- ``él es sucesor en la dignidad, no en la herencia``, si bien puntualiza BALDO DE UBALDIS que en caso de que aquél fuese hijo del oficial tendría, como heredero, que asumir

contratos siempre que se deban a necesidades perentorias y previo permiso de la autoridad superior.

¹⁰⁰⁹P. III.18.12.

¹⁰¹⁰P. III.4.7.

¹⁰¹¹Vid. *supra* pp. 529 ss.

las deudas que el padre contrajo durante el tiempo que estuvo en activo; por otro lado, el comentarista español antes citado se preguntaba si el padre estaba obligado a ser fiador “*in solidum*” de un hijo no emancipado que desempeña un cargo público, y el Autor considera que si el padre se opone expresamente a ello no quedará obligado¹⁰¹³.

Respecto de la responsabilidad del funcionario por los delitos o faltas cometidas por sus auxiliares y subordinados tenemos que señalar, en primer lugar, que tenía la obligación de escogerlos conforme a un rígido sistema de selección¹⁰¹⁴, y por otro lado, vemos que se aprecia en las fuentes una identificación entre el oficial principal y las actuaciones de sus auxiliares: todo ello hacía que en muchos casos se imputasen al oficial principal las actuaciones u omisiones de sus subordinados (<<*delictum officialis punit dominum, id est, facit dominum cadere in poenam et damnum*¹⁰¹⁵>>)¹⁰¹⁶.

¹⁰¹²GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público ...*, op. cit., pp. 324-325.

¹⁰¹³JUAN DE LA PLATA, *Super tribus...*, pp. 45-48 (cit. GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 325); BALDO DE UBALDIS, *In VII a XI Cod. lib. comm.*, p. 259.

¹⁰¹⁴Durante la Baja Edad Media y sobre todo en época de los Reyes Católicos se establecieron una serie de requisitos que debían reunir aquellos que quisiesen acceder a un cargo público (edad, cualidades morales y técnicas, condiciones económicas, no estar incurso en causas de incapacidad y superar diversas pruebas y exámenes de idoneidad). También en los llamados “manuales del podestà” italianos, como el célebre <<*Oculus pastoralis*>> de 1222, se muestra la preocupación de que la elección de los oficiales sea hecha entre <<*catolicos, fide dignos, facundos, nitidos, in exercitio studiosos*>>, (II, 2: *De officialibus et officiis eorumden*). QUAGLIONI D., <<*Delinquens in officio*>>. *Spunti...*, op. cit., p. 44

¹⁰¹⁵JUAN DE LA PLATA, *Super tribus...*, op. cit., p. 41.

Se recoge también en las fuentes bajomedievales que el “principal” responderá subsidiariamente en caso de que el oficial no haya presentado fiadores en su momento; de igual forma se establece que aquél, siempre que haya escogido diligentemente a sus

¹⁰¹⁶En relación con la responsabilidad del *rector civitatis* (“podestà”) por los delitos cometidos por sus oficiales (*delinquentes in officio*), BARTOLO DE SASSOFERRATO considera que es personalmente responsable de cada uno de los delitos y será castigado con la pena correspondiente; esta idea se deduce de diversos comentarios a textos del Digesto y del Código de Justiniano, por ejemplo a C. J. 12.60(58).1, C. J. 10.19.7, D. 3.5.29, o D. 1.22.4. En relación a este tema BARTOLO nos dice: <<*Item pone quod remotus est potestas ab officio, an assessor poterit petere salarium totius temporis? dic aut est remotus expresse cum tota familia, et assessore, et tunc assessor non debet habere salarium, quia ista remotio expressa culpa eorum annumeratur, vt l. si merces. §. culpae, ff. locati [D. 19.2.25. § 4], et l. pe. infra sol. mat. [D. 24.3.66]. Aut solus Potestas est remotus, et tunc distingue. Aut est remotus propter delictum suum proprium, ut propter furtum, et barattariam, et tunc debetur assessori salarium. Aut propter culpam assessoris, et tunc non debetur. Aut dubitatur, et praesumitur assessorem fuisse culpabilem, quia eius officium consistit in asserendo, seu assidendo sibi. Unde omne factum, vel negotium intelligitur factum ab assessoribus, secundum Cy. et est gl. fin. Hic>>. BARTOLO DE SASSOFERRATO, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, ed. Venetiis, 1615, tomo 1, f. 44r, n. 4. Además, en el comentario a C. J. 10.1.5, el mismo jurista, afirma que <<*officiali iniuste exequenti licet de facto resistere*>>, idea que recoge también en el comentario a C. J. 10.32.33: <<*Tertio not. posse resisti iudici male facienti, vel alias officium suum male administranti. facit supra, de iure fisci, l. prohibitum*>>. BARTOLO DE SASSOFERRATO, *Commentaria in tres posteriores libros Codicis*, Venetiis, 1615, tomo 8, f. 4v, nn.1-5.*

Del mismo modo, los oficiales serán responsables del comportamiento antijurídico del “podestà” salvo que ellos lograsen probar que se opusieron a ello. Los oficiales están expresamente obligados a oponerse al “podestà” que cometa un ilícito: <<*officiales debent resistere rectori, quando male facit, sicut et subditus praelato*>> (glosa a C. J. 7.62.21).

Sobre el pensamiento de BARTOLO acerca del oficial y de su responsabilidad en el gobierno y en la administración de la justicia, véase QUAGLIONI D., *L'officiale in Bartolo*, en *L'educazione giuridica IV- Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*. Tomo 1- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981, pp. 143 ss.

subordinados, no será responsable si hubiese ignorado el hecho delictivo¹⁰¹⁷.

Por último, nos referimos a la acción de denuncia o de exigencia de responsabilidad de las conductas anteriormente mencionadas que indudablemente tiene su antecedente en el Derecho Romano: en numerosas fuentes jurídicas de época postclásica y justiniana se faculta, como ya vimos, a los ciudadanos a ejercitar una acción contra los funcionarios concusionarios¹⁰¹⁸. Esta acción popular, como señaló GARCÍA DE VALDEAVELLANO, “queda incorporada en la Edad Media al Derecho común y una acción de esta clase es la que WETZELL¹⁰¹⁹, en su tratado sobre proceso civil común, llama “acción de sindicato” (*Syndicatsklage*), o sea, la que ejercitaban en el “Sindicato” o “Juicio de residencia” los perjudicados por la mala gestión”¹⁰²⁰.

¹⁰¹⁷GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 323; ID., *La función pública...*, op. cit., pp. 136-137. El Autor sostiene que la doctrina jurídica medieval construye un régimen de responsabilidades entre el oficial principal y sus subordinados, valorando los diversos factores que pueden tener influencia en la determinación del responsable principal: si existió o no autorización del “principal” para que el subordinado actuase, si se trataba de delito o de responsabilidad civil, o si existía o no fiador que garantizase la actuación del subordinado.

¹⁰¹⁸C. J. 9.27.6 (a. 439): ... *sed etiam adversus dantem accusandi cunctis tamquam crimen publicum concedimus facultatem, quadrupli poena eo qui convictus fuerit modis omnibus feriendo.*

¹⁰¹⁹WETZELL G. W., *System des ordentlichen Civilprozesses*³, Leipzig, 1878 (cit., GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., op. cit., p. 222, nt. 35).

¹⁰²⁰GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia*, op. cit., p. 222.

El plazo de prescripción de esta acción varía en las Partidas dependiendo del funcionario y del tipo de delito o falta cometidos: así, en P. VII.1.7 se establece que, tratándose de delitos económicos, los delitos de hurto o de malversación podrán ser objeto de persecución o de denuncia perpetua; en P. VII.1.8 se dispone lo mismo para los casos de prevaricación de los oficiales de justicia; y en P. VII.7.5 se establece un plazo de veinte años para acusar al oficial en caso de que hubiese incurrido en un delito de falsedad¹⁰²¹.

¹⁰²¹GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público...*, op. cit., p. 335.

B) CONCLUSIONES.

Los principios y reglas del Derecho Romano relativos a la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones se reciben en la legislación del reino de Castilla en la Baja Edad Media estableciéndose un sistema de control de la actuación de los oficiales del rey tanto por la posible denuncia de los superiores, colegas o subordinados del funcionario sometido a vigilancia como por el envío de agentes extraordinarios llamados “pesquisidores”, “veedores” y “visitadores”. Todos los oficiales estaban obligados, una vez abandonado el cargo, a rendir cuentas de su actuación sometiéndose al llamado “juicio de residencia”.

La legislación bajomedieval de Castilla castigaba con graves penas delitos tales como la traición (lesa majestad), la apropiación de dinero público, el delito de falsedad, la aceptación de regalos de los particulares, la celebración de contratos privados con los mismos por sí o por persona interpuesta y, asimismo, se castigaba la negligencia, la falta de rendimiento o el absentismo del funcionario y, al igual que sucedía en el Derecho Romano, las Partidas (IV.14.2) establecieron que los altos funcionarios no podían contraer matrimonio con mujeres de la provincia de destino. Los oficiales respondían civilmente de los delitos y

conductas mencionadas con todos sus bienes e incluso, en ciertos casos, con los bienes dotales de su mujer, y una vez hecha excusión de sus bienes, respondía su fiador. El sucesor en el cargo no estaba obligado a responder por la mala actuación de su predecesor salvo, como puntualizó BALDO DE UBALDIS, en el caso de que dicho sucesor fuese hijo del oficial sancionado.

Por último, los oficiales se hacían también responsables de los delitos y faltas cometidas por sus subordinados ya que tenían la obligación de escogerlos conforme a un rígido sistema de selección.

CONCLUSIONES FINALES

I) En el lenguaje jurídico latino aparece una amplia terminología relativa al ejercicio de la Función Pública de la cual somos tributarios hoy en día: <<functio>>, <<officium>>, <<ministerium>>, <<honor>>, <<dignitas>>, <<militia>>, <<gubernare>>, <<administrare>>, <<officiales>>, <<publicae personas>>. Asimismo, el vocablo <<respondere>> es utilizado en las fuentes respecto a la actividad de los magistrados y funcionarios y, más concretamente, en el sentido de “estar obligado a rendir cuentas por la gestión de un cargo público”. Junto a <<respondere>> encontramos también el uso en las fuentes de los términos <<obnoxius>> y <<periculum>> en relación con la responsabilidad de los funcionarios.

No obstante la recepción de principios y normas de Derecho Romano en la tradición jurídica europea relativas a la responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de su actividad administrativa, debemos precisar que la voz <<responsabilidad>>, referida a esta materia, aunque de clara raíz latina, aparece por primera vez en el debate parlamentario en la Inglaterra del siglo XVIII (<<responsibility>>) y de ahí se generaliza en el resto de Europa.

II) A finales de la República se articula legalmente el principio según el cual los magistrados debían responder penal y civilmente al término de sus funciones. Este principio se materializó fundamentalmente a través de las *leges repetundarum* las cuales surgieron históricamente

para hacer frente a los abusos cometidos por los gobernadores en las provincias a las que habían sido destinados; la jurisprudencia clásica y la legislación imperial ampliaron progresivamente el ámbito del *crimen repetundarum* para hacer frente no sólo al interés de los particulares lesionados por la conducta ilícita de los magistrados y funcionarios sino también para defender el interés general de la comunidad política romana de preservar la honestidad de aquéllos lo cual, a su vez, ponía de relieve una auténtica preocupación moralizante y regeneradora de la vida pública que se tradujo en época postclásica en una mayor aplicación del principio de legalidad en esta materia, constatable en las fuentes, y en el desarrollo de un Derecho penal y disciplinario relativo a la actuación administrativa de los funcionarios.

La responsabilidad penal de los funcionarios vino determinada no sólo por la actuación dolosa o negligente de los mismos sino que incluso se establecieron por ley numerosos casos de imposición de una responsabilidad penal (pecuniaria) objetiva de los oficiales de una oficina de la Administración por la actuación de los directores de la misma.

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los magistrados y funcionarios romanos, derivada de los daños causados a los ciudadanos por su actuación ilícita o negligente, ésta se hizo efectiva desde época republicana a través de acciones penales privadas por medio de las cuales los particulares lesionados –o cualquier ciudadano si se trataba de una acción popular- podían reclamarles el

pago de la pena pecuniaria correspondiente, según la naturaleza del acto dañoso, sin que, sin embargo, pudiese extenderse dicha responsabilidad civil al *Populus Romanus* o al municipio. Así sucedía, por ejemplo, en el campo de la expropiación forzosa cuando resultase irrisorio el precio tasado por el magistrado o funcionario competente respecto del bien expropiado a un particular por razón de utilidad pública. No obstante, referimos la regla del Derecho Romano según la cual los municipios sí eran civilmente responsables de la actuación de los magistrados municipales en la medida en que se hubiesen beneficiado del ilícito cometido por éstos en los negocios realizados con terceras personas en nombre y por cuenta de la *civitas*.

- III) El acceso a la función pública en época imperial estuvo sujeto a normas que establecieron requisitos de índole físico, como aquéllos que establecían una edad mínima o condiciones de aptitud física, y otros relativos a la cualificación técnica para el desempeño del cargo o puesto respectivo, estableciéndose en ocasiones incluso la exigencia de pruebas específicas de acceso a la Función Pública como sucedía respecto de los profesores y los médicos públicos. Asimismo se atendió a la moralidad de los candidatos no aceptándose el ingreso en la *militia* civil o militar a quienes hubiesen sido condenados por crímenes o tachados con la nota de infamia; estas reglas relativas a la condición moral del candidato se recibieron específicamente en el Derecho histórico español. Y, al menos para

las dignidades y los cargos municipales, las leyes imperiales exigieron también que el candidato gozase de una buena posición económica a fin de reforzar con ello las garantías de honestidad e independencia en las funciones que iba a desempeñar y afianzar su responsabilidad patrimonial para hacer frente a los gastos que personalmente fuese a asumir en el ejercicio del cargo y por las responsabilidades patrimoniales derivadas de una posible gestión fraudulenta o torpe. Los supuestos de incumplimiento de esta normativa establecida en las constituciones imperiales dieron lugar a situaciones de responsabilidad frente a la Administración, tanto para los funcionarios que nombrasen a un candidato no idóneo como para los así nombrados ilegalmente, con la imposición consiguiente de sanciones de diversa índole.

- IV)** Las leyes de época postclásica y justiniana establecieron la exigencia de que los candidatos acreditasen un determinado origen social, lo cual obedecía a la política de configurar un cuerpo selecto de funcionarios públicos en el que, por ejemplo, las más altas dignidades no sólo debían acreditar su preparación técnica, su laboriosidad y su posición económica y social sino también la confianza del emperador. De este modo, los candidatos a un puesto en la Administración debían probar debidamente su origen social siendo excluidos los esclavos y los libertos –estos últimos a diferencia de lo que sucedía en época del Principado- así como también todas aquellas personas que estuviesen sujetas

hereditariamente a su condición (*conditionales*) como los soldados, los *corporati*, los *negotiatores*, los curiales, los cohortales o los *caesariani*. Por último, en el ámbito del Imperio Romano cristiano que se afianza a finales del siglo IV numerosas leyes establecieron que los candidatos habían de profesar la religión católica ortodoxa con exclusión de los seguidores de sectas consideradas heréticas, así como, progresivamente, de los paganos. El incumplimiento de estas normas dio lugar a la imposición de graves sanciones penales y administrativas.

- V) El *suffragium*, es decir, la venta de recomendaciones para la obtención de cargos en la Administración fue una práctica frecuente desde el Principado; no obstante, los emperadores de época postclásica trataron de poner límites al *suffragium* en numerosas constituciones a lo largo de los siglos IV y V, cuya reiteración pone de manifiesto, sin embargo, la insuficiente eficacia de las medidas propuestas, las cuales variaron en el curso del tiempo desde la imposición de sanciones de Derecho Privado -como la no repetición de lo pagado por el funcionario que consiguió un cargo de esta manera, debiendo entregar este último la misma cantidad al Fisco-, a la adopción de medidas de Derecho Público como fue la configuración del *suffragium* como un crimen público encuadrado dentro del marco de la *lex Calpurnia de ambitu*, denunciable por cualquier ciudadano y castigado con la pena del cuádruplo, llegando incluso una constitución del año 394 –ante el fracaso de todos los

intentos de poner fin a estas prácticas- a legalizar y regular el llamado contrato de *suffragium* que adopta la forma de una *sponsio* causal dirigida a garantizar la obtención de un puesto en la Administración lo que suponía la legalización de la compraventa de cargos pero dentro de los límites marcados por la ley.

A pesar de las declaraciones de principios formuladas por los emperadores de época postclásica, la constatación de la realidad de los hechos impuso el establecimiento por Justiniano de una tercera vía, entre la tolerancia y la prohibición del *suffragium*, que consistió en la admisión de un sistema de tasas legales que en teoría cubrían sólo los gastos de nombramiento del funcionario pero que en la práctica venían a suponer una especie de *suffragium* reducido y limitado por ley.

- VI)** Los esfuerzos de los emperadores de ese tiempo se centraron en la prohibición o al menos limitación del *suffragium* para los altos cargos de la Administración porque para los oficiales de la milicia civil rigió la regla según la cual: <<*militia est in patrimonio nostro, ergo conferetur, dignitas non est in patrimonio*>>. Por lo tanto se consolidó en la práctica y en la ley una patrimonialización de los puestos medios y subalternos de la Administración los cuales podían ser objeto de transmisión *inter vivos* y *mortis causa* por sus titulares dando ello a una rica casuística en el Digesto y al desarrollo de la actividad bancaria consistente en el otorgamiento de créditos para la compra de puestos administrativos, avalados por el hecho de que si

el comprador no podía devolver el préstamo, el oficio conseguido revertiría a la libre disposición del banquero.

Además, una constitución del año 346 estableció el carácter forzosamente hereditario de la generalidad de los oficios públicos pasando así de padres a hijos de tal manera que se castigaba incluso a aquellos hijos que no quisiesen seguir los pasos de su padres con el enrolamiento forzoso en el ejército.

- VII)** La legislación imperial estableció que el otorgamiento de las dignidades debía hacerse por escrito mediante *codicilli* y el nombramiento de los oficiales de la milicia debía verificarse mediante *probatoriae* que debían ser auténticas y no copias castigándose como *crimen maiestatis* su falsificación. Los *codicilli* originariamente cumplían sólo una función de notificación del nombramiento de los altos funcionarios pero, en época postclásica y con Justiniano, los mismos incorporaron también los llamados *libri mandatorum* que comprendían el conjunto de sus deberes y competencias. En este sentido, en Nov. 17 se dispone la siguiente norma de conducta que debía figurar en el *codicillus* de nombramiento de los gobernadores provinciales: <<es conveniente que recibiendo tú con pureza y sin sufragio alguno el cargo administrativo, conserves ante todo manos limpias para Dios, para nosotros, y para la ley, y no adquieras ningún lucro ni mayor ni menor, y no negocies capciosamente con los súbditos sino que te contentes únicamente con las cosas que se te suministren por el Fisco>>.

Los funcionarios debían prestar ciertas garantías de que cumplirían sus funciones con la debida honestidad estableciéndose para ello, en primer lugar, tanto el juramento de fidelidad al emperador como el llamado juramento de buen gobierno, los cuales fueron unificados por Justiniano en Nov. 8.

Los altos funcionarios encargados del manejo de fondos públicos, los gobernadores provinciales y los magistrados municipales debían prestar garantías de tipo económico en forma de cauciones o presentación de fiadores con las que poder hacer frente personalmente a una posible responsabilidad patrimonial derivada de su gestión administrativa. Aún más, en el ámbito municipal los *duumviri* -quienes no podían negarse a su nombramiento salvo que fuese por causa justificada o que hubiese sido realizado de forma ilegal, en cuyo caso se arbitró por ley un procedimiento especial de impugnación- eran civilmente responsables de los actos realizados por los sucesores propuestos por ellos, si bien dicha responsabilidad de los *nominatores* sólo se materializaba en caso de insolvencia del nombrado y de sus fiadores. También, los magistrados municipales fueron subsidiariamente responsables de los actos u omisiones del magistrado colega con excusión de los fiadores y *nominatores* de éste último.

La ausencia de alguno de los requisitos exigidos para el nombramiento de un funcionario dio lugar a situaciones encuadrables en lo que hoy en día se denomina como funcionario de hecho: a lo largo de la experiencia administrativa romana se sentó la regla en

función de la cual se debía proceder en su caso al castigo de quien conscientemente usurpase la condición de magistrado o funcionario pero dejando a salvo, en general, <<*propter utilitatem causam*>>, la validez de los actos realizados por el mismo (D.1.14.3).

VIII) Los funcionarios integrados en la Administración del Bajo Imperio se ordenaban en virtud del principio de jerarquía en altas dignidades y oficiales. El principio de jerarquía trae consigo como corolario el deber de obediencia y respeto de los funcionarios hacia sus superiores y, por otro lado, el establecimiento de un régimen jurídico que regulaba las promociones y ascensos de los funcionarios cuyo incumplimiento daba lugar a supuestos de responsabilidad administrativa; no obstante, las fuentes nos refieren que frecuentemente se daban casos de soborno y de arbitrariedad en este ámbito.

La duración en el cargo de las dignidades oscilaba, por regla general, entre uno o dos años mientras que las leyes imperiales establecieron normas sobre la permanencia de los oficiales en sus respectivas oficinas (*scrinia*) fijando un periodo general de 20 o 25 años sin que pudiesen cambiar durante ese tiempo de oficina; también prohibieron que los altos funcionarios repitiesen el desempeño de un mismo cargo al término del ejercicio del mismo (*iteratio*) disponiéndose, en caso contrario, el cese del funcionario sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas en la *lex Iulia de ambitu*.

IX) Frente al principio de gratuidad en el desempeño de las magistraturas en época de la República los funcionarios de la Administración imperial recibían un salario periodico a cargo del Fisco. No obstante, a partir del siglo III se hizo imposible el pago en dinero de dicho salario por lo que tuvo que hacerse *in natura* mediante la entrega de productos alimenticios básicos así como de forraje para los caballos. Sin embargo, dicho sistema no aseguró adecuadamente la remuneración debida a los funcionarios lo que propició abusos como el de la exigencia de *sportulae* ilegales a los administrados en concepto de cobro por los servicios prestados a estos últimos. La legislación imperial trató de poner fin a estos abusos por medio de la *adaeratio* que consistía en el cambio en dinero del valor de las mercancías requisadas a los ciudadanos para el pago de los sueldos de los funcionarios; la *adaeratio* de los productos alimenticios se hacía habitualmente a un precio mayor que el de mercado, y ello en beneficio de los funcionarios que cobraban así las cantidades resultantes de dicha *adaeratio* pero en perjuicio de los ciudadanos que veían requisadas sus mercancías por un precio inferior de aquél. Por medio de una constitución del año 429 se trató de poner fin a esta situación mediante el sistema de verificar la *aederatio* de productos básicos en libras de oro para conseguir así una medida de cambio más objetiva; finalmente, Justiniano estableció que los pagos se hiciesen en sólidos o en libras de oro. Junto a lo anterior, las fuentes constatan la práctica habitual de muchos funcionarios de la Administración imperial de aceptar

sobornos o de recibir obsequios o propinas (*sportulae*) de los ciudadanos pudiendo calificarse como ambigua la respuesta dada por los emperadores a estos usos ya que osciló entre las prohibiciones y correspondientes sanciones y la reglamentación de las *sportulae* dentro de los límites marcados por la ley siempre que, en todo caso, hubiesen sido realizadas sin que mediase ningún tipo de coacción puesto que entonces darían lugar a la comisión de un *crimen repetundarum*. Justiniano llevó a cabo una política dirigida a impedir esas prácticas, por un lado, mediante la mejora de las retribuciones a los funcionarios en general, y por otra, por la regulación de las *sportulae* fijando las cantidades determinadas que debían pagar los ciudadanos a los funcionarios respectivos en atención a la naturaleza e importancia de las gestiones realizadas por aquéllos.

Los altos funcionarios en general gozaron en el ámbito procesal del privilegio de la *praescriptio fori* en virtud del cual se atribuía a los más altos órganos de la Administración el conocimiento de las causas dirigidas contra ellos, al menos por razón de los crímenes o delitos cometidos por los mismos en el ejercicio de sus funciones administrativas, siendo de esta forma juzgados por sus superiores jerárquicos. Así, las leyes atribuían dicha competencia, según los casos, al propio emperador que podía delegar en un juez nombrado al efecto, y a autoridades tales como el prefecto del pretorio, el *praefectus urbi*, por sí solo o asistido por cinco senadores (*iudicium quinquevirale*), el *comitatus*, el *comes sacrarum largitionum*, el

magister officiorum o los gobernadores provinciales. En particular, en caso de un *crimen peculatus* cometido en Roma por un *clarissimus* sería competente el *praefectus urbi* el cual iniciaba una investigación financiera llevada a cabo por inspectores del Fisco (*discussores*).

Cabe destacar también en este ámbito procesal que los altos funcionarios y los decuriones, así como sus descendientes hasta el tercer grado, gozaron del privilegio de la *militae auctoramentum* en virtud del cual no podían ser sometidos a tortura en el curso de un proceso penal, salvo en el caso de *crimen maiestatis*, siendo castigados severamente los gobernadores provinciales que no respetasen estas normas. Por otro lado, los *clarissimi* gozaban también, en las causas civiles, del privilegio del *domicilium dignitatis*, en función del cual podían elegir en los litigios con particulares entre estar domiciliados a efectos procesales en su provincia de residencia o en Roma o, en su caso, en Constantinopla.

- X) Los funcionarios tenían derecho a recibir un tratamiento honorífico y al uso de insignias y uniformes así como a la utilización de medios de transporte específicos que les eran asignados para el cumplimiento de su actividad administrativa; estas prerrogativas estaban sujetas a una normativa que sancionaba como *crimen falsi* el empleo fraudulento de insignias o del *cursus publicus*. Dentro de este campo, los altos funcionarios civiles y militares tenían derecho a ser alojados en domicilios particulares en sus desplazamientos oficiales (*metatum* o *munus hospitalitatis*), si bien con los límites y condicionamientos

establecidos en las leyes para evitar abusos que eran severamente reprimidos; por ejemplo, se castigaba con la pena de confiscación del patrimonio y el exilio perpetuo el abuso denominado *epidemeticum*, cometido principalmente por aquellos gobernadores provinciales que exigían el cobro de cantidades de oro a los ciudadanos obligados a prestarles alojamiento a cambio de que quedasen exentos de cumplir dicha obligación.

- XI)** Las leyes imperiales establecieron una normativa que tenía por objeto garantizar la independencia y libertad de actuación del funcionario como servidor público que debe atender exclusivamente tanto al interés de la Administración como al de los propios ciudadanos; dicha normativa se caracteriza por la preocupación de asegurar, por todos los medios a su alcance, la honestidad de los funcionarios y por la preeminencia del interés público. Con arreglo a estos principios las leyes fijaron, por ejemplo, un régimen de incompatibilidades en el desempeño de dos o más cargos por un mismo funcionario así como reglas como la establecida en C. J. 1.51.14 pr., que prohibía que los abogados en ejercicio pudiesen actuar como asesores <<de cualquiera de los magistrados a quienes está encomendada la administración de la República (...) no sea que aplicándose a ambos no desempeñe bien ninguno de los dos>>; también se impedía que un mismo magistrado municipal fuese nombrado como tal para dos cargos en una misma ciudad o en dos municipios diferentes debiendo optar en este último caso por su

municipio de origen; o que los funcionarios pudiesen dedicarse a actividades propias de banqueros y mucho menos con dinero público.

XII) En el marco de los principios referidos anteriormente, los emperadores centraron gran parte de su atención en la actuación de los gobernadores provinciales cuyos abusos originaron precisamente la publicación de las sucesivas *leges repetundarum*, en cuyo régimen jurídico se encuentra el origen de la idea –plenamente asentada en la jurisprudencia clásica romana y en la legislación imperial- de hacer responsables a los funcionarios públicos, en los diversos ámbitos de su actuación frente a los ciudadanos, por comportamientos tales como la exigencia de exacciones ilícitas, la aceptación de donaciones indebidas (cohecho), el tráfico de influencias, la apropiación o malversación de fondos públicos, o la prevaricación en la administración de la justicia. El Derecho Romano no se limitó, a este respecto, a establecer reglas de conducta y prohibiciones a cargo de los funcionarios sino que fijó procedimientos procesales para hacer efectiva su responsabilidad individual en un tiempo histórico en el que la misma no se diluía en el ámbito de la “responsabilidad colectiva de los entes públicos”.

Como resultado de las ideas referidas vemos que las leyes prohibieron el matrimonio de los gobernadores provinciales romanos con mujeres de la provincia de destino extendiéndose dicha prohibición a los hijos varones de aquéllos, para garantizar así al

máximo su independencia en la gestión de los asuntos provinciales, hasta tal punto de que los hijos nacidos de dichas uniones se consideraban ilegítimos; tampoco podían ser nombrados gobernadores en su provincia de origen o en la que tuviesen su domicilio; asimismo se les prohibió la compra de inmuebles y de bienes muebles de cierto valor en la provincia en la que ejercían sus funciones, por sí o por persona interpuesta, así como la aceptación de regalos que fueran más allá de ``cosas que se puedan comer o beber en pocos días``.

XIII) Las leyes imperiales se ocuparon también de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios frente a la propia Administración contemplando como causas de sanción administrativa e incluso del cese de la relación funcional: la ineficacia o incompetencia en el ejercicio de sus funciones, como sucedía particularmente con los profesores y médicos públicos, o el absentismo injustificado, si bien debemos advertir que los emperadores debieron tolerarlo en cierta medida si tenemos en cuenta que, por ejemplo, sólo se disponía la expulsión del funcionario si su ausencia injustificada hubiese durado al menos cuatro años.

XIV) La existencia de controles institucionales dirigidos a hacer responder a los funcionarios en caso de que se enriqueciesen indebidamente con el manejo de dinero público aparece ya en el Derecho Ático y en las leyes municipales romanas. En la legislación imperial se

establecía que los magistrados o altos funcionarios debían responder de la gestión económica realizada durante el ejercicio de sus funciones; de esta forma, destacamos que la *lex Iulia repetundarum* dispuso que los gobernadores provinciales salientes debían depositar dos copias de la contabilidad referente a su gestión en dos ciudades de su provincia de destino y presentar una tercera en el *aerarium* de Roma. Asimismo, se disponía que las cuentas públicas presentadas por los altos funcionarios podían ser objeto de inspección por las autoridades competentes durante el plazo de veinte años; y en caso de fallecimiento del funcionario podían ser investigados sus herederos durante los diez años siguientes al mismo por razón de los errores que fueren descubiertos en dicha contabilidad.

Ahora bien, desde tiempos de la República rigió en el Derecho Romano la regla, de general aplicación, según la cual sólo después de cesar en el cargo se haría efectiva la responsabilidad de los magistrados y funcionarios por los errores o delitos cometidos en su actuación administrativa. Como corolario de esta regla las leyes fijaron la obligación del funcionario de permanecer durante cincuenta días en el lugar o provincia de destino para que en ese plazo respondiese a cualquier denuncia o reclamación formulada por un ciudadano o autoridad pública relativa a la gestión realizada o a las cuentas presentadas. En caso de fuga del funcionario durante este plazo, el mismo era perseguido como reo de *crimen maiestatis*. La obligación de permanecer durante cincuenta días fue recibida por el Derecho histórico español: así en las Partidas y en el Ordenamiento

de Alcalá se regula en términos análogos el llamado ``juicio de residencia``.

Transcurrido el plazo de los cincuenta días no prescribía la responsabilidad del funcionario romano. El Digesto de Justiniano mantuvo el periodo de cinco años que establecía el Derecho clásico para el *crimen peculatus*, pero la legislación postclásica no recogía ningún plazo de prescripción en esta materia como resulta también de las fuentes literarias (caso *Orfitus*).

- XV)** La rendición de cuentas tenía básicamente por objeto asegurar las ``manos limpias`` del funcionario responsable del manejo de dinero público, el cual en caso de que cometiese un delito de apropiación indebida o malversación de fondos debía responder por el *crimen peculatus*, o bien por el *crimen de residuis*. En el primer caso, además de la devolución de la cantidad ilícitamente obtenida, el autor del delito debía satisfacer la pena pecuniaria del cuádruplo de la cantidad malversada; ahora bien, las leyes de época postclásica castigaron los supuestos más graves de *peculatus* con penas mucho más graves que podían llegar hasta la pena capital. El *crimen de residuis* tenía lugar cuando el funcionario se apropiaba de los remantes no gastados de los fondos que recibió para gestionar una obra o servicio público o para la adquisición de bienes por cuenta de la Administración: en tal caso, y a diferencia del supuesto anterior, el funcionario sólo respondía con la obligación de devolver la cantidad indebidamente apropiada más un tercio de la misma.

XVI) Los principios y reglas del Derecho Romano relativos a la responsabilidad de los funcionarios, recogidos fundamentalmente en el Código Teodosiano y en la Compilación de Justiniano, se reciben en la tradición jurídica europea a partir de la labor de los glosadores y comentaristas medievales. Así vemos que en la Baja Edad Media se estableció en Castilla un sistema de controles e inspecciones de los oficiales del rey los cuales debían rendir cuentas de su actuación sometiéndose al “juicio de residencia”.

XVII) La legislación bajomedieval castellana, tomando básicamente como modelo las fuentes del Derecho Romano, tipificó como delitos conductas de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, constitutivas de traición, falsificación de documentos, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, absentismo injustificado, etc..., y estableció reglas dirigidas a asegurar la independencia y libertad de actuación del funcionario, como la que prohibía, al igual que en Derecho Romano, el matrimonio del mismo con mujer de la provincia de destino; asimismo, se recibe en la legislación medieval la regla que imponía la responsabilidad civil del propio funcionario por los daños ocasionados por su actuación dolosa o negligente.

ÍNDICE DE FUENTES

I. FUENTES EPIGRÁFICAS Y PAPIROLÓGICAS.

A. FUENTES EPIGRÁFICAS.

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

CIL., I, 593.....	p. 205 n. 296
CIL., II, 483.....	p. 362
CIL., II, 1963.....	p. 344 n. 533
CIL., III, 12044.....	p. 228 n. 338
CIL., V, 2781.....	p. 228 n. 338
CIL., VI, 1585 a.....	p. 365 n. 574
CIL., VI, 1765.....	p. 169 n. 251
CIL., VI, 6190.....	p. 333 n. 511
CIL., VI, 8440.....	p. 333 n. 511
CIL., VIII, 17896.....	p. 372 n. 590; 453
CIL., XIV, 4011.....	p. 333 n. 511

FRAGMENTA DE IURE FISCO

2.16-17.....	p. 655 n. 992
--------------	---------------

LEX ACILIA REPETUNDARUM

2.....	p. 556 n. 866
8.....	p. 629 n. 954
76.....	p. 556 n. 866

LEX MUNICIPII FLAVII IRNITANI

26.....	p. 344
55.....	p. 231 n. 342
59.....	p. 344
60.....	p. 354 n. 550
63.....	p. 157 n. 237
67.....	p. 616 n. 934
68.....	p. 616 n. 934
73.....	p. 345 n. 533
86.....	p. 212

LEX MUNICIPII MALACITANI

54.....	p. 231 n. 342
67.....	p. 616 n. 934
90.....	p. 185 n. 258

LEX URSONENSIS

81.....	p. 354 n. 550
105.....	p. 231 n. 342

LEX SALPENSANA

26.....	p. 344 n. 533
---------	---------------

LEX MUNICIPII TARENTINI

Il. 7-20.....	p. 616 n. 934
Il. 10-11.....	p. 354 n. 550

LEX IULIA MUNICIPALIS (TABULA HERACLEENSIS)

89.....	p. 190 n. 266
122.....	p. 205 n. 296

B. FUENTES PAPIROLÓGICAS.

P. CAIRO MASPERO

(J. MASPERO, *Papyrus grecs d'époque byzantine*, El Cairo, 1910-1916).

67126.....	p. 247 n. 380
------------	---------------

P. OXY

(*The Oxyrhynchus Papyri*)

82.....	p. 351 n. 545
972.....	p. 351 n. 545
1642.....	p. 351 n. 545
2135.....	p. 351 n. 545

PSI

(*Pubblicazione della società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini*, Firenze, 1912-1953).

86.....p. 351 n. 545

II. FUENTES LITERARIAS.

AMIANO MARCELINO

Rerum gestarum libri

15.5.36.....p. 124 n. 191
16.5.11.....p. 361; 455 n. 707
16.8.12.....p. 229 n. 338
19.12.1-19.....p. 497 n. 769
21.16.3.....p. 266 n. 415
22.4.9.....p. 444 n. 686
24.1.9.....p. 266 n. 415
25.10.15.....p. 266 n. 415
26.6.....p. 126 n. 196
26.10.7.....p. 414 n. 647
27.3.2.....p. 640 n. 967
27.7.3.....p. 639; 640 n. 967
28.1.18.....p. 489 n. 757
30.4.19.....p. 445
30.9.2.....p. 267 n. 415
30.9.3.....p. 266 n. 415

ANÓNIMO

De rebus bellicis

4.4.....p. 447 n. 692

ARISTÓTELES

Athenaion Politeia

55.2-5.....p. 388

ASCONIO

Pro M. Scauro

20.....p. 50 n. 61

AURELIO VÍCTOR

De Caesaribus

13.9.....p. 360 n. 560

39.44.....p. 116 n. 183

AUSONIO

Protrepticus ad nepotem

43-44.....p. 263 n. 410

BOECIO

Philosophiae consolationis libri quinque

1.4.13.....p. 122 n. 188

CASIODORO

Variae

1.10.....p. 459

1.42.3.....p. 335; 428

1.43.....p. 364 n. 570

3.12.....p. 364 n. 570

6.4.....p. 336

6.69.....p. 116 n. 182

8.21.....p. 195 n. 279

CÉSAR

De bello Gallico

2.22.....p. 46 n. 57

CICERÓN

Ad familiares

2.17.2.....p. 617

2.17.4.....p. 555 n. 864

5.20.1-7.....p. 617

8.8.3.....p. 556 n. 866

Ad Atticum

5.10.2.....	p. 555 n. 864
16.3.....	p. 555 n. 864
21.5.....	p. 555 n. 864

Ad Quintum fratrem

1.1.....	p. 88 n. 130
----------	--------------

Ad Brutum

14.53.....	p. 603 n. 924
------------	---------------

De divinatione

2.36.76.....	p. 46 n. 56
--------------	-------------

De inventione

1.34.58.....	p. 46 n. 55
--------------	-------------

De officiis

2.17.59.....	p. 188 n. 265
2.57.....	p. 28 n. 16

De republica

2.34.59.....	p. 57 n. 77
--------------	-------------

In Verrem

1.1.....	p. 50 n. 61
----------	-------------

2.1.34.....	p. 46
4.5.....	p. 554 n. 863
5.18.45.....	p. 563 n. 874

Philippicae

1.8.19.....	p. 531
3.9.22.....	p. 37

Pro Caelio.

9.21.....	p. 28 n. 16
-----------	-------------

Pro Cluentio

41.114.....	p. 137 n. 207
-------------	---------------

Pro Milone

19.....	p. 503 n. 779
---------	---------------

CLAUDIANO

Epithalamium dictum Palladio et Celerinae

85-91.....	p. 369 n. 584
------------	---------------

CLAUDIO MAMERTINO

Panegyrici latini

3/11.1.4.....	p. 446 n. 689
---------------	---------------

CONSTANTINO VII PORFIROGÉNETA

De Caeremoniis aulae byzantinae

I, 84.....	p. 361
I, 85.....	p. 363

DION CASIO

Historiae romanae

48.34.4-5.....	p. 243 n. 371
58.8.3.....	p. 629 n. 954
60.17.5-8.....	p. 301
69.16.....	p. 563 n. 874

DIONISIO DE HALICARNASO

Antiquitates romanae

5.25.3.....	p. 200 n. 286
-------------	---------------

EPÍCTETO

Dissertationes

1.10.5.....	p. 333 n. 511
-------------	---------------

ESQUINES

3, 21.....p. 615 n. 934

EUSEBIO DE CESAREA

Vita Constantini

l. 52.....p. 271 n. 422

l. 54.....p. 271 n. 422

FESTO

De verborum significatu cum Pauli epitome (ed. Lindsay).

v. *arcere*.....p. 27

v. *depontani*.....p. 194

v. *peculatus*.....p. 618 n. 938

v. *praetor ad portam*.....p. 362 n. 564

v. *sexagenarios*.....p. 194

FRONTINO

De aquis urbis Romae

128.....p. 96

LACTANCIO

De mortibus persecutorum

11.3.....	p. 271 n. 422
22.....	p. 266 n. 415
37.6.....	p. 229 n. 338

Divinae Institutiones

v. 34.....	p. 407
------------	--------

LIBANIO

Orationes

1.179.....	p. 361
1.185.....	p. 264 n. 410
1.234.....	p. 264 n. 410
3.441.....	p. 264 n. 410
14.12.....	p. 251 n. 387
18.135-140.....	p. 251 n. 387
48.26.....	p. 264 n. 410
63.8 ss.....	p. 601

Epistulae

84.....	p. 333 n. 511
916 XI, 62 ss.....	p. 264 n. 410

LUCIANO DE SAMOSATA

Pro lapsu inter salutandum

13.....	p. 362 n. 564
---------	---------------

JUAN LIDO

De Magistratibus Reipublicae Romanae

1.15.....	p. 99 n. 150
2.4.....	p. 512 n. 793
3.7.....	p. 262 n. 406
3.21.....	p. 262 n. 406
3.30.....	p. 588 n. 897

OROSIO

Historia adversus paganos

VII. 28.18.....	p. 271 n. 422
-----------------	---------------

PANEGYRICI LATINI

4.5.....	p. 263 n. 410
7.23.....	p. 263 n. 410
9.2.....	p. 442 n. 680

PLINIO

Epistulae

1.19.2.....	p. 212 n. 308
2.9.....	p. 301
4.9.....	p. 554 n. 864
10.85-86-87.....	p. 301

Traiani Panegyricus

67.8.....p. 360 n. 560

PLINIO EL VIEJO

Naturalis Historia

7.28.104.....p. 200 n. 286

PLUTARCO

Sertorius

4.....p. 200 n. 286

6.....p. 200 n. 286

PROCOPIO

Historia Arcana

22,12.....p. 320 n. 502

24, 2-3.....p. 458

27, 26-27.....p. 284

RUFINO

Historia Ecclesiastica

11.16.....p. 272 n. 424

SALVIANO DE MARSELLA

De Gubernatione Dei

1, 2, 11.....	p. 445
5, 28-29.....	p. 445 n. 689

SAN AMBROSIO DE MILÁN

Exposito Psalmi CXVIII

118, 20, 49.....	p. 280
------------------	--------

Serm.

7.....	p. 42
--------	-------

SAN GAUDENCIO DE BRESCIA

Praefatio ad Benivolum

5.....	p. 272 n. 424
--------	---------------

SAN GREGORIO NACIANCENO

Orationes

7, 9-13.....	p. 272 n. 424
43, 26.....	p. 266 n. 415

SAN JUAN CRISÓSTOMO

C. Opp.

3.12.369.....p. 264 n. 410

SAN LEÓN MAGNO

Epistulae

4.1.....p. 235 n. 353

SÉNECA

Controversiae

4.2.....p. 200 n. 286

5.6.....p. 631 n. 954

SERVIO

In Aeneidem (In Vergilii carmina commentarii)

I, 41.....p. 57 n. 75

SIDONIO APOLINAR

Epistulae

I.....p. 246

l,7,1-13.....p. 489 n. 755

Carmina

5,558-561.....p. 360 n. 560

SÍMACO

Epistulae

2.63.....p. 41 n. 41

3.67.....p. 41 n. 41

3.72.....p. 41 n. 41

3.87.....p. 41 n. 41

4.43.....p. 604 n. 925

4.70.....p. 164 n. 247

5.35-36.....p. 41 n. 41

5.76.....p. 41 n. 41; 164 n. 247

6.42.....p. 634 n. 957

7.53.....p. 41 n. 41; p. 604 n. 925

7.96.....p. 166 n. 248

7.96.3.....p. 642 n. 967

7.123-124.....p. 41 n. 41

9.5.....p. 604 n. 925

9.59.....p. 604 n. 925

9.130.....p. 640 n. 967

9.150.....p. 642 n. 968

9.150.1.....p. 641 n. 967

9.150.2.....p. 641 n. 967

9.150.3.....p. 641 n. 967

10.34.1.....p. 640 n. 967

10.34.2.....p. 641 n. 967

10.34.3.....p. 641 n. 967

10.34.4.....	p. 641 n. 967
10.34.5.....	p. 640 n. 967
10.34.6.....	p. 640 n. 967; 641 n. 967
10.34.7.....	p. 641 n. 967
10.34.11.....	p. 641 n. 967
10.34.12.....	p. 641 n. 967
15.....	p. 456 n. 710
23.8.....	p. 430
25.....	p. 263 n. 410
28.....	p. 102 n. 156
57.....	p. 268

Relationes

12.2-3.....	p. 268 n. 418
15.....	p. 456 n. 710
17.....	p. 267
20.1.....	p. 514
23.2.....	p. 108 n. 167
23.8.....	p. 430
25-26.....	p. 164 n. 247
25.4.....	p. 268 n. 418
26.7.....	p. 268 n. 418
30.....	p. 122 n. 188
34.....	p. 642 n. 968
34.6.....	p. 166 n. 248
36.....	p. 495 n. 766
37.....	p. 168 n. 250
48.....	p. 485

SINESIO

Epistulae

6.131.....p. 447 n. 692

SOZOMENO

Historia Ecclesiastica

7,13, 5 ss.....p. 272 n. 424

SUETONIO

De vita Caesarum

Caesar

23.....p. 28 n. 16

Augustus

35.....p. 100

Tiberius

22.....p. 333 n. 511

Claudius

25.....p. 231 n. 342

Vespasianus

14.....p. 361

TÁCITO

Dialogus de oratoribus

7.....p. 333 n. 511

Annales

3, 33-34.....	p. 529
13.27.1.....	p. 231 n. 342

TEMISTIO

Orationes

17.....	p. 364 n. 570
18, 224 b.....	p. 333 n. 511
31,353 d.....	p. 514 n. 796

TITO LIVIO

Ab urbe condita

6.6.11.....	p. 46
7.42.2.....	p. 85 n. 125
8.28.8.....	p. 57 n. 77
8.32.6.....	p. 49 n. 60
21.63.....	p. 563 n. 874
22.2.....	p. 603 n. 924
27.20-21.....	p. 603 n. 924
29.19.6.....	p. 603 n. 924
31.50.7.....	p. 343; 344
32.27.7.....	p. 200 n. 286
32.31.6.....	p. 200 n. 286
33.21.9.....	p. 200 n. 286
33.24.4.....	p. 200 n. 286

40.29.....	p. 95
40.44.1.....	p. 188

Periochae omnium librorum ab urbe condita

47.....	p. 364 n. 571
---------	---------------

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

Capitolinus,

M. Antonini pii vita,

11.....	p. 301
29.....	p. 301 n. 463

Lampridius,

Heliogabali vita,

6.....	p. 302
--------	--------

Alexandri Severi vita,

10.8.....	p. 362
25-26.3.....	p. 575 n. 890
35-36.....	p. 302
49.....	p. 302
49.1.....	p. 333; n. 511

Aureliani vita

9, 2-9.....	p. 458 n. 713
46.5.....	p. 512 n. 793

Spartianus,

Pescennius Niger

5.....	
7.5.....	p. 550

VARRÓN

De lingua latina

6, 30.....	p. 392 n. 626
7, 105.....	p. 57 n. 77

VEGECIO

Epitome rei militaris

2.5.....	p. 219 n. 322; 346 n. 535
----------	---------------------------

ZÓSIMO

Historia Nea

4.14.1.....	p. 485 n. 745
-------------	---------------

III. FUENTES JURÍDICAS.

A. FUENTES PREJUSTINIANEAS.

GNOMON DEL IDIOS LOGOS

70.....	p. 65 n. 90; 570 n. 885
111.....	p. 561 n. 872

INSTITUCIONES DE GAYO

1.32 b.....	p. 231 n. 342
1.191.....	p. 617
4.16.....	p. 49 n. 60

SENTENCIAS DE PAULO

1.13.....	p. 357 n. 558
2.19.10.....	p. 536 n. 825
2.19.11.....	p. 537
2.19.12.....	p. 537
2.20.2.....	p. 537
3.4.3.....	p. 461 n. 720
5.25.12.....	p. 511; 557 n. 866
5.27.1.....	p. 619 n. 938
5.28b.....	p. 137 n. 207

TITULI EX CORPORE ULPIANI

3.5.....	p. 231 n. 342
----------	---------------

NOTITIA DIGNITATUM

Occidens

16.....	p. 369 n. 583
<i>Oriens</i>	
18.....	p. 369 n. 583

CÓDIGO TEODOSIANO

1.1.1.....	p. 104 n. 161
1.1.6.....	p. 40 n. 40
1.1.9.....	p. 186
1.3.1.....	p. 40 n. 40
1.5.1.....	p. 92; 137 n. 207; 138 n. 207
1.5.2.....	p. 139 n. 207
1.5.3.....	p. 139 n. 207
1.5.5.....	p. 135 n. 204
1.5.8.....	p. 414 n. 646
1.5.9.....	p. 92; 200 n. 286; 588; 607; 609
1.5.11.....	p. 626 n. 947
1.5.12.....	p. 135 n. 204
1.5.13.....	p. 484
1.6.7.....	p. 164 n. 246
1.6.9.....	p. 621 n. 938
1.6.11.....	p. 92; 482 n. 743
1.6.12.....	p. 416; 434 n. 673
1.7.2.....	p. 412
1.7.23.....	p. 33 n. 23
1.8.1.2.....	p. 370
1.8.21.....	p. 33 n. 23
1.9.1.....	p. 204 n. 295; 217; 304; 366; 414
1.9.2.....	p. 414
1.9.3.....	p. 265; 367; 416
1.10.1.....	p. 625
1.10.2.....	p. 626
1.10.4.....	p. 138 n. 207
1.10.5.....	p. 430 n. 668; 484; p. 604 n. 925

1.10.6.....	p. 626 n. 946
1.10.7.....	p. 92; 608; 609
1.10.8.....	p. 368 n. 580; 434; 434 n. 673
1.11.1.....	p. 92
1.12.1.....	p. 32 n. 21; 138 n. 207
1.12.2.....	p. 40 n. 40
1.12.4.....	p. 186
1.12.6.....	p. 92; 252; 423
1.12.24.....	p. 252 n. 389
1.13.1.....	p. 421; 422
1.15.5.....	p. 421; 422
1.15.6.....	p. 264; 609
1.15.12.....	p. 423
1.15.13.....	p. 423
1.15.16.....	p. 512 n. 793
1.15.17.....	p. 92; 132 n. 204; 608
1.16.1.....	p. 138 n. 207
1.16.3.....	p. 92; 138 n. 207; 139 n. 207
1.16.4.....	p. 32 n. 21; 506 n. 784
1.16.6.....	p. 137 n. 207; 138 n. 207
1.16.7.....	p. 137 n. 207; 138 n. 207; 446; 452; 557 n. 866
1.16.8.....	p. 136 n. 207
1.16.9.....	p. 139 n. 207
1.16.10.....	p. 139 n. 207
1.16.11.....	p. 133 n. 204; 149 n. 224
1.22.1.....	p. 132 n. 204
1.22.2.....	p. 132 n. 204; 139 n. 207
1.29.1.....	p. 566 n. 879
1.29.2.....	p. 566 n. 879
1.29.3.....	p. 381
1.29.5.....	p. 139 n. 207
1.29.6.....	p. 380; 401; 608; 608 n. 931
1.29.7.....	p. 152
1.29.8.....	p. 300 n. 461
1.31.2.....	p. 453 n. 703

1.32.3.....	p. 40 n. 40; 124 n. 191; 622; 658
1.32.4.....	p. 351
1.32.5.....	p. 40 n. 40
1.32.6.....	p. 412
1.34.1.....	p. 113
1.34.2.....	p. 462
1.34.3.....	p. 627
1.35.3.....	p. 142 n. 215; 627
2.1.3.....	p. 58
2.1.4.....	p. 482 n. 743; 491
2.1.6.....	p. 138 n. 207; 139 n. 207
2.1.12.....	p. 488 n. 753
2.6.1.....	p. 139 n. 207
2.6.2.....	p. 92; 139 n. 207
2.8.19.....	p. 455
2.10.2.....	p. 139 n. 207
2.10.3.....	p. 139 n. 207
2.10.4.....	p. 139 n. 207
2.10.6.....	p. 462
2.12.6.....	p. 479 n. 739
2.17.1.....	p. 189
2.29.1.....	p. 305; 306 n. 470; 309 n. 478; 310
2.29.2.....	p. 307; 309 n. 478; 310
2.30.1.....	p. 139 n. 207
2.30.17.....	p. 92
2.33.3.....	p. 575
2.33.4.....	p. 575
3.6.1.....	p. 540; 543; 544
3.11.1.....	p. 540; 543
3.12.3.....	p. 549 n. 856
4.6.3.....	p. 546
4.10.3.....	p. 233; 234
4.22.4.....	p. 139 n. 207
5.15.20.....	p. 134 n. 204
6.2.7.....	p. 108 n. 167

6.2.13.....	p. 480 n. 740
6.2.14.....	p. 126
6.2.20.....	p. 369
6.2.26.....	p. 480 n. 740
6.4.1.....	p. 108 n. 167; 192
6.4.2.....	p. 108 n. 167; 192
6.4.6.....	p. 108 n. 167
6.4.7.....	p. 108 n. 167
6.4.8..	p. 101 n. 153; 107 n. 167
6.4.13.....	p. 108 n. 167; 211
6.4.13.1.....	p. 108 n. 167
6.4.13.2.....	p. 108 n. 167
6.4.17.....	p. 108 n. 167
6.4.18.....	p. 108 n. 167; 298 n. 459
6.4.20.....	p. 108 n. 167
6.4.21.....	p. 108 n. 167
6.4.22.....	p. 139 n. 207
6.4.23.....	p. 334 n. 511
6.5.1.....	p. 414 n. 646
6.5.2.....	p. 393; 621 n. 938
6.6.1.....	p. 104 n. 160
6.7.1.....	p. 334 n. 511; 405
6.9.2.....	p. 362 n. 565
6.10.1.....	p. 655
6.16.1.....	p. 654
6.17.1.....	p. 654
6.18.1.....	p. 412
6.21.1.....	p. 654
6.22.....	p. 334
6.22.1.....	p. 304; 407
6.22.5.....	p. 335 n. 514
6.23.1.....	p. 480 n. 740; 654
6.23.3.....	p. 134 n. 204
6.23.4.....	p. 134 n. 204
6.24.2.....	p. 192; 192 n. 272

6.24.3.....	p. 303; 364 n. 569
6.24.6.....	p. 607
6.24.8.....	p. 128 n. 199
6.24.9.....	p. 128 n. 199
6.24.10.....	p. 128 n. 199
6.26.2.....	p. 45 n. 53
6.26.5.....	p. 411
6.26.8.....	p. 430; 587
6.26.11.....	p. 364; 414 n. 646
6.26.17.....	p. 364
6.26.18.....	p. 418; 511 n. 792
6.27.1.....	p. 204 n. 295
6.27.3.....	p. 416; 421
6.27.4.....	p. 186 n. 260; 319; 334 n. 514; 414; 416
6.27.6.....	p. 480 n. 740
6.27.7.....	p. 416
6.27.9.....	p. 416
6.27.13.....	p. 45 n. 53
6.27.14.....	p. 41 n. 41; 415; 610 n. 933
6.27.15.....	p. 606
6.27.16.....	p. 604 n. 925
6.27.18.....	p. 204 n. 295; 265
6.27.19.....	p. 320 n. 501; 416; 430 n. 666
6.27.23.....	p. 367 n. 579; 424
6.28.8.....	p. 264; 264 n. 412; 319; 430 n. 666; 589
6.29.1.....	p. 117 n. 183
6.29.2.1.....	p. 44 n. 49
6.29.3.....	p. 120 n. 186
6.29.4.....	p. 117 n. 183; 120 n. 186; 304; 319
6.29.5.....	p. 120 n. 186
6.29.6.....	p. 120 n. 186; 364
6.30.4.....	p. 412
6.30.5.....	p. 429
6.30.7.....	p. 304; 442 n. 677; 449
6.30.9.....	p. 413

6.30.10.....	p. 139 n. 207; 479 n. 739
6.30.11.....	p. 304; 442 n. 677; 456
6.30.12.....	p. 431
6.30.13.....	p. 419
6.30.15.....	p. 186 n. 260; 216; 408; 421
6.30.16.....	p. 223 n. 320; 224; 365; 367; 368; 421; 430 n. 668
6.30.17.....	p. 224; 368; 408
6.30.20.....	p. 653 n. 984
6.31.1.....	p. 134 n. 204; 139 n. 207; 447 n. 692
6.32.1.....	p. 434
6.32.2.....	p. 414 n. 646; 416
6.35.1.....	p. 134 n. 204; 250; p. 480 n. 740; 654
6.35.3.....	p. 250; 365; 419; 480 n. 740
6.35.6.....	p. 134 n. 204
6.35.8.....	p. 653
6.35.10.....	p. 134 n. 204
6.35.11.....	p. 41 n. 41; 134 n. 204; 146 n. 219; 653 n. 984
6.35.12.....	p. 251 n. 388
6.35.13.....	p. 393; 411
6.35.14.....	p. 41 n. 41; 254
6.35.15.....	p. 462
6.37.1.....	p. 217; 225; 244
6.38.1.....	p. 333 n. 511
7.1.5.....	p. 200 n. 288
7.1.7.....	p. 304; 364 n. 569; 430
7.1.14.....	p. 192; 192 n. 273
7.1.17.....	p. 219 n. 322
7.2.....	p. 214; 215
7.2.1.....	p. 186 n. 260; 215; 216; 216 n. 316; 230; 250 n. 384
7.2.2.....	p. 186 n. 260; 215; 216; 216 n. 316; 250 n. 384
7.2.6.....	p. 220 n. 324
7.2.10.....	p. 220 n. 324
7.2.20.....	p. 220 n. 324
7.4.....	p. 444
7.4.11.....	p. 135 n. 204

7.4.12.....	p. 134 n. 204
7.4.18.....	p. 134 n. 204
7.4.20.....	p. 448
7.4.21.....	p. 138 n. 207
7.4.22.....	p. 134 n. 204
7.4.24.....	p. 448 n. 693
7.4.28.....	p. 135 n. 204
7.4.30.....	p. 134 n. 204; 448 n. 693
7.4.34.....	p. 593
7.4.35.....	p. 134 n. 204; 449
7.6.1.....	p. 457 n. 711
7.6.2.....	p. 457 n. 711
7.6.3.....	p. 457 n. 711
7.6.4.....	p. 457 n. 711; 512
7.6.5.....	p. 457 n. 711
7.8.3.....	p. 101 n. 153; 507
7.8.4.....	p. 507 n. 785
7.8.5.2.....	p. 505
7.8.5.3.....	p. 505
7.8.6.....	p. 506 n. 784
7.8.10.2.....	p. 506 n. 785
7.8.12.....	p. 507 n. 785
7.8.15.....	p. 507 n. 785
7.9.1.....	p. 508
7.9.2.....	p. 508
7.9.3.....	p. 508
7.9.4.....	p. 508
7.11.1.....	p. 507 n. 785
7.12.2.....	p. 365; 604; 606
7.12.3.....	p. 606
7.13.1.....	p. 250 n. 384
7.13.7.....	p. 134 n. 204
7.13.8.....	p. 186; 218
7.13.9.....	p. 134 n. 204; 186
7.13.11.....	p. 241 n. 364

7.13.16.....	p. 213; 237 n. 357
7.18.1.....	p. 145 n. 218
7.18.7.....	p. 219 n. 322
7.18.12.....	p. 219 n. 322
7.18.14.....	p. 219 n. 322
7.18.16.....	p. 605
7.20.2.....	p. 653
7.20.3.3.....	p. 250 n. 384
7.20.5.....	p. 128
7.20.12.1.....	p. 588 n. 898
7.20.13.....	p. 134 n. 204
7.22.1.....	p. 42 n. 43; 147 n. 221
7.22.2.....	p. 193
7.22.3.....	p. 323
7.22.6.....	p. 219
7.22.8.....	p. 219
7.24.1.....	p. 456
8.1.1.....	p. 264
8.1.2.....	p. 414 n. 646
8.1.4.....	p. 145 n. 219; 565
8.1.6.....	p. 134 n. 204; 406 n. 636; 565
8.1.8.....	p. 146 n. 219
8.1.9.....	p. 135 n. 204
8.1.10.....	p. 134 n. 204; 264 n. 412; 406 n. 636
8.1.12.....	p. 132 n. 204; 135 n. 204
8.1.16.....	p. 433; 434
8.2.1.....	p. 429 n. 665
8.2.4.....	p. 500 n. 775
8.2.5.....	p. 239
8.3.1.....	p. 132 n. 204
8.4.1.....	p. 448 n. 693
8.4.6.....	p. 135 n. 204
8.4.16.....	p. 609
8.4.20.....	p. 367 n. 577
8.4.21.....	p. 430

8.4.22.....	p. 430
8.4.25.....	p. 431
8.4.30.....	p. 258; 523 n. 799
8.5.....	p. 119 n. 186
8.5.2.....	p. 119 n. 186; 605 n. 927
8.5.4.....	p. 119 n. 186
8.5.5.....	p. 120 n. 186
8.5.6.....	p. 120 n. 186
8.5.8.....	p. 120 n. 186
8.5.9.....	p. 120 n. 186
8.5.12.....	p. 119 n. 186; 120 n. 186
8.5.19.....	p. 120 n. 186
8.5.22.....	p. 120 n. 186
8.5.23.....	p. 120 n. 186
8.5.25.....	p. 335 n. 514
8.5.30.....	p. 120 n. 186
8.5.32.....	p. 457
8.5.35.....	p. 120 n. 186
8.5.36.....	p. 120 n. 186
8.5.38.....	p. 119 n. 186; 120 n. 186
8.5.39.....	p. 119 n. 186; 120 n. 186
8.5.40.....	p. 119 n. 186; 120 n. 186
8.5.41.....	p. 120 n. 186
8.5.43.....	p. 119 n. 186
8.5.44.....	p. 119 n. 186; 120 n. 186
8.5.46.....	p. 41 n. 41
8.5.47 pr.....	p. 119 n. 186
8.5.52.....	p. 120 n. 186
8.5.57.....	p. 120 n. 186
8.5.58.....	p. 120 n. 186
8.5.60.....	p. 120 n. 186
8.5.63.....	p. 120 n. 186
8.5.....	p. 119 n. 186
8.7.3.....	p. 323
8.7.6.....	p. 430

8.7.7.....	p. 341
8.7.9.....	p. 430
8.7.10.....	p. 254 n. 393; 607
8.7.11.....	p. 430
8.7.14.....	p. 125 n. 191; 430
8.7.15.....	p. 430
8.7.16.....	p. 304
8.7.18.....	p. 608
8.7.19.....	p. 42 n. 43
8.7.20.....	p. 609
8.7.21.....	p. 341
8.8.2.....	p. 139 n. 207; 144 n. 218
8.8.4.....	p. 365; 551
8.8.9.....	p. 135 n. 204; 264; 434 n. 673
8.9.2.....	p. 453; 458
8.10.2.....	p. 139 n. 207
8.10.3.....	p. 134 n. 204
8.10.3.4.....	p. 149 n. 224
8.10.4.....	p. 104; 134 n. 204
8.11.1.....	p. 104 n. 162
8.11.2.....	p. 104 n. 162
8.11.3.....	p. 104 n. 162
8.11.4.....	p. 104 n. 162; 105
8.11.5.....	p. 104 n. 162
8.12.1.....	p. 309 n. 477
8.15.1.....	p. 627 n. 949
8.15.1.2.....	p. 564
8.15.2.....	p. 146 n. 219; 627 n. 949
8.15.3.....	p. 566; 627 n. 949
8.15.4.....	p. 566; 627 n. 949
8.15.5.....	p. 566; 627 n. 949
8.15.6.....	p. 627 n. 949
8.15.7.....	p. 627 n. 949
8.15.8.....	p. 627 n. 949
8.27.3.....	p. 557 n. 866

9.1.1.....	p. 138 n. 207; 486; 486 n. 747; 491
9.1.8.....	p. 139 n. 207
9.1.13.....	p. 482 n. 743; 487; 491
9.2.1.....	p. 495
9.2.2.....	p. 144 n. 218; 496 n. 767
9.2.7.....	p. 334 n. 511
9.3.1.....	p. 139 n. 207; 144 n. 218
9.3.1.1.....	p. 144 n. 218
9.3.4.....	p. 139 n. 207
9.3.5.....	p. 143 n. 218
9.3.6.....	p. 144 n. 218
9.4.14.....	p. 138 n. 207
9.5.1.....	p. 496
9.14.3.....	p. 503
9.16.6.....	p. 496
9.16.10.....	p. 482 n. 743
9.21.2.....	p. 145 n. 218
9.26.2.....	p. 432; 433
9.26.3.....	p. 433
9.26.4.....	p. 433
9.27.1.....	p. 334 n. 511; 335 n. 514; 608
9.27.2.....	p. 557 n. 866; 558 n. 866
9.27.3.....	p. 558 n. 866
9.27.4.....	p. 557 n. 866; 558 n. 866
9.27.5.....	p. 138 n. 207; 557 n. 866
9.27.6.....	p. 557 n. 866
9.28.1.....	p. 135 n. 204; 619 n. 938
9.28.2.....	p. 619 n. 938
9.30.1.....	p. 249 n. 382
9.35.1.....	p. 340; 498; 498 n. 771; 499
9.35.2.....	p. 499
9.35.3.....	p. 495; 496 n. 767; 499
9.38.7.....	p. 63
9.40.3.....	p. 225 n. 334
9.40.5.....	p. 139 n. 207; 225 n. 334

9.40.6.....	p. 225 n. 334
9.40.7.....	p. 225 n. 334
9.40.8.....	p. 139 n. 207
9.40.9.....	p. 225 n. 334
9.40.11.....	p. 209
9.40.15.....	p. 139 n. 207
9.40.18.....	p. 503
9.41.1.....	p. 139 n. 207
9.42.1.....	p. 228 n. 338
9.42.7.....	p. 228 n. 338
10.1.1.....	p. 92
10.1.5.....	p. 227 n. 336; 228 n. 338
10.1.16.....	p. 135 n. 204
10.2.2.....	p. 265 n. 412
10.4.1.....	p. 134 n. 204
10.7.1.....	p. 227; 228 n. 338
10.8.2.....	p. 228
10.9.1.....	p. 228 n. 338
10.16.3.....	p. 227 n. 336
10.17.3.....	p. 229 n. 338
10.20.1.....	p. 226; 226 n. 335; 557 n. 866
10.20.11.....	p. 226
10.20.13.....	p. 135 n. 204
10.20.14.....	p. 226
10.20.16.....	p. 352
10.22.4.....	p. 224
10.22.6.....	p. 186 n. 260; 249 n. 384
10.20.13.....	p. 135 n. 204
10.24.1.....	p. 124 n. 191; 135 n. 204; 576
10.24.2.....	p. 124 n. 191; 576; 619 n. 938
10.24.3.....	p. 135 n. 204
10.48(47).8.....	p. 557 n. 866
11.1.32.....	p. 134 n. 204
11.5.1.....	p. 366 n. 575
11.6.1.....	p. 110 n. 171

11.7.1.....	p. 133 n. 204; 134 n. 204
11.7.3.....	p. 134 n. 204
11.7.11.....	p. 153 n. 204
11.7.17.....	p. 121 n. 188
11.8.2.....	p. 133 n. 204
11.8.3.....	p. 566 n. 879
11.11.....	p. 567
11.11.1.....	p. 566 n. 877; 567
11.14.2.....	p. 135 n. 204
11.14.3.....	p. 135 n. 204
11.16.6.....	p. 116 n. 183
11.16.8.....	p. 557 n. 866
11.16.11.....	p. 134 n. 204; 557 n. 866
11.16.14.....	p. 479 n. 740
11.16.15.....	p. 101 n. 153; 479 n. 740; 480 n. 740
11.16.16.....	p. 480 n. 740
11.16.18.....	p. 101 n. 153; 479 n. 740
11.16.19.....	p. 480 n. 740
11.17.4.....	p. 480 n. 740
11.18.1.....	p. 101 n. 153; 113
11.22.3.....	p. 29
11.24.....	p. 305
11.24.1.....	p. 135 n. 204
11.24.2.....	p. 135 n. 204
11.24.3.....	p. 135 n. 204
11.24.4.....	p. 135 n. 204; 300 n. 461
11.24.5.....	p. 135 n. 204
11.24.6.8.....	p. 29
11.25.1.....	p. 110 n. 171
11.26.2.....	p. 134 n. 204
11.28.3.....	p. 134 n. 204
11.30.2.....	p. 139 n. 207; 144 n. 218; 385 n. 611
11.30.3.....	p. 139 n. 207
11.30.4.....	p. 139 n. 207
11.30.6.....	p. 139 n. 207

11.30.7.....	p. 487
11.30.8.....	p. 138 n. 207
11.30.9.....	p. 139 n. 207
11.30.10.....	p. 383
11.30.12.....	p. 384
11.30.16.....	p. 137 n. 207; 139 n. 207
11.30.19.....	p. 385
11.30.22.....	p. 139 n. 207
11.30.23.....	p. 483 n. 744; 487
11.30.29.....	p. 139 n. 207
11.30.31.....	p. 139 n. 207
11.30.53.....	p. 385
11.30.58.....	p. 139 n. 207
11.31.3.....	p. 150 n. 228
11.31.8.....	p. 378 n. 599
11.32.1.....	p. 92
11.34.2.....	p. 487
12.1.1.....	p. 134 n. 204
12.1.2.....	p. 378 n. 599
12.1.3.....	p. 249 n. 384
12.1.5.....	p. 333 n. 511
12.1.7.....	p. 190 n. 267
12.1.8.....	p. 378; 385
12.1.10.....	p. 250 n. 384
12.1.11.....	p. 221; 251 n. 386
12.1.13.....	p. 250 n. 384; 251 n. 386
12.1.16.....	p. 379
12.1.19.....	p. 190 n. 267; 192; 192 n. 274
12.1.20.....	p. 304; 333 n. 511
12.1.22.....	p. 251 n. 386
12.1.23.....	p. 386 n. 613
12.1.29.....	p. 379
12.1.31.....	p. 251
12.1.36.....	p. 303; 307 n. 474
12.1.44.....	p. 608 n. 930

12.1.47.....	p. 139 n. 207; 144 n. 218; 500 n. 775
12.1.56.....	p. 249 n. 384
12.1.63.....	p. 380
12.1.70.....	p. 148 n. 224; 364 n. 569
12.1.74.....	p. 334 n. 511
12.1.83.....	p. 249 n. 383
12.1.85.....	p. 166 n. 248; 500
12.1.87.....	p. 249 n. 384
12.1.88.....	p. 251
12.1.97.....	p. 563 n. 874
12.1.98.....	p. 249 n. 384
12.1.113.....	p. 250 n. 384
12.1.117.....	p. 134 n. 204; 500 n. 775
12.1.119.....	p. 29
12.1.120.....	p. 430 n. 668
12.1.122.....	p. 250 n. 385
12.1.128.....	p. 134 n. 204
12.1.133.....	p. 213
12.1.143.....	p. 252 n. 389
12.1.144.....	p. 252 n. 389
12.1.147.....	p. 250 n. 384; 365
12.1.150.....	p. 92
12.1.153.....	p. 252 n. 389
12.1.154.....	p. 250 n. 384; 252
12.1.157.....	p. 286 n. 451
12.1.158.....	p. 286 n. 452
12.1.159.....	p. 253
12.1.161.....	p. 253
12.1.171.1.....	p. 50 n. 62
12.1.174.....	p. 150
12.1.179.....	p. 135 n. 204; 253
12.1.180.....	p. 334 n. 511
12.1.181.....	p. 250 n. 384; 253
12.1.185.....	p. 134 n. 204
12.1.188.....	p. 254

12.3.1.....	p. 248 n. 382
12.5.1.....	p. 60; 376 n. 593
12.6.1.....	p. 132 n. 204; 135 n. 204
12.6.2.....	p. 134 n. 204
12.6.3.....	p. 135 n. 204
12.6.5.....	p. 148 n. 224
12.6.8.....	p. 148 n. 224
12.6.11.....	p. 135 n. 204
12.6.20.....	p. 148 n. 224
12.6.22.....	p. 133 n. 204
12.6.25.....	p. 212; 352
12.6.26.....	p. 642 n. 967
12.6.31.....	p. 249 n. 382
12.6.32.....	p. 485
12.9.1.....	p. 132 n. 204
12.11.2.....	p. 139 n. 207; 168 n. 250
12.12.9.....	p. 138 n. 207
12.12.12.....	p. 138 n. 207
12.14.....	p. 460 n. 718
12.16.10.....	p. 134 n. 204
12.19.3.....	p. 135 n. 204
12.19.12 pr.....	p. 116 n. 182
12.21.7.....	p. 259 n. 401
12.22(23).4.....	p. 116 n. 183
12.29.2.....	p. 411
12.36.6.....	p. 200 n. 288
13.3.9.....	p. 268 n. 419
13.5.12.....	p. 225 n. 334
13.5.17.....	p. 225 n. 334
13.5.36.....	p. 135 n. 204
13.10.7.....	p. 150 n. 229
13.10.8.....	p. 135 n. 204
13.11.1.....	p. 609
13.11.8.....	p. 92; 609
13.11.11.....	p. 334 n. 511; 335 n. 514

14.3.12.....	p. 135 n. 204
14.3.20.....	p. 139 n. 207
14.3.22.....	p. 225 n. 334
14.4.4.....	p. 641 n. 967
14.4.10.....	p. 135 n. 204
14.6.3.....	p. 640 n. 967
14.9.1.....	p. 267 n. 415
14.10.1.....	p. 87; 145 n. 218; 166 n. 248; 512 n. 793; 513
14.12.1.....	p. 513
14.16.1.....	p. 168 n. 250
14.17.10.....	p. 593
15.1.24.....	p. 164 n. 247
15.1.30.....	p. 96
15.1.31.....	p. 165 n. 247
15.1.50.....	p. 96
15.3.6.....	p. 480 n. 740
15.7.6.....	p. 135 n. 204
15.14.8.....	p. 334 n. 511
16.5.12.....	p. 92
16.5.25.1.....	p. 272
16.5.40.....	p. 274 n. 427
16.5.48.....	p. 286 n. 451
16.5.52 pr.....	p. 274 n. 427
16.5.29.....	p. 273
16.5.58.....	p. 273 n. 425
16.5.61.....	p. 41 n. 41; 273 n. 425; 286 n. 451
16.5.65.3.....	p. 42 n. 43; 275; 286 n. 451
16.7.5.....	p. 272 n. 424
16.8.16.....	p. 274 n. 428
16.8.24.....	p. 274
16.10.10.....	p. 272 n. 424
16.10.11.....	p. 272 n. 424
16.10.21.....	p. 274
16.44.....	p. 603

NOVELAS DE TEODOSIO II

1.7.6.....	p. 276
3.1.....	p. 274 n. 427
3.2.....	p. 275
3.5.....	p. 275
3.6.....	p. 287
7.1.....	p. 343; 492 n. 763
25.....	p. 508

NOVELAS DE VALENTINIANO III

1.3.....	p. 122 n. 188
2.2.4.....	p. 464 n. 727
7.1.....	p. 122 n. 188
7.2.....	p. 122 n. 188
7.3.....	p. 122 n. 188; 132 n. 204; 431
10.....	p. 566 n. 878
10.3.....	p. 480 n. 740
13.3.....	p. 449 n. 694
18.3-4.....	p. 276 n. 431
28.....	p. 135 n. 204
22 pr.....	p. 33 n. 24
32 pr.....	p. 627 n. 949

NOVELAS DE MARCIANO

1.....	p. 138 n. 207
1 pr.....	p. 44 n. 51
1.1.....	p. 141 n. 210
4.2.....	p. 547

NOVELAS DE MAYORIANO

1.....	p. 147; 248 n. 382
2.2.....	p. 122 n. 188
4.....	p. 166 n. 247
7.16.....	p. 122 n. 188

LIBRO DE DERECHO SIRO-ROMANO

11.....	p. 478 n. 739
91.....	p. 478 n. 739

EDICTO DE TEODORICO

115.....	p. 619 n. 938
----------	---------------

***LEX ROMANA WISIGHOTORUM* (Breviario de Alarico)**

1.6.1.....	p. 446
2.1.3.....	p. 58
2.1.12.....	p. 488 n. 754
5.4.18.....	p. 51
9.1.1.....	p. 486
9.30.4.....	p. 503
11.5.1.....	p. 567 n. 880
11.8.1.....	p. 385 n. 611
12.1.3.....	p. 193 n. 274

B. FUENTES JUSTINIANEAS.

CÓDIGO DE JUSTINIANO

1.1.4.....	p. 276 n. 432
1.3.21.....	p. 63 n. 84
1.3.31.....	p. 43
1.3.33(34).....	p. 463 n. 724; 464 n. 727
1.3.37(38).....	p. 242 n. 368
1.3.48(49).4.....	p. 52 n. 63
1.3.52(53).....	p. 287 n. 455
1.4.15.....	p. 276
1.4.19.....	p. 277; 382
1.4.20.....	p. 281
1.4.34.4.....	p. 260
1.5.4.4.....	p. 274 n. 427
1.5.5.....	p. 286 n. 451
1.5.5.3.....	p. 275
1.5.7.....	p. 287
1.5.8.6(4).....	p. 276
1.5.12.....	p. 278
1.5.12.1.....	p. 279; 280
1.5.12.4.....	p. 274 n. 427
1.5.12.6.....	p. 275; 286
1.5.12.7.....	p. 278
1.5.12.9.....	p. 280 n. 439
1.5.12.13.....	p. 280
1.5.13.....	p. 33 n. 23
1.5.14.....	p. 275
1.5.16.1.....	p. 285
1.5.17.1.....	p. 284 n. 447
1.5.18.....	p. 274 n. 427; 279; 283; 285

1.5.18.4.....	p. 283
1.5.18.5.....	p. 283
1.5.18.7.....	p. 284 n. 447
1.5.18.10.....	p. 285 n. 448
1.5.18.11.....	p. 285 n. 448
1.5.18.12.....	p. 285 n. 448
1.5.18.13.....	p. 285 n. 448
1.5.19.4.....	p. 285
1.6.9.....	p. 33 n. 23
1.7.23.....	p. 33 n. 23
1.8.21.....	p. 33 n. 23
1.9.17.....	p. 62 n. 83
1.9.18 (19) pr.....	p. 275
1.9.18 (19).2.....	p. 275
1.10.8.....	p. 33 n. 23
1.11.8.....	p. 277
1.11.10.6.....	p. 285
1.12.4.....	p. 33 n. 23
1.14.2.....	p. 101
1.14.8.....	p. 102
1.15.1.....	p. 40 n. 40
1.15.5.....	p. 33 n. 23
1.21.2.....	p. 139 n. 207
1.23.7 pr.....	p. 513 n. 794
1.24.1.....	p. 559 n. 868
1.27.1.....	p. 365 n. 573; 422; 450
1.27.1.4.....	p. 441 n. 675; 459 n. 714
1.27.1.8.....	p. 365 n. 573; 459 n. 714
1.27.1.13(3).....	p. 424
1.27.1.14(4).....	p. 450
1.27.1.17(6).....	p. 373
1.27.1.18(7).....	p. 365 n. 573; 373
1.27.1.21.....	p. 451
1.27.2.17.....	p. 374
1.27.2.18.....	p. 441 n. 675

1.27.2.20.....	p. 374 592
1.27.8.....	p. 365 n. 573
1.27.18.....	p. 334 n. 511; 365 n. 573
1.27.19.....	p. 334 n. 511
1.28.....	p. 163
1.28.3.....	p. 164 n. 246
1.28.5.....	p. 416
1.29.....	p. 127
1.29.1.....	p. 127
1.30.1.....	p. 370
1.30.2.....	p. 370 n. 586
1.30.3.....	p. 33 n. 25; 368
1.31.1.....	p. 204 n. 295; 265; 319 n. 501; 366; 414
1.31.2.....	p. 441 n. 675
1.31.5 pr.....	p. 342
1.31.5.2.....	p. 370 n. 586
1.32.1 pr.....	p. 63 n. 87
1.33.1.....	p. 33 n. 25
1.39.2.....	p. 297 n. 459
1.40.5.....	p. 410
1.40.6.....	p. 33 n. 25
1.40.8.....	p. 479 n. 739
1.40.10.....	p. 121 n. 188
1.40.12.....	p. 609; 609 n. 932
1.40.13.....	p. 650 n. 981
1.40.15(14).....	p. 506 n. 784
1.41.....	p. 552
1.46.2.....	p. 33 n. 25
1.46.3.....	p. 220
1.47.1.....	p. 507 n. 785
1.48.2.....	p. 411
1.48.3.....	p. 411
1.49.....	p. 628; 644 n. 971
1.49.1.2.....	p. 334 n. 511
1.49.1.3.....	p. 631

1.49.1.4.....	p. 628 n. 952
1.49.1.5(2).....	p. 632
1.49.1.6.....	p. 632
1.49.1.7(3).....	p. 631; 632
1.49.1.8(4).....	p. 633
1.51.....	p. 111 n. 173
1.51.1.....	p. 142; 269 n. 420
1.51.3.....	p. 626
1.51.5.....	p. 433
1.51.6.....	p. 433
1.51.7.....	p. 462; 464 n. 727
1.51.8.....	p. 142 n. 215; 627
1.51.10.....	p. 552
1.51.11.....	p. 656
1.51.14 pr.....	p. 526; 692
1.51.14.1.....	p. 526
1.51.14.2.....	p. 527
1.52.....	p. 444
1.53.....	p. 566 n. 878
1.53.1.....	p. 569; 570
1.53.2.....	p. 570
1.53.3.....	p. 570
1.53.4.....	p. 571
1.54.4.....	p. 111
1.54.6.2.....	p. 44 n. 50; 488 n. 753
1.54.6.5.....	p. 557 n. 866
1.55.2.....	p. 264; 381
1.55.4.....	p. 151; 380
1.55.5.....	p. 152
1.55.8 pr.....	p. 278 n. 435; 381 n. 603
1.55.10.....	p. 431
1.55.11.....	p. 277
1.56.1.....	p. 378; 385
2.5.1.....	p. 624 n. 944
2.6.8.....	p. 276

2.7.4.....	p. 462; 464 n. 727
2.7.8.....	p. 428; 464 n. 727
2.7.9.....	p. 263 n. 408; 526 n. 807
2.7.10.....	p. 428
2.7.11.....	p. 186 n. 260
2.7.11 pr.....	p. 424
2.7.11.2.....	p. 264 n. 409; 269 n. 420; 324
2.7.11.3.....	p. 324
2.7.12.....	p. 428
2.7.13.....	p. 367; 428; 654; 655
2.7.15.1.....	p. 441 n. 675; 451 n. 699; 594
2.7.17.....	p. 186 n. 260
2.7.17 pr.....	p. 428
2.7.22(3).....	p. 428
2.7.22(3) pr.....	p. 451 n. 699
2.7.22(3).4.....	p. 269 n. 420
2.7.22(3).5.....	p. 269 n. 420; 324
2.7.22(3).6.....	p. 594
2.7.23(4).....	p. 442 n. 677
2.7.23(4).1.....	p. 451 n. 699
2.7.23(4).2.....	p. 325 n. 508; 334 n. 514
2.7.24(5)pr.....	p. 428; 655
2.7.24(5).6.....	p. 594
2.7.25(6) pr.....	p. 451 n. 699
2.7.26(7) pr.....	p. 269 n. 420
2.7.26(7).4.....	p. 451 n. 699
2.12(13).2.....	p. 50 n. 61
2.12(13).25.....	p. 483
2.15(16).2.....	p. 228 n. 338
2.19(20).6.....	p. 554 n. 863
2.19(20).9.....	p. 554 n. 863
2.19(20).11.....	p. 565
2.44(45).....	p. 189
2.50(51).5.....	p. 229 n. 338
2.55 (56).2.....	p. 58

2.55(56).4.....	p. 43
3.2.5.....	p. 454
3.12.6(7).....	p. 455
3.12.9(11).....	p. 209
3.13.7.1.....	p. 50 n. 62
3.13.6.....	p. 127 n. 198
3.21.2.....	p. 50 n. 62; 53; 628
3.22.3.....	p. 491
3.23.....	p. 493
3.23.1.....	p. 493
3.23.2.....	p. 493; 557 n. 866
3.24.....	p. 491
3.24.1.....	p. 491
3.24.2.....	p. 491
3.24.3.....	p. 483
3.24.3 pr.....	p. 51 n. 62
3.24.3.1.....	p. 483
3.24.3.2.....	p. 484
3.25.....	p. 492
3.25.1.....	p. 29; 53
3.25.1 pr.....	p. 51 n. 62
3.26.11.....	p. 113
3.28.30.2.....	p. 467
3.28.37.....	p. 441 n. 675; 463
3.28.37 pr.....	p. 464
3.28.37.1f.....	p. 465
3.28.37.2.....	p. 465
3.35.3.....	p. 58
4.2.3.....	p. 574
4.2.16.....	p. 432 n. 672
4.3.....	p. 307; 309 n. 478
4.3.1 pr.....	p. 308
4.3.1.3.....	p. 309
4.7.3.....	p. 557 n. 866
4.19.3.....	p. 160

4.20.9.....	p. 49 n. 60
4.28.7.1.....	p. 469 n. 737
4.30.8.....	p. 384 n. 610
4.32.26.2.....	p. 575
4.34.10.....	p. 63
4.39.1.....	p. 52 n. 63
4.42.1.....	p. 235 n. 352
4.42.2.....	p. 235 n. 352
4.44.16.....	p. 229 n. 338
4.44.18.....	p. 564
4.46.2 pr.....	p. 62 n. 83
4.62.1.....	p. 110 n. 171
4.63.3.....	p. 244
4.63.4.....	p. 123 n. 191
5.2.1.....	p. 543; 544 n. 848
5.4.6.....	p. 535
5.4.28.....	p. 548
5.5.4.....	p. 545
5.5.6.....	p. 549 n. 856
5.5.7.....	p. 547
5.6.5.....	p. 537
5.7.1.....	p. 540; 542 n. 841; 542 n. 842
5.27.1.....	p. 546
5.48.1.1.....	p. 62 n. 83
5.62.8.....	p. 221 n. 325
5.62.25.....	p. 478 n. 739
5.75.5.....	p. 154 n. 233
6.7.4.....	p. 233
6.8.....	p. 232 n. 343; 241 n. 365
6.8.2.....	p. 232 n. 343
6.20.20 pr.....	p. 466
6.20.20.1.....	p. 466
6.22.5.....	p. 236 n. 354
6.33.3.....	p. 43
6.38.5.....	p. 49 n. 59

6.61.7.....	p. 464; 464 n. 727
6.62.3.....	p. 601
6.62.4.....	p. 601
7.6.1.2.....	p. 43
7.7.1.2.....	p. 43
7.9.3.....	p. 240 n. 362
7.16.11.....	p. 238
7.16.41.....	p. 243 n. 371
7.37.2 pr.....	p. 229 n. 338
7.37.3 pr.....	p. 229 n. 338
7.37.3.1.....	p. 229 n. 338
7.49.2.....	p. 138 n. 207
7.55.2.....	p. 63
7.62.14.....	p. 487
7.62.19.....	p. 137 n. 207
7.62.21.....	p. 673 n. 1016
7.62.22.....	p. 228 n. 338
7.63.1.....	p. 383
7.64.8.....	p. 190 n. 268
8.11(12).8.....	p. 164 n. 247
8.11(12).10.....	p. 165 n. 247
8.12(13).1 pr.....	p. 136 n. 206
8.12(13).1.2.....	p. 136 n. 206
8.13(14).27.....	p. 599 n. 919
8.13(14).27.1.....	p. 599
8.56(57).4.....	p. 43
9.1.15.....	p. 63
9.2.4.....	p. 384 n. 610
9.3.1.....	p. 144 n. 218
9.4.1.4.....	p. 144 n. 218
9.4.1.5.....	p. 144 n. 218
9.4.4.....	p. 143 n. 218
9.4.5.....	p. 144 n. 218
9.5.1.....	p. 145 n. 218
9.6.4.1.....	p. 63

9.6.6.....	p. 228 n. 338
9.8.3.....	p. 496
9.8.4.....	p. 340; 498; 499
9.8.5.....	p. 504
9.8.5 pr.....	p. 503; 503 n. 780
9.8.5.1.....	p. 503; 503 n. 780
9.8.5.2.....	p. 503
9.8.5.3.....	p. 503; 503 n. 780
9.8.5.4.....	p. 503
9.8.5.5.....	p. 502 n. 778; 503
9.8.6.....	p. 502 n. 777
9.12.2.....	p. 52 n. 63
9.18.7.....	p. 496
9.21.1.....	p. 231; 231 n. 342
9.26.1.....	p. 432; 432 n. 671
9.27.....	p. 309 n. 479; 670 n. 1007
9.27.1.....	p. 350 n. 543; 557 n. 866; 558 n. 866
9.27.2.....	p. 557 n. 866; 558 n. 866
9.27.3.....	p. 138 n. 207; 557 n. 886
9.27.4.....	p. 557 n. 866
9.27.6.....	p. 308 n. 476; 309; 310 n. 480; 674 n. 1018
9.27.6 pr.....	p. 345
9.28.1.....	p. 59; 619 n. 938
9.29.2.....	p. 621 n. 938
9.29.3(4).....	p. 551
9.41.8 pr.....	p. 499
9.41.8.1.....	p. 499
9.41.11.....	p. 498
9.41.16.....	p. 499
9.47.3.....	p. 501
9.47.9.....	p. 501
9.47.12.....	p. 501
9.49.7.....	p. 228 n. 338
9.49.9.2.....	p. 228 n. 338
10.1.5.....	p. 227 n. 336; 673 n.1016

10.1.7.1.....	p. 227 n. 336
10.1.9.....	p. 63 n. 85; 63 n. 87
10.2.3 pr.....	p. 63 n. 86
10.3.7.....	p. 564
10.6.....	p. 576
10.6.1.....	p. 124 n. 191; 576
10.6.2.....	p. 124 n. 191; 576; 619 n. 938
10.10.3.....	p. 228 n. 338
10.11.8.12.....	p. 229 n. 338
10.16.13.....	p. 110 n. 171
10.19.7.....	p. 673 n. 1016
10.19.9.7.....	p. 43
10.20.1.....	p. 133 n. 204; 557 n. 866
10.22.2.....	p. 134 n. 204
10.23.1.....	p. 124 n. 191
10.23.2.....	p. 121 n. 188
10.23.3.3.....	p. 63 n. 85; 132 n. 204
10.23.4.....	p. 121 n. 188
10.28.....	p. 191 n. 269
10.28.3.....	p. 191 n. 269
10.32(31).2.....	p. 382
10.32(31).4.....	p. 498 n. 772
10.32(31).6.....	p. 266 n. 414
10.32(31).10.....	p. 587
10.32(31).17.....	p. 250 n. 384
10.32(31).18.....	p. 379
10.32(31).20.....	p. 379
10.32(31).26.....	p. 380
10.32(31).33.....	p. 167 n. 248; 673 n. 1016
10.32(31).33.1.....	p. 500
10.32(31).40.....	p. 500 n. 775
10.32(31).46.....	p. 266
10.32(31).49.....	p. 286
10.32(31).50.....	p. 253 n. 391
10.32(31).51.....	p. 253

10.32(31).53.....	p. 150
10.32(31).54.....	p. 254
10.32(31).55.....	p. 254
10.32(31).60.....	p. 255 n. 394
10.32(31).60.1.....	p. 63 n. 84
10.32(31).64.....	p. 255
10.32(31).67(66).....	p. 256
10.33(32).1.....	p. 232 n. 344
10.33(32).2.....	p. 238; 243 n. 371
10.34(33).1.....	p. 248 n. 382
10.38(37).1.....	p. 248 n. 382
10.40(39).8.....	p. 490 n. 760
10.42(41).7.....	p. 188 n. 264
10.42(41).9.....	p. 197 n. 282
10.48(47).2.....	p. 128
10.48(47).8.....	p. 557 n. 866
10.48(47).11.....	p. 479 n. 740
10.48(47).12.....	p. 479 n. 740; 480 n. 740
10.48(47).13.....	p. 480 n. 740
10.48(47).14.....	p. 480 n. 740
10.48(47).16.....	p. 480 n. 740
10.49(48).1.....	p. 480 n. 740
10.49(48).3.....	p. 480 n. 740
10.50 (49).1.....	p. 191
10.50(49).2.....	p. 221 n. 325
10.52 (51).5.....	p. 197 n. 282
10.53(52).2.....	p. 604
10.53(52).10.....	p. 268 n. 419
10.55(54).1.....	p. 205 n. 296
10.55(54).2.....	p. 587 n. 896
10.60(58).1.....	p. 207; 671 n. 1016
10.61(59).2.....	p. 207
10.62(60).1.....	p. 357; 357 n. 558
10.62(60).2.....	p. 357 n. 558
10.64 (62).1.....	p. 197 n. 282

10.65(63).4.....	p. 303
10.71(69).1.....	p. 240
10.71(69).3.....	p. 239
10.72(70).2.....	p. 148 n. 224; 378 n. 597
10.72(70).4.2.....	p. 133 n. 204
10.72(70).8.....	p. 148 n. 224; 378 n. 597
10.72(70).13.....	p. 132 n. 204
10.77(75).1.....	p. 264; 460 n. 718
11.8(7).1.....	p. 226
11.8(7).8.....	p. 226
11.8(7).11.....	p. 226
11.8(7).14.....	p. 352
11.10(9).3.....	p. 219 n. 322; 224
11.10(9).4.....	p. 186 n. 260; 249 n. 384
11.10(9).7.....	p. 224 n. 332
11.12(11).1.....	p. 512 n. 793
11.20(19).1.....	p. 513
11.25(24).....	p. 444
11.25(24).1.....	p. 593
11.32(31).1.....	p. 208 n. 301
11.34(33).....	p. 377 n. 597
11.34(33).1.....	p. 377; 378 n. 597
11.34(33).2.....	p. 378 n. 597
11.35(34).....	p. 356 n. 553
11.35(34).1.....	p. 161 n. 242; 356
11.36(35).1.....	p. 161
11.36(35).2.....	p. 60; 161
11.36(35).3.....	p. 60
11.36(35).4.....	p. 157
11.39(38).1.....	p. 155 n. 235
11.40(39).1.....	p. 460 n. 717
11.41(40).7.....	p. 209
11.48(47).11.....	p. 222
11.48(47).18.....	p. 222
11.50(49).2.....	p. 221 n. 325

11.54(53).1.....	p. 305
11.54(53).2.....	p. 305
11.55(54).2.....	p. 567
11.59(58).3.....	p. 63 n. 85
11.64(63).1.....	p. 222
11.68(67).1.....	p. 221
11.68(67).3.....	p. 221
11.71(70).1pr.....	p. 62 n. 83
11.73(72).1.....	p. 564
11.75(74).4.....	p. 480 n. 740
12.1.1.....	p. 297 n. 459
12.1.2.....	p. 204; 206 n. 297; 290
12.1.3.....	p. 419
12.1.4.....	p. 479 n. 739
12.1.6.....	p. 244 n. 372
12.1.8.....	p. 495
12.1.9.....	p. 233 n. 348
12.1.10.....	p. 495; 496 n. 767; 499
12.1.12.....	p. 334 n. 511; 608
12.1.13.....	p. 198
12.1.16.....	p. 482 n. 743
12.3.3.1.....	p. 106
12.3.5.....	p. 106 n. 165; 107 n. 166
12.4.1.....	p. 334 n. 511
12.5.....	p. 112; 235 n. 351
12.5.2.....	p. 655
12.5.4.....	p. 235; 236 n. 353
12.5.4.2.....	p. 199; 236
12.5.4.3.....	p. 236
12.5.4.4.....	p. 236
12.5.4.5.....	p. 236
12.5.4.6.....	p. 237
12.7.1.....	p. 655
12.7.2.4(3).....	p. 420
12.8.....	p. 37; 393 n. 630

12.8.1.....	p. 393; 621 n. 938
12.8.2.....	p. 512 n. 794
12.8.2 pr.....	p. 409; 409 n. 692
12.9.1.....	p. 656
12.14.1.....	p. 654
12.13.1.....	p. 654
12.15.1.....	p. 654
12.16.1.....	p. 654
12.16.3.....	p. 656
12.16.5.....	p. 463 n. 724; 466
12.16.5 pr.....	p. 464 n. 727
12.16.5.2.....	p. 478 n. 739
12.17.3.....	p. 605 n. 927
12.17.4.....	p. 594
12.19.2.....	p. 411
12.19.3.....	p. 430; 587
12.19.7 pr.....	p. 417
12.19.7.2(1).....	p. 372; 418
12.19.7.3.....	p. 418
12.19.7.4.....	p. 319; 418
12.19.8.....	p. 266
12.19.9.....	p. 654
12.19.10.....	p. 424
12.19.10.1.....	p. 524
12.19.11.....	p. 314; 597; 600
12.19.12 pr.....	p. 116
12.19.13.2.....	p. 425
12.19.15 pr.....	p. 201; 425; 590
12.19.15.1.....	p. 425
12.19.15.2.....	p. 425
12.20.1.....	p. 415
12.20.2.....	p. 610 n. 933
12.20.3 pr.....	p. 367; 410; 422; 424
12.20.3.1.....	p. 441 n. 675; 593
12.20.3.2.....	p. 340; 341

12.20.4 pr.....	p. 51 n. 62; 492
12.20.4.1.....	p. 51 n. 62
12.20.4.2.....	p. 492
12.20.5.....	p. 204 n. 295; 245; 265; 524
12.20.5.2 (21.1).....	p. 63 n. 84; 589
12.21(22).1.....	p. 201
12.21(22).4.....	p. 264 n. 412
12.21(22).4.1.....	p. 589
12.21(22).7.....	p. 259
12.22(23).1.....	p. 62; 117 n. 183
12.22(23).2.3.....	p. 119 n. 186
12.22(23).4.1.....	p. 201
12.23(24).2.....	p. 125 n. 191
12.23(24).5.....	p. 429
12.23(24).7.....	p. 123 n. 190; p. 304; 449
12.23(24).7.16.....	p. 246 n. 379
12.23(24).7.18.....	p. 246 n. 379
12.23(24).9.....	p. 512 n. 794
12.23(24).10.....	p. 653 n. 984
12.23(24).12.....	p. 485; 485 n. 745
12.23(24).12 pr.....	p. 51 n. 62
12.24(25).1.....	p. 447 n. 692
12.24(25).7 pr.....	p. 421 n. 655
12.24(25).7.1.....	p. 421 n. 655
12.25(26).1.....	p. 434
12.25(26).2.....	p. 416
12.25(26).3.....	p. 482 n. 741
12.25(26).4.3.....	p. 52 n. 62
12.28(29).1.....	p. 480 n. 740
12.28(29).2.....	p. 480 n. 740
12.28(29).4.....	p. 393
12.29(30).1.....	p. 654
12.29(30).2.....	p. 364 n. 569
12.30(31).1 pr.....	p. 464 n. 727
12.30(31).1.....	p. 462

12.30(31).2.....	p. 462
12.32(33).....	p. 217
12.32(33).1.....	p. 225; 244 n. 244
12.33 (34).....	p. 42; 217; 523
12.33(34).2.....	p. 250 n. 384
12.33(34).4.....	p. 250 n. 384; 260; 525
12.33(34).5.1.....	p. 524
12.33(34).5.3.....	p. 320
12.33(34).6.....	p. 106 n. 165; 240
12.33(34).6 pr.....	p. 264
12.33(34).7.....	p. 106 n. 165
12.33(34).7 pr.....	p. 241
12.33(34).8.....	p. 525
12.34(35).....	p. 246
12.34(35).4.....	p. 42 n. 43
12.35(36).3.....	p. 205 n. 296
12.35(36).16.....	p. 220
12.36(37).1.....	p. 653 n. 984
12.36(37).6.....	p. 463 n. 724; 464 n. 727
12.37(38).....	p. 444
12.37(38).7.....	p. 448
12.37(38).9.....	p. 448 n. 693
12.37(38).13.....	p. 448 n. 693
12.37(38).14.....	p. 593
12.37(38).15.....	p. 450
12.37(38).16.....	p. 448 n. 693
12.37(38).16.8.....	p. 594
12.39(40).....	p. 457 n. 711
12.39(40).2.....	p. 457 n. 711
12.39(40).3.....	p. 457 n. 711
12.39(40).4.....	p. 457 n. 711
12.40(41).....	p. 506 n. 785; 507 n. 785
12.40(41).1.....	p. 507 n. 785
12.40(41).2.....	p. 505
12.40(41).5.2.....	p. 506 n. 785

12.40(41).6.....	p. 507 n. 785
12.40(41).9.....	p. 512 n. 794
12.40(41).9.1.....	p. 508
12.40(41).9.2.....	p. 508
12.40(41).9.3.....	p. 508
12.40(41).9.4.....	p. 508
12.40(41).10.....	p. 508
12.40(41).12.....	p. 506 n. 785
12.41(42).2.....	p. 603
12.42(43).2.....	p. 604; 606
12.42(43).3.....	p. 605
12.43(44).2.....	p. 241 n. 364; 603
12.44(45).1.....	p. 123 n. 191
12.47(48).1.....	p. 323
12.47(48).2.....	p. 260 n. 403
12.48(49).1.....	p. 456
12.49(50).1.....	p. 145 n. 219; 565
12.49(50).4.....	p. 132 n. 204
12.49(50).8.....	p. 577
12.50(51).2.....	p. 445
12.50(51).3.....	p. 512 n. 794
12.50(51).9.....	p. 119 n. 186
12.50(51).13.....	p. 441 n. 675
12.50(51).5.....	p. 42 n. 44
12.52(53).3.1.....	p. 512 n. 794; 601
12.52(53).3.2.....	p. 51 n. 62; 87
12.53(54).1.....	p. 305
12.53(54).2.....	p. 225 n. 334
12.54(55).5.....	p. 51 n. 62
12.55(56).1.....	p. 252 n. 389
12.56(57).1.....	p. 422
12.57(58).2.....	p. 31 n. 19; 341
12.57(58).7 pr.....	p. 589
12.57(58).7.1.....	p. 609
12.57(58).9.....	p. 423

12.57(58).10.....	p. 368
12.57(58).12 pr.....	p. 258
12.57 (58).12.1.....	p. 258
12.57(58).12.3.....	p. 244 n. 372; 245; 258 n. 400
12.57(58).13.....	p. 259 n. 400
12.57(58).14.....	p. 259
12.59(60)	p. 334 n. 513
12.59(60).1.....	p. 59
12.59(60).2.....	p. 608
12.59(60).3.....	p. 551
12.59(60).4.....	p. 213
12.59(60).5.....	p. 609
12.59(60).6.....	p. 341
12.59(60).7.....	p. 419
12.59(60).9.....	p. 340; 341
12.59(60).10.....	p. 62
12.59(60).10 pr.....	p. 340
12.59(60).10.2.....	p. 339 n. 525; 341 n. 529; 342
12.60(61).1.....	p. 673 n.1016
12.60(61).3.....	p. 603
12.61(62).....	p. 557 n. 866
12.62(63).1.....	p. 441 n. 675; 592
12.63(64).1.....	p. 105 n. 162
12.63(64).2.....	p. 105 n. 162

INSTITUCIONES

1.2.7.....	p. 36
1.6.9.....	p. 187
1.11.3.....	p. 43
1.12.4.....	p. 107 n. 165
1.20.5.....	p. 43
1.24.....	p. 353 n. 547

1.25.1.....	p. 478 n. 739
2.12 pr.....	p. 461 n. 720
3.20.2.....	p. 355
4.6.25.....	p. 454
4.18.9.....	p. 619 n. 938
4.18.11.....	p. 620 n. 938
24.2.....	p. 154 n. 233

DIGESTO

1.3.9.....	p. 102
1.5.9.....	p. 196 n. 280
1.5.20.....	p. 202 n. 293
1.6.9.....	p. 187
1.9.8.....	p. 198 n. 284
1.9.11.....	p. 490 n. 760
1.10.1.2.....	p. 189
1.11.1 pr.....	p. 32
1.11.1.1.....	p. 32
1.12.1 pr.....	p. 486 n. 747
1.12.1.4.....	p. 486 n. 747
1.13.4.....	p. 115
1.14.3.....	p. 243 n. 370; 389; 389 n. 620; 688
1.16.4.2.....	p. 32; 530
1.16.4.3.....	p. 650 n. 981
1.16.6.2.....	p. 49
1.16.6.3.....	p. 560
1.16.7.1.....	p. 136 n. 206; 171 n. 255
1.16.8.....	p. 131
1.16.10.....	p. 626 n. 945
1.16.11.....	p. 626 n. 945
1.18.1.....	p. 130
1.18.4.....	p. 131
1.18.6.....	p. 141 n. 211

1.18.6.3.....	p. 557 n. 866
1.18.12.....	p. 32
1.18.17.....	p. 652
1.18.18.....	p. 559
1.22.1.....	p. 142
1.22.2.....	p. 32; 205 n. 296; 233 n. 346
1.22.3.....	p. 552
1.22.4.....	p. 596; p. 596 n. 912; 673 n. 1016
1.22.5.....	p. 142
1.22.6.....	p. 552
1.36.1.....	p. 156
2.1.13.1.....	p. 652
2.4.2.....	p. 630 n. 954
2.13.12.....	p. 196 n. 280
3.1.1.....	p. 209 n. 303
3.1.1.3.....	p. 201 n. 290; 203 n. 294
3.1.1.5.....	p. 196 n. 280; 201 n. 290; 203 n. 294
3.1.10.....	p. 655 n. 992
3.1.11.....	p. 655 n. 992
3.2.....	p. 205 n. 296
3.2.1.....	p. 205 n. 296
3.2.2.1.....	p. 46
3.3.54.....	p. 479 n. 739
3.4.10.....	p. 155
3.5.29.....	p. 673 n. 1016
4.1.7 pr.....	p. 50 n. 61
4.2.3.1.....	p. 154 n. 233; 554 n. 863; 630 n. 954
4.2.9.1.....	p. 154 n. 233
4.2.9.3.....	p. 94
4.3.15.1.....	p. 94; 154 n. 233; 158
4.6.26.2.....	p. 630 n. 954
4.6.38.....	p. 552
5.1.6.....	p. 201 n. 290
5.1.12.2.....	p. 201; 237
5.1.18.....	p. 202

5.1.32.....	p. 590
5.1.39.....	p. 202 n. 293
5.1.46.....	p. 202
5.1.48.....	p. 630 n. 954
5.1.79.1.....	p. 49 n. 59
9.2.29.7.....	p. 153 n. 233; 631 n. 954
11.1.11.5.....	p. 49 n. 60
11.3.14.7.....	p. 58
11.4.1.6.....	p. 35
11.6.7.4.....	p. 239 n. 361
12.1.27.....	p. 577 n. 895
12.1.33.....	p. 574
12.1.34.....	p. 574
13.5.5.9.....	p. 155
14.6.1.3.....	p. 469
14.6.2.....	p. 469
15.4.4.....	p. 153 n. 233
18.1.46.....	p. 562
18.1.62.....	p. 561
18.6.13(12).....	p. 153 n. 233; 631 n. 954
18.6.14(13).....	p. 153 n. 233; 631 n. 954
18.6.15(14) pr.....	p. 631 n. 954
19.1.52.2.....	p. 314; 441 n. 675
19.2.19.9.....	p. 596; p. 596 n. 914
19.2.19.10.....	p. 596; p. 596 n. 913
19.2.56.....	p. 43
20.1.11.....	p. 577 n. 895
21.1.17.....	p. 243 n. 370
21.1.65.....	p. 201 n. 291
22.1.11 pr.....	p. 577 n. 895
22.4.6.....	p. 196 n. 280
22.5.3.1.....	p. 49 n. 60
23.2.16 pr.....	p. 548 n. 855
23.2.38.....	p. 543 n. 847
23.2.38 pr.....	p. 536

23.2.38.1.....	p. 536; 539
23.2.38.2.....	p. 537
23.2.57.....	p. 537
23.2.61.....	p. 539
23.2.63.....	p. 533
23.2.64.2.....	p. 537
23.2.65 pr.....	p. 536
23.2.65.1.....	p. 535
24.1.1.....	p. 317
24.1.3.1.....	p. 533; 539; 539 n. 833
24.1.5.17.....	p. 318; 318 n. 498
24.1.40.....	p. 317; 317 n. 496
24.1.41.....	p. 317; 317 n. 497
24.1.42.....	p. 317
25.2.17 pr.....	p. 533 n. 819
25.7.5.....	p. 537
26.1.6.1.....	p. 353 n. 547
26.5.5.....	p. 140 n. 208
26.5.6.....	p. 140 n. 208
26.5.8.1.....	p. 391
27.1.6.15.....	p. 477 n. 739
27.1.6.16.....	p. 478 n. 739
27.1.8.....	p. 587
27.1.8 pr.....	p. 478 n. 739
27.1.8.1.....	p. 478 n. 739
27.1.8.2.....	p. 478 n. 739
27.1.9	p. 478 n. 739
27.1.17.4.....	p. 478 n. 739
27.1.23.....	p. 478 n. 739
27.1.41 pr.....	p. 478 n. 739
27.1.41.1.....	p. 478 n. 739
27.8.1 pr.....	p. 154 n. 233; 353
27. 8.1.9.....	p. 61
27.8.4.....	p. 356 n. 555
27.8.6.....	p. 356

28.1.20.5.....	p. 556 n. 866
29.5.8 pr.....	p. 58
30.114.5.....	p. 318
31.22.....	p. 316
31.78.2.....	p. 158
32.3.102.2.....	p. 187; 315; 372 n. 589
32.3.102.3.....	p. 315; 372 n. 589
32.1.1.....	p. 336 n. 520
32.11.16.....	p. 316; 318
34.1.18.2.....	p. 315
34.9.2.1.....	p. 533; 538
34.9.2.2.....	p. 533; 538
35.1.82.....	p. 618
37.6.1.16.....	p. 468
37.15.1.3.....	p. 204 n. 295
38.1.22 pr.....	p. 31 n. 19
38.2.3 pr.....	p. 232 n. 343
39.4.10.....	p. 110 n. 171
40.2.20.4.....	p. 189
40.10.....	p. 232 n. 343
40.11.2.....	p. 241 n. 365
40.11.3.....	p. 241 n. 365
42.1.34.....	p. 144 n. 218
42.1.57 pr.....	p. 391
43.5.3.3.....	p. 239 n. 361
43.16.4.....	p. 94
44.3.13.1.....	p. 623
44.7.35.1.....	p. 155
45.1.1.1.....	p. 49 n. 60
46.1.68 pr.....	p. 355 n. 552
47.10.13.1.....	p. 154 n. 233
47.10.15.39.....	p. 154 n. 233; 630 n. 954; 631 n. 954
47.10.13.6.....	p. 154 n. 233; 630 n. 954
47.10.32.....	p. 154 n. 233; 630 n. 954
47.10.33.....	p. 154 n. 233

47.10.40.....	p. 207
47.13.1.....	p. 557 n. 866
47.22.1 pr.....	p. 336 n. 520
48.2.12 pr.....	p. 629 n. 954
48.4.2.....	p. 651
48.2.20.....	p. 502 n. 777; 558 n. 866
48.3.8.....	p. 144 n. 218
48.3.10.....	p. 144 n. 218; 336 n. 520
48.3.12.....	p. 144 n. 218
48.3.14.2.....	p. 144 n. 218
48.4.1.1.....	p. 503 n. 779
48.4.2.....	p. 651
48.5.39(38).10.....	p. 629 n. 954
48.7.1.....	p. 206
48.8.1.1.....	p. 137 n. 207
48.10.1.13.....	p. 511
48.10.27.2.....	p. 511
48.10.33.....	p. 511
48.11.....	p. 670 n. 1007
48.11.1 pr.....	p. 35; 90; 556 n. 866; 559 n. 867
48.11.1.1.....	p. 556 n. 866; 559 n. 867
48.11.2.....	p. 558 n. 866
48.11.3.....	p. 137 n. 207
48.11.6.1.....	p. 556 n. 866
48.11.6.2.....	p. 559 n. 867
48.11.7 pr.....	p. 137 n. 207
48.11.7.3.....	p. 137 n. 207; 558 n. 866
48.11.8 pr.....	p. 559
48.11.8.1.....	p. 559
48.13.....	p. 619 n. 938; 620 n. 938
48.13.1.....	p. 619 n. 938
48.13.2.....	p. 620 n. 938
48.13.3.....	p. 619 n. 938
48.13.5 pr.....	p. 620 n. 938
48.13.5.1.....	p. 620 n. 938

48.13.5.2.....	p. 620 n. 938
48.13.7(6).....	p. 643 n. 969; 660
48.13.8 (6.1) pr.....	p. 619 n. 938
48.13.9(7).....	p. 620 n. 938
48.13.11(9).2.....	p. 618 n. 938
48.13.11(9).5.....	p. 239 n. 361
48.13.11(9).6.....	p. 620 n. 938
48.13.12(10) pr.....	p. 622
48.13.15 (13).....	p. 619 n. 938
48.13.16(14).....	p. 620 n. 938
48.14.1.....	p. 310
48.18.10.1.....	p. 496 n. 768
48.19.15.....	p. 336 n. 520
48.19.38.10.....	p. 136 n. 207
49.1.12.....	p. 392
49.1.21.2.....	p. 383
49.4.1.....	p. 382
49.4.1.3.....	p. 383 n. 606
49.4.1.4.....	p. 383 n. 606
49.10.1.....	p. 383
49.14.3.5.....	p. 229 n. 338
49.14.46.2.....	p. 562; 562 n. 873
49.14.46.3.....	p. 562 n. 873
49.14.46.9.....	p. 619 n. 938
49.16.4.7.....	p. 206
49.16.9.....	p. 566
49.16.9 pr.....	p. 561
49.16.11.....	p. 237
49.16.13 pr.....	p. 561 n. 872
49.16.13.1.....	p. 561 n. 872
49.16.13.2.....	p. 561 n. 872
49.17.11 pr.....	p. 461 n. 720
50.1.2 pr.....	p. 356; 357 n. 558
50.1.2.5.....	p. 354
50.1.11.....	p. 159; 160; 353; 377 n. 597

50.1.11 pr.....	p. 61; 63 n. 85; 378 n. 597
50.1.11.1.....	p. 160; 378 n. 597
50.1.12.....	p. 161
50.1.12.2.....	p. 197
50.1.13.....	p. 61; 157 n. 237; 159; 162; 378 n. 597; 378 n. 598
50.1.15.1.....	p. 161 n. 241; 378 n. 598
50.1.17.4.....	p. 527
50.1.17.9.....	p. 52 n. 63
50.1.17.14.....	p. 378 n. 597
50.1.17.15.....	p. 355
50.1.21.1.....	p. 155 n. 235
50.1.21.1-7.....	p. 357 n. 557
50.1.22.6.....	p. 490 n. 760
50.1.23 pr.....	p. 39
50.1.25.....	p. 159; 159 n. 239
50.1.26.....	p. 150
50.1.38.2.....	p. 161 n. 242; 356
50.1.38.6.....	p. 28; 154; 354
50.2.2.2.....	p. 499
50.2.2.8.....	p. 193
50.2.3.1.....	p. 28 n. 16
50.2.3.3.....	p. 275 n. 428
50.2.6.1.....	p. 190
50.2.6.2.....	p. 563 n. 874
50.2.7.1.....	p. 28 n. 16; 203
50.2.7.2.....	p. 376
50.2.7.3.....	p. 357 n. 558
50.2.8.....	p. 213 n. 309
50.2.9 pr.....	p. 233 n. 345
50.2.9.1.....	p. 226
50.2.10.....	p. 392
50.2.11.....	p. 189; 193; 194
50.2.12.....	p. 244 n. 372
50.3.1.....	p. 366 n. 577
50.3.1 pr.....	p. 147; 150 n. 227; 248 n. 382

50.4.3.3.....	p. 197 n. 282
50.4.3.6.....	p. 587
50.4.6 pr.....	p. 212
50.4.6.1.....	p. 208
50.4.7.....	p. 207 n. 208
50.4.8.....	p. 188; 194
50.4.10.....	p. 39
50.4.11.3.....	p. 604
50.4.14 pr.....	p. 38; 147; 248 n. 382
50.4.14.1.....	p. 147 n. 223
50.4.14.3.....	p. 212
50.4.14.6.....	p. 435
50.5.2 pr.....	p. 191 n. 269; 194
50.5.2.6.....	p. 203 n. 294
50.5.2.7.....	p. 200 n. 287; 590
50.5.3.....	p. 563 n. 874
50.5.14.1.....	p. 527
50.6.3.....	p. 190
50.7.5(4) pr.....	p. 208
50.7.5(4).1.....	p. 208; 209; 209 n. 304
50.7.5(4).2.....	p. 208 n. 302
50.8.2.7.....	p. 160
50.8.2.8.....	p. 159; 378 n. 597
50.8.2.9.....	p. 378 n. 597
50.8.2.10.....	p. 161 n. 241; 378 n. 597
50.8.4(3).....	p. 61
50.8.5(3,1).2(3,3).....	p. 154; 357
50.8.5(3.1).3(4).....	p. 161 n. 242
50.8.10 (8).....	p. 623
50.8.11(9).....	p. 153
50.8.11(9) pr.....	p. 63 n. 85
50.8.12(9.3).1.....	p. 155
50.8.12(9.3).5(9.8).....	p. 162
50.8.12(9.3).6(9.9).....	p. 156
50.9.1.....	p. 204 n. 295; 269 n. 419; 265; 269 n. 419

50.12.11.....	p. 37
50.16.7.....	p. 308 n. 475
50.16.18.....	p. 37
50.16.57.....	p. 25
50.16.101.2.....	p. 202 n. 291
50.16.113.....	p. 201
50.16.238.3.....	p. 57
50. 16. 239. 3.....	p. 38
50.16.239.5.....	p. 146 n. 221
50.17.1.....	p. 31 n. 19
50.17.2.....	p. 197
50.17.2.1.....	p. 187
50.17.175 pr.....	p. 238 n. 358

NOVELAS DE JUSTINIANO

8.....	p. 310 n. 482; 328; 346; 349; 374; 687
8 <i>praef.</i>	p. 452
8.1.....	p. 300; 636
8.7.....	p. 348; 349 n. 543
8.8.....	p. 350 n. 543
8.8.1.....	p. 350 n. 543
8.9.....	p. 633; 634; 634 n. 958; 644 n. 971
8.9.10.....	p. 635
8.10.2.....	p. 133 n. 204
8.14.....	p. 348
10.....	p. 425
12.1.....	p. 513 n. 794; 549 n. 856
13.....	p. 109 n. 168
13.3.....	p. 334
15 <i>praef.</i>	p. 152 n. 230
15.1 (ed. García del Corral).....	p. 381; 382
15.1.1.....	p. 347 n. 537; 380
15.3.2.....	p. 152

17.....	p. 338; 395; 686
17 <i>praef.</i>	p. 45 n. 52; 337
17 a.....	p. 364 n. 570
17.1.....	p. 131 n. 204; 338
17.3.....	p. 455 n. 706
17.7.....	p. 131 n. 204
17.16.....	p. 338
23.....	p. 538
24.1.....	p. 347 n. 537
24.2.....	p. 452
24.4.....	p. 311; 514 n. 796
24.6.....	p. 337
25.2 pr.....	p. 347 n. 537
25.2.1.....	p. 312 n. 484
25.5.....	p. 514 n. 796
25.6.....	p. 339 n. 523
26.2.....	p. 425
26.2 pr.....	p. 347 n. 537
26.3.....	p. 452; 635 n. 959
28.....	p. 425
28.3.....	p. 133 n. 204; 451 n. 699
28.4.1.....	p. 452
28.5.....	p. 228 n. 338
28.5 pr.....	p. 347 n. 537
29.....	p. 311
29.4.....	p. 228 n. 338
29.5.....	p. 347 n. 537
30.6.2.....	p. 451 n. 699; 540 n. 837
30.7.....	p. 114
30.8.....	p. 228 n. 338
30.9.....	p. 339 n. 523
35.....	p. 314; 320; 325; 370 n. 586
35.5.....	p. 591; 591 n. 901
35.9.....	p. 591; 592 n. 903
36.2.....	p. 321

45.....	p. 287
52 (<i>Authenticum</i>).....	p. 287 n. 455
53.....	p. 140 n. 207
53.3.....	p. 453; 600 n. 921
53.3 pr.....	p. 140 n. 207
53.5.....	p. 598
53.8.....	p. 540 n. 837
70.....	p. 256
71 <i>praef</i>	p. 408 n. 639
78.....	p. 231 n. 342
80.....	p. 139 n. 207
80.5.....	p. 225 n. 334
80.8.....	p. 451 n. 699
81.....	p. 106 n. 165; 242
81 <i>praef</i>	p. 106 n. 165
81.1.....	p. 107 n. 165
82 <i>praef</i>	p. 270 n. 421
82. 7 pr.....	p. 455 n. 706
85.1.....	p. 247 n. 381
85.3.1.....	p. 247 n. 381
86. 9.....	p. 270 n. 706
94 (<i>Authenticum</i>).....	p. 635 n. 960
95.....	p. 633; 635; 635 n. 960
95 <i>praef</i>	p. 633
95.1.....	p. 644 n. 971
95.1 pr.....	p. 636 n. 961
95.1.1.....	p. 636 n. 961
97.4.....	p. 600 n. 923
102.1.....	p. 347 n. 537; 635 n. 959
103.2.....	p. 635 n. 959
105.1.....	p. 104; 297 n. 459
117. 4.....	p. 547
123.13.....	p. 195
123.15.....	p. 249 n. 384
123. 17.....	p. 223; 242 n. 368

123.24.8.....	p. 50 n. 61
124.3.....	p. 455 n. 706
124.4.....	p. 287 n. 456
128.1.....	p. 110 n. 171
128.23.....	p. 636; 636 n. 962; 644 n. 971
128.23.17.....	p. 53
128.24.....	p. 637; 637 n. 964; 644 n. 971
128.24.3.....	p. 53
129.9.....	p. 454
134.2.....	p. 132 n. 204; 353
134.6.....	p. 651
136.2.....	p. 600 n. 923
149.1.....	p. 132 n. 204
161.1.....	p. 559 n. 867

C. FUENTES POSTJUSTINIANEAS.

PARÁFRASIS DE TEÓFILO

4.6.24.....	p. 454 n. 705
-------------	---------------

NOVELAS DE TIBERIO II

12.....	p. 228 n. 338
149.....	p. 353
161.1.....	p. 637; 637 n. 966; 644 n. 971

BASÍLICOS

1.1.20.....	p. 285 n. 449
1.1.32.....	p. 285 n. 450
6.1.55.....	p. 393 n. 630
6.1.56.....	p. 409 n. 641
6.1.90.....	p. 552 n. 862
6.3.6.....	p. 348 n. 541
6.3.7.1.....	p. 350 n. 543
6.3.8.....	p. 643
6.3.9.....	p. 628 n. 951
6.3.11.....	p. 637 n. 963
6.3.14.....	p. 637 n. 965
6.3.22.....	p. 337 n. 521
6.3.51.....	p. 569 n. 884
6.34.2.....	p. 217 n. 318; 225 n. 334; 244 n. 373
7.5.90.....	p. 491 n. 762
7.5.91.....	p. 491 n. 762
7.5.92.....	p. 492 n. 763
19.1.62.....	p. 561 n. 871
28.1.20.....	p. 543 n. 846; 544 n. 848
28.5.39.....	p. 540 n. 837
30.1.5.17.....	p. 318
56.6.7.....	p. 564
56.6.11.....	p. 576 n. 893
56.6.12.....	p. 576 n. 893
57.1.36 ss.....	p. 217 n. 317; 523 n. 800

EISAGOGUE DE FOCIO

7.2.....	p. 348 n. 541
7.4ii.....	p. 350 n. 543
7.6i.....	p. 643
15.6i.....	p. 544 n. 848
20.17.....	p. 318

23.18.....	p. 561 n. 871
23.19.....	p. 572
31.7.....	p. 106 n. 165
31.8.....	p. 107 n. 165

NOVELAS DE LEÓN VI EL FILÓSOFO

23.....	p. 538; 538 n. 830
84.....	p. 571
94.....	p. 104 n. 160
97.....	p. 350

PROCHIRON DE BASILIO

2.8.....	p. 544 n. 848
26.3.....	p. 106 n. 165
26.8.....	p. 107 n. 165

HEXABIBLOS DE HARMENOPOULOS

1.17.11.....	p. 107 n. 165
4.2.9.....	p. 544 n. 848

D. FUENTES MEDIEVALES.

LIBER IUDICIORUM

LV.....p. 206 n. 297; 290

COSTUMS DE TORTOSA

II.8.2.....p. 206 n. 297; 290

FURS DE VALENCIA

III.1.8.....p. 206 n. 297; 290

PARTIDAS DE ALFONSO X

I,5,50.....p. 523 n. 800

II.9.1.....p. 666 n. 995

II,9,2.....p. 441 n. 676

II, 9,8.....p. 670 n. 1006

II,9,26.....p. 347 n. 539; 359 n. 559; 646 n. 973

III.....p. 644 n. 971

III.4.1.....p. 666

III,4,6.....p. 644; 645; 669

III,4,7.....p. 644; 668 n. 1002; 671 n. 1009

III.5.12.....p. 645; 646 n. 975

III,7,6.....p. 542 n. 841

III.16.1.....p. 645; 647 n. 976

III.17.....p. 668 n. 999

III.18.12.....p. 671 n. 1009

III, 19,16.....p. 670 n. 1006

III, 22,26.....p. 670 n. 1006

IV,4.....	p. 390 n. 620
IV,14,2.....	p. 545; 671; 676
V,5,5.....	p. 670
V, 8, 9.....	p. 595 n. 911
VI.7.5.....	p. 675
VII,1,7.....	p. 675
VII,1,8.....	p. 675
VII.6.7.....	p. 206 n. 297; 290
VII, 7,2.....	p. 670 n. 1006
VII, 7,6.....	p. 290; 670 n. 1006
VII,7,5.....	p. 673
VII, 14,14.....	p. 669
VII, 14,15.....	p. 667

GLOSA DE GREGORIO LÓPEZ A PARTIDAS

gl. 5 a P. II, 9,26.....	p. 347 n. 539; 646 n. 973
gl. 6 a P. II, 9,26.....	p. 347 n. 539; 646 n. 973
gl. 3 a P. III, 4,6.....	p. 670 n. 1007
gl. 2 a P. V, 5.5.....	p. 670 n. 1008

ORDENAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

XX,2.....	p. 669
XXXII,44.....	p. 649

NUEVA RECOPILACIÓN

II,IV,25.....	p. 546
---------------	--------

E. FUENTES DE DERECHO CANÓNICO

COLLECTIO CONSTITUTIONUM ECCLESIASTICORUM

1.4.20.....p. 281 n. 440

CORPUS IURIS CANONICI

Sexto, 5, 12 (*De regulis iuris*), c. 87.....p. 206 n. 297

F. GLOSADORES Y COMENTARISTAS.

BÁRTOLO DE SASSOFERRATO

In tres libros Codicis commentaria praelec.

fol. 18.....p. 386 n. 614

fol. 59.....p. 366 n. 576

In secundam Digesti novi partem praelec.

p. 243.....p. 386 n. 614

In tres libros Codicis commentaria

fol. 59.....p. 596 n. 911

In tres posteriores libros Codicis commentaria

T. 8, fol. 4v, nn.1-5.....p. 673 n. 1016

In primam Digesti veteris partem commentaria

T. 1, f. 44r, n. 4.....p. 671 n. 1016

BALDO DE UBALDIS

Super Codicem et Digestum commentaria

In VII a XI cod. lib. comm.

p. 259.....p. 211 n. 306; 672 n. 1013

p. 261.....p. 670 n. 1008

p. 264.....p. 386 n. 615

BELLUGA, PERE

Speculum principum,

Rúbr. 35, núm. 13.....p. 542 n. 842

CUJACIO, JACOBO

Ad libr. IV Codicis, recitat. Solemn., tit. III, De suffragio,

Tom. 7, col. 704.....p. 300 n. 461

CASTILLO DE BOBADILLA, JERÓNIMO

La política para corregidores y señores de vasallos,

Tom. II, lib. V, cáp. 3, núm. 119.....p. 542 n. 842

MATIENZO, JUAN DE

Dialogus relatoris et advocati,

Pars tertia, cáp. 31, núm. 2.....p. 542 n. 842

GODOFREDO, JACOBO

Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis

Ad. rubr. Tit. 29, lib. II, CTh.

T. 1, f. 252 (b).....p. 300 n. 461

G. FUENTES MODERNAS

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE 26 DE AGOSTO DE 1789.

Art. 15.....p. 55

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

Art. 131.25.....	p. 55
Art. 228.....	p. 56 n. 71
Art. 269.....	p. 56 n. 71
Art. 293.....	p. 56 n. 71
Art. 294.....	p. 56 n. 71
Art. 372.....	p. 56 n. 71

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL DE 1821

Art. 7.....	p. 56; 56 n. 72
Art. 8.....	p. 56; 56 n. 72
Art. 9.....	p. 56; 56 n. 72

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL DE 1836

Art. 13.....	p. 56
--------------	-------

PROYECTO DE GARCÍA GOYENA DE 1851

Art. 12.....	p. 56; 56 n. 73
--------------	-----------------

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1869

Art. 13.....	p. 27 n. 14
--------------	-------------

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1848

Art. 322.....p. 28 n. 14

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1995

Art. 405.....p. 387 n. 617

Art. 406.....p. 387 n. 617

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., *La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali*, a cura di G. Fornasari- N. D. Luisi (Atti del Convegno, Trento- maggio 2001), Padova, 2003.

AA. VV., *Il mondo bizantino I. L'Impero romano d'Oriente (330-641)*, a cura di C. Morrisson (edizione italiana a cura di S. Ronchey e T. Braccini), Torino, 2004.

AA. VV., *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján (Actas de las Xornadas sobre Dereito Administrativo Histórico), Santiago de Compostela, 2005.

AA. VV., *Il funzionario di fatto* (a cura di B. Cavallo), Milano, 2005.

AA. VV., *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der hohen Kaiser zeit* (R. Haensch/J. Heinrichs, eds.), Köln, 2007.

AA. VV., *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain* (Actes du colloque international, Université de Laval, octobre 2006), Roma, 2008.

AA. VV., *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives* (Études réunies par Sylvie Grogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette), Roma, 2009.

AA. VV., *Droit, religion et société dans le Code Théodosien* (Troisièmes Journées d'Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007, dir. J.-J. Aubert et P. Blanchard), Genève, 2009.

AA. VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano* (coords. A. Fernández de Buján- G. Gérez Kraemer- B. Malavé Osuna), Madrid, 2011.

ACERBI S., *La figura del "silentarius" en la corte bizantina*, en *Ilu. Revista de ciencias de las religiones*, n. 19, Madrid, 2007.

AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados. Un estudio histórico-jurídico*, Logroño-Zaragoza, 1997.

- *Consideraciones sobre el salarium del advocatus fisci*, en *Personalidad y capacidad jurídicas: 74 contribuciones con motivo del XXV aniversario de la Facultad de Derecho de Córdoba*, vol. 1, Córdoba, 2005.
- *El advocatus fisci en Derecho romano*, Madrid, 2006.
- *Los advocatus fisci en la legislación de Anastasio*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 6, Madrid, 2006.
- *Nota sobre la jurisdicción militar en C. J. 12.35.18*, RGDR (www.iustel.com), 12, 2009.
- *Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio*, en RGDR (www.iustel.com), 15, 2010.
- *A propósito de la regulación de las sportulae en Derecho Romano*, RGDR (www.iustel.com), 18, 2012.

AIELLO V., *I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana: l'origine del magister officiorum*, en *Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale*, Napoli, 2001.

ALBURQUERQUE J. M., *Notas acerca de la utilitas publica*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 5, Madrid, 2005.

- *La administración provincial, colonial, municipal y la justicia en la Hispania romana (I): especial referencia a la Bética romana, su capital Corduba y los magistrados municipales y órganos con iurisdictio según la lex Irnitana*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 7, Madrid, 2006.
- *Concentración y ordenación urbanística del territorio romano: colonias, conventos y municipios en la Bética*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 13, 2009.

ALEXANDER M. C., *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, Ann Arbor, 2002.

ALFÖLDY G., *Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris*, Madrid, 1973.

ALLARD P., *Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Église jusqu'à la fin de la domination romaine en Occident*, Paris, 1876.

ALVARADO PLANAS J., *Control y responsabilidad en la España del siglo XIX: el juicio de residencia del gobernador general de Ultramar*, Madrid, 2010.

AMARELLI F., *Consilia principum*, Napoli, 1983

- *Dai consilia principum al consistorium*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di A. Biscardi*, Napoli, 1995.
- *Consistorium: breve nota sulle sue origine e derivazione*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 1, Madrid, 2004.

AMELOTTI M., *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'idios logos*, en *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)*, vol. 52, 2007-2008.

ANDREADES A., *Le recrutement des fonctionnaires et les universités dans l'empire byzantin*, Mélanges Cournil, 1926.

ANDREADES B. L., *Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine society*, en *Kleronomía*, 2, Thessaloniké, 1970.

ANDREOTTI R., *Problemi del "suffragium" nell'imperatore Giuliano*, en *Atti Accademia Romanistica Constantiniana. I Convegno internazionale*, Perugia, 1975.

ANDREU PINTADO J., *Munificencia pública en la provincia Lusitania (siglos I-IV d. C.)*, Zaragoza, 2004.

ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1968

- *Sul reato di diserzione in diritto romano*, en *Scritti di diritto romano*, 2, Napoli, 1974.

ARCARIA F., *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992.

ARCE J., *El missorium de Teodosio I: problemas históricos y de iconografía*, en *El disco de Teodosio* (coord. M. Almagro), Madrid, 2000.

ARIAS BONET J. A., *Los <<agentes in rebus>>: contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio romano*, en *A.H.D.E.*, 27-28, Madrid, 1957-1958.

ARIAS RAMOS J., *Un curioso cargo en la burocracia bizantina: el <<quaesitor>>*, en *Revista de Estudios Políticos*, 62, 1952, Madrid.

ARJAVA A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford, 1996.

ARU L. *Una congettura du D. 1.14.3: "Barbarius Philippus"*, en *Studi Volterra*, 3, Milano, 1971.

- ASTIN A. E., *The Lex Annalis before Sulla*, Bruxelles, 1958.
- ASTOLFI R., *Il fidanzamento nel diritto romano*, Milano, 1994.
- ATZERI L., *Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008.
- AUSBÜTTEL F. M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen in spätantiken Italien*, Frankfurt am Main, 1988.
- BACCARI M. P., *Gli apostati nel Codice Teodosiano*, in *Apollinaris*, 54, Roma, 1981.
- BALZARINI M., *Giustiniano e lo stato di diritto. Mito e realtà nella legislazione e nella prassi*, in *Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999.
- BARNES T. D., *Claudian and the Notitia Dignitatum*, Phoenix, 32, Toronto, 1978.
- BARNI G., *Appunti sui concetti di <<dignitas>>, <<nobilitas>>, <<officium>> in Bartolo da Sassoferrato*, in *A. G.*, vol. 155, Modena, 1958.
- BARNISH S.J.B., *A note on the collatio glebalis*, *Historia*, 38.2, Wiesbaden-Stuttgart, 1989.
- BARRACHINA E., *La función pública. Su ordenamiento jurídico. Parte General*, vol. I, Barcelona, 1991.
- BARROW R.H., *Prefect and Emperor. The relations of Symmachus, A.D. 384*, Oxford, 1983.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518 - 1 Agosto 537)*, SDHI 37, Roma, 1971.

- C. Th. 9. 5 *ad legem Julian maiestatis*, BIDR, 86-87, Milano, 1984.

BAUMAN R. A., *Some problems of the "Lex Quisquis"*, en *Anthichton* 1, 1967.

BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (IV-VII siècle). I. Le droit impérial*, Paris, 1990.

BECK H., *Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik*, Berlin, 2005.

BÉRENGER A./ BADEL Chr., *Les criteres de competence dans les lettres de recommandation de Fronton et de Pline Le jeune*, en REL 78, Paris, 2000.

BERGER P. C., *The insignia of the Notitia Dignitatum*, New York, 1981.

BERNARDI A., *La equorum adaeratio nel Basso Impero*, en *Studia Ghisleriana* I, 2, 1955.

BIANCHI FOSSATI M., *Le Novelle di Valentiniano III*, I. Fonti, Padova, 1988.

BIANCHI E., *In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, Athenaeum, 62, Pavia, 1984.

BIANCHINI M. G., *Usi ed abusi della "custodia reorum": una testimonianza di Agostino d'Ipbona*, en *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1988.

- *Otium agere ed evectiones: privilegi degli alti funzionari nel tardo Impero*, en *Mélanges Fritz Sturm*, Liège, 1999.
- *'Vincula curialia' e 'substitutae personae'*, en *Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca*, vol. I, Napoli, 2001.

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954.

- v. *Noxa*, N.N.D.I., 11, Torino, 1965.

BISCARDI A., *Noxae deditio sui*, en Illecito e pena privata in età repubblicana, Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello 4-7, giugno 1990), Napoli, 1992.

BLANCH NOUGUÉS J. M^a., *La intransmisibilidad de las acciones penales en Derecho Romano*, Madrid, 1997.

- *Régimen jurídico de las fundaciones en Derecho Romano*, Madrid, 2007.

- *Acerca de la responsabilidad penal de las civitates en Derecho Romano*, en Filía. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di F. D' Ippolito, I, Napoli, 2007.

- *Una visión histórica y jurídica sobre el ejército romano*, en Anuario jurídico y económico escurialense, Madrid, 2011.

- *Acerca del impuesto de la <<collatio lustralis>>*, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 16, 2011.

BLANCH NOUGUÉS Juan M., *Principios básicos de justicia tributaria en la fiscalidad romana*, en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 48, n. 247, Madrid, 1998.

BLOCKLEY R. C., *Ammianus Marcellinus. A study of his Historiography and Political Thought*, Brüssel, 1975.

BLUM W., *Curiosi und Regendarii. Untersuchungen zur Geheimen Staatspolizei der Spätantike*, München, 1969.

BOAK A. E. R., *Imperial Coronation Ceremonies of the Fifth and Sixth Centuries*, en *Harvard Studies in Classical Philology*, vol. 30, 1919.

- *The Master of the Offices in the Later Roman and Byzantine Empires*, New York, 1924.
- v. "officium", en *PW*, vol. 17, Stuttgart, 1937.

BONINI R., *I <<libri de cognitionibus>> di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano, 1964.

- *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna, 1976.
- *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1990.

BOREN H. C., *Studies relating to the stipendium militum*, *Historia*, 32, Wiesbaden-Stuttgart, 1983.

BOTELLA VICENT C., *Lex Iulia peculatus y depósito irregular*, en *El derecho penal: de Roma al Derecho actual (VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano)*, coords. Camacho de los Ríos, Calzada González, Madrid, 2005.

BOTTIGLIERI A., *La "relatio" 21 di Simmaco: inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, en *Filia. Scritti Gennaro Franciosi*, I, Napoli, 2007.

BOULVERT G., *Esclaves et Affranchis Imperiaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli, 1970.

- *Domestique et fonctionnaire sous le Haut Empire romain. La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince*, Paris, 1974.

BRANDES W., *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9- Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2002.

BRASSLOFF S., *Aetas legitima*, en ZSS 22, Weimar, 1901.

BRAVO G., *El colonato bajoimperial*, Madrid, 1991.

BRAVO BOSCH M^a. J., *El ius honorum en la Antigua Roma*, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 13, 2009.

- *El cursus honorum en Roma*, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 14, 2010.

BRICCHI A., *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l'attività negoziale degli agenti municipali*, en Gli Statuti Municipali (a cura di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba), Pavia, 2006.

BRIGUGLIO F., *Fideiussoribus succurri solet*, Milano, 1999.

BRUGGISSER Ph., *Symmaque ou le rituel épistolaire de l'amitié littéraire. Recherches sur le premier livre de la correspondance*, Fribourg, 1993.

BRUNT P., *Charges of provincial maladministration under the early principate*, en Historia, 10, Wiesbaden-Stuttgart, 1961.

BRUUN C., *The water supply of Ancient Rome: a Study of Roman imperial Administration*, Helsinki, 1991.

BUCKLAND W. W., *The Roman Law of Slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908.

BURY J. B., *Magistri scriniorum, antigrapheis und rhepherendarioi*, en Harvard Studies Classical Philology, 21, 1910.

- *The Laterculus of Polemius Silvius*, JRS, XIII, London, 1923.

- *The provincial List of Verona*, en JRS, 13, London, 1923.

BURTON G. P., *The curator rei publicae: towards a Reappraisal*, en Chiron, 9, München, 1979.

BUSACCA C., *Sulla pretesa <<lex Sempronia de abactis>>*, en Studi in onore di Cesare Sanfilippo, VII, Milano, 1987.

CADOPPI A., *La disciplina della corruzione nelle legislazioni italiane dell'Ottocento*, en La corruzione en La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali: atti del convegno, Trento 18-19 maggio 2001, Padova.

CAIMI J., *Burocrazia e diritto nel 'De magistratibus' di Giovanni Lido*, Milano, 1994.

CALASSO F., *Medio Evo del diritto, I.-Le fonti*, Milano, 1954.

CALORE A., *“Iuro per deum omnipotentem...”: il giuramento dei funzionari imperiali all'epoca di Giustiniano*, en Seminari di storia e di diritto II, <<Studi sul giuramento nel mondo antico>>, Milano, 1998.

CAMPOLONGO F., *L'inchiesta antica e i delitti di concussione e di corruzione in Roma*, en Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, vol. 57, Torino, 1903.

CAÑIZAR PALACIOS J. L., *Posibles causas de deserción en el ejército romano vistas a través del "Codex Theodosianus": Problemática bajo Constantino y problemática a partir de la segunda mitad del siglo IV d. C.*, en Studia historica. Historia antigua, n. 16, Salamanca, 1998.

CAPIZZI C., *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma, 1969.

CAPPONI S.-MENGOZZI B., *I vigiles dei Cesari. L'organizzazione antincendio nell'antica*, Roma, 1993.

CAPUTO M., *Il patrocinium nell'accesso alle cariche pubbliche: la pratica del suffragium nel Tardoantico*, tesi di dottorato, Pavia, 2004.

CARCOPINO J., *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, en *Revue des Études Anciennes (REA)*, 24, Bordeaux, 1922.

CARILE A., *Gerarchie e caste*, en *Morfologie social e culturali in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo (V Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo)*, Spoleto, 1998.

CARLÀ F., *Tassazione sociale ed aristocrazia senatoria: la gleba senatus*, en AA.VV., *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Genève, 2009.

CARNEVALE M. A., *Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica*, I, Padova, 1969.

CARRIÉ J.-M., *Le gouverneur romain à l'époque tardive: orientations de l'enquête*, en *Antiquité Tardive (Ant. Tard.)* 6, Paris, 1998.

- *Les métiers de la banque entre public et privé (IV-VII siècle)*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti*, Milano, 1998.

CASCIONE C., *'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma antica*, en *Filfa*, Scritti per G. Franciosi, I, Napoli, 2007.

CASSARINO S., *Note critiche sul 'liber singularis de officio curatoris rei publicae' di Ulpiano*, Ann. Semin. Giurid. Univ. Catania, I, 1947-1948.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., *El matrimonio como estrategia en la carrera política durante el último tramo de la República*, en RIDROM: revista internacional de Derecho Romano, 7, 2011.

CASTELLO M. G., *Cristianesimo e burocrazia tardo imperiale. La religiosità dei magistri officiorum*, en CrSt., 26, 2005.

CASTIGLIONI L.- MARIOTTI S., *Vocabolario della lingua latina*, Torino, 1996.

CATAUDELLA M. R., *Contribuenti e pubblica amministrazione: punti di vista a proposito di H. A., Vita Claudii, 11,14*, en Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico, Atti del Convegno Nazionale, Firenze 6-7 dicembre 2007 (a cura di M. R. Cataudella- A. Greco- G. Mariotta), Padova, 2010.

CECCONI G. A., *I governatori delle province italiche*, en Antiquité Tardive (Ant. Tard.) 6, Paris, 1988.

- *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.)*, Como, 1994.
- *Aviano Simmaco, Costante e l'andamento delle carriere senatorie nel tardo Impero (in margine all'interpretazione di AE. 1998, 217)*, en SDHI, 62, Roma, 1996.
- *I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-VI secolo)*, en FIRPO G., ZECCHINI G. (eds.), *Magister. Aspetti culturali e istituzionali*, Atti del Convegno internazionale, Chieti, 1997 (Torino 1999).

CENERINI F., *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna, 2002.

CENTOLA D., *In tema di responsabilità penale nella legislazione tardoimperiale*, en SDHI, 68, Roma, 2002.

CEPARANO M. L., *I 'pistrina' nei Regionari di IV secolo*, en Mélanges de l'École française de Rome (MEFRA), 110, Roma, 1998.

CERAMI P., *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo (AUPA), 31, 1969.

- *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, Studi G. Scadutto III, Padova, 1970.
- *<<Abrogatio magistratuum>>*, en Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, I, Napoli, 1984.

CERATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975.

CERDÁ J., *En torno a la pesquisa y el procedimiento inquisitivo en el Derecho castellano-leonés de la Edad Media*, en AHDE, 32, Madrid, 1962.

CHARBONNEL N., *La condition des ouvriers dans les ateliers impériaux aux IVème et Vème siècles*, en Aspects de l'empire romain, Paris, 1964.

CHARLES M. B., *Unseemly Professions and recruitment in late Antiquity: Piscatores and Vegetius Epitoma 1.7.1-2*, en American Journal of Philology, vol. 131, n. 1, New York, 2010.

CHASTAGNOL A., *Notes chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, en Historia 4 (Fest. W. Ensslin), 1955, Wiesbaden-Stuttgart.

- *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960.
- *Les modes de recrutement du sénat au IV siècle après J. C.*, en Cl. Nicolet (éd.), *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Caen, 25-26 avril 1969), Paris, 1970.
- *Le poète Claudien et l'histoire Auguste*, en *Historia*, 19, Wiesbaden-Stuttgart, 1970.
- *Le problème du domicile légal des sénateurs romains à l'époque impériale*, en *Mélanges offerts à L. S. Senghor*, Dakar, 1977.
- *Les femmes dans l'ordre sénatorial: titulature et rang social à Rome*, en *Revue historique*, 262, Paris, 1979.
- *La législation du clarissimat féminin de Sévère Alexandre à la fin du IVe siècle*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Constantiniana. III Convegno internazionale*, Perugia, 1983.
- *Le Sénat romain à l'époque impériale*, Paris, 1992.

CHRISTOL M./ DEMOUGIN S., *De Lugo à Pergame: La carrière de l'affranchi Saturninus dans l'administration impériale*, en *Mélanges de l'École française de Rome (MEFRA)*, 102, Roma, 1990.

CICOGNA G., *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e privato*, Roma, 1971.

CLAUSS M., *Der magister officiorum in der spätantike (4-6 Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche politik*, München, 1981.

CLEMENTE G., *La Notitia dignitatum*, Cagliari, 1968.

COLI U., *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, en *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, IV, Napoli, 1953.

COLOMBO M., *Constantinus rerum nouator: dal comitatus diocleziano ai palatine di Valentiniano I*, en *KLIO. Beiträge zur alten Geschichte*, 90, Berlin, 2008.

COLLANTES DE TERÁN M. J., *El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina jurídica de la edad moderna*, en *Historia, instituciones, documentos*, n. 25, Sevilla, 1998.

COLLINET P., *La nature des "querelae" des origines à Justinien*, *SDHI* 19, Roma, 1953.

COLLOT C., *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, en *Revue historique de droit français et étranger (RHD)*, 43, Paris, 1965,

CONTE E., *Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l'esegesi scolastica prima di Accursio*, Frankfurt am Main, 1990.

CONTRERAS R., *Sobre el juicio de residencia del virrey del Perú Agustín de Jáuregui (1780-1784)*, en *Cuadernos de Historia Moderna*, n. 12, Madrid, 1991.

COSENTINO S., *Le fortune di un banchiere tardiantico, Giuliano Argentario e l'economia di Ravenna nel VI secolo*, en *Santi banchieri re. Ravenna e Classe nel VI secolo. San Severo il tempo ritrovato* (a cura di A. Augenti), Milano, 2006.

COSTA E. A., *The office of the Castrensis sacri palatii in the fourth Century*, en *Byzantion. Revue internationale des études byzantines*, 42, Bruxelles, 1972.

COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale (1100-1438)*, Milano, 1969.

COSTER C. H., *The iudicium quinquvirale*, Cambridge (MA), 1935.

CREMADES I., *El officium en el derecho privado romano. Notas para su estudio*, León, 1988.

CRIBIORE R., *The School of Libanius in Late Antique Antioch*, Princeton-Oxford, 2007.

CRISTOFORI A., *Il giudizio della società provinciale sugli amministratori romani in età repubblicana: considerazioni sulla documentazione*, en AA. VV., *Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World*, Louvain, 2000.

CRUZ E TUCCI J. R., *La “querimonia” nella legislazione di Costantino il Grande*, Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, IV, Napoli.

CUENA BOY F., *El defensor y el protector de indios: breve ilustración en paralelo*, en *Ius Fugit*. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 7, Zaragoza, 1998.

- *La prohibición del matrimonio del funcionario con mujer de la provincia en la que sirve. Derecho Romano y Derecho castellano*, en *El Derecho de Familia: de Roma al derecho actual* (R. López-Rosa, F. del Pino, eds.), *Actas del VI Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Derecho Romano*, Huelva 2003 (Huelva, 2004).
- *Nuevos significados de origo en las fuentes legislativas postclásicas*, en *Revista General de Derecho Romano* (www. iustel. com), 10, Madrid, 2008.

DALLA D., *Ricerche di diritto delle persone*, Torino, 1995.

DAUBE D., “*Suffrage*” and “*precedent*”, “*mercy*” and “*grace*”, en *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* (T.), 47.3, Groningen-Bruxelles-La Haye, 1979.

DAVERIO ROCCHI G., *L'autogoverno nel modello ateniese*, in *La democrazia diretta. Un progetto politico per la società di giustizia* (a cura di G. Schiavone), Bari, 1997.

DAZA J., *Influencia de Lactancio en la legislación de Constantino*, in *Estudios jurídicos in memoriam del profesor Alfredo Calonge*, I, Salamanca, 2002.

DE ÁNGEL YÁGÜEZ R., *Sobre las palabras <<responder>>, <<responsable>> y <<responsabilidad>>*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, II, Madrid, 2002.

DE BONFILS G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981.

- Consistorium, consilium, e consiglieri imperiali in *Ammiano Marcellino*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. III, Milano, 1982.
- *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1993.
- *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle res gestae di Ammiano Marcellino*, a cura di M. NAVARRA (Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo imperiali, dir. M. SARGENTI, Serie 1,5), Milano, 1994.
- *Due leggi di Onorio sulle curie occidentali. Cth. 12.1.157 e 158*, Studi in ricordo di A. F. Panzera, 3, Bari, 1995.
- *Ammiano Marcellino e l'imperatori*, Bari, 1997 (2 ed.).
- *<<Honores>> e <<munera>> per gli ebrei di età severiana*, LABEO, 44, Napoli, 1998.
- *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998.

DE CASTRO-CAMERO R., *El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 2000.

DE DOMINICIS M. A., v. “*magister (navis, populi, equitum, officiorum, admissionum, memoriae, epistolarum, census, vici, militum)*”, NNDI, X, Torino, 1964.

DE FONTETTE P., *Leges repetundarum. Essai sur la répression des actes illicites commis par les magistrats romains au détriment de leurs administrés*, Paris, 1954.

DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*, II, 1, Milano, 1944.

DE GIOVANNI L., *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli, 1980.

DEL HOYO J., *El sacerdocio femenino, medio de integración de la mujer en las estructuras municipales de gobierno*, en AA. VV., *Epigrafía y sociedad en Hispania durante el Alto Imperio. Estructuras y relaciones sociales* (Armani/Hurlet-Martineau/Stylow, eds.), Alcalá de Henares, 2004.

DE LA VALLINA J. L., *Sobre el concepto de funcionario de hecho*, en *Revista de Administración Pública*, n. 29, Madrid, 1959.

DE LAS HERAS G., *Un punto de vista acerca de la posición del “praefectus Aegypti” en sus orígenes*, en *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, vol. 3, Madrid, 1988.

DE LIBERO L., *Mit eiserner Hand ins Amt? –Kriegsversehrte römische Aristokraten zwischen Recht und Religion, Ausgrenzung und Integration*, en *Res publica reperta. Fest. für J. Bleicken*, Stuttgart.

DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, IV.I-II, Napoli, 1962.

- *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, 1967.

DE ROBERTIS F., *Dal potere personale alla competenza dell'ufficio*, SDHI, 8, Roma, 1942.

- *La funzione della pena nel diritto romano*, en Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli, 1949.

DE RUGGIERO E., v. *codicilli*, en Dizionario epigrafico di Antichità romane, II, rist. anast., Roma, 1961.

DE STE CROIX G., *Suffragium: from vote to patronage*, en British Journal of Sociology (B.J.S.) 5, 1954.

DE SALVO L., *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, X Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi, Napoli, 1995.

- *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale, Napoli, 1996.
- *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardo-antica. Libanio, la retorica, il diritto*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido, Napoli, 2007.

DEMICHELI A. M., *L'Editto XIII de Giustiniano in tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino*, Torino, 2000.

DEMOUGEOT E., *La Notitia Dignitatum et l'histoire de l'Empire d'Occident au début du V siècle*, en Latomus, 34, Bruxelles, 1975.

DELMAIRE R., *Les préfets du prétoire d'Italie de 410 à 415*, en Latomus, 47, Bruxelles, 1988.

- *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV au V siècle*, Paris, 1989.
- *Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien. I. Les institutions civiles palatines*, Paris, 1995.
- *Cités et fiscalité au Bas-Empire. A propos du rôle des curiales dans la levée des impôts*, en AA. VV., *De la fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III siècle à l'avènement de Charlemagne* (Actes du colloque tenu à l'Université de Paris X-Nanterre, 1-3 avril, 1993), Bari, 1996.
- *Les esclaves et conditionales fiscaux au Bas-Empire romain*, en Topoi. An International Review of Philosophy, 9, Dordrecht, 1999.
- *Le vêtement, symbole de richesse et de pouvoir, d'après les textes patristiques et hagiographiques du Bas-Empire*, Fr. Chausson et H. Inglebert (éds.), en *Costume et société dans l'Antiquité et le haut Moyen Age* (Colloque Université de Paris X-Nanterre, 23-24 avril 2000), Paris, 2003.

DESANTI L., *Costantino e il matrimonio fra tutore e pupilla*, en BIDR, 89, Milano, 1986.

DEVREKER J., *La continuité dans le consilium principis sous les flaviens*, en Ancient Society, n. 8, Louvain, 1977.

DÍAZ BAUTISTA A., *Estudios sobre la banca bizantina: negocios bancarios en la legislación de Justiniano*, Murcia, 1987.

DILIBERTO O., *Ricerche sull' <<auctoramentum>> e sulla condizione degli <<auctorati>>*, Milano, 1981.

DI PAOLA L., *Sull'uso dei breves nell'amministrazione romana tardoantica*, en Il tardoantico alle soglie del duemila. Diritto, religione, società. Atti del V convegno internazionale dell'associazione di studi tardoantichi, Pisa, 2000.

- *Per la storia degli 'occhi del re'. I servizi ispettivi nella Tarda Antichità*, Messina, 2005.
- *I curiales nella legislazione di Valentiniano e Valente*, en AA. VV., Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisièmes Journées d'Etude sur le Code Théodosien (Neuchâtel, 15-17 février 2007), Genève, 2009.

DOBSON B., *Die Primipilares. Die Entwicklung und Bedeutung. Laufbahnen und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges*, Köln, 1978.

DOMINGO R., *La legislación matrimonial de Constantino*, Pamplona, 1989.

D'ORS A., *Derecho Privado Romano*, 8 ed., Pamplona, 1981.

- *De nuevo sobre los estratos de las Pauli Sententiae*, BIDR, 37-38, Milano, 1995-1996.

D'ORS X., *Regulación y control de la actividad pública en la 'lex Flavia Municipalis'*, en Seminarios Complutenses de Derecho Romano, 2, Madrid, 1992.

- *Las relaciones contractuales con la administración pública*, en I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Torino 17-19 ottobre 1994, Napoli, 1997.

D'ORTA M., *Il divieto per i senatori di possedere navi ex lege Julia de pecuniis repetundis. Nota sulla legislazione Cesariana del 59 a. C.*, en Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici (AIIS), 5, 1976-1978.

DOVERE E., *Occasioni e tendenze della normazione religiosa tardoantica*, LABEO, 38, Napoli, 1992.

- *Tardoantico: categoria storiografica autonoma (Cassiodorus e Antiquité Tardive)*, en SDHI, 63, Roma, 1997.

DREXLER H., *Dignitas*, en Das Staatsdenken der Römer, Darmstadt, 1966.

DU CANGE et al., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris, ed. 1883-1887.

DUBOULOZ J., *Le patrimoine foncier dans l'Occident romain: une garantie pour la gestion des charges publiques (Ile-IVe siècle)*, en Histoire et Sociétés Rurales, 19, 2003.G

DUMAS A., *Les serment de fidelite et la conception du pouvoir du I au IX siecle*, en Revue historique de droit français et étranger (RHD), 10, Paris, 1931.

DUNLAP A., *The office of the Grand Chamberlain in the Later Roman and Byzantine Empires*, New York, 1924.

DUPONT Cl., *Les iura in re aliena dans le Code Theodosien*, en RIDA, 24, Bruxelles, 1977.

DUTHOY R., *La fonction sociale de l'Augustalité*, en *Epigraphica* 36, 1-2, Bologna, 1974.

- *Les Augustales*, en *ANRW* II, 16.2, Berlin-New York, 1978.

EBERSOLT J., *Sur les fonctions et les dignités du vestiarius byzantin*, en *Mélanges Charles Diehl*, 1, Paris, 1930.

ECK W., *Tituli honorarii curriculum vitae e autorappresentazione nell'Alto Impero*, en *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma, 1996.

EFSTATHIOU A., Euthyna. *Procedure in 4th c. Athenans and the Case on the false embassy*, en *DIKE. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 10, Milano, 2007.

EISENHUT W., *Die römische Gefängnisstrafe*, en *ANRW*, I, 2, Berlin-New York, 1972.

ELIA F., *Nuove osservazioni sull'officium del magister census*, en *Quaderni Catanesi*, 6, 1984.

- *Cth. 11.11.1: spartiacque fra liceità ed illiceità dei munuscula e degli xenia*, en *Atti del Convegno Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania, 11-13 dicembre 1995)*, Catania, 1999.

ELGUERA E. R., *Situación jurídica de las personas libres que trabajaban como scribae*, en *Studi Grosso*, 2, Torino, 1968.

EL BEHEIRI N., *Die Lex Claudia de nave senatorum*, *RIDA*, 48, Bruxelles, 2001.

ENSSLIN W., *Carpentum oder carruca?*, en KLIO, 32, Frankfurt am Main, 1939.

ERNOUT A.- MEILLET A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 1967.

- v. *officium*.
- v. *respondere*.

ERNSTBERGER N., *Untersuchungen zur Infrastruktur Roms in der Kaiserzeit. Die Versorgung Roms mit Wasser, Waren and Energie*, Hamburg, 2005.

EVANS R. J. – KLEIJWEGT M., *Did the Romans like young men? A study of the Lex Villia Annalis: causes and effects*, ZPE, 92, Bonn, 1992.

FADDA C., *Istituti commerciali del diritto romano*, Napoli, 1987.

FAIRLEY W., *Notitia Dignitatum, or, Register of Dignataries*, Philadelphia, 1899.

FALCAO M., *Las prohibiciones matrimoniales de carácter social en el Imperio Romano*, Pamplona, 1973.

FALCHI G. L., *Il consistorium imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale, 1995.

FANIZZA L., *Il Senato e la prevenzione del "crimen repetundarum" in età tiberiana*, en LABEO 23, Napoli, 1977.

FARENGA V., *Citizen and self in ancient Greece. Individuals performing justice and the law*, 2006, Cambridge.

FASCIONE L., *Osservazioni sull'uso del concetto di "fraus legi" nella costituzioni imperiali*, en Studi Senesi, 95, fasc. 1, 1983.

- *La legislazione di Genucio*, en *Legge e società nella repubblica romana II* (a cura di F. Serrao), Napoli, 2000.

FEISSEL D. *Magnus, Mégas et les curateurs des <<maison divines>> de Justin II a Maurice*, en *Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance* (TM) 9, Paris, 1985.

FELICI M., *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, en *Gli Statuti Municipali* (a cura di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba), Pavia, 2006.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *El filiusfamilias independiente en Roma y en el Derecho español*, Madrid, 1981.

- *Jurisdicción voluntaria en Derecho Romano*, 1986, Madrid.

- *Observaciones acerca de las nociones de infamia e ignominia en Derecho Romano*, en *Homenaje a Juan B. Vallet de Goytisolo*, vol. 4, Madrid, 1988.

- *Perspectivas de estudio en temática de Derecho Administrativo romano surgidas a tenor del pensamiento de Giambattista Impallomeni*, INDEX, 26, Napoli, 1998.

- *Instituciones, hechos y actividad de orden en la experiencia jurídica romana*, en *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján, Santiago de Compostela, 2005.

- *Derecho Público Romano*, (14ª ed.), Cizur Menor (Navarra), 2011.

- *Derecho Privado Romano* (4ª ed.), Madrid, 2011.

- *Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano*, IURA, 58, Napoli, 2010.

-*Hacia un Tratado de Derecho Administrativo Romano*, en Revista de Derecho de la UNED, 6, Madrid, 2010.

- *Historia del Derecho Romano*, Cizur Menor (Navarra), 2010.

- *Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, en AA.VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano* (coords. A. Fernández de Buján; G. Gerez Kraemer; B. Malavé Osuna), Madrid, 2011.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *La Betica, cornice privilegiata della legislazione municipale e coloniale dell'Hispania Romana*, en Filía. Scritti per Gennaro Franciosi, a cura di F. D' Ippolito, vol. II, Napoli, 2007.

- *Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la Administración*, Madrid, 2010.

FERNÁNDEZ LÓPEZ M. C., *Sidonio Apolinar, humanista de la antigüedad tardía: su correspondencia*, en *Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Antigüedad tardía*, vol. 11, Universidad de Murcia, 1994.

FERNÁNDEZ ROSÁENZ A., *El cuerpo de vigiles*, en Revista General de Derecho Romano (RGDR), www.iustel.com, 2, Madrid, 2004.

- *Policía y orden interno en Roma* (tesis doctoral, director: Profesor Dr. A. Fernández de Buján), 2003.

FERRARI DALLE SPADE G., *Diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo*, en *Bizantinische Zeitschrift* 18, München, 1909 [= Scritti Giuridici I, Milano, 1953].

FERRARY J. L., *Sulla legislazione <<de repetundis>>*, *Labeo*, 29, Napoli, 1983.

FEYEL C., *Dokimasia: La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy, 2009.

FLACH A., *Das iudicium quinquevirale im Werdegang senatorischer Strafgerichtsbarkeit*, en ZSS, 113, Weimar, 1996.

FORMIGONI CANDINI W., *Codex Theodosianus, lib. VI, titulus XXIX, De Curiosis: "Constantius curiosorum isolentiae, ambitioni, avaritiae modum ponit: officium eorum circa cursum publicum et curas agendas instruit"*, en Ann. Univ. Ferrara, 13, 1999.

FRAKES R. M., *<<Contra potentium iniurias>>. The <<Defensor civitatis>> and Late Roman Justice*, München, 2001.

FRANCIOSI E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano, 1998.

FRIDH Ä, *Terminologie et Formules dans les "Variae" de Cassiodore. Études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'Antiquité*, Göteborg, 1956.

FUSCO S., *Le strutture personali dell'amministrazione romana*, en L'educazione giuridica IV- Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo I- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981.

GABBA E., *Aspetti sociali del rescritto imperiale di Vargate*, en AA. VV., *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture. Classes sociales dirigeantes et pouvoir central*, dir. M. Cébeillac-Gervasoni, Paris-Rome, 2000.

GABRIELSEN V., *Remuneration of state officials in fourth century B. C. Athens*, Odense, 1981.

GAGÉ J., *Infirmes, blessés de guerre et marques corporelles dans l' ancienne Rome*, en *Revue des Études Latines (REL)*, 47, Paris, 1969.

GALLO L., *La democrazia ateniese e la paga dei funzionari pubblici*, en *Annali Scuola norm. Sup. di Pisa*, III.14, Pisa, 1984.

GANSHOF F. L., *Le statut personnel du colon au Bas-Empire. Observation en marge d' une théorie nouvelle*, en *L' Antiquité classique*, 14, Louvain, 1945.

GARBARINO P., *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano, 1988.

- <<*Senatores in annis minoribus constituti*>> e <<*usurae*>>. *Contributo all' esegesi di Cth. 2.33.2*, BIDR, 30, 1988.
- *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli, 1992.

GARCÍA BROSA G., *Mercatores y negotiatores: ¿simples comerciantes?*, en *Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental*, Barcelona, n. 30, Barcelona, 1999.

GARCÍA GARRIDO M. J., *Precedentes romanos del tráfico de influencias* (lección inaugural del curso 1992-1993 de la UNED), Madrid.

- *La concusión y el tráfico de influencias en la lex Ursonensis y en las leyes municipales*, en *Studia historica. Historia antigua*, 15, Salamanca, 1997.

GARCÍA DE ENTERRÍA E., *El principio de <<la responsabilidad de los poderes públicos>> según el art. 9.3 de la Constitución y la responsabilidad patrimonial del Estado legislador*, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, 67 (enero-abril), Madrid, 2003 [=Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. 4, Madrid, 2002].

GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia*, en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 152, Madrid, 1963.

GARCÍA MARÍN J. M., *El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media*, Sevilla, 1974.

- *La función pública en la Castilla bajomedieval: consideraciones generales*, en L'educazione giuridica IV- Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo 1- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981.

GARCÍA MORENO L. A., *Una nota sobre la organización de las Sacrae Largitiones: comes/comites thesaurorum*, en Cuadernos de Filología, vol. 11, Madrid, 1976.

GARLAND L., *The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World*, London, 1995.

- *Byzantine empresses: women and power in Byzantium, AD 527-1204*, London-New York, 1999.

GARRIDO GONZÁLEZ E., *Los gobernadores provinciales en el occidente bajo-imperial*, Madrid, 1987.

GARRIGA C., *Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la visita del Ordenamiento de Toledo (1480)*, en Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 61, Madrid, 1991.

GARZETTI A., *Le basi amministrative del principato romano*, en AEVUM, 30, fasc. 2, Milano, 1956.

GAUDEMET J., *Justum matrimonium*, RIDA, 2, Mélanges Fernand De Visscher, vol. 1, Bruxelles, 1949.

GEHLEN T., *La signification de la lex Barbarius Philipus (D. 1.14.3) pour le notariat en Hollande et Zelande aux 17^{ème} et 18^{ème} siècles*, en *Viva vox iuris civilis. Essays in honour of J. E. Spruit*, Amsterdam, 2002.

GEISSLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin, 1998.

GIANGRECO PESSI M. V., *Situazione económico-sociale e política finanziaria sotto i Severi*, Napoli, 1998

GIARDINA A., *Aspetti della burocrazia nel Basso Impero*, Roma, 1977.

- *Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona*, en *Siculorum Gymnasium*, 30, 1977.
- *Cassiodoro politico*, Roma, 2006.

GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocínio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990.

- *Intorno alla "relatio" 23 di Q. Aurelio Simmaco*, SDHI, 62, Roma, 1996.
- *Patrocínio e matrimonio nel Codice Teodosiano*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VII Convegno Internazionale*, Napoli, 1988.
- *PS. 5.13-15, edictum de accusationibus e giurisdizione criminale nel tardo Impero romano*, SDHI, 63, Roma, 2002.
- *Il "munus" della pretura a Roma e a Costantinopoli nel corso del tardo impero romano*, en *Antiquité tardive*, vol. 15, Paris, 2007.

- *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*², Perugia, 2008.

GILIBERTI G., *Servus quasi colonus. Forme non tradizionali di organizzazione del lavoro della società romana*, Napoli, 1981.

- *Legatum Kalendarii. Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del Principato*, Napoli, 1984.

GIMAZANE J., *Ammien Marcellin, sa vie et son oeuvre*, Toulouse, 1889.

GIUFFRÉ V., *Su i "servi" e la "militia" secondo il codice Teodosiano*, LABEO, 24, Napoli, 1978.

- *<lura> e <arma>. Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*³, Napoli, 1983.

GIZEWSKI Ch., *Zur Normativität und Struktur der Verfassungsverhältnisse in der späteren römischen Kaiserzeit*, München, 1988.

GOFFART W., *Did Julian combat Venal Suffragium? A note on Cth. 2.29.1*, en *Classical Philology* (CPh), 65, Chicago, 1970.

GOMÉZ-IGLESIAS A., *Régimen procesal de la caución tutelar*, SDHI, 58, Roma, 1992.

GONZÁLEZ ALONSO B., *El juicio de residencia en Castilla. I: Origen y evolución hasta 1480*, A.H.D.E., 48, 1978.

- *Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el antiguo régimen (Corona de Castilla, siglo XII-XVIII)*, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 4, Madrid, 2000.

GONZÁLEZ ROMANILLOS J. A., *La corrupción política en época de Julio César. Un estudio sobre la Lex Iulia de repetundis*, Granada, 2009.

GONZÁLEZ SALINERO R., *Investigadores de la corrupción, corruptos: la degradación moral de los agentes in rebus*, en AAVV., *La corrupción en el mundo romano* (Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos), n. 5, Madrid, 2008.

GORIA F., *Iudici civili e iudici militari nell'età giustiniana*, en SDHI, 61, Roma, 1995.

GREATREX G.- BARDILL J., *Antiochus the Praepositus. A Persian eunuch at the court of Theodosius II*, en Dumbarton Oaks Papers, 50, Washington, 1996.

GRELLE F., <<*Munus publicum*>>. *Terminologia e sistematica*, LABEO, 7, Napoli, 1961.

- *Adsignatio e publica persona nella terminologia dei gromatici*, en Synteleia V. Arangio-Ruiz, 2, Napoli, 1964.
- *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, en AA. VV., *Società romana e impero tardoantico*, I. Istituzioni, ceti, economie (a cura di A. Giardina), Roma-Bari, 1986.
- *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, en INDEX, 15, Napoli, 1987.

GRIGG R., *Portrait Bearing-Codicils in the Illustrations of the Notitia Dignitatum*, JRS, 69, London, 1979.

GUARINO A., *Le notti del praefectus vigilum*, en Labeo 8.3, Napoli, 1962.

- *Frustula iuris Romani. V. La pretura di Barbario Filippo*, en ANA, 99, 1988 [=Pagine di diritto romano, III, Napoli, 1994].

- *Depontani senes*, en *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994.

GUILLAND R., *Les Eunuques dans l'Empire Byzantin: Étude de titulature et de prosopographie*, en *Revue études byzantines*, 1, Paris, 1943.

- *Fonctions et dignités des eunuques*, en *Revue études byzantines*, 2, Paris, 1944.
- *Les logothètes. Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin*, en *Revue des études byzantines*, 29, Paris, 1971.

GUIZZI F., *La letteratura "de officio"* (rec. a A. DELL' ORO), en *LABEO*, 7, Napoli, 1961.

GÜNTHER R., *Der soziale Charakter des Defensores in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung*, en *INDEX 7*, Napoli, 1977.

GUZMÁN ARMARIO F. J., *La fama de una época. Retrato del magistrado íntegro en la obra de Quinto Aurelio Símaco*, en AAVV., *La corrupción en el mundo romano (Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos)*, n. 5, Madrid, 2008.

JIMÉNEZ SALCEDO M. C., *Notas sobre urbanismo en Derecho Romano*, en *RGDR* (www.iustel.com), 5, 2005.

HAASE R., *Untersuchungen zur Verwaltung des spätromischen Reiches unter Kaiser Justinian I (527-565)*, Wiesbaden, 1994.

HAHN I., *Immunität und Korruption der Curialen in der spätantike*, en *Korruption im Altertum*, hrsg. W. Schuller, München-Wien, 1982.

HAINZMANN M., *Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung der stadtrömischen Wasserleitungen*, Wien, 1975.

HANSEN M. H., *Misthos for Magistrates in Classical Athens*, en Smb. Osloenses, 54, 1979.

HARMAND L., *Le patronat sur les collectivités publiques dès origines au Bas-Empire*, Paris, 1957.

HARRIES J., *The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II*, en JRS, 78, London, 1988.

HAYASHI N., *Proceso histórico de la contractualización del suffragium*, AHDE 54, Madrid, 1984.

- *Il Suffragium dell imperatore Giuliano e di Teodosio I*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale in onore di Arnaldo Biscardi, Napoli, 1995.

HECHT B., *Störungen der Rechtslage in den Relationem des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.*, Berlin, 2006.

HERRMANN L., *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles, 1964.

HERRMANN-OTTO E., <<Causae liberales>>, INDEX, 27 (in memoria di G. Impallomeni), Napoli, 1999.

- *Promotionszeremoniell und Personalpolitik an Kaiserlichen residenzen*, en en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno Internazionale in memoria di André Chastagnol, Napoli, 2001.

HEUMANN H.-SECKEL E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Graz, 1958.

- v. *officium*.
- v. *respondere*.

HIRSCHFELD O., *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin, 1905.

HOLMBERG E., *Zur Geschichte des cursus publicus*, Uppsala, 1933.

HOPKINS K., *Eunuchs in Politics in the Later Roman Empire*, en Proceedings of the Cambridge Philological Society, 1963.

HOUSTON G. W., *The administration of Italian sea ports during the first three centuries of the Roman Empire*, en D'ARMS and KOPFF (eds.), *The Seaborne Commerce of Ancient Rome*, Rome, 1980.

HÜBNER H., *Der praefectus aegypti von Diokletian bis zum ende der römischen Herrschaft*, München, 1952.

JACQUES F., *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome, 1984.

JAHN J., *Zur Iteration der Magistraturen in der römischen Republik*, en Chiron 2, München, 1972.

JAPPELLA CONTARDI L., *Un esempio di 'buracrazia' municipale: i 'curatores kalendarii'*, en Epigraphica, 39, Bologna, 1977.

JASCHKE K., *Munera publica. Funzione e carattere dei curatores nella città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, en Gli Statuti Municipali (a cura di L. Capogrossi-Colognesi; E. Gabba), Pavia, 2006.

JAVATO MARTÍN A. M^a., *El concepto de funcionario y autoridad a efectos penales*, en Revista jurídica de Castilla y León, 23, Valladolid, 2011.

JÈZE G., *Essai d'une theorie générale des fonctionnaires de fait*, en Rev. Droit public, 21, Paris, 1914.

JIMÉNEZ SALCEDO M. C., *Notas sobre urbanismo en Derecho Romano*, en Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), 5, 2005.

JONES A.H.M., *The date and value of the Verona List*, en JRS, 44, London, 1954.

- *The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, vol. I-II², Oxford, 1973.
- *Il sistema delle caste nel tardo impero romano*, en La società del Basso Impero. Guida storica e critica (a cura di D. Vera), Bari, 1983
[=*The Caste System in the Later Roman Empire*, en Eirene, VIII, 1979].

JÖRDENS A., *Statthalterliche Verwaltung in Der Romischen Kaiserzeit: studien zum Praefectus Aegypti*, Stuttgart, 2009.

KAKRIDI C., *Cassiodors <<Variae>>. Literatur in Politik im ostgotischen Italien*, München, 2005.

KAPLAN M., *Les propriétés de la couronne et de l'Église dans l'empire byzantin (V-VI siècles)*, Paris, 1976.

- *Novelle de Tibère II sur les <<maisons divines>>*, en Travaux et Mémoires, 9, Paris, 1985.

KELLY G., Ammianus Marcellinus. *The Allusive Historian*, Cambridge, 2008.

KENT J. P. C., *The Office of the Comes Sacrarum Largitionum*, London, 1955.

KEYES C. W., *The date of the Laterculus Veronensis*, en *Classical Philology*, vol. 11, n. 2, Chicago, 1916.

KIRBIHLER F., *Les femmes magistrats et liturges en Asie Mineure (II s. av. J.-C-III s. ap. J.-C.)*, KTEMA, 19, Strasbourg, 1994.

KLINGENGERG G., *Corpus der römischen Rechtsquellen zur Sklaverei X.6. Juristisch speziell definiert Sklavengruppen: Servus fugitivus*, Stuttgart, 2005.

KNÜTEL R., *Barbarius Philippus und seine Spuren. Falsus praetor, parochus putativus und Scheinbeamter*, en *Festschrift Mikat*, Berlin, 1989.

KOCH P., *Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700*, Jena, 1903.

KOEMOTH P., *Autour du prêtre isaique figuré dans le calendrier romain de 354*, en *Latomus* 67, n. 4, Bruxelles, 2008.

KOLIAS G., *Ämter -und Würdenkauf im früh-und Mittelbyzantinischen Reich*, Athènes, 1922.

KOLMER L., *Christus als beleidigte Majestät. Von der lex "Quisquis" (397) bis zur Dekretale "Vergetis" (1199)*, en H. Mordek (ed.), *Festschrift für Horst Fuhrmann zur 65. Geburtstag*, Tübingen, 1991.

KUHOFF W., *Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4. Jahrhundert n. Chr. Ämter und Amtsinhaber in Clarissimat und Spektabilität*, Frankfurt am Main- Bern, 1983.

KUNDEREWICZ C., *Le gouvernement et les étudiants dans le code théodosien*, RHDF, 50, Paris, 1972.

- *Evolution historique de la responsabilité des fonctionnaires dans l'Égypte ptolémaïque, romaine et byzantine*, RIDA 4, Bruxelles, 1957.

KÜSTER A., *Blinde und Taubstume im römischen recht*, Köln, 1991.

LABOULAYE E., *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, Leipzig, 1845.

LALINDE ABADÍA J., *La purga de taula*, en Homenaje a J. Vicens Vicens, Barcelona, 1965.

- *Los medios personales de gestión del poder público en la historia española*, Madrid, 1970.

LAMBERTI F., <<*Tabulae Irnitanae*>>. *Municipalità e <<ius romanorum>>*, Napoli, 1993.

LANATA V., *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1984.

LANIADO A., *Les amendes collectives des officia dans la législation impériale après 438*, en *Ancient Society* 23, Louvain, 1992.

LANZA C., <<*Sordus mutus*>> in *D. 5.1.12.2, LABEO 40.2*, Napoli, 1994.

- *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di diritto classico*, BIDR, 90, Roma, 1987.

LA ROSA F., *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953.

LASSANDRO D., ``*Exhaustae provinciae... praesidentium rapinis*``. *Corruzione e rivolta morale nella Gallia tardoantica (nei ``Panegyrici`` e in Salviano)*, en *Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e Rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13, dicembre 1995), Catania, 1999.

LATORRE A., *Sobre la capacidad jurídica de Derecho público del ``filius familias``*, en *Estudios homenaje a Ursicino Álvarez*, Madrid, 1978.

LAURIA M., *Il Gnomon del Idios Logos*, en Atti Acc. Sc. Mor. Pol., Napoli, 75, 1964.

LÉCRIVAIN C., *Le sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris, 1888.

LE GALL J., *Le Tibre, fleuve de Rome dans l'Antiquité*, Paris, 1953.

LEPELLEY C., *Les cités de l'Afrique romaine au bas-empire, I. La permanence d'une civilisation municipale*, Paris, 1979.

- *Quot curiales tot tyranni. L'image du decurion oppresseur du Bas Empire*, en E. FRÉZOULS (eds.), *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du III milieu du IV siècle ap. J.-C.)*, Strasbourg, 1983.

LEVICK B., *Imperial control of the elections under the Early Principate: commendatio, suffragatio and "nominatio"*, en *Historia* 16, Wiesbaden-Stuttgart, 1967.

LEWIN A., *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze, 1995.

LIBERATI G., <<Munera>> e <<Honores>> in Erennio Modestino, *BIDR* 71, Milano, 1968.

LIBERATI A. M.- SILVERIO E., *Servizi segreti in Roma antica. Informazioni e sicurezza dagli initia Urbis all'impero universale*, Roma, 2010.

LICANDRO O., *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999.

- <<Aegyptum imperio populi romani adieci>>. *L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli, 2008.

LIEBENAM W., *Städverwaltung im kaiserreiche*, Roma, 1967.

LIEBS D., *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike*, en ZRG (= ZSS) 95, 1978.

LIND L. R., *The Idea of the Republic and the Foundations of Roman Morality*, en *Studies in Latin Literature and Roman History* (C. Deroux, ed.), Bruxelles, 1989.

LINTTOT A. W., *The Leges de Repetundis and Associate Measures under the Republic*, en ZSS, 98, Weimar, 1981.

LIZZI TESTA R., *Codicilli imperiali e Insignia episcopali: un'affinità significativa*, RIL, 122, Milano, 1988.

- *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari, 2004.
- *Alla corte dell'imperatore: Quinto Aurelio Simmaco e i suoi quaestores*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale in onore di Manuel J. García Garrido*, Napoli, 2007.

LO CASCIO E., *Le tecniche dell'amministrazione*, en *Storia di Roma*, II. L'Impero mediterraneo, 2. I principi il mondo, Torino, 1991.

LONGO G., *Delictum e crimen*, Milano, 1976.

LOVATO A., *Sul "honor decurionatus" nel I libro delle "Disputationes ulpianee"*, SDHI, 56, Roma, 1990.

- *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.

- *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003.

LOZANO CORBÍ E., *La expropiación forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el derecho romano*, Zaragoza, 1994.

- *Expropiación forzosa en el Derecho Romano*, en *Derecho Administrativo Histórico*, en AA. VV., *Derecho Administrativo Histórico*, coord. A. Fernández de Buján, Santiago de Compostela, 2005.

LUCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996.

- *Spunti per una imagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii costantinopolitani*, in *Studi Senesi. Rivista dell'Università degli Studi di Siena*, 2005.

LUCIFREDI-PETERLONGO M. E., *Barbarius Philippus... servus fugitivus... praetor designatus est (Contributi all'esegesi di D. 1.14.3)*, in *Contributi allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, Milano, 1965.

LUST HITTA E., *Funcionario de hecho: ¿Destitución o revocación?*, in *Revista de Derecho público*, n. 30, Montevideo, 2007.

LUZATTO G. I., *Sull' <<ius iurandum in legem*>> dei magistrati e senatori romani, in *Scritti in memoria di U. Borsi*, Padova, 1955.

MAC CORMACK G., *Further on "periculum"*, in *B.I.D.R.*, 21, Milano, 1979.

MAC CORMACK S., *Art and Ceremony in Late Antiquity (Transformation of the Classical Heritage)*, Berkeley, 1981.

MAC MULLEN R., *Woman in public in the roman empire*, in *Historia*, 29. 2, Wiesbaden-Stuttgart, 1980.

- *La corruzione e il declino di Roma*, Bologna, 1991.

MACERATINI R., *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano ad Ugucione)*, Milano, 1994.

MAGIONCALDA A., *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, en *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 30. 2, Genova, 2000.

MALAVÉ OSUNA B., *Una constitución de Teodosio I en la historia del suffragium*, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, 5, 2002.

- *Suffragium: Un crimen publicum en la frontera de la legalidad*, SDHI 69, Roma, 2003.
- *Corrupción política y amistad en la Roma de Cicerón*, en *El Derecho Penal: De Roma al Derecho actual (VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano)*, coords. Camacho de los Ríos, Calzada González, Madrid, 2005.
- *El acceso y la promoción de los funcionarios en la administración del Bajo Imperio*, en *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 27, Santiago de Chile, 2005.
- *Régimen Jurídico Financiero de las obras públicas en el Derecho Romano tardío: los modelos privado y público de financiación* (Prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2007.

MALOSSE P.-L., *Enquête sur la date du discours 59 de Libanos*, en *Antiquité tardive*, 9, Paris, 2001.

MANFREDINI A. D., *Municipi e città nella lotta ai "latrones"*, en Annali dell'Università di Ferrara, 5.6, 1992.

- *Sugli schiavi ordinati invito dominio*, en Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi, Napoli, 1995.
- *Gli ufficiali terribili e doni dei rurali* (CTh. 11.11.1), Annali dell'Università di Ferrara, 5.10, 1996.

MANNINO V., *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano, 1984.

MANTOVANI D., *Il bonus praeses secondo Ulpiano. Studio su contenuto e forma del "de officio proconsulis" di Ulpiano*, BIDR, 96-97, Milano, 1993-1994.

- *Il iudicium pecuniae communis. Per l' interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, en Gli Statuti Municipali (a cura di L. Capogrossi-Colognesi; E. Gabba), Pavia, 2006.

MARCHI A., *I testi delle pandette relativi alla vendita e al legato della militia*, A.G., serie III-vol. V, Roma, 1906.

MARCONE A., *Commento storico al libro VI dell' epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1983.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Il divieto per gli ebrei di accedere alle cariche pubbliche e il problema della giurisdizione ecclesiastica sugli infedeli nel sistema canonistico e fino alle decretali di Gregorio IX*, en Études G. Le Bras, II, Paris, 1965.

MARICHAL R., *L' écriture latine de la chancellerie impériale romaine*, en Aegyptus 32, Milano, 1952.

MARLASCA O., *Responsabilidad del juez en el ejercicio de su deber: textos romanos y visigodos*, Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, vol. 50, n. 1, 2002.

MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura tra principato e tardo impero romano*, en Ostraka. Rivista di Antichità, 8, Napoli, 1999.

- *Ulpiano e l'impero. II. Studi sui libri de officio e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004.

MARQUARDT J., *Römische Staatsverwaltung*, vols. I-II, Leipzig, 1881-1884.

- *La vie privée des romains*, II, Paris, 1893.

MARROU H. I., *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris, 1965.

MARTÍNEZ DíEZ G., *Los oficiales públicos, de las Partidas a los Reyes Católicos*, en Actas del II Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1971.

MARTÍNEZ-FAZIO L. M., *La segunda basílica de San Pablo Extramuros. Estudios sobre su fundación*, Roma, 1972.

MARTÍNEZ PASTOR M., *Amiano Marcelino, escritor romano del s. IV: perfil literario*, en Estudios clásicos, 34, n. 102, Madrid, 1992.

MARTINI R., *Di nuovo sulla <<definitio>> fra retorica e giurisprudenza*, LABEO 41.2, Napoli, 1995.

- *Roma e Atene. Note comparatistiche in 'campo costituzionale'*, en Tradizione romanistica e costituzione I, Napoli, 2006.

MASFERRER A., *La pena de infamia en el derecho histórico español. Contribución al estudio de la tradición penal europea en el marco del ius commune*, Madrid, 2001.

MASI A., *La giurisdizione del <<comes sacrarum largitionum>> e del <<comes rei privatae>> sui rispettivi funzionari <<palatini>*, en *Studi economico-giuridici*, 45, Milano, 1965-1968.

MASS M., *John Lydus and the Roman Past*, London-New York, 1992.

- *John Lydus and the eastern Praetorian prefecture in the sixth Century AD*, en *Byzantinische Zeitschrift*, vol. 98.2, München, 2005.

MASTRANGELO L., *Il peculium quasi castrense. Privilegio dei palatini in età tardo antica*, en *RIDA*, 52, Bruxelles, 2005.

MATTHEWS J. F., *Symmachus and the magister militum Theodosius*, en *Historia* 20, Wiesbaden-Stuttgart, 1971.

- *The Roman Empire of Ammianus*, London, 1989.

MAZZA M., *Giovanni Lido, De magistratibus sull'interpretazione delle magistrature romana nella tardo antichità*, en *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (IV-VII sec. d. C.)*, en *Studi in onore di Rosario Soraci*, vol. II, Catania, 2002.

MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma, 1951.

- *L'impero romano*, Roma, 1956.
- *<<Annunci>> e <<publica laetitia>>: l'iscrizione di Fausto e altri testi*, en *Antico tardoantico ed era costantiniana*, vol. I, Bari, 1973.

MELIDA J. R., *El disco de Teodosio*, Madrid, 1930.

MENTXACA R., *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, RIDA, 37, Bruxelles, 1990.

- *Sobre el capítulo 73 de la "lex Irnitana"*, en LABEO, 38.1, Napoli, 1992.
- *¿El funcionario de hecho en el Derecho Romano?*, INDEX, 39, Napoli, 2011.
- *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas romanos*, en Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, 28, Vitoria, 2011.

MERCOGLIANO F., *Sulla rilevanza giuridica della divissione dei sessi nell'esperienza romana*, en Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz II, Varsavia, 2000.

- *<<Deterior est condicio feminarum...>>*, INDEX, 29, Napoli, 2001.

METRO A., *Locatio operarum e rischio contrattuale*, en Panorami. Riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione, V, 1993.

MIGL J., *Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie*, Frankfurt am Main, 1994.

MIGLIARDI ZINGALE L., *Osservazioni sulla domus divina di Theodora*, en Annali Fac. giuris. di Genova, 20, 1984-1985.

MIGLIORINO F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1985.

MILAZZO F., *Iurare in leges e altri giuramenti magistratuali nel Panegirico pliniano*, en *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly*, Köln-Wien, 2002.

- *Giurare 'in legem' e 'legi parere' nel de inventione*, en *Studi per G. Nicosia*, V, Milano, 2007.

MILLAR F., *Libanius and the near east*, en *Scripta classica israelica*, n. 26, Jerusalem, 2007.

MILLER H. F., *Legio I Adjutrix*, en *Greece & Rome*, vol. 28, n. 1, Cambridge, 1981.

MITTHOF F., *Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des römischen Reiches im 3. Bis 6. Jh. N. Chr.*, Florence, 2001.

MODUGNO F., v. *''Funzione''*, E.D., vol. XVIII, Varese, 1969.

MOLE M., *La manus iniectio nel codice teodosiano*, RISG, vol. 11, Roma, 1963-1967.

MOLÉ C., *Rivolta morale e rivolta sociale nella Tarda Antichità*, en *Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità* (Catania, 11-13 dicembre, 1995), Catania, 1999.

MOLLÁ NEBOT S., *Iudex unus. Responsabilidad judicial e iniuria iudicis*, Madrid, 2010.

MOMMSEN Th., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1871-1888 = *Le Droit public romain* (trad. Girard), Paris, 1889-1896.

- *Römisches Strafrechts*, Leipzig, 1899 (reed. Graz, 1955).

- *Disegno del diritto pubblico romano*, trad. P. Bonfante, Milano, 1973.

MONKS G. R., *The Administration of the Privy Purse. An Inquiry into Official Corruption and the Fall of the Roman Empire*, en *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, vol. 32, n. 4, Cambridge (MA), 1957.

MOREAU P., *Les 'depontani senes' romains*, en *Metis. Revue d'Antropologie du Monde Grec Ancien*, n. 5, Paris, 2007.

MORELLI A. L., *La moneta nella elargizioni pubbliche e private tra i IV e V secoli d. C.*, en *Eburnea diptycha. I dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo* (a cura di M. David), 2007, Bari.

MORENO DICENTA T., *La responsabilidad subsidiaria del magistrado en la tutela y curatela patronal*, en *La responsabilidad civil. De Roma al derecho moderno* (coord. A. Murillo), Burgos, 2001.

MOSCHETTI C. M., *Gubernare navem. Gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano, 1966.

MURGA GENER J. L., *Sobre la anómala peculiaridad de la constitución C.1.3.33 (34) del emperador León*, en *IURA* 19, Napoli, 1968.

- *Conceptos romanos básicos para el moderno derecho administrativo*, Romanitas, 9, Río de Janeiro, 1971.
- *Las acciones populares en el municipio de Irni*, BIDR, 88, Milano, 1985.
- *La "obnoxietas" una esclavitud legal*, en *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité* (Atti della 51ª Sessione della SIHDA, Crotone-Messina, 16-20 settembre 1997), Catanzaro, 1999.

- *Un original concepto de officium en Séneca*, A.H.D.E., 48, Madrid, 1978.

MYAZINA O., *La imagen del gobernante ideal en las obras de Prudencio*, en GERIÓN, vol. 25, n. 1, Madrid, 2007.

NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983.

- *La reciproca posizione succesoria dei coniugi privi di conubium*, Milano, 1938.

NASTI F., *L'attività normativa di Severo Alessandro. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006.

NEESEN L., *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, en Historia 30, Wiesbaden-Stuttgart, 1981.

NEIRA FALEIRO C., *Il Parisinus latinus 9661 y la Notitia Dignitatum: nuevas aportaciones*, en Latomus: revue d'études latines, vol. 63, n. 2, Bruxelles, 2004.

- *La Notitia dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Madrid, 2006.

NELLEN D., *Viri litterati. Gebildetes Beamtentum uns spätrömischen Reich im Westen zwischen 284 und 395 nach Christus*, Bochum, 1977.

NEMO-PEKELMAN C., *L'exclusion des juifs des fonctions et des dignités*, en AA. VV., *Empire chrétien et Église aux IV et V siècles. Intégration ou <<concordat>>?. Le témoignage du Code Théodosien (Actes du Colloque international, Lyon, 6-8 octobre 2005)*, Paris, 2008.

NÉRAUDAU J. P., *Sexagenarii de ponte. Réflexions sur la genèse d'un proverbe*, en *Revue des Études Latines (REL)* 56, Paris, 1978.

NERI C., *Suffragium. Per la storia di un'idea*, en *Hestiasis, Studi di Tarda Antichità offerti a S. Calderone*, 5, Messina, 1988 [1992].

NERI V., *Le prefetture del pretorio in Occidente nel periodo 346-350 d. C.*, en *Rivista storica dell'Antichità (RSA)*, 4, Bologna 1974.

- *Il lessico sociologico delle tarda antichità: L'esempio delle "Variae" di Cassiodoro*, en *Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci*, 51, Roma, 2010.

NICOLET C., *Histoire, Nation, République*, Paris, 2000.

NICOSIA R., *Il praefectus vigilum nella Nov. XIII di Giustiniano. Bilinguismo a Costantinopoli tra ideologia ed ermeneusi testuale*, en *Mediterraneo antico*, 6, n. 1, Pisa, 2003.

NOCERA G., *Il centralismo amministrativo del tardo impero*, en *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno Internazionale*, Napoli, 1990.

NOGRADY A., *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2006.

NUYENS M., *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Löwen, 1964.

ORESTANO R., *La dote nei matrimonio contra mandata*, en *Studi di storia e diritto in memoria di G. Bonolis*, I, Milano, 1942 [= Scritti II, Napoli, 1998, pp. 750 ss.]

- *L'assimilazione degli enti ecclesiastici ai pupili e la sua derivazione romamistica*, en Études Le Bras, II, Paris, 1965.
- v. "*consilium*", NNDI, IV, Varese, 1959.
- *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1966²,
- *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967.

OSTROGORSKY G., *Historia del Estado Bizantino*, trad. esp. J. Facci, Madrid, 1984.

PACK R. A., *Curiales in the Correspondence of Libanius*, en Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 81, Princeton, 1951.

PEDERSEN F. S., *On professional qualifications for public posts in late antiquity*, en Classica et Mediaevalia 31, Aarhus, 1970.

PALAO J., *El sistema jurídico ático clásico* (Prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2008.

PALAZZOLO N., *Le conseguenze della morte del 'conductor operarum' sul rapporto di lavoro* (Osservazioni su D. 19.2.19.9), en SDHI, 30, Roma, 1964.

PALLASSE M., *Orient et Occident, à propos du colonat romain au Bas-Empire*, Paris, 1950.

PALMA A., *Le curae pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1980 (rist. 1991).

PALME B., *Die officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, en Antiquité Tardive, vol. 7, Paris, 2000.

PANIAGUA D., *La divulgación de conocimientos en época tardoantigua: el caso de Polemio Silvio*, en *Evphrosyne: Revista de filología clásica*, 37, Lisboa, 2009.

PASCHOUD F., *Frumentarii, agentes in rebus, magistriani, curiosi, veredarii: problèmes de terminologie*, en *Bonner Historia-Augusta Colloquium (BHAC)*, 10, Bonn, 1979/81.

PASTOR DE AROZENA B., *Rétorica y burocracia: hapax y prima dicta en el lenguaje de las cancellerías*, *Latomus*, 46, Fasc. 4, Bruxelles, 1987.

PAVIS D'ESCURAC H., *La préfecture de l'annone service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Paris, 1976.

- *Aristocratie sénatoriale et profits commerciaux*, en *Ktema*, 2, Strasbourg, 1977.
- *Pline le jeune et les lettres de recommandation*, en *La mobilité sociale dans le monde romain*, E. Frézouls (ed.), Strasbourg, 1992.

PAVÓN TORREJÓN P., *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano*, Madrid, 2003.

PEACHIN M., *Frontinus and the curae of the curator aquarum*, Stuttgart, 2004.

PENDÓN MELÉNDEZ E., *Régimen jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho Romano* (Prólogo de Antonio Fernández de Buján), Madrid, 2002.

PEPPE L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984.

PEREIRA-MENAUT G., *Che cos' è un munus?*, en *Athenaeum*, 92, Pavia, 2004, pp. 169 ss.

PERELLI L., *La corruzione politica nell'antica Roma. Tangenti, malversazione, malcostume, illeciti, raccomandazione*, Milano, 1994.

PÉREZ F., *Los cingula militiae tardorromanos de la península ibérica*, en *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, 58, Valladolid, 1992.

PÉREZ MARTÍN, A., *La obra jurídica de Jacobo de las Leyes: Las flores del derecho*, en *Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale*, 22, Paris, 1999.

PERGAMI F., *Sulla istituzione del defensor civitatis*, en *SDHI*, 61, Roma, 1995.

PETIT L., *Essai sur la vie et la correspondance du sophiste Libanius*, Paris, 1866.

PETIT P., *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV siècle après J.C.*, Paris, 1955.

- *Recherches sur la publication et la diffusion des discours de Libanius*, en *Historia*, 5, Wiesbaden-Stuttgart, 1956.
- *Les sénateurs de Constantinople dans l'oeuvre de Libanius*, en *L'antiquité classique (AC)*, 26, Louvain, 1957.
- *Les étudiants de Libanius. Un professeur de Faculté et ses élèves au Bas-Empire*, Paris, 1957.
- *Les fonctionnaires dans l'oeuvre de Libanus. Analyse prosopographique*, Paris, 1994.

PETRUCCI A., *Persistenza di negozi bancari nelle fonti giuridiche tra la fine del III e i primi decenni del V secolo d.C.*, en *Atti dell'Accademia Romanistica*

Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti, Milano, 1998.

PFLAUM H. G., *Principes de l'administration romaine impériale*, en Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 37.3, 1958.

- *Les salaires des magistrats et de fonctionnaires du Haut-Empire*, en Les dévaluations à Rome. Époque republicane et impériale, Roma, 1978.

PIETRINI S., *Sull' iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996.

PINO ABAD M., *La pena de confiscación de bienes en el Derecho histórico español*, Córdoba, 1999.

PINTO M., *La scuola di Libanio nel quadro del IV secolo d. C.*, en Rend. Ist. Lomb. 108, Milano, 1974.

POLARA G., *Le "Varie" di Cassiodoro: problemi letterari e filologici*, en Filologia mediolatina: rivista della fondazione Ezio Franceschini, 11, Firenze, 2004.

POMA G., *"Servi fugitivi" e schiavi magistrati in età triumvirale*, INDEX, 15, Napoli, 1987.

- *Il plebiscito "ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet" (Liv., VII, 42,2)*, en Rivista Storica dell' Antichità (RSA), 22-23, Bologna, 1992-1993.
- *Il plebiscito "ne quis duos magistratus uno anno gereret" (Liv., VII, 42,2)*, en Riv. Stor. Ant. (RSA), 24, Bologna, 1994.

PONS L., *The annona militaris in the Tingitana: observations on the organization and provisioning of the roman troops*, en *New Perspectives on the Ancient World. Modern Perceptions, Ancient Representations* (FUNARI/GARRAFFONI/LETALIEN eds.), London, 2008.

PONTE ARREBOLA V., *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano* (Prólogo de A. Fernández de Buján), Madrid, 2007.

PORENA P., *Le origine della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003.

PRODI P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale*, Bologna, 1992.

PROSCHWITZ G., *Responsabilité: l'idée et le mot dans le débat politique du XVIIIe siècle*, en *Actes du Xe Congrès intern. de linguistique et philologie romanes*, Strasbourg, I, 1962.

PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980.

- *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. vol. I. Problemi di diritto pubblico*, Milano, 1984.
- *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. vol. II. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano, 1991.
- *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana: i crimini politici e amministrativi e i crimini contro la persona*, en *Filía. Scritti per Gennaro Franciosi*, IV, Napoli, 2008.

- *S. Ambrogio, vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico*, en Studi in onore di Antonino Metro, vol. V, Milano, 2010.

PURPURA G., *Il magister officiorum e la <<schola agentum in rebus>>*, Labeo, 25, Napoli, 1979.

- *Sulle origine della Notitia Dignitatum*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno Internazionale in onore di A. Biscardi, Napoli, 1995. [= Annali Palermo 42, 1992, pp. 471 ss.].

QUAGLIONI D., *L'ufficiale in Bartolo*, en L'educazione giuridica IV- Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo 1- Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, 1981.

- <<Delinquens in officio>>. *Spunti dal diritto commune*, en La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali: atti del convegno, Trento 18-19 maggio 2001, Padova.

QUINTANA ORIVE E., *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, RIDA, 50, Bruxelles, 2003.

- *Cth. 10.20: Acerca del régimen jurídico de los gynaecearii, murileguli, monetarii y bastagarii en época postclásica*, RIDA, 53, Bruxelles, 2006.
- *D. 11.5 (De aleatoribus) y C. 3.43 (De alea lusu et aleatoribus): precedentes romanos del contrato de juego*, Anuario jurídico y económico escorialense, XLII, San Lorenzo del Escorial, 2009.
- *Observaciones sobre la prueba del estado civil*, RIDA, 55, Bruxelles, 2008.

- *Acerca de la regulación jurídica de los baños públicos (balneae) en Derecho Romano*, en Revista General de Derecho Romano (RGDR), www.iustel.com, 14, 2010.

RABELLO A. M., *Giustiniano, ebrei e samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, vol. II, Milano, 1988.

- *The Samaritans in Justinian's Corpus iuris civilis*, en Israel Law Rev., 31, Jerusalem, 1997.

RAEPSAET-CHARLIER M. T., *Clarissima femina*, RIDA, 28, Bruxelles, 1981.

- *Épouses et familles de magistrats dans les provinces romaines aux deux premiers siècles de l'Empire*, en Historia, 31, Wiesbaden-Stuttgart, 1982.

RAMPAZZO N., *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli, 2008.

REINACH T., *Un code fiscal de l'Égypte romaine. Le Gnomon de l'Idiologue*, Paris, 1920-1921.

REMESAL J., *La annona militaris y la exportación de aceite bético a Germania*, Madrid, 1986.

REYNOLDS P. K. Baillie, *The vigiles of imperial Rome*, Oxford, 1926.

RICCOBONO Jr., S., *Il Gnomon del Idios Logos*, Palermo, 1950.

- *Il problema della ricostruzione delle strutture amministrative romane*, Synteleia V. Arangio-Ruiz, II, Napoli, 1964.

RIZZO F. P., *Il De Gubernatione Dei di Salviano nel quadro della problematica di fine impero*, Atti del Convegno internazionale su Corruzione, Repressione e

Rivolta morale nella Tarda Antichità (Catania, 11-13 dicembre 1995), Catania, 1999.

ROBINSON O. F., *The water supply of Rome*, en SDHI, 46, Roma, 1980.

RODA S., *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981.

- *Un caso di assenteismo nei quadri della burocrazia alla fine della burocrazia imperiale alla fine del IV secolo d. C.*, INDEX 15, Napoli, 1987.

RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *Las obligaciones indemnizatorias en el Derecho romano público*, Almería, 1996.

RODRÍGUEZ NEILA J. F., *Elogio público de un magistrado municipal romano*, Habis, 18-19, Sevilla, 1987-1988.

- *<<Tabulae publicae>>. Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid, 2005.

RÖGLER G., *Die Lex Villia Annalis. Eine Untersuchung zur Verfassungsgeschichte der römischen Republik*, en Klio 40, Frankfurt am Main, 1962.

ROMANO S., v. "*defensor civitatis*", NNDI, V, Torino.

ROSAFIO P., *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione nel quarto secolo*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. X Convegno internazionale in onore di A. Biscardi, Napoli, 1995.

- *Studi sul colonato*, Bari, 2002.

ROSEN K., *Iudex und officium. Kollektivstrafe, Kontrolle und Effizienz in der Spätantiken Provinzialverwaltung*, en *Ancient Society*, 21, Louvain, 1990.

ROSILLO C., *La corruption à la fin de la République romaine (II-I S. av. J.-C.)*. *Aspects politiques et financiers*, Stuttgart, 2010.

ROSSETTI L., *Le magistrature nell'atene classica. Forme di controllo e forme di responsabilità*, en *L'educazione giuridica. IV. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo 1. Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia, 1981.

ROTONDI G., *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1922.

ROUECHÉ Ch., *The Functions of the Governor in Late Antiquity: Some Observations*, *Antiquité Tardive (Ant. Tard.)* 6, Paris, 1988.

RUSSO RUGGERI C., *Nota minima sulla competenza del pretore in età giustiniana*, *INDEX*, 26, Napoli, 1998.

RUVOLO M., *L'elemento oggettivo ed il bene giuridico del crimen peculatus e del crimen residuis nella lex Iulia peculatus*, en *Panorami*, 13.1, 2001/2002.

RYAN F. X., *Sexagenarius, the Bridge, and the Centuria Praerogativa*, en *Rheinisches Museum für Philologie (RhM)*, 138.2, Köln, 1995.

SAAVEDRA GUERRERO M. D., *La mujer y las asociaciones en el imperio romano*, Santander, 1991.

- *Las mujeres y las magistraturas colegiales: entre el honor y la función real*, BIDR, 96-97, Milano, 1993-1994.

SABBAH G., *Le méthode d'Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res Gestae*, Paris, 1978.

SABLAYROLLES R., *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Roma, 1996.

SALAZAR REVUELTA M., *La gratuidad del mutuo en el derecho romano*, Jaén, 1999.

SALISBURY F. S., *On the date of the Notitia Dignitatum*, en JRS 17, London, 1927.

SALZMANN M. R., *On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity*, Berkeley, 1990.

SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, vol. 1, Milano, 1971.

SANTOS YANGUAS N., *Los eunucos en la administración romana del Bajo Imperio, según Amiano Marcelino*, en Revista internacional de sociología, 24, Madrid, 1977.

- *La crisis del imperio romano en Ammiano Marcelino*, en Memorias de Historia Antigua (MHA) 8, Oviedo, 1987.

SARACHO J. T., *El servicio de vigiles en Roma*, en Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos (coord. E. Crespo/M^a.J. Barrios), vol. 3, Madrid, 2001.

SARGENTI M., *Le strutture amministrative dell'impero da Diocleziano a Costantino*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Il Convegno Internazionale, Perugia, 1976.

- *Il Codice Teodosiano: tra mito e realtà*, en SDHI 61, Roma, 1995.

SARTORI M., *Osservazioni sul ruolo del curator rei publicae*, en Athenaeum, 77, Pavia, 1989.

SCARCELLA A. S., *La legislazione di Leone I*, Milano, 1997.

- *Cth. 12.1.74: riflessioni su pretura e tribunato della plebe nel tardo impero romano*, en *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 14, Madrid, 2010.

SCEVOLA R., *La responsabilità del iudex privatus*, Milano, 2004.

SCHIAVO S., *I governatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l'Apostata*, en *Per il 70 compleanno di Scritti Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà*, Milano, 2009.

SCHILLER A. A., *Bureaucracy and the Roman Law*, en *Seminar*, vol. VII, 1949.

SCHIPANI S., *Lex Aquilia, Culpa, Responsabilità*, en *Illecito e pena privata in età repubblicana*, en *Atti del convegno internazionale di diritto romano* (Copanello, 4-7 giugno 1990), Napoli, 1992,

- *Schede sull'origine del termine 'responsabilità' (Contributo per una riflessione sui problema dell'elaborazione del concetto sistematico generale designato da tale termine)*, en *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995 [= *Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale*, Torino, 2009].

SCHOLTEN H., *Der Eunuch in kaisernähe: zur politischen und sozialen bedeutung des "praepositus sacri cubiculi" im 4 und 5. Jahrhundert n. Chr.*, Frankfurt am Main, 1995.

SCHULLER W., *Priziendes spätantiken Beamtentums*, en *Ders. (Hrsg.), Korruption im Altertum*, München, 1982.

- *Zwischen Klientel und Korruption. Zum römischen Beamtenwesen*, en W. Dahlheim u.a. (Hrsgg.), *Festschrift Robert Werner zu seinem 65. Geburtstag*, Konstanz, 1989.

SCHULZ F., *Principios de derecho romano*, trad. esp. M. Abellán, Madrid, 1990.

SEECK O., *Die Stadtpräfektur bei Ammianus Marcellinus*, en *Hermes*, 18, Berlin, 1883.

- v. *codicilli*, PW, 4.1, Stuttgart, 1900.

- v. *Laterculum*, PW, 12.1, Stuttgart, 1900.

SEGRÉ A., *Essay on Byzantine Economic History*, vol I: *The Annona civica and the annona militaris*, en *Byzantion. Revue internationale des études byzantines*, 16, Bruxelles, 1942-1943.

SELEM A., *Ammiano Marcellino ed i problemi sociali del suo tempo*, en *Annal. Sc. Norm. Sup. Pisa (ASNP)*, 23, 1964.

SERRAO F., *Sul danno da reato in diritto romano*, A.G., 20, Modena, 1956.

SHELDON R. M., *Intelligence Activities in Ancient Rome. Trust in the Gods, but Verify*, London, 2005.

SHERWIN-WHITE A. N., *The Roman citizenship*, Oxford, 1979.

- *The Lex Repetundarum and the Political Ideas of Gaius Gracchus*, en *JRS*, 72, London, 1982.

SIBER H., *Römisches Verfassungsrecht in Geschichtlicher Entwicklung*, Lahr, 1952.

SILVERTROVA E., *Il titolo Cth. 1. 29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano*, Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XIV convegno internazionale in memoria de G. Nocera, 2003.

SIRKS A.J.B. –SIJPESTEIJN P.J. –WORP A., *Ein frühbyzantisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitonie. Die griechischen Papyri aus*

Pommersfelden (PPG) mit einem anhang über die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte, München, 1996.

SIRKS A. J. B., *The management of Public Loans of Towns (the cura kalendarii) and of their finances in general*, en Atti dell' Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale, Napoli, 1998.

- *Die nomination für die städtischen Ämter im römischen Reich*, en Stadt - Gemeinde - Genossenschaft. Festschrift für G. Dilcher zum 70. Geburtstag Hrsg. Cordes, Rückert, Schulze, Berlin, 2003.
- *The Theodosian Code. A study*, Friedrichsdorf, 2007.

SIVAN H., *Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic Aristocracy*, London-New York, 1993.

SLOOTJES D., *The Governor and his Subjects in the Later Roman Empire*, Leyde-New York-Copenhagen-Cologne, 2006.

SOLIDORO MARUOTTI L., *Sulla disciplina degli interessi*, INDEX, 25, 1997.

- *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, en *Crimina e delicta nel tardo antico*. Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001), a cura di F. Lucrezi e G. Mancini, Milano, 2003.

SORACI R., *L'imperatore Valentiniano I*, Catania, 1971.

- *Consuetudo fraudum e rigor iuris: repressione a "corrente alternata" e a direzione variabile*, en Atti del Convegno Internazionale su Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità (Catania, 1995), Catania, 1999.

- *Il curialato nella legislazione di Onorio*, en Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno internazionale in memoria di A. Chastagnol, Napoli, 2001.

SPADONI M. C., *I prefetti nell'amministrazione municipale dell'Italia romana*, Bari, 2004.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984.

- *L'incapacità nella legislazione religiosa tardoantica*, en *Studi in onore di Francesco Grelle*, Bari, 2006.
- *Nulla indulgenda militia. L'esclusione dalle cariche nella legislazione religiosa del tardo antico*, en *Filía. Scritti per Gennaro Franciosi*, IV, Napoli, 2008.

SPERANDIO M. U., "*Exitus rerum*" de "*hominum consilia*" in Cicerone, BIDR, 98-99, Milano, 1995-1996.

SPRUIT J. E., *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, RIDA, 24, Bruxelles, 1977.

STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, vols. I-II (trad. J. R. Palanque), Paris, 1949.

- *Untersuchungen über das officium der prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Amsterdam, 1962.

STELLA MARANCA F., *Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle dottrine politiche*, Bari, 1928.

STERN H., *Le calendrier de 354, étude sur son texte et ses illustrations*, Paris, 1953.

SUDER W., *Sexagenarios de ponte. Statut juridique des vieillards dans la famille et dans la société romaine. Quelques remarques et opinions*, RIDA 42, Bruxelles, 1995.

SUMNER G. V., *The Lex Annalis under Caesar*, en Phoenix, 25, Toronto, 1971.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.

TAROZZI S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, 2006.

TAVOLIERI C., *La fiscalité nel mondo antico. Il caso dell'hospitium militum*, en Zeitschrift für antikes Christentum, vol. 11, n. 3, Berlin, 2007.

TAYLOR R., *Public needs and private pleasures. Water distribution, the Tiber river and the urban development of Ancient Rome*, Roma, 2000.

TEITLER H. C., *Notarii and exceptores. An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A. D.)*, Amsterdam, 1985.

TERRANOVA S., v. *''Funzione''*, E.D., XVIII, Varese, 1969.

THOMAS J. D., *P. Lond. III 959 Descr.: a Receipt for Wine for Annona militaris*, en The Bulletin of the American Society of Papirologists (BASP) 22.4, Michigan, 1985.

THOMAS Y., *La divisione dei sessi nel diritto romano. Storia delle donne in Occidente*. vol. 1. L' Antichità, Bari, 1990.

THOMSON E. A., *The historical work of Ammianus Marcellinus*, Cambridge, 1947.

TORRENT A., *La legislazione regionale di Giustiniano*, en Labeo, 29, Napoli, 1983.

TORRES AGUILAR M., *Sobre el control de los oficiales en la Castilla bajomedieval y moderna. La larga pervivencia del Derecho Romano*, en Derecho y Opinión, Octubre-1992, Córdoba.

TOUGHER S., *The Eunuch in Byzantine History and society*, London, 2008.

TREGGIARI S., *Jobs in the household of Livia*, en Papers of the British School at Rome (PBSR), 43, Roma, 1975.

TRISCIUOGLIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa del magistrato nell'esperienza romana*, en AA. VV., Responsabilità civile e amministrazione. Uno estudio comparato (a cura di F. Fracchia e Carlos Botassi), Napoli, 2011.

TSIRPLANIS C., *John Lydus on the imperial administration*, en Byzantium, 44, 1974.

TUCCI M., *L'amministrazione tra pubblico e privato e il principio di legalità dall'antichità ai giorni nostri. Aspetti ricostruttivi e prospettive di sviluppo*, Milano, 2008.

UXKULL-GYLLENBAND W. G., *Der Gnomon des Idios Logos*, II, Der Kommentar, Berlin, 1934.

VALLEJO GIRVÉS M., *Sobre la persecución y el castigo de los desertores en el ejército de Roma*, en POLIS: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica, n. 5, Alcalá de Henares, 1993.

- *La legislación sobre los desertores en el contexto político-militar de finales del siglo IV y principios del V d. C.*, en *Latomus*, 55, Bruxelles, 1996.
- *Algunas particularidades acerca del mal uso del cursus publicus: insignis audacia-contumacia*, en AAVV., *La corrupción en el mundo romano* (Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos), n. 5, Madrid, 2008.

VAN BERCHEN D., *La annona militaire est-elle un mythe?*, en *Armées et Fiscalité dans le Monde Antique*, Colloques Natiaux, n. 936, Paris, 1977.

VARELA GIL C., *El estatuto jurídico del empleado público en Derecho Romano*, Madrid, 2007.

- *Los derechos de los administradores públicos en Roma*, *Revista General de Derecho Romano* (www.iustel.com), 3, Madrid, 2004.
- *Los deberes de los administradores públicos en Roma* (www.iustel.com), 5, Madrid, 2005.

VARELA MATEOS E., *De contutoribus: cotutela y pluralidad de tutores en Derecho Romano*, Madrid, 1979.

- *La reconstrucción de los edificios privados en la Roma clásica y un discutido senadoconsulto de la época de Marco Aurelio*, en *Estudios en homenaje al profesor Hernández-Tejero*, Madrid, 1994.

VENDRAND-VOYE J., *Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat*, Clermont Ferrand, 1983.

VENTURINI C., *Studi sul <<crimen repetundarum>> nell'età repubblicana*, Milano, 1979.

- *“Uxor socia”*: *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, en IURA 32, Napoli, 1981.
 - *Concussione e corruzione: origine romanistiche di una problematica attuale*, en Studi Biscardi, VI, Milano, 1987.
 - *Note in materia di concussione e di actio metus*, en IURA, 45, Napoli, 1994.
 - *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, en Mélanges Wolodkiewicz, vol. 2, Warszawa, 2000.
 - *La corruzione: complessità dell’esperienza romanistica*, en La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali (a cura di G. Fornasari e N. D. Luisi. Atti del convegno, Trento, 18-19 maggio 2001), Milano, 2003.
 - *Per un riesame dell’esperienza giuridica romana in materia de illicito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, en *Damnatio iudicium*. Cinque studi di diritto criminale romano, Pisa, 2008.
 - *La corrupción: replanteamiento actual de conductas delictivas antiguas*, en Estudios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2010.
- VERA D., *Commento storico alle “Relationes” di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981.
- *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, en *Hestiasis. Studi Calderone* (Studi tardoantichi, 1), Messina, 1986.

- *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbis dal 383 al 387. Opere pubbliche e corruzione in Roma alla fine del IV secolo d. C.*, in SDHI, 44, Roma, 1978.

VEYNE P., *Clientéle et corruption au service de l'État. La vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, in Annales Économies, Sociétés, Civilisations, 36, Paris, 1981.

VIGANÒ R., *Appunti sulla cura riparum et alvei Tiberis: gestione diretta o indiretta*, in Studi in onore Scherillo, II, Milano, 1972.

VINCENTI U., *Praescriptio fori e senatori nel Tardo Impero romano d'Occidente*, INDEX, 19, Napoli, 1991.

- *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, INDEX, 24, Napoli, 1996.

VIÑAS A., *Función del tribunado de la plebe. ¿Reforma política o revolución social?*, Madrid, 1983.

- *Instituciones políticas y sociales de Roma: Monarquía y República*, Madrid, 2007.
- *Instituciones políticas y sociales de la Roma antigua*, Madrid, 2010.

VISCIDO L., *Studi sulle Variae di Cassiodoro*, Calabria, 1987.

VOCI P., *L'errore nel diritto romano*, Milano, 1937.

- *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini*, IURA, 21, Napoli, 1970.

- *La responsabilità dei contutori e degli ammnistratori cittadini- Contributi allo studio della mutua garanzia*, en Studi in memoria di G. Donatuti, vol. III, Milano, 1973.
- D. 1.14.3. *Note in tema di esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, en Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975.

VOGLER C., *Constance II et l' administration imperiale*, Strasbourg, 1979.

- *La rémunération annonaire dans le Code Théodosien*, en Ktema, 4, Strasbourg, 1979.

VOLTERRA E., *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, en BIDR 40, Milano, 1932 [= Scritti giuridici I. Famiglia e successioni, Napoli, 1991].

- *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, BIDR 84, Milano, 1981 [= Scritti Giuridici, VI, Napoli, 1993].
- *Sull'unione coniugale del funzionario della provincia*, en Fest. Seidl, Köln, 1975.
- *Una discussione nel senato romano sotto Tiberio*, en Studi Grosso, 2, Torino, 1968.

VON HAEHLING R., *Die Religionszugehörigkeit der höhen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie*, Bonn, 1978.

VON LÜBTOW U., *Bemerkungen zum Problem der juristischen Person*, en L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker, II, Milano, 1954.

WACKE A., *Actio rerum amotarum*, Köln-Graz, 1963.

WALLACH K. R., *De facto Office*, en Political Science Quarterly 22, New York, 1907.

WALLAT K., *Sequitur Clades.- Die Vigiles im Antiken Rom. Eine zweisprachige Textsammlung*, Frankfurt am Main, 2004.

WALLINGA T., *The date of Joannes Lydus`de magistratibus*, en RIDA, 39, Bruxelles, 1992.

WALTZING J.-P., *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu`à la chute de l`Empire d` Occident*, Tome II, Louvain, 1895 (ed. anast. Roma, 1968).

WARD J. H., *The Notitia Dignitatum*, en Latomus 33, Bruxelles, 1974.

WEABER P.R.C., *Freedmen procurators in the imperial administration*, en Historia 14, Wiesbaden-Stuttgart, 1965.

- *Familia caesaris: a social study of the emperor`s freedmen and slaves*, Cambridge, 1972.

WEISS P. B., *Consistorium und comites consistoriani. Untersuchungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhunderts n. Chr. auf prosopographischer Grundlage*, Würzburg, 1975.

WELLESLEY K., *A privy council on the behavior of freedmen* (Tac., ann. 13.26.2), en LMC, 8, 1983.

WESCH-KLEIN G., *Der Laterculus des Polemius Silvius –überlegungen zu Datierung, Zuverlässigkeit und Historischem Aussagewert einer Spätantiken Quelle*, en Historia, 51, n. 1, Wiesbaden-Stuttgart, 2002.

ZAMORA MANZANO J. L., *Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en el Derecho Romano: reglamentación jurídica del portorium, control de mercancías y comiso por fraude fiscal*, Madrid, 2009.

- ID., *Algunas reflexiones sobre el control de mercancías en el derecho fiscal romano*, en AA. VV., *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, Madrid, 2011.

ZAMORANI P., *Il plebiscito "ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet" e il divieto di reficere consulem*, en *Ann. Univ. Ferrara (Nuova serie)*, vol. 4, Ferrara, 1990.

ZANOBINI G., v. *"Amministrazione pubblica"*, E.D., vol. II, Varese, 1958.

ZINSER H., *Religio, Secta, haeresis in den Häresiegesetzen des Codex Theodosianus (16,5,1/66) von 438*, en *Hairesis. Festschrift für Karl Hoheisel* (M. Hutter, W. Klein, U. Vollmer, eds.), Bonn, 2002.

ZUCCOTTI F., *"Furor haereticorum". Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodoxia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992.

- *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico*, Milano, 2000.